

FRÁGILES SUTURAS

CHILE

A TREINTA AÑOS

DEL GOBIERNO

DE SALVADOR ALLENDE

FRANCISCO ZAPATA

COMPILADOR



EL COLEGIO DE MÉXICO

FRÁGILES SUTURAS

Chile a treinta años del gobierno de Salvador Allende

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS

FRÁGILES SUTURAS
Chile a treinta años del gobierno
de Salvador Allende

Francisco Zapata
(compilador)

Con la colaboración de
Fabio Moraga
y Noelia Ávila



EL COLEGIO DE MÉXICO

983.064
F811

Frágiles suturas : Chile a treinta años del gobierno de Salvador Allende / Francisco Zapata, compilador ; con la colaboración de Fabio Moraga y Noelia Ávila. -- 1a ed. -- México, D.F. : El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, 2006. 495 p. ; 21 cm.

Incluye los documentos presentados en el Seminario "La batalla por la memoria : Chile a treinta años del gobierno de Allende" celebrado en El Colegio de México los días 25 y 26 de septiembre de 2003.

ISBN 968-12-1215-0

1. Chile -- Historia -- 1973-1988. 2. Chile -- Historia -- 1988- . 3. Chile -- Política y gobierno -- 1973-1988. 4. Chile -- Política y gobierno -- 1988- . I. Zapata, Francisco, comp. II. Moraga, Fabio. III. Ávila, Noelia. IV. Seminario La batalla por la memoria : Chile a treinta años del gobierno de Allende (2003 : México, D.F.)

D. R. © El Colegio de México, A. C.
Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
10740 México, D.F.
www.colmex.mx

ISBN 968-12-1215-0

Impreso en México

Para Monserrat y Juan Francisco

A quienes, en versos recientes
de Mario Benedetti:

“les queda respirar, abrir los ojos,
descubrir las raíces del horror... tender
manos que ayudan, abrir puertas entre el
corazón propio y el ajeno, sobre todo, les
queda hacer futuro a pesar de los ruines
del pasado y los sabios granujas del
presente”.

(Memoria y esperanza, Alfaguara, 2005)

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	11
PRÓLOGO	
Chile a 30 años de 1973, <i>Joan Enrique Garcés</i>	13
INTRODUCCIÓN	
La batalla por la memoria: entre el Chile de Allende y el Chile de hoy, <i>Francisco Zapata</i>	21
PRIMERA PARTE	
El mundo en las décadas de 1960 y 1970	
“Por la razón o por la fuerza.” Estados Unidos y Chile en la América Latina de los años sesenta y setenta, <i>Peter Winn</i>	35
El contexto internacional del experimento chileno, 30 años después, <i>Isabel Turrent</i>	59
La “vía chilena al socialismo” en el contexto de la izquierda latinoamericana, <i>Horacio Crespo</i>	71
SEGUNDA PARTE	
Fuerzas armadas y democracia en Chile	
El golpe de Estado chileno en el contexto de América del Sur: una perspectiva histórica, <i>Riccardo Forte</i>	119
Del “ibañismo” al “pinochetismo”: las fuerzas armadas chilenas entre 1932 y 1973, <i>Verónica Valdivia Ortiz de Zárate</i>	157
TERCERA PARTE	
El sistema político democrático chileno, 1932-1973	
Los proyectos políticos de los años sesenta, <i>Ricardo A. Yocelvezky R.</i>	199
A treinta años del golpe del 11 de septiembre: el imperativo político de “reescribir la historia”, <i>Luis Corvalán Márquez</i>	219

El sistema político chileno 1932-1973: representación limitada y razones estructurales de su fractura, <i>Jaime Osorio</i>	259
--	-----

CUARTA PARTE

La vía chilena al socialismo

Lucha sindical en la minería del cobre (1964-1973), <i>Oswaldo Tello Gómez</i>	271
--	-----

El gobierno de Allende: aspectos económicos, <i>José C. Valenzuela Feijóo</i>	283
---	-----

Reforma Agraria en Chile: a treinta años del setentaitrés y a cuarenta de su comienzo. Propositiones, rupturas y derroteros, <i>José Bengoa</i>	311
---	-----

QUINTA PARTE

Los actores sociales

La historiografía, los trabajadores y la Unidad Popular, <i>Jorge Rojas Flores</i>	343
--	-----

“Ser joven y no ser revolucionario.” La juventud y el movimiento estudiantil durante la Unidad Popular, <i>Fabio Moraga Valle</i>	365
---	-----

SEXTA PARTE

La batalla por la memoria

La perspectiva de género en el espacio de la muerte: memoria, democratización y ámbito doméstico, <i>Lessie Jo Frazier</i>	415
--	-----

Memoria de los aparecidos. Allende con Mar (...) Pinochet con (...) arx. Chile, 2003-1973, <i>María Angélica Illanes</i>	449
--	-----

El periodismo y el proceso político chileno, <i>Juan Pablo Cárdenas</i>	479
---	-----

EPILOGO

El deber de recordar, <i>Pablo Yankelevich</i>	489
--	-----

AGRADECIMIENTOS

Estimado lector: aquí encontrará los trabajos que se discutieron durante el seminario “La batalla por la memoria: Chile a treinta años del gobierno de Allende”, que tuvo lugar en El Colegio de México los días 25 y 26 de septiembre de 2003.

Dicho encuentro formó parte de las actividades realizadas con motivo de la celebración del trigésimo aniversario de la creación del Centro de Estudios Sociológicos de esta institución académica de educación superior, abierta desde hace varias décadas a la discusión de los asuntos derivados de las turbulencias políticas; primero de aquellas producto de la Guerra Civil Española, y luego de otras relativas a diversas coyunturas del acontecer latinoamericano, como es el caso del golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973.

Muchas instituciones contribuyeron generosamente a hacer posible este encuentro: las unidades Iztapalapa y Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-sede México, la Dirección de Intercambio Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y la Representación Santiago de la Fundación Ford. Además, participaron colegas de todas esas instituciones asumiendo el papel de moderadores y comentaristas de las diversas sesiones. Me permito agradecer a los moderadores José Luis Reyna, Velia Cecilia Bobes, Jean-François Prud’homme, Gonzalo Martínez Corbalá, Rosa Albina Garabito y Gloria Careaga, y a los comentaristas Lorenzo Meyer, Mónica Serrano, Jaime Osorio, Daniel Toledo, María Luisa Tarrés y Pablo Yankelevich su colaboración activa dirigiendo las discusiones y contextualizando los textos.

En nombre de los colegas chilenos, estadounidenses, mexicanos, argentinos, españoles e italianos que elaboraron los textos que aquí se publican, deseo agradecer a las autoridades de El Colegio de México la

convicción con la cual plasmaron su compromiso con la institución que dirigen, al reconocer la pertinencia de la batalla por la memoria de la experiencia chilena del periodo que va del 4 de noviembre de 1970 al 11 de septiembre de 1973.

No quiero dejar de mencionar el especial reconocimiento que merecen Fabio Moraga, candidato a doctor en historia por El Colegio de México, quien tuvo la iniciativa de emprender la realización del seminario, y Noelia Ávila, sin cuya dedicación la preparación del manuscrito definitivo de este libro no habría sido posible.

FRANCISCO ZAPATA

PRÓLOGO

CHILE A TREINTA AÑOS DE 1973

Joan Enrique Garcés*

El 4 de septiembre de 1970 los electores de Chile votaron en favor de la candidatura de Salvador Allende a la presidencia; en el siguiente mes—octubre— el Congreso Nacional reunido en sesión plenaria lo eligió como jefe del Estado, descartando al candidato conservador que obtuvo la segunda mayoría electoral.

El proyecto nacional del gobierno de Allende consistía en desarrollar la soberanía popular, las libertades, la democracia participativa y la igualdad social mediante la transformación del sistema socioeconómico. Promovía, asimismo, impulsar la integración de América Latina en una perspectiva emancipadora respecto de Estados Unidos y su intervencionismo.

Los principales instrumentos con que contaba el gobierno reposaban en la solidez de las instituciones del Estado y de las organizaciones sociales y civiles. El contexto externo lo configuraba el sistema de Naciones Unidas (del que Chile era miembro fundador desde 1945), el Pacto Andino (del que Chile era fundador y miembro junto con Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela), y el Grupo de Países no Alineados (al que Chile se incorporó durante el gobierno de Allende).

El sistema de Naciones Unidas está basado en los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos (artículo primero, punto 2), de respeto efectivo a los derechos humanos y a las

* Doctor en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París. Fue asesor del presidente Salvador Allende. Autor de *Allende et l'expérience chilienne*, París, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1976; *El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende*, Madrid, Siglo XXI Editores, 1974, y *Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política*, México, Editorial Ariel, 1976.

libertades fundamentales de todos (artículo primero, puntos 2, 55 y 56), de igualdad soberana, integridad territorial e independencia política (artículo segundo, puntos 1 y 4) y no intervención en los asuntos internos (artículo segundo, punto 7).

El Grupo de Países no Alineados propiciaba una política de cooperación autónoma respecto de Estados Unidos y la Unión Soviética.

El gobierno de Allende entendía que era del interés nacional no subordinarse a la servidumbre de las fronteras ideológicas de una u otra potencia, sino mantener relaciones de amistad y cooperación con todos los estados del mundo. Con esta finalidad el gobierno de Allende incrementó las relaciones con todos los países de Europa y del tercer mundo, y reconoció a estados a los que —como China, Vietnam y Cuba— Estados Unidos negaba el derecho a existir.

En el ámbito económico, en abril de 1971, el Congreso de Chile ejerció el derecho de los pueblos al dominio de sus recursos naturales, al nacionalizar la gran minería del cobre a instancias del gobierno de Allende.

Chile ejerció asimismo el derecho a elegir democráticamente su sistema económico al ampliar el área de propiedad social de la economía y apoyar el régimen común de inversiones extranjeras del Pacto Andino. Este último, aprobado en Viña del Mar el 31 de diciembre de 1970 (decisión número 24), aunque no llegó a aplicarse, consideraba que al menos 51% del capital de las empresas de propiedad de inversores extranjeros debía transferirse a inversores privados nacionales en un plazo de unos 12 años.

Al mismo tiempo, Chile propuso mantener relaciones de mutuo respeto con Estados Unidos, según los principios de Naciones Unidas, tanto bilaterales como en el seno de los organismos regionales que ambos integraban desde su formación, como la Organización de Estados Americanos (creada en 1948) y el Pacto de Seguridad Colectiva, firmado en Río de Janeiro.

El comportamiento de la administración de Nixon en relación con el gobierno de Allende fue muy distinto. A lo largo de los años sesenta, las administraciones de Kennedy y Johnson habían financiado clandestinamente campañas electorales de candidaturas opuestas a la del senador Allende, y financiaron también las campañas de propaganda *negra* del diario *El Mercurio* contra la persona y el proyecto político del

doctor Allende. En las elecciones presidenciales de 1964 el gobierno de Estados Unidos financió en secreto la candidatura del democristiano Eduardo Frei, y en las elecciones presidenciales de 1970 invirtió de nuevo abundantes recursos financieros en propaganda *negra* contra la candidatura del doctor Allende.

Apenas 11 días después de las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, el propietario de *El Mercurio*, Agustín Edwards, se reunía en Washington con el presidente Nixon y le pedía que promoviera un golpe militar para impedir que el doctor Allende asumiera la Presidencia de Chile en la fecha constitucionalmente establecida: el siguiente 4 de noviembre. Nixon ordenó a sus servicios movilizar todos los recursos para organizar un golpe militar, invirtiendo en el mismo cuantos millones de dólares fueran necesarios y recurriendo incluso al secuestro, seguido de asesinato, del comandante en jefe del ejército, general René Schneider. Para propiciar y justificar el golpe militar, Nixon ordenó “hacer gritar de dolor a la economía chilena” (*make the economy scream*). Así lo ha explicado el entonces director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Richard Helms.¹

Con todo, la intervención clandestina de Estados Unidos en los asuntos internos de Chile no logró evitar que en 1970 el doctor Allende ganara las elecciones y asumiera la Presidencia. Pero durante los siguientes tres años Estados Unidos continuó aplicando al país sudamericano el vasto programa de actuaciones secretas dirigido a la “desestabilización” económica, social y política que debía pavimentar el camino hacia la insurrección armada del 11 de septiembre de 1973, a pesar de que en diciembre de 1972 el presidente Allende había denunciado ante la Asamblea General de Naciones Unidas la intervención estadounidense en los asuntos internos de Chile.

Tras la muerte violenta del presidente Allende, todas las instituciones republicanas fueron destruidas. En primer lugar, fue destruido el ejército republicano profesional; por primera vez en su historia, el ejército fue convertido en una banda armada, fuera del control de las instituciones representativas de la soberanía nacional; se mandó a sí mismo y se atribuyó la facultad de torturar, asesinar y expoliar a su propio pueblo.

¹ Thomas Powers, *The man who kept the secrets. Richard Helms and the CIA*, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1979, pp. 223, 228, 234 y ss.

Simultáneamente, la forma representativa de gobierno fue suprimida y el Congreso Nacional clausurado por primera vez en la historia del país sudamericano; fueron igualmente suprimidas las libertades y los derechos civiles, democráticos y sociales: tanto el derecho a la vida y a la libertad como el derecho de sufragio, de prensa, de información, de propiedad, etcétera. Un ejemplo paradigmático de ello fue la confiscación y disolución de la principal empresa periodística de Chile, editora del diario *Clarín*, el de mayor venta en el país.

Tres décadas después

El Congreso de Estados Unidos ha manifestado en reiteradas oportunidades su repudio a la intervención de la administración de Nixon y de los servicios secretos de Estados Unidos en Chile. Los ejemplos más conocidos son el Informe de la Comisión del Senado presidida por Frank Church, de 1975; las audiencias sucesivas de la Cámara de Representantes, entre el primero de julio de 1971 y el 18 de septiembre de 1974,² y la Enmienda Hinchey, aprobada en 1999.

Los tribunales estadounidenses fueron los primeros en investigar, juzgar y condenar la red terrorista *Cóndor*, compuesta por agentes del Estado de Chile dirigidos por Augusto Pinochet, así como en condenar a ese régimen por su responsabilidad en el asesinato en Washington, en 1976, de Orlando Letelier, ministro del gobierno de Allende.

El Ejecutivo de Estados Unidos ha lamentado en varias ocasiones la política de Nixon respecto al gobierno de Allende. Recordemos aquí la declaración del embajador Andrew Young ante Naciones Unidas en 1976; la declaración en 1999 de la secretaria estadounidense de Estado, Madelaine Albright, reconociendo errores en la política seguida en América Latina; la declaración en abril de 2003 del secretario de Estado, Colin Powell, según el cual Estados Unidos no se siente orgulloso de la política seguida hacia el gobierno del doctor Allende ni de su apoyo a la dictadura posterior. La propia dirección de la CIA ha criticado formalmente –en 2002, al cumplimentar en ese año la Enmienda Hinchey– los

² Publicadas con el título: *US and Chile during the Allende years, 1970-1973*. Hearings before the Subcommittee on Interamerican Affairs of the Committee on Foreign Affairs. House of Representatives, Washington, US Government Printing Office, 1975.

actos ilegales cometidos en Chile por la agencia para desestabilizar el sistema democrático y el apoyo a la subsiguiente política criminal de la dictadura (Informe Hinchey, 18 de septiembre de 2000).

En contraste, Chile, que sufrió la intervención de Estados Unidos y sus consecuencias, no ha logrado aún recuperar su condición de Estado republicano; es decir, democrático y soberano, y su *establishment* no manifiesta mayor empeño en reivindicarlo.

Desde 1989 se ha permitido que los ciudadanos recuperen el derecho a elegir un jefe de Estado por sufragio universal, pero en el marco de la estructura creada durante la dictadura, con la finalidad de perpetuar la sustancia antirrepublicana de la estructura del Estado chileno construida durante la dictadura.

Ni los gobiernos que se han sucedido desde el 11 de septiembre de 1973 hasta hoy, ni nadie en el Congreso —abierto en Valparaíso desde 1990— ha censurado en forma alguna la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Chile. No han seguido en este punto los ejemplos dados por el Congreso de Estados Unidos o por miembros del Ejecutivo, como el embajador Andrew Young y los secretarios de Estado Allbright y Powell. Obviamente ningún representante del Chile actual la ha denunciado ante Naciones Unidas.

La clave de bóveda del actual andamiaje estatal de Chile sitúa a las organizaciones armadas fuera del control efectivo de los órganos representativos de la soberanía popular. En la cúspide de la estructura estatal se encuentra el Consejo de Seguridad Nacional, la mitad de cuyos miembros son militares y donde el voto del jefe de Estado tiene igual peso que el del general director de Carabineros.³

Desde el 11 de septiembre de 1973, y también hoy, al pueblo de Chile se le ha negado algo consustancial a dicha República desde su fundación: que los órganos representativos de su soberanía —es decir, el Congreso y el presidente de la República— tienen la autoridad suprema y efectiva sobre los cuerpos armados del Estado. Éste es un principio consustancial a un ejército profesional, con mayor motivo cuando se

³ El artículo 93 de la Constitución elaborada por la dictadura en 1980, hoy vigente, designa como miembros del Consejo de Seguridad Nacional, con un voto a cada uno, a los comandantes en jefe del ejército, de la armada y de la fuerza aérea, al general director de Carabineros, al contralor general de la República, y a los presidentes del Senado, de la Corte Suprema y de la República. Designa como secretario al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

reclama de la tradición prusiana. El alto estado mayor del ejército prusiano nunca se sublevó contra el jefe de Estado, ni siquiera cuando éste, como hizo el canciller Hitler, llevaba a Alemania a su destrucción como Estado y a la ocupación de su territorio por ejércitos extranjeros.

Hasta el 11 de septiembre de 1973, en Chile ningún teniente-coronel era ascendido a coronel sin autorización del Senado; solamente el presidente de la República podía ascender a un coronel a general, quien no podía permanecer en su cargo si perdía la confianza del mandatario de la nación.

Hoy, sin embargo, ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo de Chile tienen el control efectivo de la promoción y ascensos de la oficialidad; tampoco de las finanzas de los cuerpos militares ni de su gasto ni de la definición y ejecución de los fines y medios estratégicos de la defensa nacional.

Desde 1990 los jefes de Estado de Chile tienen el estigma de ser los únicos del mundo cuya Constitución los desposee de la jefatura suprema de las fuerzas armadas y del orden del Estado. Incluso se les prohíbe nombrar, ascender y remover a los mandos militares y de la policía militarizada.

Por ello pocas dudas caben de que más avanzará Chile en restablecer sus libertades republicanas; más se volverá a encontrar con el proyecto nacional de soberanía popular, democracia participativa e igualdad social que impulsaba el presidente Allende.

Hoy Chile está más disociado de América Latina que en 1973. No está integrado en el Pacto Subregional Andino, ni en el Mercosur impulsado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En continuidad con el régimen de la dictadura, Chile ha aumentado su grado de absorción en la zona de influencia económica de Estados Unidos y ha preferido incorporarse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 2003 antes que al Mercosur.

Ello contrasta, sin embargo, con el mayor margen de autonomía interna de que disponen los estados del conjunto del mundo en comparación con hace 30 años. El final de la *Guerra Fría* ha reemplazado la bipolarización entre Estados Unidos y la URSS por una estructura internacional orientada a una multipolaridad creciente en las relaciones políticas, económicas y culturales. La Unión Europea integra hoy a 25 estados, frente a seis en 1973, y su autonomía económica prefigura mayor autonomía política y hasta militar. China, Rusia, India, Brasil

y Japón tienen hoy una mayor y más aceptada libertad de acción internacional.

El futuro del desarrollo chileno requerirá mayor dominio de sus recursos propios, mejor y más autónoma cooperación con América Latina y el conjunto del mundo. Más avanzará por ese camino; más se reencontrará con los postulados del presidente Allende.

Chile está hoy en una posición más marginal que antes del 11 de septiembre de 1973 en relación con el resto del mundo; en particular en lo relativo a los cambios en la toma de conciencia de la responsabilidad de cada Estado respecto de los otros y de los ciudadanos del propio Estado.

Chile está hoy al margen del desarrollo de las normas que buscan impedir y sancionar los crímenes de guerra y contra la humanidad, siendo así que hasta 1973 estaba en la vanguardia, de conformidad con el proyecto nacional humanista que inspiraba al presidente Allende.

En la medida en que en el Chile de hoy subsisten el andamiaje institucional antirrepublicano y las prácticas no democráticas, ha sido la cooperación judicial internacional —a partir del proceso penal iniciado en España, en 1996, contra Pinochet y sus cómplices— la que ha quebrado la impunidad absoluta que se concedieron a sí mismos los mayores criminales de la historia de esa nación.

En agosto de 2003, mientras Argentina abolía las leyes de impunidad y en Uruguay la Corte Suprema incoaba un proceso contra el ex presidente Bordaberry por su responsabilidad en el golpe de Estado del 27 de junio de 1973; y mientras Perú solicitaba a Japón la extradición del ex presidente Fujimori para juzgarlo por crímenes contra la humanidad, el presidente de Chile, Ricardo Lagos, reafirmaba la vigencia del decreto de autoamnistía de Pinochet de 1978.

En la medida en que recupere sus libertades cívicas, la sociedad chilena se reencontrará con el pensamiento y la acción del doctor Salvador Allende, y se distanciará de quienes impulsaron y sostuvieron la destrucción de sus instituciones republicanas.

El desarrollo de la soberanía popular, de las libertades, de la democracia participativa y de la igualdad social, hizo posible que durante el gobierno de Allende la nación andina alcanzara el mayor nivel de empleo, de consumo y de desarrollo de la mayor parte de los indicadores de calidad de vida y bienestar social de su historia.

La recuperación del desarrollo, del bienestar social y de la democracia participativa será posible en tanto se reanude la democratización

de su sistema socioeconómico. En tanto avancen por ese camino, los chilenos volverán a reencontrarse con el proyecto nacional y social impulsado por el doctor Allende.

INTRODUCCIÓN

LA BATALLA POR LA MEMORIA: ENTRE EL CHILE DE ALLENDE Y EL CHILE DE HOY

Francisco Zapata*

A treinta años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y después de casi quince años de vigencia de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, es posible interrogarse acerca de la herencia del gobierno de Allende, de los profundos impactos que tuvo el gobierno militar en la economía, la sociedad, la política y la cultura y también acerca de las formas a través de las cuales los chilenos viven esos procesos. Ésos fueron los objetivos que persiguieron los autores de los textos que se conformaron en el seminario “La batalla por la memoria” que hoy debidamente revisados se presentan en este libro.

En la elaboración del programa de dicho seminario, buscamos combinar el análisis de las acciones del gobierno de la Unidad Popular con las reflexiones que se derivan de lo ocurrido durante la dictadura militar y de estos dos aspectos con los acontecimientos que hoy en día se remiten a esas experiencias, como fueron los diversos actos que tuvieron lugar durante el año 2003 en diversos lugares de Chile.

Esta postura está vinculada a la construcción de un espacio en donde la cuestión de la memoria desempeña un papel central. Como lo dice en el epílogo Pablo Yankelevich, existe el deber de recordar, sobre todo

* Doctor en Sociología por la Universidad de París. Fue responsable de las relaciones laborales de la Compañía de Cobre Chuquicamata entre 1972 y 1973. Autor de *Los mineros de Chuquicamata: ¿productores o proletarios?*, y de *Las relaciones del movimiento obrero durante el gobierno de Allende*, ambos publicados por El Colegio de México, entre muchos otros trabajos. Es profesor-investigador de esta institución desde 1974.

cuando hay fuertes presiones en Chile para doblar la página, para cerrar esa fase de la historia del país y, más aún, para promulgar disposiciones legales que den punto final a estas cuestiones.

Por ello los temas tratados no siguen un orden cronológico sino temático; cada uno de los autores recibió el encargo de reconstruir desde su punto de vista lo que consideró pertinente según este ángulo de aproximación. Es en este sentido que quisiéramos se leyeran estos textos, cuyo propósito reside en colocar la batalla por la memoria en el lugar central del escenario que viven hoy los chilenos. En esta introducción nos referiremos sucesivamente a esos aspectos, antes de presentar los diversos textos que se incluyen en este libro.

1. La herencia del gobierno de Allende

El gobierno del presidente constitucional Salvador Allende Gossens fue derrocado y reemplazado por una junta militar que se convirtió en una de las dictaduras más duraderas de América Latina (1973-1990). Ese golpe de Estado dio fin a cuarenta años (1932-1973) de vigencia de un régimen democrático cuyo rasgo más notable fue que no se basó en la dominación de élites excluyentes sino en la capacidad de decisión de grupos sociales medios y populares. Incorporó a amplios sectores de la sociedad chilena al sistema político por medio de elecciones celebradas regularmente a lo largo de todo el periodo; contribuyó a la expansión del sistema educacional, al cual se incorporaron hombres y mujeres de todos los estratos sociales y en todos sus niveles; estableció las bases de un proceso de industrialización de la economía chilena a través del desarrollo de la industria siderúrgica, la extracción de petróleo, la creación de industrias manufactureras en los sectores de la alimentación, la fabricación de aparatos domésticos y también la elaboración de derivados del cobre; en suma, fue un régimen que sentó las bases de la modernización económica, social y política de Chile.

En sus cuarenta años de vida, ese régimen político se nutrió de los proyectos políticos enraizados en los grupos populares (mineros, obreros industriales y campesinos) y en grupos de clase media (profesores, médicos, ingenieros) cuya trayectoria histórica se inició a finales del siglo XIX. Gracias a ese régimen se formaron varias generaciones de dirigentes económicos, sociales y políticos que dieron contenido a esos

proyectos y los realizaron. Es decir, el régimen derrocado violentamente en 1973 había logrado reflejar las inquietudes de grandes masas de población del campo y las ciudades, a lo ancho y a lo largo de la difícil geografía de Chile.

Es importante resaltar que en ambos procesos (la modernización económica, social y política del país y el triunfo del proyecto político) el papel de los partidos políticos de raigambre popular –los partidos radical, socialista y comunista– fue central. A la vez, el papel de los grandes dirigentes (tales como Luis Emilio Recabarren, Marmaduke Grove, Pedro Aguirre Cerda, Clotario Blest, entre muchos otros) se vio refrendado con el ascendiente progresivo que lograba Salvador Allende como líder de las coaliciones partidarias que consiguieron acercarse a la Presidencia de la República en 1952, 1958 y 1964, para obtenerla en 1970.

Con el triunfo electoral del 4 de septiembre de 1970 y la toma de posesión de la Presidencia de la República el 4 de noviembre del mismo año, la coalición de los partidos de la Unidad Popular, encabezada por Allende, profundizó en aquello que constituía el régimen democrático definido en la Constitución de 1925 e instaurado en 1932; en efecto, las medidas del Programa de la Unidad Popular guardaban estrecha relación con las demandas históricas del pueblo chileno, expresadas políticamente a través de sus partidos. Nos concentraremos en tres demandas: la nacionalización del cobre, la conclusión de la reforma agraria y la creación de las áreas de propiedad social y mixta de la economía.

La nacionalización de la Gran Minería del Cobre

Cuando el 11 de julio de 1971 fue nacionalizada la Gran Minería del Cobre (GMC), a partir de un acuerdo unánime del Congreso Pleno, reunido en Santiago, se cumplió un propósito que los trabajadores del cobre, sus sindicatos (la Confederación de Trabajadores del Cobre) y la izquierda chilena habían planteado al país al menos desde fines de la segunda Guerra Mundial, durante la cual Chile había perdido sumas incalculables de divisas como resultado de la imposición por el gobierno estadounidense de precios inferiores al precio internacional fijado en la Bolsa de Metales de Londres.¹

¹ Véase Eduardo Novoa Monreal, *La batalla por el cobre*, Santiago, Editorial Quimantú, 1972; Mario Vera Valenzuela, *La política económica del cobre en Chile*, Santiago,

La GMC, propiedad de grandes empresas multinacionales —la Anaconda Copper Company y la Kennecott Copper Company— incluía minas como la Chuquicamata, El Teniente, Exótica y Potrerillos-El Salvador que empleaban no más de 70 000 trabajadores en 1970. El volumen de producción de esas minas colocaba a Chile en uno de los primeros lugares mundiales de producción y elaboración de dicho mineral. Durante casi todo el siglo XX, el valor de la producción cuprífera representó más de la mitad de los recursos en moneda dura del país. Para las multinacionales mencionadas, la explotación del cobre chileno era como tener a la gallina de los huevos de oro, pues poco después de su nacionalización dichas empresas, lisa y llanamente, desaparecieron del mercado internacional del cobre.

La recuperación de la riqueza básica más importante de Chile no fue tarea fácil y constituyó el primer escollo que enfrentó el gobierno del presidente Allende. Durante el segundo semestre de 1971 las multinacionales impugnaron el decreto de la nacionalización. Con órdenes judiciales secuestraron en Le Havre y en Amberes los envíos de cobre en barra exportados a Francia y Bélgica; advirtieron a las empresas proveedoras de repuestos para las instalaciones mineras que debían dejar de abastecer a Chile; corrompieron a las dirigencias sindicales y profesionales (Asociación Nacional de Supervisores del Cobre, AnSCO) para que no colaboraran a poner en marcha las minas en manos nacionales, aludiendo a privilegios perdidos como el pago en moneda extranjera, y contribuyeron a la agitación laboral, contando para ello con la colaboración de dirigentes políticos apátridas.²

Paradójicamente el régimen militar no dio marcha atrás a la nacionalización del cobre que continúa siendo de propiedad estatal hasta el día de hoy; más aún: 10% del valor de las exportaciones de cobre se dirige directamente al presupuesto de las fuerzas armadas. Mal que bien, el gobierno del presidente Allende realizó una transformación revolucionaria de la economía chilena al recuperar la riqueza cuprífera para el patrimonio nacional.

Editorial Universitaria, 1961, y del mismo autor, *Una política definitiva para nuestras riquezas básicas*, Santiago, Editorial Prensa Latinoamericana, 1964.

² Véase Francisco Zapata, *Los mineros de Chuquicamata: ¿productores o proletarios?*, México, El Colegio de México, Cuadernos del CES núm. 13, 1975.

La reforma agraria

Si bien durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) hubo significativos avances en la promulgación de disposiciones legales que favorecieran la distribución de la tierra entre los campesinos y la organización sindical de los trabajadores asalariados del campo, la resistencia de los dueños de los fundos impidió que dicho proceso se consolidara en ese periodo.

Fue por ello que respondiendo a demandas campesinas el gobierno del presidente Allende dio curso a la profundización de la reforma agraria. Fue más allá de la simple política de distribución de tierras y buscó la creación de nuevas formas de organización de la producción agrícola, como los asentamientos campesinos. La resistencia de los latifundistas fue enfrentada, dando lugar a múltiples conflictos en diversas partes del país. Entre diciembre de 1970 y el golpe de Estado de septiembre de 1973 el conflicto agrario fue uno de los puntos más encendidos del gobierno de Allende.

Paradójicamente, la política de la reforma agraria establecida por el gobierno de Allende, al desarticular los latifundios y crear una nueva realidad en la distribución de la propiedad de la tierra, modificó radicalmente la relación de fuerzas políticas en la sociedad rural. Dio fin al poder de la oligarquía terrateniente que había bloqueado sistemáticamente la modernización del campo chileno, y sentó las bases de la política agraria del régimen militar que en vez de devolverle la tierra a los latifundistas expropiados, la puso en remate al mejor postor, abriendo así el mercado de la tierra y creando una nueva sociedad rural. Esto dio lugar a la constitución de una nueva economía en el campo chileno, base del *boom* exportador frutero y vitivinícola localizado en el valle central de Chile.

En consecuencia, la nacionalización del cobre y la conclusión de la reforma agraria por el gobierno de la Unidad Popular tuvieron impacto sobre el sistema de dominación y en la estructura económica que imperaba en Chile. Ambos logros –hasta ahora poco resaltados e incluso desconocidos por quienes hoy gobiernan– pueden considerarse revolucionarios en términos de su evolución histórica.³

³ Un síntoma de esta ausencia de perspectiva histórica de los actuales gobernantes de Chile es que no realizaron ningún acto conmemorativo de la nacionalización del cobre cuando ese hecho cumplió treinta años, el 11 de julio de 2000.

La creación de las áreas social y mixta de la economía

Uno de los objetivos centrales del primer ministro de economía del gobierno de Allende, Pedro Vuskovic Bravo, fue incentivar a las industrias y aumentar el uso de su capacidad instalada. Se trataba de incrementar la producción para proporcionar mayores volúmenes que abarataran los costos de la producción y permitieran abastecer una demanda en expansión. Para ello se constituyeron las áreas social y mixta de la economía a las que se incorporaron empresas que no cumplían con esos propósitos. Sobresalen aquí las empresas textiles como Yarur y Sumar que fueron incorporadas al área social en 1971. Entre diciembre de 1970 y mediados de 1972 la expansión de la producción y del consumo fue acompañada de mejores remuneraciones. Se verificó la hipótesis sobre la baja utilización de la capacidad instalada; a la vez se constató que el aparato industrial centrado en el abastecimiento de productos de consumo inmediato tenía dificultades para lograr satisfacerla, lo que indujo presiones inflacionarias fuertemente resentidas durante el segundo semestre de 1972. No obstante, es importante recalcar que en esos 18 meses (diciembre de 1970 a junio de 1972) la política económica de expansión del consumo dejó una huella imborrable en la conciencia del pueblo chileno y demostró que las políticas de restricción del consumo (establecidas en los gobiernos de Alessandri y de Frei) no permitían mejorar la situación de los trabajadores chilenos ni tampoco servían para estabilizar una economía propensa a la inflación.

De manera que a treinta años del derrocamiento del régimen democrático en Chile y del gobierno del presidente Allende podemos pensar que el proceso histórico desenvuelto entre 1970 y 1973 dejó su huella. En primer lugar el pueblo de Chile desempeñó un papel protagónico en la recuperación del cobre para el patrimonio nacional, en la reestructuración radical de la propiedad agraria y en la definición de nuevas formas de organización de la producción a través de la creación del área social y mixta de la economía; en segundo lugar, el gobierno del presidente Allende logró que dicho pueblo tomara conciencia de su dignidad esencial, así como de la trascendencia de su proyecto histórico en el contexto de la evolución del país. Estos dos elementos forman parte de la memoria de los que hoy buscan dar sentido a lo que ocurrió en esos años.

2. La batalla por la memoria

La herencia del gobierno de Allende podría constituir la materialidad del aporte de sus acciones para el devenir de Chile. Existen otros temas que son fundamentales y que tienen que ver con el impacto del golpe de Estado en la subjetividad de los chilenos y con la forma en que esa experiencia fue procesada por los gobiernos que sucedieron a la dictadura militar. Estos temas tienen que ver con lo que María Angélica Illanes denominó *la batalla de la memoria*, en el libro del mismo nombre que publicó en el año 2002. En efecto, la lucha por elaborar lo ocurrido durante el gobierno de Allende, durante la dictadura militar y en los últimos quince años en que gobiernos democráticamente electos han administrado el país implica un ejercicio de recuperación de la memoria, al cual no sólo los historiadores pueden y deben contribuir: en cierta forma es un desafío abierto a cada chileno, tanto a aquellos en los que cabe remitirse personalmente a esas vivencias como a aquellos otros que no pertenecieron a las cohortes de esos años y que por lo tanto deben compenetrarse con éstas a través de un ejercicio de memoria. En la coyuntura de 2003 este ejercicio dio lugar a cuestionamientos de los jóvenes chilenos, profundamente interesados en esos acontecimientos. No se trata entonces sólo de recapitular acerca de la forma en que el proyecto del gobierno de la Unidad Popular transformó la estructura económica, social y política de Chile; se trata también de reflexionar acerca del efecto que su dramático desenlace tuvo en las relaciones entre los chilenos, como resultado de lo que ocurrió durante la dictadura y durante el ya prologado periodo en que las autoridades democráticamente electas han debido responder ante el pueblo de Chile respecto de esa herencia.

En septiembre de 2003, cuando se cumplieron treinta años de la caída del gobierno de Allende, ambas dimensiones coincidieron en la conciencia de quienes vivieron esa experiencia como en la de aquellos que buscan comprender lo que pasó en esos años. Los significados que tuvo el golpe de Estado a través de la represión, la tortura, el miedo, la implantación de medidas económicas draconianas sobre la vida cotidiana y la regresión a formas de convivencia que se creían pretéritas, son cuestiones actuales, inseparables de la herencia material del periodo 1970-1973. Así, la forma en que los militares definieron su papel en la historia —más allá de la coyuntura— como redentores de la

nacionalidad, de una cierta visión de lo que Chile era para ellos, se agrega a las políticas que emprendieron en materia económica. Las huellas permanentes que dejó la tortura en el subconsciente de los chilenos, tanto en quienes la sufrieron como en aquellos que la llevaron a cabo —recientemente reencarnadas en el Informe producido por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura— están ahí, y por mucho que se intente borrarlas vuelven a manifestarse, sin que ninguna política de perdón y reconciliación pueda erradicarlas.

Las formas de convivencia —que constituían y constituyen el telón de fondo de lo que fuera una cierta manera de asumir la cultura— construidas a través de décadas fueron extirpadas gracias a la generalización de las relaciones de mercado, y no sólo en el ámbito económico; esto ha generado la privatización de las relaciones sociales, cuyas consecuencias todavía no han sido evaluadas en toda su magnitud. También recurren temas vinculados a la forma en que los medios de comunicación presentaron los acontecimientos a la opinión pública: la adhesión incondicional de los periódicos de circulación nacional a los postulados dictatoriales, la deformación deliberada de los hechos, la satanización de todos aquellos que compartieron los proyectos del gobierno de Allende, son aspectos que demuestran cómo se busca deformar la historia del país para pesar de las generaciones futuras.

3. La estructura del libro

La herencia del gobierno de Allende y la batalla por la memoria constituyen los dos ejes que dieron sentido al seminario realizado en septiembre de 2003. Según estos ejes puede entenderse la forma en que organizamos dicho seminario; explican también el orden que tienen los textos expuestos en este libro.

El libro inicia con los textos de Peter Winn, Isabel Turrent y Horacio Crespo que buscan contextualizar el mundo en las décadas de 1960 y 1970 y sus efectos sobre la experiencia del gobierno de Allende; resaltan los aspectos que ayudan a comprender la naturaleza de los objetivos: cómo surgieron y cómo fueron interpretados más allá de las fronteras de Chile. Esos textos, ampliamente documentados, permiten reconstituir la época y proporcionan elementos para comprender mejor las circunstancias que debió enfrentar el gobierno de la Unidad Popular

y documentar la intervención de Estados Unidos en la vida económica, social y política de Chile desde antes de que Allende asumiera la Presidencia de la República. También ayudan a calificar la influencia del discurso ideológico sobre las prácticas políticas que tuvieron lugar en esos años.

Enseguida, la cuestión de las fuerzas armadas y su relación con la democracia es objeto de los textos de Riccardo Forte y Verónica Valdivia Ortiz de Zárate. Este tema fue y es crucial en la interpretación de las causas del golpe de Estado de 1973 y se expone por medio de la dimensión comparativa y de su inserción en la evolución ideológica de los militares chilenos.

En este mismo sentido los textos de Yocelevezky, Corvalán y Osorio se concentran en la caracterización del sistema político y sobre todo en el papel que desempeñaron los partidos en el desencadenamiento de la crisis que llevó al golpe. Esos textos subrayan el grado de agotamiento que tenía el sistema de partidos y las razones por las cuales fue difícil imaginar un desenlace alternativo al que tuvo lugar; esencialmente por la incapacidad de los partidos –particularmente la democracia cristiana– para anticipar las consecuencias que tendría el rompimiento del orden constitucional en Chile.

En la cuarta sección del libro, José Valenzuela Feijóo y José Bengoa se enfocan en la política económica y la reforma agraria, respectivamente. Valenzuela Feijóo proporciona una evaluación sintética de las decisiones de política económica que se tomaron entre 1971 y 1973, mostrando en todo momento cómo las dificultades fueron multiplicándose a medida que transcurrían los meses. En un texto muy sugerente, Bengoa argumenta que la reforma agraria tuvo y tiene una relevancia que trasciende por mucho la cuestión de la redistribución de la propiedad en el campo chileno. Su realización modificó las relaciones de poder en el país y abrió paso al *boom* agrícola de los últimos quince años. En esta sección, incluimos el testimonio de Osvaldo Tello Gómez, quien fuera dirigente sindical de la mina de Chuquicamata: sus palabras no sólo dan información sobre el significado subjetivo de la nacionalización del cobre para los mineros, también permiten visualizar al gobierno de Allende a través de la perspectiva de alguien que fue actor destacado de dicho proceso.

Jorge Rojas Flores y Fabio Moraga, ambos jóvenes historiadores, se concentran en presentar dos temas de indudable trascendencia en

la interpretación del gobierno de Allende: los trabajadores y los estudiantes universitarios. En el texto de Rojas se dibuja un cuadro más complejo de lo común relacionado con la composición y las actitudes de los trabajadores, sobre todo de las ramas industriales. Ahí, y según el análisis de la producción intelectual publicada en los últimos años, aparece una imagen del proletariado chileno menos épica, más realista de lo que fuera la que elaboraron los historiadores del movimiento obrero en su expresión clásica. Algo similar ocurre con el análisis de Moraga en el que los estudiantes universitarios —tradicionalmente adscritos a una visión radical, ideológica— parecen divididos en sus percepciones y en sus expectativas respecto al gobierno de Allende. Este texto permite observar —contrariamente a la tradición interpretativa de la juventud universitaria chilena— que había en ésta tanta ambigüedad como la existente entre los trabajadores relativa al gobierno de la Unidad Popular.

En la sexta sección del libro, Lessie Jo Frazier nos remite a la cuestión de género y al complejo lugar que ocupa en el imaginario autoritario. Sus reflexiones, inscritas en lo que es “el espacio de la muerte” en el Chile de hoy y remitidas no sólo al periodo dictatorial sino al actual, contribuyen a conceptualizar la situación chilena a través del uso de teorías de gran valor analítico. Es decir —para Frazier—, el género no es una cuestión ajena al análisis de la experiencia vivida por los chilenos durante la dictadura, como no lo es tampoco de la experiencia de algunos sectores de la sociedad chilena, como los habitantes de la localidad de Alto Hospicio o todos aquellos que han recurrido a los servicios de salud pública; es parte integrante de este análisis y una lectura atenta ayudará a entender mejor este aspecto. En esta misma sección, María Angélica Illanes —de quien tomamos la idea de que hoy lo que ocurre en Chile es la batalla por la memoria— reflexiona sobre los detenidos desaparecidos y su presencia en un “espacio de muerte” como la Villa Grimaldi, en Santiago de Chile: para Illanes, en 2003 tuvo lugar la lucha por la apropiación política de la reparación del dolor. En este texto, Illanes⁴ prolonga lo que expuso en su libro sobre el asunto y lo que han sido sus preocupaciones intelectuales en la última década.

Juan Pablo Cárdenas presenta un diagnóstico descarnado acerca de las formas a través de las cuales los gobiernos de la Concertación

⁴ Véase María Angélica Illanes, *La batalla de la memoria*, Santiago, Ed. Planeta/Ariel, 2002.

—al menos en sus dos primeras versiones, 1990-1999— buscan esconder lo que fueran los acuerdos tácitos de la transición hacia la democracia; un texto en donde alude al panegírico que construyeron los medios de comunicación sobre la dictadura militar. Esta cuestión pasó a ocupar los titulares de la prensa en noviembre de 2004, cuando el obispo Sergio Valech presentó el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura al presidente Lagos, dando lugar a un intenso debate sobre el penoso papel que desempeñaron muchos periodistas al encubrir violaciones de los derechos humanos entre 1973 y 1990.

El texto de Pablo Yankelevich, originalmente concebido como comentario a los tres textos anteriores, permite cerrar el libro con una muy elocuente demanda a favor del deber de recordar; obligación en la que se encuentran tanto quienes vivieron directamente las experiencias descritas como aquellos que sin haberlas vivido conciben que el devenir de Chile no descansa en el olvido, en el punto final o en una reconciliación falaz, sino en la toma de conciencia cabal acerca de todo lo ocurrido entre 1973 y el presente.

PRIMERA PARTE
EL MUNDO EN LAS DÉCADAS DE 1960 Y 1970

“POR LA RAZÓN O POR LA FUERZA”
ESTADOS UNIDOS Y CHILE EN LA AMERICA
LATINA DE LOS AÑOS SESENTA Y SETENTA

Peter Winn*

El trigésimo aniversario del golpe de Estado chileno del 11 de septiembre de 1973 ha provocado nuevas reflexiones sobre los eventos que culminaron en el derrocamiento violento del gobierno de Allende y sobre la consolidación de 17 años de la dictadura de Pinochet y las violaciones masivas a los derechos humanos que le siguieron. En todo el mundo, Allende y su “vía democrática al socialismo” tenían tal resonancia que superó el pequeño tamaño y la ubicación aislada de Chile, y el fin violento para su camino pacífico tuvo un profundo impacto sobre naciones cercanas y lejanas.

En Chile este trigésimo aniversario ha conducido a la introspección más abierta acerca de lo que pasó y por qué pasó, más que cualquier conmemoración anterior, incluyendo la lucha sobre la memoria colectiva en las pantallas de televisión con secuencias de películas del golpe militar no vistas antes, así como nuevas entrevistas, preguntas y preocupaciones. En Estados Unidos, el 30 aniversario del golpe de Estado chileno también ha conducido a nuevas reflexiones sobre el papel de esta nación y su responsabilidad por la tragedia chilena, reflexiones provocadas también por la liberación de la administración Clinton de más de 24 000 documentos del gobierno estadounidense que antes fueran “clasificados” como secretos.

*Doctor en Historia por la Universidad de Cambridge (1972). Profesor de la Universidad Tufts (Boston, Massachussets). Autor de los libros: *Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile's Road to Socialism*, Nueva York, Oxford University Press, 1986 [Trad.: *Tejedores de la revolución: los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo*, Santiago de Chile, LOM, 2004] y *Americas: The Changing Face of Latin America and the Caribbean*, Berkeley, University of California Press, 1995.

Estos documentos fueron liberados del secreto oficial en respuesta a la petición de los jueces españoles que preparaban el caso contra Pinochet después de su detención en 1998 en Londres, con cargos de crímenes contra la humanidad; pero como resultado de un intenso debate dentro del gobierno de Estados Unidos, los documentos secretos “desclasificados” cubrieron un periodo mucho más amplio de la historia chilena e incluyeron las acciones estadounidenses encubiertas de los años sesenta y setenta. He utilizado dichos documentos para la elaboración de este ensayo sobre Estados Unidos y Chile en la América Latina de esas dos cruciales décadas;¹ revelan en detalle lo que los responsables de la política estadounidense pensaban y sabían, y lo que Estados Unidos hizo en Chile en ese entonces.

Durante el siglo XIX Chile había permanecido dentro del área de influencia británica y se había concebido a sí mismo como la “Inglaterra de Sudamérica”; sin embargo, la influencia de Estados Unidos en Chile creció con cada década del siglo XX. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los recursos minerales de Chile eran controlados por corporaciones estadounidenses, incluyendo sus minas gigantes de cobre, fuente de dos terceras partes de sus ganancias de exportación, mientras la deuda externa de Chile crecía gracias a los bancos estadounidenses. Durante los años de la Guerra Fría, los gobiernos estadounidenses intervinieron en los asuntos internos de Chile en una variedad de formas: financiando a dirigentes sindicales anticomunistas, presionando al gobierno del presidente radical Gabriel González Videla para romper con sus aliados comunistas, suministrando carbón para romper la huelga de los obreros del carbón, y financiando a las industrias chilenas. La persecución del Partido Comunista (PC) por el presidente González Videla (1946-1952), además de provocar el rompimiento de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, era la recompensa de Washington y la garantía de que Chile apoyaría a

¹Estos documentos son actualmente más accesibles a través del libro de Peter Kornbluh recientemente publicado, *The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability*, Nueva York, New Press, 2003. Excepto donde se indica lo contrario, los documentos de que hablo han sido reimpressos en este volumen y son sólo una pequeña selección de los miles de documentos ahora disponibles en el Archivo de la Seguridad Nacional, una biblioteca de investigación privada en Washington que se especializa en documentos del gobierno estadounidense “desclasificados”; es decir, levantados del secreto oficial. (www.nsarchive.org)

Estados Unidos contra los desafíos de otras naciones latinoamericanas a su hegemonía —tales como la Argentina de Perón—, de que compraría la tecnología, la maquinaria, las patentes y las licencias estadounidenses para sus nuevas industrias, y garantizaría un tratamiento favorable a las inversiones de Estados Unidos en Chile.²

Aunque la participación estadounidense en Chile durante el periodo de posguerra fue intensa, no era el único método que utilizaban ni la única de sus preocupaciones. La política de Estados Unidos hacia América Latina después de la Segunda Guerra Mundial fue definida por tres prioridades que se reforzaban mutuamente: mantener la hegemonía político-militar estadounidense; la lucha ideológica contra el comunismo, y la promoción de sus intereses económicos; elementos clave por los que los latinoamericanos hacen referencia al “imperialismo yanqui”. Estados Unidos emergió de la Segunda Guerra Mundial como la superpotencia reinante, cuya hegemonía era tanto global como regional, y tanto política como militar.

Económicamente en el mundo de la posguerra Estados Unidos representó la mitad de la producción mundial y dos tercios de sus exportaciones; militarmente, tenía la única bomba atómica, “el arma victoriosa”. En 1946 Henry Luce, el magnate de los medios de comunicación, anunció el comienzo del “siglo estadounidense”.³ En todo el mundo Washington insistió en el establecimiento de organizaciones regionales (OTAN en Europa, SEATO en Asia Sudoriental, etc.) que institucionalizarían esta hegemonía mundial y ayudarían a Estados Unidos a contener la amenaza comunista, percibida primero como emanación de la Unión Soviética y después de China. En el hemisferio occidental, la Organización de los Estados Americanos (OEA) fue fundada en 1948 para institucionalizar y esconder bajo un paraguas multilateral la hegemonía estadounidense en la región; significativamente, su sede estaba en Washington.

La Guerra Fría prestó tanto urgencia como ortodoxia ideológica a la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio, reflejada en votos de organizaciones internacionales y en la aprobación de América Latina a

² Brian Loveman, *Chile: The Legacy of Hispanic Capitalism*, Nueva York, Oxford University Press, 2001, pp. 215-221.

³ Véase Gregg F. Hecken, *The Winning Weapon: The Atomic Bomb in the Cold War, 1945-1950*, Nueva York, Alfred Knopf, 1981, y James T. Patterson, *Great Expectations: The United States, 1945-1971*, Nueva York, Oxford University Press, 1996.

las definiciones anticomunistas de inclusión-exclusión hemisférica que legitimaron las intervenciones en Guatemala (1954) y Cuba (1961); estas intervenciones secretas respondían también a la defensa de Washington de sus intereses económicos. En parte era la continuación de la política tradicional estadounidense para defender viejas inversiones extractivas tales como las compañías de plátano y azúcar, base de sus inversiones en América Latina que en 1950 fueron más altas que en cualquier otra región del mundo, y por mucho para América Latina el interés extranjero más importante. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la política estadounidense se enfocó en la apertura de los mercados latinoamericanos a los artículos manufactureros y a los servicios estadounidenses.⁴

Sin embargo estas políticas a menudo chocaban con los intereses latinoamericanos, tales como la estabilización de precios de las materias primas y el desarrollo de sus propias industrias manufactureras. Con la Conferencia Interamericana de Chapultepec, en 1945, las naciones latinoamericanas y sus empresarios trataron de maximizar su autonomía y defender sus propias prioridades, con resultados variados; fue la época en que la CEPAL promocionaba el “desarrollismo”, y los países latinoamericanos asumían la estrategia de sustitución de importaciones para crear industrias nacionales a través de un Estado económicamente activo y altas barreras arancelarias, ambas acciones, desafíos a la ideología y a los intereses estadounidenses.

Pero, la economía de Estados Unidos también estaba cambiando. Durante la década de los cincuenta su manufactura y empresas de servicios se transformaron en corporaciones transnacionales, cuyas filiales latinoamericanas fueron diseñadas no sólo para evitar las barreras tarifarias, sino para aprovecharlas y maximizar así sus ganancias. Hacia la mitad de los años cincuenta, las filiales “extranjeras” se convirtieron en el lado filoso del desarrollo económico estadounidense, con las empresas líderes recibiendo un porcentaje creciente de las ganancias totales de estas filiales. Al mismo tiempo, hacer al Tercer Mundo seguro para las inversiones se convirtió en prioridad de la política exterior estadounidense, tanto la intervención clandestina en Guatemala de 1954 como la de Irán de 1953 pueden ser vistas bajo esta perspectiva, al igual que el apo-

⁴ Richard Barnett y Ronald Muller, *Global Reach: The Power of the Multinational Corporations*, Nueva York, Simon & Schuster, 1976.

yo a las dictaduras de América Latina y otras partes del Tercer Mundo, a pesar de la retórica de Washington sobre la democracia.⁵

Pero en 1959 los planes de Estados Unidos se vinieron abajo en el lugar menos esperado, en Cuba, una isla a sólo 48 millas del territorio de Estados Unidos, con una larga historia de dominación estadounidense y consentimiento cubano. La Revolución Cubana cambió el cuadro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, proveyendo a la región de un ejemplo exitoso del desafío latinoamericano a la hegemonía y a los intereses económicos estadounidenses, mientras se montaba también el desafío a su ortodoxia ideológica. La fracasada invasión a Playa Girón representó la primera derrota militar de Estados Unidos en el hemisferio, y en 1962 la crisis de los misiles consolidó la Revolución Cubana; Washington prometió de manera informal no atacar militarmente. Como consecuencia de esto las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante las dos siguientes décadas llegaron a su fin bajo la sombra de la Revolución Cubana, en una región que John F. Kennedy denominó “el área más peligrosa del mundo” para los intereses estadounidenses.⁶

En respuesta Washington estableció “¡No más Cubas!” como la meta prioritaria de su política hacia la región, que previamente había tomado por sentada, pero que ahora era “fértil para la revolución”. Durante los años sesenta, esto se tradujo al principio en la promoción de la reforma democrática desde arriba, para luego abrazar a las dictaduras militares modernizantes como alternativas al socialismo revolucionario de Cuba; también significó “modernizar” las fuerzas armadas de la región, preparándolas para la guerra de contrainsurgencia que podría prevenir “otra Cuba”, anunciada por una nueva “doctrina de seguridad nacional” que amplió la misión militar a las áreas de política anteriormente reservadas para los gobiernos civiles.⁷

⁵ Véase D.F. Schnitz, *Thank God They're on Our Side: The United States and Right-Wing Dictatorships, 1921-1965*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1999; S. Kinzer, *All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror*, Nueva York, John Wiley, 2004; S. Kinzer y S. Schlesinger, *Bitter Fruit: The Untold Story of the American Coup in Guatemala*, Garden City, Nueva York, Doubleday, 1981, y P. Gleijeses, *Shattered Hope: The Guatemala Revolution and the United States, 1945-1954*, Princeton, Princeton University Press, 1991.

⁶ S. G. Rabe, *The Most Dangerous Area in the World: John F. Kennedy Confronts Communist Revolution in Latin America*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1999, p. 7.

⁷ B. Loveman, *Por la patria: Politics and the Armed Forces in Latin America*, Wilmington, Scholarly Resources, 1990, cap. 6.

Con el presidente John F. Kennedy estas prioridades de la política resultaron en la apertura a las reformas centroizquierdistas económicas, sociales y políticas a las que Estados Unidos se había opuesto (por ejemplo la reforma agraria) o que había subordinado a otras prioridades (por ejemplo la democracia). Washington asumió una nueva estrategia y propuso la Alianza para el Progreso, que prometía 20 000 millones de dólares en ayuda, préstamos e inversiones para América Latina durante la década siguiente. Anunciada la víspera de la invasión a Cuba, la Alianza para el Progreso fue la tácita compensación por la conformidad latinoamericana al regreso estadounidense a la intervención militar unilateral en la región. Con razón, en la reunión para crear la Alianza, “*el Che*” Guevara humorísticamente observó que Cuba debería recibir la mayor parte de los 20 000 millones de dólares proyectados, porque si no fuera por la Revolución Cubana la Alianza no existiría, sin importar las propuestas para tal “Operación panamericana” hechas por los líderes latinoamericanos durante los años precedentes.⁸

En la práctica este compromiso estadounidense de apoyar la reforma desde arriba como alternativa a la revolución desde abajo fue subordinada a otras prioridades, como la promoción de los intereses económicos de Estados Unidos, el combate al comunismo y a las ideologías que lo sostenían. La mayor parte del financiamiento fue condicionado a la adquisición de bienes y servicios estadounidenses —a menudo a precios poco competitivos— y los 20 000 millones de dólares seguían siendo más figura de retórica que realidad. Además fueron minados los objetivos de la Alianza al desviar fondos destinados a las reformas sociales (por ejemplo en Brasil) para ayudar a candidatos de derecha que se opusieron a las reformas de la Alianza para el Progreso, y para derrotar a candidatos de izquierda que las apoyaron.⁹

Además, las preocupaciones ideológicas sobre la adecuada compensación por las expropiaciones hicieron que las reformas agrarias de

⁸ El propio Castro propuso en la reunión de Buenos Aires de mayo de 1959 que Estados Unidos creara una reserva por 30 000 millones de dólares para el desarrollo de América Latina; propuesta que hizo que el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil declarara que los cubanos realmente comprendieron su propuesta de operación panamericana. Véase J. Leviston y J. Onís, *The Alliance That Lost Its way*, Nueva York, Harper Collins, 1972, pp. 38-67.

⁹ R. Roet, *Politics of Foreign Aid in the Brazilian Northeast*, Nashville, Vanderbilt University Press, 1972.

la Alianza costaran caro; solamente Venezuela –nación rica en petróleo– podía financiarlas, pero sólo para un pequeño número de familias campesinas. Tampoco fue importante el compromiso de Washington con la democracia en la región como Kennedy lo había prometido; seis presidentes elegidos popularmente fueron derrocados por golpes militares, incluido Juan Bosch, a quien funcionarios estadounidenses habían aclamado como el reformista ideal de la Alianza para el Progreso. El gobierno de Kennedy había tramado el derrocamiento de la dictadura de Trujillo y el establecimiento de un gobierno democrático en República Dominicana, y aplaudió la elección del presidente centroizquierdista Juan Bosch, pero cuando éste fue expulsado en 1963 por un golpe militar trujillista, Washington no hizo nada para parar el golpe o dar marcha atrás a la restauración trujillista.¹⁰

Con Lyndon Johnson –sucesor de Kennedy en la Casa Blanca– un político más provinciano y menos comprensivo con las luchas por la reforma en Latinoamérica, la prioridad “No más Cubas” se tradujo en desconfianza hacia los reformadores civiles centroizquierdistas y en creciente dependencia de los “militares modernizadores” anticomunistas, un giro en la política de Estados Unidos, que fue sistematizada y que serviría de justificación ideológica en la administración de Nixon a fines de los años sesenta en el informe Rockefeller.¹¹ Este giro político se evidenció tras la complicidad estadounidense con el golpe militar brasileño de 1964, que derrocó al “izquierdista” João Goulart, y fue simbolizado por la intervención militar en República Dominicana de 1965 que tenía el propósito de prevenir una rebelión popular para restaurar en el poder al presidente constitucionalmente elegido, Juan Bosch. Esta intervención fue justificada públicamente con la lista de un pequeño número de supuestos comunistas que presuntamente apoyaban la rebelión y por el temor de una segunda Cuba. Ninguna razón fue convincente. Incluso la Organización de Estados Americanos la pasó mal asimilando la intervención dominicana, aprobando el envío de una fuerza supuestamente “multilateral” por sólo un voto de diferencia (depositado por el gobierno dominicano no electo, contra el que se había levantado la

¹⁰ Véase J. Leviston y J. Onís, *The Alliance...*, *op. cit.*; P. Gleijeses, *The Dominican Crisis*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1978, y A. Lowenthal, *The Dominican Intervention*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1990.

¹¹ N. Rockefeller, *Rockefeller Report on the Americas: The Official Report of United States Presidential Mission for the Western Hemisphere*, Nueva York, Times Book, 1969.

rebelión). Con raras excepciones, la Alianza para el Progreso estaba muerta.¹²

Chile era la más importante de aquellas excepciones debido a la existencia de una fuerte izquierda marxista con serias posibilidades de ganar el poder estatal por medio de elecciones nacionales en una de las democracias modelo de la región, como Salvador Allende casi lo hizo en 1958. En ese estado de cosas, la administración Johnson estaba dispuesta a apoyar fuertemente a los demócratacristianos y su “revolución en libertad” centroizquierdista, aclamada en Washington como “escaparate para la Alianza”. Durante la presidencia del demócratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), Chile se convirtió en el principal receptor de la ayuda estadounidense en América Latina, y el gobierno de Estados Unidos presionó a las compañías mineras para que cooperasen en la “chilenización” del cobre que daría la mitad de la propiedad al gobierno chileno, una promesa hecha por Frei en su campaña. Las compañías recibirían a cambio un seguro de riesgo político sin precedente por 400 millones de dólares del gobierno estadounidense. En la práctica, sin embargo, la ayuda de Estados Unidos para reformas estructurales tales como la “chilenización” de las minas de cobre fue sacrificada a la prioridad de promover sus intereses económicos y estratégicos: mantener los precios del cobre bajos para la reserva de la guerra de Vietnam.¹³

La estrecha derrota de Allende en las elecciones presidenciales de 1958 fue una llamada para despertar a Washington, llamada que precedió y reforzó el triunfo de Castro en Cuba unos meses más tarde. En este despertar, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos —tanto demócratas y republicanos como liberales y conservadores— intervinieron secretamente en la política interna de Chile para impedir que Salvador Allende resultara electo presidente, intervinieron en una nación soberana con la que Estados Unidos mantenía relación amistosa y que era considerada una de las democracias modelo del hemisferio.¹⁴ Financia-

¹² P. Gleijeses, *The Dominican Crisis*, op. cit., A. Lowenthal, *The Dominican Intervention*, op. cit., y P. Barker, *Brazil and the Quiet Intervention, 1964*, Austin, University of Texas Press, 1979.

¹³ T. Moran, *Multinational Corporations and the Politics of Dependence Copper in Chile*, Princeton, Princeton University Press, 1974, cap. 5.

¹⁴ L. Gross, *The Last Best Hope: Eduardo Frei and Chilean Christian Democracy*, Nueva York, Random House, 1967. Para una descripción que acentúa la alianza informal entre el Vaticano y Estados Unidos y su apoyo a los demócratacristianos como estrategia antimarxista, véase David E. Mutchler, *The Church as a Political Power in Latin America*,

ron candidatos de la democracia cristiana y medios de comunicación de derecha para infiltrar a la sociedad civil y promover una campaña de propaganda premeditadamente falsa contra la izquierda chilena. En las elecciones de 1964, la CIA (la propia agencia lo admitió tiempo después) financió la mitad de la campaña presidencial que llevó a la victoria a Eduardo Frei; también dirigió la propaganda conocida como “la campaña del terror” —a la que investigadores del Senado estadounidense llamaron “enorme”— cargada con imágenes de tanques soviéticos y escuadrillas de fusilamiento cubano, enfocada a mujeres chilenas como su público pensado. Más tarde, un estudio de la CIA afirmó que su ayuda hizo la diferencia entre la victoria de Frei por una decisiva mayoría o una simple pluralidad de votos.¹⁵ La acción secreta de Estados Unidos continuó durante el gobierno de la democracia cristiana con más de dos millones de dólares gastados en elecciones parlamentarias y en la infiltración de universidades, sindicatos y otros grupos de la sociedad civil.¹⁶ Además, entre 1962 y 1970 Chile recibió cerca de 1 200 000 dólares en ayuda abierta de Estados Unidos; enorme suma para la época y para un país de sólo 10 millones de habitantes.

A pesar de este apoyo, y en parte debido a la ambivalencia estadounidense, los democratacristianos cumplieron menos de su “revolución en libertad” y de lo que habían prometido, y descendieron en popularidad y en resultados. El espectro político chileno se desplazó aún más hacia la izquierda, produciendo una carrera presidencial tripartita en 1970, en la que Allende compitió contra el ex presidente derechista Jorge Alessandri y contra Radomiro Tomic, líder del ala izquierda de la democracia cristiana cuyo programa era más afín al de Allende que al de Alessandri.¹⁷ Estados Unidos apoyó en forma secreta a Alessandri pues confiaba que sería el ganador.

With Particular Reference to Chile and Colombia Nueva York, Holt, Rinehart & Winston, 1971. Edward Korry, un ex embajador de Estados Unidos adujo más tarde: “en 1960, 10 millones de dólares en fondos de ayuda para los sismos habían sido desviados por grupos católicos dirigidos por jesuitas para la actividad política local en Chile” (*Sunday News Journal*, Wilmington, Del., 28 de noviembre, 1976).

¹⁵ CIA, “Covert Action in Chile, 1963-1973”, United States Senate, Intelligence Committee, Staff Report, pp. 15-17.

¹⁶ *Ibid.*, pp. 17-19.

¹⁷ M. Fleet, *The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy*, Princeton, Princeton University Press, 1985.

Pero los documentos recientemente liberados del secreto oficial han revelado los preparativos de Estados Unidos –incluso antes de la elección– para interrumpir el proceso democrático en caso de que a pesar de todo Allende ganara.¹⁸ En 1970, cuando los esfuerzos de aquel país no pudieron prevenir la elección de Allende, Washington desarrolló una política de “doble vía” –un golpe parlamentario y un golpe militar– para evitar que Allende se convirtiera en presidente.¹⁹

Henry Kissinger como jefe del Consejo de Seguridad Nacional y gurú de asuntos exteriores del presidente Nixon, justificó la intervención encubierta de Estados Unidos en los asuntos internos de otra democracia con la ocurrencia de que él no vio razón para permitir a un país “volverse comunista por causa de la irresponsabilidad de su propio pueblo”. Las justificaciones de esta política fueron pronunciadas públicamente por Kissinger, en una conferencia de prensa “anónima”, dos semanas después de la elección de Allende.²⁰ Los motivos de la acción encubierta para revertir los resultados de una elección democrática en un país amistoso incluían la posición estratégica de Chile y las minas de cobre estadounidenses ubicadas en aquel país; sin embargo, se concentraron principalmente en razones políticas: el impacto que la presidencia de Allende tendría sobre la región de América del Sur, que ya se inclinaba hacia la izquierda o al menos tomaba una dirección antiestadunidense, con la conclusión de que el gobierno de Allende representaría “problemas masivos para nosotros”. En el fondo, las preocupaciones de Kissinger pueden ser reducidas a una combinación de hegemonía, ideología e interés; en su postura pública, sin embargo, expresaba la defensa de la democracia y cuestionaba el compromiso democrático de Allende sin considerar su larga trayectoria democrática.²¹

Nixon, que había hecho su carrera como un anticomunista profesional, estaba furioso con la elección de Allende y reaccionó visceralmente, pues ese triunfo parecía desafiar la hegemonía estadounidense que él representaba. Para Nixon, Allende en Chile y Castro en Cuba eran el pan de un improbable “emparedado rojo” (“red sandwich”) que

¹⁸ CIA, “Covert Action...”, *op. cit.*, pp. 19-26. Véase Peter Kornbluh, *The Pinochet Files: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability*; Nueva York, New Press, 2003, pp. 12-14; un recorrido cronológico de la intervención de la CIA en Chile.

¹⁹ CIA, “Covert Action...”, *op. cit.*, pp. 19-26.

²⁰ *Ibid.*, p. 27. Véase también S. Hersh, *The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House*, Nueva York, Summit Books, 1985, p. 265.

²¹ *Ibid.*, p. 270.

amenazaba a los gobiernos proestadunidenses situados entre ellos. Después de reunirse con Agustín Edwards —empresario chileno, vicepresidente de Pepsico y dueño de periódicos chilenos de la derecha— Nixon dio órdenes a la CIA para evitar por cualquier medio que Allende se convirtiera en presidente, aceptando la predicción de Kissinger de que si la elección de Allende era permitida, sería sin duda la última elección libre en Chile.²²

Ahora se sabe gracias a los documentos liberados que en privado lo que más preocupaba a Kissinger no era que Chile, con Allende al frente, pudiera convertirse en “otra Cuba” o que nunca se celebrara otra elección libre, sino más bien que conservara su “camino democrático al socialismo”, alternativa que podía seducir a Europa Occidental, además de a Latinoamérica. Esto amenazaría la base ideológica de la hegemonía de Estados Unidos en la Guerra Fría en Europa, una región que Kissinger valoró más que a América Latina y que en 1970 parecía al borde del eurocomunismo. Para Kissinger, un socialismo democrático exitoso en Chile era más peligroso que el comunismo revolucionario en Cuba.²³ Como expresó tiempo después uno de sus asistentes: “Toda clase de acontecimientos catastróficos rodaron alrededor, pero Chile los asustó”.²⁴

En el contexto regional había pasado una década de esfuerzos emulando el modelo cubano de guerrilla rural revolucionaria, que no había rendido un solo éxito, pero donde permanecían las condiciones que anidaron a estos movimientos revolucionarios. Después de una década de la Alianza para el Progreso, el desempleo y la pobreza habían aumentado en Latinoamérica y más naciones —incluyendo a Argentina, Brasil y Perú— eran gobernadas por dictaduras militares. En Sudamérica la respuesta fueron nuevas fórmulas para el cambio, extendiéndose de la “revolución militar” en Perú a las guerrillas urbanas de los Tupamaros, al democrático Frente Amplio en Uruguay y al “peronismo revolucionario” en Argentina, movimientos que de una u otra forma desafiaban la hegemonía, la ideología y los intereses de Estados Unidos. Era un desafío regional, pues Kissinger temía que Chile, con Allende al frente, se consolidara y multiplicara. Kissinger incluso dijo a Nixon en privado que la decisión sobre qué hacer en Chile probablemente iba a ser

²² *Ibid.*, pp. 270 y 273-274.

²³ *Ibid.*, p. 24.

²⁴ *Ibid.*, p. 270.

la decisión de asuntos exteriores más histórica y difícil que tendría que tomar ese año, porque lo que ocurra en Chile en los próximos seis o doce meses podría tener ramificaciones, que irán más allá de las relaciones de Estados Unidos y Chile únicamente. Tendrán efecto sobre lo que ocurre en el resto de América Latina y el mundo en vías de desarrollo, sobre cuál será nuestra futura posición en el hemisferio, y más ampliamente sobre el panorama mundial, incluyendo nuestras relaciones con la URSS. Afectarán incluso nuestra propia concepción acerca de nuestro papel en el mundo.²⁵

Dada esta definición apocalíptica de lo que estaba en juego, Estados Unidos hizo todo lo posible para invertir los resultados de las elecciones presidenciales chilenas (a pesar de sus propios análisis internos que indicaban que ese éxito era improbable). El primer camino —un golpe parlamentario— dependía de la buena voluntad de Frei, de su autorización, o de la buena voluntad de su partido para votar por Alessandri en el desempate del Congreso; ambas opciones rompían con la tradición democrática chilena, a lo que no estaban dispuestos ni el líder democratacristiano ni su partido.

El segundo camino —un golpe militar— dependía de que las fuerzas armadas chilenas rompieran con la tradición constitucionalista, lo que expertos estadounidenses consideraron improbable mientras fueran comandadas por el general René Schneider y en “ausencia de caos nacional y violencia generalizada”.²⁶ Los esfuerzos de Estados Unidos se dirigieron a provocar esa “situación improbable” y a eliminar a Schneider de la escena; si fuera necesario, por la fuerza. Al final, aunque la campaña estadounidense para desestabilizar la economía chilena tuvo éxito, sus esfuerzos de reformar la política chilena fallaron ante la resistencia de la democracia cristiana, la diplomacia de Allende y el hecho de que había “un sentimiento reducido en Chile acerca de que la elección de Allende era necesariamente un mal”.²⁷

²⁵ Henry A. Kissinger, consejero de Seguridad Nacional, “Memorandum for the President: Re. NSC Meeting, November 6-Chile” (secreto-confidencial), la Casa Blanca, 1970. Este memorándum privado de Kissinger a Nixon fue liberado del secreto oficial recientemente, pero aún no ha sido publicado. Mi agradecimiento a Peter Kornbluh por compartirlo conmigo.

²⁶ P. Kornbluh, *The Pinochet Files...*, *op. cit.*, p. 48.

²⁷ *Ibid.*, p. 54.

Esto dejó a Washington en el segundo camino —el golpe militar. Entonces los más creíbles conspiradores militares se retiraron y el intento de secuestrar a Schneider de un grupo paramilitar neofascista terminó en su asesinato, acontecimiento que sacudió a un Chile poco acostumbrado a tal violencia política, y que puso fin a cualquier posibilidad de golpe parlamentario.

El fracaso para impedir que Allende se convirtiera en presidente de Chile no detuvo la guerra secreta de Estados Unidos contra Allende y su vía chilena al socialismo; más bien cambió los objetivos y las tácticas de la intervención, promoviendo la oposición a su gobierno y creando las condiciones para su destitución a través de un golpe militar que invertiría cualquier avance hecho y destruiría las bases de cualquier futuro esfuerzo de la izquierda para transformar a Chile. Los documentos secretos recién desarchivados [*declassified*] muestran que esta campaña secreta contra un gobierno elegido democráticamente comenzó casi tan pronto como Allende asumió su cargo. No obstante, el 25 de febrero de 1971, Nixon asegurará a las naciones del mundo que Estados Unidos estaba “preparado para mantener la misma relación con el gobierno chileno”.²⁸ El 6 de noviembre de 1970 —sólo tres días después de la toma de posesión de Allende, y antes de que su gobierno tomara cualquier acción contra Estados Unidos que pudiera ser considerada hostil— una reunión secreta del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, promovida por Kissinger, se negó a tratar de encontrar “un *modus vivendi* con el gobierno de Allende” —lo que fue considerado como una política contraproducente de hostilidad abierta— decidiéndose en cambio por una política que “adoptara una postura hostil de hecho, pero no una postura hostil manifiesta”. Estados Unidos mantendría una “postura pública correcta” hacia el gobierno de Allende, mientras que de forma encubierta Kissinger lo perseguiría para “crear presiones, explotar su debilidad, y aumentar los obstáculos, que en un tiempo mínimo aseguraran su fracaso y lo obligaran a modificar su política, y en uno máximo pudieran conducirlo a situaciones donde su derrocamiento o colapso pudiera ser factible”.²⁹

En la práctica esto significó un “bloqueo invisible” de Estados Unidos calculado para “hacer gritar a la economía”; una operación política y de medios de comunicación secreta dedicada a “desestabilizar la

²⁸ CIA, “Covert Action...”, *op. cit.*, p. 26.

²⁹ P. Kornbluh, *The Pinochet Files...*, *op. cit.*, pp. 82-84.

democracia” en Chile, y una operación encubierta dentro de las fuerzas armadas chilenas pensada para superar su neutralidad constitucional y convencerlas de la necesidad de su intervención política. Juntas, estas medidas condujeron a una guerra encubierta contra el gobierno de Allende con el objetivo de asegurar el fracaso de su camino democrático al socialismo y crear las condiciones para su destitución por la impugnación del Congreso o por el golpe militar; en el fondo, la repetición de los caminos uno y dos.³⁰

Es significativo que la guerra secreta comenzara mucho antes de que Allende decidiera no compensar a las compañías de cobre estadounidenses por las minas expropiadas. Esa decisión –basada en deducciones por ganancias excesivas y costos netos, conocida como la Doctrina Allende– agregó sin embargo otra justificación pública y un motivo privado para la guerra secreta de Estados Unidos, particularmente en una región en la cual otras naciones, como Venezuela, veían a Chile como modelo para reclamar el control nacional de los recursos naturales de propiedad extranjera; también agregó nuevos “guerreros” y “armas”: las compañías estadounidenses demandaron en tribunales europeos la posesión de las remesas del cobre chilenas, afirmando que habían sido “confiscadas”; esto desanimó a compradores potenciales y exacerbó la crisis de divisas, ya grave por el bloqueo invisible.³¹

Lo que los críticos denominaron “el bloqueo invisible” del crédito, el comercio y la inversión, se basaba en la dependencia económica y financiera de Chile respecto de Estados Unidos. En 1970, las empresas estadounidenses controlaron dos tercios de 1 600 000 dólares de las inversiones extranjeras en Chile, la mayor parte en la industria del cobre, que representaba 80% de las ganancias de las exportaciones chilenas, cuatro quintas partes generadas por dos minas gigantescas estadounidenses. La “chilenización” que hizo Frei de estas minas fue financiada con préstamos de Estados Unidos, y era la base principal de los más de mil millones de dólares que Chile debía a los bancos de ese país en 1970. Además de estos préstamos de largo plazo, la economía chilena dependía de aproximadamente unos 300 millones de

³⁰ *Ibid.*, pp. 84-88.

³¹ Véase T. Moran, *Multinational Corporations...*, *op. cit.*, pp. 147-152; P. Sigmund, *The United States and Democracy in Chile*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1993, pp. 61-64; N. Davis, *The Last Two Years of Salvador Allende*, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1985, pp. 99-107, y E. Novoa, *La batalla por el cobre*, Santiago, Quimantú, 1972.

dólares en líneas de crédito de bancos estadounidenses para financiar las importaciones necesarias de maquinaria, piezas de repuesto y materias primas. Señales de agencias gubernamentales –tales como el Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank)– dirigieron esas líneas de crédito, que disminuyeron 90% durante el gobierno de Allende, mientras Estados Unidos presionaba para terminar con la ayuda multilateral proporcionada por organismos aparentemente apolíticos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La ayuda bilateral estadounidense casi desapareció, con las significativas excepciones de la ayuda militar que se duplicó y la venta de armas que se triplicó.³² “Estamos manteniendo nuestra misión militar sobre la base de una ‘situación normal’ [*business as usual*] –escribió Kissinger a Nixon– para mantener al máximo los contactos con el ejército chileno.”³³

“Ampliar y mantener los contactos con el ejército chileno” fue uno de los “cinco principales elementos” en el “Programa de Acción Encubierta en Chile” de la CIA, que fue aprobado por el gobierno de Estados Unidos en noviembre de 1970. Esta campaña encubierta estaba “dirigida al gobierno de Allende, a las fuerzas armadas chilenas, a la oposición no marxista, al pueblo chileno, y a otros países latinoamericanos, en un esfuerzo por maximizar la presión sobre el gobierno de Allende”.³⁴ La acción encubierta incluía “la acción política de dividir y debilitar la coalición de Allende, el financiamiento a ‘grupos y partidos de la oposición no marxista’, la inversión en medios de comunicación y prensa de derecha para ‘hablar en contra del gobierno de Allende’ y la utilización de ‘emisoras seleccionadas’ fuera de Chile ‘para publicitar la subversión de Allende del proceso democrático y la participación de Cuba y la Unión Soviética’”.³⁵ En la práctica, esta guerra secreta suponía la canalización de aproximadamente cinco millones de dólares dirigidos a los demócratacristianos, por lo menos 1 650 000 dólares destinados al grupo El Mercurio, propiedad de Agustín Edwards, y 1 500 000 dólares para las empresas de derecha, obreros, líderes, organizaciones cívicas y paramilitares, además de aquellos que Estados Unidos sabía estaban organizando la oposición violenta contra el gobierno de Allende e inte-

³² CIA, “Covert Action...”, *op. cit.*, pp. 33-36.

³³ P. Kornbluh, *The Pinochet Files...*, *op. cit.*, p. 86.

³⁴ *Ibid.*, p. 89.

³⁵ *Idem.*

resados en la desestabilización de la democracia en Chile. La CIA y la DIA (la agencia de inteligencia del Pentágono) operaron en el seno de las fuerzas armadas chilenas y tenían objetivos similares, incluso una “operación engañosa” que distribuyó documentos falsos a altos funcionarios tratando de convencerlos de que Allende pasaba información secreta militar chilena a Cuba y que conspiraba junto con Castro contra ellos. Para 1972, la CIA y la DIA compilaban listas de aquellos oficiales chilenos que podrían participar en un golpe militar, junto con listas de posibles detenidos, en caso de que el golpe tuviera éxito.

Aunque el general Augusto Pinochet fuera considerado por los conspiradores del golpe chileno como un aliado poco confiable, los agentes estadounidenses habían seguido su trayectoria desde 1971, y en septiembre de 1972 le dieron un mensaje durante su viaje a Panamá que anunciaba que “Estados Unidos apoyará el golpe contra Allende ‘a través de cualquier medio necesario’ cuando llegue el momento”.³⁶ Lo que todavía no está claro —a pesar de los documentos secretos referidos antes, la mayoría con pasajes oscuros “por razones de seguridad”, y por otros documentos también retenidos seguramente por razones similares— es qué “medios” utilizó Estados Unidos para apoyar el golpe, “cuando el momento llegó”, en septiembre de 1973.

La guerra secreta de Estados Unidos contra Allende fue uno de los factores importantes que condujeron al fracaso de la vía chilena, a pesar de su prometedor comienzo;³⁷ fue también importante en la creación de las condiciones para el violento golpe militar del 11 de septiembre de 1973, como un estudio de la CIA concluyó orgullosamente. Lo que Estados Unidos hizo ese día fatal queda poco claro, y las valoraciones estadounidenses de que las fuerzas armadas chilenas tenían la capacidad de realizar un golpe de Estado por sí mismas pueden haber determinado que Washington jugara un papel secundario, aun en cuanto a la garantía de que los conspiradores gozarían de su apoyo si es que tenían éxito.

Lo que sí se desprende de los documentos secretos es el grado de complicidad estadounidense en la consolidación de la brutal dictadura de Pinochet, que terminaría con la democracia chilena por 17 años e impondría el terror estatal que violaría derechos humanos de chilenos

³⁶ *Ibid.*, p. 98.

³⁷ P. Winn, *Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile's Road to Socialism*, Nueva York, Oxford University Press, 1986, cap. 17.

y extranjeros, dentro y más allá de las fronteras de Chile. Dichos documentos establecen que el gobierno de Nixon estaba completamente consciente de las detenciones, la tortura, las ejecuciones y las desapariciones en Chile con Pinochet al frente; de la formación y evolución de la DINA, a la que un informe de la DIA caracterizó como “la Gestapo moderna”, que incluso almacenaba el gas Sarin, un arma de destrucción masiva.³⁸ Sin embargo, el gobierno de Nixon defendió al régimen militar internacionalmente, y lo convirtió en el más importante receptor de la ayuda estadounidense en Latinoamérica; de hecho, cuando el nuevo embajador de Estados Unidos se escandalizó por las violaciones a los derechos humanos cometidos bajo la autoridad de Pinochet, la respuesta de Kissinger fue que “cortara los sermones de ciencia política”.³⁹

En junio de 1976 Kissinger incluso agradeció a Pinochet por sus servicios en el combate a la Guerra Fría.⁴⁰ Esta postura de Estados Unidos a favor de Pinochet no cambió a pesar de las muertes y la desaparición de dos ciudadanos de ese país y el surgimiento de la Operación Cóndor, que proyectó el terror más allá de las fronteras de Chile, primero a otros países de la región y luego a Europa y Norteamérica, culminando con el asesinato de Orlando Letelier y un ciudadano estadounidense en el centro de Washington, el primer asesinato de un político exiliado en la capital de Estados Unidos. En efecto, la Operación Cóndor pactó un acuerdo con las fuerzas de seguridad de las dictaduras militares sudamericanas (Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, con una extensión parcial a Perú) para meterse en el terrorismo internacional y regionalizar el terrorismo del Estado. Washington solamente se preocupó por la Operación Cóndor cuando se salió de control, cuando sus actividades se prolongaron más allá de América Latina, a Estados Unidos y a Europa, pero incluso entonces poco hicieron para detenerla.⁴¹

Cóndor fue una iniciativa chilena, y Chile sirvió de mensaje y modelo para el resto de la región. Tras el golpe chileno, dictaduras militares represivas de derecha tomaron el poder en Uruguay y Argentina, y generales más conservadores asumieron el poder en Perú, embotando

³⁸ P. Kornbluh, *The Pinochet Files...*, op. cit., docs. 7-8, cap. 3.

³⁹ *Ibid.*, caps. 3 y 4.

⁴⁰ *Ibid.*, cap. 4.

⁴¹ Véase J. Dinges, *The Condor Years: How Pinochet and His Allies Brought Terror to Three Continents*, Nueva York, New Press, 2004, caps. 10-14, y P. Kornbluh, *The Pinochet Files...*, op. cit., cap. 6.

y anulando su “revolución militar”; todos confiaban en que disfrutarían del apoyo estadounidense. Chile no era lo único en las relaciones de Estados Unidos y América Latina; al contrario, pero sabemos más sobre la intervención en Chile, modelo que nos sirve para observar la defensa de la hegemonía, la ortodoxia ideológica y los intereses económicos de Estados Unidos en la región.

El golpe chileno fue un momento decisivo en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Con la amenaza izquierdista a la hegemonía, ideología e intereses estadounidenses derrotada en Sudamérica, Henry Kissinger asistió a la reunión interamericana que se celebró en México en 1974, donde ofreció a América Latina un “nuevo diálogo”, basado en la “comunidad” hemisférica, que para muchos latinoamericanos era una forma de consolidar el nuevo *statu quo* derechista de la región.

Con los desafíos izquierdistas y nacionalistas derrotados en Sudamérica, Henry Kissinger estuvo dispuesto a dar concesiones en la resolución de lo que él veía como los dos problemas más importantes de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina: Cuba y Panamá. A Panamá le ofreció la renegociación del tratado del Canal. Considerando sus preocupaciones ideológicas y de “vinculaciones” con la URSS, las concesiones para Cuba parecían más difíciles, pero Kissinger estaba dispuesto al acercamiento, que podría conducir al final del embargo y del aislamiento hemisférico de Cuba (a cambio del compromiso cubano de no intentar exportar su revolución); un giro de regreso a la contención de la política estadounidense hacia América Latina.⁴² Estas iniciativas comenzadas por Kissinger bajo la administración Ford se convertirían en las dos prioridades de la política exterior regional de la administración de Carter; aunque sólo la renegociación del tratado del Canal de Panamá daría frutos.

En efecto, aunque los cubanos rechazaron este trato, cuando decidieron intervenir en el sur de África —donde su influencia quizá fue mayor que en América Latina, muy a pesar de Kissinger— compartieron la visión de Kissinger de que las derrotas de la izquierda en Sudamérica significaban que la región ya no era fértil para la revolución. Cuba también entendió el golpe militar chileno como un mensaje: Estados

⁴² A. Lowenthal, *Partners in Conflict: The United States and Latin America*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1987, pp. 40-42.

Unidos no toleraría ni siquiera el socialismo democrático en la región. Junto con el fracaso de una década de lucha armada fuera de Cuba, este desarrollo condujo a La Habana a cultivar relaciones pragmáticas Estado a Estado con los regímenes latinoamericanos que había intentado derrocar sólo unos años antes y trasladar su papel y esperanzas revolucionarias al otro lado del Atlántico, a África. No fue sino hasta el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en 1979, que tanto Estados Unidos como Cuba verían a América Latina —o por lo menos a América Central— nuevamente fértil para la revolución.⁴³

Pero el golpe militar chileno y el papel de Estados Unidos en la caída del gobierno de Allende y la consolidación de la dictadura de Pinochet con sus violaciones masivas a los derechos humanos, también tuvieron un efecto opuesto en las relaciones de Estados Unidos y América Latina, aunque tomó tiempo en aparecer. Las revelaciones sobre la intervención secreta de Estados Unidos en Chile —hechas primero por periodistas investigadores en los principales diarios estadounidenses y luego por el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense encabezado por el senador Frank Church— se convirtieron en la cuestión que definió la diferencia entre Gerald Ford y Jimmy Carter sobre política exterior durante la campaña de la elección presidencial de 1976, como *realpolitik*, como una cuestión de principios. El compromiso de Carter de una política exterior acorde con los principios de sus conciudadanos —citando a Chile como ejemplo donde su política sería diferente— contrastó radicalmente con la afirmación de Ford de que la intervención secreta de Estados Unidos en Chile se hizo en favor de los mejores intereses de su país y del pueblo de Chile, hecho que tuvo peso en el triunfo electoral de Carter.⁴⁴

Una vez que tomó posesión de la Presidencia, las palabras de Carter estuvieron a la altura de sus promesas, a pesar de que Zbigniew Brzezinski, su asesor de seguridad nacional, era tan partidario de la *realpolitik* anticomunista como lo había sido Henry Kissinger, y trató de limitar el impacto de los derechos humanos sobre las acciones estadounidenses. Los latinoamericanos quizá tomaron la retórica de Carter sobre los derechos humanos más seriamente de lo que en verdad era, ya

⁴³ P. Gleijeses, *Conflicting Missions: Havana, Washington and Africa*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2003.

⁴⁴ P. Sigmund, *The United States...*, *op. cit.*, cap. 4.

que el activismo de la administración Carter en este aspecto raramente iba más allá del discurso; sin embargo, sí contribuyó a legitimar la lucha por los derechos humanos en la región, una lucha que precedió y formó parte de la lucha por el restablecimiento de la democracia.⁴⁵ Además, las palabras de Carter y la repulsión a la intervención en Chile, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, hicieron difícil a Washington intervenir unilateralmente en Nicaragua en 1979 para impedir que los sandinistas tomaran el poder. Esto también ayudó a crear el contexto en el cual una mayoría latinoamericana en la Organización de Estados Americanos (OEA) por primera vez rechazara el requerimiento de Estados Unidos de una intervención multilateral para “detener el comunismo”. Esta muestra de la independencia –incluso de desafío– en una organización creada para dar legitimidad multilateral a la defensa de la hegemonía regional estadounidense, pero sirviendo aquí a un propósito opuesto, subrayó la divergencia creciente dentro del hemisferio sobre aquella cuestión, y también sobre la ideología y los intereses económicos.⁴⁶

Junto con la emergencia de fuertes movimientos revolucionarios en El Salvador y Guatemala, el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua planteó en Centroamérica –“nuestro patio trasero”, como Ronald Reagan lo llamó– una nueva serie de retos revolucionarios para la hegemonía, ideología e intereses estadounidenses al final de los años setenta, que recordaron aquellos otros establecidos por la revolución cubana dos décadas atrás, pero en circunstancias muy diferentes. Una de esas diferencias fue la memoria histórica de lo que había sucedido en Chile durante aquella década y el papel estadounidense en la tragedia chilena, además de su apoyo a los otros regímenes militares represivos en la región. Otra, fue la emergencia de un grupo de naciones latinoamericanas –donde México desempeñó un papel importante– que se preparó para impugnar la hegemonía y soluciones militares estadounidenses en los conflictos de Centroamérica; en parte como reflejo de la desilusión con la política estadounidense en Chile y en otros lugares. En consecuencia, el gobierno de Reagan evitaría recurrir a la OEA para la solución de los conflictos centroamericanos (por ejemplo para legitimar

⁴⁵ Véase *ibid.*, cap. 5, y L. Schoultz, *Human Rights and United States Policy Toward Latin America*, Princeton, 1981, pp. 345-365.

⁴⁶ R. Pastor, *Condemned to Repetition*, Princeton, Princeton University Press, 1987, caps. 7 y 8.

su intervención en Granada en 1983), mientras las naciones latinoamericanas trabajarían, al fin con éxito, para encontrar soluciones democráticas y negociadas a esos conflictos.⁴⁷

La historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante las décadas de 1960 y 1970 continuaría repercutiendo los siguientes años, con el relato de lo que había sucedido en Chile y el papel de Estados Unidos como pieza central de la memoria histórica en ambos lados del Río Grande. La lucha por definir esta memoria histórica también continuaría: y como lo subrayan las recientes conmemoraciones del trigésimo aniversario del golpe militar chileno, sigue siendo terreno impugnado.

BIBLIOGRAFÍA

- Alba, Victor, *Alliance Without Allies*, Nueva York, Praeger, 1965.
- Barker, Phyllis, *Brazil and the Quiet Intervention, 1964*, Austin, University of Texas Press, 1979.
- Barnet, Richard y Ronald Muller, *Global Reach: The Power of the Multinational Corporations*, Nueva York, Simon & Schuster, 1976.
- CIA, "Covert Action in Chile 1963-1973", United States, Senate, Intelligence Committee, Staff Report.
- Davis, Nathaniel, *The Last Two Years of Salvador Allende*, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1985.
- Dinges, John, *The Condor Years: How Pinochet and His Allies Brought Terror to Three Continents*, Nueva York, New Press, 2004.
- Fleet, Michael, *The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy*, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1985.
- Gleijeses, Piero, *The Dominican Crisis*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1978.
- _____, *Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United States, 1945-1954*, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1991.
- _____, *Conflicting Missions: Havana, Washington and Africa*, Chapel Hill, N.C., University of North Carolina Press, 2003.

⁴⁷ Véase W. Lafeber, *Inevitable Revolutions*, Nueva York, Norton, 1993, pp. 282-284; P. Winn, *Americas: The Changing Face of Latin America and the Caribbean*, Berkeley, University of California Press, 1999, pp. 522-526, y W. LeoGrande, *Our Own Backyard: The United States and Central America, 1977-1992*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1998, cap. 21.

- Gross, Leonard, *The Last Best Hope: Eduardo Frei and Chilean Christian Democracy*, Nueva York, Random House, 1967.
- Herken, Gregg F., *The Winning Weapon: The Atomic Bomb in the Cold War, 1945-1950*, Nueva York, Alfred Knopf, 1981.
- Hersh, Seymour, *The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House*, Nueva York, Summit Books, 1983.
- Kinzer, Stephen y Stephen Schlesinger, *Bitter Fruit: The Untold Story of the American Coup in Guatemala*, Nueva York, Doubleday, Garden City, 1981.
- Kinzer, Stephen, *All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror*, Nueva York, John Wiley, 2004.
- Kornbluh, Peter, *The Pinochet Files: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability*, Nueva York, New Press, 2003.
- Lafeber, Walter, *Inevitable Revolutions*, Nueva York, Norton, 1993.
- LeoGrande, William, *Our Own Backyard: The United States and Central America, 1977-1992*, Chapel Hill, N.C., University of North Carolina Press, 1998.
- Levinson, Jerome y Juan Onís, *The Alliance That Lost Its Way*, Nueva York, Harper Collins, 1972.
- Loveman, Brian, *Por la Patria: Politics and the Armed Forces in Latin America*, Wilmington, Del., Scholarly Resources, 1990.
- _____, *Chile: The Legacy of Hispanic Capitalism*, Nueva York, Oxford University Press, 2001.
- Lowenthal, Abraham, *Partners in Conflict: The United States and Latin America*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1987.
- _____, *The Dominican Intervention*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1990.
- Moran, Theodore, *Multinational Corporations and the Politics of Dependence: Copper in Chile*, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1974.
- Mutchler, David E., *The Church as a Political Power in Latin America, With Particular Reference to Chile and Colombia*, Nueva York, Holt, Rinehart & Winston, 1971.
- Novoa, Eduardo, *La batalla por el cobre*, Santiago, Quimantú, 1972.
- Pastor, Robert, *Condemned to Repetition*, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1987.
- Patterson, James T., *Great Expectations: The United States, 1945-1971*, Nueva York, Oxford University Press, 1966.
- Rabe, Stephen G., *The Most Dangerous Area in the World: John F. Kennedy Confronts Communist Revolution in Latin America*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1999.
- Rockefeller, Nelson, *Rockefeller Report on the Americans: The Official Report of United States Presidential Mission for the Western Hemisphere*, Nueva York, Times Books, 1969.

- Roet, Riordan, *Politics of Foreign Aid in the Brazilian Northeast*, Nashville, Vanderbilt University Press, 1972.
- Schnitz, David F., *Thank God They're on Our Side: The United States and Right-Wing Dictatorships, 1921-1965*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1999.
- Schoultz, Lars, *Human Rights and United States Policy Toward Latin America*, Princeton, N.J., 1981.
- Sigmund, Paul, *The United States and Democracy in Chile*, Baltimore, Md., Johns Hopkins University Press, 1993.
- United States, Senate, Subcommittee on Multinational Corporations, Committee on Foreign Relations, 93rd Congress, Washington, GPO, 1973, part. 2, pp. 542-543.
- Winn, Peter, *Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile's Road to Socialism*, Nueva York, Oxford University Press, 1986. [Trad.: *Tejedores de la revolución: los trabajadores de Yarur y la vía chilena*, Santiago, LOM Ediciones, 2004.]
- _____, *Americas: The Changing Face of Latin America and the Caribbean*, Berkeley, University of California Press, 1995.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL DEL EXPERIMENTO CHILENO, 30 AÑOS DESPUÉS

Isabel Turrent*

Lo que a primera vista sorprende más al mirar a Chile en 1973 desde la atalaya del 2003 es lo más evidente: el escenario internacional que enmarcó el experimento chileno desapareció con todos sus cimientos. La política de Estados Unidos y de la Unión Soviética, los dos actores más importantes para la Unidad Popular (UP) en el exterior, fue definida por el orden bipolar de la posguerra, que se desmoronó junto con el muro de Berlín y la Unión Soviética. A la distancia, el segundo factor que sobresale es que para esos dos actores, el destino de Allende y del experimento chileno se ha desvanecido en sus recuentos y análisis. Que esto haya sucedido en el caso soviético es más que natural: la URSS desapareció y los países que nacieron de su fragmentación tienen cuentas más urgentes que extraer de un pasado que económica y políticamente les robó un siglo.

El caso de Estados Unidos es diferente. La desmemoria es indicativa de la mínima importancia que Washington le ha dado siempre a Latinoamérica, a excepción de esas situaciones donde ha visto amenazados sus intereses vitales, y Chile nunca fue una amenaza de ese calibre; es también resultado de la peculiar visión histórica estadounidense, que a diferencia de otros países como México, tiende a volcarse hacia el futuro a espaldas del pasado; por último, es producto de la obsesión estadounidense con el comunismo que guió toda su política exterior de posguerra. Una diplomacia tan miope como la actual—obsesionada a su

* Licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Maestra en Ciencia Política por la Universidad de Oxford. Autora de *La Unión Soviética en América Latina. El caso de la Unidad Popular chilena: 1970-1973*, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, 1984; “La Unión Soviética en América Latina: el caso de Brasil”, *Foro Internacional*, vol. 27, núm. 1, julio-septiembre, 1986, y *El deshielo del Este*, México, Editorial Vuelta, 1991.

vez por el terrorismo— determinó el tablero político de Washington; en él, el experimento chileno fue apenas un peón que no merecía siquiera pasar a la historia. Esta desmemoria se explica porque las operaciones estadounidenses en Chile a principios de la década de los setenta fueron básicamente clandestinas.

Es imposible saber cómo hubiera actuado Washington si Allende hubiese podido remontar los obstáculos internos y consolidar un mandato apoyado por menos de 40% de los votantes, pero en la situación chilena, entre 1970 y 1973, escogió la estrategia correcta para desestabilizar y contribuir finalmente a la caída de la UP: el apoyo a los opositores internos, responsables directos de la destrucción del experimento chileno y del golpe militar del 11 de septiembre.

Entre 1970 y 1973 el pacto social que sostiene todo sistema político se rompió en Chile. Los componentes de la democracia chilena —incluidos los legisladores y las fuerzas armadas— actuaron en el mismo sentido que las células cancerosas que destruyen al organismo que las sostiene y alberga. La oposición no le dio jamás a Salvador Allende la oportunidad de gobernar: su único fin era destruir al régimen socialista a cualquier costo. Estados Unidos aprovechó esta situación, por lo demás ideal para la política exterior del gobierno de Nixon diseñada por Henry Kissinger. Una diplomacia triangular centrada en dos países lejanos geográficamente de Chile: la Unión Soviética y China.

En su extenso libro *Diplomacy*, publicado en 1994, Henry Kissinger reconoció que el gobierno de Nixon reaccionó visceralmente ante cualquier amenaza geopolítica o estratégica proveniente de la URSS. En la detallada enumeración de estas amenazas, reales o imaginarias, a las que respondió Estados Unidos no hay una sola mención a Chile. “En 1970 —dice el recuento de Kissinger— Estados Unidos [reaccionó visceralmente] frente a la construcción de una base naval soviética en Cuba; con el movimiento de misiles hacia el canal de Suez y en respuesta a la invasión siria de Jordania; en 1971, como reacción al papel soviético en la guerra indo-pakistana, y en 1973, frente a la amenaza tácita de Brezhnev de intervenir en el conflicto árabe-israelí” (p. 713).

Chile no está en el mapa kissingeriano de las amenazas a los intereses estadounidenses a principios de los años setenta. Paradójicamente porque tal vez nunca debió haber estado, ni abierta ni clandestinamente. Allende había optado por un modelo de transición pacífica al socialismo; pero más allá de ello, el gobierno de Nixon tenía una agenda

complicada y amplísima en el ámbito doméstico y en el exterior: un programa que debió haber colocado al experimento chileno en los márgenes de la atención de Washington.

En el momento en que Richard Nixon tomó el poder a principios de 1969, la sociedad estadounidense estaba profundamente dividida. Kennedy había iniciado el largo proceso para sanar heridas y Lyndon Johnson lo había retomado. El nombre que Johnson dio a su programa doméstico –La Gran Sociedad– era más que simbólico. Leyes como la de los Derechos Civiles de 1964 buscaron incorporar plenamente a los negros a la sociedad estadounidense; sin embargo, para 1968, los esfuerzos de Kennedy y Johnson para reforzar la unidad social habían fracasado; la guerra de Vietnam había fracturado nuevamente a la opinión pública. En medio de la ofensiva antiterrorista estadounidense desatada por el otro 11 de septiembre, es inevitable reconocer que aunque el escenario internacional que enmarcó al gobierno de la UP ha desaparecido, los razonamientos, la ideología, los errores y la estrategia externa estadounidense no han cambiado un ápice. La retórica que Johnson blandió para justificar el inmenso despliegue de tropas en Vietnam (medio millón de soldados) es prácticamente idéntica a la que Bush usó en 2003 para justificar el ataque a Irak.

Lyndon Johnson arguyó que el comunismo asiático era un movimiento unificado y que el “mundo libre” confrontaba un plan de agresión china, premeditado y perfectamente coordinado. El Vietcong y Vietnam del Norte eran tan sólo la punta de lanza de esa amenaza expansionista. Una amenaza que Johnson comparó sin reparos con la que había representado Hitler en los años treinta, o Stalin en los cuarenta.

La guerra en Vietnam hizo trizas el consenso estadounidense. Conforme el esfuerzo bélico se tragó los superávits de una economía en expansión, el movimiento de paz creció exponencialmente. El descontento se multiplicó entre los jóvenes; la popularidad de Johnson se desplomó, y los demócratas perdieron la Casa Blanca.

Éste era el panorama doméstico que Nixon debió enfrentar en 1969; en palabras de Kissinger: “una situación cercana a la condición de una guerra civil”. No sorprende que los primeros pasos de Nixon en el exterior se hayan dirigido a terminar con la guerra. Pero la diplomacia estadounidense tenía otras tareas pendientes, y Henry Kissinger, el secretario de Estado, quedó encargado de resolverlas. El nuevo arquitecto de la diplomacia estadounidense, firme creyente de la *realpolitik*

y conocedor profundo de la escena internacional, ideó una estrategia para obligar a la Unión Soviética a firmar acuerdos con Estados Unidos y delimitar su acción en el mundo a través de confrontarla con la posibilidad de una alianza con su mayor rival, la otra gran potencia comunista, China. La “carta china”, que implicó arduas negociaciones con Beijing, tuvo inmenso éxito. Estados Unidos y China reanudaron sus relaciones, y la Unión Soviética entró en el proceso conocido con el nombre de *deténte*, plasmado en innumerables acuerdos con los estadounidenses en un ámbito de acción internacional bien delimitado para las dos superpotencias. Acuerdo que resultó muy desafortunado para la Unidad Popular chilena. El escenario mundial quedó dividido en dos grandes esferas: las regiones de influencia directa de las dos superpotencias, tácitamente intocables, las llamadas “zonas grises”, donde ambas podían moverse con mayor libertad de acción. Europa Oriental y América Latina se convirtieron en territorios vedados; el Medio Oriente y África siguieron siendo escenarios de libre competencia para Washington y Moscú.

Frente a esta división del mundo —que se consolidó precisamente en los años del gobierno de la UP, entre 1970 y 1973—, varios factores tendieron a inhibir la libertad de acción de Washington en Chile. Entre ellos estaba el hecho de que Salvador Allende no era un dictadorzuelo bananero entronado por un golpe militar, sino un presidente electo democráticamente. Un hecho que la nación que se autonabraba “defensora de la democracia y del mundo libre” no podía pasar por alto. En segundo término el “síndrome Vietnam”, fresco y presente en la opinión pública estadounidense, impedía a Estados Unidos intervenir abierta y militarmente en un país latinoamericano en 1970, que además no podía correr el riesgo de que se le equiparara en ese momento con los soviéticos que habían recibido la repulsa del mundo entero en 1968, con la invasión a Checoslovaquia.

Allende y sus asesores pusieron todos estos factores en la balanza y decidieron, correctamente, convertir a Washington en el corazón de su política exterior. La UP mandó a Orlando Letelier —hombre inteligente que conocía a la perfección los corredores del poder en Washington— como embajador ante Estados Unidos, e hizo lo posible por limar los temores estadounidenses. Allende subrayó la naturaleza pacífica y democrática del “experimento chileno” y por más de un año insistió en que Chile no se aliaría con la URSS o con otro país comunista.

Lo que la Unidad Popular no pudo prever fue que todos sus esfuerzos serían inútiles. Desde el principio, la actitud estadounidense fue de inmensa hostilidad. En un rechazo sin precedentes, el presidente Nixon no envió las felicitaciones protocolarias debidas a Allende por su elección. Las bases de observación de Estados Unidos en la Isla de Pascua fueron desmanteladas sin previo aviso al gobierno chileno y Washington congeló la asistencia económica bilateral a Chile. Los créditos y la ayuda a Chile se redujeron de 106 000 000 de dólares en 1969 a sólo 56 000 000 en 1970. Por si algo faltara para subrayar la percepción estadounidense del “experimento chileno”, el amnésico Kissinger (pues olvidó mencionar a Chile en su monumental obra de 1994) declaró el 16 de septiembre de 1970: “La elección de Allende es grave para los intereses estadounidenses en Chile y también para los intereses de seguridad de Estados Unidos” (“Chile: a case study”, *Time*, 30 de septiembre, 1974, p. 21).

Estados Unidos adoptó lo que un autor llamó con perspicacia una “neutralidad malevolente”; una política oculta encaminada a derrocar a Allende, cuyos detalles saldrían a la luz años después. El camino que Washington eligió para erosionar la legitimidad de la UP fue el apoyo a los opositores de Allende. Tan sólo en noviembre de 1970 la oposición recibió 750 000 dólares; parte de ese dinero se dirigió a personalidades de la democracia cristiana, y parte a realizar labores de espionaje en Chile. En enero del año siguiente, más de 300 000 dólares se dirigieron a financiar a los partidos de derecha para las elecciones municipales del siguiente abril y para *El Mercurio*, el diario de derecha que caldeó los ánimos de la opinión pública desde el principio hasta el final del “experimento chileno”. Enviados de la CIA participaron en el asesinato del general Schneider y se encargaron de alimentar el caos en Chile. A esta ofensiva subterránea se sumó posteriormente la reacción de las transnacionales afectadas por la campaña de nacionalizaciones y privatizaciones que emprendió Allende. Estas empresas, que afectaron negativamente el mercadeo del cobre chileno —que conformaba 70% de las exportaciones del país—, fueron de hecho la punta del iceberg de la intervención estadounidense.

Kissinger había heredado la obsesión con el comunismo que había guiado la política exterior estadounidense desde que el Departamento de Estado diseñó la teoría de la “contención”, de acuerdo con las ideas de George Kennan. En Chile —*mutatis mutandis*— funcionó la misma

ideología que había llevado a Johnson a comprometerse en Vietnam. En la nueva versión latinoamericana de la “teoría dominó”, Chile podía ser la punta de lanza de la expansión del socialismo en el continente. En sus primeras declaraciones ya citadas, Kissinger advirtió el peligro que implicaba el establecimiento del comunismo en un país continental con más influencia que Cuba: “Un país latinoamericano mayor, que podría unirse por ejemplo a Argentina [...] a Perú, que se ha orientado ya a posiciones difíciles de tratar, y a Bolivia, que se ha encaminado a una posición aún más izquierdista y antiestadunidense”. Todas estas conclusiones eran una fantasía, como son todas las predicciones basadas en premisas ideológicas (no por nada se ha definido a la ideología como una conciencia falsa de la realidad). Entre 1970 y 1973 Chile se encontró relativamente aislado en América Latina.

Esto no impidió que Estados Unidos prosiguiera con el sabotaje clandestino que había emprendido en 1970. Los movimientos de oposición fueron financiados por Washington, especialmente la huelga de octubre de 1972 que agudizó la crisis económica del país y fue –visto a la distancia– el principio del fin de la Unidad Popular. En el área del transporte, la mayoría de los vehículos provenía de Estados Unidos, y a mediados de 1972 –según estimó una fuente chilena– estaban fuera de servicio por falta de piezas de reposición 30% de los autobuses, 21% de los taxis y 33% de los camiones de servicio público. Esta falta de refacciones fue el principal pretexto de los huelguistas en octubre; la achacaron, por supuesto, al “descuido” de la Unidad Popular. Lo mismo sucedió con la ayuda a las fuerzas armadas: en 1970 era de 800 000 dólares; para 1973 se había multiplicado hasta alcanzar la cifra de 12 300 000 dólares. Significativamente, el 29 de agosto de 1973, el embajador estadounidense Nathaniel Davis abandonó Santiago por órdenes de Kissinger y no regresaría sino hasta el 8 de septiembre, tres días antes del golpe militar.

Paralelamente, Estados Unidos recortó sus exportaciones a Chile (de 40% del total de las compras del país a 15% entre 1970 y 1973). La falta de fuentes alternativas de insumos industriales dio por resultado una disminución de la producción.

En diciembre de 1972 Allende definió a Chile como “un Vietnam silencioso”. El presidente chileno dramatizó la situación de su país, pero era indudable que la política estadounidense, sin ser determinante, era un factor importante en el fortalecimiento de la oposición y de la

crisis económica chilena. Washington encontró dentro de Chile a quienes harían el trabajo sucio en su nombre: los factores que empujaban a Washington a intervenir en Chile habían sido determinantes.

En 1970 el gobierno de la Unidad Popular no se planteó como objetivo central de su diplomacia el acercamiento a los países comunistas. Aun la relación con Cuba se desarrolló en un principio bajo el signo de la prudencia; cuando esa prudencia se rompió, y Fidel Castro visitó Chile por casi dos semanas, los resultados fueron catastróficos para el gobierno. Fue la política estadounidense la que empujó a Allende a los brazos de los soviéticos en busca de una fuente alternativa de insumos, mercados y créditos. Pero aquí se topó nuevamente con un panorama muy desventajoso para la UP.

El interés soviético por América Latina era relativamente reciente. Hasta fines de los años cincuenta, Moscú había considerado a América Latina como un área desligada de los problemas generales de la “lucha de liberación nacional”. Su visión era pesimista: el supuesto del “fatalismo geográfico” que los soviéticos concebían –de acuerdo con el cual Latinoamérica era la retaguardia estratégica de Estados Unidos– era considerado un obstáculo infranqueable. La lejanía geográfica de América Latina y la imposibilidad soviética de apoyar militarmente a un gobierno socialista en la región habían alimentado el desinterés de Moscú. El triunfo de Castro en Cuba y su acercamiento a Moscú rompieron durante algunos años la lejanía soviética y el supuesto del fatalismo geográfico.

Sin embargo varios hechos habían alimentado desde mediados de la década de los sesenta una nueva distancia: la crisis de los misiles y sus consecuencias; el enfrentamiento doctrinario entre Moscú y Castro, que había optado por la promoción de la vía armada al socialismo en América Latina, y ante todo los costos que el apoyo al régimen de Castro había implicado. En la Unión Soviética el nuevo gobierno que había tomado el poder en 1964, encabezado por Leonyd Brezhnev, había hecho el balance de la política tercermundista de su antecesor, Nikita Krushev. El resultado no podía ser más negativo: para 1960 la ayuda soviética al Tercer Mundo alcanzaba la cifra de 1 000 000 000 de dólares. Ese dinero había sido prácticamente lanzado al vacío: los regímenes que lo habían recibido habían caído o habían financiado proyectos tan ambiciosos que quedaron inconclusos. Entre los gobiernos que seguían en pie, uno de los mayores dolores de cabeza para Moscú se situaba en

América Latina: el régimen de Castro, que había resultado un aliado costosísimo. Para 1965 el monto de la ayuda de la URSS a Cuba se había elevado a la considerable suma de 1 000 000 de dólares diarios y Castro había declarado su independencia doctrinal y política frente a sus generosos mecenas.

No sorprende que Moscú haya adoptado una política y un enfoque doctrinario del Tercer Mundo pragmático y cauteloso. Mientras chinos y cubanos se polarizaban en favor del camino violento al socialismo, Moscú optó por la vía pacífica, y en el renglón de la ayuda a los países en desarrollo, la Unión Soviética decretó que sólo proyectos que demostraran su rentabilidad recibirían su ayuda.

A todo ello se sumó la política brezhneviana *détente*, que fue la respuesta soviética a la diplomacia triangular del gobierno de Nixon y que abarcó no sólo la relación bilateral con Washington, sino la perspectiva soviética de todo el mundo occidental. Un claro ejemplo de ello fue la relación con Alemania. El canciller Willy Brandt inició en 1969 una política de acercamiento al bloque socialista, la famosa *Ostpolitik*; el liderazgo soviético recibió la iniciativa con los brazos abiertos. La relación económica soviético-alemana se fortaleció y los dos países firmaron acuerdos que establecieron, por ejemplo, las fronteras definitivas entre los países de Europa Central y Alemania Occidental.

En este contexto Moscú recibió el triunfo de la Unidad Popular chilena con reservas y sentimientos encontrados. El nuevo pragmatismo soviético, sumado a los constreñimientos que le imponía la política *détente* y los problemas crecientes en el desempeño económico del país, invitaban a los soviéticos a mantener una prudente distancia frente al gobierno de Allende.

Por otra parte, el prestigio soviético y los imperativos doctrinales empujaron a Moscú a apoyar a Chile. Allende era el mejor ejemplo de la posibilidad de construir el socialismo por la vía pacífica que los soviéticos habían prregonado por años.

La URSS resolvió el dilema estableciendo tres niveles de relación con la UP. El primero de ellos, la liga partido-partido, fue estrecho y se amplió hasta abarcar a varios de los partidos que conformaban la coalición gobernante. El Partido Comunista de la Unión Soviética y sus comentaristas siguieron muy de cerca la evolución del gobierno de Allende. Lo mismo sucedió con el segundo estadio: las relaciones partido-Estado. Las reservas y limitaciones de Moscú se concentraron

y se hicieron evidentes en el último nivel: las relaciones Estado-Estado. Desde un principio Moscú se propuso mantener “relaciones estrechas, pero normales” con el nuevo gobierno chileno. Esta tendencia de la diplomacia soviética empalmó con la moderación de la política exterior de la UP, para darle un carácter especialmente distante al arranque de las relaciones entre los dos países. Tanto Chile como la URSS coincidieron en la necesidad de apaciguar a Washington. Allende no estaba dispuesto a trastocar la jerarquía de su agenda exterior. Otros factores incidieron en el interés chileno por mantener la relación con la URSS en un lugar secundario: la falta de consenso entre los partidos de la UP frente a la Unión Soviética y la necesidad de no dar armas a la oposición de derecha dentro de Chile.

Las relaciones económicas —parte de las ligas Estado-Estado en la óptica soviética— quedaron sometidas a esos imperativos y al nuevo pragmatismo soviético: el monto de la ayuda dependería de la rentabilidad del “experimento chileno”. En consecuencia, los soviéticos siguieron con especial atención el desempeño económico de Chile y señalaron desde un principio los inmensos problemas que confrontaría Allende: desde la necesidad de un financiamiento millonario para incrementar la producción del cobre, hasta las dificultades que generaría la aplicación del programa de nacionalizaciones de la UP. En el terreno de la ayuda crediticia, Moscú no otorgó ningún préstamo más allá de los 57 000 000 de dólares que había facilitado ya al gobierno de Frei, el antecesor de Allende.

No obstante, a diferencia de Estados Unidos que había etiquetado indeleblemente a la UP como una amenaza a sus intereses estratégicos, la política soviética fue más flexible. Hasta fines de 1972 la diplomacia de Moscú fluctuó paralelamente a los avatares del “experimento chileno”; a fines de 1971, los muchos recuentos de la UP en la prensa soviética arrojaron un veredicto positivo a pesar de las amenazas que pesaban sobre Chile. Subrayaron el acercamiento de Allende a otros países latinoamericanos, a Cuba, y el avance de la política de nacionalizaciones y la reforma agraria (en 1971, Allende había expropiado cerca de 1 300 propiedades que cubrían más de dos millones de hectáreas). Advertieron, sin embargo, sobre los riesgos de la ofensiva estadounidense: el cierre de créditos para Chile y el condicionamiento de su obtención a la compensación que debía pagarse a las grandes compañías cupríferas nacionalizadas; igualmente, la prensa soviética empezó a filtrar infor-

mación sobre las actividades subversivas de Estados Unidos en Chile y sobre la posibilidad de que una alianza derecha-democratacristiana fortaleciera el frente opositorista.

1972 fue el año clave en las relaciones soviético-chilenas. Si Salvador Allende hubiera logrado empujar el proceso iniciado por el triunfo de la UP al mismo ritmo que en 1971, Moscú se hubiera visto cada vez más comprometido a elevar el monto de su ayuda a Chile. Desafortunadamente para Allende, en 1972 se sucedieron uno tras otro acontecimientos que ensombrecieron el futuro del “experimento chileno” y prepararon el escenario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El proceso de debilitamiento de la UP alcanzó el punto del no retorno en los últimos meses de 1972; uno a uno, los instrumentos de control político y económico del gobierno fueron escapando de sus manos y el “experimento chileno” se hundió en el caos. El “bloqueo invisible” de Estados Unidos fue un factor importante en la crisis. Los créditos estadounidenses se redujeron a 32 000 000 de dólares y Washington siguió financiando a la oposición. En medio de la huelga de transportistas de octubre, la DC y otros partidos de oposición recibieron casi un millón y medio de dólares. Parte de ese dinero se dirigió a los huelguistas y contribuyó a sostener el paro.

En este contexto, Allende inició una ofensiva externa. Viajó a la sede de la ONU para denunciar públicamente y por primera vez —muy tardíamente— las acciones del gobierno estadounidense en Chile. El viaje culminó en Moscú en diciembre de 1972. Mientras Estados Unidos, las compañías cupríferas y la ITT negaban airadamente los cargos que Allende había hecho en Naciones Unidas, el presidente chileno intentó negociar con el gobierno soviético “un nuevo apoyo financiero y técnico”. Allende necesitaba con urgencia créditos blandos y de corto plazo.

Sin embargo, para el Kremlin los costos de un acercamiento como el que deseaban los chilenos eran mucho mayores que las ventajas. A puertas cerradas Moscú criticó tanto el desempeño económico de la UP, como el político. La ayuda soviética no fluiría a Chile a menos de que el “experimento chileno” lograra sobrevivir; pero en esa lucha la Unidad Popular estaba sola. Los soviéticos se negaron a otorgar un solo crédito a Chile; no los apoyaron ni siquiera declarativamente en su lucha contra Washington y se comprometieron tan sólo a comprar 130 000 toneladas de cobre y 87 000 000 de dólares de productos del

mismo metal, cantidades muy pequeñas frente a la producción total de cobre del país.

El presidente abandonó la Unión Soviética con la certeza de que las perspectivas del apoyo soviético estaban cerradas. Regresó a Chile sabiendo que los días del “experimento chileno” estaban contados.

A 30 años de distancia los problemas del “experimento chileno” parecen ordenarse y adquirir su dimensión exacta. Los factores externos que contribuyeron al fracaso del gobierno de Allende —en primer término, la ofensiva clandestina estadounidense, y en segundo, la retracción soviética producto del avance de la *deténte*— ocupan un segundo plano. Sin embargo, también del panorama internacional extrajeron buenas lecciones los muchos observadores del “experimento chileno”. Después de 1973 algunos arguyeron que Allende debió atenuar el impacto negativo de sus políticas en Estados Unidos, y que la “Doctrina Allende” había sido a fin de cuentas un desafío inútil; pero la principal lección de Chile en este terreno fue la incapacidad de la UP para prever y adelantarse a la política del gobierno de Nixon. Cuando el objetivo y la naturaleza de la nueva diplomacia encubierta de Washington salió a la luz, el gobierno chileno cometió el error de no encarar abiertamente ni las consecuencias ni el desafío que representaba la ofensiva estadounidense. Vista a la distancia, la estrategia conciliadora de la UP alimentó la tendencia intervencionista de la política de poder de Kissinger en Chile. En la coyuntura postVietnam, el gobierno de Allende debió haber desplegado ante la opinión pública internacional los resortes y datos del bloqueo invisible mucho antes de diciembre de 1972.

Es también indudable que la UP no pudo desenmascarar la ofensiva estadounidense debido a un problema estructural de la coalición: la falta de una estrategia definida y de un acuerdo básico entre los partidos que la componían. La Unidad Popular fue así un ejemplo más de la fragmentación de la izquierda en Latinoamérica. Los partidos de la Unidad Popular repitieron las divisiones y choques que habían marcado su historia desde principios del siglo XX; el desacuerdo entre “moderados” y “ultristas” fue tan perjudicial para la UP como las actividades extremistas de grupos como el MIR.

Es igualmente evidente que Kissinger no hubiese podido intervenir con la eficacia con que lo hizo si no hubiera encontrado una base de apoyo fundamental en Chile: los partidos de oposición que acabaron rompiendo la neutralidad de las fuerzas armadas.

La contrapartida de los errores de la UP fue la equivocada estrategia de sus opositores, especialmente de la Democracia Cristiana. El golpe militar de septiembre de 1973 destruyó, junto con el “experimento chileno”, la estructura política que sus opositores pretendían salvaguardar.

LA “VÍA CHILENA AL SOCIALISMO” EN EL CONTEXTO DE LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA

Horacio Crespo*

Situar la estrategia chilena al socialismo, en su planteamiento inicial y tal como se fue delineando en el transcurso del proceso de la Unidad Popular (UP) entre 1970 y 1973, en relación con el contexto de la izquierda latinoamericana de fines de los sesenta y comienzos de los setenta, resulta dificultoso, dado que todavía no hay una historia elaborada de esa izquierda desde una perspectiva crítica, y las diversas aproximaciones ya efectuadas han respondido en buena medida a posiciones muy ideologizadas, cuando no a justificaciones sectoriales o de grupos, y en muchos casos sólo o mayormente a prejuicios.

Por su parte una nueva historia de los antecedentes y de la constitución de la alianza de la izquierda chilena, sus definiciones programáticas, la dinámica política de cada uno de sus integrantes y del gobierno de la UP también está en ciernes, o sujeta a revisión, tanto por la aparición de fuentes inéditas, apertura de archivos y paulatina circulación de testimonios y memorias de los protagonistas e intérpretes de las distintas corrientes políticas, como principalmente por la puesta en juego de nuevas perspectivas hermenéuticas. La distancia temporal respecto de los acontecimientos, y las fundamentales connotaciones derivadas de la crisis mundial del socialismo a partir de 1989-1991 ya contribuye a ello, y en particular induce a los interesados a trabajar más como historiadores que como actores políticos, sin que esto signifique en absoluto *neu-*

* Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor en la Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad de Córdoba. Profesor-visitante en El Colegio de México. Autor de *Ciclos económicos, crisis e historia de los precios*, Guadalajara, Jalisco, Dirección General de Investigación Científica y Superación Académica, SEP, 1989, e *Historia del azúcar en México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.

tralidad. Me refiero a que el transcurrir de los años, y las mutaciones decisivas de la realidad que supuso, incita más a la investigación y a la construcción de interpretaciones comprensivas destinadas a las configuraciones de hegemonías sociales o a su respectivo cuestionamiento, que a la elaboración de argumentos aptos para la polémica política inmediata o de aportaciones para la acción práctica —como en su momento para la lucha contra la dictadura pinochetista— que constituyen la mayor parte de la ya voluminosa bibliografía consagrada al tema, lo que no le quita su valor pero sí la sitúa y califica. Nos movemos entonces, como en la mayor parte de los temas de la historia de la segunda mitad del siglo pasado, en un terreno abrupto, con pocos asideros sólidos, y extremadamente controvertible, lo que debe aconsejar mucha prudencia a la hora de las interpretaciones y conclusiones.

Para elaborar este trabajo hemos efectuado un recorte que dejamos establecido con claridad desde el inicio, y que se refleja en la bibliografía que indicamos en las notas. Trabajamos con textos muy “pegados” a los sucesos, provenientes de unos pocos actores o testigos inmediatos, de los cuales podamos extraer algunas líneas generales respecto a esa interacción de confrontaciones y equívocos que es el tema de nuestro interés: las relaciones teóricas y prácticas entre las tendencias dominantes de la izquierda latinoamericana de la época y la línea política preponderante en la UP. Incorporamos también algunas miradas y referencias acerca de las consecuencias de la irrupción del triunfo electoral del 4 de septiembre de 1970 en la discusión estratégica de la izquierda latinoamericana, y a la vez las líneas generales de balance que se ejercieron con posterioridad al golpe del 11 de septiembre de 1973, que alcanzaron también proyecciones europeas de mucha trascendencia. De todos modos, las limitaciones fácticas de este ensayo —particularmente las derivadas de la selección de las fuentes discutidas— no deben velar la perspectiva metodológica más general dentro de la cual se produce: construir un diálogo de textos contemporáneos realizados por los actores chilenos y de la izquierda latinoamericana en torno de la experiencia de la UP, destacando que constituyó un proceso complejo y valioso en la práctica política de esa izquierda, incorporado al núcleo de su tradición histórica y a partir del cual se construyó un punto de viraje decisivo que abrió paso a algunas de sus orientaciones más recientes y significativas. La asunción de la democracia como horizonte estratégico del socialismo que ha animado a buena parte de las

experiencias políticas de mayor peso de la izquierda latinoamericana en las últimas dos décadas, y que además aportó un componente contundente para la estabilización del proceso de “transición democrática” a partir de la retirada de las dictaduras, no puede ser considerado al margen de algunos elementos decisivos del balance de la UP chilena, de su desarrollo y desenlace.

La idea principal que articula este trabajo es que la llamada “vía chilena al socialismo”, tal como fue caracterizada por la corriente predominante de la UP, fue absolutamente “excéntrica” de la línea prevaliente en la izquierda revolucionaria latinoamericana en la década de los sesenta, la estrategia guevarista, entendiendo ésta como la particular interpretación política y estratégica para América Latina que el Che había extraído de la práctica exitosa de la Revolución Cubana.¹ Esta línea se apoyaba también en el contexto internacional creado por las luchas de descolonización y liberación nacional del que se consideraba parte sustantiva a Cuba revolucionaria y que había adquirido particular consistencia a través de las repercusiones de la guerra de Argelia y la de Indochina-Vietnam, esta última en su máxima intensidad en los años “calientes” de la primera oleada de guerrilla latinoamericana. Es un modelo cuya elaboración está específicamente desarrollada en los textos canónicos del Che y también en la hermenéutica construida a partir de ellos por Régis Debray antes y después de la guerrilla boliviana de 1967, aunque pueden verificarse algunas tensiones entre las posiciones de ambos, particularmente por la insistencia del Che en la participación de masas en la guerra de guerrillas como fundamento central de su éxito, mientras que en el autor francés aparece con mayor nitidez un franco, y por momentos obsesivo, tecnicismo militarista y una tendencia a la absolutización de los problemas de constitución y consolidación del “foco” guerrillero, con evidente desatención a las cuestiones de la inserción política y a las relaciones entre la guerrilla y la complejidad social derivadas de cada situación *específica* en la que actuara. Esto al menos en sus trabajos de la década de los sesenta, los más influyentes en la práctica de muchos grupos revolucionarios, aunque luego estas

¹ Ernesto Che Guevara, *La guerra de guerrillas y Guerra de guerrillas: un método*, en *Obra revolucionaria*, México, Ediciones Era, 1967, pp. 27 y ss. y 552 y ss. Cf. también “Cuba: ¿excepción histórica o vanguardia de la lucha anticolonialista?”, en *ibid.*, pp. 515 y ss.

posiciones fueron matizadas, explicadas y autocriticadas en parte en los escritos de la década siguiente.²

Debe recordarse además que esta “vía de la revolución” –al menos hasta la muerte del Che– contó con la aprobación y el apoyo explícito de la dirección de La Habana, tal como se expresara en la formación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (Olas) en agosto de 1967, que tenía el objetivo de ensanchar la base de apoyo de la guerrilla del Che. “La Olas marcó el momento en que la revolución armada obsesionó a un continente no como un fantasma, sino como una sombra real, inasible y omnipresente”: la persona viva del Che, dice el ensayista galo. El fracaso de Bolivia sumergió a sus adherentes en una profunda perplejidad y desorientación, como lo reflejó posteriormente Debray en alguno de sus siguientes trabajos: “La desaparición física del Che, brutal, precipitada, increíble, hizo el efecto de una ducha helada sobre los que vivían en la euforia de aquel momento excepcional”.³ Sin embargo, la discusión empeñada tuvo su continuidad, ya que la orientación general de la Olas fue transmitida a las nuevas guerrillas –ahora urbanas– que emergían en el horizonte latinoamericano, a Uruguay, Argentina, Brasil y de alguna manera también a Chile a través del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Según Debray, la guerrilla del Che sirvió

² Régis Debray, *Ensayos sobre América Latina*, México, Ediciones Era, 1ª edición 1969. [Incluye: “Una experiencia guerrillera”, 1964, acerca de la guerrilla encabezada por Douglas Bravo en el estado venezolano de Falcón; “El castrismo: la larga marcha de América Latina”, 1965, en el que sistematiza más ampliamente aspectos fundamentales de la estrategia del *foco* guerrillero; “América Latina: algunos problemas de estrategia revolucionaria”, publicado en *Casa de las Américas* en julio-agosto de 1965; “El papel de los intelectuales en los movimientos de liberación nacional”, 1966; el texto fundamental “¿Revolución en la revolución?” publicado como cuaderno de *Casa de las Américas* en enero de 1967 y, finalmente, documentos y declaración ante el Consejo de Guerra de Camiri, de septiembre-noviembre de 1967]. Régis Debray, *La guerrilla del Che*, México, Siglo Veintiuno Editores, 1975 [1ª edición francesa, *La guerrilla du Che*, París, Éditions du Seuil, 1974.] Régis Debray, *La crítica de las armas*, Siglo Veintiuno Editores, México, 1975. [1ª edición francesa *La critique des armes 1*, Éditions du Seuil, París, 1974]; *Las pruebas de fuego. La crítica de las armas 2*, Siglo Veintiuno Editores, México, 1975 [1ª. Edición francesa *Les épreuves du feu. La critique des armes 2*, Éditions du Seuil, París, 1974.] Régis Debray, *Conversación con Allende. ¿Logrará Chile implantar el socialismo?*, 1ª edición, México, Siglo Veintiuno Editores, 1971.

³ Cf. Olas, *Ire. Conférence de l'Organisation Latino-Américaine de Solidarité (La Havanne, août 1967)*, François Maspero, Cahiers Libres 106-107, París, 1967. Régis Debray, *La crítica...*, *op. cit.*, pp. 12-15 y 223.

de punto de pasaje para el desplazamiento del centro de gravedad revolucionario de la zona del Caribe al Cono Sur, sin que los actores lo advirtieran, por supuesto.⁴ La coyuntura del triunfo y la experiencia de la UP se inscribió precisamente en este momento de “reflujo” general del “foco” rural guevarista y de inicios de un nuevo auge guerrillero en las ciudades.

Tal estrategia armada es inasimilable por una línea como la planteada en Chile, articulada en la vigencia sin retaceos de la legalidad configurada por el ordenamiento burgués, y que se asentaba en la larga lucha de la izquierda por la implantación del movimiento sindical, por la ampliación de la presencia en el Parlamento, e incluso por una cultura política de “frente popular” particularmente arraigada en Chile desde 1938 (fecha del triunfo de la coalición encabezada por el radical Pedro Aguirre Cerda, ratificada luego en el gobierno de Juan Antonio Ríos y en la elección de Gabriel González Videla en 1946, hasta el viraje anticomunista de éste en la inmediata posguerra). Existe en todo el desarrollo interno de la experiencia de la UP una marcada tensión —que en buena medida reproducía con singular viveza el debate del contexto latinoamericano— que se mostró irresoluble, y al final trágicamente paralizante, entre el “tercermundismo” tipo tricontinental,⁵ que desconfiaba profundamente o negaba abiertamente los fundamentos de la estrategia “pacífica” de la transición al socialismo, y una experiencia inclinada a la práctica parlamentaria, la vigencia de la legalidad democrática, el Estado de derecho y los organismos republicanos y la búsqueda de la hegemonía a través de un sofisticado juego institucional (en el que se reconocía la habilidosa “muñeca política” del presidente Allende) y de alianzas, también vinculado a las contiendas electorales; es decir, en definitiva mucho más “política” en el sentido que podemos otorgarle a ese concepto como “juego de actores” en el interior de un consenso acerca de la vigencia de un sistema formalmente regulado por la Constitución y las leyes.

⁴ *Ibid.*, p. 13.

⁵ Nos referimos a la llamada “Conferencia Tricontinental” convocada por Fidel Castro en enero de 1966 en La Habana, de la que surgió la Organización para la Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina. Una reunión por separado de los delegados latinoamericanos aceptó la propuesta de Salvador Allende de crear la Olas ya mencionada, cuya primera y única reunión general se realizó también en La Habana en agosto de 1967.

Esta concepción estaba anclada esencialmente en el principal artífice de la UP, el Partido Comunista (PC), y fue compartida por el presidente Allende y sus asesores inmediatos.⁶ A pesar de esto, resulta interesante señalar que esta tensión entre diversas estrategias revolucionarias estaba presente incluso en las ideas y la práctica de Salvador Allende —muy cercano a la Revolución Cubana a lo largo de todos los años sesenta—, quien propuso la creación de la Olas en la reunión de la Tricontinental de La Habana en enero de 1966, y quien fue su presidente en 1967, a pesar de ser sospechoso de “reformista”, tal como lo recuerda François Maspero⁷ y de exhibir una experiencia esencialmente parlamentaria. Este tipo de tensiones y ambigüedades entre una y otra “vía” se refleja en muchos de sus discursos⁸ así como en las relaciones con los principales actores de la UP, aunque en definitiva su línea esencial aplicada en Chile siempre fue la definida como “vía chilena” o “vía político-institucional”, como prefiere denominarla Joan Garcés.

LOS COMUNISTAS Y LA CULTURA POLÍTICA DE IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA

Una primera cuestión es que en el difícil diálogo instaurado en el interior de la izquierda latinoamericana por la emergencia de la experiencia chilena de construir el socialismo por la vía democrática es notable la tensión generada por la presencia en ella de variantes provenientes

⁶ Para los discursos y textos más importantes del proceso chileno hemos utilizado: Salvador Allende, *Obras escogidas (1970-1973)*, edición de Patricio Quiroga, Barcelona, Crítica, 1989. Una excelente selección de textos políticos: Maurice Najman, *Le Chili est proche. Révolution et contre-révolution dans le Chili de l'Unité Populaire. Textes présentés et annotés par...*, Paris, Librairie François Maspero, Cahiers Libres 263-264, 1974. Una visión histórica articulada al proyecto de la Unidad Popular en Liliana De Riz, *Sociedad y política en Chile (de Portales a Pinochet)*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 1979. Otra historia muy útil: Simon Collier y William F. Sater, *A History of Chile, 1808-1994*, Cambridge University Press, 1996.

⁷ François Maspero, “Retour à Cuba”, *Le Monde*, 6 de julio de 1999 y ss.

⁸ Un ejemplo, entre muchos, en el “Discurso de La Habana”, pronunciado el 13 de diciembre de 1972 en la Plaza de la Revolución de esa ciudad, en el que comenta su amistad con Guevara, quien le regalara el libro *Guerra de guerrillas* con una dedicatoria en la que decía “A Salvador Allende, que por otros medios busca lo mismo”, y a lo largo del cual subraya la originalidad del camino chileno a la vez que su hermandad con el proceso revolucionario cubano y latinoamericano, cf. Salvador Allende, *Obras escogidas, op. cit.*, pp. 358-366.

de experiencias diferenciadas: la de los partidos comunistas y la de la “nueva izquierda” integrada mayoritariamente por grupos diversos influidos por el triunfo de la Revolución Cubana; además, el panorama se hizo aún más complejo por el proceso de radicalización de amplios sectores de la Iglesia católica como consecuencia de las postulaciones del Concilio Vaticano II.

La cultura política de la izquierda latinoamericana se enraizaba en una “tradición” que se remonta a fines del siglo XIX, con la constitución de la identidad proletaria, la construcción de sindicatos, la emergencia y afirmación de los procesos de lucha obrera y popular, la formalización de las tendencias políticas fundamentales (anarquismo y socialismo), una cultura política y societaria diferenciada, alimentada por construcciones ideológicas específicas elaboradas y difundidas por la prensa, los libros y las redes intelectuales de las distintas tendencias presentes en el proceso. La construcción de partidos socialistas en algunos de los países con mayor desarrollo relativo cristalizó aún más esta cultura política, que se volvió más compleja después de la Revolución Rusa de 1917. Una nueva “familia” política –los comunistas– se sumó a ella, con sus peculiaridades, virtudes, sectarismos, y pasado cierto tiempo, también tradiciones y estilos propios.

El núcleo principal, los “partidos de clase” –en el caso chileno el comunista y el socialista⁹, articulaban un complejo diseño político y orgánico, con sindicatos y organizaciones populares de “frente único” que agrupaban campesinos, mujeres, jóvenes, intelectuales y artistas, que aplicaban la línea política general partidaria y la adaptaban a los sectores específicos, en torno de la visión de los aliados, de las necesidades de la coyuntura, y casi siempre –particularmente en el caso de los comunistas– del contexto mundial y las necesidades de la Unión Soviética en dicho contexto.

⁹ El Partido Comunista fue fundado en 1922 por Luis Emilio Recabarren, como continuación del Partido Obrero Socialista que había sido creado en 1912. El Partido Socialista es sin duda parte de la tan traída y llevada *singularidad* chilena. Fue fundado en 1933 por participantes de la efímera república socialista de 1932, encabezada por Marmaduke Grove. Se proclamó revolucionario, marxista, antifascista y antiimperialista, y con una clara vocación latinoamericanista, “un partido singular” como lo califica Carlos Altamirano, que fue su secretario general en la época final del gobierno de la Unidad Popular.

La cultura política del comunismo latinoamericano se constituyó al cabo de tres etapas. La primera, fundacional, desde 1918 hasta 1928-1929, fue la de construcción inicial de esos partidos, con marcada heterogeneidad entre cada uno de ellos, signada por la diferencia de orígenes (alguno fue creado a partir de la escisión del partido socialista, siguiendo el modelo europeo, como fue el caso del Partido Comunista Argentino, o por aceptación de las condiciones de la Tercera Internacional por un partido socialista, como sucedió en Chile; otros, por agregación de grupos revolucionarios provenientes de prácticas sindicales urbanas y rurales o de sectores pequeño burgueses, particularmente estudiantes e intelectuales), por la apetencia de implantación en el proletariado y en los sectores populares y los logros obtenidos en esta dirección, y finalmente *—last but not least—* por las particularidades específicas de las sociedades y las coyunturas en las que actuaban.

En un segundo momento *—entre 1928 y 1935—* se desarrolló una marcada tendencia al dogmatismo e “izquierdismo”, bajo la orientación fijada en el VI Congreso de la Internacional Comunista, que sectarizó la práctica de los comunistas, los enajenó de muchos de sus aliados y amigos y los aisló peligrosamente, en muchos casos favoreciendo la represión. Es cierto también que en este segundo periodo, a costa de asumir posiciones muy dogmáticas y perder numerosos y calificados militantes intelectuales y sociales, recibió fuerte impulso la homogeneización en el estilo político y las formas organizativas, y se construyó la disciplina que pasaría a ser el sello distintivo de los comunistas, a través de la llamada *bolchevización*; en realidad, un eufemismo que señalaba el completo disciplinamiento de los diversos partidos comunistas a la dirección estalinista de la Internacional, a su ortodoxia y verticalismo y a los intereses de la Unión Soviética. A partir de 1935, con la asimilación en el VII Congreso de la trágica experiencia de ascenso del nazismo y las consecuencias del sectarismo de la etapa anterior, se consolidó la idea de la revolución por etapas y la noción estratégica de un amplio frente de alianzas con otras fuerzas populares y burguesas *—con el “progresismo” como articulación ideológica—* que abrió el camino para la consecución de la revolución definida como democrática, agraria y antiimperialista.

Esta concepción seguía dominando en el comunismo latinoamericano en la década de los sesenta, pero con dos variantes importantes: la primera, la aceptación cada vez más franca de la “vía pacífica” como

alternativa del camino hacia el socialismo, después de los cambios originados por la desestalinización del XX y el XXII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956 y 1961, respectivamente, y de los planteamientos de Jruschov acerca de la emulación pacífica del capitalismo como vía de consagración de la superioridad final del comunismo; la segunda variante fue la paulatina integración a una estrategia –también diseñada desde la Unión Soviética– en cuanto a privilegiar al llamado Tercer Mundo como espacio fundamental de la confrontación con el imperialismo en la escala mundial. El gran proceso de descolonización iniciado en 1947 con la independencia de la India, y proseguido cada vez más aceleradamente a través de las dos siguientes décadas –apoyado por los soviéticos–, era el marco propicio para el desarrollo de esta línea por los comunistas latinoamericanos, actores en países “dependientes” o “neocoloniales”.

Esta cultura política de izquierda, vinculada a las masas obreras y populares e insertada en ellas de manera muy heterogénea según los países, aunque originada a fines del siglo XIX, se había consolidado y desarrollado en el periodo de entreguerras, con vigorosas experiencias de conflictos reivindicativos de masas y sus formas políticas, de luchas revolucionarias y antiimperialistas (la de Sandino, la de Prestes y los comunistas brasileños, la rebelión campesina salvadoreña de 1932, la lucha contra Machado en Cuba, y la gran revolución de 1933-1934, el ciclo cardenista en México), con la reforma universitaria y la radicalización de amplios sectores de estudiantes e intelectuales, la solidaridad internacional en favor de Sacco y Vanzetti en los veinte, con la España republicana a fines de los treinta y las experiencias de desarrollo de los frentes populares antifascistas –que llegaron al poder en Francia, España y Chile– prolongados seguidamente en el apoyo a los soviéticos y a la gran coalición antifascista de la segunda guerra. Los movimientos por la paz, de la inmediata segunda posguerra, en el marco de los inicios de la Guerra Fría dieron continuidad a estos movimientos, marcados sin embargo por la escisión entre la socialdemocracia europea (ya en franco alejamiento del marxismo en los países más avanzados: Alemania, Italia, Francia) e integrada al “mundo libre” hegemónico por Estados Unidos, y el comunismo, fuertemente encadenado a la Unión Soviética.

A partir del fin de la segunda gran guerra aparecieron nuevos actores de creciente influencia y significación en la escena política mundial: los movimientos de liberación nacional. Se instaló con enorme fuerza

el proceso de lucha antiimperialista y de liquidación de los grandes imperios coloniales europeos, dentro del marco de la “Guerra Fría” entre las dos superpotencias y sus respectivos bloques de aliados. La independencia de la India en 1947, la de Indonesia y el triunfo de la Revolución China en 1949, la derrota de Francia por los revolucionarios en la Indochina francesa en 1954, el estallido de la guerra de independencia en Argelia ese mismo año, junto con las revoluciones árabes en Egipto de 1952 y en Irak de 1958, la constitución del Movimiento de Países no Alineados, la lucha de guerrillas en las colonias portuguesas en África (Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea), la independencia de numerosos países africanos de la sujeción británica a fines de los cincuenta, la independencia del Congo en 1960, fueron hitos esenciales del gran movimiento de “liberación” del cada vez más identificado como Tercer Mundo.

En el movimiento obrero europeo habían cristalizado en la posguerra las grandes diferencias entre las corrientes socialdemócrata y la comunista, originadas en las disputas entre revisionistas, centristas e izquierdistas en el seno de los partidos de la II Internacional, y que crecieron por las disidencias inmediatamente posteriores a la Revolución de Octubre y la Revolución Alemana de 1919, la fundación de la III Internacional y la abierta hostilidad entre socialistas y comunistas a fines de los veinte, incentivada por la línea sectaria del llamado “tercer periodo” de la Komintern que definía como enemigo principal a los “socialfascistas”; es decir, a los socialdemócratas.¹⁰ Los realineamientos producidos por la Guerra Fría barrieron con los grandes acuerdos logrados por los frentes populares en la segunda mitad de la década de los treinta y en todo el periodo de la lucha antifascista.

También se produjo la desestalinización a partir del XX y el XXII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (1956 y 1961), por cierto precedida por la disidencia de la Yugoslavia de Tito en 1948 que tanta influencia tendría en el proceso mundial de no alineamiento, la abierta ruptura chino-soviética desde 1963 y las disputas entre ambos

¹⁰ En los análisis historiográficos de este periodo es un tópico la correcta calificación de “sectaria” e “izquierdista” respecto de la política comunista. Es menos frecuente, sin embargo, la alusión al otro componente de este binomio fatal que condujo al triunfo del nazismo en Alemania, de lejos la consecuencia más trascendental de estas orientaciones: las posiciones anticomunistas y muchas veces reaccionarias o de connivencia con la derecha que sostenía gran parte de la socialdemocracia alemana y europea en esta coyuntura.

colosos comunistas por el predominio sobre los procesos de descolonización y las luchas antiimperialistas. Esto significó que a partir de mediados de los sesenta aparecieran en América Latina formaciones políticas que reivindicaban el “marxismo-leninismo” frente al “revisionismo soviético”, constituyendo partidos comunistas disidentes con diverso arraigo, particularmente en Argentina, Brasil y Perú (uno de esos desprendimientos fue el origen de Sendero Luminoso en el país andino). En Argentina surgió el Partido Comunista Revolucionario como una de esas expresiones (la otra fue Vanguardia Comunista), que articuló algunas experiencias obreras *clasistas* de fuerte impacto, contemporáneas del proceso chileno.¹¹ En Chile, la corriente maoísta tuvo poca o ninguna significación orgánica, pero algunos de sus supuestos influyeron transversalmente en las organizaciones de la izquierda “revolucionaria” opuesta al PC, y también en la izquierda cristiana.¹²

La Iglesia católica, a su vez, había emprendido el difícil tránsito de su *aggiornamento* con el mundo moderno a partir del pontificado de Juan XXIII (1958-1963) y el Concilio Vaticano II, expresado en América Latina a través de la creciente sensibilidad por los problemas sociales, la formación de grupos esencialmente de jóvenes con serio compromiso con las transformaciones y la acción revolucionaria armada, y sintetizado en la experiencia del cura colombiano Camilo Torres, el fortalecimiento del movimiento “hacia los pobres” y las elaboraciones intelectuales que conducirían a la formulación de la “teología de la liberación”. Esto repercutió intensamente en Chile, en el partido gobernante entre 1964 y 1970, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y fue decisivo en la articulación de la coyuntura electoral de 1970 con la candidatura de “izquierda” de Radomiro Tomic por esa formación política. Los avatares de la izquierda cristiana en Chile en el periodo son

¹¹ La mención fundamenta la discusión posible de un texto importante acerca de la experiencia de la Unidad Popular, orientado por la crítica al *revisionismo* del Partido Comunista de Chile y a la Unión Soviética como principales responsables de la derrota, de evidente inspiración maoísta: Mario Toer, *La “vía chilena”. Un balance necesario*, Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1974. Algunas de sus posiciones luego reaparecerían en un libro fundamental entre los balances políticos de la experiencia chilena: Carlos Altamirano, *Dialéctica de una derrota*, México, Siglo Veintiuno Editores, 1977.

¹² Alain Labrousse, *El experimento chileno. ¿Reformismo o revolución?*, Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1973, en particular el capítulo III, dedicado al Partido Comunista Revolucionario chileno de tendencia maoísta. [La primera edición del trabajo de Labrousse: *L'expérience chilienne*, París, Éditions du Seuil, 1972.]

fundamentales en dos direcciones: la primera es la presencia de grupos de esa procedencia en la UP (la Izquierda Cristiana, integrada por algunos diputados y dirigentes de la juventud, separada de la democracia cristiana en julio de 1971 e incorporada a fines de ese año a la coalición de gobierno) que de esa manera participaba en la radicalización católica latinoamericana que hemos mencionado; pero por otra parte la incapacidad de otros sectores de esa izquierda en el partido para enfrentar la línea conservadora del ex presidente Frei Montalva —apoyada económicamente por los subsidios estadounidenses, que controló cada vez más la dirección, hasta que desplazó completamente al sector progresista de Fuentealba—, o para desgajar grupos consistentes e importantes electoralmente y confluir en la UP gobernante (a pesar de algunos logros en esa dirección) fue esencial en el fracaso final de la estrategia política dominante en la conducción del gobierno popular.

LA REVOLUCIÓN CUBANA Y LA EMERGENCIA DEL FOQUISMO EN LA DÉCADA DE 1960

El triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 y su rápida radicalización en los siguientes dos años, hasta la asunción de su carácter socialista y de la ideología marxista-leninista, supuso un doble efecto sobre la izquierda de América Latina. El primero de ellos fue el tema de la *actualidad* de la revolución socialista y su alcance continental. Hasta ese momento, y desde los años treinta, la concepción dominante en la principal y más orgánica fuerza de izquierda en América Latina, los partidos comunistas, había sido que la revolución en esta parte del mundo tenía carácter democrático, agrario y antiimperialista; es decir, sería el resultado de la constitución de un amplio frente social y político que accediera al poder y consumara, dentro de los marcos nacionales, las tareas históricas que la burguesía había dejado inconclusas; es decir, sujeto a las respectivas condiciones de desarrollo histórico de cada país. Luego de este proceso —que no se vislumbraba “rápido”— la paulatina hegemonía que el proletariado lograra en ese frente permitiría el paso al socialismo. Es lo que los adversarios de la ortodoxia comunista denominaban críticamente el proceso de revolución por “etapas”. La unidad latinoamericana de la lucha estaba dada de manera genérica, identificando rasgos comunes, tanto históricos como sociales, el enemigo es-

tadunidense y un horizonte ideológico cultural mancomunado sobre la base de algunos componentes sólidos del “progresismo” proveniente de las filas de la reforma universitaria. Ninguna estrategia en común se elaboraba sobre esta base, salvo las tareas solidarias de denuncia y ayuda a los procesos concretos de cada país.

El segundo elemento fue el hecho de que el camino de la Revolución Cubana no cumplió los requisitos postulados por la teoría: no había sido efectuada bajo la dirección del partido comunista; es más, buena parte del trayecto revolucionario había sido desarrollado bajo la “crítica” de ese partido —denominado Partido Socialista Popular desde la década de 1940— que caracterizaba de *aventurera* y *pequeño-burguesa* la estrategia castrista en Sierra Maestra. Los caminos inéditos de lucha armada de la Revolución Cubana a fines de 1950 eran ajenos a la estrategia y la práctica política habitual de la izquierda latinoamericana protagonizada o influida por los partidos comunistas, al menos desde la mitad de la década de 1930.¹³

Los elementos originales de la Revolución Cubana en torno del “carácter socialista de la revolución” y su “dimensión estratégica continental”; las consecuencias que estas definiciones tuvieron acerca de la identificación de sus protagonistas sociales, el tipo de organización revolucionaria y la política de alianzas, y respecto de la “vía revolucionaria” —contraponiendo rígidamente la “vía pacífica” y la “vía armada”— configuraron rápidamente una corriente política continental que se afirmó en dicho modelo, se lanzó a practicarlo en los primeros años de la década de los sesenta y efectuó una muy fuerte crítica a la cultura política y la estrategia de los partidos comunistas. La distancia de la radicalizada “nueva izquierda” continental, en la que la orientación procubana jugaba un papel relevante, del comunismo de alineación prosoviética fue creciente a lo largo de toda la década, a pesar de la trabajosa fusión de los revolucionarios castristas con el Partido Socialista Popular que en principio predeciría lo contrario. La crítica se concentraba sobre el “reformismo” de su línea, la tendencia a aceptar los proyectos reformistas burgueses, su incapacidad para dirigir realmente al proletariado, el latinoamericanismo retórico y el “burocratismo” organizativo, y la “ortodoxia” ideológica que le impedían asumir los vertiginosos cambios del ahora.

¹³ Para el tema de las diferencias y dificultades existentes entre el comunismo tradicional y el castrismo en Cuba durante la década de 1960 cf. K. S. Karol, *Los guerrilleros en el poder*, Barcelona, Seix Barral, Biblioteca Breve, 1972.

A su vez, los comunistas reaccionaron criticando el “aventurerismo” pequeño burgués, el “infantilismo” de izquierda y el “militarismo” de sus antagonistas. La distancia y fricciones de sus partidos respecto de la Revolución Cubana y las organizaciones latinoamericanas de “obediencia” cubana se profundizaron, ocasionando enfrentamientos como los de fines de la década de 1960 entre el PC chileno y la dirección de La Habana.¹⁴ Las críticas “reservadas” de los dirigentes comunistas chilenos a La Habana eran *vox populi*, y una inflexión en el discurso de Luis Corvalán durante la reunión de los partidos comunistas en Moscú en junio de 1969 fue más que reveladora: empujados por el deseo de “unidad comunista” orientado por los soviéticos que animaba la reunión —caracterizada por el matizado rechazo al maoísmo—, el secretario general de los comunistas chilenos afirmó que deseaba estrechar lazos con todos los comunistas de América Latina, y “desde luego” con el Partido Comunista de Cuba.¹⁵

Los materiales documentales básicos y más ricos para analizar esta corriente y su situación en el pensamiento y la acción revolucionaria de América Latina son la obra del *Che* Guevara y los trabajos de Régis Debray. Estos últimos agrupados en tres etapas: 1. los escritos de la década de 1960, reunidos en el volumen *Ensayos latinoamericanos*; 2. los balances de la guerrilla: de la acción del Che en Bolivia y *La crítica de las armas*, una revisión de la acción guerrillera en su teoría y en su práctica, incluyendo una discusión con Louis Althusser a propósito de *¿Revolución en la revolución?*, y un examen de las

¹⁴ La cuestión más visible se desató por el virulento ataque de cuatro escritores cubanos, Roberto Fernández Retamar, Edmundo Desnoes, Lisandro Otero y Ambrosio Fornet a Pablo Neruda por las “claudicaciones” del poeta comunista: el aceptar una invitación del Pen Club de Nueva York y la condecoración en Lima por el presidente Fernando Belaúnde Terry. El motivo real: los ataques poéticos al “culto de la personalidad” de Fidel Castro hechos por Neruda, y más de fondo las profundas divergencias de línea política entre el castrismo y el comunismo ortodoxo, que a fines de los sesenta llegaban al paroxismo. En La Habana se entendía que el Partido Comunista chileno era el exponente más acabado de ese reformismo decadente.

¹⁵ *Conferencia Internacional de los partidos comunistas y obreros. Moscú 1969*, Praga, Editorial Paz y Socialismo, 1969, p. 291. A esta conferencia los cubanos asistieron en carácter de “observadores” poniendo sus distancias, y los partidos de Vietnam, Corea y China no asistieron. Rodney Arismendi, secretario general de los comunistas uruguayos, fue la gran figura y planteó una línea que matizaba y flexibilizaba en mucho las viejas posiciones de los comunistas, mostrando gran permeabilidad a los planteamientos cubanos, aunque también manteniendo su distancia con el núcleo “duro” de las posiciones castristas.

experiencias de la lucha armada en Venezuela (1962-1968), de los Tupamaros en Uruguay (1971-1972), y de Guatemala desde la caída de Arbenz a 1970. Ambos libros fueron publicados en francés en 1974 y en castellano el año siguiente. En este periodo Debray produjo un documento importante respecto de la experiencia de la UP: una larga entrevista con Salvador Allende realizada en enero de 1971, y un balance de la experiencia de Chile incluido en *La crítica de las armas*, y 3. las reflexiones irónico-críticas posteriores, en particular en *Alabados sean nuestro señores*.

En rigor, la obra de Régis Debray en el periodo de la elaboración de la estrategia revolucionaria *foquista* es inescindible.¹⁶ El punto esencial de la teoría de Debray se sitúa en que América Latina está madura para la revolución y que el sistema de opresión capitalista sólo se sostiene en la región por la existencia de los gobiernos oligárquicos apoyados por las fuerzas armadas y el imperialismo estadounidense. Por lo tanto, las cuestiones cardinales de la estrategia revolucionaria son dos: cómo destruir a las fuerzas armadas y de qué manera movilizar al pueblo en la lucha por la toma del poder y la construcción del socialismo.

Para responder a estas cuestiones Debray propone lo que a su juicio constituyó la esencia de la experiencia revolucionaria cubana: el establecimiento y desarrollo sin desmayos de un “foco” guerrillero que cumpla la tarea militar y las “empresas políticas” decisivas del proceso revolucionario, tales como la emergencia de una dirección y vanguardia experimentada surgida del propio proceso de lucha, la derrota de las fuerzas armadas y la politización de las masas que pone en marcha la huelga general o la insurrección urbana que define finalmente la toma del poder.

Huberman y Sweezy señalaron que el elemento decisivo en esta teoría para la época en que fue elaborada era la “negación de toda la doctrina de la legitimidad revolucionaria”, pilar de la ortodoxia de los

¹⁶ Quienes primero alertaron sobre la necesidad de un tratamiento conjunto de estos materiales fueron Robin Blackburn y Perry Anderson, “El marxismo de Régis Debray”, en Leo Huberman y otros, *Debray y la revolución latinoamericana*, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1969, p. 71. Para estos autores, especialmente “El castrismo: la larga marcha de América Latina” y “América Latina: algunos problemas de estrategia revolucionaria” constituyen “las premisas teórico-políticas del llamado a las armas” de “¿Revolución en la revolución?”, el más conocido de los escritos mencionados. La consideración de conjunto, para Blackburn y Anderson, elimina los equívocos que confundieron a muchos críticos.

partidos comunistas; la revolución en Cuba fue hecha por “no comunistas” y fuera de la doctrina marxista-leninista de la toma del poder.¹⁷ El mismo Debray, en un texto de 1974, se referirá a este punto, a este verdadero “escándalo” teórico y político, comentando la personalidad y las ideas del Che:

Por su temperamento y sus posiciones teóricas, por su experiencia misma, el Che era el hombre designado para responder a este reto. Durante toda su vida había estado en busca de una solución práctica a este problema “teóricamente” insoluble. ¿No había sido testigo y protagonista de ese éxito histórico y de esa “aberración teórica” que había sido, a los ojos de un marxismo mecanizado, la Revolución Cubana? ¿Qué es la génesis del socialismo cubano sino una revolución realizada “en contra del sentido común”, “a contrapelo”, reto a todas las leyes admitidas? Una revolución proletaria sin proletariado de industria desarrollado; que surge sin relación alguna con una deflagración mundial; garantizada y efectuada por un ejército rebelde compuesto de campesinos y dirigido por “intelectuales pequeño burgueses”; que forja a posteriori el partido del que “teóricamente” hubiera debido ser producto, adoptando la ideología científica que respondía a sus necesidades después de haber satisfecho sus necesidades históricas y dándose el nombre de “socialista” cuando lo era ya de hecho: ¿no es todo esto una muy buena inversión de los factores y de las fases de una evolución “lógica”?¹⁸

Los blancos obvios de esta “anomalía” fueron los partidos comunistas latinoamericanos —en primer lugar el Partido Socialista Popular cubano— incapaces de hacer la revolución en sus propios países, y cuestionados por su pacifismo y etapismo; o sea, tanto por sus definiciones acerca de la vía como del carácter de la revolución. No se trata de discutir los errores y las simplificaciones de Debray, señalados muchas veces polémicamente por sus contemporáneos,¹⁹ sino de enumerar los elementos centrales de su teoría y las consecuencias que aparejaba.

¹⁷ Leo Huberman y Paul Sweezy, “Debray: su fuerza y su debilidad”, en Leo Huberman y otros, *Debray y la revolución latinoamericana*, op. cit., pp. 9-13.

¹⁸ Régis Debray, *La crítica de las armas*, op. cit., p. 226.

¹⁹ Los estudios editados originalmente por *Monthly Review* discutiendo las posiciones de Debray fueron publicados en México en la edición ya citada: *Debray y la revolución latinoamericana*. Son fundada y particularmente críticos: Cléa Silva, “Los errores de la teoría del ‘foco’” y Simón Torres y Julio Aronde, “Debray y la experiencia cubana”.

LA REFLEXIÓN SOBRE LA SINGULARIDAD CHILENA
Y SUS ALCANCES EN LA ESTRATEGIA AL SOCIALISMO

Joan Garcés es un autor central para la indagación acerca de los problemas de la estrategia y la táctica del gobierno de la UP chilena, donde se desempeñó como asesor político personal del presidente Allende.²⁰ Al respecto es oportuno registrar el juicio de Debray, uno de los principales antagonistas en el debate generado por la experiencia chilena:

Hay que referirse a los análisis de Joan Garcés cuyo inmenso mérito es haber tratado de presentar, a medida que se iba dando y en el corazón mismo de una práctica gubernamental cotidiana, sus títulos teóricos a la realidad. A él se debe la argumentación teórica subyacente bajo esta ambición. El análisis titulado *Vía insurreccional y vía política: dos tácticas*, como otros del mismo autor, suministra, en relación a aquel Manifiesto [Debray se refiere así al discurso pronunciado por Allende ante el Congreso Pleno el 21 de mayo de 1971, que para él sintetiza el objetivo del proceso: la transición “democrática, libertaria y pluralista” al socialismo, un “segundo modelo de transición a la sociedad socialista”, en palabras del propio Allende] lo que el concepto es a la imagen.²¹

Un elemento básico de su indagación, protagonizando el proceso político como señaló Debray, fue el de definir en términos del pensamiento de izquierda la “originalidad” de la llamada “vía chilena al

²⁰ El 11 de septiembre de 1973 Joan Garcés permaneció junto al presidente de Chile en el bombardeado Palacio de la Moneda, hasta que el propio Allende le ordenó salir afirmando que “alguien tiene que contar lo que aquí ha pasado, y sólo usted puede hacerlo”, cf. Joan E. Garcés, *Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política*, Barcelona, Ariel, 1976, p. 395 [1ª ed. francesa, París, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1976]. Otros libros consultados de Garcés para este trabajo: *Chile: el camino político hacia el socialismo*, Barcelona, Ariel, 1972, con trabajos que van desde octubre de 1970 a diciembre de 1971; *El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende*, México, Siglo Veintiuno Editores, 1974, que reúne escritos redactados entre enero y diciembre de 1972 y un epílogo, prólogo de noviembre de 1973. Finalmente, cabe consignar el artículo “El modelo de participación de los trabajadores en el gobierno popular. Algunos factores condicionantes”, en el volumen colectivo *La vía chilena al socialismo*, México, Siglo Veintiuno Editores, 1973, pp. 189-197.

²¹ Régis Debray, *La crítica...*, op. cit., p. 249. El artículo de Garcés en *El Estado y...*, op. cit., pp. 225-277; el discurso mencionado de Salvador Allende en *Obras escogidas*, op. cit., pp. 77-102.

socialismo”, considerada tanto por él como por Allende como inaugural de otra posibilidad de transitar el camino de la revolución, distinta de la trazada por el camino bolchevique clásico de insurrección, guerra civil y dictadura del proletariado y las diversas variantes de ese modelo. También se distancia de las experiencias de la guerra de liberación nacional, tanto del modelo chino como de la gama de procesos que van desde Yugoslavia a Argelia e Indochina, que por cierto incluye —aunque nunca se plantea de manera transparente— la propia Revolución Cubana. Debemos subrayar debidamente el hecho de que en su concepción la “vía político-institucional” no es considerada reformista ni socialdemócrata: el objetivo es la transformación “revolucionaria” de la sociedad chilena, y esto es machaconamente predicado en todas sus intervenciones por el presidente Allende. La discusión es sostenida siempre en el campo de la revolución, y éste es el soporte básico de la interlocución entre Debray y Allende, por ejemplo, y de los debates posteriores a septiembre de 1973.

¿Qué es la *vía chilena* al socialismo? ¿Cuál es su peculiaridad distintiva? La primera cuestión es destacar que se trataba de un poder “civil” a cargo de una de las ramas del Estado, el Ejecutivo, enmarcado en un régimen legal democrático. Demos la palabra a Joan Garcés:

[...] la meta y el camino que intentó seguir el pueblo protagonista de este libro, la denominada “vía chilena al socialismo”, reunía un síndrome de elementos definitorios —políticos, sociales, económicos, militares—, que la convierten en la experiencia más moderna hasta la fecha [julio de 1975] de revolución anticapitalista, conteniendo los gérmenes de una modalidad de transición al socialismo nunca antes desarrollados hasta un nivel comparable: plena vigencia de la democracia como forma de vida en el seno de los sectores y organizaciones integrantes del bloque social popular, reconocimiento de derechos políticos y civiles iguales a la oposición, respecto [*sic*, debe decir *respeto*] del Estado de derecho como norma de regulación de la vida colectiva, rechazo de la guerra civil como vía de solución de las contradicciones sociales, libre ejercicio de las libertades de organización, conciencia y expresión sin más restricciones que las contempladas en un régimen legal fundamentado en la voluntad nacional manifestada a través del sufragio universal, libre, secreto y con pluralidad de partidos, etcétera.²²

²² Joan E. Garcés, *Allende y ..., op. cit.*, pp. 5-6.

Los condicionantes específicos de esta propuesta fueron claramente planteados por el autor: debe aplicarse en el marco de una sociedad políticamente desarrollada, heredera de una revolución de carácter liberal; con prácticas y valores democráticos arraigados, generalizados e institucionalizados; con una estructura económica ligada históricamente al capitalismo industrial y a sus conflictos sociales específicos, e integrada al sistema capitalista internacional. Así la presencia y la realización histórica de la modernidad burguesa es requisito para su posibilidad de realización. Establecida en términos de hegemonía social, necesariamente incluye un prolongado periodo preparatorio anterior a la toma del poder por el bloque obrero-popular y también un largo periodo posterior de paulatinas transformaciones y adecuaciones hasta el pleno afianzamiento de la nueva hegemonía en la sociedad. Está presente un basamento evolutivo en todo el planteamiento, subordinado al presupuesto de que la crisis estructural de continuidad del sistema capitalista no haya sido mediada por una guerra, ya sea civil o internacional, que de hacerse presente transforma toda la situación estratégica e invalida la posibilidad de aplicación de esta “vía” política institucional. Pero también está acotada temporalmente al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, condicionado por la estructura bipolar de poder internacional y la presencia de la tecnología termonuclear en la confrontación entre los dos sistemas sociales antagónicos, además de crecientes y casi insoportables costos en pérdidas de vidas en los escenarios bélicos contemporáneos.²³

Garcés está atento a la legitimidad y validación de sus elaboraciones respecto de la tradición teórica y política del movimiento socialista internacional. El debate acerca de la utilización de los instrumentos de la democracia burguesa y de su aparato de Estado para la transformación socialista de la sociedad es de vieja data. En su particular lectura de la tradición marxista, Garcés actualiza la polémica entre Jean Jaurès y Jules Guesde en el viejo partido socialista francés de 1900. Jaurès sustentaba la perspectiva de un gradualismo que permitiese ir controlando los organismos de representación del Estado burgués a través de los éxitos electorales socialistas resultantes de la aplicación del sufragio universal. Guesde, en cambio, sostenía que la revolución sería el resultado de un choque frontal, “clase contra clase”, y que el involucrar al proletariado

²³ *Ibid.*, pp. 9, y 27-28.

en el juego político burgués —las elecciones, fundamentalmente— significaba integrar a los obreros a la política del capitalismo; por supuesto, retoma este debate en la controversia decisiva inmediatamente posterior a la revolución bolchevique en Rusia, que significó una escisión duradera y trascendente en el movimiento socialista y obrero. A la vez, la idea del derrocamiento del capitalismo a partir de la exacerbación de sus contradicciones y del estallido y desarrollo de una guerra mundial que lo agotaría está presente en las reflexiones de Marx y Engels y es continuada, ampliada y practicada por Lenin, quien también acuñó la posibilidad “temporaria” de construir el socialismo en un país o un número pequeño de países aunque el sistema capitalista continúe existiendo.

Garcés subraya el hecho de que cada elección de una vía hacia el socialismo supone la exclusión de la otra, criticando fuertemente los planteos mixtos, de combinación de lucha legal e ilegal, al igual que la idea de huelga general revolucionaria sin un ejército popular que la sustente, que sólo introducen confusión, dispersión y ayudan a los planteamientos de la contrarrevolución al favorecer la creación de las condiciones de subversión e ilegalidad en las que prosperan (en el caso de un gobierno popular y las prácticas ilegales de los grupos de “ultraizquierda”) o al conducir al proletariado a enfrentamientos sin salida, salvo la derrota sangrienta. La vía insurreccional necesariamente va acompañada de la perspectiva de guerra civil y de su internacionalización, y de la instauración de la dictadura como instrumento de defensa, construcción y consolidación del socialismo.

Audazmente concibe la vía insurreccional como el planteamiento revolucionario en sociedades poco evolucionadas, mientras que el desarrollo económico y la complejidad social facilitan la posibilidad de aplicar la vía política institucional, por la madurez de las fuerzas sociales actuantes y la capacidad del proletariado para implantar su hegemonía a través del ejercicio democrático de las mayorías electorales. La osadía de la concepción radica en que vuelve a instalar la idea del paso al socialismo como resultado de la madurez de la sociedad capitalista, tal como había sido concebido en los núcleos dominantes de la Segunda Internacional y está presente en amplias zonas teóricas y políticas de la obra de Marx y Engels, apartándose claramente de la tradición insurreccional leninista y de los modelos de “lucha popular prolongada” en sus muy diversas variantes, particularmente de las luchas anticoloniales y de liberación nacional que constituían la ortodoxia de la tradición

que se autodenominaba “revolucionaria”. Sin duda existen elementos teóricos abundantes en la obra de los “clásicos” –retomando la denominación usual en la época– donde basar la posibilidad del tránsito pacífico al socialismo en esas condiciones, pero el segundo componente de audacia y originalidad de Garcés es el esfuerzo por demostrar que Chile en 1970 se encontraba dentro de los parámetros que lo hacían posible, el punto central de la discusión con la izquierda revolucionaria latinoamericana del momento.

Precisamente la lectura de la especificidad de la historia de Chile marcada por una notable madurez de sus clases sociales, una larga práctica de estabilidad institucional que la diferenciaba de la experiencia general de América Latina, la disciplina constitucionalista de sus fuerzas armadas y la conformación de su izquierda en un prolongado proceso de arraigo en la clase obrera y los sectores populares fue un argumento ampliamente sostenido por los defensores de la “vía chilena” al socialismo, en particular por Allende. Incluso Debray mismo es consciente de este hecho, y en parte se deja envolver en esa lógica durante la entrevista de comienzos de 1971 con el presidente, tal como se expresa en la introducción a la edición de la conversación:

Sería difícil encontrar en otro país de esta parte del mundo una burguesía más precozmente constituida, segura de ella misma y expansionista, así como hallar un movimiento obrero tan sólidamente instalado, desde comienzos de siglo, en sus posiciones de clase [...] Cualquiera que aceptara mirar a vuelo de pájaro el pasado chileno –génesis y formación del Chile contemporáneo– [...] vería destacarse con bastante nitidez sobre el fondo latinoamericano esta franja de tierra geográficamente loca pero históricamente razonable, porque allí las instituciones de la democracia formal y las formas avanzadas del movimiento obrero han tenido un desarrollo tan fuerte las unas como las otras. Allí, proletariado y burguesía han conseguido juntos un nivel de conciencia más elevado que en otras partes. Es en la combinación de estos dos elementos, a la vez solidarios y antagonistas, que se podría buscar el rasgo distintivo, la originalidad de la historia chilena, algo así como la tonalidad general, la atmósfera, que le da su color propio a esta larga y dura lucha de clases.²⁴

²⁴ Régis Debray, *Conversación con Allende...*, op. cit., pp. 15 y 17.

LA MODERNIDAD DE LOS ACTORES, PRESENTE
COMO MARCA SINGULAR DE LA HISTORIA CHILENA

Como toda interpretación, la de la peculiaridad democrática y la madurez social de Chile se fundamenta sobre la selección de ciertos hechos y procesos considerados decisivos, y la omisión, relativización o disimulo de otros que podrían ser vinculados a una lectura alternativa. La temprana estabilización del Estado nacional con Portales, la asociación estrecha de políticos y militares conservadores en ese proceso y la homogeneidad política y social de la clase dominante chilena fue lo que hizo innecesaria la irrupción de discontinuidades institucionales tan frecuentes en otros países de América Latina, salvo algunos roces en la época de Montt a mediados del siglo XIX, la guerra civil en 1891 y los disturbios producidos en un corto periodo de fines de la década de 1920 y comienzos de la de 1930. En esta homogeneidad social dominante y falta de desafíos riesgosos a su permanencia debe también inscribirse la casi inexistencia de una experiencia populista —si soslayamos los desteñidos amagos de Ibáñez—, la administración ordenada de la irrupción de las clases medias a la vida política a través de Alessandri en los veinte, del partido radical a fines de los treinta y los cuarenta y de la democracia cristiana en los sesenta, y aunque siempre con un manto de discreción —especialmente cuando se elogiaba la lealtad militar a las instituciones con un sentido político muy inmediato—, la ferocidad del ejército y la armada en la represión de algunas sublevaciones y grandes huelgas obreras y populares que culminaron en verdaderas masacres. El mismo Debray señala esta contradicción y la verdadera singularidad de Chile, que es la articulación del mito de identidad pacifista y armónico:

No es que la historia chilena se asemeje a ese suave idilio democrático con el cual se la confunde a menudo. [El autor reseña las guerras civiles del XIX y las represiones brutales del XX.] Queda por explicar entonces cómo la imagen de un Chile pacífico y liberal ha podido imponerse en el interior mismo del país y ser recibida como indiscutible por la mayoría —coerción burguesa traspuesta a mito persuasivo—. Queda por explicar cómo la violencia esporádica y endémica de los enfrentamientos de clase jamás ha llegado a alterar seriamente la estabilidad de las instituciones representativas, o más todavía, cómo Chile ha podido durante tan largo tiempo ahorrarse esas interminables dictaduras militares que fueron y

siguen siendo en otras partes la regla; sin cesar, sin embargo, de seguir siendo un país sometido a una oligarquía voraz.²⁵

La cuestión adquiere todo su relieve cuando se la coloca en el marco del proceso de construcción de la hegemonía oligárquica en Chile, y también contiene derivaciones de mucho interés en tanto que este mito político también funciona en los presupuestos de la conformación de la teoría política del presidente Allende y las certidumbres que guiaron su práctica, hasta en los momentos finales frente a la materialización del golpe de Estado que ocasionaría la clausura de la experiencia socialista, su propia muerte y también la recusación definitiva de esos postulados que tanto apuntalaron su estrategia y condicionaban sus tácticas. Nuevamente Debray ejercita su capacidad analítica:

Más allá de sus alteraciones momentáneas –las ha tenido, pero breves–, la democracia liberal burguesa que ha marcado hasta hoy día [1971] con su sello todo el tejido social chileno, ha demostrado una excepcional capacidad de amortiguamiento, de recuperación y de conciliación. Ella ha proporcionado y continúa proporcionando la ideología dominante, el legalismo y la juricidad, que permanecen en el ambiente; las estructuras políticas de encauzamiento, es decir, un cuadro institucional estable; y todo un sistema de representaciones vividas al nivel más prosaico, mitos de la Libertad y de la Ley con mayúscula difundidos hasta en el comportamiento de los explotados. No desaparecerá con un simple guiño, porque incluso si el estado actual fuese derribado mañana, toda la “sociedad civil” está impregnada de ella. Chile, en este sentido, pertenece a esas sociedades “occidentales” de las que hablaba Gramsci, en las cuales, detrás de la fortaleza principal del Estado, que puede ser siempre tomado por un golpe de mano afortunado, se escalona en profundidad toda una red de trincheras, de fortines y de bastiones cuya conquista no puede ser tan simple.²⁶

Y esto no puede explicarse por tradiciones o *carácter nacional* ni tampoco por un desarrollo económico privilegiado. La disociación entre una base económica, en 1970 relativamente retardada en compa-

²⁵ *Ibid.*, p. 18.

²⁶ *Ibid.*, p. 19. La experiencia posterior a la dictadura pinochetista confirma esta anticipación. ¡Curiosa dinámica de olvidos, complicidades, disimulos y amortiguaciones! La experiencia española del cuarto de siglo posterior al pacto de la Moncloa resulta similar. En ambos casos la “teoría de la transición a la democracia” fue el puente de plata articulador de los silencios oportunos, las impunidades salvaguardadas y los acuerdos de distracción.

ración con la de los grandes países vecinos, y una organización política sofisticada constituye justamente el núcleo de la especificidad chilena, que rápidamente sería puesto a prueba y finalmente se resolvería con la dinámica impuesta por la experiencia de lucha de clases entre 1970 y 1973. Todo un abanico de factores de la conformación histórica de Chile, dice Debray, puede explicar esta constante de la identidad ideológica del país andino. Los conflictos de influencias entre el imperialismo británico y el estadounidense, y posteriormente el alemán, que se neutralizan mutuamente; el alejamiento geográfico de los centros mundiales de poder; el crecimiento económico precoz en el siglo XIX que contrasta con la larga depresión de los otros países sudamericanos; el desplazamiento armonioso de una economía colonial mercantilista, agroexportadora, a una economía extractiva, de la plata, al salitre y al cobre, base sobre la que pudo construirse una industria liviana y de transformación.

La elasticidad de esta estructura económica y el carácter progresivo de su ampliación han favorecido así, por amalgamas y absorciones sucesivas, los compromisos políticos entre clases y las fracciones de las clases dominantes, mediante una lenta asimilación de los intereses respectivos de los grupos latifundistas, mineros, financieros e industriales.²⁷

Los otros componentes decisivos en la conformación de esta singular hegemonía de la clase dominante chilena fueron el carácter nacional del gran latifundio, el factor de que el capitalismo moderno de bancos e industria fuese originalmente chileno y la creación rápida de un potente instrumento militar con fines expansionistas, aplicado especialmente en la guerra del Pacífico. Todo este conjunto explica, para Debray, un elemento decisivo en las particularidades específicas de la lucha de clases en Chile:

[...] por qué la clase dominante chilena pudo constituirse desde un periodo de formación como “clase nacional” susceptible de hacer pasar sus intereses particulares por los intereses de la nación entera a los ojos de las clases subalternas, por qué ella pudo dar a sus formas de dominación política una legitimidad moral, una solidez, una arrogancia por largo tiempo indiscutida.²⁸

²⁷ *Ibid.*, p. 21. Debray ejemplifica con la historia del clan Edwards, y con la supe-
ración relativamente benigna de los efectos de las luchas entre liberales y conservadores
la “cuestión religiosa”, y de la guerra civil de 1891 contra –según el autor– el intento
industrialista de Balmaceda.

²⁸ *Ibid.*, p. 22.

Debray finaliza su recorrido explicativo y a la vez crítico de la “singularidad chilena” puntualizando la subordinación temprana del ejército al poder jurídico del Estado –lo cual establece notable diferencia con la ruralización militar posterior a la independencia en muchos otros países importantes de América Latina, tal como la explicó Tulio Halperín Donghi– y la también temprana creación de una burocracia estatal central, derivados ambos de la soberbia creación institucional de Portales. El aparato del Estado no fue medio de vida para la oligarquía chilena, lo que otorgó ese aire de respetabilidad y seriedad de lo que se llama “la política” en Chile: “una actividad socialmente reconocida a la cual puede y aun debe entregarse sin venir a menos la mejor sociedad, regulada por ciertas reglas del saber vivir y del respeto mutuo”.²⁹ Y lo que no debe ocultar, por cierto, el otro polo de la relación dialéctica que hace a la *peculiaridad chilena*: la extrema dureza de la lucha de clases, jalonada por un rosario de matanzas tremendas:

[...] otros tantos signos de una lucha de clases impulsiva, al estado salvaje, corren por debajo de la historia de las luchas políticas propiamente dichas, pero sin concesiones y cuya crueldad cuadra mal con la imagen de un Chile de Epinal, bonachón y afectuoso. Las reglas del juego civilizado no se aplican a los explotados, a los marginales, a los sin voz, porque éstos no escriben la historia oficial. Esta violencia esporádica no tendría sin embargo más que una significación política limitada si ella no apuntara a un acontecimiento propiamente político, de muy largo alcance y de naturaleza excepcional: *la unión de la teoría marxista y del movimiento obrero nacional*.³⁰

A la vez, siempre surge el tema de hasta qué punto esta singularidad democrática de Chile y el arraigo de la izquierda en las amplias masas obreras y populares podían significar una base para impugnar las clásicas consideraciones marxistas y del leninismo acerca del carácter de clase del Estado y de la violencia como elemento central de la lucha de clases y de la supresión de la dominación burguesa. Una respuesta positiva a este punto a veces es extremada por Allende y fundamentalmente por Garcés, como argumento entrelazado con algunos del viejo Engels acerca de la posibilidad del “tránsito pacífico” hacia

²⁹ *Ibid.*, p. 24.

³⁰ *Ibid.*, p. 26 (cursivas en el original).

el socialismo en condiciones de amplia hegemonía del proletariado sobre la sociedad. El contrapunto construido por Debray respecto a la interpretación general de la historia de Chile es interesante para marcar, en el año 1971, las desconfianzas acerca de los fundamentos históricos específicamente “chilenos” de la vía política institucional al socialismo por el intérprete de la otra línea de la izquierda latinoamericana. Una ilusión más, una aceptación del mito hegemónico burgués parece ser el razonamiento del ensayista francés, que de todos modos aprecia cabalmente el significado del esfuerzo en curso del gobierno de la UP.

El argumento de la vía política institucional en relación con el tránsito al socialismo en sociedades capitalistas maduras resultó interesante en el marco del balance del proceso chileno que luego hicieron algunos partidos comunistas de Europa occidental (especialmente el español y el italiano) para justificar su estrategia abierta hacia el centro del espectro político, especialmente la estrategia del “compromiso histórico” con la democracia cristiana del Partido Comunista Italiano con Berlinguer, y la “transición española” con Santiago Carrillo, pilares ambos del *eurocomunismo*. Estrategia que conducía a ampliar las bases de sustentación social de un proceso tendiente a modificar las condiciones de la hegemonía social burguesa hacia otra de carácter socialista. Y podría sumarse también la propuesta política de unidad de los comunistas con los socialistas que condujo al triunfo presidencial de François Mitterrand en los comienzos de la década de los ochenta como otro proceso político que se articulaba sobre esa base teórica.

La elaboración de Garcés constituye, como dijimos, la guía más sofisticada respecto de la construcción política de la *vía chilena*. Sin embargo, debemos recorrer rápidamente los fundamentos específicos de la discusión de las *vías* en los principales partidos de la UP, como un elemento que permita visualizar la complejidad del debate.

La vía pacífica ya había sido exaltada entre los comunistas por Luis Corvalán desde inicios de la década de 1960, en consonancia con la línea jruschoviana del PCUS de la coexistencia pacífica. En 1961, en la revista *Principios*, publicó una serie de artículos reproducidos en un folleto: *Nuestra vía revolucionaria*. En ellos sostenía: “La revolución socialista por la vía pacífica ya no debe de considerarse como algo muy excepcional, sino como la forma más probable del tránsito del capitalismo al socialismo en una serie de países”. Recuperaba el informe del X Congreso del PC chileno de abril de 1956, en el que se trazaba una línea basada en

el triunfo del Frente Popular en 1938 y de la Alianza Democrática de 1946 como fundamento de la posibilidad de conquistar el gobierno por una vía no insurreccional. Descartaba tajantemente la posible coexistencia de una vía electoral con la preparación de una insurrección. Los comunistas chilenos, sin embargo, no gustaban de la denominación de “vía pacífica” y en la reunión de partidos comunistas en Moscú de 1969 propusieron una variante barroca: “vía no armada”. Esta vía incluiría la presión de masas, huelga general, ocupaciones, luchas callejeras, conquista de tierras por los campesinos, consideradas todas como formas de violencia.³¹ Pero no la guerra revolucionaria. Estos artículos fueron reeditados en 1971, en pleno proceso de la UP, bajo el autocomplaciente título de *Camino de victoria*. En cuanto al carácter de la revolución, el PC chileno planteaba la superación de las viejas tesis de la revolución democrática burguesa, ya que bosquejaba la posibilidad de pasar rápidamente de la revolución antiimperialista y antioligárquica al socialismo “como sucedió en Cuba”, aunque no desprendiéndose completamente de ellas.

En 1957 el Partido Socialista (PS) adoptó la línea de unidad en un Frente de los Trabajadores. En 1956 ya se había constituido el Frente de Acción Popular (FRAP) con el PC, que en 1958 estuvo cercano a lograr la presidencia con la candidatura de Salvador Allende. Las diferencias entre el PS y el PC en Chile se articularon en torno de cuatro cuestiones fundamentales: la existencia y obediencia a un centro ideológico; la definición del carácter de la revolución chilena; la determinación de la vía de acceso al poder, y la concepción de una adecuada política de alianzas.³² La principal diferencia de los socialistas chilenos con el PC fue la concepción del carácter de la revolución. El PS la entendía como una revolución socialista que cumpliría en su primera fase tareas antiimperialistas y democráticas, pero con una ininterrumpida marcha a la construcción del socialismo; el PC, en cambio, sostenía una concepción más cercana a la del frente popular de 1938, con el acento puesto en el carácter democrático, popular y antiimperialista de la revolución y una amplia política de alianzas que incluyese a radicales, democratacristianos e incluso a algunos sectores liberales, acentuando la participación decisiva de la “burguesía nacional”. Los socialistas negaban la posibilidad de que la burguesía nacional, como clase, tuviera una participación

³¹ *Conferencia Internacional...*, op. cit., Discurso de Luis Corvalán, pp. 290-291.

³² Carlos Altamirano, *Dialéctica de...*, op. cit., p. 23.

importante en la revolución chilena, por su debilidad histórica y sus compromisos con el imperialismo.

En relación con la “vía” para acceder al poder, el socialismo chileno siempre acentuó el tema de la imposibilidad de la “vía pacífica” basándose en la teoría marxista del carácter de las relaciones antagónicas de clase. La diferencia se articulaba en el valor dado a la “tradicción democrática chilena” y a la obediencia de las fuerzas armadas de esa tradición democrática, valorizada altamente por el Partido Comunista. El PS señaló en el congreso de Chillán, en 1967, las limitaciones de esta tradición cuando las clases dominantes comienzan a sentir amenazados sus intereses fundamentales, y en consecuencia adoptó la vía armada como necesaria también en el caso chileno.

EL BALANCE DE LA VÍA CHILENA I: DEBRAY

Por la heterogeneidad nacional, “las tesis de la Olas” no pasaron por abstractas. Faltaban las articulaciones necesarias para poner en pie el proyecto y hacerlo marchar; las “mediaciones” capaces de unir la estrategia a la táctica, la unidad continental a las diversidades nacionales, el futuro al presente: “mediaciones nacionales” en primer lugar (un mismo método de lucha no es válido para todos los países); “mediaciones organizacionales” después (¿qué organizaciones eran capaces de conducir algo así como una guerra de liberación, y cómo edificarlas?); *mediaciones políticas* (¿por qué etapas debe pasar un proyecto revolucionario antes de llegar a una definición socialista?). La debilidad de la Olas no residía, al parecer, en su inspiración fundamental, sino en su funcionamiento concreto; no en el fin perseguido, sino en los medios elegidos para alcanzarlo.³³

De esta manera establece Debray su apreciación crítica respecto a la primera etapa de la experiencia guerrillera “foquista” en América Latina. El pasaje al segundo momento se efectuó de manera contemporánea al proceso de la UP en Chile. Como vimos, si de algo pecaba la propuesta chilena era de contar con “mediaciones nacionales”. Era un proceso que se articulaba esencialmente con el tema de la especificidad nacional, sobre la cual Debray ya había tomado distancia suficiente

³³ Régis Debray, *La crítica de las armas*, op. cit., p. 15.

ante la interpretación de los autores de la “vía chilena” en la edición de su conversación con el presidente Allende. Por lo que en el análisis de la derrota, Debray se vuelca nuevamente hacia la “ortodoxia” de las consideraciones clásicas acerca de la naturaleza del Estado clasista y la crítica a las ilusiones pacifistas que anidaban en el corazón el proyecto de transición chileno. Daba así forma teórica a los planteamientos de corte político que había efectuado Fidel Castro durante su prolongada estancia en Chile, a las posiciones del MIR (Castro invitó simbólicamente a Miguel Enríquez, el máximo dirigente de esa organización, a visitar la isla inmediatamente después de su visita al país andino), sobre la dirección del PS encabezada por el senador Carlos Altamirano (quien luego las argumentaría *in extenso* en su propio balance, en el libro *Dialéctica de una derrota*)³⁴ y sobre la izquierda cristiana de la UP en sus distintas expresiones.

En el balance efectuado inmediatamente después de la derrota chilena de septiembre de 1973, Debray señala que este amargo acontecimiento podría tener un efecto reflejo sobre la izquierda latinoamericana: el de volver a la ortodoxia de la vía armada y el *foco*: “Fusil en mano y con la estrella en la frente, el espectro del Che se ha puesto de nuevo en marcha”.³⁵ Precavido, afirma sin embargo que nada puede ser tan simple, e intenta aclarar con más profundidad sus posiciones. En primer lugar, precisar qué pretendía el proceso chileno, al que sintetiza como la búsqueda de la transformación del carácter del Estado capitalista sin su previa destrucción, aprovechando ciertas condiciones específicas e

³⁴ El análisis de este importante balance excede lo que me impuse para este artículo, ya que apuntó en buena medida a la discusión interna que se desarrolló con gran intensidad en el Partido Socialista después de 1973 y que en una primera etapa culminó con la ruptura en 1979 entre las dos fracciones principales. Una, del entonces todavía secretario general Altamirano, que postulaba la reconversión socialdemócrata tercermundista del partido y la revisión de la política de alianzas hacia la izquierda, fundamentalmente con el Partido Comunista que había sido establecida desde 1957 y estaba en el origen de la Unidad Popular, afirmando la necesidad de ir más allá de esa formación para establecer una política de cerco-negociación para la derrota de la dictadura. La segunda, dirigida por Clodomiro Almeyda, ex ministro de Relaciones Exteriores de Allende, aseguraba que el Partido Socialista debía continuar siendo un partido marxista-leninista, reforzar su alianza histórica con el Partido Comunista, eje de la Unidad Popular, y preconizaba la lucha armada contra la dictadura, *cf.* Alex Fernández Jilberto, “El Partido Socialista de Chile bajo la dictadura (1982-1986). Fuentes documentales para la historia de la socialdemocracia en América Latina”, en *Sistema*, 120, mayo de 1994, Madrid.

³⁵ Régis Debray, *La crítica de las armas*, *op. cit.*, p. 247.

históricas de la formación social y política de Chile. Según la teoría aplicada en el caso, encontrándose en manos anticapitalistas, el Ejecutivo y el gobierno que constituían el centro del poder podían alterar el funcionamiento fundamental del Estado como reproductor de las relaciones sociales capitalistas. De estas modificaciones estructurales en la esfera económica y social se extraería la fuerza para conquistar desde una sección —el Ejecutivo— a la totalidad del Estado.

Este proceso posible era visualizado de manera diferenciada por los distintos actores. Unos, la mayoría del PS y la izquierda de la UP, lo veían como una progresiva transferencia de funciones y poderes a un “nuevo Estado popular” construido al margen del Estado existente, por el crecimiento de organismos de doble poder, hasta el enfrentamiento inevitable con la burguesía y el viejo Estado.³⁶ Otros creían en el paulatino debilitamiento de la gran burguesía monopolista, la neutralización y la incorporación al proceso de las capas medias, la conquista de la mayoría absoluta de sufragios, y el éxito de una transformación constitucional en plebiscito: la cámara popular única; era la estrategia del PC y del ala derecha de la alianza popular. Debray sintetiza así las consecuencias de estas dos concepciones:

Había más de un matiz entre los dos. El primero, tras el eslogan “avanzar para consolidar”, partía del principio de que el Estado era todavía de carácter burgués; de ahí el necesario recurso a un doble poder como solución de reemplazo. La segunda estrategia, tras el eslogan “consolidar para avanzar”, se negaba a poner en peligro un bien efectivo y tangible —el control del gobierno— en nombre de un hipotético poder popular, e insistía, a pesar de todo, en la necesidad de administrar y de manejar sanamente la maquinaria económica. Para ella, el doble poder no tenía que oponerse al aparato del Estado existente; en el límite, no había doble poder sino en el seno de este aparato. Desde el momento en que la UP había obtenido

³⁶ Sobre este punto del doble poder se desarrollaron importantes análisis tributarios de la teoría clásica leninista y de las elaboraciones políticas trotskistas. Se aludió fundamentalmente a las posibilidades abiertas por la autonomía obrera desarrollada en los “cordones industriales” de Santiago en los momentos en que se agudizaba la lucha de clases como embriones de un poder distinto al del Estado burgués. Un libro imprescindible sobre este tema relacionado con la Asamblea Popular de Bolivia de 1971 y el proceso chileno es el de René Zavaleta Mercado, *El poder dual. Problemas de la teoría del Estado en América Latina*, México, Siglo Veintiuno Editores, 1ª ed., 1974. Como en el caso del libro de Altamirano, debe ser objeto de una revisión extensa en un trabajo sobre el tema que nos ocupa.

el control de aquel centro neurálgico que era el aparato gubernamental, parecía inconcebible que pudiera entrar en contradicción consigo misma provocando un conflicto entre su poder social revolucionario y su poder político institucional. Debía existir entre ellos una relación de compatibilidad relativa, fijada y dosificada por los cuidados y bajo la responsabilidad del gobierno. A ello se debe que los partidarios de esta última estrategia quisieran hacer entrar los “cordones industriales” –y otros órganos de movilización espontáneamente formados en el curso de la gran huelga patronal de octubre de 1972– dentro del marco de las instituciones sindicales y políticas existentes, en tanto que los primeros juzgaban no sólo inevitables, sino deseables, los desbordamientos y enfrentamientos entre obreros de un lado, y aparato judicial y represivo del otro.³⁷

Esto suponía según Debray la existencia de tres acuerdos básicos entre “todos” los miembros de la UP: 1) el aparato gubernamental constituye una posición dominante y desde allí se puede lograr el poder económico y político en conjunto; 2) el principio de legalidad debe ser respetado a todo precio, y 3) la continuidad constitucional debía ser preservada a toda costa.

Aclarada la teoría estratégica de la vía chilena, la crítica de Debray articula la respuesta a estos tres puntos decisivos. En primer lugar, un irónico y admonitorio apunte recuerda que sobre el poder gubernamental está el poder militar:

Un siglo después de la comuna de París, que reveló a Marx que el proletariado “no puede simplemente ponerse a manejar una maquinaria de Estado *ya hecha*, sino que debe romper la máquina militar y burocrática del estado burgués”, un tal Pinochet obliga a los olvidadizos a releer a los clásicos.³⁸

El argumento en torno de la legalidad a ultranza es resuelto por Debray también recurriendo a principios teóricos ortodoxos del marxismo-leninismo: “En una sociedad de clase, las superestructuras legales están gobernadas y sostenidas por relaciones de fuerza y el contenido tiene precedencia sobre la forma”.³⁹ En cuanto a la continuidad constitucional, Debray ensaya aquí con toda su fuerza una teoría dialéctica acerca de la naturaleza de la crisis. Se es reformista no porque se apli-

³⁷ *Ibid.*, p. 250.

³⁸ *Ibid.*, p. 253.

³⁹ *Ibid.*, p. 257.

quen reformas, sino porque no se comprende que esa aplicación de reformas desembocará necesariamente en una crisis revolucionaria, en la que se pone en juego una lucha a muerte entre protagonistas y clases sociales, entre dos frentes de clase con posiciones irreductibles. Por lo que Debray deriva a la necesidad de enfrentarse finalmente con la cuestión fundamental de “armar al proletariado”. Por cierto, critica con acierto algunas concepciones infantiles respecto a esa posibilidad, como el que construye su adversario *ad hoc* para lograr un fácil efecto polémico; pero en todo el análisis lo que se persigue es resguardar la certidumbre de que un proceso de enfrentamiento entre masas obreras y populares y ejército regular en las condiciones técnicas contemporáneas conduce fatalmente a la masacre de las fuerzas del pueblo. Subyace su idea nuclear de construir un ejército en el medio rural, independientemente de la lucha de clases “real” que luego ejercerá los enfrentamientos, la idea esencial del foquismo. La técnica bélica es abstraída como un absoluto, olvidando —error imperdonable para quien invoca la dialéctica— la radical modificación que las condiciones técnicas bélicas “normales” sufrirían en una situación de crisis revolucionaria, incluida la creciente y candente politización del ejército y su eventual potencial división, esencial en todo proceso insurreccional. Esto será luego discutido con profundidad por Altamirano en *Dialéctica de una derrota*.

EL BALANCE DE LA “VÍA CHILENA” II: GARCÉS

En el “Epílogo a modo de introducción” del libro que reunía sus principales aportaciones de la época de la UP, escrito en noviembre de 1973, a escasos dos meses del golpe reaccionario, Garcés afirmaba:

Muchos intentos revolucionarios fracasaron antes y después de que, en 1917, el pueblo ruso demostrara que por la vía insurreccional era posible a los trabajadores conquistar el poder. El movimiento obrero chileno en su desarrollo histórico había conformado la posibilidad de llevar adelante una gigantesca empresa, de trascendencia mayor en sus proyecciones: combatir al capitalismo y abrir paso al socialismo “en democracia, pluralismo y libertad” —divisa de Allende—. Por este camino llegó más lejos que ningún otro. Le cupo el honor de demostrar, el primero, que podía ganar el gobierno. Después, comprobó que le era posible transformar las

estructuras socioeconómicas al tiempo que desarrollaba la democracia y las libertades hasta el nivel más alto que conoció Chile. Sus esfuerzos por conquistar el poder para los trabajadores, por un camino nunca antes recorrido por nadie, fueron finalmente frustrados por la violencia sangrienta del capitalismo nacional e internacional, ensañados en quebrar la capacidad de resistencia de la poco desarrollada economía de un país de diez millones de habitantes.⁴⁰

Su balance está orientado esencialmente a explorar las posibilidades de ese camino abierto y a no renegar de él. No podemos menos que señalar que ese esfuerzo tuvo notable impacto en las formulaciones políticas, tanto en Europa como en América Latina, de fines de la década de 1970 y la siguiente, que alteraron radicalmente la posición dominante que tuvieron en los años anteriores en la izquierda latinoamericana las formulaciones de la lucha armada en sus diferentes variantes, que habían alcanzado fuerte consenso después del triunfo de la Revolución Cubana. La magnitud de este cambio no puede ser disimulada ni siquiera por el éxito sandinista y la prosecución de la lucha armada en Centroamérica, ya que la línea fundamental de las actualizaciones y posicionamientos de la izquierda en todo el periodo signado por la “transición a la democracia” fue trazada sobre las pautas que en parte fueron elaboradas –sin desdeñar otros factores fundamentales tales como las nuevas tendencias económicas globales y el triunfo sin fisuras del capitalismo en la Guerra Fría– como consecuencia del proceso chileno, su estrategia y su derrota.

Joan Garcés señaló lo inesperado del triunfo de Allende incluso para “muchos y destacados dirigentes de la izquierda comprometida en la campaña electoral [que] se resistían a creer, hasta el término mismo del escrutinio, que la vía electoral pudiera llevarles a otro resultado que a una nueva frustración”. La responsabilidad estriba, según él, en la “comprensión insuficiente de su propia realidad nacional y la utilización abstracta de esquemas teóricos”.⁴¹ El estrecho margen de ventaja obtenido por Allende justificaba en parte este escepticismo. Un escepticismo de otro carácter era el de los allegados al MIR, fuerza que no integraba la Unidad Popular, y que daba por segura la derrota de la coalición de izquierda. Agrega, en esa dirección polémica:

⁴⁰ Joan Garcés, *El Estado y los problemas tácticos...*, *op. cit.*, p. 20.

⁴¹ Joan Garcés, *Chile: el camino político hacia el socialismo*, *op. cit.*, p. 8.

Limitaciones metodológicas, igualmente, o fijación esquemática, condujeron a numerosos análisis teóricos de la realidad chilena a demostrar con anticipación cómo la candidatura de la coalición de izquierda en 1970 estaba necesariamente condenada al fracaso, o a la inviabilidad. Incluso, *ex post facto*, la carencia del más rudimentario aparato metodológico para hacer análisis político ha arrinconado al brillante autor de panfletos Régis Debray a no encontrar otra explicación de lo acaecido en Chile que *quizás habría que inventar una nueva ley de la historia –o una antiley– que sería la ley de las sorpresas: cuando sucede algo importante en la historia es siempre por sorpresa*. Esto no hace sino explicitar la realidad subyacente en los esquemas descriptivos de América Latina hechos por Debray y tantos otros: una concepción idealista de la dialéctica.⁴²

La reflexión de Garcés dentro del gobierno prosiguió coherentemente luego del golpe, y conduce al camino inverso de Debray; es decir, se pregunta qué debilidad táctica, qué errores se cometieron que impidieron que la vía política institucional no cumpliera con sus objetivos y fuera derrotada, pero insistiendo en sus premisas, que como ya desarrollamos anteriormente constituían una recusación completa a los presupuestos, propuestas y críticas de la vía insurreccional. El camino político no excluye, sino que necesariamente supone una reflexión acerca de la cuestión de la fuerza, del ejército, de los fusiles, pero en el sentido de construir una “política militar”, de articular la posibilidad de contar con el apoyo de un sector decisivo de la fuerza armada del Estado, y en todo caso de coordinar con ese sector la acción en defensa de la legalidad de los organismos de la clase obrera, especialmente la central sindical. La derrota de 1973 es analizada por Garcés fundamentalmente desde la perspectiva de la relación del gobierno con la democracia cristiana, los flujos de la legalidad constitucional en términos de las difíciles relaciones entre los poderes del Estado, la construcción por la reacción y el imperialismo de las condiciones de rebosamiento de esa legalidad, apuntando todo a desestabilizar la posición constitucionalista de las fuerzas armadas. El fiel de la balanza resultará finalmente el alto mando militar, y el desalojo de los militares legalistas terminará con el baño de sangre del 11 de septiembre.

Esta política debía construirse sobre la base de la historia de las fuerzas armadas chilenas, en particular por su apego a la legalidad cons-

⁴² *Ibid.*, pp. 8-9, y 11.

tucional en el transcurso del siglo XX. La política de Allende y la UP, según Pío García, no derivaba de ilusiones resultantes de su estrategia “pacifista”, ni del desconocimiento del historial de conspiraciones castrenses, sino de la consideración de ciertos elementos históricos favorables, de la comprensión de que las convicciones constitucionalistas de las fuerzas armadas se sostendrían en tanto se acrecentara el predominio de los sectores militares activos en su manutención, y de la expectativa de que el desarrollo positivo del proceso revolucionario reforzara progresivamente su adhesión institucional —no necesariamente expuesta políticamente— en torno de la renovación —con un contenido socialista— de las concepciones de patria, independencia y plena soberanía; y agrega, para evitar toda sospecha de ingenuidad o improvisación:

Aunque no cabe duda de que no se contaba para ello con la presencia de generales de afiliación militante, tampoco puede suponerse que la dirección de los partidos populares y el propio Salvador Allende se libaban a simples cábalas, en ausencia de toda información confiable sobre lo que ocurría en la oficialidad.

Según el autor, esta política “probó su viabilidad” aunque resultó finalmente derrotada.⁴³ La preocupación de Garcés en su principal balance del proceso apunta básicamente a establecer las razones de esa

⁴³ Pío García (ed.), *Las fuerzas armadas y el golpe de Estado en Chile*, prólogo y selección de textos de la revista *Chile hoy*, México, Siglo Veintiuno Editores, 1974, p. XXV. Se puede agregar con mucho sentido respecto de las opiniones del balance de Garcés la siguiente cita: “La política militar de la Unidad Popular buscaba la neutralización de los Institutos Armados, hasta que el acrecentamiento de las convicciones constitucionalistas y el enriquecimiento de su contenido en correspondencia con el proceso de transformaciones revolucionarias permitieran su sujeción a un nuevo Estado de diferente carácter. Se trataba pues, también aquí, de una cuestión de correlación de fuerzas, en un medio de *tendencia* de suyo hostil, pero que ofrecía *condiciones relativamente favorables*. Tal cometido no podía alcanzarse sin afrontar las contradicciones internas que necesariamente suscitaría, para profundizarlas procurando su resolución favorable, y no rehuir las. Se trataba, de hecho, de destruir el carácter burgués de las Fuerzas Armadas valiéndose del apoyo en la legitimidad del gobierno y la presencia de las masas organizadas. La misma permanencia del Gobierno Popular por casi tres años, la marcada aquiescencia de las Fuerzas Armadas durante toda una primera etapa, la ampliación de los sectores constitucionalistas y hasta de simpatías por la Unidad Popular entre mandos (por lo menos del Ejército y carabineros) y tropa, aun cierto compromiso alcanzado en cuanto a la concepción sobre el desarrollo nacional entre militares y la Unidad Popular, que simbolizó la persona del General Carlos Prats, probaron la factibilidad de esta política”, *ibid.*, p. XLVII. *Chile hoy* fue dirigido por Marta Harnecker.

derrota específica en el ámbito táctico más delicado de todos los que se afrontaban. La dinámica entre legitimidad institucional y legitimidad revolucionaria le permitió construir una interpretación teórica y política, que deslinda claramente las opciones entre dos concepciones absolutamente diferenciadas sobre cómo llevar adelante el proceso revolucionario chileno, planteada polémicamente en su transcurso (texto de 1972) y que funda posteriormente el balance realizado:

Desde antes que [Allende] asumiera la Presidencia, la derecha había creado la imagen de incompatibilidad entre las fuerzas políticas que respaldaban a Salvador Allende y la “institucionalidad democrática”, vale decir: libertades públicas, orden público, Estado de derecho y Constitución. A lo largo del primer año de gobierno popular, éste ha sido el *leitmotiv* de sus campañas políticas y propagandísticas. Combate ideológico que dista de ser irrelevante, pues afecta nada menos que a la legitimidad *institucional* del gobierno de Allende. Algo fundamental y que no siempre han visto políticos de la propia izquierda, cuando tienden a buscar y reconocer una sola legitimidad: la *revolucionaria*. Pero no se dan cuenta de que el camino revolucionario actualmente seguido por Chile presupone la legitimidad institucional que le dio la forma de llegar al gobierno y su ejercicio dentro de los márgenes de la ley y la Constitución. La revolución social no necesita, es cierto, de esta última legitimidad. Pero si se desea llevarla a cabo sin verse abocados ineludiblemente a la quiebra violenta de la estructura social y del proceso productivo, sin enfrentamiento con las estructuras coercitivas del Estado, sin recurso a la sola fuerza física como medio resolutivo de las contradicciones sociales, la legitimidad revolucionaria del gobierno de Allende necesita conservar su legitimidad institucional. Es algo que celosamente el gobierno popular ha venido cuidando. Y que la derecha, con no menos clarividencia, ha estado impugnando, cuando no socavando, sin fatiga ni descanso.⁴⁴

Ésta es la “singularidad de la vía chilena al socialismo”. El problema que instala Garcés es el decisivo: la dialéctica de legitimidades de raíz distinta y el esfuerzo por conciliarlas y reforzarlas mutuamente. ¿Era esto una aporía? A la luz de los resultados, y de las propias declaraciones de incompatibilidades entre una y otra vía efectuadas por sus principales actores teóricos y políticos resulta que sí, y que la UP se vio atravesada, desgarrada y finalmente también inmovilizada por esta contradicción insoluble. El reclamo de una dirección unificada de la UP,

⁴⁴ *Ibid.*, pp. 59-60.

el fracaso de los intentos organizativos en esa dirección, la angustiada lucha de Allende por lograr el apoyo de los partidos populares para su convocatoria de referéndum en la que cifraba grandes expectativas tácticas, reflejan esa difícil e imposible articulación.

El debate entre las dos vías ha sido permanente en el movimiento socialista y obrero internacional. El argumento esencial de Garcés es que en las condiciones en que se desarrolló la experiencia de la UP, lo esencial era evitar la guerra civil, el terreno al que empujó permanentemente la subversión de derecha y las acciones encubiertas del imperialismo estadounidense, desde el momento mismo del triunfo electoral, y cuya primera ronda efectiva fueron los intentos por evitar que Allende asumiera el poder. En la perspectiva de Garcés resulta claro que las opiniones de la izquierda radical respecto de la inevitabilidad del enfrentamiento violento coincidían con el escenario más favorable para la derecha, el que buscaba constantemente, que era precisamente su lucha para debilitar y destruir el campo de la legalidad constitucional. La táctica de la insurrección popular presupone precisamente la inevitabilidad de la guerra civil en el camino del poder obrero y popular; guerra en la que la correlación específica de fuerzas en Chile —entre otros argumentos el de su pertenencia al coto regional de dominación específica de Estados Unidos— hacía inevitable la derrota de las fuerzas populares. Por eso la estrategia de la derecha fue la insurreccional, y la respuesta gubernamental significaba alejar constantemente el escenario del enfrentamiento violento, jugar permanentemente con las herramientas institucionales. La cuestión central de la vía revolucionaria insurreccional no es la de la preparación técnica militar, sino la política de relaciones de clase que supone: la existencia de una vanguardia hegemónica, minoritaria, capaz de construir un camino de victoria en la insurrección y la guerra civil subsiguiente; el modelo clásico de la revolución bolchevique. La dictadura del proletariado es la consecuencia institucional de esta situación política estructural.

La vía política-institucional, como la denomina Garcés, se diferencia radicalmente de la insurreccional, tanto en su planteamiento como en sus relaciones orgánicas con las clases sociales, de la que deriva su política de alianzas para la sustentación del proceso. Supone una posición central de la clase obrera en la estructura económica, un movimiento obrero altamente cohesionado, la unidad en torno de la clase obrera de amplios sectores sociales (campesinos, pequeños propietarios, asalaria-

dos del sector terciario) en su rechazo a los efectos del capitalismo y en la aceptación de un proyecto de transformación socialista, y la existencia de un régimen político democrático y plural de amplia legitimidad. En esta situación, el poder popular deberá mantener en aislamiento sociopolítico y militar a las fuerzas conservadoras y reaccionarias, impidiéndoles recurrir a la guerra para resolver la lucha por el poder. Esto significa una lúcida interpretación de la realidad social y política y de sus actores; en particular, la individualización de los sectores antagónicos a los que se debe “negar”, de los no antagónicos con los que es necesario “coexistir”. Evitar constantemente la situación de imposición del socialismo a través de una dictadura resultado de una insurrección; o la de su contrario, la contrarrevolución violenta. Lo fundamental es conservar la vigencia de los mecanismos de orden y regulación social, mientras se canalizan las relaciones sociales en una dinámica de incitación-estímulo entre los sectores contradictoriamente diferenciados con el objetivo de lograr “una reestructuración socioeconómica y política de la sociedad a través de una estrategia indirecta que evite el conflicto violento y la ruptura de los mecanismos sociales de coexistencia e identificación colectiva”.⁴⁵

Garcés identifica en el proceso de la UP tres errores tácticos decisivos. El primero, el no haber medido en toda su importancia (y derivado de esto, no haber desarrollado una política suficiente para evitarlo) el hecho de que la Democracia Cristiana pasase a ser dirigida por el sector de Frei Montalva y Aylwin, desplazando a la dirección más proclive al acuerdo con la izquierda. Frei ya había propiciado un golpe de Estado en el momento de la transición del poder en 1970, y condujo a su partido de una oposición indirecta a una directa, obstruccionista y que paulatinamente se convirtió en golpista, con la vana ilusión de que serían los inmediatos beneficiarios políticos de la irrupción de la fuerza armada y por una clara definición de clase que los hacía enemigos del proceso popular. Los esfuerzos del gobierno para evitar esta evolución demócrata cristiana, para instaurar un diálogo con ella (Aylwin resultó el instrumento más decisivo de la política de Frei) y construir el soporte de la legalidad constitucional en ese sentido no dieron resultado frente a esa dirección subsidiada generosamente por los fondos encubiertos de la CIA y cerradamente golpista. La escisión de la izquierda cristiana tampoco resultó en un trasvasamiento de apoyo masivo electoral a la UP

⁴⁵ Joan Garcés, *Allende y la experiencia chilena...*, op. cit., pp. 38-43.

aunque sí de algunos importantes cuadros dirigentes, pero tuvo el efecto no buscado de acrecentar el control de la fracción derechista sobre toda esa formación política.

El segundo grave error indicado por Garcés fue el de no haber acompasado la política económica con la estrategia general de poder, de manera que la Unidad Popular hubiera alcanzado la mayoría en el Parlamento *antes* de la polarización que terminaría enfrentando a la UP con *toda* la oposición antisocialista; instrumento fundamental para afianzar la legitimidad gubernamental y que luego fue utilizado por la derecha y sobre todo por la Democracia Cristiana para sentar los pretextos legales del enfrentamiento de poderes y de la erosión de la gobernabilidad que fundamentaron en parte el golpe militar.

Garcés señala como un tercer error decisivo el hecho de no haber articulado las organizaciones obreras con el aparato militar del Estado, para incrementar el poder de disuasión de la estrategia insurreccional de la oposición. Se aborda aquí el hecho más sensible de la discusión con la otra vertiente de la izquierda chilena y latinoamericana: la forma de enfrentar el camino de la subversión económica, social y de acción terrorista directa de la derecha y el imperialismo. En otras palabras, la cuestión de una política militar del gobierno popular que fuera más allá de apoyarse en los cuadros militares más comprometidos con la legalidad constitucional; en particular, en el comandante en jefe del ejército, el general Prats. Resulta muy sugerente este espacio del balance de Garcés, en la medida en que significa una crítica tanto al institucionalismo reformista ingenuo respecto de la vocación democrática del conjunto de las fuerzas armadas tomadas como instituciones, así como de la estrategia insurreccional ofensiva proveniente de los partícipes de la vía armada, en particular el MIR.⁴⁶ Una de las cuestiones que llaman la atención es el hecho de la muy escasa referencia a la sublevación militar franquista de 1936, la resistencia popular que desencadenó y el proceso revolucionario que desató. Habría que preguntarse las razones profundas de la censura a esta problemática, que hubiera proporcionado una base adecuada para el planteamiento de las cuestiones de la legalidad, su resguardo, y también para el de la revolución en condiciones de defensa de una legalidad burguesa atacada por los facciosos reaccionarios

⁴⁶ *Ibid.*, p. 179.

y sobrepasada a su vez por el ímpetu revolucionario de las masas obreras y populares en lucha contra la agresión fascista.

También significa la posibilidad de abrir la reflexión acerca de la tradición socialista de afirmar caminos revolucionarios a través de la estrategia de defensa de las instituciones democráticas legítimas, tal como se desarrolló en las etapas iniciales de la respuesta popular y de sectores militares republicanos frente a la insurrección fascista del 18 de julio de 1936 en España y la posterior experiencia de la guerra civil, tema que indicamos anteriormente como posibilidad muy rica no explorada ni utilizada por Garcés.⁴⁷

LA DISCUSIÓN DE UN “BALANCE” DEL PROCESO CHILENO EN LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA

La primera cuestión es señalar la sorpresa de la irrupción del proceso chileno en el contexto latinoamericano de fines de los sesenta. La discusión ¿reforma o revolución? aparecía más como disyuntiva retórica planteada por los actores políticos e intelectuales de la izquierda revolucionaria, dirigida en forma polémica especialmente a los remanentes de expectativas desarrollistas de la experiencia latinoamericana reciente (México, Brasil o Argentina), a la inesperada experiencia “populista” de la “revolución peruana” de Velasco Alvarado, o en todo caso a los crecientemente desacreditados partidos comunistas de orientación prosoviética, que a una verdadera opción en la marcha de la transformación de las sociedades latinoamericanas en curso.⁴⁸ Sin embargo, tal como lo planteó adecuadamente Labrousse un par de años más tarde:

⁴⁷ Podríamos conjeturar las razones de Garcés en este punto de omisión de la experiencia republicana española. En principio, la incomodidad con un proceso que había culminado con una guerra civil, y con una derrota histórica de la clase obrera española; en segundo lugar, porque la izquierda obrera, socialista y anarquista, había rebasado ampliamente el modelo ordenado de transición al socialismo en el verano “caliente” de 1936, y tercero, sus interlocutores eurocomunistas no recibirían con beneplácito el recordatorio de otros escenarios radicalmente disimiles a los de su postulación estratégica. Un desperdicio de oportunidad.

⁴⁸ Bajo este título se publicó un conjunto de textos de influyentes científicos sociales de la época, que precisamente reflejan esta concepción, *cf.* James Petras y Maurice Zeitlin (selección), *América Latina: ¿reforma o revolución?*, Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1970, 2 volúmenes. La edición original en inglés publicada en Estados Unidos es de 1968.

Al ganar las elecciones presidenciales de 1970, con el apoyo de una coalición de la izquierda unida, cuyas fuerzas motoras eran el PS y el PC, Salvador Allende venía a dar una nueva actualidad a la estrategia de transición pacífica hacia el socialismo, tal como fue definida por el XX Congreso del PC de la Unión Soviética [e inmediatamente el autor señala sus repercusiones] La iniciación pocas semanas después de las negociaciones para la constitución del Frente Amplio Uruguayo; en Argentina el Partido Comunista organizó con algunos integrantes de la Unión Cívica Radical, peronistas y trotskistas el Encuentro Nacional de los Argentinos; otros intentos fueron en Venezuela, la Nueva Fuerza, y en Ecuador, la Concentración de Fuerzas Populares. Y también en Francia, la aproximación de socialistas y comunistas que finalmente se plasmaría años después en el triunfo de Mitterrand.⁴⁹

La controversia sorda o abierta entre las líneas personificadas en La Habana y en Santiago por Fidel y por Allende, se acentuó a lo largo de los años de la experiencia de la UP. Una competencia dura que no excluía solidaridades entre ambos procesos, un horizonte común en la transformación revolucionaria y socialista de sus respectivas sociedades y de América Latina, pero también una fuerte competencia política. La actitud de los partidarios de la “lucha armada” de los sesenta a lo largo de la experiencia chilena, puede estar referida en forma paradigmática en un texto del escritor Jorge Edwards, controvertible en muchos de sus juicios, pero extremadamente incisivo y con aguda e irónica penetración de la situación. Testimonia un pasaje de su extensa conversación con el primer ministro cubano, en La Habana, en vísperas de su partida definitiva de Cuba, cuando finalizó su fallida misión diplomática, la noche del 21 al 22 de marzo de 1971, en presencia de Raúl Roa:

Pues bien, Primer Ministro –proseguí–. Tengo que explicarle lo que le sucede a un chileno de buena fe, que no ha escatimado su simpatía por la revolución cubana, y que llega hoy a Cuba como representante de la UP de Chile. Un chileno lee en la realidad de hoy de Cuba una de las posibilidades del porvenir de su país. Ahora bien, para hablarle con absoluta franqueza, creo natural que este futuro, tal como puede descifrarse en la realidad cubana de hoy día, no le guste. Tampoco le habría gustado ese futuro a ustedes si hubieran podido anticipar, en 1959, lo que sería Cuba en 1971. Si, por ejemplo, ya hubieran transcurrido doce

⁴⁹ Alain Labrousse, *El experimento chileno...*, op. cit., pp. 9-10.

años de revolución en Ecuador o en algún otro país de América Latina y ustedes hubieran encontrado en él la situación que yo he encontrado en Cuba ahora [...] Porque recuerdo muy bien las predicciones que hacían ustedes, hasta los años 66 o 67, sobre la economía cubana en 1970. Ustedes anunciaban un auge industrial espectacular, que iba a terminar con todo tipo de dependencia económica; un aumento sensacional de la producción agrícola; decían que Cuba exportaría café, que ninguna zafra a partir de 1970 bajaría de los diez millones de toneladas de azúcar...

Fidel se puso de pie, intensamente irritado:

—¡Y usted no conoce las dificultades que ha tenido Cuba! ¡Usted no sabe que hemos estado sometidos a un bloqueo implacable, con el imperialismo más feroz que conoce la historia a ochenta millas de nuestras costas! ¡Acaso no sabe usted que el imperialismo yanqui, cuyo solo deseo es destruirnos completamente, acabar para siempre con la revolución cubana y con lo que ella significa como ejemplo para todos los pueblos del mundo, es el imperialismo más rico y más poderoso que ha existido nunca!

—¡Lo sé muy bien! —le dije. Por eso mismo no quisiera que Chile pase por la misma experiencia.

—¿Y usted cree que la experiencia chilena es muy fácil? —me interrumpió Fidel—. ¿Usted cree que la reacción chilena no se organiza con ayuda directa del imperialismo? ¿No ha oído hablar usted del Plan Djakarta? Allende hasta ahora sólo ha conquistado el gobierno, pero eso significa llegar nada más a los primeros contrafuertes del poder. Cuando se trate de conquistar el poder, el enfrentamiento será inevitable.

En otras palabras, la revolución chilena todavía estaba por hacerse. El proceso electoral, nuestra originalidad histórica, no era más que un preludeo, un accidente en apariencia favorable, aun cuando podía revelarse como un arma de doble filo. Allende no tenía más alternativa que radicalizar el proceso, conduciéndolo al punto de ruptura, o empantarse en las aguas movedizas de la legalidad. Vale decir, Fidel, al tranquilizar a los miristas antes de septiembre de 1970, le había permitido a Allende jugar su carta electoral; pero esto no significaba que Chile hubiera descubierto la fórmula de una transición pacífica al socialismo. ¡Lejos de eso! La situación chilena no había llevado a precisamente a Fidel a revisar sus teorías, como pensaban algunos, con toda ingenuidad, sino más bien a elaborarlas y confirmarlas de otra manera. Recordé la frase de nuestra primera conversación: “Si necesitan ayuda, nos la

piden. Seremos malos para producir, ¡pero para pelear sí que somos buenos!”.⁵⁰

El marco era el “debilitamiento relativo” del imperialismo estadounidense, producto de la crisis de la guerra de Vietnam y el rápido “cambio de la correlación de fuerzas a favor del socialismo a escala internacional” que pregonaba con fuerza creciente la dirección de la URSS; también por la idea del “tigre de papel” y la intensificación de las contradicciones mundiales afirmada por el maoísmo. Esta visión de retroceso de Estados Unidos a escala mundial no fue abandonada en muchos de los balances posteriores a septiembre de 1973; solamente se complementó con la idea de que este retroceso lo hacía más agresivo en la defensa de sus posiciones crecientemente amenazadas, en especial en América Latina, y esto es lo que había sufrido precisamente Chile popular. En la obra de Debray el asunto está un poco más matizado para esas fechas.

Tal como la Revolución Cubana y sus repercusiones en el diseño de una estrategia revolucionaria para América Latina se encontraban en el centro de las controversias políticas de la izquierda latinoamericana en los años sesenta, la experiencia de Chile ocupó un lugar privilegiado en el debate político de esa misma izquierda hasta fines de la década de los setenta, cuando se bifurcaron los planteamientos.

Desde una perspectiva, la opción armada y de la guerrilla tuvo nuevo aliento en Centroamérica, con la victoria del sandinismo y las prolongadas y amplias luchas en El Salvador y Guatemala; a su vez, la “democratización” de la izquierda latinoamericana crecía como planteamiento desde 1978. Democratización de doble vertiente. La primera era la idea de integrar las fuerzas políticas actuantes a las “transiciones” democráticas, abiertas a partir de los inicios de los ochenta en algunos países de Sudamérica: Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia y con más

⁵⁰ Jorge Edwards, *Persona non grata*, Barcelona, Tusquets, 1991, pp. 314-316. La primera edición es de 1973. También resultan ilustrativas de este punto específico los dos encuentros del autor con Régis Debray (*ibid.*, pp. 216-217 y 260-264). A riesgo de abrumar al lector, transcribo un pequeño resumen de la impresión de Edwards: “Si hay una experiencia digna de intentarse es la de la revolución chilena: una revolución dentro del pluralismo de partidos y de la libertad de expresión. Pero Debray tiene muchos amigos, en Cuba y también en Chile, que observan la experiencia actual de la Unidad Popular con un secreto menosprecio, como simple transición a un enfrentamiento inevitable y cuya violencia, cualquiera que sea su resultado, invalidará los postulados pacíficos que invoca hoy el gobierno de Allende”, anotación del 6 de marzo de 1971, *ibid.*, p. 264.

retardo, pero siempre como horizonte, en el mismo Chile. La segunda era que en la concepción misma del socialismo la idea de democracia pasó de ser elemento instrumental a considerarse componente estratégico. El socialismo no podría concebirse sin democracia, entendida como sistema político de pluralismo y con regulación de la alternancia y de respeto a las minorías, que además desempeñan un papel esencial como controladoras del ejercicio del poder por las mayorías.

En este proceso de democratización de la izquierda, el balance del proceso chileno pasó a ser muy importante. La idea de lograr una mayoría no circunstancial para los procesos de cambio y modernización de la sociedad, planteada pero no resuelta en Chile, se vinculó a la idea gramsciana de *hegemonía*. La reflexión hecha sobre la base de ese mismo proceso por el eurocomunismo, en el sentido de llegar a compromisos fundamentales con otras fuerzas como la democracia cristiana —esencia de la estrategia del Partido Comunista chileno y de las maniobras tácticas de Allende— fue retomada en buena medida por la izquierda latinoamericana en el sentido señalado de lograr consenso histórico sobre ciertas reglas del juego democrático y ciertos “umbrales mínimos” de participación y bienestar social. Es cierto que gran cantidad de conceptos articulados en torno de la experiencia chilena “hacia el socialismo” fueron abandonados; entre otros, la participación dominante del Estado en la producción y regulación del juego social; también el de la “vía” de la revolución, habida cuenta de que el concepto mismo de revolución parecía superado.

Desde este punto de vista, cierto debate central de los años sesenta y buena parte de los setenta entre *reforma* y *revolución*, crucial en la discusión de la experiencia chilena por sus contemporáneos, resultó desplazado. La experiencia de la transición a la democracia y el balance de su ya prolongado ejercicio en las condiciones hegemónicas de un nuevo paradigma social y económico no necesariamente lo actualizarán, pero quizás renueven ciertas consideraciones acerca de la posibilidad de cambios estructurales en una dirección distinta a la de los actuales centros rectores del poder mundial.

BIBLIOGRAFÍA

- Altamirano, Carlos, *Dialéctica de una derrota*, México, Siglo XXI Editores, 1977.
- Allende, Salvador, *Obras escogidas, (1970-1973)*, edición de Patricio Quiroga, Barcelona, Crítica, 1989.
- Blackburn, Robin, y Perry Anderson, “El marxismo de Régis Debray”, en Leo Huberman y otros, *Debray y la revolución latinoamericana*, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1969.
- Collier, Simon y William F. Sater, *A History of Chile, 1808-1994*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
- Conferencia Internacional de los partidos comunistas y obreros. Moscú 1969*, Praga, Editorial Paz y Socialismo, 1969.
- Debray, Régis, *Ensayos sobre América Latina*, 1ª. edición México, Ediciones Era, 1969. [Incluye: “Una experiencia guerrillera”, 1964; “El castrismo: la larga marcha de América Latina”, 1965; “América Latina: algunos problemas de estrategia revolucionaria”, publicado en *Casa de las Américas* en julio-agosto de 1965; “El papel de los intelectuales en los movimientos de liberación nacional”, 1966; “¿Revolución en la revolución?”, publicado como cuaderno de *Casa de las Américas* en enero de 1967 y, finalmente, documentos y declaración ante el Consejo de Guerra de Camiri, de septiembre-noviembre de 1967.]
- _____, *La crítica de las armas*, México, Siglo XXI Editores, 1975. [1ª edición francesa *La critique des armes 1*, Paris, Éditions du Seuil, 1974.]
- _____, *Las pruebas de fuego. La crítica de las armas 2*, México, Siglo XXI Editores, 1975. [1ª. edición francesa *Les épreuves du feu. La critique des armes 2*, Paris, Éditions du Seuil, 1974.]
- _____, *Conversación con Allende. ¿Logrará Chile implantar el socialismo?*, 1ª. edición, México, Siglo XXI Editores, 1971.
- De Riz, Liliana, *Sociedad y política en Chile (de Portales a Pinochet)*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 1974.
- Edwards, Jorge, *Persona non grata*, Barcelona, Tusquets, 1991.
- Garcés, Joan E., *Chile: el camino político hacia el socialismo*, Barcelona, Ariel, 1972.
- _____, “El modelo de participación de los trabajadores en el gobierno popular. Algunos factores condicionantes”, en el volumen colectivo *La vía chilena al socialismo*, México, Siglo XXI Editores, 1973, pp. 189-197.
- _____, *El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende*, México, Siglo XXI Editores, 1974.
- _____, *Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política*, Barcelona, Ariel, 1976. [1ª ed. francesa, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1976.]

- García, Pío (ed.), *Las fuerzas armadas y el golpe de Estado en Chile*, prólogo y selección de textos de la revista *Chile hoy*, México, Siglo Veintiuno Editores, 1974.
- Guevara, Ernesto, *Che, La guerra de guerrillas y Guerra de guerrillas: un método*, en *Obra revolucionaria*, México, Ediciones Era, 1967.
- Huberman, Leo y Paul Sweezy, "Debray: su fuerza y su debilidad", en Leo Huberman y otros, *Debray y la revolución latinoamericana*, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1969.
- Karol, K. S., *Los guerrilleros en el poder*, Barcelona, Seix Barral, Biblioteca Breve, 1972.
- Olas, I^{re} Conférence de l'Organisation Latino-Américaine de Solidarité (L'Havanne, août 1967), François Maspero, Cahiers Libres 106-107, Paris, 1967.
- Labrousse, Alain, *El experimento chileno. ¿Reformismo o revolución?*, Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1973.
- Najman, Maurice, *Le Chili est proche. Révolution et contre-révolution dans le Chili de l'unité populaire. Textes présentés et annotés par ...*, Paris, Librairie François Maspero, Cahiers Libres 263-264, 1974.
- Petras, James y Maurice Zeitlin (comp.), *América Latina: ¿reforma o revolución?*, Buenos Aires Editorial Tiempo Contemporáneo, 1970.
- Toer, Mario, *La "vía chilena". Un balance necesario*, Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1974.
- Zavaleta Mercado, René, *El poder dual. Problemas de la teoría del Estado en América Latina*, 1^a ed., México, Siglo XXI Editores, 1974.

SEGUNDA PARTE
FUERZAS ARMADAS Y DEMOCRACIA EN CHILE

EL GOLPE DE ESTADO CHILENO EN EL CONTEXTO DE AMÉRICA DEL SUR: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Riccardo Forte*

El fenómeno del golpismo militar en América Latina ha sido poco estudiado en perspectiva histórica. Ya entrados en la primera década del siglo XXI las principales contribuciones alrededor del tema siguen siendo monopolio de la politología y de la sociología, a partir del estudio clásico de Samuel Huntington.¹ Esto ha llevado a menudo, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, a sobreestimar el papel de variables de carácter coyuntural y de actores externos en una específica realidad nacional, que se han considerado determinantes en la intervención militar y, más en general, en la participación del cuerpo de oficiales —o de una parte del mismo— en los asuntos de política interna. Dicha tendencia es particularmente evidente a partir de los estudios sobre la Guerra Fría, durante todo el periodo posterior a los años 40 hasta hoy día. Los golpes de Estado de Chile, Argentina y Brasil, desde 1955 hasta 1976, han sido interpretados mayoritariamente como el resultado de la acción internacional estadounidense, dirigida a contener la ampliación de regímenes y formas de gobierno desfavorables para la conservación de su hegemonía en el hemisferio occidental, y como el producto de la inter-

* Doctor en Historia por El Colegio de México y doctor en Historia de las Américas por la Universidad de Génova. Profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de *Fuerzas armadas, cultura política y seguridad interna. Orígenes y fortalecimiento del poder militar en Argentina (1853-1943)*, México, UAM-I Biblioteca Signos núm. 19, Miguel Ángel Porrúa Editores, y Università degli Studi di Torino, Otto Editore, 2003; compilador (con María Luna y Guillermo Guajardo) del libro *Consenso y coacción. Estado e instrumentos de control político y social en México y América Latina (siglos XIX y XX)*, México, El Colegio de México y El Colegio Mexiquense, 2000.

¹ Véase S. Huntington, *The Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Cambridge, Harvard University Press, 1975.

vinción directa o indirecta del Departamento de Estado y el servicio de inteligencia de Estados Unidos.² Esta perspectiva se ha convertido en una lectura dogmática de la intervención militar, que asume como real un hecho genéricamente aceptado, sin preocuparse de comprobarlo a través de un estudio serio de la documentación histórica disponible.

La frecuencia de actividades de tipo golpista en periodos anteriores a la segunda posguerra y en varios países de la región latinoamericana sugiere la necesidad de explorar caminos alternativos en el estudio de la participación castrense en la política interna y, en especial, de los factores históricos que posiblemente contribuyeron a crear en algunas regiones una cultura militar dirigida a la intervención coercitiva. No se trata de subestimar los elementos externos antes citados, sino más bien de ubicarlos en su lugar correcto y de otorgar a los mismos su valor real, y sobre todo de individualizar las otras posibles variables que hayan interactuado con dichos elementos, afectando el significado de su papel y su importancia relativa, hasta lograr tener un dibujo completo de las variables vinculadas con la intervención castrense. La interpretación "internacionalista" de la intervención militar, por ejemplo, no explica la ausencia de este fenómeno en otros países de gran interés para la política exterior estadounidense, como México y Venezuela, y tampoco las intervenciones de las décadas anteriores a la Guerra Fría, en regiones caracterizadas en la época por una escasa o nula presencia estadounidense, como Argentina, Brasil, Perú, y en menor medida en Chile.

En un estudio reciente sobre el caso argentino, hemos mostrado cómo el papel desarrollado por el cuerpo de oficiales a partir de la mitad del siglo XIX ha sido clave en la configuración del sector castrense y en la formación de una cultura política propia de los militares, caracteri-

² Sería imposible citar aquí toda la literatura sobre este tema, que además hace referencia en su mayor parte a casos específicos y no analiza de manera más exhaustiva la política exterior estadounidense en la región. Véase, por ejemplo, Fernando Rivas Sánchez y Elizabeth Reiman Weigert, *Las fuerzas armadas de Chile. Un caso de penetración imperialista*, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1976; Don L. Etchison, *The United States and Militarism in Central America*, Nueva York, Praeger, 1975; Jan K. Black, *Sentinels of the Empire. The United States and Latin American Militarism*, Nueva York, Greenwood Press, 1986; Guy Poitras, *The Ordeal of Hegemony. The United States and Latin America*, Bondler-San Francisco-Oxford, Westview Press, 1991; Jan Triska (ed.), *Dominant Powers and Subordinate States. The United States in Latin America and the Soviet Union in Eastern Europe*, Durham, Duke University Press, 1986.

zada por una fuerte orientación hacia las problemáticas internas.³ La función decisiva del ejército federal en la afirmación de la soberanía del Estado, entre la aprobación de la Constitución nacional, en 1853, y la derrota de la poderosa milicia de la provincia de Buenos Aires, en 1880; las funciones administrativas otorgadas a la oficialidad en los poblados de la línea de frontera, después de la segunda campaña del desierto, en 1873; la importancia otorgada por los grupos civiles, que se opusieron al llamado régimen del 80, al apoyo castrense para lograr reestablecer la legalidad constitucional –o, por lo menos, su visión de la misma–, particularmente evidente en las insurrecciones de 1890, 1893 y 1905; el papel de integración social confiado a la oficialidad argentina por el Congreso, con la aprobación de la ley de organización militar de 1901, y la función decisiva del general Enrique Mosconi a la cabeza de la primera empresa del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales: todos estos elementos constituyen sólo un ejemplo de las funciones múltiples otorgadas al ejército, tanto por los gobiernos como por diferentes sectores de la sociedad civil, que fueron poco a poco formando y consolidando una cultura militar de intervención interna.

Se podría objetar que la prioridad de las funciones nacionales sobre las internacionales durante las fases constituyentes de un recorrido nacional específico no es una causa suficiente para determinar la orientación golpista de las fuerzas armadas. Las experiencias históricas estadounidense y mexicana representarían dos ejemplos importantes al respecto, que necesitarían –en nuestra opinión– ser ampliadas en perspectiva comparativa.⁴ En realidad, como hemos evidenciado en el estudio ya señalado, la prioridad citada cobra importancia si se asocia con tres factores relevantes, de los cuales sólo el tercero es de naturaleza militar: *a)* el nivel de consolidación de las instituciones civiles, tanto en su valor absoluto como en relación con la institución militar así como en términos de efectividad como de credibilidad, y la percepción de la misma en el marco de amplios sectores de la sociedad, de distinta orientación política e ideológica;⁵ *b)* la tendencia histórica *constante* de sectores significativos de la sociedad civil a considerar la fuerza mili-

³ Véase R. Forte, *Fuerzas armadas...*, *op. cit.*

⁴ Véase B. Connaughton (coord), *Construcción de la legalidad en México (siglo XIX): instituciones, cultura política y poder*, México, El Colegio de México, 1999.

⁵ Véase L. A. Rodríguez (ed.), *Rank and Privilege. The Military and Society in Latin America*, Wilmington, SR Books, 1994.

tar como un instrumento legítimo para la resolución de las tensiones y conflictos entre grupos de poder y de interés –en donde, su constancia, sin solución de continuidad, representa, en nuestra opinión, un factor central–, y *c*) los valores propios del sector militar, interiorizados por los miembros del cuerpo de oficiales a lo largo de su recorrido histórico y, en consecuencia, la forma de profesionalización propia de cada institución militar moderna.⁶

El potencial del elemento primario citado –la participación interna de la oficialidad desde época temprana en determinar una orientación de carácter golpista, queda fuertemente condicionado por los otros factores, pero puede afectar a su vez, en mayor o menor medida, a algunos de ellos, y en especial a los factores *b* y *c*. Esta correlación adquiere aún más relevancia si se considera que la participación castrense en los asuntos internos relativos a la construcción y consolidación de los estados nacionales latinoamericanos coincidió cronológicamente con el proceso de profesionalización de la oficialidad. Por lo cual es importante averiguar los efectos de esta coincidencia en la configuración que asumió la oficialidad moderna en la región, y hasta qué punto la misma produjo una forma atípica –o simplemente diferente– de profesionalización militar, en relación con el ideal-tipo propuesto por la politología moderna.

LA INTERVENCIÓN MILITAR EN AMÉRICA DEL SUR ANTES DE LA GUERRA FRÍA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Cuando las fuerzas armadas chilenas asaltaron el Palacio de la Moneda en 1973, marcando el fin de la breve experiencia de gobierno socialista de Salvador Allende, los militares del Cono Sur registraban ya un largo historial de intervenciones coercitivas contra los gobiernos civiles, llevados a cabo según modalidades y con objetivos diferentes. A pesar de la supuesta tradición “legalista” de las fuerzas armadas chilenas, es difícil imaginar que el cuerpo de oficiales en Chile fuera totalmente extraño a los rasgos políticos y culturales que caracterizaban en la época a sus contrapartes de la región, y que por lo tanto sea plenamente justificada, sin mayores averiguaciones, la definición comúnmente aceptada de un

⁶ *Ibid.*

ejército chileno apolítico y subordinado de manera convencida y acrítica al poder civil. En otras palabras, no es suficiente ojear en superficie el hecho evidente de un cuerpo de oficiales que no intervino de manera coercitiva en los asuntos internos a lo largo de varias décadas, para llegar a la conclusión banal de que nos encontramos ante una oficialidad no predispuesta a dicha intervención. En efecto, la predisposición citada no constituye un elemento suficiente para hacer viable la actuación concreta de un sector castrense. Como en cualquier acción en la esfera política, tanto interna como internacional, tienen que crearse las condiciones necesarias para que esta acción sea posible, y tales condiciones dependan siempre de un conjunto complejo de elementos, históricos y circunstanciales. En el caso de la intervención militar interna, dichas condiciones remiten, genéricamente, a los factores que acabamos de mencionar al final de apartado anterior.

Hay que subrayar, antes que nada, que el historial del ejército chileno a comienzos de los años setenta no estaba por arriba de cualquier sospecha. El presidente Alessandri, que inauguró el largo periodo de predominancia civil en Chile, al comienzo de los años treinta, consolidó su carrera como presidente en 1925, gracias al apoyo de un grupo de oficiales putschistas,⁷ cuya actuación representó sólo el último capítulo de la presencia castrense interna durante las décadas anteriores. ¿Cuáles elementos fueron decisivos, no tanto en permitir el control de las autoridades constitucionales sobre el cuerpo de oficiales en Chile, sino en impedir la continuidad de la acción de los segundos sobre las primeras? ¿Es posible individualizar variables históricas comunes, en distintos casos sudamericanos, en el recorrido originario de enfrentamientos entre poder civil y poder militar y, al mismo tiempo, diferencias capaces de explicar la pausa de la intervención castrense chilena hasta el inicio de los años setenta?

Un primer elemento se encuentra, como hemos visto, en el papel histórico de la oficialidad militar durante el proceso de consolidación nacional y en su coincidencia con la fase de profesionalización castrense. Aunque este doble fenómeno no ha sido analizado de manera uniforme para todos los países de América Latina, a partir de los estudios existentes podemos inferir: a) la importancia y la intensidad del papel

⁷ A. Rouquié, *El Estado militar en América Latina*, Buenos Aires, Emecé, 1984, p. 130.

señalado para un conjunto significativo de casos, y *b*) la relación directa existente entre la participación política de la oficialidad y la cantidad y el tipo de operaciones internas llevadas a cabo por decisión y bajo el control tanto de las autoridades constitucionales como de los grupos y movimientos civiles de oposición.⁸

Desde mediados del siglo XIX, las fuerzas armadas del Cono Sur latinoamericano fueron llamadas a contrarrestar las acciones centrífugas de los jefes militares y políticos locales y —no menos importante— a pacificar las regiones hasta entonces bajo el control de las poblaciones indígenas. En Argentina, los presidentes Sarmiento y Avellaneda, durante los años setenta, lograron hacer efectiva la legalidad constitucional contra las poderosas milicias locales, gracias a la utilización reiterada del ejército federal; prescindiendo, de esta manera, del mecanismo tradicional de la alianza con los caudillos provinciales, que acababa simplemente eliminando un actor rival al gobierno constitucional para sustituirlo con otro.⁹ Para otro caso, Nunn subraya que “la guerra creó y mantuvo la República de Chile”, mientras que el general Joaquín Prieto “configuró el sistema político que dominó Chile hasta 1891”.¹⁰ Ambos ejércitos entre los años setenta y ochenta fueron protagonistas de varias campañas dirigidas a garantizar la seguridad de los asentamientos en contra de las incursiones de las poblaciones indígenas, contribuyendo a la ampliación, consolidación y defensa de la soberanía territorial de los nuevos estados.¹¹ En Brasil, a fines del siglo XIX el ejército “había acabado con la monarquía, creado una república y contribuido a promulgar una constitución”, mientras que —como en Chile y Argentina— era a menudo llamado a resolver cuestiones de orden interno, en relación —en el caso brasileño— con las poderosas fuerzas centrífugas locales y el problema de los esclavos fugitivos, operaciones que marcaron una importante línea de continuidad entre la fase imperial y la época republicana.¹² Otros casos, como el de Perú y Bolivia, son menos claros y requieren más investigaciones, sobre todo para el periodo anterior a

⁸ Véase *ibid.*; R. Forte, *Fuerzas armadas...*, *op. cit.*, y F. M. Nunn, *The Military in Chilean History*, Albuquerque, New Mexico University Press, 1976.

⁹ R. Forte, *Fuerzas armadas...*, *op. cit.*, pp. 33-65, y L. A. Rodríguez (ed.), *Rank and Privilege...*, *op. cit.*, pp. 74-75.

¹⁰ *Ibid.*, p. 76.

¹¹ *Idem.*

¹² *Ibid.*, p. 81.

los años treinta. La aplastante derrota peruana en la guerra del Pacífico contribuyó sin duda al desprestigio temprano de esta institución castrense. Sin embargo, faltan estudios dirigidos a aclarar las funciones desarrolladas por los militares de este país en el ámbito interno –antes y después del enfrentamiento internacional con Chile– y la naturaleza de las relaciones cívico-militares entre los siglos XIX y XX hasta el comienzo de los años treinta, porque de manera poco convincente algunos autores han caracterizado al ejército peruano, después de la masacre de Trujillo de 1932 contra los militantes apristas, como el “perro guardián de la oligarquía”.¹³

En los casos señalados la participación interna de los militares fue inducida, en un primer momento, por las mismas autoridades civiles constitucionales y por las necesidades derivadas de un contexto histórico específico. El factor común en los distintos países se encontraba en las limitaciones del control territorial del Estado y en la presencia de actores rivales al Estado mismo en términos de soberanía –según la caracterización propuesta por Nicola Matteucci–,¹⁴ los cuales controlaban fuerzas armadas capaces de competir con el ejército nacional o incluso, como en el caso de Brasil, de afectar la cohesión del cuerpo nacional de oficiales, debilitando de manera significativa el control de las autoridades centrales sobre los medios de coerción masiva y dificultando, de esta manera, la consolidación de una forma estatal moderna, en el sentido weberiano del término.¹⁵ El enfrentamiento decisivo entre la milicia bonaerense y el ejército federal argentino en 1880, en una situación de casi equilibrio técnico y cuantitativo, y la capacidad de las *forças públicas* de los estados en Brasil, en 1889, de superar en poder a las fuerzas armadas nacionales, representan ejemplos paradigmáticos al respecto.¹⁶

¹³ Véase F. Bourricaud, *Pouvoir et société dans le Péron contemporain*, París, 1967, p. 280, y A. Rouquié, *El Estado militar...*, *op. cit.*, p. 131.

¹⁴ Véase N. Bobbio, N. Matteucci y G. Pasquino (ed.), *Dizionario di politica*, Torino, UTET, 1983, p. 908.

¹⁵ Véase M. Weber, *Economía y sociedad*, México, FCE, 1998, pp. 45-47 y 1056.

¹⁶ R. Forte, *Fuerzas armadas...*, *op. cit.*, pp. 54-56; J. Magalhães, *A evolução Militar do Brasil: Anotações para a História*, Río de Janeiro, Biblioteca do Ejército, 1958, p. 312; M. Á. Scenna, *Los militares*, Buenos Aires, Editorial Belgrano, 1980, pp. 85-88; L. A. Rodríguez, *Rank and Privilege...*, *op. cit.*, p. 85, y M. Carmagnani (coord.), *Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina*, México, El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 180-189.

Quizás la diferencia más importante entre estos dos casos y Chile es que éste se caracterizó, a fines del siglo XIX, por una mayor solidez de las instituciones públicas civiles –variable que analizaremos más adelante. Pero dicha solidez no se produjo, como hemos visto, en desventaja de la relevancia histórica del papel castrense en el ámbito interno y tampoco en el marco de un proceso de profesionalización militar caracterizado por valores por completo ajenos a la participación en dicho ámbito. Perlmutter insiste en esta característica que considera común a todos los militares latinoamericanos, cuya profesionalización y transformación en corporaciones modernas fue, según el autor, “lo que restauró por fin el orden y creó un sistema político nacional”.¹⁷ Para los casos de Argentina, Chile y Perú, el mismo autor atribuye a cada sector castrense un papel imprescindible en el establecimiento del orden y en “la formación de un gobierno constitucional”, así como “en la colonización del interior del continente”, tanto contra el caudillismo como de “la población amerindia nativa”.¹⁸

Más allá de las funciones estrictamente militares, los cuerpos de oficiales fueron llamados a cumplir con otra importante función interna: la homogeneización de una sociedad con fuertes diferencias étnicas y culturales, y la creación de un sentimiento de pertenencia nacional, en el marco de territorios y poblaciones sumamente disgregados entre sí. Desde esta perspectiva, el servicio militar obligatorio –introducido en la organización militar de distintos países entre fines del siglo XIX y comienzos del XX– consiguió en primera instancia un objetivo social y de consolidación del orden interno, más importante que el fortalecimiento de la defensa nacional en sentido estricto, a menudo considerado estrechamente relacionado con la misma. Los oficiales brasileños fueron llamados a *desprovincializar* a las fuerzas armadas mediante la difícil tarea de crear vínculos de fidelidad con las autoridades civiles nacionales, capaces de sustituir los lazos existentes de carácter local o regional;¹⁹ los oficiales chilenos lucharon para formar una tropa nacional, educando y reuniendo “cholos e indios analfabetos” provenientes de regiones sin nexos ni contactos anteriores;²⁰ a la oficialidad argentina se le otorgó la

¹⁷ Véase A. Perlmutter, *Lo militar y lo político en el mundo moderno*, Madrid, Ediciones Ejército, 1982, p. 237.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 237-238.

¹⁹ M. Carmagnani (coord.), *Federalismos latinoamericanos...*, op. cit.

²⁰ L. A. Rodríguez (ed.), *Rank and Privilege...*, op. cit., p. 87.

función de amalgamar una sociedad prioritariamente *extranjera*, debido a las consecuencias demográficas y culturales de las fuertes olas migratorias que se produjeron entre los siglos XIX y XX.²¹ La ventaja de otorgar al sector castrense esta importante tarea formativa residía en el hecho de que el servicio militar y las guarniciones del ejército llegaban a menudo a regiones no alcanzadas por las instituciones educativas civiles, reductos alejados y poblados de frontera, en donde la oficialidad militar desarrollaba desde tiempo atrás –o había desarrollado en el pasado– funciones administrativas tradicionalmente confiadas a la burocracia civil.²²

Otro factor histórico: las guerras internacionales de la segunda mitad del siglo XIX contribuyeron tanto en Perú como en Chile y en Brasil –quizás más que en Argentina– a estrechar los vínculos entre componentes sociales diferentes, y por ende a fortalecer la tendencia “natural” nacionalista de sus respectivos cuerpos de oficiales. El resultado opuesto de la experiencia bélica en el primer caso respecto a los otros dos determinó la diferencia de intensidad de este fenómeno, pero en los recorridos históricos de todos los países mencionados –incluso Argentina– se fue configurando entre los dos siglos una contraposición común sumamente significativa entre, por un lado, la percepción castrense de la sociedad y de la relación que había que establecer entre la misma y el Estado y, por el otro, la concepción de la élite civil de ambas: incluyente la primera –aunque sobre la base de una concepción jerárquica y autoritaria de la organización estatal–; excluyente o de todas formas selectiva la segunda –aunque basada en los principios representativos liberales.²³

Esta dicotomía en términos de principios y valores se consolidó de manera firme sobre todo en el ámbito castrense. La misma creó a menudo un sentido de misión nacional de la oficialidad, que se acababa interpretando como la responsabilidad del cuerpo de oficiales de corregir los errores y compensar la incapacidad de los dirigentes civiles, a partir de una posición de superioridad ética y moral, consecuencia de los rasgos propios del proceso militar de formación de sus cuadros.²⁴

²¹ R. Forte, *Fuerzas armadas...*, *op. cit.*, pp. 147 y 162.

²² *Idem.*

²³ R. Forte, “Génesis del nacionalismo militar: participación política y orientación ideológica de las fuerzas armadas argentinas al comienzo del siglo XX”, *Signos Históricos*, núm. 2, 1999.

²⁴ R. Forte, *Fuerzas armadas...*, *op. cit.*, caps. 1 y 2.

Tal convicción tiene orígenes muy tempranos en el pensamiento militar argentino. Ya en 1885 la revista militar acentuaba el “adelanto moral” de la formación del ejército, capaz de “arrancar del egoísmo político a los que deben tener por único guía de conducta la moral del sacrificio y el deber de que carecen los partidos políticos”.²⁵ No se trataba de una manifestación aislada, sino de una convicción que se ampliaría y consolidaría durante el siglo siguiente. Para citar un ejemplo entre los innumerables posibles: a comienzos de los años veinte otra vez la revista militar exaltaba la capacidad de “las fuerzas militares” de levantar “el espíritu del pueblo” y de mantener “vivos los ideales, para que un materialismo repugnante no invada las esferas de la vida nacional”, en contraposición a los “políticos de poco momento que viven a la caza del voto, detrás de la sórdida canalla, sin más anhelo que su propio [...] egoísmo, el interés y el cálculo”.²⁶

Esta percepción, marcadamente diversa de la interpretación de sus funciones hecha por los militares de otras realidades occidentales —en especial, en Europa y Estados Unidos—²⁷ fue, por lo menos en parte, consecuencia de la continuidad que el conjunto de operaciones citadas otorgó a los sectores castrenses en América del Sur. No se trató, como a menudo se ha sostenido, del fracaso del proceso de profesionalización de las fuerzas armadas, sino de una interpretación peculiar de la oficialidad de sus responsabilidades como cuerpo profesional, consecuencia de los rasgos históricos del proceso citado, de la configuración social peculiar de sus países y de las características institucionales de los nuevos estados nacionales. O mejor, del nexo funcional entre configuración social e instituciones públicas.

Las tareas asignadas al ejército en las primeras décadas posteriores a la constitución de dichos estados fueron consideradas por los oficiales —de manera no del todo equivocada— como una prosecución de las funciones anteriores. Tal elemento determinó una doble consecuencia:

²⁵ “El nuevo ministro de la Guerra”, *Revista del Club Naval y Militar*, núm. 18, t. 3, noviembre 1885, p. 299.

²⁶ C. Rodríguez, “Por el ejército”, *Revista Militar*, núm. 268, 1923, p. 575.

²⁷ Pero con muchos elementos comunes con la interpretación de los cuerpos oficiales de otras regiones, como Asia y África, aunque a menudo en referencia a periodos distintos. Véase S. Huntington, *The Soldier ant the State...*, *op. cit.*, caps. 5, 9, 10 y 11, y F. M. Nunn, *The Time of the Generals. Latin America Professional Militarism in World Perspective*, Lincoln, University of Nebraska Press, 1991.

1) configuró fuerzas armadas profesionales dirigidas y acostumbradas a participar en –y a proporcionar soluciones a– problemáticas de orden constitucional, relacionadas con la seguridad pública y con la soberanía interna del Estado, y 2) consolidó en la sociedad civil una cultura peculiar, que incluía la intervención militar entre los mecanismos legítimos de resolución de las tensiones y conflictos entre grupos de interés y de presión, tanto nacional como interprovincialmente, en especial en relación con la constitucionalidad-inconstitucionalidad de la actuación de las autoridades en el poder. El segundo factor se produjo con intensidad inversamente proporcional al nivel de consolidación y legitimidad de las instituciones civiles, pero en presencia de cuerpos de oficiales de naturaleza común.

Las crisis de los años noventa en el Cono Sur muestran tanto la orientación constante de los grupos civiles a buscar el apoyo de la oficialidad, como el papel decisivo jugado por ésta en definir el resultado del enfrentamiento entre dichos grupos. Los radicales argentinos, en la clandestinidad hasta la reforma electoral de 1912, vincularon sus potencialidades políticas entre el siglo XIX y el XX con la capacidad de sujetar a los militares a sus planes insurgentes –capacidad que como muestran los acontecimientos históricos, siempre fue muy limitada y en constante declive entre 1890 y las dos décadas posteriores.²⁸ Si alguna diferencia puede registrarse con los militares chilenos de fines del siglo XIX, no va en el sentido de la menor trascendencia de su papel interno, sino más bien de la mayor unidad de cuerpo en el marco de dicha participación, como durante la revuelta de 1891 contra el presidente Balmaceda.²⁹ Rouquié subraya que la breve guerra intestina interoligárquica que provocó el suicidio del presidente Balmaceda “no amengua la supremacía civil [...] a pesar de la desertión de un grupo de oficiales”.³⁰ Pero este rasgo no aleja mucho la experiencia chilena de fines del siglo XIX de otras paralelas en el Cono Sur. La presencia de un sector militar revoltoso, aunque fuertemente minoritario, tuvo como consecuencia la ampliación del papel de los otros miembros de la oficialidad en determinar las posibilidades de sobrevivencia de un gobierno, o incluso de un orden político. De manera análoga, las revueltas cívicas y radicales de 1890, 1893 y 1905

²⁸ R. Forte, *Fuerzas armadas...*, op. cit., pp. 95-214.

²⁹ L. A. Rodríguez, *Rank and Privilege...*, op. cit., p. 78.

³⁰ Cursivas mías.

en Argentina no determinaron la afirmación del poder militar sobre el poder civil,³¹ pero sí, otra vez, el carácter imprescindible de su función interna. Ni siquiera en Brasil el papel decisivo de las fuerzas armadas en el derrocamiento del Imperio y la instauración de la República en 1889 logró desplazar a las oligarquías civiles del control del poder durante la década siguiente.³² Pero en todos estos casos la preponderancia de lo civil se asoció a la predisposición de lo militar a sostener dicha preponderancia y a participar en la política interna, y por lo tanto convirtió la ubicación castrense en el marco de un conflicto específico entre civiles en una variable fundamental para la determinación del resultado final.

Hay un acuerdo general entre politólogos e historiadores sobre el significado de la profesionalización militar en el Cono Sur y otras regiones de América Latina. La creación del militar profesional moderno tuvo el objeto de consolidar el poder coactivo del Estado, acercándolo lo más posible al ideal-tipo weberiano del monopolio estatal de la fuerza. Como ya hemos señalado, se trataba de romper los vínculos de fidelidad tradicionales de las fuerzas armadas con los grupos y las sociedades locales —en muchos casos, rezagos de la sociedad de antiguo régimen— para consolidar un vínculo nuevo, de tipo burocrático y de alcance nacional. Este proceso implicaba la afirmación de la autonomía profesional del sector castrense del poder civil; es decir, de su capacidad de otorgar funciones y de establecer criterios de carrera sobre la base de reglas internas propias de su institución, libre de los condicionamientos derivados del medio político.³³ Sin embargo, el acuerdo académico se rompe alrededor de las consecuencias que dicha profesionalización produjo. Algunos autores, como Rouquié, señalan que la autonomía reconocida jurídicamente acabó otorgando a los militares “los medios para su propia intervención política”.³⁴ Pero no fue la autonomía en sí misma la que determinó la capacidad militar de intervención, sino más bien las condiciones en que la misma se produjo.

Perlmutter —de acuerdo en términos generales con otros autores, como Payne y Gilmore— insiste en la importancia de las funciones históricas de carácter interno que hemos señalado, cuando afirma acertadamente que “al buscar el apoyo de los militares, los políticos

³¹ R. Forte, *Fuerzas armadas...*, *op. cit.*, pp. 95-121, 140-141 y 181-182.

³² A. Rouquié, *El Estado militar...*, *op. cit.*, p. 81.

³³ Véase *ibid.*, p. 83, y R. Forte, *Fuerzas armadas...*, *op. cit.*, pp. 146-162.

³⁴ A. Rouquié, *El Estado militar...*, *op. cit.*, p. 83.

amenazan las propias estructuras constitucionales y políticas a las que están entregados”, aunque a menudo dicha petición de apoyo se haga en nombre y en defensa de las mismas.³⁵ Dicha amenaza, en América del Sur, se produjo en doble sentido: por el recurso a la fuerza de los grupos civiles, rebasando los canales proporcionados por las instituciones constitucionales, y por sentar un antecedente que fortaleció el principio de intervención coercitiva contra un gobierno constitucional, sobre la base de una valoración subjetiva de su legitimidad, o incluso de su legalidad. Ambos factores no sólo fueron consecuencia de una escasa legitimidad de las instituciones estatales sino que contribuyeron también a su debilitamiento. El primer factor fortaleció el cuerpo de oficiales en tanto grupo de presión capaz de afectar directa o indirectamente el proceso interno de toma de decisiones; el segundo factor contribuyó a consolidar en las fuerzas armadas la idea del derecho subjetivo a la intervención, particularmente importante en el marco de una oficialidad desde sus orígenes acostumbrada a intervenir principalmente en la defensa de la soberanía del Estado en contra de actores internos.

La mayor parte de las fuerzas armadas sudamericanas entraron al siglo XX encabezadas por un cuerpo de oficiales con estos rasgos profesionales. La interiorización del principio del derecho subjetivo a la intervención se tradujo muy pronto en la configuración de una cultura política propia del sector castrense, de tendencia ideológica contrapuesta a la orientación tradicional liberal de la sociedad civil —o por lo menos de las élites civiles— condicionada por los valores y los rasgos propios de la formación castrense.³⁶ Casi ningún estudio ha reconocido la presencia de este elemento en los comienzos del siglo XX. En nuestro estudio sobre el caso argentino, hemos buscado averiguar los orígenes y el desenvolvimiento político-cultural de la oficialidad, pero para otros casos muy poco sabemos todavía acerca de esta variable, sumamente importante en nuestra opinión, para fundamentar la supuesta excepcionalidad de la experiencia chilena.³⁷ Los estudios realizados reconocen la presencia castrense en el ámbito interno, en

³⁵ Véase A. Perlmutter, *Lo militar y lo político...*, *op. cit.*, p. 234; S. Payne, *Politics and the Military in Modern Spain*, Palo Alto, Stanford University Press, 1967, y R. L. Gilmore, *Caudillism and Militarism in Venezuela*, Atenas, Ohio University Press, 1964.

³⁶ R. Forte, “Génesis del nacionalismo...”, *op. cit.*,

³⁷ En este libro el artículo de Verónica Valdivia Ortiz de Zárate busca llenar ese vacío relativo al caso chileno; véase también su estudio reciente, *El golpe después del*

la mayor parte de los recorridos históricos de América del Sur, pero existen interpretaciones esencialmente distintas acerca de los orígenes, el significado y la orientación de esta presencia. Las diferencias se registran sobre todo alrededor de dos cuestiones: *a)* los objetivos políticos y los rasgos ideológicos de la participación castrense, y *b)* el grado de la unidad del cuerpo de oficiales acerca de los objetivos que había que conseguir y de la estrategia que había que adoptar. Ambas cuestiones están estrictamente vinculadas con el tercer factor que hemos señalado antes como relevante en la interpretación de la tendencia golpista de las fuerzas armadas; es decir, los valores interiorizados por la oficialidad a lo largo de su recorrido histórico.

Dos de los principales estudiosos del fenómeno militar en Argentina, el historiador Robert Potash y el sociólogo Alain Rouquié, han hecho hincapié en la tendencia conservadora de la intervención castrense hasta fines de los años treinta. Esta lectura coincide con la interpretación de otros autores acerca de otras regiones en periodos análogos y presenta la actuación de los militares como esencialmente funcional a los intereses de las componentes sociales tradicionales, que controlaban hasta entonces los distintos poderes del Estado. Bourricaud describe una orientación análoga para la oficialidad peruana, mientras Rouquié muestra la voluntad de la mayoría de la oficialidad chilena hacia la preservación del orden tradicional. La actuación no siempre uniforme de las distintas instituciones castrenses en cada país serían los síntomas de divisiones internas en cada cuerpo de oficiales, derivadas de la presencia contemporánea en su seno de dos corrientes ideológicas contrapuestas: liberal-conservadora y nacionalista. En el caso específico de Argentina, tales divisiones emergerían de manera evidente —según estos autores— a fines de los años veinte, y perdurarían durante la década siguiente hasta el comienzo de los años cuarenta, desembocando en el golpe militar nacionalista de 1943, de signo opuesto (siempre según estas interpretaciones) al anterior golpe de 1930.

Esta perspectiva no resulta convincente en nuestra opinión para entender el viraje ideológico de la oficialidad argentina, que aparece como un fenómeno demasiado repentino, a partir de un cuerpo de ofi-

Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2003, en especial el cap. I.

ciales cuya acción hasta fines de los años treinta parece simplemente dirigida a salvaguardar el orden político y social tradicional, liberal y excluyente. Esta carencia explicativa deriva del descuido de algunos indicadores político-culturales que evidencian la presencia en el sector castrense argentino de fuertes elementos nacionalistas ya a partir del comienzo del siglo XX y la ausencia en el mismo de una oposición visible y significativa a esta orientación. Los mismos indicadores muestran una tendencia en el ejército, cada vez más marcada a lo largo de las primeras tres décadas del siglo XX, a dirigir su participación en los asuntos internos hacia la realización de un proyecto político propio, separado de la clase dirigente civil.³⁸ La falta de apoyo de la oficialidad alta e intermedia a la insurrección radical de 1905, en contraste con la actitud de signo opuesto adoptada en 1890 y 1893, representa uno de estos indicadores. Este mismo indicador cobra importancia real si lo relacionamos con los ensayos de tendencia nacionalista publicados por la revista militar, que encontramos numerosos ya durante la primera y la segunda década del siglo XX.³⁹ Exactamente, durante el crítico año de 1905, la revista citada ponía en guardia en contra del “mercantilismo” dominante y de “nuestro escéptico materialismo de hombres del siglo XX” así como se pronunciaba de manera desfavorable sobre la creciente propensión al “cosmopolitismo” que asociado a los factores anteriores provocaría según esta interpretación el “diluir del sentimiento de amor a la Patria”.⁴⁰

Esta perspectiva, con rasgos de orientación antiliberal, se fue consolidando en los años siguientes, dibujando de manera cada vez más delineada y específica un proyecto político militar alternativo, de tipo nacionalista, con fuertes características jerárquicas, autoritarias y modernizadoras, al mismo tiempo. Lisa North sostiene que en América Latina, hasta 1920, la oficialidad estuvo “identificada con un grupo dirigente” civil, mientras que después de esta fecha empezó a actuar políticamente “con una tendencia ideológica independiente”.⁴¹

³⁸ R. Forte, *Fuerzas armadas...*, op. cit., pp. 215-237.

³⁹ *Ibid.*, pp. 181-183.

⁴⁰ Véase G. Munilla (coord.), “Velada musical”, *Revista del Circulo Militar*, núm. 1-2, t. XI, julio-agosto, 1905, p. 59, y L. M. Degenova, “La preparación cívica y guerrera del niño japonés”, *Revista del Circulo Militar*, núm. 3, septiembre 1905, p. 143.

⁴¹ L. North, *Civil-Military Relations in Argentina, Chile and Peru*, Berkeley, Institute of International Studies, 1966, p. 60.

También Huntington individualiza de 1920 un momento de cambio en la tendencia y actuación política de las fuerzas armadas, en el marco de lo que el autor define como “pretorianismo oligárquico” hasta 1920, y “pretorianismo radical” para el periodo posterior.⁴² Estas esquematizaciones resultan sumamente útiles en el análisis de la *realización* o *institucionalización* del proyecto castrense, pero descuidan al mismo tiempo el momento anterior, que hemos definido en otro estudio como la fase *proyectiva* del nacionalismo militar.⁴³ Es exactamente esta distinción la que nos permite enfocar con mayor cantidad de detalles el recorrido histórico del poder militar en la región latinoamericana, individualizando en las tercera y cuarta décadas del siglo XX los factores de discontinuidad en la línea señalada por los autores citados. En nuestro estudio sobre el caso argentino, las fuentes militares –revistas, boletines, memorias, etc.– nos han mostrado que la “tendencia ideológica independiente” de los militares tiene su origen en un periodo anterior a los años veinte, de difícil individualización en su momento de arranque, pero que podemos hacer coincidir *grosso modo* con la primera consolidación de la oficialidad profesional, en las últimas dos décadas del siglo XIX. Particularmente significativo al respecto resulta ser el arranque de la nueva serie de la revista militar en 1900, después del corte determinado por la falta de recursos posterior a la crisis de 1890, en donde se criticaban las desigualdades del régimen vigente y se auspiciaba una mayor integración social “preparando a los hijos de colonos y trabajadores al sentimiento nacional por la educación moldeada para ello”.⁴⁴

Aunque no tenemos estudios homogéneos acerca de la temática militar para todos los casos sudamericanos, de los distintos recorridos históricos emergen dos aspectos comunes interesantes, que a menudo han contribuido a crear confusión en los análisis acerca de la acción militar en América Latina. En primer lugar, el apoyo a la Constitución

⁴² Huntington individualiza una tercera etapa a partir de 1950, que denomina “pretorianismo de masa”. Véase *Political Order in Changing Societies*, New Haven, Yale University Press, 1968, pp. 208-211. Véase también A. Perlmutter, *Lo militar y lo político...*, *op. cit.*, pp. 239-240.

⁴³ Véase R. Forte, “Militares, cultura política y proyecto económico en la Argentina de la primera mitad del siglo XX”, *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras*, núm. VIII, 2003.

⁴⁴ La Comisión Directiva, “1810-25 de mayo de 1910”. Véase R. Forte, *Fuerzas armadas...*, *op. cit.*, pp. 215-216.

contra las desviaciones fraudulentas de los líderes civiles, reiterado en las declaraciones públicas de la oficialidad y que a menudo ha sido evidenciado como un indicador de la tendencia liberal-conservadora de la oficialidad. En realidad, dicho apoyo se otorgó normalmente sobre la base de una interpretación propia del texto constitucional y del significado que había que atribuir a sus principios, y sobre todo del papel *legítimo* que las fuerzas armadas podían —y *en extremis* tenían que— desarrollar al respecto. En segundo lugar, la actitud aparentemente contraria —otra vez, en los discursos públicos— a la participación de la oficialidad en la actividad política, que ha sido interpretada como un indicador de profesionalidad del cuerpo de oficiales y de su distanciamiento de la intervención en los asuntos internos. No obstante, los documentos castrenses muestran que el rechazo militar a la política se refiere al apoyo a grupos políticos civiles, pero no excluye —y a menudo incluso implica— la participación autónoma del cuerpo de oficiales en la política interna. Según la interpretación castrense, el primero tenía que evitarse porque acababa mermando las posibilidades castrenses de dirigir su propia acción hacia la realización de un proyecto propio de reorganización política de la sociedad y el Estado; mientras que la segunda se consideraba parte de las responsabilidades propias de la oficialidad, estrictamente vinculada con el objetivo principal del militar profesional: garantizar y salvaguardar la seguridad nacional.

En otras palabras, se trata de una toma de posición antipartidista en sentido político e *institucional*; y no contra la política en sentido más amplio, de incompatibilidad entre funciones y valores castrenses, por un lado, y actuación en la misma, por el otro. Curiosamente, los estudios tanto históricos como politológicos no han utilizado analíticamente esta diferenciación, indispensable para entender el significado real de la actuación interna de las fuerzas armadas. La supuesta “apoliticidad” de los militares era sinónimo de desvinculación de las instituciones representativas liberales, y sobre todo de oposición a los espacios de libertad política que las mismas, por definición, toleraban en ventaja de movimientos de opinión considerados peligrosos para la seguridad nacional, y en algunos casos para la misma sobrevivencia institucional del ejército. Por lo tanto, la activación de las fuerzas armadas en el ámbito interno se produciría, eventualmente, de manera autónoma de los distintos grupos de interés civiles y en relación con la lectura de los altos mandos castrenses, acerca de las condiciones internas de su propio país y de las implicaciones que

dichas condiciones podrían tener para la salvaguarda de la seguridad nacional. Dicha lectura, a su vez, era condicionada por los rasgos político-culturales que, como hemos visto, se estaban afirmando en la oficialidad desde el comienzo del siglo XX: nacionalismo, jerarquía, integración social. Pero a partir de lo anterior, la *eventualidad* y la probabilidad de la intervención castrense resultarían directamente proporcionales a la cantidad y a la intensidad de los factores contrarios a la seguridad nacional, e inversamente proporcionales a la capacidad de las instituciones civiles de lidiar con ellos. La fórmula selectiva de la participación política, propia del sistema liberal de origen decimonónico —que excluía, por ejemplo, a la población extranjera— según la perspectiva castrense, resultaba menos funcional que la propuesta de constitución de un orden nacionalista, orgánico y desigual, pero capaz de integrar y controlar a partir de un esquema jerárquico una cantidad mayor de la población.⁴⁵

Las sublevaciones de los jóvenes *tenentes* en Brasil —en Río de Janeiro en 1922, y en São Paulo, en 1924— se llevaron a cabo reclamando la aplicación correcta de la Constitución contra las usurpaciones del poder civil, mientras que los oficiales insurrectos en sus declaraciones afirmaban tomar las armas para “defender los derechos del pueblo, restablecer el respeto por la Justicia y limitar los poderes del ejecutivo”.⁴⁶ Es evidente el paralelismo con el pronunciamiento de la rebelión cívica de 1890 en Buenos Aires, en donde se insistía en que “el ejército nacional comparte con el pueblo las glorias de este día; sus armas se levantaron para garantizar el ejercicio de las instituciones”, para aclarar en seguida que “el soldado argentino es hoy día *como siempre* el defensor del pueblo” y “la columna más firme de la Constitución”, y si “la dejara perecer sin prestarle su brazo, *alegando la obediencia pasiva*, no sería el ciudadano armado de un pueblo libre, sino el instrumento y el cómplice de un déspota”.⁴⁷ Cuarenta años más tarde el ejército brasileño puso fin a la primera fase republicana, y en 1937 apoyó la rearticulación nacionalista del Estado bajo la dirección de Getulio Vargas;

⁴⁵ R. Forte, “Génesis del nacionalismo...”, *op. cit.*

⁴⁶ Véase M. C. Spina, *Tenentismo y política*, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1977, pp. 31-68, y A. Rouquié, *El Estado militar...*, *op. cit.*, p. 122.

⁴⁷ Véase R. Forte, “Génesis del nacionalismo...”, *op. cit.*, pp. 118-119, y R. Forte, María Luna y G. Guajardo (coords.), *Consenso y coacción. Estado e instrumentos de control político y social en México y América Latina (siglos XIX y XX)*, México, El Colegio de México y El Colegio Mexiquense, 2000, pp. 21-22.

mientras que en el mismo periodo, el ejército argentino, encabezado por el general nacionalista José Félix Uriburu, lideró por primera vez un golpe de Estado en contra de un gobierno constitucional y motivó la intervención con la necesidad de llevar a cabo la “defensa de la Nación y de sus instituciones”, y de acompañar “al pueblo el 6 de septiembre, como lo acompañó en las grandes revoluciones de nuestra corta historia, cuando fue necesario afirmar un derecho con la fuerza”.⁴⁸ En 1943, la oficialidad argentina liderará en primera persona una reorganización estatal con la misma orientación ideológica de Brasil, en donde el sector castrense se pondrá a la cabeza del Estado de manera directa a partir de 1964. En ambos casos, el proceso e intervención militar se vio marcado por una creciente tensión ideológica entre líderes civiles y líderes militares, que se produjo acerca de cuestiones tan importantes como la amplitud de la integración popular y el nivel de centralización y las funciones del Estado.⁴⁹

En Chile, un comité conformado por jóvenes oficiales, siguiendo una tendencia parecida exigió al Congreso, en 1924, “la aprobación inmediata de una serie de *leyes sociales*” relativas a “accidentes laborales, cajas de jubilaciones y contratos de trabajo”, e impuso a continuación “la disolución del Parlamento” para luego permitir la formación de una junta militar. Este episodio marca el arranque de un periodo de presencia castrense en la dirección del Estado, que perdurará hasta 1932. Estos años se caracterizaron por la figura del mayor Carlos Ibáñez y, después de su dimisión, por una serie de sublevaciones militares que en un solo año ocasionaron cuatro golpes de Estado y siete gobiernos.⁵⁰ Pero tampoco en Chile el vínculo directo establecido por varios autores entre intervención castrense e intereses de los grupos dominantes tradicionales parece darse de manera tan clara, y merecería ser profundizado en perspectiva histórica. Los elementos de contraste entre dichos grupos y

⁴⁸ Véase R. Forte, “Génesis del nacionalismo...”, *op. cit.*, p. 421. “Discurso del general Justo, candidato proclamado a presidente, ante la convención de la UCR antiperonalista”, en *Candidatura presidencial Agustín P. Justo. Recopilación cronológica de sus recientes cartas y discursos*, Buenos Aires, Actualidad Comercial, s.f., *Fondo Documental del Presidente Agustín P. Justo*, caja 28, doc. 49, Archivo General de la Nación de Buenos Aires.

⁴⁹ R. Forte, *Fuerzas armadas...*, *op. cit.*, pp. 473-478, y M. Carmagnani (coord.), *Federalismos latinoamericanos...*, *op. cit.*

⁵⁰ A. Rouquié, *El Estado militar...*, *op. cit.*, pp. 123-126.

la actuación militar en sus distintas manifestaciones son demasiado evidentes para ser pasados por alto como simplemente instrumentales: las reclamaciones sociales del pronunciamiento de 1924, la política económica dirigista del ministro de Ibáñez, Pedro Ramírez, y el anuncio de la creación de la República Socialista de Chile por los oficiales de la fuerza aérea, en apoyo “a los más desfavorecidos contra la explotación de los oligarcas nacionales y los imperialistas extranjeros”.⁵¹

Esta posición, expresada con tonos claramente nacionalistas, nos acerca otra vez a la experiencia militar argentina y, de manera quizás menos marcada y evidente, a la brasileña. En el primer caso, resultan significativas las alarmas expresadas por la revista militar acerca de los peligros para la sobrevivencia de la nación, debido a la difusión de “nociones inconexas de utilitarismo” que “aniquilan las fuerzas morales y los ideales generosos” o la preocupación de que “los intereses de las personas primen sobre el supremo interés de la nación”.⁵² Esta orientación seguiría intensificando sus tonos a lo largo de las décadas posteriores, hasta los golpes de Estado de 1930 y 1943, asociando cada vez más los rasgos nacionalistas a actitudes de carácter popular o populista, en contraste con la cultura política de las élites tradicionales, y del todo parecidas a las adoptadas por los militares chilenos. La crítica al “exclusivismo de las diferentes clases sociales” que “desarmoniza sus intereses”, asociada a la propuesta de restablecer “la armonía de ellos [...] donde residen las fuerzas de las naciones [...]”,⁵³ resulta indicativa de la presencia, ya en las primeras dos décadas del siglo XX, de una cultura política castrense no liberal, que emergerá más evidente durante los años veinte y treinta.

La perspectiva castrense de la organización del Estado y los poderes públicos, que se desarrolló a lo largo de la primera mitad del siglo XX, fue entonces al mismo tiempo “vertical y jerárquica” y “nacionalista e incluyente”. Esta perspectiva no tenía mucho en común con la doctrina liberal prevaleciente entre los sectores civiles dominantes, más allá de la inquietud compartida de realizar un control más efectivo sobre los diversos componentes de la sociedad. Por lo demás, las diferencias son evidentes y se configuraron de manera más marcada durante el periodo

⁵¹ *Ibid.*, p. 125.

⁵² R. Forte, *Fuerzas armadas...*, *op. cit.*, p. 219.

⁵³ *Ibid.*, p. 225.

mencionado. Relativo a los mecanismos y estrategias para lograr dicho control, los militares auspiciaban una mayor centralización de los poderes públicos, que implicaba la sustancial penetración del Estado en todo el territorio nacional, en sentido opuesto al federalismo tradicional liberal. Respecto a los vínculos entre los distintos sectores de la sociedad y entre ellos y el Estado, los militares insistían en la necesidad de establecer la superioridad del interés común sobre las necesidades particulares, según un concepto orgánico del cuerpo social, contrapuesto a la visión individualista de los liberales tradicionales. Por último –pero no menos importante– la oficialidad latinoamericana afirmaba, desde fines del siglo XIX, la superioridad del sector castrense en la conducción de los asuntos públicos por razones históricas, y de formación tanto en términos técnicos como de valores.

En el caso argentino no se encuentran documentos de origen militar que cuestionen de manera clara esta perspectiva y que nos muestren la existencia de tensiones ideológicas y políticas en el interior del cuerpo de oficiales. Aunque falta mucho por investigar, tampoco en los otros casos resulta patente la existencia de contrastes de este tipo, o por lo menos de un conflicto capaz de quebrar la unidad del cuerpo de oficiales alrededor de un proceso de fortalecimiento corporativo común. En Chile, la entidad de la tensión dentro de las fuerzas armadas, alrededor del aparente conflicto entre los jóvenes oficiales y los miembros de la junta militar de 1924, no queda del todo clara y necesita ser ampliada a partir de fuentes militares. Como en el supuesto conflicto entre oficialidad liberal y nacionalista en el caso de Argentina, también en Chile durante las primeras décadas del siglo XX parece emerger más bien una tensión alrededor de opciones estratégicas, más que un verdadero contraste de carácter ideológico y político, y menos acerca de la necesidad de fortalecer el cuerpo de oficiales como grupo de poder interno. Horowitz y Trimberger han subrayado que la oficialidad latinoamericana en su conjunto –no necesariamente al mismo tiempo– buscaba la manera más viable de “liberar al Estado del lastre de las clases sociales”, para que pudiera cumplir su misión nacional de manera eficaz y funcional.⁵⁴

La dicotomía a menudo señalada entre corrientes de signo diferente en el interior de la oficialidad –liberal y nacionalista, en Argentina;

⁵⁴ A. Rouquié, *El Estado militar...*, op. cit., p. 130.

conservadores e izquierdistas, en Chile; conservadores y progresistas en Brasil— ha ofuscado, en mi opinión, el hecho histórico que está por arriba de estas divisiones: la prioridad otorgada por la oficialidad al principio de la cadena de mando y al fortalecimiento corporativo de su propio cuerpo. Alrededor del segundo aspecto no existe, como puede parecer obvio, ningún contraste documentable, por lo menos en relación con el objetivo en sí mismo. El primer elemento, totalmente descuidado en los estudios existentes, nos indica que más allá de posibles rebeliones coyunturales o locales de grupos de oficiales de nivel bajo o intermedio, el camino que se seguiría tanto desde el punto de vista ideológico como estratégico se decidía en las altas esferas de la oficialidad, a las cuales como consecuencia de la formación y de los valores interiorizados por los miembros del sector castrense desde el arranque de su carrera, los demás niveles obedecían sin entablar debates específicos. La eficacia del principio de la cadena de mando resalta en las peculiaridades de la reforma militar argentina de 1901, en donde —aunque permanecía el criterio anterior de intervención de los poderes civiles en la selección de los oficiales que había que promover a los grados más altos— la oficialidad insistió y logró que se introdujera una suerte de preselección con la creación del Tribunal de Clasificación de Servicios Militares, enteramente compuesto por oficiales de alto rango.⁵⁵ Dicha preselección se realizaba, significativamente, no sólo sobre la base de capacidades técnicas, sino adoptando también criterios éticos y morales, y en algunos casos incluso ideológicos.⁵⁶ En Chile la importancia de la cadena de mando permitió la salida pacífica de la Presidencia del coronel Carlos Ibáñez en 1931, a pesar de que las fuerzas armadas no compartieran la decisión de abandonar el poder.⁵⁷

Lo anterior nos remite al significado real del supuesto distanciamiento de la oficialidad latinoamericana de la política, que queda magistralmente sintetizada en la afirmación del general brasileño

⁵⁵ El mecanismo selectivo originario, establecido con la Ley de Reglamentación de Cuadros y Ascensos de 1882, quedaba bajo el control del Poder Ejecutivo y del Senado, sin ninguna intervención previa del cuerpo de oficiales. Véase R. Forte, *Fuerzas armadas...*, *op. cit.*, pp. 80-81 y 183-184, y K. Lang, "Disciplina e controllo nell'organizzazione militare", en F. Battistelli (ed.), *Marte e Mercurio. Sociologia dell'organizzazione militare*, Milán, Franco Angeli, 1990.

⁵⁶ R. Forte, *Fuerzas armadas...*, *op. cit.*, p. 245.

⁵⁷ Véase el artículo de Verónica Valdivia Ortiz de Zárate en este mismo libro.

Monteiro: “Hay que hacer la política del ejército y no política en el ejército”.⁵⁸ El general expresaba al mismo tiempo una concepción peculiar del orden político, en sintonía con la tendencia de otras instituciones castrenses del Cono Sur, sosteniendo que el Estado “debe tener el poder de intervenir para regular toda la vida colectiva y disciplinar de la nación”.⁵⁹ De manera similar, la revista militar argentina hacía hincapié ya en los años veinte en la urgente “necesidad de reorganizar las instituciones [...] muchas de las cuales [...] no han evolucionado con la época y siguen actuando en el presente bajo el imperio de exigencias ya desaparecidas”.⁶⁰ Dicha reorganización no encontraba mejor liderazgo, según el coronel argentino Carlos Smith, que la oficialidad militar por su “sensibilidad” —por arriba de cualquier otro “organismo social”— “por la causa nacional” consecuencia de “la ausencia de partidismo” y de la “incontaminación de ambiciones bastardas”.⁶¹ Tampoco el ejército chileno parece ajeno a la tendencia de exaltar la participación interna de las fuerzas armadas de manera autónoma de las fuerzas políticas civiles, como emerge de la caracterización hecha del ejército, en 1921, en *El Mercurio*, en tanto que “guardián colocado en las puertas del hogar”, dedicado a “mantener celoso el orden y la disciplina social en el interior”.⁶² Unos años después, un importante protagonista de la vida política argentina de los años treinta y en aquel entonces ministro de Guerra, aclaraba los términos de la relación militares-política según la oficialidad, especificando que sí, por un lado, “la misión directa del soldado [...] sólo consiste en tutelar el orden interno y proporcionar la seguridad hacia el exterior”, por el otro, “se engañaría [...] quien creyera que el cuartel puede vivir ajeno o asistir pasivo [...] a la obra de construcción colectiva”.⁶³

Sin embargo, la oportunidad de llevar a cabo *la política del ejército*, afirmada con énfasis por el general Monteiro, no era sinónimo de acción coercitiva o de golpe de Estado. Más bien remitía a la posibilidad de utilizar el instrumento golpista, cuando las circunstancias lo convirtieran en una decisión oportuna y conveniente para los intereses de las fuerzas

⁵⁸ A. Rouquié, *El Estado militar*, op. cit., p. 132.

⁵⁹ *Idem*.

⁶⁰ Emiliani, 1921, p. 115.

⁶¹ R. Forte, *Fuerzas armadas...*, op. cit., p. 300.

⁶² *El Mercurio*, 19 de septiembre de 1921.

⁶³ R. Forte, *Fuerzas armadas...*, op. cit., p. 325.

armadas, cada vez más identificadas por la oficialidad de la región con el interés nacional. Entonces, el diferente nivel de intervención registrado durante la primera mitad del siglo XX no parece derivar de la mayor o menor orientación del cuerpo de oficiales hacia la participación política y la intervención coercitiva; en otras palabras, de la mayor o menor legalidad, sino más bien de las condiciones más o menos favorables para la intervención misma, y en cierta medida de la necesidad sentida por la oficialidad de actuar coercitivamente con el fin de cumplir con su responsabilidad primaria; o sea, la salvaguarda de la seguridad nacional. Pero por una oficialidad que no parecía cuestionar en aquel entonces su derecho legítimo a intervenir cuando lo considerara necesario.

Dicho de otra forma: las coyunturas específicas en distintos casos y en periodos diferentes modificaron las posibilidades y las estrategias de intervención directa e indirecta de cada cuerpo de oficiales. Tales coyunturas afectaron de manera distinta otros dos elementos importantes de la propensión militar hacia el golpe de Estado: la posibilidad del cuerpo de oficiales de fortalecerse como grupo de presión, aunque en una situación de total subordinación a las autoridades civiles, y las características del orden y los equilibrios internos, que en distintos países se configuraron según niveles variados de consenso hacia la institución militar y el enfrentamiento entre grupos sociales.

En Argentina, las fuertes corrientes migratorias que llegaron de Europa entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, contribuyeron a aumentar la debilidad de las instituciones representativas liberales, debido a la cantidad significativa de población no naturalizada —excluida del proceso electoral en todos los niveles: federal, provincial y municipal— y a las ideologías importadas por los inmigrantes.⁶⁴ Las necesidades de integración de una población homogénea, con porcentajes cada año más amplios de elementos extranjeros, permitieron a la oficialidad argentina establecer una importante línea de continuidad en su participación interna, mediante la propuesta de introducir el servicio militar obligatorio, organizado con finalidades principalmente educativas y sociales.⁶⁵ El

⁶⁴Véase N. Botana, *El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986; E. Gallo y R. Cortés Conde, *La república conservadora*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, y R. Forte, "Inmigración y marginalidad política en Argentina", *Análisis Político*, núm. 29, Universidad Nacional de Colombia, septiembrediciembre, 1996.

⁶⁵R. Forte, *Fuerzas armadas...*, *op. cit.*, pp. 147-162.

fracaso posterior del intento de integración social del gobierno radical, entre 1916 y 1919, favoreció la progresiva desarticulación de la sociedad y la pérdida gradual de credibilidad de las instituciones representativas liberales. La presencia de un alto porcentaje de población inmigrante no naturalizada, que como tal no tenía acceso al voto, acabó volviendo atractiva la propuesta que se apoyaba en las instituciones citadas, prometiendo al mismo tiempo la cooptación de los sectores populares por otros medios, como el proyecto nacionalista formulado por la oficialidad militar.⁶⁶ Sobre esta base fueron creándose las condiciones favorables para el golpe de Estado de 1930, intervención preliminar, en nuestra opinión, a la más efectiva trece años después que haría posible la transformación real del Estado, según los criterios jerárquicos y nacionalistas apoyados por el sector castrense desde el comienzo del siglo.

En Brasil el proceso de afirmación del nacionalismo militar tuvo un recorrido cronológico diferente, pero con ciertos rasgos parecidos. La llegada de Getulio Vargas a la Presidencia de la República fue el producto de dos causas complementarias: la imposibilidad de constituir un poder central efectivo, utilizando las instituciones creadas por la Constitución liberal de 1895, y las presiones militares hacia el fortalecimiento del Estado. En el marco de fuerzas poderosas de tendencia centrífuga, los militares brasileños a partir de 1930 ocuparon el espacio abierto dejado por la debilidad institucional civil, y mantuvieron su presencia, aunque indirecta, en el proceso de toma de decisiones del país, hasta establecer un papel más sustantivo y exclusivo tras el golpe de Estado de 1964.

Lo anterior muestra que en todos los casos señalados la intervención de las fuerzas armadas en la política interna fue producto de la conjugación de variables distintas, tanto de origen propiamente castrense como de carácter histórico y coyuntural; producto de la actitud y de la cultura de actores externos al medio militar. Entonces, la tendencia de la oficialidad a intervenir activamente en el proceso de toma de decisiones del Estado puede considerarse como un elemento latente, que se activó sólo en la medida en que se produjo la conjugación mencionada.

⁶⁶ R. Forte, "Radicalismo y militares...", *op. cit.*

LA INTERVENCIÓN MILITAR EN AMÉRICA DEL SUR ENTRE EL COMIENZO DE LA GUERRA FRÍA Y LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DÉCADA DE 1970

¿Qué factores permitieron la *pax interna* chilena entre 1932 y 1970; o sea, desde el momento de arranque de la segunda presidencia de Alessandri hasta la llegada de Allende al Palacio de la Moneda? Para el caso chileno, falta un estudio puntual sobre las fuentes militares relativas al periodo citado.⁶⁷ Es a lo largo de este periodo cuando surge en Chile el mito de un ejército con una orientación sustancialmente diferente respecto a los otros países del Cono Sur y quizás a toda la región latinoamericana.⁶⁸ Este mito favoreció después la tesis de la intervención militar de 1973 como consecuencia de factores principalmente (según algunas interpretaciones exclusivamente) externos. Pero poco o nada sabemos de la evolución del pensamiento y la cultura política castrense durante este largo periodo; de las variables que sin excluir la importancia de las presiones coyunturales internacionales jugaron un papel importante en la configuración de un cuerpo de oficiales preparado para dar respuesta coercitiva a dichas presiones.

Heraldo Muñoz y Tony Smith insisten en la importancia determinante de los factores internos que favorecieron los acontecimientos chilenos de 1973.⁶⁹ El primero sostiene que fueron el resultado del complejo proceso de polarización interna, difícilmente afectable desde afuera.⁷⁰ Smith va más allá y considera que los desequilibrios del comienzo de la década de 1970 fueron en parte consecuencia de la fuerte oposición tanto de derecha como de izquierda a la política del presidente Frei; oposición que impidió llevar a cabo las reformas económicas y

⁶⁷ No obstante, los diversos trabajos de Verónica Valdivia Ortiz de Zárate buscan remediar esta situación; véase su contribución a este libro. También, véase Enrique Brahm García, *Preparados para la guerra. Pensamiento militar chileno bajo la influencia alemana. 1885-1930*, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2003.

⁶⁸ El caso de México se considera a menudo atípico, y de cualquier manera las fuerzas armadas estuvieron presentes en la historia de este país durante las primeras décadas del siglo xx, aunque bajo una forma distinta.

⁶⁹ A. Lowenthal (ed.), *Exporting Democracy. The United States and Latin America. Case Studies*, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press, 1991, pp. 39-52, y T. Smith, *America's Mission. The United States and the Worldwide Struggle for Democracy in the Twentieth Century*, Princeton, Princeton University Press, 1994, pp. 232-234.

⁷⁰ A. Lowenthal, *Exporting Democracy...*, *op. cit.*, p. 42.

sociales inducidas por la Alianza para el Progreso, las cuales hubieran permitido reducir las fuertes tensiones y la polarización social.⁷¹ Las variables señaladas (polarización interna y oposición sistemática) habrían desestabilizado a la sociedad y al sistema político chileno ya antes de la llegada de Unidad Popular al poder, creando de esta manera las condiciones necesarias para la intervención militar.

La ausencia del mismo factor explicaría el largo periodo anterior de no intervención castrense. Según Rouquié, esta ausencia sería consecuencia de la posibilidad de consolidación temprana de un Estado centralizado, favorecida a su vez por los siguientes elementos: la menor fuerza de los actores centrífugos durante el siglo XIX; los rasgos geográficos del territorio chileno, que acabó favoreciendo la opinión de la mayor eficacia de un orden centralizado; la victoriosa guerra del Pacífico de 1879-1883, que cimentó *simultáneamente* —el elemento de simultaneidad es, en nuestra opinión, esencial— el prestigio del ejército y de los dirigentes civiles,⁷² y la no coincidencia entre poder económico y poder político, que garantizó la autonomía de las instituciones representativas y por ende su mayor legitimación.

La caracterización hecha por Rouquié resulta sugerente, debido a que evidencia un importante elemento de diferenciación con los otros casos que hemos analizado; a su vez muestra la falta de condiciones favorables para la intervención militar en el Chile de la primera mitad del siglo XX. La importancia de dicha falta aparece aún más significativa si consideramos que la única crisis institucional chilena del periodo —la que enfrentó, en 1891, el poder Ejecutivo, en la persona de Balma-ceda, con el poder Legislativo— vio, como hemos señalado antes, la participación activa de la oficialidad, según un esquema parecido a la insurrección cívica argentina de 1890. Además, insistimos, el prestigio del sector castrense se consolidó paralelamente al prestigio del sector civil, y no en contraposición al mismo, como en los otros casos analizados. Esta diferenciación se produjo en el marco de un factor común

⁷¹ T. Smith, *América's Misión...*, op. cit., p. 233.

⁷² Contrariamente, por ejemplo, al caso argentino, en donde el aumento de prestigio de las fuerzas armadas se produjo de manera directamente proporcional al desprestigio del liderazgo civil. Véase R. Forte, *Fuerzas armadas...*, op. cit., y A. Rouquié, *Pouvoir militaire et société politique en République Argentine*, París, Presses de la Fondation Nationale de Sciences Politiques, 1978.

ya analizado: la presencia activa de las fuerzas armadas chilenas en el proceso de consolidación política del Estado.

Sin embargo, nada sabemos de lo que “pensaban” los miembros del cuerpo de oficiales chileno al comienzo de los años setenta y no conocemos –o no lo suficiente– la evolución del pensamiento castrense a lo largo de las décadas anteriores. Esta variable es fundamental, en nuestra opinión, para completar el estudio de los factores que hicieron posible la consolidación del Estado liberal chileno en la segunda mitad del siglo XIX, y la capacidad de las autoridades civiles de establecer de manera continuada un control civil eficaz sobre un sector castrense que no parecía alejarse sustancialmente, en sus rasgos originales, de la cultura y los valores propios de otras instituciones militares sudamericanas.

Las condiciones que permitieron la intervención coercitiva más temprana en otros países de América Latina no parecen crearse en Chile antes de mediado de los años sesenta. Rouquié señala que, con la llegada de Eduardo Frei a la Presidencia en 1964 se rompió el consenso, hasta entonces prevaleciente en todos los componentes sociales chilenos, de actuar exclusivamente en el marco de la legalidad.⁷³ Este rasgo peculiar reducía probablemente no tanto la propensión militar a la intervención interna, sino la percepción de la presencia de componentes sociales internos orientados hacia la subversión y, por ende, peligrosos para la seguridad nacional, factor clave de la activación de los golpes de Estado en otros casos sudamericanos. Para citar sólo unos ejemplos: en la Argentina de 1919, a raíz de los dramáticos acontecimientos de la *semana trágica*, el general Dellepiane –particularmente cercano a la Presidencia radical del momento– en una carta enviada al agregado militar británico en Buenos Aires, mencionaba de manera explícita “la excesiva indulgencia del gobierno” hacia los movimientos anárquicos, que el alto oficial consideraba como los principales responsables de la falta de estabilidad en el país.⁷⁴ Unos años después, otro oficial de rango mucho más bajo señalaba en la revista militar el peligro que representaba para la seguridad del país la presencia de los “elementos subversivos que [...] llegan a esta República, donde encuentran un amplio campo para des-

⁷³ A. Rouquié, *El Estado militar...*, *op. cit.*, pp. 257-258.

⁷⁴ Anexo al despacho núm. 65, 15 de marzo de 1919, Foreign Office 371-3503. Véase D. Rock, *El radicalismo argentino, 1890-1930*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1977, pp. 329-349.

plegar sus ideas exóticas”.⁷⁵ Estas afirmaciones remiten a una situación esencialmente diferente respecto al caso chileno, en donde los desequilibrios creados por los consistentes flujos migratorios entre los siglos XIX y XX entre otras cosas, determinaron la ruptura de aquel consenso social que se registra, al contrario, en el Chile de la época.

Del estudio de Rouquié podemos entonces individualizar dos vectores internos de transformación que favorecieron en Chile la ruptura del consenso antes mencionada: *a)* la disolución del acuerdo que había perdurado hasta entonces, entre las clases dominantes tradicionales, las clases dirigentes que se fortalecieron durante la primera mitad del siglo y las clases medias; ruptura provocada en parte por la política reformista del presidente recién elegido, Eduardo Frei, y *b)* la llegada posterior al poder de una coalición política, la Unidad Popular, sin deudas con el legalismo imperante hasta ese momento en el país, y al contrario poco favorable a la defensa de las instituciones públicas tradicionales.⁷⁶ El segundo vector funcionó más bien como acelerador de la transformación inducida por el primero; ambos produjeron el rápido debilitamiento institucional y jurídico del Estado. Pero lo que más nos interesa en este análisis es mostrar el nexo entre dicho debilitamiento y la posterior intervención de una oficialidad que hasta entonces había aceptado permanecer en la condición constitucional de subordinación al poder civil. En su última publicación, el internacionalista Henry Kissinger señala que en un primer momento incluso algunos componentes políticos democráticos chilenos dieron la bienvenida al derrocamiento de Allende, por considerarlo “un ideólogo marxista radical, dirigido a imponer una dictadura de estilo castrista, con la ayuda de milicias entrenadas en Cuba y armas cubanas”.⁷⁷ Esta interpretación coincidió con la visión castrense de los acontecimientos y de la percepción legalista que la oficialidad había tenido hasta ese momento de la sociedad chilena.

Desde esta perspectiva, la mutación que el entorno político sufrió en Chile a comienzos de los años setenta fue la variable prioritaria para

⁷⁵ S. Guevara, “Favorecer la industria privada”, *Revista Militar*, núm. 304, mayo de 1926, p. 739.

⁷⁶ *Idem*.

⁷⁷ Véase H. Kissinger, *Does America Need a Foreign Policy?: Toward a Diplomacy for the 21st Century*, Nueva York, Touchstone, 2002, p. 279; *White House Years*, Boston, Little Brown, 1979, cap. 17, y *Years of Renewal*, Nueva York, Simon & Schuster, 1999, cap. 24.

crear las condiciones a fin de que un cuerpo de oficiales orientado históricamente hacia acciones de carácter interno se activara contra una coyuntura que interpretaba como amenazante para la seguridad nacional chilena.⁷⁸ La posición ambigua del gobierno de Allende acerca de la legalidad constitucional, aunque no determinante, contribuyó probablemente a acelerar el cambio de actitud de una institución que a la par de la oficialidad de otros países de la región, consideraba la ley y la Constitución como elementos viables sólo en la medida en que se revelaban funcionales para el objetivo prioritario: la defensa de la seguridad nacional y el fortalecimiento de la corporación castrense.

Es en este contexto que tenemos que evaluar la importancia de los factores externos; o sea, el clima peculiar del momento histórico, enmarcado en el más largo periodo que denominamos comúnmente Guerra Fría. Estos factores aumentaron sin duda la percepción de un desafío subversivo interno *estrictamente vinculado con el conflicto internacional entre Este y Oeste*. Este aumento no fue propio del caso chileno y remonta a un periodo bastante anterior al golpe de Estado en Chile. Alfred Stepan, como es sabido, establece un nexo entre esta percepción y el arranque del llamado *new professionalism*; es decir, del profesionalismo militar orientado hacia una misión interna, que se hubiera establecido por lo menos en parte como consecuencia de la primera derrota de un ejército tradicional por mano de una fuerza armada guerrillera, durante la revolución castrista.⁷⁹ Esta orientación —como mostré en el apartado anterior— parece tener raíces más antiguas que, sin embargo, fortalecen la hipótesis de Stepan acerca de la posibilidad de que las condiciones creadas por la Guerra Fría hayan configurado una acción militar interna más sistemática y constante que en el pasado.

Stepan sugiere que el “profesionalismo para una misión interna” derivó esencialmente de la relación inversa establecida por varias oficialidades de la región entre “desarrollo nacional” y “seguridad nacional”. Como consecuencia, la incapacidad reconocida de las autoridades para

⁷⁸Rouquié sostiene que “la destrucción del mito de la neutralidad profesional [del ejército chileno] corresponde a la mutación política que sufre el país”. Véase A. Rouquié, *El Estado militar...*, op. cit., p. 261. Véase también A. Varas et al., *Chile. Democracia y fuerzas armadas*, Santiago de Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1980, cap. XI.

⁷⁹A. Lowenthal (ed.), *Armies and Politics in Latin America*, Nueva York, Holmes and Meyer, 1976.

establecer de manera adecuada el desarrollo del país, hubiera creado las condiciones para la intervención en los asuntos internos de unas fuerzas armadas caracterizadas por estos factores político-culturales.⁸⁰ No obstante, si el *new professionalism* aparece en la época considerada como un fenómeno generalizado en el Cono Sur, el origen establecido por Stepan no nos parece igualmente generalizable. El nivel de desarrollo no era uniforme en todos los países de la región y de todos modos esta problemática sólo representaba un aspecto de la más compleja cuestión de las transformaciones que sufrió la guerra internacional a partir de los años sesenta, que no hay que confundir ni analizar como si representara la cuestión en su totalidad.

Entre tales transformaciones, una de las más importantes para América del Sur fue la extensión en la región de los movimientos guerrilleros, interpretados por las fuerzas armadas de manera no siempre del todo equivocada como prolongación del conflicto internacional entre los dos polos. Inevitablemente, este elemento junto con otros determinó cambios importantes en la doctrina militar sudamericana, la cual sin embargo asumió una configuración propia de la región, tanto en su origen como en sus peculiaridades.⁸¹ La doctrina de “seguridad nacional”, en sentido antiguerrillero y contrarrevolucionario, fue elaborada en Brasil;⁸² mientras que fue la oficialidad chilena la que decidió llevar hasta el final el llamado proyecto *Camelot*, realizado en colaboración con la American University para “medir las potencialidades de la guerra interna”.⁸³ En ambos casos, y en otros más de la región, la colaboración militar estadounidense fue solicitada reiteradamente por los respectivos estados mayores.⁸⁴

Lo anterior insinúa las siguientes preguntas: ¿Se trató realmente de la orientación hacia una misión interna o más bien de la percepción

⁸⁰ *Idem*.

⁸¹ Véase Villegas Osiris, Guillermo, *Políticas y estrategias para el desarrollo de la seguridad nacional. Enfoques y temas*, Buenos Aires, Círculo Militar, 1969; J. T. Cintra (coord.), *Seguridad nacional y relaciones internacionales: Chile, México*, Centro Internacional de Estudios Estratégicos, 1987, y A. Stepan, “The New Professionalism of Internal Warfare and Military Role Expansion”, en Lowenthal (ed.), *Armies and Politics...*, *op. cit.*

⁸² Véase A. Stepan, “The New Professionalism...”, *op. cit.*, y A. Rouquié, *El Estado militar...*, *op. cit.*, p. 163.

⁸³ I. L. Horowitz (coord.), *Rise and Fall of Project Camelot*, Cambridge, Cambridge University Press, 1967.

⁸⁴ Como en 1962, en Colombia, para la elaboración del plan *Laso*. Véase A. Rouquié, *El Estado militar...*, *op. cit.*, p. 163.

de una transformación sustancial de las características de la guerra internacional, que implicaba –en América Latina– el traslado desde las operaciones de guerra, desde el escenario internacional, hacia el territorio nacional? ¿La distinción entre amenaza interna y amenaza externa propuesta por Stepan tenía sentido para la oficialidad latinoamericana de comienzo de los años setenta si nunca la tuvo en el pasado? A raíz de estas cuestiones, el *new professionalism* podría asumir un significado diferente –e incluso no resultar tan “nuevo”– si lo vinculáramos con los cambios doctrinarios antes mencionados y, sobre todo, con la orientación histórica de la oficialidad de la región hacia responsabilidades internas, vinculadas ya en la primera mitad del siglo XX con la defensa de la seguridad nacional.

En el Chile del comienzo de los años setenta los elementos externos jugaron en nuestra opinión una función importante, pero indirecta. El golpe de Estado de 1973 fue posible a consecuencia de los elementos de transformación internos que se produjeron a partir de los años sesenta y que asumieron un potencial de transformación mayor debido a las características propias del sistema internacional de la época.

CONCLUSIONES

El análisis anterior no tiene ninguna pretensión de exhaustividad; no pretende concluir la discusión acerca de las causas y las dinámicas que pusieron en marcha la dramática experiencia autoritaria chilena del siglo XX; tiene, al contrario, el objetivo mucho más modesto de proponer al debate académico, en clave preliminar, una interpretación en perspectiva histórica de los acontecimientos de 1973, aún más traumáticos en el caso de Chile, debido a la resistencia que la sociedad civil y sus autoridades habían logrado oponer hasta entonces a la tendencia castrense de penetrar en los asuntos del Estado, factor que diferenció el caso chileno de muchos otros recorridos latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX.

Manifiesto también una inquietud personal, surgida a lo largo de muchos años de investigaciones y lecturas anteriores, acerca de la importancia de reevaluar las variables internas en la explicación de los fenómenos nacionales. La historiografía –y más en general el debate académico y político– ha hecho demasiado hincapié, en nuestra opi-

nión, en las variables externas e internacionales, otorgándoles quizás una importancia resolutive, incluso determinista, que probablemente no tuvieron. Esta tendencia se registra, en especial, en las corrientes del revisionismo histórico, europeas, estadounidenses y latinoamericanas de los años sesenta y setenta y ha empezado a ser cuestionada de manera sistemática sólo por el llamado posrevisionismo, desde mediado de los años ochenta en adelante.

Deseo mostrar asimismo la importancia del análisis comparativo, capaz a menudo de evidenciar de manera más tajante las debilidades o incluso las contradicciones de los estudios concentrados en las variables y los indicadores de un caso específico. Chile, desde esta perspectiva, no resulta ni más ni menos excepcional que otros casos latinoamericanos; su recorrido histórico muestra elementos propios de la historia de la región, así como elementos peculiares de su situación específica. Como ha evidenciado François-Xavier Guerra: en la América hispánica, las construcciones del Estado y de la nación coincidieron cronológicamente, en el periodo posterior a la desarticulación del imperio español. Esta coincidencia aumentó la importancia de las fuerzas armadas en el proceso de consolidación de un nuevo orden, y en especial de las funciones militares internas propias del mismo proceso. Esta peculiaridad asemeja a Chile a los demás recorridos históricos de la región, pero en el marco de diferencias propias del territorio y la sociedad chilena, que contribuyeron a modificar por un tiempo la relación Estado-militares, y establece una relación más equilibrada, respecto a otros casos, entre lo civil y lo militar, si no una real superioridad del primero relativa al segundo.

El agotamiento de estas condiciones en los años sesenta puso dramáticamente en evidencia las características propias del sector castrense chileno, mucho menos alejado desde el punto de vista político-cultural de sus contrapartes latinoamericanas de lo que se había pensado hasta ese momento. La perdurabilidad de la experiencia militar-autoritaria de Chile a lo largo de más de veinte años es otro indicador de que la tendencia a otorgar un papel interno relevante a las fuerzas armadas estaba latente a lo largo de la primera mitad del siglo xx en la oficialidad y en la sociedad chilena —obviamente, sólo en una parte de ella— de igual manera que en otros países de la región, con sus diferencias y sus rasgos comunes.

Como hemos visto, en Chile entre los años sesenta y setenta se produjo una coincidencia excepcional entre cambios internos y cam-

bios internacionales, que actuó como poderoso vector de transformación capaz de activar el potencial interno de las fuerzas armadas. La oficialidad chilena no era (y no es) más o menos profesional que otras instituciones militares de América Latina; se caracterizó más bien por un proceso de profesionalización que configuró un sector militar potencialmente activo en el ámbito interno, en relación con la coyuntura y las circunstancias propias de un momento determinado. El nivel de consolidación del Estado, la capacidad de los diversos componentes sociales de canalizar sus tensiones en el marco constitucional, las características de la guerra y las tensiones internacionales: todos fueron elementos que contribuyeron a la activación citada, pero cuya potencialidad asumió un valor relevante sólo por su interacción con las demás. Una tarea importante para las investigaciones futuras será recuperar las variables menos analizadas hasta ahora, para ubicarlas en su lugar correcto y para reubicar de manera más equilibrada las que hasta hoy se han considerado, a veces acriticamente, determinantes.

BIBLIOGRAFÍA

- Black, Jan K., *Sentinels of the Empire. The United States and Latin American Militarism*, Nueva York, Greenwood Press, 1986.
- Bobbio, Norberto, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino (ed.), *Dizionario di politica*, Turín, UTET, 1983.
- Botana, Natalio, *El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
- Bourricaud, François, *Pouvoir et société dans le Pérou contemporain*, París, Fondation Nationale du Sciences Politiques, 1967.
- Brahn, Enrique, *Preparados para la guerra. Pensamiento militar chileno bajo la influencia alemana. 1885-1930*, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2003.
- Carmagnani, Marcello (coord.), *Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina*, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 1993.
- Cintra, José Thiago (coord.), *Seguridad nacional y relaciones internacionales: Chile*, México, Centro Internacional de Estudios Estratégicos, 1987.
- Connaughton, Brian, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo (coords.), *Construcción de la legitimidad en México en el siglo XIX: instituciones, cultura política y poder*, México, El Colegio de México, 1999.

- Degenova, Luis M., "La preparación cívica y guerrera del niño japonés", *Revista del Círculo Militar*, núm. 3, septiembre, 1905, p. 143.
- Etchison, Don L., *The United States and Militarism in Central America*, Nueva York, Praeger, 1975.
- Forte, Riccardo, *Fuerzas armadas, cultura política y seguridad interna. Orígenes y fortalecimiento del poder militar en Argentina (1853-1943)*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Otto Editore-Università degli Studi di Torino-Miguel Ángel Porrúa, 2003. [Ed. original, *Forze armate, cultura politica e sicurezza interna. Origine e consolidamento del potere militare in Argentina (1853-1843)*, Turín, Otto Editore, 2001.]
- _____, "Génesis del nacionalismo militar: participación política y orientación ideológica de las fuerzas armadas argentinas al comienzo del siglo XX", *Signos Históricos*, núm. 2, 1999.
- _____, "Militares, cultura política y proyecto económico en la Argentina de la primera mitad del siglo XX", en *Anuario de Historia Regional y de las fronteras*, núm. VIII, 2003.
- _____, "Radicalismo y militares en Argentina: el Estado liberal progresista y el fracaso de la reconstrucción del consenso (1916-1930)", en Riccardo Forte, Guillermo Guajardo y María Luna (coord.), *Consenso y coacción: Estado e instrumentos de control político y social en México y América Latina (siglos XIX y XX)*, México, El Colegio de México-El Colegio Mexiquense, 2000.
- _____, "Inmigración y marginalidad política en Argentina", *Análisis Político*, núm. 29, Universidad Nacional de Colombia, septiembre-diciembre, 1996.
- _____, Guillermo Guajardo y María Luna (coords.), *Consenso y coacción. Estado e instrumentos de control político y social en México y América Latina (siglos XIX y XX)*, México, El Colegio de México-El Colegio Mexiquense, 2000.
- Gilmore, Robert L., *Caudillism and Militarism in Venezuela*, Atenas, Ohio University Press, 1964.
- Gallo, Ezequiel, y Roberto Cortés Conde, *La república conservadora*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
- Guevara, Salvador, "Favorecer la industria privada", *Revista Militar*, núm. 304, mayo de 1926, p. 739.
- Horowitz, Irving Louis (coord.), *Rise and Fall of Project Camelot*, Cambridge, Cambridge University Press, 1967.
- Huntington, Samuel, *The Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Cambridge, Harvard University Press, 1957.
- _____, *Political Order in Changing Societies*, New Haven, Yale University Press, 1968.
- Kissinger, Henry, *Does America Need a Foreign Policy?: Toward a Diplomacy for the 21st Century*, Nueva York, Touchstone, 2002.

- _____, *Years of Renewal*, Nueva York, Simon & Schuster, 1999.
- _____, *White House Years*, Boston, Little Brown, 1979.
- Lang, Kurt, "Disciplina e controllo nell'organizzazione militare", en Fabrizio Battistelli (ed.), *Marte e Mercurio. Sociologia dell'organizzazione militare*, Milán, Franco Angeli, 1990.
- Magalhães, João, *A Evolução Militar do Brasil: Anotações para a Historia*, Rio de Janeiro, Biblioteca do Ejército, 1958.
- _____, *The Time of Generals. Latin American Professional Militarism in World Perspective*, Lincoln y Londres, University of Nebraska Press, 1992.
- _____, *Yesterday's Soldiers: European Military Professionalism in South America, 1890-1940*, Lincoln, University of Nebraska Press, 1983.
- Munilla, Eduardo (coord.), "Velada musical" [discurso], *Revista del Círculo Militar*, núm. 1-2, t. XI, julio-agosto, 1905, p. 59.
- Muñoz, Heraldo, "Chile: The Limits of 'Success'", en Abraham F. Lowenthal, (ed.), *Exporting Democracy. The United States and Latin America. Case Studies*, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press, 1991, pp. 39-52.
- North, Lisa, *Civil-Military Relations in Argentina, Chile and Peru*, Berkeley, Institute of International Studies, 1966.
- Nunn, Frederick M., *The Military in Chilean History*, Albuquerque, New Mexico University Press, 1976.
- _____, *The Time of the Generals: Latin American Professional Militarism in World Perspective*, Lincoln, University of Nebraska Press, 1991.
- Payne, Stanley, *Politics and the Military in Modern Spain*, Palo Alto, Stanford University Press, 1967.
- Perlmutter, Amos, *Lo militar y lo político en el mundo moderno*, Madrid, Ediciones Ejército, 1982.
- Poitras, Guy, *The Ordeal of Hegemony. The United States and Latin America*, Bondler-San Francisco-Oxford, Westview Press, 1991.
- Revista del Club Naval y Militar*, "El nuevo ministro de la Guerra", núm. 18, t. 3, noviembre de 1885, p. 299.
- Rivas Sánchez, Fernando y Elizabeth Reimann Weigert, *Las fuerzas armadas de Chile. Un caso de penetración imperialista*, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1976.
- Rock, David, *El radicalismo argentino, 1890-1930*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1977.
- Rodríguez, Carlos, "Por el ejército", *Revista Militar*, núm. 268, mayo de 1923, p. 575.
- Rodríguez, Linda Alexandra (ed.), *Rank and Privilege. The Military and Society in Latin America*, Wilmington, Dw, SR Books, 1994.
- Rouquié, Alain, *El Estado militar en América Latina*, Buenos Aires, Emecé, 1984.

- _____, *Pouvoir militaire et société politique en République Argentine*, París, Presses de la Fondation Nationale de Sciences Politiques, 1978.
- Scenna, Miguel Ángel, *Los militares*, Buenos Aires, Editorial Belgrano, 1980.
- Smith, Tony, *America's Mission. The United States and the Worldwide Struggle for Democracy in the Twentieth Century*, Princeton, Princeton University Press, 1994.
- Spina, María Cecilia, *Tenentismo y Política*, Río de Janeiro, 1977.
- Stepan, Alfred, *Authoritarian Brazil: Origins, Policies and Future*, New Haven y Londres, Yale University Press, 1973.
- _____, "The New Professionalism of Internal Warfare and Military Role Expansion", en Abraham Lowenthal (ed.), *Armies and Politics in Latin America*, Nueva York, Holmes and Meyer, 1976.
- Triska, Jan (ed.), *Dominant Powers and Subordinate States. The United States in Latin America and the Soviet Union in Eastern Europe*, Durham, Duke University Press, 1986.
- Valdivia, Verónica, *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980*, Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2003.
- Varas, Augusto *et al.*, *Chile. Democracia y fuerzas armadas*, Santiago de Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1980.
- Villegas Osiris, Guillermo, *Políticas y estrategias para el desarrollo de la seguridad nacional. Enfoques y temas*, Buenos Aires, Círculo Militar, 1969.
- Weber, Max, *Economía y sociedad*, México, Fondo de Cultura Económica, 1998.

DEL “IBAÑISMO” AL “PINOCHETISMO”: LAS FUERZAS ARMADAS CHILENAS ENTRE 1932 Y 1973

Verónica Valdivia Ortiz de Zárate*

El golpe militar de septiembre de 1973 destruyó uno de los grandes mitos sobre los que se sostuvo la sociedad chilena del siglo XX, esto es, la convicción de contar con fuerzas armadas comprometidas con el orden democrático y las bases sobre las cuales se levantaba. La brutalidad exhibida el 11 de septiembre y la instalación de un régimen represivo que persiguió con ferocidad a los exponentes y simpatizantes del gobierno socialista derrocado, pusieron en evidencia el profundo desconocimiento social respecto de los militares y de sus orientaciones básicas. Pasado el *shock* inicial, el golpe abrió un debate político y académico acerca de la trayectoria histórico-ideológica de las fuerzas armadas chilenas, en un intento por comprender tanto los altos grados de violencia mostrados, como las políticas puestas en vigencia a partir de 1973.

Debido al manifiesto antimarxismo militar, y muy pronto también a su hondo rechazo al modelo y estilo político prevalente en Chile desde 1932, los análisis iniciales apuntaron a desentrañar esa evolución, que parecía contradictoria con el camino seguido por la sociedad a lo largo del siglo XX. La tesis más importante, levantada por un grupo de sociólogos de Flacso encabezados por Augusto Varas, habla de un desarrollo

* Maestra en Historia por la Universidad de Santiago de Chile. Publicó en 1992 el libro *La milicia republicana. Los civiles en armas 1932-1936*, Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), Colección Sociedad y Cultura, vol. II, 1992. Coautora (con Julio Pinto) de “Yo, el León de Tarapacá. Arturo Alessandri Palma: 1915-1932”, *Historia*, núm. 32, 1999; *Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de las fuerzas armadas*, Santiago, Universidad Blas Cañas, 1996; “Nacionalismo, ibañismo, fuerzas armadas: Línea Recta y el ocaso del populismo”, *Contribuciones Científicas y Tecnológicas*, núm. 116, USCH, 1997; “Terrorism and political violence”, *Radical History*, núm. 85, 2003, y *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet*, Santiago, Lom Ediciones, 2003.

castrense al margen del país. Luego del intervencionismo militar del periodo 1924-1932, las fuerzas armadas fueron devueltas a sus cuarteles, siendo sometidas al poder civil; pero permanecieron carentes de una base doctrinaria que sostuviera tal sometimiento y su respeto por las estructuras democráticas. Tal “orfandad doctrinaria” habría derivado en el respeto formal al ordenamiento legal existente (el “constitucionalismo formal”), abriéndose un abismo respecto de una sociedad que avanzaba hacia grados crecientes de participación y pluralismo. La Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), emergente en la segunda postguerra, habría venido a llenar ese vacío, devolviendo a los militares autovaloración y sentido de superioridad sobre la civilidad, toda vez que la nueva doctrina les entregaba la responsabilidad por la existencia de la nación, tanto frente a sus enemigos externos como internos.¹ Este camino estancado y el encuadramiento dentro de la Guerra Fría, reforzaron el antimarxismo y anticomunismo militar provenientes de la modernización a manos prusianas a fines del siglo XIX, lo cual explicaba su animadversión por la Unidad Popular y la persecución de que fueron objeto sus líderes. Asimismo, explicaba la arremetida contra el movimiento obrero, históricamente ligado a los partidos de izquierda marxista, la derogación de las conquistas sociales y la alianza castrense con la derecha.

La hipótesis de esta ponencia se aleja un tanto de esa propuesta analítica, pues sostiene que el regreso a los cuarteles a partir de 1932 y, por ende, el alejamiento del ámbito político, no implicaron la desaparición de la doctrina existente; dicho con otras palabras, no comparto la idea de una “orfandad doctrinaria” hacia mediados de siglo ni su reemplazo total por la DSN. El peso de la doctrina anterior —que denominaré ibañismo— se mantuvo por décadas, sobreviviendo hasta entrados los años setenta, y no fue derribada del todo por la teoría de la seguridad nacional y del enemigo interno. La doctrina estadounidense actuó sobre el basamento anterior —el ibañismo— y no sobre una tabla rasa, a pesar del enorme impacto que tuvo la nueva tesis; sin embargo, su consolidación como reemplazante absoluto no fue un proceso automático y breve, sino de más larga duración que lo afirmado hasta ahora. A mi juicio, se produjo una mixtura entre el ibañismo y la DSN; el ocaso definitivo del primero no ocurrió sino hasta después del derrocamiento del presidente Salvador Allende, siendo los primeros

¹ A. Varas *et al.*, *Chile. Democracia y fuerzas armadas*, Santiago de Chile, Flacso, 1980.

siete años del régimen militar el momento de su derrota definitiva frente a la emergencia de una nueva doctrina, asociada al general Augusto Pinochet.

La idea de ibañismo está ligada a la figura del general Carlos Ibáñez del Campo, quien lideró la intervención militar en Chile ocurrida durante el periodo 1924-1931. Dicha gestión castrense apuntó a una mayor intervención estatal en materia económica y social, la cual buscaba proteger la producción manufacturera nacional a través de una política crediticia y de subsidios a la empresa privada, aunque sin neutralizar el sector primario-exportador. Buscó, de igual forma, integrar las demandas de los sectores medios y obreros, otorgando derechos sociales, beneficios económicos y patrocinando la formación de sindicatos, bajo la mirada atenta del Estado; en otras palabras, bajo su mando el Estado se modernizó y redefinió su relación con la sociedad, dando vida a lo que más tarde se conocería como Estado benefactor. Esta doctrina no desapareció con el derrocamiento del general Ibáñez, sino que subsistió por varias décadas más. En ese sentido entendemos por ibañismo militar la añoranza por un gobierno fuerte y eficiente, que despreciaba a los políticos y prefería a los tecnócratas, que valorizaba la función social y económica del Estado, proclive a una integración controlada y despolitizada de los sectores subalternos y que esperaba recuperar el estatus y la valorización social de la época del general Ibáñez. Contrariamente, entendemos por pinochetismo aquella doctrina castrense que entendía la modernización preferentemente en términos económico-tecnológicos, que veía en la represión el instrumento más eficaz para combatir el pensamiento marxista y los conflictos sociales y, por lo mismo, creía en el desarrollo social fruto de la acción individual y no de la acción colectiva-comunitaria, lo cual produciría la ansiada despolitización y desmovilización a través de la desorganización social.

1. LOS AÑOS OSCUROS: 1932-1960

Las fuerzas armadas chilenas irrumpieron en el escenario nacional en 1924 en medio de la crisis del orden oligárquico, catalizada por el gobierno de Arturo Alessandri Palma (1920-1924); se enmarcaba en el colapso producido por el cierre de los mercados europeos en la primera posguerra y la creciente disminución de empleos, que aceleraron la

protesta social y pusieron en jaque la dominación de las élites. El ocaso de un orden político-social excluyente, sostenido en la riqueza generada por la exportación salitrera y en la acción represiva de los militares, exigía la redefinición de la estrategia de crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la integración política y social de sectores hasta entonces excluidos (capas medias y obreros) y el papel intervencionista del Estado. Para tales reformas, sin embargo, no hubo consenso entre las clases dirigentes, acentuándose la situación de crisis generalizada, lo cual derivó en intervención militar a comienzos de septiembre de 1924: el denominado Ruido de Sables. Una vez que los segmentos castrenses más cercanos a la oligarquía fueron desplazados del poder militar y éste pasó a ser controlado por la oficialidad joven, proveniente de las capas medias, el proceso de reforma se aceleró.

La llegada de los oficiales encabezados por el entonces mayor Carlos Ibáñez del Campo vino a reforzar a los sectores reformistas dentro de la política chilena, liderados hasta entonces por el presidente Arturo Alessandri. La oficialidad media del ejército y de la armada era crítica de la forma en que las élites conducían al país. Escépticos de un sistema político parlamentario que hacía recaer todas las decisiones en los partidos y despojaba al presidente de verdadera capacidad resolutoria, los oficiales eran partidarios de un régimen presidencialista que aumentara las atribuciones del ejecutivo y disminuyera las de las colectividades partidarias. El parlamentarismo representaba, a sus ojos, la ineficiencia gubernativa y la politiquería. Creyentes en la capacidad del capitalismo para producir desarrollo, los exponentes jóvenes de las instituciones armadas fueron distanciándose de las tendencias libremercadistas, para derivar a posturas de corte más proteccionista y de intervención estatal; asimismo, reconocieron la necesidad de aminorar la fuerte dependencia que el modelo primario-exportador producía en la economía nacional, para transitar a un modelo más centrado en la producción manufacturera; por último, también constataron los fuertes quiebres en la cohesión nacional que se expresaban en las sucesivas huelgas y protestas reprimidas por los institutos armados. La resistencia oligárquica a enfrentar esa situación y articular alguna propuesta que detuviera el conflicto influyó en la emergencia de una perspectiva castrense proclive a dictar leyes que se hicieran cargo de los problemas laborales y sociales de los sectores postergados. Estas críticas acentuaron su ya existente tendencia a desconfiar de la capacidad de los políticos para resolver los graves

problemas del país, prefiriendo a los “especialistas”, los tecnócratas, abriéndoles espacio para la deliberación política.² La crisis generada por la primera guerra mundial y el empate irresoluto entre el presidente Alessandri y la oposición oligárquica, hicieron posible su llegada al poder.

Liderados por el ahora coronel Carlos Ibáñez, los oficiales ayudaron a imponer una nueva carta fundamental: la Constitución de 1925, que puso fin al parlamentarismo y estableció el orden presidencial; redefinió las funciones del Estado a favor de un activo intervencionismo socioeconómico y de respaldo a la industrialización; se dictaron leyes sociales que reconocieron la legalidad de los sindicatos, el derecho a huelga, la creación de un ente mediador en los conflictos entre los empresarios y los trabajadores (los Tribunales de Conciliación y Arbitraje); se dio vida a un sistema de seguridad social y se estableció la obligatoriedad de los contratos laborales, entre otras medidas.³ Estos cambios institucionales fueron acompañados de la neutralización de los partidos políticos –los cuales si bien siguieron existiendo, carecían de autonomía y se atacó su carácter de mediadores entre la sociedad y el Estado– amén de la creación de una policía destinada al mantenimiento del orden público dependiente del aparato ejecutivo. La acción social y el patrocinio a la organización sindical y la resolución pacífica de los conflictos debería conducir desde el punto de vista castrense a la disminución del atractivo del marxismo entre los trabajadores, a la recomposición de la unidad social y al uso selectivo de la represión, que no debería constituirse en instrumento principal de pacificación, papel que correspondía a la justicia social.

Estas reformas fueron aplicadas en toda su extensión durante el gobierno del entonces general Carlos Ibáñez (1927-1931). Es posible afirmar que tales medidas representaron el ideario de las fuerzas arma-

² *Idem*. Véase además F. Nunn, *Chilean Politics 1929-1931: The Honorable Mission of the Armed Forces*, Albuquerque, The University of New Mexico Press, 1970; A. Ahumada, “El ejército y la revolución del 5 de septiembre de 1927: reminiscencias”, Santiago de Chile, s.n., 192-. J. P. Bennet, *La revolución del 5 de septiembre de 1924*, Ed. Bacells, 1925; D. Bari, “El ejército ante las nuevas doctrinas sociales”, Estado Mayor General, 1922, y A. Ibáñez, “Los ingenieros, el Estado y la política de Chile. Del Ministerio de Fomento a la Corporación de Fomento. 1927-1939”, *Historia*, núm. 18, 1986.

³ J. Rojas, *La dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927-1931)*, Santiago, Dibam, 1993.

das de la época, toda vez que el antiguo generalato y almirantazgo fue pasado a retiro y los nuevos altos mandos quedaron en manos de la ex oficialidad joven que estuvo detrás del gobierno de Ibáñez. Estas nuevas autoridades castrenses estaban estrechamente ligadas al general Ibáñez, a quien debían tanto su ascenso como la renovada valorización social alcanzada por las instituciones militares y quien, a su entender, había repuesto la anhelada eficiencia gubernativa. De igual forma, durante esos años se dio fuerte impulso a la economía favoreciendo el desarrollo en infraestructura, activando las exportaciones, colocando los pilares del posterior modelo industrial sustitutivo, permitiendo llevar a cabo un vasto plan de obras públicas y de reforma educacional, para asociar la gestión ibañista a una era de modernizaciones. Desde la óptica de los uniformados, su actuación en el poder reflejaba la superioridad militar sobre los políticos, quienes siempre estaban preocupados de sus intereses particulares. Esta dinámica administración no había, en apariencia, politizado a las instituciones, pues habían sido devueltas a sus tareas profesionales, sirviendo más bien de sostén al régimen. Un sentido de orgullo invadía a la oficialidad al haber solucionado la grave crisis por la que el país había atravesado en los años veinte.

Este “éxito”, no obstante, se vino estrepitosamente al suelo en 1931, como efecto de la gran depresión. El endeudamiento externo, la descapitalización de los dos últimos años, la pérdida de mercados y el consiguiente desempleo masivo, reactivaron a la sociedad, iniciándose un vasto movimiento en pos del derrocamiento del régimen ibañista. La falta de libertad política que acompañó al “Chile nuevo” fue, junto con la debacle económica, una de las principales banderas levantadas en contra de la dictadura, la que finalmente sucumbió el 26 de julio de 1931. Las protestas diarias, la paralización de actividades decretadas por los principales gremios profesionales y la muerte de dos personas en los disturbios, decidieron al general Ibáñez a abandonar el palacio presidencial y salir al exilio. En lo que a las fuerzas armadas se refiere, la caída del caudillo era ajena a cualquier conspiración nacida en los cuarteles. Todas las instituciones armadas permanecieron fieles a su comandante en jefe y obedecieron la orden que les fue impartida, a pesar de no compartir la decisión de abandonar el poder. Este hecho es clave para entender la supervivencia de Ibáñez como líder para una oficialidad que compartía la “obra” de su gobierno; en pocas palabras, al

momento de la caída de Ibáñez, la oficialidad del ejército, de la armada y de la recién creada fuerza aérea seguía siendo ibañista.

Lo que sucedió a continuación erosionó parte de este liderazgo, en lo relativo a tomar el poder. En efecto, entre 1931 y 1932, las fuerzas armadas protagonizaron una sucesión de golpes de Estado como respuesta a la persecución iniciada por los gobiernos civiles instaurados y la suspensión de algunas de las reformas establecidas durante el periodo de Ibáñez. La intervención militar más importante de 1932 fue la liderada por el comodoro del aire, Marmaduke Grove, quien en compañía de socialistas, radicales e ibañistas estableció la República Socialista chilena el 4 de junio de 1932. Si bien el golpe de Grove asumió el mote de “socialista”, lo cierto es que el núcleo de la conspiración era ibañista y tenía como principal objetivo la reposición de su caudillo y la reimposición de todas las reformas hechas.⁴ A juicio castrense, la civilidad en el poder pretendía desconocer lo ocurrido en los últimos siete años, pues “se pretende retrotraer el país [...] a la época anterior a 1924, y quizá a 1914”. En última instancia, “a Ibáñez tenía que ocurrirle lo mismo que a Balmaceda y Alessandri que han sido los mandatarios que se han aventurado a servir a los elementos populares, atropellando valientemente los intereses de una oligarquía torpe y egoísta”.⁵ El intento de algunos parlamentarios conservadores de suspender, por ejemplo, el Código del Trabajo, la disminución del rol social del Estado y el avance de la acción represiva de la policía favorecieron la deliberación castrense y la aparición de una serie de conspiraciones que derivaron en la República Socialista, pero que en el fondo estaban asociadas a la acción conspirativa del caudillo militar. Desde su salida, Ibáñez estuvo detrás de cada complot. Tras la caída de Grove a manos de una conspiración ibañista, la disciplina castrense se quebró por completo, lo cual terminó por aunar criterios dentro de la civilidad y la decisión de poner fin a la oleada de militarismo. A fines de 1932 se realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias que abrieron un periodo de estabilidad en la política chilena, que sólo se rompería cuarenta años después.

Esta estabilidad se nutrió en gran medida de dos factores. Por una parte, del consenso en torno del proceso de reforma acaecido en

⁴ V. Valdivia, *Los años de la rebelión. Chile 1931-1932*, inédito.

⁵ V. Valdivia, “Las fuerzas armadas y la integración social. Una mirada histórica”, *Mapocho*, núm. 48, 2000, pp. 295-311.

los años veinte; esto es, del reconocimiento al nuevo rol del Estado, la integración de las capas medias y obreras y el rechazo a la injerencia militar en política. Las dudas que derechas e izquierdas tenían al respecto fueron postergadas, reconociendo a la democracia representativa y el carácter gradual que habrían de tener los cambios. Un segundo elemento fue la convicción militar de la urgencia de retirarse de la arena política, debido a los evidentes efectos que en materia de disciplina, verticalidad del mando y penetración de ideologías “extrañas” a su pensamiento estaba provocando su salida de los cuarteles. La experiencia de la República Socialista atemorizó a la oficialidad, dada su identificación con el marxismo, tendencia antagónica con la doctrina castrense; asimismo, el quiebre de la verticalidad del mando parecía probar que el caso de Ibáñez (quien eliminó a todo el antiguo alto mando) no había sido una excepción, sino que podía convertirse en la norma, amenazando la existencia de esas instituciones. El retiro a los cuarteles era un imperativo.

Hasta este punto del análisis existe consenso entre los estudiosos de las fuerzas armadas; a partir de aquí aparece el disenso. En efecto, la interpretación prevalente asocia este alejamiento castrense de la política con el ocaso de los principios que en su momento encarnó el general Ibáñez, dado el apasionado antimilitarismo que invadió a la sociedad chilena con posterioridad al año 1932 y la responsabilidad recaída sobre el caudillo. El común propósito cívico-militar de evitar una nueva aventura castrense requirió de una disciplina de hierro dentro de esas instituciones que evitara cualquier rebrote conspirativo, lo cual implicaba neutralizar la influencia del general Ibáñez. De allí la estricta política asumida por el gobierno y los comandantes en jefe que no permitieron manifestación alguna de indisciplina. Tras seis años en el gobierno, Arturo Alessandri entregó el poder a Pedro Aguirre Cerda, candidato presidencial del Frente Popular en 1938.

Este retiro castrense ha supuesto la muerte del “progresismo” militar vinculado a los oficiales de los años veinte, y su reemplazo por tendencias de corte fascista a partir de los años treinta; pero desde mi perspectiva no fue así, pues el ibañismo en tanto encarnación del proyecto militar reformista siguió vigente. A mi entender lo que hubo fue un cambio en la adhesión que inspiraba en los oficiales el general Ibáñez, produciéndose en efecto el agotamiento del ibañismo en tanto estrategia conspirativa y tentativa de asalto al poder. El ibañismo se

agotó en tanto fuerza personalista, con capacidad para arrastrar a las instituciones en su conjunto. El apasionado antimilitarismo civil trajo represalias, rebajas presupuestarias y desvalorización social. En el futuro una nueva aventura conspirativa no atraería a la oficialidad, la cual daría preferencia a lo institucional, alejándose de los caudillismos. Ibáñez se volvería con el tiempo un mal recuerdo del costo institucional que podía tener el conspirar; a pesar de ello, para la elección presidencial de 1938, y de acuerdo con testimonios castrenses, 75% de la oficialidad del ejército se declaraba ibañista. Es posible que esto fuera así, porque el rechazo a la conspiración no era sinónimo de desconocimiento de las modernizaciones realizadas bajo su administración y de las reformas que permitieron solucionar el conflicto de la posguerra. Como se dijo, la estabilidad política después de 1932 se logró gracias al reconocimiento de todos los sectores políticos de los cambios habidos; es decir, los realizados durante el periodo militar; en otras palabras, subsistió en las fuerzas armadas el ibañismo en tanto encarnación de esa oleada modernizadora, de la resolución pacífica de los conflictos y de la redefinición del Estado. Así, paradójicamente, Ibáñez se convirtió en el principal escollo para la nueva era de intervencionismo militar en política; pero al mismo tiempo, su figura era símbolo de prosperidad nacional y mejores épocas para esas corporaciones.

El principal argumento de quienes sostienen el retroceso del progresismo militar y su reemplazo por tendencias fascistoides es el complot de agosto de 1939, conocido como el Ariostazo. En aquella oportunidad, el general de ejército Ariosto Herrera organizó un levantamiento militar contra el presidente Aguirre Cerda en un intento por evitar la presencia de los comunistas en la coalición de gobierno, quienes izaban banderas rojas en actos oficiales.⁶ Según lo que se conoce, el general Herrera estaba en combinación con el general Ibáñez quien levantaría al regimiento Cazadores y a la Escuela de Comunicaciones, mientras ambos se presentaban en el regimiento Tacna, foco de la subversión. La delación del complot por otros oficiales permitió su pronta desarticulación y obligó a Ibáñez a ocultarse en la embajada de Paraguay. Herrera era un admirador de Mussolini, lo que ha dado pie para su vinculación con tendencias fascistas, como también a pensar en la participación en

⁶ El gobierno del Frente Popular que representaba Aguirre Cerda reunía a radicales, socialistas y comunistas. Esta alianza duró hasta 1941.

el complot de grupos nacionalistas chilenos profundamente anticomunistas como el Movimiento Nacionalista de Chile y el Frente Nacional Chileno.⁷ El Ariostazo fue un movimiento que estalló en un momento de fuerte tensión para las instituciones armadas, pues algunos sectores las responsabilizaban por el asesinato de jóvenes nazis en el edificio del Seguro Obrero a manos de la policía, sin que aquéllas hubieran hecho nada para evitarlo; además, era el fin del gobierno de Alessandri, y por lo tanto de una política militar fuertemente castigadora y restrictiva. La llegada del Frente Popular, donde participaba también el Partido Comunista, ahondó más las tensiones, las cuales encontraron en el conflicto con el general Herrera un canal de expresión. Sin embargo, la mayoría de la oficialidad se opuso a la aventura golpista y la conspiración fracasó en las propias filas militares. Por otra parte, Ibáñez, como la mayoría de los oficiales de su generación —y también muchos civiles— fue atraído por la experiencia italiana, pero especialmente por el corporativismo de corte estatista. Nunca tuvo atracción por el fascismo como alternativa política, pues la oficialidad rechazaba la movilización de masas y la militarización de la sociedad; además reconocía a la democracia representativa. En suma, según esta perspectiva, el Ariostazo más bien apuntaba hacia la reconsideración del papel de las fuerzas armadas en el desarrollo nacional y respondía a la preocupación por la participación política de los comunistas, pero no representó intento alguno de destruir el orden existente e instalar un Estado fascista o corporativo. Y aunque ese pequeño grupo lo hubiera deseado (hipótesis que no comparto) la oficialidad rechazó el movimiento. La conspiración no tenía como propósito instalar un orden alternativo ni era una crítica al Estado benefactor.

Esta sobrevivencia del ibañismo se reafirma con la existencia de otros *complots* a lo largo del siglo, también vinculados al ex general. Nos referimos al *complot* de 1948 contra el presidente Gabriel Gon-

⁷ Véase A. Varas *et al.*, *Chile. Democracia...*, *op. cit.*; C. Maldonado, “Entre reacción civilista y constitucionalismo formal: las fuerzas armadas chilenas en el periodo 1931-1938”, *Contribución*, Flacso, núm. 55, 1988; Álvarez *et al.*, “De Ariosto Herrera al general Viaux: un estudio de los *complots* militares en Chile”, *Memoria*, Universidad Blas Cañas, 1995; M. Hidalgo, *El “Ariostazo”, Puma y “Línea recta”: una desviación del profesionalismo en las fuerzas armadas chilenas*, tesis de Licenciatura, Universidad Católica de Chile, 1994, y V. Valdivia, *El nacionalismo chileno en los años del Frente Popular (1938-1952)*. Santiago, Universidad Blas Cañas, 1995.

zález, la creación de Puma (Por un mañana auspicioso) en el seno del ejército en 1952, y “Línea recta”, *complot* de 1955 extendido a las tres ramas armadas y ligado a Ibáñez, entonces presidente de la república. En el caso de 1948, la conspiración tenía orientaciones peronistas y era crítica del poder de la burocracia y los partidos sobre el presidente de la república que le impedían, a su juicio, solucionar los problemas nacionales; era también una queja por los bajos salarios. De ser derrocado Gabriel González, Ibáñez ocuparía su lugar para dar paso a un gobierno similar al de Perón en Argentina. En el caso de Puma, el objetivo de la oficialidad comprometida fue asegurar la elección de Carlos Ibáñez en la campaña presidencial de 1952 y neutralizar el poder de los partidos para dar eficacia al Ejecutivo. Línea recta –continuación de Puma– buscó dotar al presidente Ibáñez del respaldo necesario para hacer reformas que aceptaran la maquinaria estatal creada por él pero “desvirtuada por los políticos”, devolviéndole su capacidad ejecutiva. Apoyándose en Línea recta, Ibáñez intentó recomponer el movimiento obrero creando una central sindical ajena a la influencia de los comunistas, la Central Única de Trabajadores (CUT) dominada por los partidos marxistas, mientras su ministro del Trabajo, general Eduardo Yáñez, actuaba como mediador en los conflictos laborales. Es interesante que los oficiales comprometidos en esta organización militar se reunieran con miembros del Partido Socialista Popular y con algunos dirigentes de la CUT y no con exponentes de la derecha. Al igual que en los casos anteriores, la resistencia ofrecida por la oficialidad constitucionalista, incluida la renuncia del comandante en jefe del ejército, desbarataron la organización, siendo sus líderes expulsados de las instituciones.

He optado metodológicamente por analizar las conspiraciones, pues constituyen las escasas ocasiones en que los sectores involucrados, por pequeños que hayan sido, muestran sus molestias y lo que están pensando realmente. En el caso de Línea recta los oficiales comprometidos incluían comandantes de regimientos, al subdirector de la Escuela de Infantería, al director de la Escuela de Unidades Motorizadas y al director de la Escuela Militar, general Ramón Salinas, en el caso del ejército; al Jefe de la Defensa de Costa, en la Armada, y al propio comandante en jefe de la fuerza aérea.⁸ En otras palabras: pueden ser considerados como expresiones del tipo de críticas que existían entre

⁸ V. Valdivia, “Nacionalismo, ibañismo...”, *op. cit.*

los uniformados; a pesar de esto, no debe olvidarse que en todas las ocasiones, estos *complots* fueron abortados dentro de las líneas militares, pues la mayoría de la oficialidad creía en el respeto a la Constitución y en que la “misión fundamental de las fuerzas armadas es mantener la soberanía nacional y constituirse en firme apoyo de los gobiernos legalmente constituidos”.⁹

En todo caso, si consideramos dichos *complots*, es posible percibir que su punto de arranque era la aversión al incremento de la influencia partidaria, al crecimiento de la izquierda marxista, al énfasis de los “políticos” en sus intereses parciales, antes que nacionales. En pocas palabras: antipartidismo, anticomunismo y ansias de eficiencia gubernativa; además, revalorización de las fuerzas armadas. Estos rasgos fueron el motor del activismo militar a comienzos del siglo XX y no se contraponían con la idea de un Estado intervencionista en lo social y lo económico. En suma, existía molestia en las fuerzas armadas por el bajo presupuesto, el abandono, la pérdida de autonomía del ejecutivo, la presión de los partidos y su impacto sobre el estancamiento económico, etc.; pero esto no era sinónimo de rechazo a las reformas que permitieron el desarrollo chileno en el siglo XX.

¿Se oponían a la industrialización nacional con apoyo del Estado? No. ¿Compartían esa estrategia? Sí. ¿Se oponían a un código del trabajo que regulara las relaciones capital-trabajo? No. ¿Lo auspiciaban? Sí, pero “despolitizado”. ¿Se oponían a un sistema político representativo? No, aunque tenían reparos. ¿Se oponían al avance del parlamento, y por ende de los partidos, en desmedro del presidente? Sí. ¿Se oponían al crecimiento del marxismo? Sí. Todo esto es ibañismo.

2. LOS DIFÍCILES AÑOS SESENTA

La década de los sesenta es considerada en Chile como un hito de su devenir histórico, toda vez que las pautas de convivencia política, las estrategias de desarrollo como la marginación militar de la contingencia fueron puestas en duda. En esos años, la izquierda retomó su aspiración revolucionaria; la derecha se volcó a un anticomunismo furibundo y a

⁹ Declaración del entonces comandante en jefe del ejército, general Enrique Franco, *El Debate*, 23 de marzo de 1955.

una militante lucha contra la reforma, y el centro fue atrapado por su mesianismo. Los movimientos sociales —especialmente de campesinos, pobladores y estudiantes— se activaron, mientras las mujeres retomaban la lucha por su emancipación. Todo empezó a moverse. Las fuerzas armadas no quedaron ajenas a ese proceso.

Uno de los elementos que más destaca relativo a los militares y los años sesenta ha sido su manifiesto sentido anticomunista y su débil respeto y compromiso con la democracia. Durante este periodo participaron en varios actos represivos contra obreros; reclamaron por el abandono institucional y el retraso profesional a que los sometía el gobierno civil; demandaron su activa incorporación a la vida nacional; cuestionaron la forma en que se resolvían los conflictos fronterizos, y se levantaron contra el presidente Eduardo Frei Montalva, con el “Tacnazo”, por ser el regimiento Tacna el eje del acuartelamiento, en octubre de 1969.¹⁰

El Tacnazo pareció sintetizar la evolución ideológica ocurrida en el seno de las filas militares, pues, de acuerdo con algunas interpretaciones, traducía el cansancio castrense respecto del retraído profesionalismo impuesto, que venía a cuestionar la subordinación al mando civil. En esa crítica quedaron involucrados los altos mandos, confabulados —a juicio de los oficiales— con los sucesivos gobiernos para mantenerlos al margen del desarrollo del país. Reflejaba también el agotamiento por la desvalorización social, evidente en los bajos salarios, y la obsolescencia de sus equipos e instalaciones. Tras ello, se vislumbraba el concepto de seguridad nacional, toda vez que esa decadencia institucional impedía cumplir eficientemente con las tareas de defensa, lo cual se vinculaba al estancamiento económico y la creciente movilización social. El estilo político de participación ampliada impedía imponer las correcciones necesarias para asegurar la acumulación y el crecimiento. En esa coyuntura, las fuerzas armadas habrían desconocido el orden democrático para intentar reconfigurar el bloque en el poder que suponía la desarticularización de los movimientos sociales y redefinir al Estado.¹¹

Lo sostenido en la primera sección de este trabajo no apunta a desconocer la llegada de la doctrina de contrainsurgencia durante la

¹⁰ Véase A. Varas *et al.*, *Chile. Democracia...*, *op. cit.*; V. Valdivia, *Camino al golpe...*, *op. cit.*, y S. Marras, *Confesiones*, Santiago, 1988, y *Palabra de soldado*, Santiago, 1989.

¹¹ A. Varas *et al.*, *Chile. Democracia...*, *op. cit.*

década de los cuarenta y el impacto de la Guerra Fría en la evolución doctrinaria de las fuerzas armadas chilenas. Esa nueva influencia doctrinaria no cayó sobre un vacío total, sino –como hemos visto– encima de ese ibañismo subsistente, lo cual explica la heterogeneidad de las respuestas y la complejidad de las críticas castrenses.

En efecto, a partir de fines de los años cuarenta, Estados Unidos inició un proceso de encuadramiento de las fuerzas armadas latinoamericanas en la defensa hemisférica, en el contexto del conflicto este-oeste. Esto supuso la articulación de una doctrina que otorgaba a los militares un papel descollante en la lucha contra el marxismo, para lo cual debían actuar coordinadamente con la potencia del norte y asumirse como principales responsables de la subsistencia de la nación. Las ideas de Estado-nación, unidad nacional, poder nacional, y geopolítica se convirtieron en los nuevos principios orientadores y fundamentadores de su existencia; la firma de tratados interamericanos facilitó la puesta en marcha de la coordinación regional.

La revolución cubana de 1959 vino a introducir una serie de modificaciones a la forma como se entendía la confrontación con el mundo soviético, pues el triunfo de los guerrilleros en la isla y su acercamiento al bloque del este hicieron realidad la Guerra Fría en América Latina.¹² Asimismo, esta situación derivó en la redefinición de las estrategias estadounidenses en ese conflicto: la llegada de los soviéticos a la esfera de influencia de Estados Unidos evidenció que la agresión marxista no provendría necesariamente del exterior, sino de los partidos comunistas internos de cada país; de modo que la guerra era externa e interna a la vez. Por ello, el presidente John F. Kennedy planteó la necesidad de “respuestas flexibles” frente a la agresión, lo cual significaba que el poder nuclear no era la única herramienta para neutralizar el avance enemigo. Se aceleró entonces el adiestramiento de oficiales latinoamericanos en ese país o en Fort Gulick, en Panamá, redefiniendo el pensamiento de la oficialidad, e insistiendo en el tema de la contrainsurgencia. Dada la forma que asumió la resistencia al dictador Fulgencio Batista, la preparación anticomunista privilegió las prácticas antiguerrilleras.

¹² La experiencia guatemalteca entre 1951 y 1954 no alcanzó a concretar este proceso, pues fue rápidamente aplastada y tampoco pudo establecer una alianza extrahemisférica. La diferencia con el caso cubano estriba, precisamente, en la capacidad de Cuba para sobrevivir y enfrentar a Estados Unidos en el contexto de guerra entre potencias imperialistas.

lleras y de guerra revolucionaria. Junto con esta estrategia renovada del “garrote”, el proyecto de Kennedy, como es sabido, proponía también fórmulas para “prevenir” la subversión a través de reformas sociales —especialmente la reforma agraria— y el respaldo a los gobiernos democráticos. La “Alianza para el Progreso” esperaba neutralizar el atractivo del marxismo, arrebatándole parte de sus banderas de lucha y propiciando una era de transformaciones estructurales en América Latina en el marco de la democracia. La muerte de Kennedy debilitó el aspecto reformista del proyecto y acentuó las políticas antisubversivas. Según el planteamiento de su sucesor, el presidente Lyndon B. Johnson, en una eventual guerra las ramas armadas más útiles que se incorporarían a la lucha mundial serían las ramas aéreas y las armadas, dadas sus especialidades. No era la situación de los ejércitos, que por la naturaleza de sus funciones tendrían menor presencia. Acorde con este diagnóstico, Johnson modificó las tareas militares, las que deberían concentrarse en la contrainsurgencia en sus respectivos países. En concreto esto significó que se privilegiaron las funciones policiaco-represivas en las fuerzas de tierra, afectando la percepción castrense acerca de la política en sus respectivas naciones.

El caso de Chile, en los sesenta, se enmarcó en toda su magnitud en este contexto de Guerra Fría.¹³ Por estar viviendo como otros países del continente el agotamiento de las estrategias de industrialización sustitutiva y el aumento de los problemas sociales, cuya principal expresión fue la creciente marginalidad como producto de la crisis agraria y la alta migración campo-ciudad, el ámbito político se vio remecido. El proyecto “Revolución en Libertad” levantado por la Democracia Cristiana y su abanderado en la elección presidencial de 1964, Eduardo Frei Montalva, se insertaba plenamente en la propuesta kennediana: reformas estructurales (reforma agraria y sindicalización campesina, chilenización del cobre, políticas de organización social de los pobladores marginales) manteniendo las instituciones democráticas; pero, al mismo tiempo, reconfiguración de las funciones militares. En efecto, durante su gobierno se creó la Escuela de Fuerzas Especiales y Paracaidistas, donde se instruía sobre políticas antisubversivas, de la cual habían egresado en 1967 cincuenta comandos;

¹³ V. Valdivia, “Militares y política. Los jóvenes oficiales de los años sesenta: 1960-1973”, *Contribuciones Científicas y Tecnológicas*, Universidad de Santiago de Chile, núm. 127, 2001.

asimismo, en esos años, numerosos oficiales que luego tendrían destacada participación en la represión del régimen de Pinochet asistieron a cursos en Panamá, como fue el caso del coronel Manuel Contreras.¹⁴ Según la información existente, Chile fue uno de los países latinoamericanos, junto con Brasil y Perú, que más ayuda en adiestramiento recibió, ubicándose además entre los más beneficiados en materia de “acción cívica”, mientras un importante número de personal estadounidense se había instalado allí. En ese mismo terreno, se dio respaldo oficial a la operación Unitas y se realizaron reuniones interamericanas de comandantes en jefe.¹⁵ La creciente movilización social a partir de 1966, en parte gatillada por las propias políticas reformistas realizadas por la administración democratacristiana, colocaron al presidente Frei Montalva frente a una disyuntiva: en efecto, la reforma agraria y la sindicalización campesina, así como las medidas de organización de los pobladores no habían logrado frenar el avance del marxismo, más bien lo habían activado, como también lo hicieron los movimientos sociales. En esa circunstancia, su respuesta a las numerosas huelgas y agitaciones sociales fue aplicar la doctrina de Lyndon B. Johnson para la Guerra Fría; o sea, asignar a los militares las tareas de reposición del orden público, involucrándolos en la contingencia; en suma, en las funciones policíacas que fácilmente caían en lo represivo. El ejemplo más ilustrativo de esta decisión fueron las acciones militares en las minas de cobre El Salvador, en el norte del país, y El Teniente, en Rancagua, en 1966, donde hubo numerosos muertos.

Esta decisión de atribuir tareas policiaco-represivas a las fuerzas armadas se hizo a la par de una consistente disminución presupuestaria a la defensa, en la lógica de un cambio de funciones de esas instituciones. Esta rebaja económica no fue uniforme para las tres ramas; el ejército fue el más afectado por su nueva situación en la Guerra Fría. Dado que esta actitud iba de la mano de una política exterior pacifista y de acuerdos internacionales (ALALC; Pacto Andino) parecía, a ojos militares, existir mala predisposición hacia los institutos castrenses,

¹⁴ El coronel Manuel Contreras estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) durante el periodo 1974-1978, y fue responsable del proceso de detenidos-desaparecidos (nota del compilador).

¹⁵ Véase L. North, *Los militares en la política chilena*, Nueva York, University of New York, s.f.; A. Joxe, *Las fuerzas armadas en el sistema político chileno*, Santiago, Editorial Universitaria, 1970; Vicaría de la Solidaridad, *Dos ensayos sobre seguridad nacional*, Santiago, 1977, y J. Tapia, *Terrorismo de Estado*, México, Nueva Imagen, 1980.

abandonándose los pilares de la defensa: la hipótesis de conflicto. Se les requería para reprimir, pero no se les otorgaban los recursos necesarios para una eficiente función defensiva; a su entender, había contradicción, que ellos atribuían a los malos manejos de los políticos y a la ignorancia acerca de las exigencias de la seguridad nacional. A esta situación hay que agregar el hecho de que el gobierno redefinió las funciones militares también en otro sentido: en el Servicio Militar del Trabajo, un servicio creado durante el segundo gobierno del general Ibáñez en los cincuenta, que sumaba la pala al fusil; es decir, que los hacía participar en la ejecución de obras públicas para contribuir al desarrollo nacional. La administración Frei Montalva usó profusamente esa atribución, razón por la cual oficiales del ejército participaron en las políticas de promoción popular, especialmente en lo relativo a las medidas habitacionales, en obras públicas, y con particular interés reemplazando obreros en huelga, como ocurrió en casos de paralizaciones de ferroviarios o trabajadores de la salud. La conjunción de estas decisiones del Ejecutivo alienó a un segmento de los oficiales, a aquellos más imbuidos de los nuevos referentes de lucha anticomunista, alimentando su deliberación. La DSN parecía ofrecer los argumentos para cuestionar esta política y exigir la revalorización de las fuerzas armadas y una acción más ejecutiva en materia de orden político, en un sentido amplio.

El levantamiento del regimiento Tacna encabezado por el general Roberto Viaux Marambio en octubre de 1969 coronó esta crítica y la seguidilla de pequeños *complots* descubiertos desde 1966.¹⁶ Los oficiales acuartelados exigieron al gobierno que mejorara sus remuneraciones y un cambio radical en el alto mando; esto es, superiores que contaran con la confianza de los oficiales y cuadros permanentes; igualmente, la renuncia del ministro de Defensa. Con el Tacnazo se produjo la salida de las cinco primeras antigüedades del ejército y el nombramiento como nuevo comandante en jefe de la institución del general René Schneider.

Según el análisis de Augusto Varas, el Tacnazo fue reflejo de los cambios ocurridos en los sesenta; esto es, la reacomodación del bloque en el poder. Así, la incapacidad de la burguesía industrial para superar sus continuas crisis y lograr crecimiento autosostenido la habría impulsado a la búsqueda de un nuevo modelo económico que requería de la

¹⁶ Nos referimos a: el “complot de la pilsener”, en 1966; el “Manifiesto de los tenientes”, en 1967; las “Renuncias” de los alumnos de la Academia de Guerra, en 1968, y el preparativo para un “acuartelamiento voluntario” que se realizaría el 19 de septiembre de 1969.

reorganización de los partidos del bloque, la hegemonía de los aparatos ideológicos del Estado y un nuevo rol para las fuerzas armadas. El grupo nacionalista-corporativo, estanqueros, habría ofrecido el proyecto alternativo de Estado y la nueva legitimidad.¹⁷

Desde mi punto de vista, para estas fechas este proceso aún estaba en gestación, pues la gran mayoría de los empresarios seguía apegado al esquema sustitutivo y no había consenso sobre cómo superar el estancamiento; cuestión que recién se resolvió a fines de los años setenta, e incluso en los ochenta. Por otra parte, es verdad que el principal partido de la derecha, el Partido Nacional, que reunió a ex conservadores, liberales y estanqueros, asumió programáticamente el corporativismo estanquero, pero no su accionar político, no al menos hasta 1971.¹⁸ En ese sentido, en 1969 ni gran parte de la burguesía industrial ni la derecha en su conjunto estaban a favor de un golpe de Estado, de la violenta erradicación de la izquierda y la instalación de un gobierno militar nacionalista, como parece leerse del Tacnazo. El general Viaux, por otra parte, había sido un activo ibañista, por lo que su crítica acerca del abandono gubernamental a las fuerzas armadas, su rechazo a los partidos, a los “políticos” y su antimarxismo eran de antigua data. La cercanía de los estanqueros con Viaux –para entonces “pratismo”– no fue lo que le dio fuerza al Tacnazo, sino el cansancio de los uniformados por la irresolución de los problemas que afectaban la profesión militar y la politización creciente, producto –según su interpretación– de la obsecuencia del alto mando al poder civil y de la “utilización” que de ellos hacía el gobierno. Los estanqueros, además, eran fuertemente estadistas en materia económica, al igual que la oficialidad, como se demostraría después del golpe.

¹⁷ Véase A. Varas *et al.*, *Chile. Democracia...*, *op. cit.* Los “estanqueros” constituían un grupo nacionalista nacido a mediados de los años cuarenta para combatir la presencia comunista en el gabinete del presidente Gabriel González, cuyo basamento ideológico era el corporativismo de raíz hispánica. Sus principales aportes a la ulterior renovación de la derecha fueron su defensa del autoritarismo, la neutralización de los partidos, el rechazo militante al avance de la izquierda marxista y su planteamiento del rol político que cumplirían las fuerzas armadas, pues ellas debían ser las responsables de la organización interna del país. Tarde o temprano ellas tomarían el poder para evitar que fuera controlado por los comunistas. Véase un análisis más amplio en V. Valdivia, *Camino al golpe...*, *op. cit.*

¹⁸ Véase P. Drake e I. Jaksic, *El difícil camino hacia la democracia*, Santiago, Flacso, 1993, y L. Corvalán, *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*, Santiago, Ed. Sudamericana, 2000.

Con todo, es posible que un segmento de oficiales se haya adherido a la idea de la rearticulación del bloque en el poder y el deslizamiento a la derecha; a una derecha que se volvía cada vez más intransigente y anticomunista. Eran los oficiales más imbuidos de la doctrina estadounidense, para quienes el enemigo interno empezó a ocupar un lugar en sus preocupaciones, aunque no hubo hecho concreto que lo gatillara.¹⁹

La tesis de la Alianza para el Progreso y de la contrainsurgencia, por otra parte, tenía significación más amplia que la del enemigo interno; también apuntaba a una estrategia de reformas estructurales. Las fuerzas armadas chilenas tampoco escaparon a esta invitación; en efecto, así como hubo oficiales que se situaron en el conflicto este-oeste desde la perspectiva de la amenaza, hubo otros que lo hicieron desde un punto de vista optimista hacia una era de cambios.

Tanto el deseo castrense de participar en los problemas del país, más allá de sus funciones de defensa, como la evidencia del estancamiento económico y el aumento de la marginalidad, redundaron en su inserción en el debate acerca del desarrollo nacional. Tal preocupación se relacionaba, por cierto, con el macrotema del rol de las fuerzas armadas en la sociedad, aduciendo que en el caso de los países subdesarrollados el esfuerzo en tal sentido requería de todas sus “potencialidades”, entre las cuales estaban las instituciones militares, las que deberían ser capaces de adaptarse a fin de “acelerar el proceso hacia el pleno desarrollo”.²⁰ Esta incorporación militar debía entenderse como un aporte y no como una usurpación de funciones de la civilidad, pues no implicaría la alteración de las instituciones democráticas. Si bien la mayoría de los estudios acerca del periodo destacan este afán de participación, se

¹⁹ A fines de los años ochenta, algunos oficiales mencionaron que ya en 1967 ellos estaban preocupados por el MIR y el Congreso de Chillán de los socialistas, en el que se aceptaron todas las formas de lucha. Esto se ha convertido en uno de los principales argumentos para culpar a la izquierda de su responsabilidad en lo ocurrido posteriormente. Sin embargo, en las declaraciones militares de ese día 11 de septiembre, en los meses siguientes e incluso por años, esos eventos nunca aparecieron como parte de la justificación; no al menos ubicados en fechas tan tempranas. El MIR sólo se convirtió en una “realidad” en los años de la Unidad Popular, a pesar de los asaltos a bancos realizados a fines de los sesenta. En otras palabras, fue identificado plenamente como vanguardia revolucionaria, sólo durante la experiencia socialista, no antes.

²⁰ R. González, “Contribución económica de las fuerzas armadas”, *Revista de la Fuerza Aérea de Chile*, núm. 100, enero-marzo, 1996.

ha interpretado como un síntoma del escepticismo militar respecto de la situación del país; como crítica, como argumento en favor de la tesis del distanciamiento de la sociedad, y particularmente de la conducción política. Desde mi punto de vista, había entre los sectores de la oficialidad el replanteamiento de la función castrense en el contexto del Tercer Mundo y la demanda por que esto fuera reconocido y aceptado por la clase política como reacomodo, pero no necesariamente como requisito para la reestructuración sistémica dirigida a la exclusión de algunos sectores sociales. La separación que algunos estudios han hecho entre oficiales golpistas y constitucionalistas, tal vez podría complementarse con esta propuesta de una oficialidad que efectivamente buscaba reformular su presencia social participando de la oleada de cambios, pero dentro de la institucionalidad existente. No debe olvidarse la fuerte influencia del corporativismo en el pensamiento de los oficiales —que seguía vigente—, doctrina que busca el fortalecimiento y la participación de las distintas organizaciones sociales, lo que ellos llaman “las fuerzas vivas de la nación”, especialmente en países subdesarrollados.

Tal vez desde esa perspectiva pueda entenderse que hubiera entre la oficialidad una abierta recepción a las propuestas reformistas del proyecto de Kennedy. Al conjugar esa mirada tercermundista acerca de su propio papel y la centralidad que adquirió el problema del desarrollo en la época, hubo oficiales que interpretaron la rebaja presupuestaria y el abandono gubernamental de sus instituciones como efecto del subdesarrollo, pues los esfuerzos debían destinarse a luchar contra la pobreza. En ese marco analítico insertaban la teoría de la seguridad nacional, en tanto refería las medidas de “previsión y de superación que proyecta un país” como un todo, haciendo posible su colaboración. En ese sentido, lo planteado por la Alianza para el Progreso fue percibido “como un vasto esfuerzo para procurar una vida mejor a los habitantes del continente y por lo tanto es de gran beneficio para Latinoamérica y en particular para nuestro país”, toda vez que ella “facilitaría la evolución social y pacífica de los pueblos” hacia la “justicia social”.²¹ Esta disposición reflejaba optimismo en tanto el proyecto devolvía la iniciativa a occidente en su enfrentamiento ideológico, dando respuesta a problemas que facilitaban la atracción marxista, como lo demostraba el ejemplo cubano; es decir,

²¹ G. González, “La Alianza para el Progreso”, *Memorial del Ejército de Chile*, núm. 311, enero-febrero, 1963.

continuaba el rechazo a esta doctrina, pero desde la opción reformista y de incorporación social. En palabras de un joven oficial de la época: “Es importante insistir que en la actualidad, en todos los países subdesarrollados, especialmente los latinoamericanos, existe inquietud y malestar por su miseria. Este nuevo despertar, acompañado de una demanda de progreso social y económico, ha permitido crear la conciencia de que el atraso actual no es definitivo y que es posible cambiarlo por una vida más digna”.²² Para eso estaban los ejemplos de “Cuba [...] y ese hecho podría reproducirse [...] si se permitiera un acentuamiento de las ya muy violentas tensiones sociales”.²³

Esto queda más claro si se considera que la principal transformación del plan kennediano, la reforma agraria, fue recibida con entusiasmo, dado su carácter integral y el hecho de que cambiaría “los injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra con miras a sustituir el sistema de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad”.²⁴ A juicio militar, el éxito del programa reformista dependía de la suma de las fuerzas sociales tanto como de la capacidad de erosionar la resistencia de los sectores que lo rechazaban —debido a algunos aspectos del programa, como las reformas tributarias—, al tiempo de debilitar las tendencias a la especulación de los inversionistas chilenos.²⁵ De allí que se buscaran formas corporativas para cooperar al éxito del plan, como fortalecer las inversiones en meteorología que facilitarían el diseño de proyectos de desarrollo —como hidroeléctricas— y ayudarían a la modernización del agro.

Por otra parte, también se valorizaban los intentos del gobierno de Frei por potenciar los mercados latinoamericanos a través de los tratados, como el Pacto Andino y la ALALC, pues permitirían superar uno de los escollos del desarrollo: la estrechez del mercado interno. Las reformas estructurales dinamizarían distintas áreas productivas cuyos productos podrían comerciarse al alero de la política continental. Basándose en Gunnar Myrdal el análisis militar planteaba que la integración era un proceso económico y social que debía abrir caminos “para

²² P. Howard, “La integración económica”, *Memorial del Ejército de Chile*, núm. 344, julio-agosto, 1968.

²³ E. González, “La Alianza...”, *op. cit.*

²⁴ *Idem.*

²⁵ E. Sepúlveda, “Las relaciones públicas”, *Revista de la Fuerza Aérea de Chile*, núm. 88, enero-mayo, 1963.

todos”, correspondiendo al Estado la actividad rectora. Este bienestar común no podría alcanzarse manteniendo los resquemores entre países vecinos, pues “la industrialización necesita cada vez de mercados más amplios para seguir desarrollándose; sólo la integración permite alcanzar estas metas. En nuestros días, resultan insuficientes los mercados internos de América Latina”.²⁶

En estos acápites queda claro que aún estaban vigentes los principios desarrollistas impulsados décadas atrás como el rol que al Estado le cabía en esa tarea; asimismo, la simultaneidad de los procesos económicos y sociales, lo que denominamos ibañismo. Es cierto que la argumentación se veía favorecida con la doctrina estadounidense que hablaba del poder nacional, pero no apuntaba a la violenta política de exclusión y de apoyo a la acumulación capitalista, sino hacia las transformaciones estructurales que favorecieran la resolución pacífica de los conflictos con justicia social. Se notaba, en cambio, variación en términos del estrecho nacionalismo de los años cuarenta, pareciendo abrirse a un nacionalismo de tipo continental, latinoamericano; perspectiva distinta de la de los oficiales más anticomunistas, que privilegiaban la desconfianza y la hipótesis de conflicto. Ambos fenómenos dan cuenta de una mirada tercermundista.

Esta posición quedó más explícita en el análisis que un oficial hizo del papel de las fuerzas armadas en el Tercer Mundo, sosteniendo que ellas por su naturaleza tenían funciones manifiestas y latentes. Las primeras consisten en su carácter de brazo armado del Estado, mientras que las segundas se relacionan con la salvaguarda del patriotismo, el mantenimiento de sus glorias y tradiciones, como “dar cohesión e integración nacional”, misión que se cumplía a través del Servicio Militar Obligatorio.²⁷ A su juicio, era posible que en algunos momentos las funciones manifiestas retrocedieran y dieran prioridad a las latentes; es decir, a la defensa de una sociedad armónica, lo cual se relacionaba con el problema del desarrollo. Su análisis plantea además que la crisis de la armonía social se originaba en las desigualdades sociales y en las angustias que ella generaba, acentuadas por la ausencia de soluciones. Ése era el contexto que justificaba la integración de las fuerzas armadas

²⁶ P. Howard, “La integración económica”, *op. cit.*

²⁷ C. López, “Las fuerzas armadas en el Tercer Mundo”, *Memorial del Ejército de Chile*, núm. 356, julio-agosto, 1970.

al esfuerzo común, pues ellas eran parte de la comunidad nacional. “Más que reprimir o planificar la represión —señala el oficial— importa evitar que la violencia estalle [...] las fuerzas armadas deben promover esos cambios y participar en la ejecución de ellos”.

Esta línea muestra, por una parte, que la DSN no tuvo una sola lectura, y por otra, que cayó sobre otra plataforma; aquella que insistía en la necesidad de evolucionar, de abrir el sistema para debilitar las amenazas y evitar su destrucción. Había una lectura social de la pobreza. Creo que ello se debía en parte a la subsistencia del corporativismo en el pensamiento militar, en tanto equidistancia de izquierdas y derechas (especialmente en relación con su sentido antioligárquico) y fortalecimiento de la sociedad, que eran dos cuestiones centrales del pensamiento militar; se debía, a su vez, a su convicción sobre el papel crucial que en ese equilibrio le cabía al Estado como expresión de la sociedad. La doctrina estadounidense dio nuevos bríos y argumentos a ese legado, y a pesar de su anticomunismo no logró neutralizar del todo el énfasis en la comunidad que tenía.

Estas tendencias se reflejaron también en el acuartelamiento de octubre de 1969, en el Tacnazo, acción militar que no tuvo una lectura solamente asociada a la derecha. De acuerdo con el testimonio de la época y de fechas posteriores, la lejanía militar de la sociedad buscaba caminos de inserción, para lo cual hubo contactos entre oficiales de la fuerza aérea y del ejército con objetivos, según unos, puramente corporativos y, según otros, para ir más allá.²⁸ Al parecer había entre la joven oficialidad de estas ramas cierta atracción hacia el ejemplo peruano del general Juan Velasco Alvarado, quien en ese momento iniciaba un vasto programa de nacionalismo económico y de reformas sociales, cuyos ejes fueron la nacionalización del petróleo y la reforma agraria. El mayor López, que cité anteriormente, afirmaba que las intervenciones militares por esos días estaban tomando nuevas orientaciones, como el ejemplo peruano lo demostraba, el cual había iniciado junto a su pueblo la marcha hacia la justicia social. Dada la centralidad que el general Viaux tuvo en el conflicto con el gobierno de Frei Montalva que derivó en el Tacnazo, los conspiradores se pusieron en contacto con él, pero un superior les sugirió que esperaran la respuesta del gobierno a las demandas castrenses que se le habían hecho llegar. Supuestamente, un grupo no quiso esperar y por ello el motín estalló sin la preparación adecuada.

²⁸ Comandante de escuadrilla retirado, Carlos Castro S.

Según información del periódico del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el levantamiento militar tenía una inspiración cercana al ejemplo peruano, pues la mayoría de los oficiales eran lejanos a la derecha. A su vez, un socialista denominó al acuartelamiento “tecnodesarrollismo militar cuyo hombre emblema es Velasco Alvarado”, siendo su finalidad superar el subdesarrollo y terminar con el “vasallaje”.²⁹

Esta segunda lectura del Tacnazo nos permite relativizar la convicción en unas fuerzas armadas totalmente proclives a la erradicación violenta del marxismo, aliadas con una derecha en reestructuración de tendencias antidemocráticas. Aunque la preocupación por el desarrollo pueda ser leída bajo la perspectiva de la seguridad nacional, entonces no implicaba necesariamente estar a favor de una política de exclusión, sino que era posible una apuesta nacionalista de nuevo cuño. Ello explicaría que el ejemplo aparecido repetidas veces haya sido el general Velasco Alvarado y Gammal Abdel Nasser y no el general surcoreano Park Chung Hee, quien encabezó la modernización capitalista que hizo de Corea del Sur un tigre asiático, en el marco de un régimen fuertemente anticomunista y restrictivo de los derechos laborales. Si la contrainsurgencia dominaba el pensamiento militar, ¿cómo se entienden estas expresiones?, ¿o la afirmación del propio general Prats a fines de 1969 de que 80% del personal de planta de las fuerzas armadas era de tendencia política centro-izquierdista, no proclive al marxismo y sólo 10% derechista?³⁰

En suma, estas dos miradas castrenses acerca del acontecer de la década del sesenta demuestran que aún subsistían elementos de la doctrina anterior, que la teoría de la seguridad nacional no pudo desbancar del todo.

3. EL GRAN TRAUMA: LOS AÑOS DE LA UNIDAD POPULAR

Ningún gobierno chileno antes de la Unidad Popular dependió tanto de la prescindencia política de las fuerzas armadas. La llegada de un marxista al poder por la vía democrática no sólo fue un acontecimiento

²⁹ P. Godoy, “Las fuerzas armadas como alternativa del poder”, *Noticias de Última Hora*, 15 de enero, 1970.

³⁰ C. Prats, *Memorias*, Santiago, Ed. Pehuén, 1985, p. 141.

histórico, sino que se convirtió en el más formidable examen para la autopercepción militar y su compromiso democrático.

El contexto en que esto ocurría, sin embargo, no era el más propicio, pues en más de un sentido la experiencia allendista fue un cataclismo para las relaciones cívico-militares. No sólo por la ideología de la coalición triunfante en 1970, antagónica al pensamiento castrense, sino también por los cambios que, dada su debilidad, introduciría el gobierno de Allende. Alejándose de la política de abandono castrense de las últimas décadas, la Unidad Popular las convocó a participar activamente en el terreno administrativo, social, económico y —más tarde— político, para sumarse al proceso de cambio que se advenía manteniendo su carácter profesional. Esta decisión obedecía tanto a la necesidad de neutralizar las presiones de los sectores derechistas que buscaban inducirlos al golpe de Estado, como a la convicción socialista de incorporarlas al proceso democratizador. Este cambio de política supuso la llegada de oficiales a reparticiones estatales, como la acentuación del Servicio Militar del Trabajo y, por ende, hizo realidad la demanda militar de los últimos años de la década de los sesenta de dejar de ser —como dirían más tarde— “los grandes mudos”.³¹ En la sección anterior he argumentado que existían segmentos militares proclives a una incorporación de este tipo, que los recontactaría con la sociedad, sin abandonar su profesionalismo. La Unidad Popular cumplía ese deseo. El problema, con todo, era que tal modificación en el papel de las fuerzas armadas se hacía en el marco de una feroz lucha política y no de la “normalidad”. Fue esa complejidad del panorama lo que agudizó las tensiones cívico-militares, pues al mismo tiempo que la debilidad política del gobierno requería del apoyo castrense, su participación los politizaba, con resultados inciertos para la coalición. La debilidad del gobierno le impidió controlar y encauzar esa incorporación, no pudiendo fortalecer a la oficialidad dispuesta a colaborar en esa estrategia sino, al contrario, a aquella que veía con malos ojos esta “utilización política”, facilitando la presión de la civilidad golpista.

La precariedad en que se produjo el triunfo de Salvador Allende ofreció el marco ideal para aquellos sectores civiles y militares que rechazaban bajo todo punto de vista el reconocimiento de tal hecho. El

³¹ La expresión corresponde al general Nicanor Díaz Estrada; véase S. Marras, *Confesiones*, *op. cit.*

proceso de deliberación castrense se había acelerado con el Tacnazo, sumándose a su favor la elección de Allende que parecía confirmar los temores de la derecha nacionalista y de militares anticomunistas. En una primera fase, el general retirado Roberto Viaux adquirió centralidad en el proceso de socavamiento del respeto a la institucionalidad, tanto porque las demandas corporativas encarnadas por el acuartelamiento del Tacna contaron con el respaldo, activo o pasivo, de gran parte de los oficiales de las distintas ramas de las fuerzas armadas, como por el carácter político que éste adquirió. La exigencia por mayor presupuesto, sueldos y modernización de instalaciones y de equipos interpretó a una oficialidad a la cual le habían correspondido sólo épocas de decadencia y que añoraba alcanzar un estatus social; de igual modo, Viaux pareció interpretar las aspiraciones de ciertos grupos de la derecha nacionalista (Ofensiva Libertadora, Movimiento Nacional Sindicalista, Tizona) que vieron en el motín militar la oportunidad de entablar una alianza para evitar el avance del marxismo, persiguiendo la politización del ex general. A partir de ese momento, la presión sobre Viaux no cesó, siendo calificado como un “Portales”, un “Oliveira Salazar”. Fue en este marco, posterior al Tacnazo (comienzos de 1970), cuando Viaux estrechó lazos con las tendencias nacionalistas corporativas de corte hispanista, cercanas al pensamiento estanquero, levantando una plataforma propiamente política y antidemocrática.

La cercanía de Viaux con el nacionalismo hispanista fue crucial para la estrategia de deliberación castrense que se planeaba, toda vez que los grupos con tal inspiración ayudarían a consolidar o madurar aspectos de la DSN entre algunos oficiales. En primer lugar, estos grupos rechazaban visceralmente a los partidos políticos, dadas sus tendencias doctrinarias corporativas, viendo en la democracia representativa el reflejo de la politiquería, de los intereses parciales y de la ineficiencia. Entre sus principios estaba la instalación de una democracia orgánica y la neutralización o eliminación (dependiendo del grupo) de las colectividades partidarias, junto con la aspiración a un régimen autoritario. Oficiales como Viaux compartían este escepticismo, como lo hemos visto anteriormente, razón por la cual su sentido antipartidos y antipolíticos se acentuó con la compañía de sectores que argumentaban doctrinariamente tal cuestión. Si bien Ibáñez y su oficialidad habían sido atraídos por el corporativismo, esto no tenía sesgo estrictamente programático, sino más bien buscaba el debilitamiento de los intereses

de los partidos y de los políticos; en otras palabras, el corporativismo castrense no apuntaba a la creación de un orden de ese tipo, ya fuera estatal o no, como sí lo hacían estos movimientos, constituyéndose esto en una línea divisoria.³² No obstante, el liderazgo que se le reconoció a Viaux ayudó a forjar una alianza que insistía en su crítica al orden democrático representativo y que exacerbó las desconfianzas castrenses de las autoridades políticas.

En segundo lugar, la alianza nacionalista-Viaux alimentó la autoconciencia militar de su responsabilidad frente a la supervivencia de la patria, pues estos movimientos fueron los primeros en sostener la necesidad de otorgar a las fuerzas armadas un rol político, ya que eran la “base de sustentación del régimen democrático”. A su entender, estas instituciones eran la columna vertebral de la nación, la encarnación de la raza, razón por la cual deberían convertirse en el factor del progreso educacional, técnico y económico del país. En 1968, el líder estanco Jorge Prat formuló su tesis del “vacío de poder” que suponía la toma del gobierno por las fuerzas armadas en un momento en que dada la evolución política del país, sólo habría dos actores capaces de hacerlo: los militares o los comunistas. Mientras estos grupos se mantuvieron en la marginalidad, el discurso no tuvo mucho eco en los cuarteles, pero en la medida en que la institucionalidad abría camino a un experimento marxista que concitaba temor, la militarización del discurso nacionalista tendió un puente hacia sectores de la oficialidad. Junto al nacionalismo, Viaux y sus seguidores cuestionaron la democracia liberal, demandaron la imposición del sentido militar de la vida y el “ejercicio severo de la autoridad”. En otras palabras, la compañía de estos grupos incidió en el carácter rupturista que asumió la molestia y acción militares.³³

El nacionalismo también vigorizó el anticomunismo castrense tanto como las formas de luchar contra él, contenidas en la teoría de la con-
trainsurgencia. Los nacionalistas chilenos, en particular los estanco-
queros –se dijo antes–, estaban en una posición anticomunista más cercana a

³² Algunos de estos grupos aspiraban a un Estado corporativo; otros, al fortalecimiento e independencia de las organizaciones intermedias; o sea, al corporativismo antiestatal. La oficialidad no había elaborado este punto; sólo hablaba de disminuir la influencia partidaria.

³³ Aún no está claro si efectivamente el Tacnazo tuvo propósito golpista. La declaración que algunos oficiales han hecho posteriormente apunta a confirmar esos rumores; sin embargo, esto no es absolutamente coherente con la documentación de la época y con los testimonios de otra oficialidad.

esta doctrina que a la ibañista, la cual sostenía que las reformas sociales podrían disminuir el atractivo de la izquierda. Los estanqueros –se dijo antes–, nacieron como respuesta a la presencia de los comunistas en el gabinete de Gabriel González en 1946, ayudando a crear una organización militarizada, la Acción Chilena Anticomunista (ACHA), para lograr mediante la fuerza su exclusión del escenario político y su encierro en el campo de concentración de Pisagua, en el norte del país. Con ello, los estanqueros revalorizaron la violencia como método de lucha contra el comunismo, frente a la supuesta debilidad de las instituciones. Esta estrategia fue revivida en 1970, como lo demostrarían “Patria y Libertad” y otros grupos de choque. El asesinato del comandante en jefe del Ejército, René Schneider, en octubre de 1970, a manos de Viaux y sus secuaces nacionalistas con el apoyo de la CIA, demostró la convicción en el uso de la violencia para alcanzar la exclusión buscada.

Si Viaux encarnó la mixtura ibañista-DSN, las siguientes conspiraciones para derrocar a Allende se sostendrían en esta última. Así como el nacionalismo favoreció una postura más confrontacional, el conflicto político desatado durante los años 1971 y 1972 creó el ambiente propicio para acusar a la Unidad Popular de ingobernabilidad, ineficiencia y de poner en peligro la existencia de la nación. Los oficiales antigobiernistas, la mayoría en retiro por su participación en conatos subversivos durante 1970, se unieron para intentar derrocar al gobierno. A comienzos de 1972 se descubrió el “Plan Marzo”, en el que estaban comprometidos la Unión Cívica Democrática, creada por Jorge Prat, los generales retirados Arturo Marshall y Fernando Nierad, y el general en servicio activo Alfredo Canales. Meses más tarde quedó al descubierto el “Plan Septiembre”, que significó el retiro para el general Canales dada su abierta participación. La argumentación de estas conspiraciones se basaba en la doctrina de seguridad nacional. El general Canales sostuvo que el problema más grave que vivía el país era la “descohesión del frente interno”, lo cual debilitaba la soberanía nacional que necesitaba de todas “las fuerzas vivas de la nación”. A esa situación se sumaba la crisis interna, desarrollada como efecto de la debacle económica y la polarización política. La presencia de oficiales en el gobierno después de octubre de 1972, sirvió a Canales como una prueba más del peligro al que la Unidad Popular llevaba al país, pues los ministros militares no habían exigido al gobierno mayor preocupación por la soberanía nacional. El acercamiento al bloque soviético, por

otro lado, rompía el alineamiento “natural” con occidente y no ofrecía los recursos técnicos necesarios; su presencia, además, sólo creaba tensiones con los países fronterizos, especialmente con una política exterior que —se aseguraba— atacaba a los gobiernos militares vecinos. La UP había fomentado la lucha de clases al permitir la existencia de grupos armados, sin aplicar con el rigor necesario la Ley de Control de Armas, llevando a la nación a la “anarquía”. Asimismo, había quebrado la tradición cultural “inculcando [...] el culto por personajes extranjeros, propagandistas del odio y del terrorismo”. Afirmaba Canales que en situaciones de quiebre interno como el que Chile vivía, las naciones “ya no pueden considerar sólo al enemigo externo, sino el que internamente existe en el país”.³⁴

El balance del general Canales contenía todos los argumentos en favor de una intervención militar justificada en el peligro de la nación, azuzada por enemigos internos. Estos conceptos fueron reiterados un mes más tarde por un grupo de generales y almirantes en retiro quienes pensaban que los uniformados no podían mantener una “actitud contemplativa”. Se agregó el “Memorándum” preparado por integrantes de las tres ramas armadas, de donde saldría el núcleo para la conspiración final, que reafirmaba el quebrantamiento de los frentes externos e internos. A su entender, era imperativo recuperar el sentido de autoridad, especialmente sobre los sectores laborales, la prensa y los grupos paramilitares, aplicando en toda su extensión la ley de Control de Armas. Paralelamente, otros oficiales ya habían comenzado la persecución y castigo del enemigo interno, como en los casos del coronel Manuel Contreras, en San Antonio, denunciado en julio de 1973, y del general Manuel Torres de la Cruz, en Punta Arenas. Si los basamentos antimarxistas de la anterior doctrina ibañista fueron vistos como insuficientes para detener lo que se percibía como amenaza real, los planteamientos de la contrainsurgencia vinieron a entregar los elementos necesarios. De igual forma, la represión iniciada por los oficiales mencionados auguraba el carácter del castigo que vendría después. En este sentido, cerca del momento del golpe la tesis de enemigo interno había entrado en la recta final para justificar la toma del poder y la represión posterior. El ibañismo, en este caso, fue reemplazado por la contrainsurgencia. Para

³⁴ Véase *Chile Hoy*, 29 de septiembre de 1972; *Qué Pasa*, 5 de abril de 1973; *La Tercera de la Hora*, 12 de abril de 1973.

los oficiales que procesaron de esta forma la experiencia de la Unidad Popular, ésta había sido “un trauma”.

Hubo otros oficiales, sin embargo, que vivieron esta etapa con menos dramatismo, tratando de insertarse en la oleada de cambios. Siguiendo la tónica de los años sesenta, evaluaron el experimento dentro de la tentativa tercermundista de superar la dependencia y el atraso mediante proyectos nacionalistas de modernización; aunque hubo también algún giro hacia un socialismo no marxista. El referente más llamativo parece haberlo constituido el denominado “socialismo árabe” en el Oriente Medio, a la cabeza de oficiales provenientes de las capas medias, quienes implantaron regímenes que apuntaban a medidas de transformación estructural. Si bien no sabemos con exactitud cuál fue el nivel de influencia que esos ejemplos tuvieron entre la oficialidad chilena, su existencia no pasó desapercibida y sirvió como parte de su fundamentación a la hora de analizar el caso particular de Chile. Así como los anticomunistas se apoyaban en la seguridad nacional, éstos lo hacían en alternativas nacionalistas de nuevo cuño.

La administración del líder egipcio Gammal Abdel Nasser se convirtió en referente de liberación basado en la defensa de los intereses del país, desde una postura percibida como plenamente nacional, sin seguir ejemplos foráneos. Nasser, calificado como “la más grande figura en la historia moderna”, fue la figura en torno de la cual algunos militares evaluaron las opciones que tenía un país del Tercer Mundo de poner en marcha un proceso de independencia económica, rompiendo lazos con la potencia colonial histórica y sin tomar posición en la Guerra Fría. De acuerdo con el análisis castrense, Nasser había comprendido que la liberación de su pueblo no pasaba únicamente por romper la dominación extranjera; tenía que superar el subdesarrollo y las malas gestiones políticas, siendo de urgencia transformarlo “en una nación fuerte, de limpio y renovado espíritu”.³⁵ Implicaba hacerse cargo de los graves problemas de salud que aquejaban a la población egipcia, del ámbito sanitario, la educación, realizar la reforma agraria, nacionalizar el Canal de Suez, y construir la represa de Assuán. Con ello, a juicio del general Álvarez Marín, hicieron “más por Egipto en un par de años que la familia real en siglo y medio”. Este oficial rescataba los cambios estructurales que

³⁵ R. Álvarez, “Análisis de la situación político-militar”, *Memorial del Ejército de Chile*, número especial, 1972.

atacaban directamente los núcleos de sus problemas económicos y sociales, a la luz de un pensamiento nacionalista de tipo vanguardista, lo cual ponía en evidencia la contraposición entre los militares en el poder y la antigua clase dirigente.

Egipto fue atractivo también desde otro punto de vista. Destacaba por su habilidad para negociar y extraer ventajas de los bandos en lucha en el contexto de la Guerra Fría. Luego de la revolución de 1952 y la nacionalización del Canal de Suez, Gammal Abdel Nasser manejó hábilmente a su favor la rivalidad estadounidense-soviética por llenar el vacío dejado por Inglaterra. El análisis militar resaltaba la decisión nasserista de aceptar al comienzo el apoyo estadounidense, pero habiendo diseñado simultáneamente una política de acercamiento con la Unión Soviética que le permitió acceder a capitales, ayuda técnica y armamento. Esta estrategia “de independencia” había quedado de manifiesto cuando “paralizó al comunismo [...] poniendo fuera de la ley al Partido Comunista, mientras recibía con honores a los gobernantes de la Unión Soviética”. La autonomía de la potencia soviética le había permitido fortalecer una experiencia de rasgos socialistas, no marxistas, y fortalecer el movimiento de los países no alineados.

Esta posición de un general en retiro se veía avalada por oficiales en servicio activo que concordaban en que las fuerzas armadas debían tener un papel más activo cuando se trataba de países en vías de desarrollo, donde su misión era más compleja y variable. Si el Tercer Mundo se encontraba batallando por la modernización, todos los componentes debían ser parte del proceso, incluidas las fuerzas armadas que “por su carácter popular y su esencia nacional [...] están inmersas en esta verdadera lucha por la liberación nacional”.³⁶

La conjunción de estas dos fuentes de pensamiento: el nuevo papel de los militares en nuestros países y el ejemplo de un socialismo nacionalista no soviético, favorecieron miradas castrenses optimistas acerca de la posibilidad de iniciar una nueva etapa histórica en Chile. Si el gobierno de Allende mantenía su postura universalista en materia de política exterior y de respeto a la autodeterminación de los pueblos,

³⁶ Véase J. E. Gugliamelli, “Las fuerzas armadas en América Latina (FFAA y Revolución)”, *Memorial del Ejército de Chile*, núm. 375, 1973, y H. Moya, “Participación, en teoría, de las fuerzas armadas en la política de los estados modernos”, *Memorial del Ejército de Chile*, núm. 369, octubre-diciembre, 1972.

tal vez podría producirse cierto desplazamiento, sin quiebres totales, del alineamiento tradicional con Estados Unidos. Era necesario que Chile no cayera bajo “otra órbita de influencias y dependencias foráneas”, para lo cual debía actuar neutralmente en sus relaciones exteriores de modo que pueda ser “comprendido como un país enteramente no alineado”.³⁷ De actuarse con ese criterio, Chile podría acercarse a la Unión Soviética para acceder a bienes que le fuera difícil conseguir en otros mercados, favoreciendo el desarrollo nacional, como también la colaboración y el aporte científico y tecnológico. La clave para hacer esto posible era evitar caer en una nueva dependencia, lo cual suponía ser capaces de resistir las presiones moscovitas, definiéndose como un país no alineado. De la prudencia con que se hiciera este giro dependería, posiblemente, el éxito y la apertura hacia otros mercados, como los de Asia Pacífico, el fortalecimiento de los acuerdos con los países vecinos y la demostración de la ausencia de peligro que podía revestir un gobierno socialista. Si ello se lograba, se podría irradiar esta experiencia, al mostrar “que el camino seguido por él es el mejor”, favoreciendo la “aceptación paulatina de la entronización de ideas socialistas por parte de otros”.³⁸ El requisito era no caer en la órbita moscovita.

La experiencia de la Unidad Popular, como se observa, no se convirtió necesariamente en un trauma para otros oficiales, sino parece haber engarzado con las tendencias que buscaban su inserción en el marco de respeto a la Constitución y la subordinación al mando civil. Esto se hace más claro si se considera que había una opinión proclive al rol social del Estado, pues al igual que los seres vivos –sostenía el mayor Juan Barriga– los estados tenían necesidad de expandirse y crecer. Era su tarea hacerse cargo de las “necesidades colectivas [como] la educación, previsión social, sanidad, vivienda, caminos, transportes, etc.”.³⁹ Las fuerzas armadas, como parte del Estado, colaborarían en esta cruzada, pero no debían asumirla como si fuese su responsabilidad, pues “es problema del gobierno”. Si utilizamos el lenguaje del mayor López, las fuerzas armadas debían recalcar sus “funciones latentes”.

³⁷ E. Jaña *et al.*, “Tradición e innovación en la política exterior de Chile”, *Memorial del Ejército de Chile*, núm. 367, mayo-junio, 1972.

³⁸ *Idem.*

³⁹ J. Barriga, “Lo que debemos saber sobre seguridad y defensa personal”, *Memorial del Ejército de Chile*, núm. 373, mayo-agosto, 1973.

Esta mirada menos pesimista y más respetuosa de la institucionalidad también se reflejaba en su posición respecto a los grupos de izquierda más radicalizados. Para este segmento, esos grupos respondían a una problemática mundial que se originaba en “minorías desesperadas”; pero el caso de Chile no era insoluble, dado que la mayoría de la población –según el mayor Barriga– era partidaria de la democracia, y no siendo Chile una dictadura era posible encontrar solución a los problemas nacionales, la que se hallaba en el área “política y no militar”. Si creían, como el resto de la oficialidad, que el gobierno debía robustecer el principio de autoridad y sancionar las transgresiones a los marcos legales. Este aspecto no era ajeno a las fuerzas armadas, pero ellas de preferencia deberían concentrarse en los contingentes que recibían en el Servicio Militar Obligatorio, desde donde era su deber inculcar sentimientos patrióticos y de nacionalidad; en ese sentido, estas instituciones debían acentuar su papel cívico educacional en los cuarteles; otra vez, las “funciones latentes”.

Esta posición aperturista fue reafirmada en 1972 cuando se celebró la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, donde se hizo cargo de la vicepresidencia de la comisión chilena para tal actividad el general Orlando Urbina, esperando que Chile se convirtiera en un hogar para la humanidad, especialmente para los países que como Chile aspiraban al desarrollo. Desarrollo, socialismo nacionalista, no alineamiento: éstos eran los principios que a algunos oficiales les permitieron mirar la experiencia chilena con optimismo.

Estos planteamientos eran una manifestación concreta del reconocimiento de la legitimidad del gobierno de la Unidad Popular y de su proyecto socialista, pero también de los marcos en que podría insertarse: un lugar tercermundista y no alineado. El énfasis en el desarrollo se relacionaba con una salida democrática a los problemas de la seguridad nacional, necesariamente equidistante de las dos potencias en conflicto. A diferencia de los oficiales obsesionados con el enemigo interno, que postergaban la resolución de los problemas sociales y económicos para concentrarse en el debate político, estos otros parecían confiar en las oportunidades que se abrían con los desarrollismos nacionalistas no identificados con alguno de los bloques.

La disposición desarrollista de estos oficiales recordaba más lo que a lo largo de este trabajo hemos denominado ibañismo. Si bien había claramente rechazo al marxismo en su identificación soviética, no se

aspiraba a una lucha con él en el terreno de la represión masiva; aunque esta expresión no era desechada como principio. Reflejaban una postura más incorporativa que exclusoria, a pesar de insistir en la importancia de la autoridad, tal como en su momento lo hizo Ibáñez y en esos días lo hacía el general Nasser; en otras palabras, ni siquiera la experiencia de la Unidad Popular que supuestamente alienó a toda la oficialidad logró desbancar del todo una forma de entender la sociedad chilena que hacía referencia a la capacidad de avanzar gradualmente, manteniendo el sentido de comunidad. En medio de la crisis social y política en que se debatía la UP, hubo segmentos de oficiales que vislumbraron la posibilidad de mantener esa tónica, abriéndose a otros referentes internacionales: no auguraban un cambio doctrinario.

Sus congéneres anticomunistas, en cambio, reflejaban en ciernes lo que más tarde se constituiría en la nueva doctrina, asociada a lo que denominamos pinochetismo. Hacia fines de la Unidad Popular, ésta se estaba perfilando en la postura intransigente y violentista contra la izquierda marxista que hemos delineado, rechazando cualquier posibilidad de arreglo. Para los conspiradores y la derecha que los acompañaba, su exclusión y la devolución de las propiedades expropiadas eran condiciones irrenunciables del nuevo orden que debía instaurarse. La alianza de un segmento de los militares con la derecha más anticomunista y opositora a las transformaciones estructurales hechas desde mediados de los sesenta se constituía en la articulación incipiente de la nueva etapa doctrinaria de las fuerzas armadas en la era de Pinochet.

EPÍLOGO

La nueva doctrina encontraría su formulación definitiva en los siete años que siguieron a la caída de la Unidad Popular. A pesar de que los discursos del día 11 de septiembre y los meses y años siguientes hicieron hincapié en el anticomunismo y la inhumanidad de sus portavoces, el pinochetismo, en tanto representación doctrinaria, aún estaba en ciernes.⁴⁰

Efectivamente, el primer aspecto de la nueva era que se definió fue la “legitimidad” de la represión como el medio para alcanzar la paz

⁴⁰ V. Valdivia, *El golpe...*, *op. cit.*

social y la eliminación del marxismo. Desde aquel mismo día, con el bombardeo a la Moneda, el apresamiento de cientos de dirigentes sindicales, sociales y políticos, y el fusilamiento inmediato de algunos de los más reconocidos exponentes del gobierno socialista, se hizo evidente la decisión castrense de reimponer la dominación mediante el uso arbitrario y despótico de la violencia. La coordinación de los organismos de inteligencia de cada una de las ramas armadas en diciembre de 1973 inició la etapa del terrorismo racional y sistemático, que habría de alcanzar su expresión máxima en los años de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina). La aplicación del terror y el bombardeo discursivo hegemónico que calificaba a los militantes y simpatizantes de los partidos marxistas como delincuentes y exponentes del mal absoluto, coparon el ambiente nacional y paralizaron a la sociedad. El miedo se apoderó de ella.

La ferocidad de la represión no sólo desconcertó a la civilidad, sino también a segmentos de esas mismas instituciones, los cuales no esperaban tales niveles de violencia, especialmente en áreas de provincia. A estas alturas, ya es sabido que hubo numerosos casos de comandantes de regimientos que sólo apresaron a los dirigentes más destacados de la Unidad Popular, sin que se pusiera sus vidas en peligro, comprobando la tranquilidad reinante en sus respectivas regiones. El caso del coronel Efraín Jaña, comandante en Talca, del general Lagos en Antofagasta, y del mayor Reveco, son ejemplos de la convicción de que una intervención militar tendría inevitablemente dosis de violencia, pero se mantendría dentro de ciertos márgenes y no sería la norma. De acuerdo con testimonios de oficiales como el de Reveco, la Caravana de la Muerte, encabezada por el general Sergio Arellano Stark, fue antes que una advertencia para la izquierda y la civilidad, un “recado” para las propias filas militares, para dejar en claro la naturaleza del nuevo mando y el castigo de cualquier brote de indisciplina o insubordinación.⁴¹ Las torturas sufridas por numerosos oficiales, especialmente en la Academia de Guerra Aérea, y la muerte del general Alberto Bachelet, y del coronel Cantuarias, entre otros, dejaron en claro a todos los uniformados cuál era la situación a partir de entonces. Según el mayor Reveco, la represión inaugurada con posterioridad al 11 de septiembre se relacio-

⁴¹ P. Verdugo, *Los zarpazos del Puma*, Santiago, Ediciones Chile-América, 1989.

naba con la precaria situación del general Pinochet, no participante en la conspiración golpista y, por lo tanto, desconocedor del ejército que comandaba. La imposición de su autoridad pasaba por el ejercicio de la violencia total.

Esta actitud marcaba un cambio respecto a cómo habían ejercido la violencia los anteriores mandos y abrió una nueva etapa en ese ámbito del pensamiento militar. Resistirse o intentar detener las nuevas políticas o la omnipotencia del coronel –y muy pronto general– Manuel Contreras podía tener un alto costo, el cual oscilaba entre la pérdida de la carrera profesional y la propia vida. Conocidas son las críticas levantadas por los generales Óscar Bonilla y Augusto Lutz a los procedimientos con los prisioneros políticos. El resultado fue el silencio de la oficialidad no comprometida directamente con la represión, mientras las jóvenes generaciones empezaban a ser dominadas por la teoría de la contrainsurgencia. Sabemos que los ascensos pasaron a ser manejados directamente por el general Pinochet, de modo que el alto mando que se conformó hacia fines de los años setenta era hijo profesional e ideológico –luego de su incursión por la Academia de Seguridad Nacional– de su comandante en jefe. El antiguo generalato pasó a retiro en su gran mayoría y los oficiales que se quedaron (como Nilo Flood y Herman Brady) le debían todo a su generalísimo. En pocas palabras, la generación militar que había crecido bajo la antigua impronta abandonó las filas, mientras la nueva oficialidad, joven, internalizaba plenamente los principios del enemigo interno. El marxismo pasó a representar la culminación del mal; la lucha por su exterminio era una cruzada nacional dentro del contexto mundial. Hasta el día de hoy, la oficialidad que acompañó al general Pinochet en esa tarea cree haber hecho lo correcto. La nueva doctrina pinochetista implicaba aceptar y ejercer la violencia contra la izquierda y cualquiera disidencia como un deber.

Un segundo aspecto doctrinario que comenzó a adquirir forma en estos años fue la nueva concepción socioeconómica del Estado. Como hemos visto, hasta entonces la oficialidad creía en la necesidad de la intervención estatal en la coordinación de las fuerzas productivas y en su estímulo, como también en una política de justicia social. Tales acciones ayudaban a cohesionar la comunidad, quitándole la base social al marxismo, buscando su debilitamiento. El avance estatal en el área de propiedad social durante la Unidad Popular, sin embargo, reforzó una postura militar favorable a la propiedad privada, en tanto ésta se consideraba el

motor del desarrollo y había sido arrasada por el socialismo estatizador. Un punto de consenso dentro de la oficialidad era que el fin del gobierno socialista debería implicar la restitución de las propiedades confiscadas, salvo aquellas de carácter estratégico. Tal convicción no era sinónimo de cuestionar el capitalismo de orientación keynesiana prevaleciente hasta 1970, pero abrió un canal de comunicación con sectores que esperaban revertir por completo la situación. Los altos niveles de inflación durante 1974 y comienzos de 1975 y la crisis económica internacional vinieron a ofrecer argumentos necesarios a los neoliberales para convencer al general Pinochet de la urgencia de aplicar medidas radicales. Si bien desde 1975 el neoliberalismo fue avanzando, tanto el general Gustavo Leigh y el cuerpo de generales de la Fuerza Aérea –como el comité asesor de la Junta y otros oficiales– resistieron la implantación total del nuevo modelo, especialmente a través de las condiciones para devolver las empresas y el papel de la Corfo. El foco de la discusión se centró en las denominadas empresas estratégicas, clave para controlar los procesos de desarrollo y seguridad nacional. Aunque hacia 1978 la gestión del general Luis Dánús retuvo las empresas estratégicas más importantes, el proceso ya era irreversible. A fines de ese mismo año, el general Pinochet ordenó a José Piñera la elaboración de un nuevo plan laboral que adecuara el sistema de relaciones industriales a la nueva lógica del mercado y del individuo. Dos años más tarde ocurriría lo mismo con los sistemas previsional y de salud; en pocas palabras, el Estado fue apartado de sus funciones sociales y económicas para ser entregadas a los privados, primando una perspectiva individualista y atomizada de la sociedad. La oficialidad que defendió el antiguo esquema estatal fue separada de las filas durante la segunda mitad de la década de los setenta; los que disientían debieron aceptar el nuevo orden. La transición del Estado benefactor al subsidiario entró en su fase final a mediados de los ochenta. Para la época del plebiscito de 1988, el neoliberalismo y la nueva noción de Estado se habían convertido en la doctrina imperante en las filas militares, como lo probaría la votación en las mesas electorales con alta inscripción de uniformados en la elección presidencial y parlamentaria de un año después. En ellas, la votación militar favoreció abiertamente al candidato presidencial de la derecha, portavoz del neoliberalismo y ex ministro de Hacienda del régimen militar, Hernán Büchi, como a los candidatos a parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y de Renovación Nacional (RN), encarnación civil del proyecto neoliberal.

Por último, la antigua noción de un sistema político pluralista, con espectro ideológico amplio, conformado por partidos que mediaban los distintos intereses sociales y un estilo de negociación y acuerdo, también fue reemplazada. En primer lugar se extirpó toda presencia de ideologías marxistas o socialistas de cualquier tipo, reduciendo el espectro ideológico en un comienzo al corporativismo, y posteriormente sólo al liberalismo capitalista; en segundo lugar, el histórico escepticismo militar hacia las colectividades partidarias, reforzado con la experiencia de la Unidad Popular, se convirtió en uno de los principales elementos para la articulación de un sistema que apuntara a su total debilitamiento. El énfasis en el individuo, el desmantelamiento de las organizaciones sociales, las funciones institucionales asignadas a las fuerzas armadas y la concentración del poder político en el ejecutivo diseñaron un estilo de escasa participación civil en política y de alejamiento de las colectividades, tanto partidarias como sociales, en cuanto mediadoras de los intereses de las personas. A partir de entonces, sus logros y fracasos dependerían sólo de sí mismos y no de su pertenencia a asociaciones de cualquier índole, las cuales pasarían a ser vistas como escollos al ascenso social. Las anteriores redes sociales fueron cuestionadas, despreciadas, y por ende debilitadas. En todo, la sociedad sería una suma de individuos, salvo en el antimarxismo que pasaría a ser el núcleo de la comunidad.

Individuo, represión institucionalizada, Estado subsidiario y activo rol político para las fuerzas armadas se constituyeron en las nuevas bases doctrinarias de esas instituciones. Era el colapso definitivo del ibañismo y el ascenso del pinochetismo.

BIBLIOGRAFÍA

- Ahumada, Arturo, "El ejército y la revolución del 5 de septiembre de 1924: reminiscencias", Santiago de Chile, s.n., 192-.
- Álvarez *et al.*, "De Ariosto Herrera al general Viaux: un estudio de los *complots* militares en Chile", *Memoria*, Universidad Blas Cañas, 1995.
- Álvarez, René, "Análisis de la situación político-militar", *Memorial del Ejército de Chile*, número especial, 1972.
- Bari, David, "El ejército ante las nuevas doctrinas sociales", Estado Mayor General, 1922.
- Barriga, Juan, "Lo que debemos saber sobre seguridad y defensa nacional", *Memorial del Ejército de Chile*, núm. 373, mayo-agosto, 1973.

- Bennet, Juan P., *La revolución del 5 de septiembre de 1924*, Santiago, Ed. Baccells, 1925.
- Corvalán, Luis, *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*, Santiago, Editorial Sudamericana, 2000.
- Drake, Paul e Iván Jaksic, *El difícil camino hacia la democracia*, Santiago, Flacso, 1993.
- Godoy, Pedro, “Las fuerzas armadas como alternativa del poder”, *Noticias de Última Hora*, 15 de enero, 1970.
- González, Emilio, “La Alianza para el Progreso”, *Memorial del Ejército de Chile*, núm. 311, enero-febrero, 1963.
- González, René, “Contribución económica de las fuerzas armadas”, *Revista de la Fuerza Aérea de Chile*, núm. 100, enero-marzo, 1996.
- Guglielmelli, Juan Enrique, “Las fuerzas armadas en América Latina (FFAA y Revolución)”, *Memorial del Ejército de Chile*, núm. 375, 1973.
- Hidalgo, Mauricio, El “Ariostazo”, Puma y “Línea recta”: *una desviación del profesionalismo de las fuerzas armadas chilenas*, tesis de Licenciatura, Universidad Católica de Chile, 1994.
- Howard, Pedro, “La integración económica”, *Memorial del Ejército de Chile*, núm. 344, julio-agosto, 1968.
- Ibáñez Santa María, Adolfo, “Los ingenieros, el Estado y la política de Chile. Del Ministerio de Fomento a la Corporación de Fomento. 1927-1939”, *Historia*, núm. 18, 1986.
- Jaña, Efraín *et al.*, “Tradición e innovación en la política exterior de Chile”, *Memorial del Ejército de Chile*, núm. 367, mayo-junio, 1972.
- Joxe, Alain, *Las fuerzas armadas en el sistema político chileno*, Santiago, Editorial Universitaria, 1970.
- López, Claudio, “Las fuerzas armadas en el Tercer Mundo”, *Memorial del Ejército de Chile*, núm. 356, julio-agosto, 1970.
- Maldonado, Carlos, “Entre reacción civilista y constitucionalismo formal: las fuerzas armadas chilenas en el periodo 1931-1938”, *Contribución*, Flacso, núm. 55, 1988.
- Marras, Sergio, *Confesiones*, Santiago, Ornitorrinco, 1988.
- _____, *Palabra de soldado*, Santiago, 1989.
- Moya, Héctor, “Participación, en teoría, de las fuerzas armadas en la política de los estados modernos”, *Memorial del Ejército de Chile*, núm. 369, octubre-diciembre, 1972.
- North, Lisa, *Los militares en la política chilena*, Nueva York, University of New York, s.f.
- Nunn, Frederick, *Chilean Politics 1929-1931: the Honorable Mission of the Armed Forces*, Albuquerque, The University of New Mexico Press, 1970.
- Prats, Carlos, *Memorias*, Santiago, Editorial Pehuén, 1985.

- Rojas, Jorge, *La dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927-1931)*, Santiago, Dibam, 1993.
- Sepúlveda, Eduardo, “Las relaciones públicas”, *Revista de la Fuerza Aérea de Chile*, núm. 88, enero-mayo, 1963.
- Tapia, Jorge, *Terrorismo de Estado*, México, Nueva Imagen, 1980.
- Valdivia, Verónica, *Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de las fuerzas armadas*, Santiago, Universidad Blas Cañas, 1996.
- _____, *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet*, Santiago, Lom Ediciones, 2003.
- _____, *El nacionalismo chileno en los años del Frente Popular (1938-1952)*, Santiago, Universidad Blas Cañas, 1995.
- _____, “Las fuerzas armadas y la integración social. Una mirada histórica”, *Mapocho*, núm. 48, 2000, pp. 295-311.
- _____, *Los años de la rebelión. Chile 1931-1932*, inédito.
- _____, “Militares y política. Los jóvenes oficiales de los años sesenta: 1960-1973”, *Contribuciones Científicas y Tecnológicas*, Universidad de Santiago de Chile, núm. 127, 2001.
- _____, “Nacionalismo, ibañismo, fuerzas armadas: Línea Recta y el ocaso del populismo”, *Contribuciones Científicas y Tecnológicas*, núm. 116, USCH, 1997.
- Varas, Augusto *et al.*, *Chile. Democracia y fuerzas armadas*, Santiago, Flacso, 1980.
- Verdugo, Patricia, *Los zarpazos de Puma*, Santiago, Ediciones Chile-América, 1989.
- Vicaría de la Solidaridad, *Dos ensayos sobre Seguridad Nacional*, Santiago, 1977.

TERCERA PARTE
EL SISTEMA POLÍTICO DEMOCRÁTICO CHILENO,
1932-1973

LOS PROYECTOS POLÍTICOS DE LOS AÑOS SESENTA

Ricardo A. Yocelevzky R.*

Más que la década de los años sesenta, en sentido estricto el periodo que se analizará aquí cubre dos sexenios, de 1958 a 1970, en los cuales aparentemente la política chilena se desplaza desde la derecha hasta el extremo izquierdo del espectro ideológico, pasando por el centro reformista encarnado por la democracia cristiana y culminando con la elección de Salvador Allende como presidente en 1970. Más que la ideología explícita, lo que se examinará serán las características de los actores principales, los partidos políticos y sus relaciones, el sistema conformado por ellos y que servía de marco y límite determinante a su acción y a sus declaraciones.

Este periodo lleva a su culminación el dominio de los grandes partidos sobre la política chilena, reduciendo a las otras fuerzas a los remanentes del Partido Demócrata (PD) en las elecciones parlamentarias de 1961 y 1965 y monopolizando la Cámara de Diputados en 1969. En las elecciones de 1961, los seis partidos principales (Conservador, Liberal, Radical, Demócrata Cristiano, Socialista y Comunista) obtienen 135 de 147 diputaciones; en 1965, 144 del mismo total, y en 1969 las 150 del nuevo total aumentado. Además, el número de partidos se ve reducido por la fusión de conservadores y liberales en el Partido Nacional (PN) en 1966.¹ En un sentido muy general, lo que expresan los tres bloques de

* Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Warwick (Inglaterra). Profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de *La Democracia Cristiana y el gobierno de Eduardo Frei (1964-1970)*, México, UAM-Xochimilco, 1987, y compilador del libro *Experimentos de la democracia en América Latina*, México, UAM-Xochimilco, 1996. También de *Chile: partidos políticos, democracia y dictadura 1970-1990*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.

¹ L. Cortés y J. Fuentes, *Diccionario político de Chile, 1810-1966*, Santiago, Ed. Orbe, 1967, pp. 346-347.

fuerza política y social —la derecha tradicional conformada por conservadores y liberales; el centro representado tradicionalmente por el Partido Radical (PR), que en este periodo pasa a ser reemplazado en importancia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y la izquierda socialista y comunista estructurada sobre el eje de la alianza de ambos partidos más otras fuerzas menores— son alternativas de proyecto de desarrollo económico para el país; pero los mismos proyectos van madurando y redefiniéndose a lo largo del periodo, y estas definiciones se van filtrando a través de los partidos políticos como organización que los expresa. Un elemento externo que influye muy poderosamente en todo este proceso es la revolución cubana, ocurrida al comienzo del gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez. Sin embargo, aun cuando el impacto en toda América Latina de esta revolución y el modelo político-ideológico que representa no podría ser exagerado, es necesario ponerlo en el contexto de cada país para ser evaluado.² Esto será discutido al examinar la conformación del bloque que llevó a la presidencia a Salvador Allende en 1970.

La administración Alessandri (1958-1964) fue el intento más decidido en la línea de los programas de estabilización. Buscaba racionalizar el desarrollo económico a partir de la modernización gradual de la industria que no produjera conflictos de intereses sectoriales, en particular con los terratenientes;³ sin embargo, las insuficiencias de la agricultura chilena se hacían patentes en la necesidad de importación de alimentos, lo cual distraía divisas siempre escasas.⁴ El veto político a los cambios en el sector rural era importante debido a que ahí residía la fuerza electoral de la derecha, por el control del voto campesino, dada la imposibilidad legal de organizarse que afectaba a este sector de trabajadores, y a que, en la clase dominante chilena, los terratenientes representaban el sector que arbitraba el prestigio social y el poder polí-

² Esto porque luego de terminada la dictadura de Pinochet se ha querido explicar o responsabilizar a la revolución cubana por la radicalización de la izquierda chilena a lo largo de la década de los sesenta.

³ R. French Davis, *Políticas económicas en Chile, 1952-1970*, Santiago, Ediciones Nueva Universidad, 1973, pp. 41-50.

⁴ En 1954 las importaciones de alimentos representaban 54.6 millones de dólares. Para 1960-1963, el promedio anual de importaciones de alimentos se había elevado a 120 millones de dólares. Véase A. Pinto, *Chile: Un caso de desarrollo frustrado*, Santiago, Ed. Universitaria, 1966, p. 232, y A. G. Frank, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, Nueva York, Monthly Review Press, 1969, p. 127.

tico.⁵ El desarrollo del país enfrentaba así una contradicción que no se llegaba a expresar claramente como conflicto social o ideológico en la clase dominante, pero se filtraba en imágenes corrientes en el lenguaje político de la época: el intento modernizador se reflejaba en la imagen de “gobierno de gerentes”, con que se caracterizaba al gobierno de Alessandri, y las contradicciones que no estallaban en conflicto producían la distinción ambigua entre “derecha económica” y “derecha política”.⁶

El gobierno formó su apoyo parlamentario con conservadores, liberales y radicales. El Partido Radical se desplazó hacia la derecha en ese periodo debido a la influencia de su visión tradicional de la política y de los terratenientes en la dirección.⁷ Ambos elementos iban a permitirle en el mediano plazo a la democracia cristiana reemplazarlo como principal fuerza de centro; sin embargo, hasta las elecciones parlamentarias de 1961 las fuerzas políticas parecían estabilizarse.

Los cambios en el clima ideológico, nacional e internacional, comenzaban a manifestarse ese mismo año. La administración Kennedy de Estados Unidos lanzó el programa “Alianza para el Progreso”, el cual significó un viraje en la política de ese país hacia América Latina. Ese programa constituía la adopción de las ideas que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) venía proponiendo por muchos años, y como plan de ayuda a los gobiernos latinoamericanos condicionaba el acceso al fondo de financiamiento estadounidense a la realización de reformas y la formulación de planes de desarrollo. Todo esto era sin duda una de las respuestas estadounidenses a la acción del gobierno cubano encabezado por Fidel Castro.⁸

En Chile el gobierno aceptó formular un plan de desarrollo y propuso algunas reformas; sin embargo, el impacto de todo esto fue más fuerte en el plano ideológico que en los hechos. La misma idea de la planificación era ajena a la mentalidad de la clase dominante, tal como

⁵ J. Carrière, “Conflict and Cooperation among Chilean Sectoral Elites”, *Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, Ámsterdam, núm. 19, 1975.

⁶ A. Pinto, “Estructura social e implicaciones políticas”, *Revista Latinoamericana de Ciencia Política*, vol. 1, núm. 2, agosto, 1970, p. 344.

⁷ En las elecciones parlamentarias de 1957, la derecha tradicional, conservadores y liberales, habían perdido el tercio de las cámaras por primera vez.

⁸ J. Levinson y J. de Onís, *La alianza extraviada*, México, FCE, 1972, p. 7.

lo hicieron notar los demócratacristianos,⁹ quienes se convierten en ese periodo en la fuerza principal entre la clase media. A partir de su influencia en los estudiantes universitarios en la década de los cincuenta, en los sesenta el PDC es el partido mayoritario entre los profesionales con formación universitaria.¹⁰ Además, en este grupo, las ideas acerca del desarrollo económico coincidían con su dependencia objetiva respecto del Estado como fuente de empleo. El PDC elaboró una estrategia de desarrollo social y político compatible con su visión del desarrollo económico.

El problema principal para la democracia cristiana era la conformación de un bloque social y político que apoyara su programa de desarrollo económico; en teoría podía concitar el apoyo de los sectores más modernos de la burguesía, interesados en el desarrollo industrial; de las clases medias dependientes del Estado, interesados en éste como fuente de empleo; de las clases medias independientes especialmente las vinculadas al comercio, la pequeña industria y la artesanía, que se beneficiarían de la eventual ampliación del mercado; y de los obreros, los campesinos y los marginales urbanos, cuya incorporación al consumo a través de la reforma agraria y la redistribución del ingreso representaría un impulso al desarrollo de la industria de bienes de consumo.¹¹ En la práctica, todos estos sectores estaban vinculados a partidos políticos cuyos programas e ideología no coincidían estrictamente con el proyecto demócratacristiano.

Los sectores industriales compartían sólo minoritariamente este proyecto. Sus lazos con la derecha política iban más allá de las cuestiones ideológicas. Social y económicamente se entroncaban todos en un complejo de intereses del que no parecía posible eliminar a los terratenientes.¹² Las clases medias dependientes, especialmente los sectores

⁹ Partido Demócrata Cristiano, "Informe preliminar para un programa de gobierno de la Democracia Cristiana", *Libro Azul*, 1991, p. 43.

¹⁰ El informe preliminar citado en la nota anterior fue elaborado para un "Congreso de Profesionales y Técnicos", realizado en Santiago del 6 al 9 de diciembre de 1962, al cual se esperaba que asistieran más de dos mil participantes, agrupados en 46 especialidades.

¹¹ S. Molina, *El proceso de cambio en Chile*, Santiago, Ed. Universitaria, 1972, pp. 65-79.

¹² J. Petras, *Politics and Social Forces in Chilean Development*, Berkeley, University of California Press, 1970, pp. 58-62.

más bajos —los empleados públicos y los profesores, por ejemplo— estaban atados al PR o a la izquierda por definiciones ideológicas tradicionales (el laicismo) y por un sistema de “patronazgo” político muy arraigado desde los gobiernos del Frente Popular o aun antes de éstos.¹³ Las clases medias independientes no parecían particularmente activas en política; además, su independencia respecto del Estado era relativa, dada la importancia de éste como fuente de financiamiento y como mercado. Social y culturalmente aparecían influidas por el modelo que representaba la clase dominante, siendo una especie de “meta natural” para este grupo la posible incorporación a ella.¹⁴

Entre la clase obrera, los partidos marxistas —el Socialista y el Comunista— predominaban a pesar de la influencia radical y demócratacristiana en algunos gremios. El predominio de la izquierda en la organización sindical frustró incluso los intentos mejor respaldados para establecer el paralelismo sindical.¹⁵ Los sectores de trabajadores rurales estaban excluidos de la posibilidad de organizarse autónomamente, y además, la acción de la izquierda en el sector agrario estaba drásticamente controlada.¹⁶ La orientación ideológica de los partidos de izquierda y su relación con el movimiento sindical reforzaban la orientación clasista que dejaba a un creciente número de grupos populares urbanos sin organización política que buscara influir en ellos. Se esperaba que la clase obrera se convertiría por su sola organización y acción en vanguardia de este conjunto más heterogéneo.¹⁷

La estrategia política del PDC para superar estos obstáculos fue formulada a partir de una teorización sociológica, la “marginalidad”.¹⁸ En principio se trataba de movilizar a los sectores sociales excluidos de la participación política (campesinos y marginales urbanos) con el fin de constituirlos en apoyo electoral que permitiera el acceso del partido al gobierno. El control de los recursos del Estado haría posible entonces reorganizar el esquema de representatividad social de los partidos polí-

¹³ *Ibid.*, p. 292.

¹⁴ *Ibid.*, pp. 144-153.

¹⁵ E. Labarca, *Chile al rojo*, México, Juan Pablos, 1971, pp. 127-188.

¹⁶ B. Loveman, *Struggle in the Countryside. Politics and Rural Labor in Chile*, University of Indiana, 1976, p. 128.

¹⁷ L. Corvalán, “Informe al XIII Congreso del Partido Comunista” (10 de octubre de 1965), en *Tres periodos en nuestra línea revolucionaria*, Santiago, s.e., 1965.

¹⁸ R. Vekemans, “Marginalidad, incorporación e integración”, *Cuadernos de Cidoc*, Santiago, núm. 34, 1968.

ticos, atrayendo a todos los grupos que deberían, teóricamente, apoyar el proyecto de desarrollo.¹⁹

En la derecha, la reforma agraria y la sindicalización de los campesinos minaría por la base el poder político de los terratenientes, aislándolos de otros sectores de poder económico que quedarían así disponibles para apoyar un proyecto de modernización económica impulsado desde el gobierno. El mismo control del gobierno daría al PDC capacidad de “patronazgo” político, esencial para atraer a las clases medias tradicionales. En cuanto a los sectores populares, la organización de los marginales sobre bases no clasistas, sino alrededor de demandas específicas como la vivienda y los servicios urbanos, permitiría eliminar la influencia de la orientación clasista que le imprimían los partidos de la izquierda, de modo que la misma capacidad de satisfacción de estas demandas por el gobierno haría que el movimiento “popular” neutralizara al movimiento obrero y consecuentemente a los partidos de izquierda.²⁰

Todo este proyecto implicaba una transformación profunda del sistema político; el reemplazo de las alianzas sociales efectuadas a través de alianzas de partidos, en las que éstos representaban intereses más o menos definidos en términos clasistas, por un partido que representara por sí mismo una amplia alianza social. El resultado sería un sistema de partido único, o al menos de un partido hegemónico.²¹

Las condiciones coyunturales que rodearon la elección presidencial de 1964 hicieron posible el triunfo del PDC y de su candidato, Eduardo Frei; más tarde el proyecto tropezaría con dificultades no esperadas; sin embargo, estas últimas no eran independientes de las condiciones que llevaron a la democracia cristiana al poder.

Lo fundamental de la elección presidencial de 1964 fue el temor al comunismo, representado por el avance electoral de la izquierda.²² Esto determinó el rompimiento del bloque de partidos en el gobierno, denominado Frente Democrático, el apoyo de conservadores y liberales a la

¹⁹ S. Molina, *El proceso de cambio...*, *op. cit.*, pp. 78-79.

²⁰ Roger Vekemans afirma que los sindicatos agrupaban sólo 12% de la fuerza de trabajo del país. Véase R. Vekemans, “Marginalidad...”, *op. cit.*, pp. 9-12.

²¹ Este resultado hipotético se puede atribuir al proyecto de la Democracia Cristiana según sus pretensiones de representatividad social, la estructura interna del partido y la alianza social propuesta en sus programas.

²² En particular, el episodio del “naranjazo”, la elección extraordinaria de un diputado por Curicó en marzo de 1964, en la que resultó elegido el candidato socialista, con apoyo comunista, el doctor Óscar Naranjo.

candidatura de Frei y el mantenimiento del candidato radical, Julio Durán, para evitar que los votantes de ese partido pudieran eventualmente volcarse hacia la izquierda y apoyar a Allende, candidato del Frente de Acción Popular (FRAP).²³ El triunfo de Frei fue arrollador, y más aún lo fue el de su partido en las elecciones parlamentarias de marzo de 1965.²⁴ La situación del PDC en el gobierno no tenía precedente puesto que pudo enfrentar su tarea sin necesidad de pactos ni alianzas en el parlamento en términos estables. Le bastó negociar algunos proyectos, debido a la diferente correlación de fuerzas en el Senado.²⁵

El efecto más notorio de los triunfos electorales de la democracia cristiana fue el debilitamiento de conservadores y liberales. Ellos pusieron su fuerza al servicio de la candidatura de Frei sin condiciones.²⁶ El gobierno demócratacristiano consolidó la separación de la derecha tradicional y su base electoral a través de la reforma agraria y la sindicalización campesina. A partir de la crisis de la derecha, representada por la elecciones parlamentarias de 1965, comienza un proceso de reconstrucción de la representación política de la clase dominante que va a madurar sólo como oposición a la Unidad Popular de 1970.

Las líneas paralelas de desarrollo de una nueva fuerza de derecha comenzaron a notarse desde los inicios de la administración demócratacristiana, a propósito de las reformas propuestas por el gobierno. El primer enfrentamiento tuvo lugar alrededor de las reformas a la Constitución en lo que se relacionaba con el derecho de propiedad, con el fin de hacer posible las expropiaciones que requería la reforma agraria.²⁷ Para oponerse a ella aparecieron nuevas organizaciones, tanto dentro como fuera del sistema político. Una fue un bloque de políticos liderado por el senador radical Pedro Enrique Alfonso.²⁸ Otra fue Fiducia, una

²³ Operación que incluyó el reparto de dinero entre los parlamentarios radicales, según un miembro de esa representación entrevistado por el autor de este trabajo.

²⁴ En la Cámara de Diputados obtuvo 82 de los 147 escaños.

²⁵ El Senado se renovaba por mitades cada cuatro años, por lo que el mandato de cada senador duraba ocho. De este modo, a pesar del avance demócratacristiano entre los diputados, la correlación de fuerzas en el Senado no les era tan favorable.

²⁶ Discurso de Frei, 21 de junio de 1964, durante su campaña presidencial.

²⁷ Constitución de 1925, Art. 10, núm. 10.

²⁸ Esto resulta indicativo de la evolución de los radicales hacia la derecha en ese periodo. Al decir de un dirigente radical, Pedro Enrique Alfonso, como ministro del Interior del gobierno de Pedro Aguirre Cerda que había sido autor de un proyecto de reforma agraria. Entrevista con Orlando Cantuarias, México, D.F., 28 de agosto de 1986.

organización militante de jóvenes católicos de derecha ligados internacionalmente en la “Sociedad para la defensa de la tradición, la familia y la propiedad”.²⁹ Por otra parte, se formó una Confederación Nacional de Empleadores Agrícolas,³⁰ y en mayo de 1966 se fusionan liberales y conservadores, más Acción Nacional, para formar el Partido Nacional.³¹

Todo esto representaba cambios profundos en la actuación de la clase dominante. Al haber perdido su base electoral rural, buscaba reemplazarla con el apoyo de sectores de las clases medias; sin embargo, esto requería cambios en la ideología y en la organización de la derecha. En el PN adquiriría nueva importancia el grupo proveniente de Acción Nacional, cuyos antecedentes ideológicos nacionalistas y su actuación política anterior lo ubicaban como contrario a los políticos, a los partidos y a la forma como éstos controlaban la vida política nacional.³²

Los grupos jóvenes, católicos de Fiducia y gremialistas de la Universidad Católica, compartían esa visión y rechazaban incluso la coexistencia con políticos tradicionales en el PN.³³ En el plano social, las organizaciones corporativas más tradicionales, de carácter elitista, como la Sociedad Nacional de Agricultura, vieron surgir nuevos organismos y reactivarse otros, como la Confederación de la Producción y el Comercio, recurso para la organización y movilización de las clases medias.³⁴ Este desarrollo de la derecha ocurrió en una actitud defensiva ante los intentos de la democracia cristiana y su gobierno por obtener apoyo de esos mismos sectores sociales para su proyecto de desarrollo. El punto ideológico de coincidencia de toda la nueva derecha era la defensa del derecho de propiedad frente a la acción del Estado desarrollista dirigido por el PDC.³⁵ Este punto iba a desarrollarse más tarde en una visión que

²⁹ Esta organización apareció en público por primera vez en una campaña de recolección de firmas en contra de las reformas al derecho de propiedad. La carta de protesta contra la reforma apareció en *El Mercurio*, el 15 de mayo de 1965.

³⁰ D. Lehman, “Agrarian Reform in Chile, 1965-1972”, en *Agrarian Reform and Agrarian Reformism*, Londres, Faber & Faber, 1974, p. 85.

³¹ S. O. Jarpa, *Creo en Chile*, Santiago, Sociedad Impresora Chile, 1973.

³² *Ibid.*, p. 58.

³³ C. Huneus, *Movimientos universitarios y generación de élites dirigentes; estudios de casos*, Santiago, CPU (Corporación de Promoción Universitaria), 1973, pp. 28-29.

³⁴ G. Arriagada, *La oligarquía patronal chilena*, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1970, pp. 37-41.

³⁵ C. Barros, “Nuevos actores de la protesta social 1971-1972: el movimiento gremial”, en Alejandro Foxley (ed.), *Los actores de la realidad chilena*, Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, 1974, pp. 190-200.

consideraba la política y a los políticos como elementos distorsionadores de la economía y de la acción de los agentes económicos.

El conflicto ideológico dentro de los sectores empresariales entre la visión “estatista” de los demócratacristianos y la visión antiestatista de los nuevos sectores de derecha tuvo consecuencias importantes para el gobierno de Frei y para su partido. Para mantener la acción del Estado dentro de los límites de sus intereses, algunos grupos empresariales apoyaron al gobierno e incluso ingresaron al gabinete.³⁶ A través del gobierno y del liderazgo de Frei fueron ganando influencia dentro del mismo PDC. El costo para el gobierno fue la creciente limitación de su programa de reformas, prácticamente paralizado a partir de 1967.³⁷ Para el partido, el costo político era la pérdida de apoyo electoral, que se hizo clara en las elecciones municipales de ese mismo año.³⁸ Surgió así un conflicto interno en el partido que hoy resulta muy revelador: los sectores juveniles, principalmente universitarios, y otros mayores pero de la misma composición, propusieron profundizar en el proyecto original para fortalecer la intervención del Estado como medio de neutralizar a los grupos de poder económico y fortalecer la capacidad redistributiva del gobierno, de modo de ampliar su clientela electoral entre los sectores populares;³⁹ por su parte, el gobierno asumió una posición más conservadora, deteniendo el programa de reformas y reprimiendo los movimientos reivindicativos de los mismos sectores en los que el partido buscaba apoyo electoral.⁴⁰

³⁶En particular, los empresarios de la construcción. Véase P. Cleaves, *Bureaucratic Politics and Administration in Chile*, Berkeley, University of California Press, 1974, p. 255.

³⁷ La única reforma importante aprobada después de 1967 es una reforma constitucional que a su vez es la versión modificada de la reforma propuesta por el gobierno al parlamento en 1965. Guillermo Piedrabuena, *La reforma constitucional: historia de la ley 17.284, sus principales alcances y presión de los partidos políticos*, Santiago, Editorial Encina, 1970.

³⁸ Aun cuando en sentido estricto los resultados no son comparables por tratarse de elecciones de distinto tipo, el apoyo a los demócratacristianos bajó de 42.3% en las parlamentarias de 1965 a 35.6% en las municipales de 1967. Los resultados electorales pueden consultarse en las siguientes fuentes: Ricardo Cruz Coke, *Historia electoral de Chile, 1925-1973*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1984, y Germán Urzúa Valenzuela, *Historia Política de Chile y su evolución electoral. Desde 1810 a 1992*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1992.

³⁹ *Proposiciones para una acción política en el periodo 1967-1970 de una vía no capitalista de desarrollo*. Documento de trabajo para la Junta Nacional del PDC, julio de 1967.

⁴⁰ L. Vitale, *Interpretación marxista de la historia de Chile*, España, Fontamara, vol. 5, 1980, p. 186.

La izquierda enfrentó el reformismo del gobierno demócratacristiano con una doble estrategia: el PC se mostró dispuesto a apoyar las reformas que le parecieran benéficas para los sectores populares;⁴¹ en tanto el PS rechazaba en principio el proyecto demócratacristiano y buscaba “desenmascarlo” como una “nueva cara de la derecha”.⁴² Esta dualidad encontraba fundamento en las diferencias profundas entre los dos partidos marxistas. El PC mostraba una composición obrera muy estable, que se reflejaba en lo constante de la votación obtenida en elecciones de distinto tipo y en la influencia del partido en los sindicatos más tradicionales.⁴³ La política del PC era conservadora en el sentido de buscar siempre su mejor integración al sistema como representante de la clase obrera, pero al mismo tiempo cuidando que esta integración no desvirtuara la composición clasista del partido y muy particularmente de su dirección.⁴⁴ Por su lado, el PS tenía fuerte influencia de sectores intelectuales de clase media que en los hechos dominaban su dirección; en tanto su apoyo popular era más variado y más inestable que el del PC. Esto le permitía al PS absorber nuevas tendencias ideológicas, que tenían menor incidencia en el PC. En este periodo, el PS recibió buena parte de la influencia castrista que marcó a la generación joven de izquierda.⁴⁵

Al margen de los partidos de la izquierda tradicional surgió también el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que reunió en su fundación (1965) distintas tendencias centrífugas de la izquierda (trozkistas, maoístas, remanentes del reinosismo) pero cuyo elemento dominante a partir de 1967 iba a ser el castrismo representado por los jóvenes de la Universidad de Concepción que habían abandonado el PS en 1964.⁴⁶

Desde el punto de vista de los partidos principales, el año 1969 marca la cúspide de su dominación del sistema político al monopolizar la Cámara de Diputados en las elecciones generales de marzo de ese

⁴¹ L. Corvalán, “Informe al XIII Congreso...”, *op. cit.*, p. 43.

⁴² J. Jobet, *El Partido Socialista de Chile*, Santiago, Prensa Latinoamericana, tomo II, 1971, p. 127.

⁴³ A. Angell, *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile. De los orígenes hasta el triunfo de la Unidad Popular*, México, ERA, 1974, pp. 145-149.

⁴⁴ L. Corvalán, “Informe al XIII Congreso...”, *op. cit.*, pp. 41-42.

⁴⁵ C. Altamirano, “Conferencia de Prensa”, *Punto Final*, núm. 31, Santiago, Junio, 1967.

⁴⁶ L. Vitale, *Interpretación marxista...*, *op. cit.*, pp. 190-191.

año.⁴⁷ Sin embargo, su capacidad ideológica para proponer soluciones a los problemas nacionales y su capacidad organizativa para canalizar los conflictos sociales que el desarrollo del país generaba comenzó a ser cuestionada. Estos fenómenos son sólo embrionarios en ese momento y su análisis es posible hoy gracias a su desarrollo posterior; pero desde la perspectiva actual parecen ser una buena clave para la comprensión de los conflictos políticos que involucraron a Chile a partir de 1970; clave que no se limite a aceptar la versión de alguno de los actores involucrados.

Para el desarrollo económico nacional el problema clave era el desarrollo industrial. Durante el gobierno de Frei se habían dado pasos importantes en la dirección de incorporar al país a los tipos de industria dinámica (automotriz, bienes de consumo durables, petroquímica).⁴⁸ La forma dominante de propiedad de estos sectores más dinámicos era la propiedad conjunta del Estado chileno y las transnacionales, pues permitía traer al país tecnologías más desarrolladas. Sin contar con el problema de los términos de esa asociación con las transnacionales, la industrialización en esa dirección debía considerar diversas situaciones, todas con contradicciones sociales profundas. El problema de la estrechez del mercado nacional se pretendía enfrentar a través de los proyectos de integración latinoamericana, pero esto no permitía ocultar que el problema real requería tomar decisiones que vincularan el tipo de industria que iba a desarrollarse y la distribución del ingreso nacional;⁴⁹ a su vez, las decisiones sobre distribución del ingreso determinaban las posibilidades de alianza social, las cuales se concretaban en alianzas de partido.

Privilegiar la incorporación de nueva tecnología y el desarrollo de bienes de consumo más sofisticados implicaba la concentración del ingreso en dos niveles: primero en la necesaria acumulación de capital, estatal o privado, que se asociara con las firmas extranjeras, y segundo en concentrar ingresos en un sector que constituyera el mercado de esa producción, que en ningún caso alcanzaría al grueso de la pobla-

⁴⁷ Ese año, los cinco partidos principales monopolizan los 150 escaños de la Cámara de Diputados.

⁴⁸ Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), *Antecedentes sobre el desarrollo chileno*, 1970, pp.156-159.

⁴⁹ P. Vuskovic, "Distribución del ingreso y opciones de desarrollo", en José Serra (comp.), *Desarrollo latinoamericano: Ensayos críticos*, México, FCE, Lecturas núm. 6, 1974.

ción. De hecho, esta posibilidad implicaba profundizar las diferencias sociales entre las ciudades y el campo, y entre las clases medias y los sectores populares. La alternativa era impulsar un tipo de industrialización que, conservando el propósito de incorporar nueva tecnología en la producción de bienes intermedios, pusiera el acento en los bienes de consumo masivo, que expandieran su mercado entre los sectores populares a partir de una drástica redistribución del ingreso.⁵⁰

Ciertamente la segunda opción implicaba mayor intervención del Estado, puesto que ahí recaería no sólo la tarea de redistribuir el ingreso sino también el control de las importaciones, dado que el mercado mundial marchaba inequívocamente en la otra dirección, y era necesario negociar la subordinación del capital privado, nacional y extranjero a esta estrategia general.⁵¹ La primera estrategia tampoco dejaba al Estado como espectador. En las condiciones de participación social y política que había alcanzado Chile, las expectativas de los sectores populares se expresaban en demandas crecientes, apoyadas en un nivel de movilización social y política que ha sido calificado de excesivo.⁵² Si bien la intervención formal del Estado en la economía podría ser menor, en la medida en que se adoptaba una política liberalizadora que permitía la mayor coincidencia de las tendencias del mercado mundial con el desarrollo nacional, la tarea política de apoyar la “natural” concentración del ingreso implicaba desmovilizar sectores populares ya organizados.

El gobierno de Frei puede ser dividido en dos etapas, pues en general se pasó de una a otra de estas posibilidades. Como gobierno centrista, su proyecto parece haber tocado los límites externos e internos, tanto en el terreno económico como en el político. En el terreno económico, sus lazos con Estados Unidos y con la clase dominante chilena le impedían profundizar las reformas propuestas en su programa, o incluso proponerlas siquiera; en tanto su proyecto político de reemplazar a la izquierda como influencia dominante entre los sectores populares dependía cada vez más de la capacidad del gobierno para satisfacer demandas de esos sectores. En esta disyuntiva, el gobierno optó

⁵⁰ *Ibid.*, pp. 114-118.

⁵¹ A. Pinto, “Factores estructurales y modalidades del desarrollo; su incidencia sobre la distribución del ingreso”, en *Inflación: raíces estructurales*, México, FCE, 1973, p. 183.

⁵² H. Landsberger y T. Mc Daniel, “Hypermobilization in Chile, 1970-1973”, *World Politics*, vol. XXVIII, núm. 4, julio, 1976.

por detener el programa de reformas para dar garantías a los sectores dominantes, esperando mantener por recursos puramente ideológicos una clientela electoral popular que los convirtiera en la mejor opción de representación política para los sectores modernos de la burguesía chilena. Este paso, de una opción de desarrollo a otra, se hizo en medio de un conflicto agudo dentro del PDC mismo, donde predominaron por un tiempo los intereses políticos que ponían el acento en la necesidad de ganar apoyo popular, para lo cual se elaboró un programa de profundización de las reformas.⁵³ Una vez que Frei y su fracción retomaron el control del partido, imponiendo la línea que ya era predominante en el gobierno,⁵⁴ el sector joven y algunos otros cuadros del partido lo abandonaron formando el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) en mayo de 1969. La discusión que terminó en esta ruptura reunía, relacionados, dos asuntos: el programa de desarrollo que sería adoptado para la campaña presidencial de 1970 y las alianzas políticas que se proponían para esa misma campaña. Esto no terminó de polarizar al PDC; todavía quedaba dentro de él una fracción que buscaría ser la “izquierda” dentro del partido.⁵⁵

En la derecha, como ya se ha señalado, la recomposición de la representación política de la clase dominante había adoptado un conjunto de modalidades ideológicas y orgánicas, entre las cuales el Partido Nacional (PN) aparecía como el más importante debido a su participación en el sistema. Sin embargo, ya desde las elecciones parlamentarias de marzo de 1969 se vio que —como tal— el partido no podía agrupar tras de sí al conjunto de fuerzas de derecha, por lo que esa campaña se desarrolló sobre la idea de una candidatura presidencial de Jorge Alessandri en 1970.⁵⁶ Esto era indicador de hasta dónde los sectores dominantes estaban dispuestos a adoptar un proyecto de desarrollo económico que implicara un cambio del sistema político, pero no parecía claro entonces, puesto que el sumergir al PN en un “movimiento alessandrista” que agrupaba a las otras expresiones de derecha, corporativas o nacionalistas extremos, se atribuía más bien al carácter “caudillista” que las

⁵³ “La vía no capitalista de desarrollo.”

⁵⁴ En la reunión de la Asamblea Nacional del PDC realizada el 6 de enero de 1968.

⁵⁵ Los llamados “terceristas”.

⁵⁶ La elección de dos diputados de la misma familia, Gustavo y Silvia, dio la ocasión para que de hecho con el nombre de Alessandri en la propaganda electoral, su campaña presidencial comenzara casi un año antes que la de los otros candidatos, que ni siquiera habían sido nominados todavía.

candidaturas presidenciales adquirirían a pesar de estar controladas por partidos; además, se sumó a esta candidatura una nueva organización de derecha que resultó de la escisión del PR en ese mismo año.

El PR, cuyo apoyo electoral había repuntado levemente, enfrentó el problema de su futuro como una decisión crucial. En su convención de 1969, los dirigentes que primero habían conducido al partido a la colaboración con el gobierno de Alessandri, y después habían dirigido la oposición a la reforma agraria, fueron no sólo reemplazados por una generación más joven sino que abandonaron el partido formando la Democracia Radical, que se sumó a la campaña presidencial de Jorge Alessandri.⁵⁷ La nueva dirección del radicalismo veía la posibilidad de recuperación del partido en asumir las posiciones que en Europa representa la socialdemocracia; a su competidor de centro, la democracia cristiana, los oponía no sólo su laicismo sino también la decisión tomada en esa misma convención, de buscar una alianza con los partidos de la izquierda, recordando que ese tipo de alianza era lo que había generado los gobiernos radicales desde 1938 hasta 1952.⁵⁸

En la izquierda, los socialistas se radicalizaban al compás de la absorción de los jóvenes influidos por el castrismo, pero también en la medida que las reformas emprendidas por el PDC imponían a sus críticos propuestas que partieran de los límites alcanzados por ella.⁵⁹ De este modo, los socialistas proponían un programa más radical que el de la candidatura de Allende en 1964 y aceptaban, en principio y en declaraciones, la posibilidad de buscar el poder a través de la lucha armada. Todo esto les permitía atraer a jóvenes, que de otra manera podrían haberse inclinado hacia el MIR y otros grupos castristas o maoístas menores, y a sectores de los recientemente movilizados, marginales urbanos y campesinos, entre quienes también comenzaba a encontrar apoyo el MIR.⁶⁰ Sin embargo, el Partido Socialista conservaba un carácter heterogéneo en el que predominaban políticos ya tradicionales y todavía sufrió una escisión de tipo personalista, liderada por Raúl Ampuero, quien sobre

⁵⁷ G. Urzúa Valenzuela, *Historia política, op. cit.*, p. 132.

⁵⁸ Entrevista con Carlos Morales Abarzúa, presidente del partido elegido en la convención de 1969. México, D.F., 30 de agosto de 1986.

⁵⁹ Entrevista con Carlos Altamirano, *Punto Final*, núm. 93, 9 de diciembre de 1970, pp. 16-19.

⁶⁰ Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), "¿Qué es el MIR?", en *MIR 1973-1975*, diciembre, 1974, p. 17.

todo con el apoyo de algunos dirigentes sindicales fundó la Unión Socialista Popular (Usopo), en 1967.⁶¹ La situación de 1969 sometía al ps a gran tensión, puesto que por su carácter heterogéneo reunía en sí los elementos definitorios de la posición de la izquierda en su conjunto: por una parte una élite de políticos bien integrados al sistema y con gran experiencia parlamentaria junto a una juventud y una clientela popular que crecían en función de la crítica a ese mismo sistema y a las prácticas parlamentarias; por otra, atraía a sectores de intelectuales que sin ser activos en la política nacional, expresaban con la mayor claridad la alternativa de desarrollo económico que finalmente iba a constituir el programa de la izquierda en 1970.⁶²

Los comunistas chilenos se caracterizaban por su estabilidad. Durante este periodo habían sufrido una escisión debido a la influencia del maísmo, pero que se había limitado a un grupo de intelectuales,⁶³ y se habían resistido a la influencia del castrismo, apegándose a la línea de coexistencia pacífica propugnada por la Unión Soviética, aun a costa de recibir ataques del mismo Fidel Castro.⁶⁴ Su línea era la acumulación de fuerzas de la izquierda dentro del sistema político vigente tras un programa de reformas que coincidía con la profundización del desarrollismo, definiéndose como antiimperialista, antioligárquico y antifeudal, pero cuidándose de no proponer el socialismo como meta que debía alcanzar la izquierda chilena en lo inmediato.⁶⁵

La campaña presidencial de 1970 se dio en un contexto muy difícil. Las posibilidades que enfrentaba el desarrollo del país empujaban objetivamente hacia la polarización; sin embargo, el sistema político dominado por los partidos imponía un esquema de tres fuerzas que se expresaban de manera bastante compleja. Los conflictos ideológicos

⁶¹ J. Jovet, *El Partido Socialista...*, op. cit., p. 123.

⁶² G. Martner, "La vía pacífica al socialismo", *El Trimestre Económico*, vol. LI (4), núm. 204, octubre-diciembre, 1984, pp. 761-810.

⁶³ E. Halperin, *Nationalism and Communism in Chile*, Cambridge, MIT, 1965, pp. 93-117.

⁶⁴ Los incidentes cumbre en el distanciamiento entre los comunistas chilenos y el gobierno cubano fueron las referencias despectivas a Orlando Millas en un discurso de Fidel Castro y las críticas a Pablo Neruda, de escritores cubanos, por haber aceptado invitaciones de políticos latinoamericanos de derecha, como el presidente de Perú, Fernando Belaúnde Terry, quien lo condenó.

⁶⁵ *Programa del Partido Comunista de Chile*, Partido Comunista de Chile, aprobado en el XIV Congreso Nacional (23 al 29 de noviembre de 1969).

y la movilización social alcanzaban a todas las instituciones, incluidas la Iglesia católica y las fuerzas armadas.⁶⁶ Los programas de los tres candidatos expresaban las disyuntivas del desarrollo económico, pero escondían el hecho —cualquiera que fuera la alternativa ganadora— de que su aplicación iba a someter al sistema político a grandes tensiones. No estaba claro que los enfrentamientos sociales que suponían esos programas pudieran ser canalizados pacíficamente a través de los partidos.

Tanto el bloque de derecha como el de izquierda sufrían la tensión de componerse de elementos integrados al sistema y otros que ubicaban su acción fuera de él; más aún: ambos bloques tenían entre sus elementos integrados al sistema algunos que eran partidarios de la alteración radical de éste. El carácter de la elección misma y la influencia de los partidos políticos ayudaron a simplificar esta situación: el hecho de ser una elección directa para un cargo unipersonal y que la campaña fuera organizada por los partidos ayudó a constituir bloques que aceptaran la lucha electoral, aun cuando esto significó en ambos casos subordinarse a las tendencias disidentes dentro y fuera de los partidos.

En la derecha, la recuperación del PN en las elecciones parlamentarias de 1969, respecto al desastre electoral que habían sufrido liberales y conservadores en 1965, y el carácter tradicional, como político, del candidato presidencial, ocultaban los cambios que venían ocurriendo en ese sector. La recuperación electoral se hacía sobre nuevas bases, más urbanas, y la organización y movilización de los sectores juveniles, especialmente, apuntaban a una radicalización de derecha que tendía a ubicarse crecientemente fuera del sistema de partidos y en una posición que lo rechazaba.⁶⁷

En el centro, la democracia cristiana intentaba mantener su apoyo electoral sobre la base de un programa que remarcaba el carácter reformista de sus posiciones, en abierta contradicción con la práctica del gobierno del mismo partido. Una parte importante de los cuadros

⁶⁶ Véase B. Smith, *The Church and Politics in Chile*, Princeton, University of Princeton Press, 1982, y A. Olavaria, *Chile bajo la Democracia Cristiana*, Santiago, Nascimento, vol. V, 1966, p. 275. El punto más alto en este terreno fue el Tacnazo, movimiento encabezado en el regimiento Tacna por el general Roberto Viaux el 21 de octubre de 1969.

⁶⁷ De organizaciones como Fiducia y el “gremialismo” saldrían los líderes de la “nueva derecha”.

jóvenes del partido ya estaban en la izquierda, todo lo cual le restaba credibilidad al candidato, Tomic.⁶⁸

En la izquierda, la situación era lo suficientemente compleja como para que fuera el último de los tres sectores en proclamar a su candidato presidencial.⁶⁹ Esta designación fue producto de una larga negociación, precedida por la formación de una nueva alianza de partidos, la UP, y el acuerdo en torno de un programa de gobierno y de un documento referente al estilo y conducción de la campaña electoral. Todo esto tiene importancia hoy a la vista de lo que ocurrió después, pero en ese momento se trataba de presentar un perfil de la izquierda que la definiera distinta a la de 1964.

La alianza estaba formada por seis partidos: Comunista, Socialista y Radical, los componentes del Frente Popular de 1938, más el MAPU, proveniente de la democracia cristiana, el API (Acción Popular Independiente), grupo personalista organizado para apoyar las pretensiones presidenciales del senador Rafael Tarud, y el Partido Social Demócrata, último sobreviviente de lo que había sido el Partido Demócrata. La cuestión del programa fue definida previamente al nombramiento del candidato; en las discusiones se logró acuerdo relativamente rápido. Sin embargo, este acuerdo escondía algunos problemas. El punto central del programa era definir la tarea del posible gobierno de la UP como el inicio de la transición al socialismo.⁷⁰ Esta definición contenía una novedad; la sola mención del socialismo ponía una gran distancia entre éste y los programas anteriores de la izquierda en elecciones semejantes; también contribuía a dibujar la imagen de una alianza donde los partidos de la clase obrera serían los hegemónicos, al contrario del Frente Popular en el que la hegemonía correspondió a los radicales como representantes de las clases medias. Esta propuesta, que fue defendida principalmente por los socialistas,⁷¹ buscaba salvar a la nueva alianza de una de las críticas más importantes que dirigían a la izquierda tradicional los sectores castristas y maoístas, dentro y fuera de los partidos. Con esta inclusión del socialismo como meta del gobierno, las diferencias dentro de la izquierda quedaban reducidas a una cuestión de método para la toma del poder: vía electoral versus vía armada.

⁶⁸ Entrevista con Jaime Gazmuri, subsecretario general del MAPU, *Punto final*, núm. 99, 3 de marzo de 1970.

⁶⁹ Allende fue designado candidato de la Unidad Popular el 22 de enero de 1970.

⁷⁰ Unidad Popular, *Programa básico del gobierno de la Unidad Popular*, 1970.

⁷¹ Entrevista con Orlando Canturias, México, D.F., 28 de agosto de 1986.

Respecto de este último punto, la UP tomó en cuenta las críticas de la llamada ultraizquierda: el documento sobre estilo y conducción de la campaña ponía de manifiesto la necesidad de desarrollar la movilización y las demandas de los sectores populares como método para desarrollar el apoyo electoral de la izquierda y no subordinar las demandas de los grupos sociales (obreros, campesinos, pobladores) en función de un hipotético triunfo electoral, tal como había ocurrido en 1964.⁷² De este modo, la campaña de la izquierda en 1970 tendría tono ofensivo, por oposición a la de 1964, en que se adoptó una actitud defensiva ante la amplia campaña anticomunista desarrollada por la Democracia Cristiana y la derecha con apoyo del gobierno estadounidense.⁷³

A pesar de estos cambios, en conjunto los acuerdos de la izquierda contribuyeron a fortalecer el sistema y el clima de normalidad política en que se desarrolló la campaña electoral. La ultraizquierda (el MIR y otros grupos menores) suspendieron sus acciones al margen de la ley⁷⁴ y quedaron en los hechos, subordinados al programa y a la táctica de la UP. Esto reforzó la impresión de normalidad que rodeó la campaña y la elección misma. Lo que desataría una crisis política fue el resultado de esa elección: el triunfo de Allende y la UP.

BIBLIOGRAFÍA

- Altamirano, Carlos, "Conferencia de prensa", *Punto final*, núm. 31, Santiago de Chile, junio, 1967.
- Angell, Alan, *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile. De los orígenes hasta el triunfo de la Unidad Popular*, México, ERA, 1974.
- Arriagada, Genaro, *La oligarquía patronal chilena*, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1970.
- Barros, Carmen, "Nuevos actores de la protesta social 1971-1972: el movimiento gremial", en *Los actores de la realidad chilena*, s.f., pp. 190-200.
- Carrière, Jean, "Conflict and Cooperation among Chilean Sectoral Elites", *Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, Ámsterdam, núm. 19, diciembre, 1975.

⁷² E. Labarca, *Chile al rojo*, op. cit., p. 237.

⁷³ U.S. Senate, Select committee to Study governmental operations with respect to intelligence activities, Staff Report, *Covert Action in Chile 1963-1973*, 1978.

⁷⁴ MIR, "¿Qué es el MIR?", en *MIR 1973-1975*, 1974, p. 5.

- Cleaves, P., *Bureaucratic politics and administration in Chile*, Berkeley, University of California Press, 1974.
- Cortés, Lía y Jordi Fuentes, *Diccionario Político de Chile, 1810-1966*, Santiago, Editorial Orbe, 1967.
- Corvalán, Luis, "Informe al XIII Congreso del Partido Comunista" (10 de octubre de 1965), en *Tres periodos en nuestra línea revolucionaria*, Santiago, 1965.
- Cruz-Coke, Ricardo, *Historia electoral de Chile, 1925-1973*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1984.
- Frank, André Gunder, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, Nueva York, Monthly Review Press, 1969.
- French-Davis, Ricardo, *Políticas económicas en Chile, 1952-1970*, Santiago, Ediciones Nueva Universidad, Ceplan, 1973.
- Halperin, Ernest, *Nationalism and Communism in Chile*, Cambridge, MIT, 1965.
- Huneus, Carlos, *Movimientos universitarios y generación de élites dirigentes, estudios de casos*, Santiago de Chile, Corporación de Promoción Universitaria (CPU), 1973.
- Jarpa, Sergio Onofre, *Creo en Chile*, Santiago, Sociedad Impresora Chile, 1973.
- Jobet, Julio, *El Partido Socialista de Chile*, Santiago de Chile, Prensa Latinoamericana, tomo II, 1971.
- Labarca, Eduardo, *Chile al Rojo*, México, Juan Pablos, 1971.
- _____, *Chile invadido*, s.p.i.
- Landsberger, Henry y Tim McDaniel, "Hypermobilization in Chile, 1970-1973", *World Politics*, vol. XXVIII, núm. 4, julio, 1976.
- Lehman, David, "Agrarian Reform in Chile, 1965-1972", en *Agrarian Reform and Agrarian Reformism*, Londres, Faber & Faber, 1974.
- Levinson, Jerome y Juan de Onís, *La alianza extraviada*, México, Fondo de Cultura Económica, 1972.
- Loveman, Brian, *Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labor in Chile*, University of Indiana, 1976.
- Martner, Gonzalo, "La vía pacífica al socialismo", *El Trimestre Económico*, vol. LI (4), núm. 204, octubre-diciembre, 1984, pp. 761-810.
- Molina, Sergio, *El proceso de cambio en Chile*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1972.
- Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, "¿Qué es el MIR?", en *MIR 1973-1975*, diciembre, 1974.
- Oficina de Planificación Nacional, *Antecedentes sobre el desarrollo chileno*, s.p.i., 1970.
- Olavarría, Arturo, *Chile bajo la Democracia Cristiana*, Santiago, Editorial Nascimento, vol. V, 1966.

- Partido Comunista de Chile, *Programa del Partido Comunista de Chile*, aprobado en el XIV Congreso Nacional, 23 al 29 de noviembre de 1969.
- Partido Demócrata Cristiano, *Proposiciones para una acción política en el periodo 1967-1970 de una vía no capitalista de desarrollo (1967)*, documento de trabajo para la Junta Nacional, julio de 1967.
- _____, "Informe preliminar para un programa de gobierno de la Democracia Cristiana", *Libro Azul*, 1991.
- Petras, James, *Politics and Social Forces in Chilean Development*, Berkeley, University of California Press, 1970.
- Piedrabuena, Guillermo, *La Reforma Constitucional: historia de la ley 17.284, sus principales alcances y presión de los partidos políticos*, Santiago, Editorial Encina, 1970.
- Pinto, Anibal, *Chile, un caso de desarrollo frustrado*, Santiago, Editorial Universitaria, 1966.
- _____, "Estructura social e implicaciones políticas", en *Revista Latinoamericana de Ciencia política*, vol. 1, núm. 2, agosto, 1970.
- _____, "Factores estructurales y modalidades del desarrollo; su incidencia sobre la distribución del ingreso", en *Inflación: raíces estructurales*, México, Fondo de Cultura Económica, 1973.
- Senado de Estados Unidos de América (Select committee to study governmental operations with respect to intelligence activities, Staff Report), *Covert Action in Chile 1963-1973*, 1978.
- Smith, B., *The Church and Politics in Chile*, Princeton, University of Princeton Press, 1982.
- Unidad Popular, *Programa básico de gobierno de la Unidad Popular*, 1970.
- Urzúa Valenzuela, Germán, *Historia política de Chile y su evolución electoral. Desde 1810 a 1992*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1992.
- Vekemans, Roger, S.J., "Marginalidad, incorporación e integración", *Cuadernos de Cidoc*, Santiago de Chile, núm. 34, 1968.
- Vitale, Luis, *Interpretación marxista de la historia de Chile*, España, Editorial Fontamara, vol. 5, 1980.
- Vuskovic, Pedro, "Distribución del ingreso y opciones de desarrollo", en José Serra (comp.), *Desarrollo latinoamericano: Ensayos críticos*, México, Fondo de Cultura Económica, Lecturas núm. 6, 1974.

A TREINTA AÑOS DEL GOLPE DEL 11 DE SEPTIEMBRE: EL IMPERATIVO ÉTICO DE “REESCRIBIR LA HISTORIA”

Luis Corvalán Márquez*

Al cumplirse treinta años del golpe del 11 de septiembre en Chile, en el país se hicieron oír ciertas voces denunciando intentos por “reescribir la historia”. Quienes así procedían se mostraban sorprendidos ante la emergencia de visiones distintas a las suyas sobre el pasado reciente; suponían, contra toda evidencia, que la historia se escribe sólo una vez. Lo que en el fondo significa que consideraban que sobre el pasado no cabría más que una versión, que sería precisamente la de ellos.

Ignoraban e ignoran, por tanto, lo que sabe cualquier historiador u observador medianamente informado de la cultura intelectual; esto es, que en los países donde hay libertad la historia siempre se está reescribiendo y que –más aún– la visión de la posteridad sobre los hechos pretéritos inevitablemente difiere de la de sus protagonistas. ¿Se querrá impedir en Chile esta realidad fijando una historia oficial al estilo de los regímenes totalitarios, respaldando esa pretensión mediante los mecanismos de control del pensamiento que caracterizó a aquéllos? Si fuese así, sería bueno que quienes piensan de tal modo lo reconozcan. Y que extraigan las consecuencias autoritarias que se derivan de tal actitud, no sólo en lo relativo al pensamiento, sino a la larga también en lo referente a los demás planos de la existencia social, incluyendo la política.

* Maestro en Historia, Universidad de Santiago de Chile (Usach). Candidato a doctor en Estudios Latinoamericanos por el Instituto de Estudios Avanzados de la Usach. Autor de *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre. Contribución al estudio del contexto histórico*, Santiago, Ediciones Cesoc, 2000 y de *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Santiago, Ed. Sudamericana, 2002.

El planteamiento según el cual la historia no se debería “reescribir” convierte a la inevitable labor de emprender esta tarea en un verdadero imperativo ético. Precisamente por cuanto forma parte del proceso de defensa de la plena libertad de pensamiento, amagada en Chile de tan sutiles maneras, como lo atestigua la vigorosa existencia de los detractores de la libre investigación de nuestro pasado.

Con esa perspectiva, en el presente texto hago un intento limitado y en cierto sentido esquemático por sugerir una versión posible, entre otras, sobre el derrumbe de la democracia en Chile verificado treinta años atrás. Claro está, abordo el tema desde una óptica totalmente distinta a la que caracteriza a las historias que se han acuñado desde el poder, que en el fondo no constituyen sino las versiones “oficiales”; cuando no la otra cara de los discursos legitimantes de los vencedores de ayer.

La pregunta de fondo que pretendo responder es la referente a las variables principales que incidieron en el derrumbe institucional del 11 de septiembre. La tesis que quisiera argumentar al respecto sostiene que aquél no se entiende sin la profunda metamorfosis política e ideológica de la derecha chilena, ocurrida durante el lapso que va de 1966 a 1970, cuya esencia consistió en el paso desde el liberalismo al nacionalismo. A través de esa metamorfosis, reaccionando en contra de los procesos democratizadores y anticapitalistas en curso en el país —y después en contra del propio gobierno de la Unidad Popular (UP)— la derecha creó todas las premisas políticas e ideológicas de la dictadura militar instaurada el 11 de septiembre de 1973. Agrego que dicho derrumbe vino también decisivamente asociado a la intervención estadounidense, la que terminó anudándose con los procesos que vivía la derecha; y también con la decidida acción del gran empresariado, todos finalmente orientados en la misma perspectiva.

Por cierto, no cometeré el extravío de desconocer la existencia de otras variables que también contribuyeron al desenlace verificado aquel 11 de septiembre. Entre ellas figura el comportamiento de los otros actores políticos de la época; en particular de los que terminaron siendo funcionales a los propósitos de los sujetos arriba mencionados, se ubicaran en el centro o en la propia izquierda. A ellos, en todo caso, me referiré más adelante.

I. LA METAMORFOSIS IDEOLÓGICA Y POLÍTICA DE LA DERECHA CHILENA DE FINES DE LOS SESENTA COMO PREMISA DE LA DICTADURA MILITAR EN CIERNES

1. La crisis de la derecha en el contexto regional y nacional

Desde ya, al abordar el tema doy por supuesto cierto contexto, que en el plano regional tuvo su expresión principal en la influencia que proyectara la revolución cubana sobre el continente. Y también su contrapartida: las medidas estadounidense para neutralizarla; esto es, la Alianza para el Progreso, con su correlato, la reorientación de las fuerzas armadas de la región hacia la tarea de enfrentar al “enemigo interno”. Esta cuestión fue teorizada por la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), y en buena medida se materializó a través de las dictaduras militares institucionales que entonces aparecieron, cuyo paradigma fue la instaurada en Brasil ya en 1964.

En el plano local subrayo el surgimiento de tres proyectos globales que empezaron a perfilarse a fines de los cincuenta y que lucharon entre sí con vistas a reemplazar al ya agotado modelo sustitutivo de importaciones instaurado en los treinta. Y en el plano social, hago referencia a la potenciación de sujetos mesocráticos y populares que cuestionaron con creciente fuerza a la clase dirigente constituida por una oligarquía industrial, financiera y terrateniente, vinculada al capital estadounidense principalmente. Sujetos populares que en buena medida se habían venido conformando desde comienzos del siglo y que demandaban un cambio de fondo frente a las negativas condiciones de vida que los proyectos dominantes les habían reservado históricamente. A ellos se sumaron nuevos estratos asalariados modernos, tanto en el sector productivo como de servicios. Esta base social, entre otras, era el sustento en que se apoyaron los proyectos de cambio impulsados por el centro y la izquierda ya desde fines de los cincuenta.

Cabe agregar en este sumario recuento el triunfo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) verificado en 1964, y su gobierno que estableciera cambios estructurales, materializados sobre todo en la reforma agraria, que alarmaron profundamente a la derecha, la cual adicionalmente se sintió aislada. Más aún cuando el *ethos* cultural claramente utópico que entonces se abriera paso le fuera hostil, al tiempo que Estados Unidos y la Iglesia católica habían apostado a la solución modernizadora de la democracia cristiana como medio de detener a la

izquierda. Todo, por cierto, era expresivo de una profunda crisis de los sectores conservadores.

Será contra estos procesos que reaccionarán la derecha y el gran empresariado, impulsando su propio proyecto global, y a la larga redefiniendo su identidad política e ideológica.

2. La formación del Partido Nacional

Pues bien, en tal marco cabe situar un hecho clave para nuestros efectos; a saber, la notable flexibilidad de la derecha traducida en su decisión de llevar a cabo la ya referida radical metamorfosis de su identidad pasando —como señalé arriba— de una definición liberal a otra de tipo nacionalista. Ésta fue su respuesta al desafío de encarar exitosamente las transformaciones en curso en el país, que le eran claramente adversas. Tales transformaciones difícilmente podrían ser revertidas basándose en un esquema liberal como el que hasta entonces profesaba, apto para tiempos normales; es decir, para aquellos periodos cuando su hegemonía y dominación no estaba cuestionada.

Por razones de tiempo y espacio, al abordar esta transformación de la derecha no me referiré a las relaciones históricas entre su sector tradicional —es decir, liberal— y su fragmento nacionalista; sólo dejaré constancia de que tales relaciones estuvieron repletas de tensiones, aunque no exentas de una considerable capacidad de interpelación de la segunda respecto de la primera. Hasta que la crisis de los sesenta condujo a la cuasi confluencia entre ambas, cuya expresión orgánica fue el Partido Nacional (PN), fundado en 1966. El hecho, como es sabido, supuso la disolución de los viejos partidos liberal y conservador, cuyos miembros confluyeron en la nueva colectividad, junto al grueso de Acción Nacional, de Jorge Prat, más algunos elementos provenientes del Partido Agrario Laborista, como Sergio Onofre Jarpa.

El profundo viraje político e ideológico de la derecha expresado en la formación del PN en gran medida se inspiró en las concepciones de Jorge Prat. Así, se asumieron del todo los paradigmas conservadores, antiliberales y autoritarios referentes a la decadencia de la nacionalidad, proceso que tendría su causa en el sistema demoliberal, el que sería propicio para la infiltración y desarrollo de la amenaza socialista; todo lo cual prefiguraba la disolución del país y su sometimiento a una potencia extranjera.

No es casualidad que el documento fundacional del PN partiera precisamente del supuesto de que Chile vivía una “etapa de decadencia que [era] necesario superar reviviendo el impulso vital del pueblo”. A partir de tal diagnóstico este partido se propuso “instaurar un nuevo orden político, económico y social”,¹ con lo cual, en el fondo, sostenía una voluntad de modificar el sistema institucional en un sentido autoritario, en correlación con la instauración de un proyecto global que contenía un capitalismo modernizado; proyecto que más adelante —sólo más adelante— devendrá en neoliberal.

3. De la lucha en contra del gobierno del PDC a la creación de una alternativa propia de poder

Desde tales definiciones, la preocupación principal de esta “derecha renovada”, expresada en la formación del PN, pasó a ser una sistemática lucha en contra del gobierno demócratacristiano. Un profundo abismo se había abierto entre éste y los sectores derechistas luego que el presidente Frei Montalva llevara a cabo un significativo programa de cambios que hería los intereses de aquélla. El conflicto principal se generó en torno de la reforma agraria, que afectaba no sólo los intereses de los terratenientes, sino de una u otra forma, que parecía también cuestionar al derecho de propiedad en general. A ello agréguese los cambios en política tributaria, que afectaron a las grandes propiedades urbanas y rurales, los controles estatales sobre la política bancaria y crediticia, sobre los precios, etc. La derecha comprendió que estos cambios representaban un profundo peligro, no sólo en la medida en que afectaban los intereses inmediatos de los poderes fácticos que estaban detrás de ella, sino, al mismo tiempo, en cuanto la prédica transformadora de la democracia cristiana de la que iban acompañados implicaba el trastocamiento de las jerarquías sociales, y particularmente era un estímulo al fortalecimiento de sujetos populares, lo que a su juicio sólo podría beneficiar al proyecto de la izquierda. La incorporación del campesinado a la vida política y social que se estaba produciendo como efecto de la ley de sindicalización campesina era clara muestra de ello.²

¹ Declaración de Principios del Partido Nacional.

² L. Corvalán Márquez, *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Santiago, Ed. Sudamericana, 2002, p. 102.

Dentro de esa visión de los acontecimientos el PN acusó a la democracia cristiana de “pavimentar el camino al comunismo” y aún más, de ser ella misma “criptocomunista”. A la par, vio en Eduardo Frei Montalva una especie de Kerensky que inconscientemente arrastraba al país al caos, acusación que se vio acentuada en la medida que las movilizaciones sociales y la radicalización política se hacían más amplias en los últimos años del gobierno de la Democracia Cristiana.³

Entonces, en el contexto de una polarización política y social que paso a paso crecía en el país, el PN supo impulsar un notorio proceso de recuperación de la derecha. Este proceso en gran parte se verificó sobre la base de lograr la adhesión de ciertos estratos medios inquietos ante las evidencias de un ahondamiento de los conflictos sociales y políticos en curso. También fue catalizado ante el temor producido en dichos estratos por la influencia creciente de los actores populares radicalizados que cuestionaban las jerarquías sociales existentes, dentro de las cuales ciertas clases medias se consideraban bien ubicadas. De tal modo, estos sectores fueron considerablemente interpelados por las reivindicaciones del PN sobre el orden y la restauración del principio de autoridad.

Dicho proceso de recuperación de la derecha, obviamente, se enlazó muy pronto con el levantamiento de una alternativa política propia; vista por lo demás como medio para implantar su proyecto global, y a la vez como instancia de salvación del país ante el caos y decadencia a que continuaría siendo conducido por los partidos políticos de centro e izquierda. El PN se abocó con fuerza a la creación de esa alternativa.

La característica principal de ella fue la acentuación del principio de autoridad, que sería el antídoto a una hipotética anarquía que se estaría apoderando del país, lo que sintomáticamente vino unido a la apelación a aquellos componentes del Estado cuyo personal no dependía del comportamiento electoral de la población: las fuerzas armadas y el Poder Judicial. Así, ya a poco más de un año de ser creado, en agosto de 1967, la colectividad sostuvo:

El gobierno de Frei es víctima, en lo interno, de la crisis de autoridad más aguda de este siglo en nuestro país [...] como en las anarquías anteriores

³ *Idem.*

tal estado de cosas sólo puede ser detenido con un régimen de autoridad encausado por un gobierno fuerte, impersonal y nacional [...]. Mantengamos toda nuestra fe en los superiores destinos de la patria y en el sentido de acendrado deber y de justicia que siempre ha distinguido tanto al Poder Judicial como a las Fuerzas Armadas.

De este modo, la emergencia de los sujetos mesocráticos y populares era homologada por el Partido Nacional a la anarquía, siendo el antídoto a ésta las fuerzas armadas y el Poder Judicial. Tal era la lógica que se abría paso en su seno.

En realidad, lo que bajo estos supuestos propugnaba la derecha era una verdadera reestructuración del Estado basado en un Ejecutivo fuerte que limitara la ingerencia del parlamento y de los partidos; en particular, de aquellos que expresaban a los ascendentes sujetos populares y mesocráticos. El régimen de autoridad que se implantaría sería así la contrapartida a la anarquía que según el Partido Nacional el país ya estaría experimentando. No está de más señalar que la dicotomía entre anarquía y orden era en realidad una antigua herencia del pensamiento conservador antiliberal, la que en Chile fuera planteada ya en 1902 por Alberto Edwards. Siempre utilizada como argumento principal para postular la supresión de régimen demoliberal y su reemplazo por distintas modalidades de autoritarismo.

4. Hacia la alianza con las fuerzas armadas

Ahora bien, para llevar a cabo su propio proyecto refundacional de país y derrotar a los proyectos rivales, la derecha debió definir una estrategia. Ésta, en lo fundamental consistió en formar un bloque de largo aliento entre ella misma, las fuerzas armadas, los empresarios y ciertas clases medias conservadoras. En relación con estos sectores el discurso de la derecha insistió en el temor al desgobierno y al caos, que prefigurarían la desintegración nacional. Respecto a las fuerzas armadas, el PN intentó empatizar con ellas mediante la colocación en primer plano de los problemas fronterizos y las demandas sobre presupuesto y equipamiento adecuado ante las amenazas externas que se percibían, en particular con Argentina; además calificó al centro y a la izquierda de indiferentes a estos problemas, precisamente porque no estarían comprometidos con el destino nacional, sino más bien ligados

a intereses internacionales. Esta tesis adquirirá creciente peso en su pensamiento.⁴

En relación a esas problemáticas –más las referentes al caos y el desgobierno, la asfixia de la iniciativa privada y de la propiedad, especialmente a través de la reforma agraria–, el Partido Nacional impulsó una enérgica contraofensiva política que contribuyó considerablemente a polarizar el escenario nacional.

No es menos cierto que en 1967 el gobierno de Eduardo Frei Montalva respondió con no menor radicalidad frente a la prédica del Partido Nacional sobre las cuestiones fronterizas y militares. Como es sabido, procedió a encarcelar a toda la directiva del partido. Entonces éste se vio obligado, al menos por el momento, a colocar en segundo plano la temática sobre las fuerzas armadas.

Esta orientación de la derecha fue paralela a los inicios de la crisis del constitucionalismo formal en el seno de las instituciones castrenses –en especial del ejército–, lo que marcaba la tendencia al afloramiento en las filas de ciertas adhesiones ideológicas nacionalistas disimuladas tras el acatamiento formal de los uniformados al orden demoliberal. Dicha crisis se manifestó durante la segunda mitad de los sesenta en una cadena de hechos aparentemente menores –que por razones de tiempo no puedo describir– hasta que eclosionó en el acuartelamiento del general Viaux en el regimiento Tacna, ocurrido en octubre de 1969, el que, pese a las reivindicaciones corporativas de que se revistió, era un verdadero golpe orientado a imponer un régimen autoritario y conservador.

El PN, que durante los años anteriores aparentemente no había obtenido éxito en su prédica en torno de las cuestiones militares, como todos los otros partidos, rápidamente tomó posiciones respecto al punto, siempre en la perspectiva de articular la alianza referida arriba. Cuidándose de no entrar en conflicto ni con el movimiento militar ni con el mando constitucionalista de las fuerzas armadas –que rápidamente adoptó medidas para sofocar el conato–, culpó al gobierno demócrata cristiano de ser el causante “de una anarquía general” que viviría el país. Al mismo tiempo se solidarizó con las demandas profesionales de los militares, aunque subrayando que no propiciaba acciones extraconstitucionales y que sus metas las llevaría a la práctica dentro de la vía legal.⁵

⁴ *Ibid.*, pp. 103-104.

⁵ *Ibid.*, p. 104.

Digamos entre paréntesis que, frustrado el movimiento del Tacna, la crisis del constitucionalismo formal en las fuerzas armadas continuó: se manifestó a lo menos en tres réplicas conspirativas fechadas en diciembre de 1969, marzo de 1970 y octubre del mismo año, esta vez nuevamente a través de la acción directa del general Viaux, la que terminará con el asesinato del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, firme partidario de la no injerencia de las fuerzas armadas en las cuestiones políticas.

En este marco, el PN —no ciertamente por razones de principio—, ante el panorama electoral que se abría, debió apostar al triunfo en las urnas en septiembre de 1970, sin por cierto cerrarse a otro tipo de opción, como lo demostrarían los sucesos por venir.

5. “La nueva república”: consolidación del nacionalismo y el antiliberalismo en el Partido Nacional

Con motivo de las elecciones presidenciales de 1970 el PN expuso el conjunto de sus concepciones políticas, económicas e ideológicas a través de un voluminoso texto titulado *La nueva república: respuesta al desafío de Chile*. Al respecto, lo fundamental para nuestro análisis radica en el hecho de que, aparte de exponer en él los rasgos principales de su proyecto global, el PN puso en evidencia cuánto había avanzado en la consolidación de su identidad nacionalista y antiliberal.

De allí que el estudio de este texto revista gran importancia. Entrando en esa línea cabe decir que de partida *La nueva república* diagnosticó una crisis integral del país, al tiempo que hizo gala de la clara voluntad refundacional del mismo, antes que nada en lo relativo al régimen político, cuestión que consideró urgente. “Chile vive la peor crisis política de este siglo —se sostenía en el documento—. Nuestras instituciones políticas son peligrosamente inadecuadas para la época actual, comprometiendo la estabilidad del país. Los partidos políticos perdieron de vista sus verdaderos objetivos, transformándose en ‘sociedades de socorros mutuos’, esclavos de su ideologismo excesivo y de intereses extranjeros.” Y agregaba: “la nueva república significa una renovación política total a través de la reforma constitucional y de profundos cambios en el espíritu y la conducta de los partidos”.⁶

⁶ Partido Nacional, *La nueva república: respuesta al desafío de Chile*, s.p.i., p. 15.

Como puede verse, este texto explicitó dos tesis clave para los efectos de discernir su identidad nacionalista y antiliberal. Primero, la referente a que las instituciones democráticas entonces vigentes serían “peligrosamente inadecuadas”; y segundo, la que sostuviera que los partidos eran instrumentos de intereses extranjeros disolventes de la nacionalidad. Claro está que, relativo a esta segunda tesis, curiosamente *La nueva república* exceptuó de tal acusación a las colectividades derechistas. Los instrumentos de los intereses extranjeros, en efecto, serían sólo los partidos de izquierda y la Democracia Cristiana. En esta línea, señaló:

El mayor perjuicio causado a Chile por los partidos de izquierda [es] de orden espiritual, porque atentan contra el sentido mismo de nacionalidad. La izquierda ha demostrado un creciente desapego de la realidad y la tradición chilenas, y un afán no disimulado de ligar su suerte y su destino a movimientos políticos internacionales con dirección y financiamiento foráneos. La proyección de estas actitudes hacia las actividades culturales ha significado una pérdida progresiva de la conciencia nacional, de la independencia de criterio para abordar los problemas del país y, lo que es lo más grave, el debilitamiento de la fe en el porvenir de Chile como nación independiente.⁷

Y con respecto al PDC, argumentaba su carácter foráneo en razón de que se hallaba “afiliada a la democracia cristiana internacional, de la cual —afirmó— ha recibido financiamiento”.⁸ Desde el punto de vista de *La nueva república*, las soluciones propuestas al país tanto por la izquierda como por la democracia cristiana estaban condenadas al fracaso, justamente debido a que “sus teorías [tenían] un origen extranjero y no correspond[ían] en absoluto a la realidad nacional”.⁹

En este esquema, adicionalmente, los partidos de centro e izquierda figuran como obstáculo para superar la decadencia no sólo debido a que expresarían intereses extranjeros, sino también en virtud de que serían funcionales a la lucha de clases, la que a su vez impediría la unidad nacional, requisito de la recuperación del país. La lucha de clases, en

⁷ *Ibid.*, p. 11.

⁸ *Ibid.*, p. 16.

⁹ *Ibid.*, p. 17.

efecto, habría sido instaurada en Chile por los partidos izquierdistas, los que habrían contado para ello con la complicidad del centro. Tal lucha le parecía al PN artificial y destructora, por lo cual había que erradicarla, reemplazándola por un espíritu de unidad nacional. Pero en tal perspectiva, por las razones indicadas, se chocaría nuevamente con el negativo rol de los partidos.

El sistema de partidos —lo que en realidad equivale a decir el régimen demoliberal— era en síntesis lo que antes que nada había que cambiar a juicio del PN. Sin ello no se revertiría el proceso de decadencia que conducía a la disolución nacional.

De tal modo, el discurso de la derecha a través de *La nueva república* terminó estructurando su visión de país alrededor de la dicotomía que enfrentaba a la nación versus intereses extranjeros; en donde los partidos (con excepción de los de la derecha) aparecían vinculados a estos últimos. Tal lógica, sin dudas, es altamente expresiva del radical viraje ideológico y político que la derecha experimentaba hacia 1970, viraje que, dicho sea de paso, la historiografía no ha ponderado suficientemente.

Es cierto que el PN todavía no proponía en aquel documento poner fin al régimen de partidos, aunque sí sostuvo la necesidad de avanzar hacia su radical reforma; en realidad, minimizando su rol dentro del sistema institucional. Sin embargo, no reside aquí lo fundamental sino en el hecho de que caracterizó al grueso de los partidos políticos como instrumentos de ideologías e intereses foráneos destructores de la nacionalidad, lo cual los hacía potencialmente ilegítimables; por tanto, entre tal conceptualización y posible proscripción del sistema partidario había coherencia lógica. Tres años después, en el mismo momento de su autodisolución luego del golpe militar, el PN dará tal paso al apoyar incondicionalmente la clausura de la institucionalidad democrática existente, luego de esforzarse durante ese mismo lapso en crear las condiciones de ingobernabilidad requeridas para ello.

En resumen: estamos en presencia de una gran inflexión ideológica, de enormes consecuencias prácticas. ¿Cuál es la esencia de tal inflexión? Su esencia consiste en que se asumía el ideologismo conservador antiliberal de tipo nacionalista o tradicionalista desarrollado sobre todo durante el siglo XIX y primera parte del XX en Europa, y cuyo apogeo se diera entre ambas guerras mundiales; ideologismo que encontró su forma más radical en el fascismo y el nazismo, y su forma

más moderada en el franquismo y el integralismo portugués. Como es sabido, este esquema ideológico postula la existencia de un absoluto positivo, que suele ser precisamente la nación (en otros caso el orden tradicional o una mezcla de ambos), que se supone amenazado por un enemigo externo (que constituye algo así como el mal absoluto) que dispondría de un elemento infiltrado conceptualizado como “enemigo interno”, el cual suele ser la masonería, el judaísmo, los agitadores profesionales, la subversión, el marxismo, el comunismo, etc. Dentro de este esquema ideológico, la persistencia del bien absoluto (la nación) supone la destrucción del mal absoluto, siempre vinculado a lo “extranjero”. Tal destrucción, por lo demás, supondría necesariamente el reemplazo del régimen demoliberal, bajo el supuesto de que éste sería la premisa para la exitosa infiltración del enemigo destructor de la nacionalidad; infiltración que por lo demás, en la medida en que progresa, daría lugar a la decadencia del país en la perspectiva de su disolución final. Para estas concepciones nacionalistas antiliberales, liberalismo y comunismo son dos momentos de un proceso histórico único conducente al aniquilamiento de la nación. Frente a tal proceso este ideologismo postula la necesidad de una decisión salvadora, que suele asociar a las fuerzas armadas, concebidas como última reserva de la nacionalidad amenazada.

Este esquema doctrinal –en realidad “foráneo”– fue el que en lo esencial el PN profundizó en *La nueva república*. Los acontecimientos entonces en curso en el país –es decir, la emergencia de los sujetos mesocráticos y populares, con sus correspondientes proyectos anticapitalistas– pasaron a ser decodificados por dicho partido en clave de tal esquema. Eso explica el que todos los partidos, con excepción de los de la derecha, en la visión del PN terminen apareciendo como “instrumentos de intereses extranjeros”; del mismo modo, la institucionalidad demoliberal que entonces tenía el país figuraba ahí como “peligrosamente inadecuada”.

A través de tales esquemas apriorísticos, que ciertamente deslegitimaban al orden demoliberal y el sistema de partidos, el PN sentaba las bases teóricas de la futura dictadura militar. Tanto más cuando como parte del mismo ideologismo, la colectividad introdujera en el debate político de entonces el tema del rol de los militares en el orden institucional e interno.

Esta temática fue introducida por el PN de modo bastante coherente con las premisas doctrinales nacionalistas que había sentado; en efecto,

la dualidad entre la nación y los elementos extranjeros que pretenderían destruirla desde dentro suponía, a su juicio, identificar una fuerza lo suficientemente poderosa, concebida como esencialmente ligada al ser nacional, capaz de servir a los fines de una reacción salvadora y rectificadora. Tal fuerza, a juicio de *La nueva república*, eran precisamente los militares. Porque así como el polo contrario a la nacionalidad vendría encarnado en los partidos de izquierda y de centro, beneficiados por una institucionalidad demoliberal “peligrosamente inadecuada”, el polo de la nación se personificaría en alto grado en las fuerzas armadas (y políticamente en el propio PN).¹⁰ Por lo mismo, la lógica de su pensamiento conducía forzosamente a la minimización del rol de los partidos y a la potenciación del rol de las fuerzas armadas dentro del sistema político.

Estas premisas en *La nueva república* se tradujeron en la tesis según la cual las fuerzas armadas debían “responder de la seguridad interna del Estado, evitando que éste [pudiera] ser destruido desde dentro por fuerzas contrarias a la nación o por organizaciones internacionales al servicio de intereses foráneos”. Para cumplir con eficacia todas estas tareas las fuerzas armadas debían “disponer de los medios necesarios y de una adecuada intervención en la administración y el desarrollo del país”.¹¹

Señalemos que esta tesis ya había sido formulada durante los cuarenta por Jorge Prat en las páginas de la revista *El Estanquero*, de la extrema derecha nacionalista. Aunque en rigor quizás quepa remontarse incluso a los treinta; en particular a los planteamientos de Jorge González von Marees, y al Movimiento Nacional Socialista (MNS) y sus vástagos, quienes ante la falta de apoyo electoral que concitara sus planteamientos, confiaban en que los podrían llevar a la práctica mediante la acción de los uniformados.

En 1970 tales puntos de vista sobre el rol de las fuerzas armadas en el orden interno los asumió la derecha en su conjunto a través del PN, sin que nadie se percatara de las profundas implicaciones que ello suponía. Más aún cuando coincidían en su lógica fundamental con la DSN, que las fuerzas armadas habían recepcionado a instancias de Estados Unidos.

¹⁰ L. Corvalán Márquez, *Del anticapitalismo...*, op. cit., pp. 106-197.

¹¹ *Ibid.*, p. 89.

Por otra parte, la derecha a través de la redefinición de su identidad ideológica y política, y reaccionando en contra de los sujetos mesocráticos y populares en alza y en contra de sus proyectos de cambio anticapitalista, al concebir el eje de la lucha política como la oposición entre intereses nacionales y extranjeros (representados estos últimos por los partidos, favorecidos en su acción por el orden demoliberal), de hecho había fundado una visión de la política entendida como una guerra entre patriotas y antipatriotas. En ella, como se ha visto, debían involucrarse las fuerzas armadas, precisamente por cuanto en el conflicto en curso supuestamente se decidiría la supervivencia de la nacionalidad. Guerra en la cual la persistencia del sistema demoliberal jugaría en favor del “enemigo”, que lo utilizaría en su beneficio. Estamos, pues, en las antípodas de las concepciones democráticas y liberales hasta entonces predominantes en Chile. El general Pinochet, durante los 17 años de su dictadura, reiteró al infinito esas tesis de la derecha ahora nacionalista; tesis en las cuales, por lo demás, se fundó la llamada “nueva institucionalidad” contenida en la Constitución de 1980. También se fundó en ella, y en la DSN, la llamada “guerra interna”; es decir, la política de eliminación del “enemigo interno”, cuya consecuencia más notoria fueran los detenidos desaparecidos.

El que las arriba descritas posiciones de la derecha fuesen del todo asumidas por las fuerzas armadas sólo tres años después constituía una posibilidad que los políticos de entonces, imbuidos en la carrera presidencial de 1970, ni remotamente intuían. Sin duda, tal asunción que procedieron a hacer los militares se explica también por los procesos ideológicos y políticos en curso dentro de los cuarteles, cuestión en la que aquí no puedo entrar.

¿Sería extraño que en este cuadro cualquier proceso de cambios que se insinuara en el país, y que afectara los intereses de los poderes fácticos que estaban detrás de la derecha, tendiera a culminar en un golpe de Estado; más aún si en ello se involucraba Estados Unidos, como efectivamente sucedió? ¿No era inevitable que dadas sus definiciones ideológicas nacionalistas, la derecha tendiera a identificar un proceso tal como amenaza a la nacionalidad?

Tal fue precisamente lo que ocurrió una vez verificado el triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970.

6. Hacia el golpe

Como es sabido, luego de fracasar tanto el llamado gambito Frei, como también el *putch* del general Viaux, que estaba conectado con las operaciones Track I y Track II llevadas a cabo por la *Central Intelligence Agency* (CIA) por orden de Richard Nixon, Salvador Allende asumió la presidencia el 4 de noviembre de ese año. Entonces, luego de superar su repliegue inicial, la derecha, profundizando en sus ya descritas definiciones nacionalistas y antiliberales, inició lo que después se denominaría la “oposición integral” al nuevo gobierno. En esa línea, se concentró esencialmente en provocar permanente anormalidad en el sistema político, cuestión que operó mediante los intentos por crear la percepción de amenaza sobre la mayoría ciudadana, junto con el desquiciamiento del régimen presidencial mediante una sistemática política de acusaciones constitucionales a los ministros de Estado.

El PN intentó construir aquella percepción postulando que el gobierno de la UP era instrumento de una potencia extranjera y que perseguía liquidar las libertades públicas con el fin de establecer un sistema totalitario que aboliría todo tipo de propiedad. En tal sentido, la vía chilena del presidente Allende, que pretendía llevar a cabo un socialismo que se articulara con la democracia y la libertad, no sería sino una mascarada destinada a ocultar propósitos totalitarios.

Por tanto, el PN insistió en conceptualizar todo el proceso político en curso en los términos del ideologismo nacionalista antiliberal que había asumido durante la última parte de los sesenta; esto es, interpretar dicho proceso basado en la dualidad que existiría entre la nación y un enemigo externo-interno que trataría de destruir a aquélla desde dentro valiéndose del orden demoliberal existente; el cual, por lo demás, sería oportunamente desechado con el fin de establecer un régimen abiertamente totalitario entregado al extranjero, consumando así la disolución del país.

Este modelo conceptual fue en efecto reiterado hasta la saciedad por el PN durante los tres años del gobierno de la UP. Al respecto citemos como ejemplo, entre muchos otros posibles, la declaración que Sergio Onofre Jarpa hiciera a nombre del PN el 7 de septiembre de 1971. En ella, el entonces timonel del PN acusó al gobierno de tratar de “proyectar una buena imagen de Chile hacia el exterior, afirmando su devoción a la democracia y su respeto a las leyes y a los derechos de las

personas”. Pero en la práctica utiliza “todos los recursos, aun los más deleznable, para alcanzar sus propósitos totalitarios y antichilenos”. Además agregaba: “es la táctica de la máscara democrática tras la cual se oculta el verdadero rostro del comunismo internacional”. Lo que se pretende –decía Jarpa poco después– es “transformar lentamente a Chile en un Estado comunista totalitario [y] abrir camino a la penetración soviética en América Latina”.¹² En marzo de 1972, dentro de este esquema bipolar que oponía la “chilenidad” al “comunismo internacional”, el PN postuló que este último “y sus aliados”, habían “iniciado el asalto al poder”.¹³ Y así sucesivamente.

En consecuencia, según el señalado esquema, el gobierno de Salvador Allende no sería más que un mero instrumento de un enemigo extranjero del cual la nacionalidad se defendería, mediante la acción de la derecha y de los gremios empresariales por cierto. De este modo, el proceso político en curso en el fondo consistiría en una cuasi guerra entre patriotas y antipatriotas, en los términos señalados arriba. Como fácilmente se comprenderá, los efectos deslegitimadores y polarizadores de esta visión, difundida cotidianamente durante tres años a través del control mayoritario de los medios de comunicación, fue enorme. Más aún cuando los correspondientes mensajes se emitían según las reglas de la guerra psicológica; por lo mismo, no menos rotundas fueron sus potencialidades de violencia.

Desde esta lógica el PN muy pronto comenzó a predicar la ingobernabilidad, para lo cual terminará vinculándose con los gremios pequeñoburgueses y empresariales. Con fuerte apoyo y financiamiento estadounidense, estimuló así los cada vez más frecuentes paros que contribuyeron a destruir la economía del país.

También se esforzó por convertir cada conflicto localizado en un enfrentamiento general (“comunismo internacional versus chilenidad”) persiguiendo incentivar miedos irracionales, incompatibles con la negociación y el diálogo. De tal modo, por el contrario, apuntó a generar una respuesta de histeria colectiva, apta para soluciones que suponían demoler el marco institucional de los conflictos.

Esta orientación, que en alguna medida empalmaba con las llamadas “campañas del terror” llevadas a cabo por la CIA durante las

¹² L. Corvalán Márquez, *Los partidos políticos...*, op. cit., p. 113.

¹³ *El Mercurio*, 10 de marzo de 1972, p. 21.

presidenciales de 1964 y 1970, tenía también por objetivo impedir todo acuerdo entre el PDC y el gobierno, como el que permanentemente intentara el presidente Allende y el sector gradualista e institucional de la UP. A la par que buscaba estructurar el campo político en dos sectores incomunicados y que no dialogan: gobierno y oposición. Por tanto, perseguía también sumar al PDC a la tarea de hacer ingobernable el país y polarizar al extremo el sistema institucional. Todo, en fin, dirigido a abrir paso a un golpe militar, cuyas premisas políticas e intelectuales, como hemos visto, estaban ya creadas.

La modalidad específica a través de la cual se abriría paso al golpe, luego de instaurada la ingobernabilidad y la polarización extrema en el país, consistiría en una declaración del parlamento afirmando que la legalidad estaba sobrepasada. Desde este supuesto, el Poder Legislativo haría un llamado a las fuerzas armadas a intervenir. Esta modalidad había sido intentada por el PN ya durante el paro de octubre de 1972, cuando a través de su declaración “La responsabilidad del Congreso en la encrucijada de Chile”, solicitó a aquél que actuara en tal línea; no obstante, fracasó debido a que por el momento la Democracia Cristiana no se avino a ello. Sólo al año siguiente, el 22 de agosto de 1973 —luego de ser aislados y removidos los mandos constitucionalistas del ejército y lograda su hegemonía sobre el Partido Demócrata Cristiano— el PN logró ese fin. Dos semanas después se instauraría la dictadura militar.

El golpe perseguido por el PN —que tan exitosamente se materializara el 11 de septiembre de 1973— según su ideología nacionalista detendría la supuesta decadencia del país, la que bajo la Unidad Popular habría llegado a su límite comprometiendo la continuidad histórica de la nación. Y a la par refundaría a la nación a través de sus hombres de armas en alianza con los hombres de trabajo.¹⁴

Esto en el fondo significaba llevar a cabo el proyecto global que la derecha gradualmente había venido elaborando; proyecto que a la larga resultó ser el neoliberal establecido por los economistas de Chicago, asociados a los grupos más dinámicos del gran empresariado. Todo, por cierto, bajo el paraguas de las fuerzas armadas —materializando la alianza estratégica señalada arriba— cuya otra cara sería aquella práctica estatal dirigida a disolver a los sujetos mesocráticos y populares que

¹⁴ En el plano de la historiografía, quien ha expresado más fielmente esta tesis nacionalista ha sido Mario Góngora, en su *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*, Santiago, Ed. La Ciudad, 1981.

desde fines de los cincuenta habían levantado proyectos anticapitalistas, identificados por la ideología nacionalista de la derecha (civil y militar) con los causantes de la anarquía y la disolución del país en beneficio de intereses extranjeros. Prácticas estatales que, como es sabido, se tradujeron en masivas y prolongadas violaciones a los derechos humanos en el marco de una especie de terrorismo de Estado, cuya expresión más notoria fueran los detenidos desaparecidos.

Desde cierta óptica, si en la historia de Chile durante el siglo xx hubo un proyecto exitoso, fue éste; éxito que quizás alcanzó su cota mayor a comienzos de los noventa mediante la adhesión que de hecho le prestara la mayoría de la clase política derrotada en septiembre de 1973 –tanto demócratacristiana como parcialmente ex miembro de la UP– ahora “renovada” y en el gobierno. El proyecto de la derecha entonces pasó a ser un proyecto “de todos”, como dijera Andrés Allamand:¹⁵ una especie de nuevo orden natural que no se somete a cuestionamiento por ningún actor político relevante del país. Un verdadero criterio básico del “realismo” y de lo políticamente correcto.

Este triunfo de la derecha y del gran empresariado ciertamente debe ser evaluado teniendo también en consideración los enormes costos sociales y morales que implicó, con la pertinente fractura de la nacionalidad a que diera lugar. Fractura que paradójicamente se desplegara a contrapelo del ideologismo nacionalista propio del discurso legitimante de sus impulsores, civiles y militares; ideologismo articulado precisamente alrededor de la idea de unidad nacional.

7. El régimen militar como epígono ideológico de la derecha devenida en nacionalista

Según las consideraciones expuestas, en el pensamiento político de la derecha de 1970 estaban contenidos los planteamientos clave en los que los militares sustentarían su acción golpista y la racionalidad de su dictadura verificada entre 1973 y 1990. En primer lugar subrayo al respecto la tesis según la cual los problemas fundamentales del país estaban cruzados por la dualidad nación versus elementos foráneos que tratarían de destruirla desde dentro; en segundo lugar, el rechazo al

¹⁵ A. Allamand, *La travesía del desierto*, Santiago, Ed. Aguilar, 1999, p. 238.

sistema de partidos, y en el fondo al régimen demoliberal considerado como facilitador de tal pretensión; en tercero, el mesianismo refundador de la nacionalidad; y en cuarto, la asunción del concepto sobre la seguridad nacional, encarnado en buena medida en el rol relevante que se postulaba para las fuerzas armadas dentro del sistema político, y que después, en la constitución de 1980, se tradujo en la fórmula de garantes de la institucionalidad; a ello agréguese en lo económico el esquema neoliberal, que se esboza en *La nueva república* y que los militares aplicarán en su variable más radical; es decir, a través de la política de *shock*, tal como lo postularan los economistas de Chicago en los debates de 1970 en el Partido Nacional.¹⁶

II. LA INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS Y LA ACCIÓN DE LOS GREMIOS DEL GRAN EMPRESARIADO

Si aceptamos que el cambio de identidad política e ideológica de la derecha verificado durante la segunda parte de los sesenta en respuesta a los procesos sociales y políticos entonces en curso fue un factor decisivo en el quiebre de la democracia en Chile, cabe hacerse la pregunta sobre el rol de las restantes fuerzas políticas en ese decurso. ¿Por qué la evolución antiliberal de aquélla, cuya lógica según hemos visto, conducía a la instauración de regímenes autoritarios y antiliberales no fue oportunamente neutralizada por los otros sujetos sociales y políticos? ¿Qué factores permitieron que una fuerza políticamente minoritaria (respaldada, es cierto, por los poderes fácticos nacionales e internacionales) terminara imponiendo totalmente sus términos al país y abriendo paso a su solución política; es decir, a la dictadura militar? Ésa es la cuestión que requiere ser explicada.

La tesis de fondo que al respecto postulo sostiene que la derecha pudo imponer su meta de reemplazar el sistema demoliberal por un régimen autoritario en razón de que ante el ascenso de Salvador Allende a la presidencia, el gobierno de Estados Unidos confluyó activamente con esos propósitos, lo que vino unido a análoga actitud del gran empresariado. Estas tres variables: la decisión golpista de la derecha, de Estados Unidos y del gran empresariado, aceleraron la crisis del constituciona-

¹⁶ L. Corvalán Márquez, *Los partidos políticos...*, op. cit., p. 108.

lismo formal en las fuerzas armadas –crisis que venía desde los años sesenta–, lo que se tradujo en el aislamiento y posterior salida de las filas de sus cúpula constitucionalista (en ese proceso resultaron, en distintas circunstancias, asesinados los generales René Schneider y Carlos Prats, principales exponentes de las posiciones constitucionalistas en el seno del ejército). A la luz de estos factores decisivos, que a la larga configuraban una potencial correlación de fuerzas difícil de equilibrar, se requiere analizar el comportamiento de los restantes actores.

Respecto a éstos, en particular a los partidos, cabría decir al menos lo siguiente. Hubo colectividades que con sus prácticas terminaron dando un aporte significativo a la deslegitimación del marco institucional de los conflictos, cuestión indispensable para el golpe buscado por los poderes fácticos indicados más arriba. En tal sentido, en primer término cabe señalar al PDC, que se constituyó en un centro fuertemente antialiancista, incapaz de llegar a acuerdos moderados con el gobierno, debido a lo cual contribuyó decisivamente a la polarización buscada por los impulsores del golpe; en segundo término cabe mencionar a la izquierda más radicalizada; en particular, el Partido Socialista (PS) y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), que adquirieron un considerable peso, cumpliendo igual rol polarizante; actuando de hecho en contra de la vía chilena de Salvador Allende, bloqueando sus esfuerzos y los de la izquierda gradualista e institucional por llegar a acuerdos con el centro.

Antes de analizar estas variables haré un par de consideraciones sobre la intervención estadounidense, la actitud de los gremios del gran empresariado local y la crisis del constitucionalismo formal en las fuerzas armadas.

1. La intervención de Estados Unidos

En la coyuntura histórica que analizamos, el involucramiento del gobierno estadounidense en los asuntos chilenos fue enorme. Es cierto que sus precedentes no eran en modo alguno menores, según lo evidencia el informe de 1970 del Senado de Estados Unidos: *Acciones Encubiertas en Chile*.¹⁷

¹⁷ Senado de Estados Unidos, “Acciones encubiertas en Chile. 1963-1973”, en *Intervención norteamericana en Chile: dos textos clave*, compilación y traducción de C. Opaso, Santiago, Editorial Sudamericana, 2001.

Luego del 4 de septiembre de 1970, Washington consideró que el gobierno de Allende era incompatible con sus intereses geopolíticos en la región, e incluso más allá de ella. Tal cosa por cuanto al unir democracia y socialismo representaba un modelo anticapitalista atractivo, al que había que eliminar a toda costa. Henry Kissinger fue especialmente enfático sobre el punto. Roger Morris, en ese entonces miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, hace particular reconocimiento sobre el punto:

No creo que nadie en el gobierno comprendiese cuán ideológico era Kissinger en la cuestión de Chile. Nadie supo ver que Henry consideraba a Allende como una amenaza mucho más peligrosa que Castro. Si Latinoamérica tomaba conciencia alguna vez, no sería por Fidel Castro. Allende era el vivo ejemplo de la reforma social y democrática en América del Sur. Ocurrían en ese momento hechos desastrosos en el mundo, pero sólo Chile asustaba a Henry.¹⁸

Y el informe del Senado de Estados Unidos reconoce explícitamente este mismo hecho. Sostiene, en efecto, que la decidida acción intervencionista de Washington en los asuntos chilenos obedecía al “deseo de frustrar el experimento de Allende en el hemisferio occidental y así limitar su atractivo como modelo”.¹⁹

En ese contexto, el 8 y el 14 de septiembre se reunió el Consejo de los 40, presidido por Henry Kissinger. Y, según el informe, “el 15 de septiembre, el presidente Nixon informó al director de la CIA, Richard Helms, que un gobierno allendista era inaceptable para Estados Unidos e instruyó a la CIA para que jugara un rol directo en organizar un golpe de Estado en Chile para evitar que Allende asumiera la presidencia”.²⁰

Fracasados los intentos que llevara a cabo la CIA para impedir el ascenso de Salvador Allende a la presidencia (los llamados Track I y Track II) –intentos que culminaron con el asesinato del general Schneider el 22 de octubre de 1970–, el paso siguiente consistió en organizar sistemáticamente el derrocamiento de su gobierno. Para tales efectos, Washington, a través de la CIA y otras agencias, se desempeñó como

¹⁸ S. M. Hersh, *The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House*, Nueva York, Summit, 1983, citado en P. Verdugo, *Allende, cómo la Casa Blanca provocó su muerte*, Santiago, Catalonia, 2003, p. 53.

¹⁹ Senado de Estados Unidos, “Acciones encubiertas...”, *op. cit.*, p. 74.

²⁰ *Ibid.*, p. 66.

verdadero actor del cuadro interno, apoyando y financiando a todas las fuerzas contrarias al gobierno de la Unidad Popular, desde la prensa hasta a los partidos políticos, pasando por los movimientos sociales, el parlamento, las fuerzas armadas, los paros empresariales y la cultura. Todo apuntando a generar la anormalidad, el descontrol y el caos requerido por un golpe. El informe entrega datos pormenorizados sobre esa gigantesca intervención;²¹ junto con la metamorfosis de la derecha, fue pues un factor esencial en el derrumbe de la democracia en Chile.

2. Los gremios empresariales

Las organizaciones del gran empresariado jugaron un rol análogo. Los datos disponibles sobre tal orientación son incluso anteriores al ascenso de Salvador Allende a la presidencia; en efecto, paralelamente a la evolución nacionalista de la derecha, y al creciente involucramiento estadounidense en los asuntos chilenos, ya antes de 1970 hubo un segmento del gran empresariado orientado junto al PN hacia el establecimiento de un régimen de autoridad de tipo antiliberal. Se articulaba en torno del grupo Edwards, propietario de *El Mercurio*. Existía conciencia en él de la necesidad de establecer conexiones con las fuerzas armadas en función de los propósitos planteados. Respondiendo a tal necesidad, en agosto de 1968 fue creada por Agustín Edwards y Hernán Cubillos, la Cofradía Náutica del Pacífico Austral.

En una entrevista de prensa, Cubillos relata lo siguiente al respecto: “La Cofradía nació como una inquietud que teníamos Roberto Kelly, Agustín Edwards y yo de crear una especie de punto de encuentro de los civiles a los que nos interesaban las cosas de mar con los marinos profesionales”.²² Seguramente estos contactos se daban también a través de otras instancias y obviamente iban más allá de las meras actividades deportivas.

Al año siguiente de creada la Cofradía, un mes después del Tacnazo, Agustín Edwards se encontraba en Washington, aparentemente buscando apoyo para el derrotado general Viaux. Patricio Aylwin relata en entrevista de prensa que, estando en la capital estadounidense en

²¹ *Loc. cit.*

²² M. González, *Chile, la conjura, los mil y un días del golpe*, Santiago, Ediciones B, 2000, p. 118.

diciembre de 1969, se enteró de las gestiones de Edwards. Éste, dice Aylwin, estaba “en algo así como pidiendo ayuda para el general Víaux. Sé que lo que tentaba en ese momento a la derecha era terminar de una vez por todas con los peligros que la acechaban”. Los hechos por venir demostrarían que ese intento se asociaba al término de la institucionalidad demoliberal en el país.

Después del 4 de noviembre de 1970 las actividades del gran empresariado orientadas al golpe se intensificaron. Su articulación principal se verificó alrededor de la Sociedad de Fomento Fabril. En septiembre de 1971, los planes golpistas de esta organización se socializaron en una reunión del organismo celebrada en Viña del Mar, presidida por Orlando Sáenz. Este mismo dirigente empresarial lo relata en los siguientes términos:

Para invitar –señala– no recurrí sólo a los listados de la jerarquía establecida. Estaban Javier Vial, Hernán Cubillos, Eugenio Heiremans, entre otros. Les dije –continúa Sáenz– que había llegado a la conclusión de que el gobierno de Allende era incompatible con la libertad de Chile y la existencia de la empresa privada. La única forma de evitar el fin era derrocarlo. Se discutió, analizó y salieron conclusiones. La primera fue organizar una estructura de guerra; allegar sistemáticamente recursos económicos, una búsqueda nacional e internacional de dineros que se pudieran materializar en acción política propagandística y de activistas. También decidimos la conformación de programas de gobiernos alternativos, precisos y una permeación sistemática de todo esto hacia las Fuerzas armadas. Hubo que organizar un Servicio de Inteligencia, departamentos técnicos. Decidimos estructurarnos de tal manera que significara obtener una información y una armazón técnica de primera y esas dos cosas representaban dinero. Además, necesitábamos los mejores medios de difusión y eso también implicó esfuerzo y dinero. Lo concreto es que al día siguiente entramos en una disciplina militar, nos pusimos el casco y comenzó la guerra!²³

En otra parte Sáenz sostiene que “las extensas huelgas que proporcionaron el escenario para el golpe militar que derrocó al presidente Allende fueron financiadas parcialmente por empresas con sede en México, Venezuela, Perú”. El informe del Senado de Estados Unidos sostiene que esos dineros también provinieron del Comité de los 40.

²³ *Ibid.*, p. 119.

A la evolución de la derecha desde el liberalismo al nacionalismo, a la intervención estadounidense y a la inclinación golpista de círculos del gran empresariado, hay que agregar la crisis del constitucionalismo formal en las fuerzas armadas. Esta crisis venía de los sesenta, y se vio agudizada con el ascenso de Salvador Allende a la presidencia. Dicha crisis, como se dijo arriba, se tradujo en creciente aislamiento de las cúpulas constitucionalistas, socavadas por el acentuado activismo civil, y de los poderes fácticos sobre los uniformados –incluyendo a la CIA– presionándolos al golpe. El general Prats en sus memorias entrega abundante información sobre el punto.²⁴

De este modo, resultó un cuadro paradójico: a poco de iniciarse el gobierno de Salvador Allende –con antelación a que pudiera acusársele de cualquier cosa– todos los poderes fácticos, con excepción de la Iglesia, se hallaban activamente empeñados en crear las condiciones para abrir paso a un golpe de Estado. Con tales fines, por otra parte, fueron capaces de dotarse de un amplio blindaje social compuesto por la pequeña burguesía y la mayoría de las clases medias.

El empeño de los poderes fácticos en orden a poner fin al régimen institucional en Chile, por cierto requería crear previamente las condiciones pertinentes. Y tales condiciones sin duda eran la crisis económica, el descontrol social, la ingobernabilidad, el caos y el desquiciamiento de la psicología de la población, así como también la deslegitimación del marco institucional de los conflictos y del gobierno mismo; a estos últimos fines respondía la temática sobre el hipotético “totalitarismo” del régimen. Todos estos elementos fueron una construcción política y por lo mismo no fueron causa del derrumbamiento institucional, sino más bien uno de sus medios.

Sobre este trasfondo cabe analizar el comportamiento de los otros actores; en particular, de los actores partidistas. Ellos contribuyeron en mayor o menor medida a abrir paso, o a obstaculizar, el cumplimiento de un objetivo que no se anunciaba, pero que advenía con una fuerza casi incontenible; de una u otra forma fueron funcionales, o disfuncionales, a la creación de las premisas requeridas por esa empresa magna, y desde esta óptica debería evaluarse su comportamiento entre 1970 y 1973.

A partir de estos supuestos procederé a hacer una breve caracterización de los actores partidistas, así como también de las concep-

²⁴ C. Prats, *Memorias. Testimonio de un soldado*, Santiago, Ed. Pehuén, 1987.

ciones de Salvador Allende sobre la vía chilena al socialismo, siempre teniendo a la vista el contexto señalado al comienzo, y en particular la arriba referida metamorfosis de la derecha. Comenzaré analizando las concepciones del mandatario.

III. LA VÍA CHILENA Y LOS ACTORES POLÍTICOS

1. El gobierno de Salvador Allende: la vía chilena

La primera constatación que necesariamente cabría hacer se refiere al hecho de que el gobierno de Salvador Allende presentaba una particularidad esencial; a saber, el haber propuesto explícitamente una segunda vía al socialismo, históricamente inédita y que no reconocía precedentes en los cuales inspirarse. “No existen experiencias anteriores que podamos usar como modelos; tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social y económica”, sostuvo el mandatario en su discurso ante el Congreso pleno el 21 de mayo de 1971.²⁵

La esencia de esa inédita vía suponía: 1) la articulación entre el socialismo y la democracia; 2) la verificación de todo el proceso de cambios hacia el socialismo sin ruptura legal; y 3) la exclusión de la violencia extrainstitucional como medio de resolver los conflictos.

De entre los mencionados puntos es muy importante, para los efectos del sustento empírico de las distintas tesis historiográficas, subrayar el referente a la correlación entre socialismo y democracia, pues atinge a la tesis de la derecha sobre las intenciones “totalitarias” que habrían animado al gobierno entre 1970 y 1973.

En tal sentido cabe señalar que en la concepción de Salvador Allende, a la inversa de lo que ocurría en la ortodoxia del marxismo soviético, las llamadas libertades burguesas y las reivindicaciones del liberalismo relativas a las garantías individuales, no constituían meras superestructuras del capitalismo y de la dominación de la burguesía, sino que eran conquistas de la humanidad; como tales debían integrarse al socialismo pues las realizaría a plenitud al librarlas de las trabas que factualmente les

²⁵ S. Allende, “Primer mensaje ante el Congreso pleno”, en *Las grandes alamedas*, Bogotá, s.e., septiembre, 1983, p. 189.

imponía el capital.²⁶ En el arriba mencionado discurso, el mandatario formuló tales ideas afirmando que dichas libertades constituían “una conquista del pueblo en el penoso camino de su emancipación”, por lo cual —agregó— forman “parte de lo que hay de positivo en el periodo histórico que dejamos atrás”. En consecuencia, concluyó, “deben permanecer”.²⁷

El presidente Allende durante sus tres años de gobierno se ciñó rigurosamente a esta concepción; en efecto, durante ese lapso el parlamento se mantuvo abierto y en libre funcionamiento, incluso constituyéndose en el principal foco opositor. En las fechas definidas por la carta fundamental fue renovado mediante elecciones libres e informadas; al mismo tiempo, las libertades públicas no sufrieron merma alguna; por el contrario, fueron ampliadas. La división de poderes no se modificó. Los medios de comunicación mantuvieron su pluralismo, con claro predominio de las fuerzas opositoras en ellos. No hubo presos políticos ni perseguidos. La oposición no sólo vigorosamente existía, sino que también se manifestaba permanentemente en las calles protegida por la policía. La sociedad civil mantuvo su autonomía; todos los asuntos eran debatidos públicamente, etc. Esta plena vigencia de las libertades fue intensamente utilizada por la estrategia desestabilizadora de la derecha en su pretensión de abrir paso al golpe militar.

El conjunto de los datos mencionados conforma una base empírica verificable de la cual no se podría prescindir a la hora de emitir juicios historiográficos fundados. Es sobre tal trasfondo que cabe analizar el rol de los partidos. Éstos, pues, desplegaron sus características y luchas en un marco institucional plenamente democrático. Procederé a hacer una breve caracterización de los principales partidos remontándome a los años sesenta.

2. La izquierda: rupturismo versus gradualismo institucional

Lo primero que cabe reconocer al analizar a la izquierda chilena es el hecho de que en ella predominaban abrumadoramente los paradigmas marxistas; por lo tanto, sus miras se orientaban en una perspectiva anti-

²⁶ L. Corvalán Márquez, *Del anticapitalismo...*, *op. cit.*, p. 157.

²⁷ S. Allende, “Primer mensaje...”, *op. cit.*, p. 195.

capitalista y socialista, la cual, acorde con sus paradigmas ideológicos, se materializaría por medio de la revolución. Pese a ello, este sector político carecía absolutamente de homogeneidad, al punto que es posible sostener que en la práctica lo que existía eran al menos dos izquierdas. Incluso más: sólo por un limitado lapso histórico ambas marcharon juntas. Sus expresiones principales aunque no únicas eran, como es sabido, el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC).

Una de esas izquierda, al menos desde fines de los cincuenta y comienzo de los sesenta en adelante, muy influida por la revolución cubana, hizo suya una concepción ortodoxa y rupturista sobre el tránsito al socialismo. Era el caso del PS. Este partido en esa fecha, ideológicamente giraba de manera esencial en torno de una mixtura trotskista-leninista, con fuertes matices castro-guevaristas, más ciertas minoritarias incrustaciones socialdemócratas. Aquellos paradigmas ideológicos terminaron inclinando al partido hacia la temática de la resolución plena del problema del poder, fuera y en contra de la institucionalidad burguesa, por cierto. El Congreso de Chillán, efectuado en 1967, y luego el de La Serena, de comienzos de 1971, expresaron esa orientación.

La otra y decisiva cara de dicha radical identidad era la total incapacidad de este partido para ligar su ortodoxia revolucionaria con su práctica real. De allí se derivaba un hecho de la mayor importancia; a saber, que su radicalidad no podía traducirse sino en elementos meramente retóricos. Lo que venía unido a un notorio sectarismo expresado principalmente en la clara estrechez en la concepción de las alianzas sociales y políticas, cuestión que se reflejaba en su tesis sobre el Frente de Trabajadores. Con esta tesis, en efecto, en lo político el PS se oponía a toda apertura de la izquierda hacia el centro progresista y, en lo social, hacia el pequeño y mediano empresariado.

Lo paradójico del caso residió en que más allá del referido ideologismo, como en una especie de evidente esquizofrenia, la colectividad seguía participando en el parlamento, en las elecciones, en los sindicatos, y en general en el sistema demoliberal vigente. Imbuida en estas prácticas, nunca se avino a materializar sus radicalizadas tesis ni a alterar el orden establecido. Lo que no quitaba que insistiera en su retórica radical.

Quizás una de las claves para entender esa dualidad radique en el hecho de que más allá de su importante influencia en el movimiento obrero, el PS en el fondo era un partido de la pequeña burguesía inte-

lectual radicalizada influida por los distintos paradigmas de moda en la izquierda mundial. En este contexto, su modo natural de existencia consistía en la permanente oscilación y fragmentación interna. En alguna medida constatando esta realidad fue que un documento autocrítico de su Comité Central emitido en marzo de 1974, bajo la inspiración de Exequiel Ponce y Carlos Lorca, sostuvo que debido a la composición pequeñoburguesa de su dirección, el PS bajo la UP había sido “en gran medida el portador de la dispersión política”²⁸.

Frente al PS figuraba el PC, principal exponente de la izquierda gradualista e institucional. Este partido se asentaba sobre todo, aunque no únicamente, en los núcleos obreros más antiguos y en cierta intelectualidad. Sus posiciones consistían, dicho esquemáticamente, en transitar al socialismo sin enfrentamiento armado, modalidad que durante un tiempo denominó “vía pacífica”, a través de la conformación de mayorías sociales y políticas expresadas electoralmente, las que debían permitir ganar el gobierno para desde allí, apoyado en la movilización social-popular, operar, sin ruptura legal, las transformaciones institucionales hacia un Estado popular; todo en correlación con transformaciones en la estructura económica. Esta concepción lo llevaba a impulsar alianzas sociales y políticas muy amplias. En lo social incluían, junto al proletariado y al campesinado, no sólo a la pequeña burguesía y las capas medias, sino también al empresariado no monopólico. Del país, a 90% como se solía decir en este partido. Con ello, correlativamente se propendía a aislar y derrotar exclusivamente a “la oligarquía y al imperialismo”. En el plano político tal cosa se expresaba en la pretensión de ampliar la alianza de izquierda hacia el centro-progresismo, al que identificaba con el grueso del PDC y el Partido Radical (PR). Ésta era, en fin, la concepción de la UP amplia, antípoda del Frente de Trabajadores del Partido Socialista.

Esta concepción del PC en el fondo representaba un inconsciente kauskismo de izquierda, que en la práctica se articulaba del todo con la democracia política y que apuntaba a desarrollarla. Este hecho, que se traducía en el escenario nacional en la práctica democrática y pluralista de la colectividad, sin embargo no cuadraba del todo con la ortodoxia teórica de tipo marxista-leninista a la que se adhería. Esta tensión se veía profundizada ante su apoyo acrítico a la Unión Soviética y al so-

²⁸ Comité Central del PS, Documento de marzo de 1974, mimeografiado.

cialismo real; cuestión que adicionalmente venía acompañada de una concepción centralista y autoritaria de la vida partidaria interna.

En todo caso, la política del PC no se decidía en el plano de su ortodoxia teórica, sino en el de una especie de pragmatismo que alguien calificó de “iluminado”;²⁹ es decir, algo parecido a un sentido común muy adecuado a las realidades del país. No es menos cierto que resuelta la política en este plano, a posteriori se la justificaba y revestía mediante apelaciones a la ortodoxia; lo que no eliminaba la referida tensión que existía entre ésta y la práctica política de la colectividad.

En izquierda tan diversa, Salvador Allende se ubicaba dentro de las concepciones gradualistas e institucionales; por lo mismo, no respondía a los parámetros políticos e ideológicos predominantes en su propio partido. De allí que no fuera casualidad el que durante sus tres años de gobierno encontrara en el PC su principal fuerza de apoyo, y no en el PS, que constantemente lo cuestionó, acusándolo velada o abiertamente de socialdemócrata.

De lo anterior no debe ni mucho menos deducirse una identidad plena entre Salvador Allende y el PC. Existían entre uno y otro diferencias importantes, las que en todo caso no se situaban en el plano de la política contingente, sino en el de las concepciones teóricas. Allende, en realidad, no sólo postulaba un camino nuevo hacia el socialismo —en lo que coincidía con el PC— sino también conceptuaba a aquél de manera muy distinta al socialismo real, asumiendo teóricamente este hecho. Ello se materializaba en su intuición sobre la vía chilena, sin dictadura del proletariado. Y era en estos planos conceptuales donde el PC distaba mucho de renovarse. Este partido concebía, en realidad, la posibilidad de que la experiencia chilena estuviese abriendo nuevas formas de socialismo, que incluían el pluralismo, y lo valoraba positivamente retomándolo en la práctica,³⁰ pero nunca pretendió sacar consecuencias teóricas de ello. Es decir, nunca, a diferencia de Salvador Allende, se avino a cuestionar su ortodoxia teórica, expresada en la vigencia de las leyes generales que regirían el paso del capitalismo al socialismo, dentro de las cuales figura-

²⁹ El concepto lo tomo de Eduardo Sabrovsky, *Hegemonía y racionalidad política*, Santiago, Ed. Ornitorrinco, 1988, aunque no estoy seguro de que él haya sido el primero en usarlo.

³⁰ Al respecto, véase la larga conversación de Eduardo Labarca con el entonces secretario general del PC, Luis Corvalán Lepe, en *Corvalán 24 horas. El PC chileno por fuera y por dentro*, Santiago, Ed. Quimantú, 1972, especialmente p. 84.

ba la dictadura del proletariado; la cual, en todo caso, concebía como una fase reservada no para el presente sino para un futuro indeterminado.³¹

No es menos cierto que estas diferencias entre Allende y el PC nunca afloraron. Tanto más cuanto que el PC no solía hacer alardes de teoricismos ni fundar su práctica en su ortodoxia, sino por el contrario evidenciaba altas dotes de “pragmatismo iluminado”. A contrapelo, entre Salvador Allende y el PS existían a la vez profundos desencuentros tanto políticos como teóricos.

Las mencionadas diferencias entre las dos izquierdas se hicieron luego presentes en el seno de la UP, convirtiéndola en una fuerza muy heterogénea. Tal heterogeneidad política e ideológica fue la que entre 1970 y 1973 estaba en la base de su incapacidad para materializar una conducción unitaria del movimiento popular, lo que afectó gravemente la marcha del gobierno.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe reconocer que este último siempre siguió la orientación del presidente Allende; es decir, materializó la concepción de la izquierda gradualista e institucional; más aún, con los acentos personales del mandatario. Y por tal concepto el gobierno recibió permanente crítica de la izquierda rupturista, la que finalmente se agrupó en el llamado Polo Revolucionario, cuyas organizaciones principales terminaron siendo el PS y el MIR.

3. El PDC: el centro que no cumplió el rol de un centro³²

Desde comienzos de los años sesenta el centro político en Chile estuvo ocupado por el PDC. Esta colectividad, como lo señala Arturo Valenzuela, se caracterizaba por notables grados de ideologización, unido a sus claras tendencias antialiancistas y mesiánicas. Resulta altamente ilustrativo al respecto el que entre 1964 y 1970 la colectividad en la práctica hiciera un gobierno de partido único, cuestión sin precedentes en la historia del país.

³¹ En el pleno de su Comité Central de agosto de 1977 el PC manifestó su adhesión a la ortodoxia teórica que profesaba y señaló que discrepaba del concepto de Salvador Allende sobre una segunda vía al socialismo sin dictadura del proletariado. Véase el informe a dicho pleno, “La revolución chilena: sus grandes méritos y las causas de su derrota”, en L. Corvalán Lepe, *Tres periodos de nuestra línea revolucionaria*, Berlín, 1982, pp. 149 y ss.

³² Tomo esta tesis de A. Valenzuela, *El quiebre de la democracia en Chile*, Santiago, Flasco, 1989.

El PDC había prometido gobernar Chile por treinta años y se había propuesto superar en su beneficio la estructura de tres tercios que caracterizaba a la política chilena, ganando para esos efectos el control sobre la mayor parte del electorado. En esa línea, su meta era dejar en el pasado tanto a la “derecha capitalista” como a la “izquierda estatista”, presentándose como una “tercera vía” que mediante cambios estructurales implantaría la modernidad en el país, superando sus conflictos con un criterio participativo y de justicia social. Así se lanzó a disputarle los sujetos populares a la izquierda y las clases medias modernas a la derecha, autopresentándose como la única solución para los problemas nacionales.

Sus pretensiones implicaban cierto cuestionamiento a las tradicionales prácticas transaccionales de la política chilena; en particular, a través de un gobierno de partido único, unido a la expectativa de ganar el control de ambas cámaras del Legislativo, a lo que se sumaría su control sobre el movimiento social. Rompería así en su beneficio el esquema de los tres tercios, imponiéndole sobre esa base al país sus soluciones modernizadoras. Y aunque finalmente no logró estos propósitos, pues pronto comenzó el proceso de erosión de su base electoral, no por ello dejó de tensionar al sistema político, que a decir de Valenzuela se vio cruzado por “una frenética carrera entre todos los sectores para impedir que [el PDC] obtuviera el apoyo mayoritario”.³³

Este partido en realidad era un nuevo centro. Había desplazado de tal rol al viejo Partido Radical; era en definitiva sus antípodas. Es decir, un partido pragmático, poco ideologizado, que sin mesianismo alguno articulaba acuerdos con la izquierda y con la derecha y que, por lo tanto, a su modo jugaba un verdadero rol de estabilizador del sistema político y del régimen demoliberal. Jibarizado el radicalismo, el grueso de sus filas al final de los años sesenta devino hacia la izquierda, siendo, pese a la resistencia del PS, uno de los constituyentes de la UP, donde junto al PC formó parte de su ala gradualista e institucional, en la que principalmente se apoyara Salvador Allende durante su gobierno.

El PDC, dadas las características descritas, jugó un rol altamente polarizante del sistema político chileno, y en tanto tal, no cumplió el rol propio de un centro; es decir, mediar, hacer de puente, lograr acuerdos con los polos del sistema político, y por esa vía contribuir a estabilizar

³³ *Ibid.*, p. 113.

el marco institucional de los conflictos. Sin este hecho no es posible entender el posterior triunfo de la política polarizadora que la derecha deliberadamente impulsaba.

Pero adicionalmente, este centro ideologizado y antialiancista que era el PDC, se hallaba desde muy temprano escindido. Existía en su seno, en efecto, un sector conservador que se agrupaba en torno del liderazgo de Eduardo Frei Montalva, secundado por Patricio Aylwin y Andrés Zaldívar. Por principio, este sector era esencialmente antiizquierdista y, particularmente, anticomunista. El esquema modernizador que propugnaba para el país estaba purgado de verdaderos elementos anticapitalistas, a diferencia de lo que pronto se evidenciará en las otras alas partidarias. Era por esa razón que Estados Unidos vio en el PDC el modelo ideal que oponer a la alternativa revolucionaria que parecía cruzar la región. Por este mismo concepto fue que el PDC adicionalmente recibió el respaldo de otros grandes centros internacionales, como el Vaticano, la entonces República Federal Alemana y determinados círculos de la política italiana.

Pero, por otra parte, en la colectividad también existían considerables sectores progresistas e izquierdizantes. Éstos, muy pronto, más allá del énfasis modernizador y antitradicional, pasaron a centrar su perspectiva en cierto anticapitalismo. En función de ello y de la necesidad de vencer la resistencia de la derecha, gradualmente fueron concluyendo que era necesario buscar acuerdos con la izquierda marxista; sobre todo con miras a las elecciones presidenciales de 1970. Sin embargo, en 1969 fueron derrotados. El sector freísta concitó entonces el apoyo de una leve mayoría en torno de la tesis sobre el “camino propio”, la que en la práctica se impuso a la tesis “la unidad social y política del pueblo”. Entonces, los sectores más decididamente anticapitalistas del partido terminaron escindiéndose y confluyendo con la izquierda en la UP. Así, primero se constituyó el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), y en 1971, la Izquierda Cristiana. Con lo cual, a la larga, quedó casi libre el camino al control partidario por el sector dirigido por Frei.

Será precisamente este sector, entre 1970 y 1973, el que impulsará una política partidaria claramente polarizadora, distinta a la que es propia de un centro, negándose en los hechos a llegar a ningún acuerdo moderado con el gobierno de Salvador Allende, y contribuyendo así a la destrucción del marco institucional de los conflictos, cuestión que era requisito para el golpe militar de la derecha.

IV. EL DESENLACE

¿Cuál fue la conducta de los actores políticos mencionados arriba entre 1970 y 1973, lapso en el que resultaron creadas todas las condiciones para el golpe? En lo esencial su conducta no fue más que la prolongación de las lógicas que habían seguido durante la última parte de los años sesenta.

Así, la lógica de la izquierda gradualista e institucional se manifestó en el comportamiento del gobierno de Salvador Allende; es decir, un gobierno que se desenvolvió hasta el final dentro de los marcos del orden legal y que reiteradamente intentó establecer acuerdos con el PDC con el fin de crear una base social, política y jurídica más amplia y funcional a los cambios que propugnaba, fortaleciendo el marco institucional de los conflictos, lo cual constituía la premisa mayor de la vía chilena.

A contrapelo de esos esfuerzos estabilizadores del orden legal inherentes a la vía chilena, se desplegó la enorme eficacia del rupturismo de la derecha, que terminó cooptando al PDC para sus objetivos de ingobernabilidad y polarización, coordinándose a la par con los gremios empresariales y de la pequeña burguesía. Cuestión llevada a cabo mediante un fino trabajo de psicología social, cuyo resultado más relevante fue el desquiciamiento de la conciencia colectiva, desintegrada en una sucesión de miedos irracionales que afectaron sobre todo a ciertos núcleos de las clases medias, así como a amplios estratos pequeñoburgueses. Tales miedos constituían la subjetividad de masas del golpe, y también de la justificación de los crímenes cometidos por el Estado después del 11 de septiembre.

Tal situación pronto se correlacionó de manera notable con una reacción en ciertos estratos populares izquierdistas que se radicalizaron en sentido inverso, como respuesta a la propia radicalización de la derecha y a la palpable evidencia de su irreversible decisión de abrir paso a un golpe. Este hecho sociológico fue el que hizo que el radicalismo del PS, en estrecha alianza con el MIR, encontrara una significativa base social y pudiera ir más allá de su mera retórica, dando lugar a un muy notable fenómeno expresado en el llamado Poder Popular (cordones industriales y otras organizaciones sociales de base articuladas bajo la dirección de los Comandos Comunales, especies de *soviets* a la chilena). El gran tema del Poder Popular fue la creación de un poder

paralelo que fuera capaz de resolver el problema del poder, enfrentando eficientemente el golpe en ciernes. La ortodoxia teórica socialista-mirista dotó a aquél de un molde conceptual coherente, a la par que jugó un rol catalizante de su desarrollo.

La autonomía de este emergente proyecto, que se contraponía a la vía chilena (a la que consideraba inviable ante el hecho de que la derecha no estaba dispuesta a respetar la institucionalidad), se tradujo en una movilización de masas populares que sobrepasó la capacidad de conducción del gobierno y de la UP, de hecho escindida. Movilización que terminó cuestionando el curso negociador del ejecutivo —en particular con el PDC— y su permanente empeño por preservar el orden legal que el adversario no respetaba. En este marco cabe situar las polémicas entre la izquierda gradualista y rupturista de la UP sobre si debía ceñirse estrictamente o sobrepasar el programa de gobierno (en particular en lo referente a la constitución del Área de Propiedad Social), si había que consolidar o avanzar, si se requería apostar a la vía institucional o a la del poder paralelo, etcétera.

Ahora bien, más allá de toda consideración subjetiva, lo cierto fue que el descontrol de masas impulsado por la izquierda rupturista y su sistemática oposición a que el gobierno negociara con el PDC, fue muy útil a una derecha que perseguía la ingobernabilidad como condición del golpe. Era en efecto el marco institucional de los conflictos el que en beneficio de aquélla resultaba de tal modo cuestionado, abriéndose paso a las soluciones de facto. Sin decir nada sobre el efecto producido en los estratos medios que, asustados por el curso de los acontecimientos, tendieron crecientemente a pasarse a la oposición. La retórica ultrarrevolucionaria de la izquierda radical tuvo en este sentido devastadores efectos para el gobierno.

En estas condiciones, la existencia de un centro pragmático capaz de dar un aporte despolarizador a través de su capacidad para llegar a acuerdos moderados con el gobierno era vital para mantener el orden constitucional; pero dadas las características propias de la DC, este tipo de centro no existía. Este partido, por el contrario, polarizaba a través de una desenfrenada carrera con la derecha dirigida a demostrar quién evidenciaba mayor vigor en la lucha en contra de la UP.

No es menos cierto que el rol polarizante del PDC también estaba vinculado al peso específico de sus corrientes internas y en particular a la imposición del liderazgo virtual de Eduardo Frei en detrimento de

los sectores progresistas del partido. En efecto, mientras estos últimos mantuvieron el control, no hubo polarización en el país: la derecha quedó aislada en su inicial repliegue, mientras que a contrapelo se exploraban consensos entre el PDC y el gobierno. El punto de inflexión al respecto se verificó a comienzos de junio de 1971, con el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic por un extraño grupo, desconocido hasta entonces, la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), que luego del crimen desapareció del escenario para no reaparecer nunca más. Fue un asesinato cuidadosamente calculado y planificado –quizás por la CIA– cuyo objeto no era otro que producir la separación entre la UP y la Democracia Cristiana, cuestión que era premisa para la polarización de los conflictos y la confluencia de la unidad opositora AECHC.³⁴ Desde ese momento en adelante –paralelamente al gradual despliegue de una ofensiva del PN y los gremios que alcanzará un punto alto en la marcha de las cacerolas vacías de diciembre– el liderazgo virtual de Eduardo Frei en el partido, apoyado en una base crecientemente enardecida, se fue imponiendo. Así, Frei llegó a constituir un verdadero poder fáctico que minaba la capacidad de acción de la directiva partidaria, todavía en manos progresistas, la que ya perdía su base de sustentación. Tal directiva finalmente no fue capaz de imponer sus términos y llegar a un acuerdo moderado con el ejecutivo; es decir, fracasó en el intento de hacer que el PDC jugara un verdadero rol de centro.

No cabe duda que hizo ciertos esfuerzos al respecto, como los diálogos convocados por Salvador Allende a los que acudió. Cabe subrayar que en ellos el mandatario por lo común manifestó su decisión de hacer concesiones importantes con el fin de llegar a consensos estabilizadores del orden legal. Al respecto destaca su aceptación de las empresas de trabajadores, que eran un punto programático vital para el PDC, y que no figuraban en el programa de la UP. Con este espíritu, en el diálogo de julio de 1972 con la directiva del PDC convocado por el mandatario se llegó a acuerdo en todas las cuestiones fundamentales, quedando sólo

³⁴ En relación a esto último, el informe del Senado de Estados Unidos, *Acciones encubiertas en Chile*, sostiene: “Durante los años de Allende, la Central Intelligence Agency (CIA) trabajó para lograr una oposición unificada. El significado de esta operación puede ser ponderado al ver que los dos principales elementos opuestos al gobierno de la Unidad Popular eran el Partido Nacional, conservador, y el reformista Partido Demócrata Cristiano, muchos de cuyos miembros habían apoyado las principales políticas del nuevo gobierno”.

tres puntos pendientes. Pero las presiones del sector freísta de la colectividad obligaron a la directiva a retirarse de las conversaciones con el pretexto baladí de que se había vencido el plazo fijado para llevarlas a cabo.³⁵ Desde entonces el curso polarizador del PDC se intensificó. La participación en el paro de octubre de ese año fue una clara manifestación de ello; paro cuya finalidad era servir de marco al golpe.

En mayo de 1973 el sector freísta de la democracia cristiana controló totalmente la dirección de la colectividad a través de la presidencia de Patricio Aylwin. A fines de junio, luego del “tanquetazo”,³⁶ la directiva de Aylwin, materializando los criterios de Eduardo Frei y apoyando las movilizaciones gremiales y de camioneros, comenzó a orientarse abiertamente a poner fin al gobierno por la vía de su copamiento interno por los militares, los que debían asumir cargos ministeriales desplazando a la UP del gabinete. Luego, simplemente, apoyó el golpe abierto, considerándolo necesario e inevitable, con la esperanza de que la dictadura resultante los llamaría en breve tiempo al gobierno.³⁷

Todo lo anterior se verificaba sobre el trasfondo de las acciones encubiertas que el gobierno estadounidense llevaba a cabo a través de la CIA, financiando a todos los grupos contrarios a la UP y sus actividades desestabilizadoras, así como también infiltrando a los núcleos militares que tempranamente preparaban el golpe. Sobre esto último, el “informe Church” señala que luego del fracaso de Track I y Track II, ocurrido en octubre de 1970, la CIA volvió a montar su red y se mantuvo en estrecho contacto con oficiales militares chilenos. “En septiembre de 1971 –dice– la oficina [de la CIA en Santiago] recibía informes diarios de nuevas conspiraciones golpistas.” El mismo informe señala que “durante todo el transcurso de la administración de Allende, Estados Unidos mantuvo contacto estrecho con las fuerzas armadas chilenas, a través de la CIA y los agregados militares”.

³⁵ Véase la detallada información que proporciona sobre estas conversaciones Valenzuela en *El quiebre de la democracia en Chile, op. cit.*, p. 208.

³⁶ El “tanquetazo” tuvo lugar el 29 de junio de 1973. Sorpresivamente algunos tanques adscritos a unidades motorizadas del ejército salieron de sus cuarteles y se ubicaron en el centro de Santiago. El comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, dirigió personalmente las operaciones para enfrentar la rebelión, que produjo algunos muertos. A fines de la mañana de ese día, el movimiento fue derrotado y sus autores castigados. (Nota del compilador.)

³⁷ Para antecedentes sobre la adhesión de Eduardo Frei a una solución golpista, véase Cristian Gazmuri, *Eduardo Frei y su época*, Santiago, Ed. Aconcagua, 2000, p. 856.

Esto pone en evidencia que la actividad conspirativa dirigida a organizar un golpe de Estado por los miembros de las fuerzas armadas fue muy anterior a la crisis del sistema político, a la extrema polarización del escenario y a la deslegitimación del marco institucional de los conflictos; es decir, fue previa a las condiciones en nombre de las cuales los uniformados golpistas intentaron con posterioridad al 11 de septiembre legitimar su acción.

El presidente Allende, sobrepasado por la política de ingobernabilidad de la derecha y por el rupturismo de la extrema izquierda (y las acciones del gobierno estadounidense a través de la CIA), no pudo neutralizar todos los factores adversos que se le oponían; más aún ante la inexistencia de un verdadero centro. Lo mismo puede decirse del PC, principal partido del polo gradualista e institucional de la UP. La capacidad de interpelación de este partido ante el sector progresista del PDC se veía disminuida en parte por cuanto poseía ciertas rigideces ideológicas que no le permitieron extraer las consecuencias teóricas de su práctica democrática, gradualista e institucional, proyectándola explícitamente hacia un modelo de socialismo conceptualmente nuevo, distinto al existente, como lo intuyera Salvador Allende. Su admiración acrítica al socialismo real también operaba en el mismo sentido, mellando así sus permanentes esfuerzos por aislar al rupturismo opositor, sus intentos por llegar a algún tipo de acuerdo con la oposición no golpista, y sus esfuerzos por despolarizar el escenario político. Todas estas cuestiones fueron reiteradamente intentadas por el PC, paralelamente a su lucha contra la extrema izquierda con el objeto de que el programa de gobierno no fuera sobrepasado. Pero finalmente no obtuvo éxito.

La resultante de todo fue, pues, una dramática conjunción de factores que entre 1970 y 1973 harían colapsar el régimen constitucional, finalmente polarizado al máximo, consiguiéndose así las metas perseguidas por la derecha, el gran empresariado y Estados Unidos. Y cuando el golpe llegó, precedido de una ofensiva final que incluyó la generalización del terrorismo por el Frente Nacionalista Patria y Libertad,³⁸ fue aquélla la principal beneficiada. Desde ya fue su proyecto global el que la dictadura militar llevó a cabo.

³⁸ En relación con el terrorismo desatado que precedió al golpe, Roberto Thieme, jefe operativo de Patria y Libertad, sostiene que ellos llevaron a cabo tales acciones por encargo de los militares golpistas, quienes les proporcionaron la logística: “cuando se generó el plan para derrocar a la Unidad Popular —relata Thieme— las Fuerzas Armadas

CONCLUSIONES

En resumen, el derrumbe institucional del 11 de septiembre de 1973 no se comprende sin el cambio de identidad política e ideológica de la derecha analizado al comienzo de este trabajo, ni sin la enorme intervención estadounidense ordenada por Richard Nixon; tampoco sin la decisión golpista de las organizaciones del gran empresariado. Cada uno de estos actores, en efecto, con antelación en algunos casos, había vinculado sus intereses fundamentales al establecimiento de un régimen autoritario y al desplome del sistema institucional vigente, cualquiera fuese lo que el gobierno de la UP hiciese o dejase de hacer. En este sentido, la extrema polarización en la que terminó sumiéndose el país no fue la causa última de dicho derrumbe, sino uno de los medios —quizás el principal— que aquellos actores utilizaron con el fin de conseguir sus propósitos. Sin perjuicio de ello, no es menos cierto que coyunturalmente hubo otros elementos concomitantes en el desenlace del drama.

Se podría sostener que dichos elementos concomitantes fueron al menos los siguientes: 1) la gran habilidad táctica del PN, que no sólo orientó a su base social en una perspectiva desestabilizante y deslegitimadora del marco institucional de los conflictos, sino que también intentó sumar a las fuerzas sociales en que se apoyaba el PDC en esa misma dirección, pretendiendo exitosamente a la par instrumentalizar a este partido; 2) el considerable peso que a su vez las fuerzas rupturistas alcanzaron en la izquierda (en el llamado Polo Revolucionario), que al igual que las de la derecha, impulsaban una política que contribuía a deslegitimar el marco institucional de los conflictos, negándose a toda solución de compromiso; con lo cual, por lo demás, impedían todo acuerdo de la UP con el centro, como el que perseguía el presidente Allende y la izquierda gradualista e institucional; 3) la inexistencia de un centro pragmático capaz de dar a través de un acuerdo moderado con el gobierno una contribución significativa a la despolarización del

nos contactaron para que diéramos apoyo operacional para paralizar el país y crear las condiciones para el golpe”. Más adelante agrega: “fuimos contactados por un sector de una de las ramas de las Fuerzas Armadas para contribuir al golpe, en términos de cortar vías de transporte, energía y comunicaciones, y recibimos de las instituciones castrenses el apoyo logístico para esa misión”. *Ercilla*, núm. 3 134, abril de 2000, pp. 33-34.

cuadro político; en su lugar existía un centro ideologizado, antialiancista y con fuerte vocación de poder (el PDC) que a su modo contribuyó a polarizar el escenario nacional; proceso que desembocó en el golpe.³⁹ A estos factores quizás podría agregarse la carencia de una elaboración teórica de la vía chilena, orientada hacia un socialismo conceptualmente nuevo, por la izquierda; socialismo claramente distinguible del socialismo real, y por lo tanto ajeno a los anticuerpos que éste necesariamente generaba entre amplios sectores.

A la larga, en fin, todo terminó beneficiando al rupturismo del PN haciendo posible su salida política (y por cierto, beneficiando también los planes estadounidenses y del gran empresariado local). Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por los discursos legitimantes de los triunfadores de entonces, ese desenlace no fue en modo alguno fatal ni necesario. A la inversa de lo sostenido por aquellos durante treinta años, hasta septiembre de 1973 las vías democráticas siempre permanecieron abiertas. Si, no obstante, no fueron utilizadas, se debió a la falta de voluntad de ciertos actores que como la derecha misma con mucha antelación, y el sector del PDC encabezado por Eduardo Frei en hora posterior y Estados Unidos, habían hecho su apuesta a la clausura del régimen democrático. Fuese con la finalidad de abrir paso a un proyecto refundacional, como ocurriera en el caso de la primera; una dictadura transitoria que les permitiera retomar el poder en corto plazo, como fuera el caso del segundo, o salvaguardar sus intereses geopolíticos, como ocurriera con Estados Unidos.

Pareciera que el rol de Salvador Allende en esa particular coyuntura histórica fue dual: en lo externo encarnó la defensa última de la soberanía nacional frente a la intervención estadounidense, intervención que como hemos visto se orientó a utilizar a la oposición de la época, y también a las fuerzas armadas chilenas como meros peones de su estrategia, y en lo interno, se constituyó en el principal defensor de las tradiciones democráticas del país, haciendo igualmente resaltar con su muerte la esencial dignidad del cargo de presidente de la república.⁴⁰

³⁹ L. Corvalán Márquez, *Los partidos políticos...*, op. cit., p. 384.

⁴⁰ Un episodio poco conocido, quizás algo anecdótico, puede dar cuenta de la dignidad que Salvador Allende confería al cargo presidencial. Según relata Osvaldo Puccio, su secretario privado, el 11 de septiembre en la mañana, a través del general Badiola, el general Pinochet envió un ultimátum al mandatario: “rendición incondicional –señaló Badiola– [y] que el presidente fuera a hablar con Pinochet al Ministerio de Defensa”.

BIBLIOGRAFÍA

- Allamand, Andrés, *La travesía del desierto*, Santiago, Ed. Aguilar, 1999.
- Allende, Salvador, “Primer Mensaje ante el Congreso Pleno”, en *Las grandes alamedas*, Bogotá, s.e., septiembre, 1983.
- Comité Central del Partido Socialista, Documento de marzo de 1974, mimeografiado.
- Corvalán Lepe, Luis, *24 horas. El PC chileno por fuera y por dentro*, Santiago, Ed. Quimantú, 1972.
- _____, *Tres periodos de nuestra línea revolucionaria*, Berlín, s.e., 1982.
- Corvalán Márquez, Luis, *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre. Contribución al estudio del contexto histórico*, Santiago, Cesoc, 2000.
- _____, *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Santiago, Ed. Sudamericana, 2002.
- Gazmuri, Cristian, *Eduardo Frei y su época*, Santiago, Ed. Aconcagua, 2000.
- Góngora, Mario, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*, Santiago, Ed. La Ciudad, 1981.
- González, Mónica, *Chile, la Conjura, los mil y un días del golpe*, Santiago, Ediciones B, 2000.
- Hersh, Seymour M., *The price of power: Kissinger in the Nixon White House*, Nueva York, Summit, 1983, citado en Patricia Verdugo, *Allende: cómo la Casa Blanca provocó su muerte*, Santiago, Ed. Catalonia, 2003.
- Partido Nacional, *La nueva república: respuesta al desafío de Chile*, s.p.i.
- Prats, Carlos, *Memorias. Testimonio de un soldado*, Santiago, Ed. Pehuén, 1987.
- Puccio, Osvaldo, *Un cuarto de siglo con Allende. Recuerdos de su secretario privado*, Santiago, Ed. Emisión, 1985.
- Sabrovsky, Eduardo, *Hegemonía y racionalidad política*, Santiago, Ed. Ornitórrinco, 1988.
- Senado de Estados Unidos, “Acciones encubiertas en Chile. 1963-1973”, en *Intervención norteamericana en Chile: dos textos clave*, compilación y traducción de Cristian Opaso, Santiago, Editorial Sudamericana, 2001.
- Valenzuela, Arturo, *El quiebre de la democracia en Chile*, Santiago, Flasco, 1989.

En respuesta, relata Puccio, receptor del mensaje, “el presidente me encargó transmitir lo siguiente: un presidente de Chile no se rinde, y recibe en La Moneda. Si Pinochet quiere que vaya al Ministerio de Defensa, que no sea maricón y que venga a buscarme personalmente”. O. Puccio, *Un cuarto de siglo con Allende. Recuerdos de su secretario privado*, Santiago, Ed. Emisión, 1985, p. 288.

EL SISTEMA POLÍTICO CHILENO 1932-1973: REPRESENTACIÓN LIMITADA Y RAZONES ESTRUCTURALES DE SU FRACTURA

Jaime Osorio*

INTRODUCCIÓN

En la primera parte de este trabajo buscaré poner de manifiesto las limitaciones en materia de representación del sistema político chileno. El asunto es de importancia porque uno de los imaginarios construidos tanto en las clases dominantes como en los sectores dominados era la capacidad de ese sistema de expresar los intereses de una sociedad cada vez más pluralista y diversificada.

En la segunda parte me abocaré a señalar algunos factores estructurales que llevaron a diversas clases y fracciones a cuestionar las bases del modelo económico y el sistema de alianzas sociales y políticas en que se sustentaban los acuerdos que daban vida al sistema democrático. Desde esta perspectiva, y sin menoscabo de las acciones y decisiones de los sujetos sociales, queda de manifiesto que tanto desde sectores de las clases dominantes como desde el campo de las clases dominadas, este sistema político estaba llamado a sufrir serias readequaciones.

¿Qué tan representativo era el sistema político chileno entre 1932 y 1970?

En una rápida enumeración pueden destacarse los siguientes elementos para responder a esta interrogante:

1. La legislación sindical limitaba al grueso de la población obrera a conformar sindicatos. Para fines de los años sesenta, sólo alrededor de

* Doctor en Sociología por El Colegio de México. Profesor del Departamento de Relaciones Sociales UAM-Xochimilco. Autor de *Raíces de la democracia en Chile, 1850-1970*, México, Editorial Era, 1990; *Fundamentos del análisis social: la realidad social y su conocimiento*, México, FCE, 2001, y *Las dos caras del espejo*, México, Triana, 1995.

13% de los trabajadores estaba afiliado a alguna organización sindical, al contar con 25 o más afiliados por industria; en contraparte, más de 85% estaba impedido de hacerlo.

2. El partido que históricamente representaba a esa franja obrera sindicalizada, el Partido Comunista, concentraba justamente el grueso de su votación en los grandes centros mineros del carbón y del cobre, y en los núcleos urbanos industriales.

3. La mayoría del proletariado chileno, asentado en medianas y pequeñas industrias, no contaba con representación sindical y se representaba políticamente de forma inestable, fluctuando entre variados institutos políticos según las coyunturas electorales.

4. El campesinado sólo pudo comenzar a organizarse sindicalmente en los años sesenta del siglo XX, agrupando en todo caso a un porcentaje muy bajo de su población total. Este dato no es insignificante en el cuadro de un sistema político que se presentaba y se legitimaba por su supuesta elevada representatividad. Políticamente, por otra parte, el campesinado fue, hasta entrada la segunda mitad del siglo XX, masa de maniobra de la oligarquía terrateniente y de la burguesía agrícola, siendo en las zonas rurales en donde estos partidos alcanzaban tendencialmente elevadas votaciones. La disputa que inicia el Partido Demócrata Cristiano (PDC) por esta población, apoyado en el proceso de reforma agraria, así como la organización de los “marginales”, pronto se derrumbará, ante las limitaciones del proceso de reparto de tierras y de las políticas asistencialistas, dejando al campesinado y a los “marginales” como masa disponible para proyectos políticos diversos.

5. El sistema electoral chileno permitía una sobrerrepresentación de la oligarquía agraria, la que mantuvo un peso en la política chilena entre 1940 y 1970 que no se compadecía con la declinación del sector rural en la economía del país.

6. La pequeña burguesía, desde la década de los años treinta, y con mayor claridad desde los años cuarenta, alcanzó en el sistema político peso significativo, al constituirse en la clase política por excelencia y la que aseguraba los equilibrios dentro de un sistema con entramado legal e institucional que esta clase —vía sus cuadros políticos y sus organizaciones— llegó a controlar a la perfección. Era la clase que concitaba consensos e impedía soluciones radicales de cualquier signo en el periodo, haciéndose fuerte como administradora del aparato estatal, en un cuadro inicial de una burguesía industrial

débil, de un proyecto que deslegitimó a los núcleos agrarios y mineros exportadores, de una reducida franja del proletariado organizado, pero de manera autónoma, y de un campesinado desorganizado y sin representaciones propias.

7. Este papel mediatizador de la pequeña burguesía se modificará en los años sesenta y a comienzos de los setenta del siglo XX, al verse afectada en sus posiciones económicas, así como al ponerse de manifiesto la inflexibilidad tanto del sistema económico como del político para responder a las demandas de viejos y nuevos sectores populares. Esto propiciará un proceso de creciente autonomía política de diversas franjas de estos sectores sociales, frente a los proyectos de los sectores dominantes, así como a su radicalización. Esta tendencia está en la base de la emergencia de fuerzas como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y posteriormente la Izquierda Cristiana; estas dos últimas adscritas a la alianza de la Unidad Popular.

8. Una conclusión preliminar, con lo hasta aquí señalado, permite observar que el sistema político chileno dejaba sin representación a clases y franjas sociales importantes, favoreciendo por otro lado la sobrerrepresentación oligárquica y de las franjas pequeñoburguesas administradoras del Estado.

9. La burguesía en su conjunto fue la clase que encontró en el sistema político las mejores condiciones de representación política, sea de la mano del Partido Radical (PR) en una primera etapa, complementándose con el Partido Liberal (PL) posteriormente, y del PDC en los años sesenta, en medio de organizaciones políticas que alcanzaron una base social pluriclasista.

Este apretado recuento pone de manifiesto las debilidades en materia de representación de un sistema político que se legitimaba con un discurso que acentuaba la idea de contar con elevada capacidad representativa. El peso ideológico de ese discurso idealizaba una realidad que caminaba con fuertes debilidades en ese terreno.

Los desequilibrios políticos alcanzados sobre tan precarias condiciones comenzarán a derrumbarse en los años sesenta, ante los cambios económicos y sociales que se producen en la sociedad chilena en esos años, así como debido a la caída del crecimiento económico; todo lo cual tendrá fuertes repercusiones en el campo político. De esos cambios pasaremos a ocuparnos en el punto siguiente.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA,
Y CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO

La hipótesis central que nos guía en esta parte indica que las dos décadas previas a la elección y entronización en la presidencia de Salvador Allende constituyen un periodo de significativas transformaciones en las estructuras económica y social de Chile, las que agudizaron las limitaciones presentes en el sistema de representación y propiciaron serias fracturas en las alianzas sociales y políticas que daban sustento al sistema político. Veamos algunos indicadores de estos cambios.

En la primera mitad de los años sesenta el capitalismo chileno vive un periodo excepcional. La tasa de crecimiento del PIB se eleva en forma constante, por encima de periodos anteriores: pasa de 2.6% en 1957 a 7% en 1966, manteniendo cifras altas en el periodo intermedio.¹

La tasa de inversión también presenta niveles excepcionales en esos años. De un promedio inferior a 13% en los años cuarenta, y de 14% en los cincuenta, se eleva a 15.5% en 1960, superando 16% entre 1961 y 1963, para descender manteniéndose sin embargo por arriba de 14% desde 1966 a 1970.

Este dinamismo del PIB y de la inversión era una expresión del cambio en el modelo de desarrollo en la economía chilena, que de una industrialización restringida, concentrada en ramas y sectores de consumo inmediato, se movía para alcanzar un proyecto industrial diversificado, con el desarrollo de sectores de bienes intermedios y bienes de capital en menor medida, y de ramas de consumo suntuario.

Entre 1957 y 1967 las ramas de bienes de consumo tradicional bajan su participación en la producción industrial global de cerca de 50 a 34.6%. Sin embargo, en igual periodo las ramas de bienes intermedios y las industrias de bienes de consumo durable ascienden de 40.4 a 43.8% y de 9.9 a 21.5 %, respectivamente.

La tasa de crecimiento del valor agregado pone de manifiesto a su vez el dinamismo desigual entre estos sectores. Los bienes de consumo tradicional sólo crecen 3.3% entre 1960 y 1967, en tanto los bienes intermedios lo hacen 6.6% y las industrias de bienes de consumo durable avanzan a 13.4 por ciento.

¹ J. Osorio, *Raíces de la democracia...*, *op. cit.*

Tenemos así el fortalecimiento de un nuevo sector industrial, que daba vida a su vez a una nueva fracción burguesa industrial, monopólica, ligada más a ramas de bienes intermedios, de bienes de capital y ramas de consumo durable. Es una nueva fracción con asociación más estrecha al capital extranjero, particularmente estadounidense.

Desde mediados de los años sesenta el monto total de las inversiones extranjeras tiende a crecer, con fuerte peso en la minería, pero también desde esa fecha con un giro significativo hacia la industria y las ramas dinámicas antes mencionadas. De 3.8% de participación en el sector manufacturero en 1964, las inversiones directas de Estados Unidos en ese sector se elevan a 7.2% en 1968.²

No es desdeñable, en la línea que venimos argumentando, el crecimiento de la demanda interna de cobre, una de las materias primas para las ramas de bienes intermedios, de bienes de capital y de consumo perdurable. Según un estudio de French-Davis y Tironi, el insumo nacional sobre la producción de la gran minería del cobre se eleva por encima de 60% a partir del periodo 1961-1963, llegando a 67.5% entre 1967 y 1969.³

La emergencia de un nuevo modelo de industrialización, más volcado hacia el exterior (de allí los esfuerzos de fortalecer el Pacto Andino del gobierno de Eduardo Frei padre) y hacia el mercado de las capas sociales de mayor poder de consumo, tiene su correlato en el descenso del poder adquisitivo de los sectores sociales obreros y de la pequeña burguesía asalariada.

Las remuneraciones al trabajo en el sector manufacturero descienden de 46.7% en 1950 a 42.2% en 1960, para derrumbarse a 36.5% en 1968.

Los salarios en la industria manifiestan con mayor claridad esta situación: de 31.7% del total de ingresos manufactureros en 1950, descienden a 18.5% en 1968.

La entrada en escena de la nueva fracción burguesa industrial fue así fuertemente disruptiva en materia de las alianzas y compromisos

² La deuda externa, de la mano de los créditos al sector público y al privado —más al primero que al segundo— se eleva de 598 millones de dólares en 1960 a 2 765 millones de dólares en 1969, permitiendo que la inversión pública en infraestructura suba entre 1962 y 1966 a porcentajes superiores que la dinámica promedio de participación del Estado en la inversión geográfica bruta en capital fijo.

³ R. French-Davis y E. Tironi, *El cobre en el desarrollo nacional*, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1974.

que las clases dominantes habían mantenido frente a las franjas sociales asalariadas urbanas en las décadas previas. El ascenso económico y político de estos sectores provocaría fracturas no sólo en el campo de las clases asalariadas; la fracción burguesa más tradicional resentirá cada vez más la reducción del mercado interno de los asalariados (obreros y pequeña burguesía), la discriminación que sufre en materia de empréstitos, y en general la falta de apoyo del Estado, con que habían contado hasta la fecha.

Pero hay más. La nueva fracción burguesa monopólica, estrechamente aliada al capital extranjero, también propició rupturas con la oligarquía terrateniente, la cual a pesar de su decadencia económica que venía desde décadas atrás, había logrado resguardar sus intereses económicos. La reforma agraria impulsada por el gobierno de Frei fue el arma principal en este terreno, ante la necesidad de incrementar el monto de bienes de consumo y abaratar la fuerza de trabajo, así como de elevar el monto de materias primas agrícolas. Entre 1965 y 1969 se expropiaron 1 120 predios con un total de 2 000 620 000 hectáreas. Esto no podía sino enardecer a un sector terrateniente, generalmente ausentista, lo que unido al malestar de la fracción industrial más tradicional, traerá consecuencias políticas a la hora de buscar explicaciones acerca de las profundas divisiones en el seno de las clases dominantes para las elecciones de 1970.

Pero la reforma agraria y la nueva ley de sindicalización campesina pondrán en movimiento a su vez a los campesinos, clase mayoritariamente desorganizada y que en muy corto plazo romperá los vínculos que estableció con el PDC, quedando disponible para diferentes proyectos de representación y de movilización política. De sólo 10 647 campesinos afiliados a sindicatos en 1966, la cifra se elevó a 114 112 en 1970, en tanto las huelgas (legales o ilegales) de obreros agrícolas se elevan de 3 en 1960 a 1 580 en 1970.

El desarrollo de las nuevas ramas industriales ligadas a la producción dinámica propiciará el surgimiento de nuevas capas obreras. Tan sólo en seis años —entre 1960 y 1966— el monto de trabajadores en la industria creció en 164 500 personas, cifra superior a todo el crecimiento de la población industrial en el lapso de los veinte años que van de 1940 a 1960. Este nuevo proletariado industrial, tendencialmente concentrado en lo que se conocerá como “cordones industriales”, tendrá significativa importancia en los conflictos que conocerá la sociedad chilena en los años posteriores.

La nueva capa del proletariado chileno contó, sin embargo, con ventajas potenciales en materia de representación sindical. Al ubicarse en medianas y grandes industrias podía romper con las limitaciones que la legislación planteaba en la materia.

La tasa de cesantía pasó en Chile de 4.9% en 1955 a 7.1% en 1960, descendiendo levemente en los primeros años del gobierno de Frei, para volver a elevarse a 6% en 1970. Pero si se considera el total de la desocupación, sumando el subempleo, tenemos que la tasa global de desocupación para 1967 se eleva a 15%. Estas cifras nos dan una aproximación a la emergencia de un nuevo sector social en la sociedad chilena: los pobres de la ciudad y del campo, los que agrupados en las ciudades dieron vida a las poblaciones callampas (o villas miserias o “marginados” en el lenguaje sociológico utilizado en los años sesenta).

Para 1952, el total de habitantes en las poblaciones callampas era de 174 256 personas, las que se duplican para 1960, pasando a 375 915 personas. Este nuevo sector social, que inicialmente intentó ser captado por políticas asistencialistas del PDC, pronto se encontrará medianamente huérfano en materia de representación y sin mucho espacio dentro del sistema político chileno. Sus duras condiciones de vida y el creciente peso en materia de representación de organizaciones parlamentarias radicales en su discurso, como el PS, o no parlamentarias como el MIR, en medio de un cuadro de ascenso de luchas sociales, los convertirá a poco andar en un sujeto social de significativa importancia en el quehacer político chileno de fines de los años sesenta y de comienzos de los setenta.

También en los años sesenta se presentan procesos de reestructuración social y política de la pequeña burguesía. Con el incremento de los funcionarios públicos, crece también el número de sindicatos profesionales, que de 1 015 sindicatos en el sector privado pasa a 2 718 en 1970, más que duplicando el número de afiliados. Igual tendencia se presenta en el sector público, en donde para este último año son 210 000 los afiliados a sindicatos, de un total de 370 000 trabajadores estatales. El incremento organizativo es incapaz, sin embargo, de detener el drástico descenso del sueldo vital, que de un índice de 100 para 1950 cae a 81.5 en 1961. La pequeña burguesía asalariada chilena asiste en los años sesenta a un significativo descenso en sus condiciones de existencia.

A ello debe agregarse el incremento de la matrícula de estudios medios y superiores en los años sesenta, y el aumento de las importan-

tes luchas del movimiento estudiantil por reformas universitarias en las principales universidades de Santiago y de otras ciudades importantes del país.

Este conjunto de factores propiciará movimientos de creciente autonomía política de la pequeña burguesía —en el cuadro de una creciente polarización social y política— que se encuentran en la base de la emergencia de nuevas fuerzas en la escena política chilena, como hemos señalado en la primera parte de este trabajo.

La emergencia de nuevos sectores sociales, en un cuadro de descenso del crecimiento económico en los tres últimos años de la gestión de Frei, propiciaron el incremento de los conflictos sociales, ante demandas clasistas definidas.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Tanto desde el campo de las clases dominantes —particularmente en el proyecto de la nueva fracción burguesa monopólica y transnacional— como en el campo de las clases dominadas, el sistema político chileno sufría a fines de los años sesenta, y con mayor fuerza en el periodo de la UP, signos de agotamiento. Desde el primer proyecto, ese sistema aparecía sustentándose sobre alianzas sociales y políticas demasiado amplias para llevarse a cabo. Considérese simplemente que para 1963 el porcentaje del gasto en seguridad social en relación con el producto nacional bruto representaba en Chile 11.2%, en tanto para países como México o Uruguay dicho gasto no alcanzaba 3 por ciento.

Para la fracción burguesa monopólica, el sistema político vigente expresaba alianzas sociales y políticas demasiado extensas y onerosas, que dificultaban sus proyectos económicos; por ello, se encaminaba a reformarlo. Bajo cualquier forma, se requería desmovilizar y desorganizar a los sectores populares. El golpe militar le otorgó fuerza suficiente para emprender estas tareas llevándolas al extremo.

Para las clases populares dicho sistema político, por el contrario, se mostraba demasiado estrecho para dar espacio a las nuevas representaciones sindicales, sociales y políticas creadas en el curso de la agudización de los enfrentamientos sociales, y limitado como espacio real de mejoramiento de sus condiciones de vida.

En este cuadro, que polarizó las fuerzas sociales y políticas, lanzando a la democracia cristiana al campo de la derecha y arrancándola de su posición centrista y mediadora en el sistema político, era difícil encontrar un interlocutor de centro. Por ello la idea de una alianza de las fuerzas de la UP con el PDC no tenía viabilidad en este estado de polarización, simplemente porque el interlocutor buscado, el PDC y su dirigencia histórica (Frei, Aylwin y otros), se habían movido hacia las posiciones de quienes buscaban poner fin al gobierno de Allende.

Como ocurre siempre que las luchas sociales alcanzan tales dimensiones, la fuerza iba a ser la partera del nuevo orden. Manifestó la capacidad de la fracción burguesa monopólica para establecer una amplia alianza golpista. En la batalla ideológica desarrollada, la idea de arribar a un sistema comunista que ponía en riesgo la propiedad le permitió a esa fracción la conjunción de las diversas fracciones burguesas, antes enfrentadas, de la oligarquía terrateniente y de capas sociales asalariadas de variado espectro, así como de gremios y partidos políticos “normalmente” institucionales. No debe desconocerse aquí el papel de la propia administración estadounidense y de diversas transnacionales de ese país en el proceso rupturista.

Papel fundamental en esa alianza desempeñan los relevos y cambios que permiten la unificación del alto mando de las fuerzas armadas en la dirección de una salida no institucional al proceso, al otorgar al frente golpista el poder estatal de la violencia concentrada. Ello terminó por cargar la balanza y hacer posible el éxito de la contrarrevolución.

BIBLIOGRAFÍA

- Angell, Alan, *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile*, México, Editorial Era, 1974.
- Aranda, Sergio y Alberto Martínez, “Estructura económica: algunas características fundamentales”, en Aníbal Pinto *et al.*, *Chile hoy*, México, Siglo XXI Editores, 1970.
- Comisión Económica para América Latina (Cepal), “Indicadores del desarrollo económico y social en América Latina”, *Cuadernos Estadísticos de la Cepal*, Santiago, 1976.
- Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), *Geografía económica de Chile*, Santiago, 1967.

- French-Davis, Ricardo y Ernesto Tironi, *El cobre en el desarrollo nacional*, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1974.
- Instituto de Economía de la Universidad de Chile, *Desarrollo económico de Chile, 1940-1956*, Santiago, Editorial Universitaria, 1956.
- Jobet, Julio César, *Ensayo crítico del desarrollo económico de Chile*, México, Centro de Estudios del Movimiento Obrero Salvador Allende, Casa de Chile, 1982.
- Marini, Ruy Mauro, *El reformismo y la contrarrevolución*, México, Editorial Era, 1976.
- Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), *Antecedentes sobre el desarrollo chileno, 1960-1970*, Santiago, s.f.
- Osorio, Jaime, *Raíces de la democracia en Chile*, México, Editorial Era y UAM-Xochimilco, 1990.
- Petras, James, *Política y fuerzas sociales en el desarrollo chileno*, Buenos Aires, Editorial Amorrortu, 1971.
- Pinto, Aníbal, *Chile, una economía difícil*, México, Fondo de Cultura Económica, 1964.
- _____, *Chile, un caso de desarrollo frustrado*, Santiago, Editorial Universitaria, 1973.

CUARTA PARTE
LA VÍA CHILENA AL SOCIALISMO

LUCHA SINDICAL EN LA MINERÍA DEL COBRE (1964-1973)

Oswaldo Tello Gómez*

Soy Oswaldo Tello Gómez. Nací un 27 de mayo de 1932 en la oficina salitrera Coya Sur, en el Norte Grande, donde se encuentra la región más seca e inhóspita del mundo, el desierto de Atacama. Mis padres fueron Alejandro y Ana; ambos originarios de un poco más al sur, en zona del Norte Chico, hoy la cuarta región. Sólo estudié hasta sexto básico, el resto de mi formación fue totalmente autodidacta. Comencé a trabajar a los siete años como lustrabotas en la oficina salitrera de María Elena. El 8 de febrero de 1947, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, entré a trabajar en la compañía Anglo Lautaro, en María Elena, como mensajero; con el tiempo me ascendieron a empleado. En 1961 ingresé como operario en la compañía Chilex Exploration Company, en el mineral de Chuquicamata.

Así, mi primera experiencia laboral fue en el salitre, experiencia que a la vez determinó mi conocimiento de la lucha sindical. Me crié en asambleas sindicales, donde acudía con mi caja a lustrar zapatos, pues la gran concurrencia de personas en esas reuniones me permitía ganar algo de dinero. Allí aprendí lo que era la conciencia de clase y a defender y ampliar los derechos de los trabajadores, sin compromisos con la empresa, pero sí con los obreros.

* Nació en la oficina salitrera de Coya Sur, Chile, en 1932. Fue regidor de la municipalidad de Calama entre 1967 y 1973. Entre 1966 y 1970 fue director del sindicato industrial de Chuquicamata, y entre 1968 y 1969, miembro del consejo de administración de la Corporación del Cobre (durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva). Entre 1970 y 1973 fue presidente del sindicato industrial de Chuquicamata, desde febrero de 1970 hasta el 30 de septiembre de 1973). De 1971 a 1972 fue miembro del consejo de administración de la Compañía de Cobre Chuquicamata, y entre 1970 y 1973 fue miembro del Consejo Nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC). Entre el 2000 y 2001 fue dirigente del sindicato 2 del Centro de Trabajo de Antofagasta, Codelco-División Chuquicamata.

Mi vida como dirigente sindical comenzó en el sindicato industrial de la compañía Chilex Exploration Company. Por entonces –junio o julio de 1966– estalló una huelga en la Gran Minería del Cobre que desembocó en un hecho lamentable en el mineral de cobre El Salvador. Allí, fueron detenidos los dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores del Cobre que militaban en los partidos obreros; es decir, el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC); además resultaron muertos dos trabajadores. Para protestar por los sucesos, hicimos una huelga que se inició con una marcha desde la Fundición de Concentrados hasta la puerta principal por la que se ingresaba a las plantas y a la mina; ahí nos esperaba un contingente militar al mando del coronel Roberto Viaux Marambio. A algunos de nosotros nos devolvieron a la fundición a trabajar; a los que veníamos de terminar el turno de noche-ro, nos detuvieron y nos enviaron a la comisaría para verificar nuestra situación de trabajo; luego nos dejaron en libertad.

Por estas medidas represivas paramos la fundición durante cinco días, aunque nadie más nos siguió con el paro. Sin embargo, el movimiento nos permitió cosechar algunos frutos; en septiembre de 1966 la organización de los trabajadores debió efectuar elecciones complementarias para llenar los cargos de tres dirigentes; resultaron electos dos militantes del PS y uno del PC. Fui electo en ese cargo con la más alta mayoría de votos.

En ese cargo adquirí mucha experiencia y una visión propia del movimiento sindical del cobre. Consideraba, por ejemplo, un abuso que un trabajador llegara a cumplir con su horario a las 8:00 horas y antes de empezar el turno lo devolvieran para la casa, para regresar al segundo o tercer turno, con todo el problema que esto significaba: falta de personal en las cuadrillas, hornos, convertidores, etc. Además, faltaba locomoción, comedores, casa de cambio, clasificaciones de trabajo, políticas de ascenso, y por supuesto ropa de trabajo y de seguridad, por tratarse de una faena del alto riesgo laboral.

Pero lo anterior redundaba en que el movimiento sindical en Chuquicamata fuera muy reivindicativo en lo económico, y a la vez determinaba que se dejara un poco de lado lo social, habitacional, salud, entretención; sobre todo la habitación fuera del mineral, en la ciudad de Calama.

Para solucionar esto preparamos una asamblea con los trabajadores de la fundición. Menciono esta sección en especial porque, además de

lo que ya describí, era un lugar inhumano para trabajar debido a la alta contaminación. Para conseguir nuestros objetivos preparamos un petitorio y lo conversamos con la empresa. Debido a que teníamos un perfecto conocimiento de causa, logramos hacer una buena exposición. Personalmente, el haber trabajado en todas las secciones me permitió conocer en detalle todos y cada uno de los problemas; pero como era operario y además comunista tenía fama de agitador; me cambiaban de turno y de sección con el fin de aburrirme, pero no lo lograron. Uno de los logros que conseguimos fue que cuando se devolvía a un trabajador por cambio de turno, se le pagaba un turno más; además logramos que se aumentaran las cuadrillas y los equipos de trabajo y seguridad.

En el siguiente pliego de peticiones logramos el primer médico especialista, un oculista, y en cada pliego futuro fuimos logrando, uno a uno, otro especialista más; así llegamos a tener todas las especialidades.

En 1966 el gobierno del demócratacristiano Eduardo Frei (1964-1970) inició el proceso que se conoció como la “chilenización del cobre”. Consistía —como se la llamó— en una “nacionalización pactada”; es decir, el Estado chileno logró el control de 51% de las acciones de la compañía; el resto permaneció en manos de capitales estadounidenses. Pero la administración y el control de la mina siguió en manos extranjeras.

Mientras, los objetivos reivindicativos de los trabajadores del cobre seguían conquistando terreno. En 1968-1969 realizamos una elección de carácter nacional; en ella logramos que los trabajadores eligieran en votación directa y secreta a un representante de los obreros y otro de los empleados para que acudieran ante la Corporación del Cobre. Esto se logró mediante la modificación de la ley durante el gobierno de Frei. Hasta entonces lo había designado la Confederación de Trabajadores del Cobre, y siempre el cargo recaía en el presidente de ésta. Fui el primer director elegido para representar a los obreros con derecho a voz y voto por dos años, es decir, el periodo de 1968 a 1969.

Otro de los logros importantes fue la construcción de la primera villa en Calama (Villa Ayquina) a un costo muy ínfimo para los trabajadores; se construyó con 5% de la entrada del cobre. Luego se construyó el Club Obrero; los empleados ya tenían su club, los supervisores también, ¿y los obreros? Era una muestra más de la discriminación social hacia los trabajadores.

Pero no todo fue alegre en esos años. En septiembre de 1967 ocurrió un grave accidente en la mina, una explosión en la que fallecieron unos 20 trabajadores. Lo primero que se planteó a la empresa Chilex Exploration Company fue la solución al problema social que se creaba a la familia y una investigación del hecho; una vez más ganamos la lucha, se contrató como trabajadoras a las viudas y el senador Víctor Contreras Tapia presentó un proyecto de ley para que el Estado entregara una casa a cada viuda; se convirtió en ley y les entregaron sus casas. Sobre la investigación, como ocurría y ocurre en la mayoría de estos casos, se dijo que fue resultado del descuido de un trabajador en la operación.

Como decía, con la chilenización del cobre no hubo mayores cambios en los ejecutivos de Chuquicamata, cargos que, en general siguieron ocupados por extranjeros. El gerente general siguió siendo Whitcon, y el superintendente de la mina, Phan; no recuerdo bien el nombre de quien dirigía la fundición, pero también era gringo; o sea que toda la plana de ejecutivos era estadounidense, hasta el tercer nivel de mando. Sólo los mandos medios eran chilenos. Si Chile tenía 51%, lo lógico era que algunos ejecutivos fuesen técnicos chilenos; esto quería decir que ni el propio gobierno tenía confianza en nuestro elemento humano.

Entonces los ejecutivos estadounidenses desarrollaron cierta estrategia. Comenzaron a “florear” la mina para llevarse rápido el mineral de mejor ley. Pero la maniobra produjo una grieta en la mina (asentamiento), lo cual era muy peligroso para la seguridad de los trabajadores. Como dirigente hice la denuncia ante el Directorio de la Corporación del Cobre (Codelco), que asumió el control de las empresas productoras de cobre del sector estatal, y posteriormente las directivas sindicales en conjunto hicimos lo mismo ante el ministro de Minería, Alejandro Hales. Se tomaron las medidas del caso y así evitamos un accidente de proporciones insospechadas.

LAS EXPECTATIVAS QUE GENERÓ EL TRIUNFO DE LA UNIDAD POPULAR

El 4 de septiembre de 1970 la Unidad Popular (UP) ganó las elecciones presidenciales. En el programa del gobierno que Salvador Allende ofreció al pueblo, había un deseo muy anhelado por un gran sector de los trabajadores: la nacionalización del cobre. El proyecto de ley inicial ha-

bía sido presentado por los senadores Elías Laferte y Salvador Ocampo, que representaban a las regiones del Norte Grande; esto es, Tarapacá y Antofagasta —hoy primera y segunda regiones—. Esta reivindicación implicó que durante años los trabajadores del cobre desarrolláramos una lucha constante por medio de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), pues desde su fundación nos planteamos la nacionalización como objetivo fundamental.

En el mineral de Chuquicamata había una dotación de 10 000 trabajadores, entre supervisores, técnicos, empleados y obreros; la propiedad de la industria estaba en manos de la Chilex Exploration Company; es decir, el cobre chileno estaba en manos de capitales estadounidenses. Eran estadounidenses la mina, la concentradora, la fundición de concentrado, las refinerías, la fundición de cobre, el departamento de bienestar, la pulpería (tienda de raya), el hospital, el Campamento Lata y los 3 000 adobes *normac*. Todo.

Bajo este sistema administrativo toda lucha por un beneficio social para mejorar la calidad de vida del trabajador era larga y se lograba después de prolongadas conversaciones con los ejecutivos. De todos modos no se conseguía mucho. Las lentas mejoras económicas se lograban a través de pliegos de peticiones que se discutían con la empresa cada 15 meses; eran 45 días de conversaciones; a veces se lograba en 45 días, y en otras oportunidades había que sumar la presión. Cuando las conversaciones fallaban realizábamos paros de faenas, huelgas, así se lograba lo que se necesitaba. De alguna manera le sacábamos dólares a la Chilex Exploration Company y quedaban en Chile, porque los trabajadores los gastábamos en el país.

Éste era el escenario cuando se realizó la campaña electoral para el periodo 1970-1976. Los candidatos eran Salvador Allende Gossens, por la UP, Jorge Alessandri Rodríguez, por el PN y Radomiro Tomic por la democracia cristiana. La UP logró el triunfo con su abanderado: el doctor Salvador Allende.

Así comenzaron lo que debían ser seis años del gobierno de la UP con el programa llamado “vía chilena al socialismo”. Nosotros sabíamos que habíamos logrado el gobierno, pero no el poder. En esta época los trabajadores de Chuquicamata teníamos dos sindicatos, el Sindicato Profesional que agrupaba a los empleados y tenía cinco dirigentes, tres del Partido Demócrata Cristiano (PDC), uno del Partido Nacional (PN) y uno del PC. Los obreros teníamos el Sindicato Industrial; allí de los

cinco dirigentes había dos democratacristianos, uno del Partido Radical, otro de la Unión Socialista Popular y otro más del PC; es decir, los representantes de la UP teníamos la mayoría.

Así, había una empresa con capitales extranjeros, un sindicato opositor y un sindicato medianamente gobiernista, con supervisores mayoritariamente opositores. Esto implicó división entre los obreros. Algunos trabajadores, incitados por los dirigentes opositores, realizaron lo que se llamó una “guerrilla de huelgas seccionales”; hay que reconocer que algunas eran justas, pero la mayoría estaban fuera de toda lógica. La llegada del nuevo gobierno influyó en el logro de contar con otra administración de la empresa. Esto porque la UP hizo valer su mayoría accionaria y nombró el directorio, que ahora se compuso por técnicos chilenos y un representante de los obreros, —Osvaldo Tello Gómez. En Chuquicamata contrataron a tres ingenieros; pero esto, paradójicamente, no gustó a la mayoría de los supervisores, quienes hicieron un acto de sabotaje y una huelga que duró unos 15 días, pero no lograron su objetivo. Los tres ingenieros siguieron en Chuquicamata y el mineral no paró su producción, con el gran compromiso de obreros y empleados.

Pero con estas nuevas medidas inició la política estadounidense de sabotaje al gobierno popular. No nos vendían equipos ni repuestos. La conspiración comenzó cuando estábamos en el proceso final de la nacionalización del cobre. ¿Por qué digo proceso final?, porque ya años atrás los senadores Laferte y Ocampo habían presentado un proyecto de nacionalización, y los trabajadores del cobre desde la fundación de su organización, la Confederación de Trabajadores del Cobre, el 23 de marzo de 1951, en el programa que nació durante el primer congreso planteamos como irrenunciable la nacionalización. Esto implicaba para nosotros cautelar los intereses del país y el futuro del cobre chileno; proceso que para tener éxito debía ser administrado y dirigido por ingenieros, técnicos y trabajadores chilenos. Así llegamos al gran día para todos los chilenos el 11 de julio de 1971 se nacionalizó el cobre, fue un momento de fiesta en el corazón de los trabajadores.

En mi opinión, la nacionalización fue una manifestación de soberanía e independencia política y económica de nuestro país; su legado difícilmente puede ser indiferente para la gran mayoría de los chilenos, y en ello los trabajadores del cobre tuvimos una participación activa. Para comprenderlo mejor demos una mirada a la historia de la ley. Durante marzo, abril y mayo de 1971 los dirigentes sindicales luchamos

valiente e incansablemente en representación de los trabajadores del cobre; los que trabajábamos en Chuquicamata, la mina a tajo abierto más grande del mundo, tuvimos un papel protagónico.

Por este papel Chuquicamata fue blanco de sabotaje en otro nivel. Por medio de algunos dirigentes sindicales y otros aspirantes al cargo (diputados de la zona, sorprendentemente diputados de la UP; concretamente del PR) iniciaron una campaña de desinformación en la que manifestaban a los trabajadores que con la nacionalización del cobre se perderían sus derechos, específicamente “la indemnización por años de servicio”. Éste era y es el ahorro con que cuentan los trabajadores al momento de retirarse de la compañía. Supuestamente también perderían otros beneficios que nos habían costado lucha y sangre a lo largo de años. Pero no iba a ser el gobierno de Allende el que nos lo fuese a arrebatar: era maldad o desinformación. Los conspiradores llegaron a tomar la sede del sindicato; pero hasta allá logramos llevar a un diputado del PR y otro del PC, más algunos dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre, y revertimos la situación. Los parados devolvieron el sindicato y quedó establecido que ni un solo derecho de los trabajadores sería suprimido por el gobierno de Allende, que era nuestro gobierno. Pero la oposición y los golpistas continuaban trabajando —si es que a eso se le puede llamar trabajo—. A escala nacional los transportistas dirigidos por León Vilarín realizaron el paro de octubre de 1972, y los trabajadores de El Teniente declararon la huelga encabezados por el dirigente derechista Guillermo Medina. Pretendían así paralizar la Gran Minería del Cobre, recién nacionalizada; junto con dirigentes de la democracia cristiana trataron de parar Chuquicamata.

Para frenar el sabotaje realizamos grandes asambleas sindicales a teatro lleno: unas 4 000 personas se juntaban en reuniones muy combativas y aclaratorias; triunfamos: no lograban parar el mineral. Cuando los dirigentes sindicales demócratacristianos se movilizaban a las secciones de trabajo, llegábamos los dirigentes que apoyábamos al gobierno del compañero Allende y se generaban grandes discusiones, pero no lograban parar el mineral: Chuquicamata seguía produciendo cobre para Chile. Decían que nosotros llevábamos gente ajena a la empresa y manipulábamos las asambleas. Era tal nuestro convencimiento que los trabajadores no comulgábamos con ruedas de carreta y realizamos una votación secreta: los trabajadores se pronunciaron en las urnas en contra de la huelga. Chile seguía ganando.

En el ámbito nacional los trabajadores nos agrupábamos en la Central Única de Trabajadores (CUT). Su presidente era Luis Figueroa, militante del Partido Comunista quien fuera elegido por primera vez por las bases; es decir, por todos los trabajadores organizados en sindicatos. Fue una elección nacional; Figueroa no fue elegido por las cúpulas sindicales, sino como digo por las bases; a eso yo llamo verdadera democracia sindical. Los trabajadores de Chuquicamata nunca dudamos del apoyo de la CUT a nuestras luchas sindicales. Los dirigentes de la CUT Provincial participaban activamente en las asambleas sindicales. En esta época logramos que los dos sindicatos actuáramos unidos en la solución de los problemas de los trabajadores, respetando nuestras divergencias políticas; cuando no lográbamos ponernos de acuerdo en la forma de negociar con la empresa, lo llevábamos a la asamblea y cada cual exponía sus puntos de vista; la asamblea sindical en amplia discusión resolvía y entregaba a los dirigentes ese mandato. Así funcionaba la democracia sindical.

Durante el gobierno de la UP hubo mucho trabajo voluntario. Más que nada para recuperar material y reparar equipos, botar lastre, etc. En estos trabajos participaban trabajadores del salitre, la construcción, y por supuesto de Chuquicamata; es decir, era trabajo voluntario y solidario, para sacar la producción que el país necesitaba.

Cuando habían ya transcurrido casi dos años de la nacionalización del cobre, comenzó una lucha de principios entre la clase trabajadora de Chuquicamata, mientras en el otro gran mineral, en El Teniente, los trabajadores dirigidos por Guillermo Medina y compañía declararon la huelga contra el gobierno. Estos dirigentes estaban desmotivados; probablemente esperaban que la nacionalización fracasara, porque las empresas ahora estaban dirigidas por chilenos. Pese a los grandes problemas creados por los golpistas, bajo la tutela del imperialismo, que implicaba que no nos vendieran maquinaria pesada, camiones, palas, repuestos y además, la producción aumentaba. Pretendían parar la Gran Minería del Cobre y no lo lograron. Ahí surgió nuevamente la solidaridad; sobre todo de parte de los trabajadores del salitre de las oficinas de María Elena y Pedro de Valdivia. Le demostrábamos al mundo que éramos capaces de administrar y trabajar con técnicos y obreros chilenos cada vez más capacitados.

En lo sindical y social tenía muchas esperanzas que el gobierno de Salvador Allende cumpliera con el programa ofrecido al pueblo en su campaña, lo que implicaba mejorar los sueldos, las pensiones y termi-

nar en gran medida con la cesantía. Este programa se iba cumpliendo paso a paso, a pesar de las grandes dificultades que existían y que eran producidas por los enemigos del gobierno de Allende. Se nacionalizó el cobre y el salitre, se agilizó la reforma agraria, se intervinieron las empresas productivas para hacerlas producir. Es cierto que había mucho desabasto, pero era producido por la reacción y el sabotaje patronal; la prueba más fehaciente está en que al otro día del golpe de Estado aparecieron como por “arte de magia” los productos en el mercado y en las tiendas.

A pesar de todo esto la UP seguía creciendo, pese a que la oposición jugó por declarar inconstitucional al gobierno (para lo cual necesitaban mayoría parlamentaria); no lo lograron en la elección de parlamentarios de marzo de 1973.

El clima político fue enrareciéndose a medida que avanzaba el año. Mientras, yo era amenazado de varias formas: rayados en la puerta de mi casa en Calama con la araña de Patria y Libertad; llamados telefónicos anónimos a mi hogar y al sindicato; en las asambleas sindicales varias veces tuve que salir por la puerta trasera e irme acompañado a mi hogar, y solicitar vigilancia policial en mi casa.

EL GOLPE, LA REPRESIÓN Y LA CÁRCEL

El 11 de septiembre de 1973 nos encontrábamos en Santiago, conversando con la compañía las peticiones hechas en nuestro pliego. Tengo la impresión de que había dirigentes sindicales que sabían lo que venía, principalmente demócratacristianos. El 10 de septiembre acordamos con los representantes de la empresa continuar las conversaciones a las nueve de la mañana del día 11 en el Ministerio del Trabajo. Camino al ministerio vimos tanquetas fuera de La Moneda. Sólo dos dirigentes llegamos a la reunión. Había gran convulsión fuera del ministerio; nadie sabía ni entendía nada. Me encontré en la calle con Farid Jadue, un compañero comunista, y le pregunté:

—¿Qué pasa, compañero?

—Mira, los marinos se tomaron Valparaíso y lo tienen aislado, y hay militares que vienen avanzando al centro de Santiago (La Moneda). ¿A qué vienen?, no sé.

Me fui a la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y alguien llamó diciéndonos que nos fuéramos (éramos seis dirigentes), porque a las 11:00 horas empezaría el patrullaje en las calles. Así comenzó un golpe de Estado muy sangriento; al poco rato empezaron a bombardear La Moneda. Yo no pude llegar al hotel donde me alojaba y me quedé en El Conquistador con unos compañeros dirigentes sindicales de Antofagasta y Tocopilla. En el Crillón, el hotel donde estaba alojado, fue allanado mi cuarto y un dirigente sindical de Antofagasta fue a buscar mi maleta.

El día 15 de septiembre logramos viajar al norte, a mí ya me buscaban en el mineral y en Calama. Mi esposa me pidió que no viajara, pero de todos modos lo hice. Debía ponerme al frente del sindicato, yo era el presidente y mi lugar estaba ahí. El 16 de septiembre tuvimos una reunión con el gobernador de Calama, el coronel Eugenio Rivera Degroux, quien nos dijo que no pasaba nada. Le pregunté:

—¿Cómo que no pasa nada, si ya hay detenidos?, si ésta es una zona de trabajadores.

Y me preguntó si yo era chileno o extranjero.

—Chileno, señor —le contesté.

Luego terminó la reunión. En la tarde nos reunimos en la gerencia con el mayor Reveco, el interventor militar del mineral. Nos dijo que en Chuquicamata no pasaba nada grave, no se había disparado una sola bala. Mi respuesta fue que era lógico que así fuese, porque ahí en el mineral iba a tratar con gente de trabajo y nada más. Luego nos preguntó nuestra posición política. “¿Para qué sería?”, le dije; después me di cuenta a qué venía esa pregunta.

Los dirigentes sindicales demócratacristianos y del PN pidieron que hiciéramos una asamblea sindical para presentar a las nuevas autoridades de la empresa. Yo les respondí que no teníamos por qué presentar a nadie; si querían que lo hicieran ellos. El 24 de septiembre 1973, a las 19:00 horas se realizó la asamblea sindical.

Mientras, en el Liceo de Calama habían detenido a mi hijo de 15 años Osvaldo Tello Bianchi; estaba incomunicado en el Regimiento de esa ciudad. Luego de las torturas psicológicas y quizás de otras, lo mandaron a la cárcel de Calama; ahí estuvo dos meses y 15 días; luego lo condenaron a 541 días de relegación a Angol. Actualmente vive en Suecia.

Pero volvamos a la asamblea. El Auditórium Sindical estaba repleto de trabajadores, unos 3 500 más o menos, y atrás de las cortinas del escenario, estaba lleno de militares en tenida de guerra. ¿Guerra contra quién? Hablaron dos dirigentes sindicales, un demócratacristiano y otro del PN. Presentaron a las nuevas autoridades, hicieron jurar y cantar el himno nacional unas tres veces y pidieron aportes económicos para la reconstrucción nacional; parecía una apuesta: César Muñoz, dirigente demócratacristiano, pidió tres días de sueldo; Carlos Ogalde, también demócratacristiano, subió a cinco días; Guillermo Valderrama, a seis días de sueldo. Tres posiciones, tres juramentos, tres veces el himno nacional, aplausos a rabiar, y a uno pifias e insultos. Yo no hablé en la asamblea, simplemente porque como presidente del sindicato no estaba de acuerdo con esa asamblea; sólo a algunos que se acercaron les dije no con buenas palabras:

—Yo no sé lo que me pueda pasar; esto es el inicio de una dictadura, ya tienen a mi hijo, pero si salgo de ésta con vida, sólo les voy a preguntar cómo les ha ido.

Sufrió personalmente la represión. Fui detenido tres veces en el lugar de trabajo: una por militares; quedé libre; una segunda por la Policía de Investigaciones; quedé libre de nuevo. El mismo día, la Policía de Investigaciones detuvo a mi hijo. El 30 de septiembre 1973 fui a la cárcel de Calama a visitar a los compañeros presos políticos y a mi hijo, por cierto. El 1 de octubre 1973 a las 12:00 horas una patrulla de Carabineros me secuestró cuando me encontraba en el comedor de mi lugar de trabajo, la fundición de concentrados. Eran seis uniformados a cargo del teniente Sepúlveda, a quien conocía. Él sólo me preguntó: “¿Qué huevía hiciste, Flaco?”; “Nada” le contesté; me subí en la parte de atrás de la camioneta, y ahí empezó el baile: culatazos, patadas, insultos... Me llevaron por la mina y pararon en un lugar llamado Placilla; me obligaron a bajar para que les pasara una piedra que brillaba: olí la trampa. Como es de suponer no les hice caso, si no no estaría aquí. Qué hubieran hecho, ¿me habrían aplicado la ley de fuga? No lo sé. Luego me llevaron a la Comisaría de Chuquicamata; después a la de Calama; de ahí al Retén de Carabineros de la Dupont, donde se realizaban las sesiones de interrogatorios, acompañadas de torturas psicológicas y de las otras. (No olviden que tenían a mi hijo.) Tras cuatro días de “baile” me

trasladaron a la cárcel de Calama. Fui el roto más feliz, porque estaría con Osvaldo, mi hijo. Una voz anónima llamó a mi señora a la casa y le dijo: “El compañero Tello llegó a la cárcel”. Recién entonces mi familia supo de mi paradero, porque en todas partes me negaban; nadie sabía nada. Mientras, mi casa la habían allanado tres veces.

Al instalarse, los trabajadores paulatinamente fueron dándose cuenta de lo que venía con la dictadura militar. Primero perdieron la libertad social, sindical y de peticiones. Los dirigentes fueron nombrados por los militares. Antes se negociaba por 15 meses; hoy se hace por 24. En esa negociación el “piso” era lo logrado hasta ese momento y se aumentaba respetando el acuerdo anterior; hoy se parte nuevamente de cero. En tercer lugar, los trabajadores del cobre teníamos –como nadie– el Estatuto de los Trabajadores del Cobre que regía desde marzo de 1951: este estatuto era ley. La dictadura lo eliminó. Teníamos además la negociación colectiva cada 15 meses; elección sindical cada tres años; gratificación cada 12 meses, e inamovilidad de los dirigentes. Los líderes sindicales teníamos que trabajar por lo menos 10 días al mes; esto lo pagaba la empresa, y los 15 restantes los pagaba el sindicato. La sindicalización era obligatoria tanto en el Sindicato Industrial como en el Sindicato Profesional.

Del sindicato obrero yo fui el único detenido; quedaron los otros cuatro. En el sindicato de empleados cancelaron a uno; quedaron los otros cuatro. Echaron a los dos comunistas. Además, perdieron valor las casas construidas en Calama: les aplicaron el valor comercial y no el convenido. Los trabajadores pasaron varios años sin poder elegir a sus dirigentes; luego, al darse cuenta de que les habían quitado lo más preciado, la libertad, hubo elecciones sindicales y empezaron las protestas por la libertad y la democracia. Pero eso es otra historia.

EL GOBIERNO DE ALLENDE: ASPECTOS ECONÓMICOS

José C. Valenzuela Feijóo*

¿Qué es lo que me ha salvado de convertirme
en un pingo almidonado?
El instinto de la rebelión, que desde
el primer momento se dirigió contra los ricos.
A. Gramsci

Durante la revolución, millones y millones de hombres aprenden
en una semana más que en un año de vida rutinaria y monótona.
Pues en estos virajes bruscos de la vida de todo un pueblo se ve
con especial claridad qué fines persiguen las diferentes clases
sociales, de qué fuerzas disponen y con qué medios actúan.
V. I. Lenin

PROPÓSITOS

Mi propósito es examinar, en términos muy sintéticos, la experiencia del gobierno de Allende, concentrando la atención en los aspectos económicos del proceso. Ciertamente, sobremanera en periodos como el que nos preocupará, el funcionamiento de la economía no puede entenderse si no se examinan los aspectos políticos e ideológicos involucrados. Más aún: se sabe que en periodos de transición y de grandes mutaciones, es la variable política la que pasa a ser la “clave de cruz” de todo el proceso; por lo mismo, aunque debemos hablar de la economía, también ensayaremos algunas mínimas referencias a estos

* Doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Profesor del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de *México: ¿fin de un régimen?*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, 1995, y *El mundo de hoy: mercado, razón y utopía*, Barcelona, Editorial Anthrops, 1994.

muy decisivos aspectos. En la exposición, sólo me ocuparé de lo que considero aspectos centrales de tal experiencia, y dejaré de lado el aparato estadístico del caso: aunque disponible, aquí nos interesan más las reflexiones de orden cualitativo y el dato estadístico sólo lo usaremos como ilustración.

La experiencia del gobierno allendista fue extraordinariamente rica, y cuando volvemos a ella siempre encontramos antiguas y nuevas aristas que ameritan una muy precisa y detallada reflexión; en este sentido, la temática a veces parecería infinita. Por lo mismo, sobre todo en un ensayo breve, resulta muy complicado elegir qué temas abordar y cuáles dejar de lado: siempre quedarán algunos aspectos clave un poco o un mucho al margen. Así, conviene advertir que el proceso ha sido extremadamente selectivo y esquemático y que sólo la comprensión del lector podrá ayudar a completar el contexto que el tema exige.

I. ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL DESARROLLO PREVIO

Durante los años sesenta, la economía chilena exhibía las insuficiencias típicas del modelo de industrialización sustitutiva en su fase terminal. Siendo muy selectivos, pueden mencionarse los rasgos (y problemas) que siguen.

Primero, estructuras agrarias en que todavía domina el latifundio tradicional, de corte semicapitalista, lo cual se traducía en una oferta muy inelástica con el consiguiente impacto negativo en la inflación, la balanza de pagos y las ganancias industriales. Y cabe recordar que ya durante la administración de Frei (1964-1970) se aprobó una Ley de Reforma Agraria más o menos radical, aunque se procesó con lentitud.

Segundo, se mantenía el perfil propio del modelo previo primario-exportador. Además, el sector exportador (gran minería del cobre, en especial) estaba en manos del capital extranjero. Esto implicaba consecuencias conocidas: crecimiento lento y muy inestable de las exportaciones más drenaje significativo de divisas, tanto por el intercambio no equivalente que afecta a los productos primarios como por las ingentes remesas de utilidades (visibles u ocultas) de las empresas extranjeras afianzadas en el sector exportador.

Tercero, un proceso de industrialización “trunco”; es decir, avance industrial que no lograba abarcar bienes de capital e intermedios

sofisticados, y que tampoco era capaz de desplegar gran capacidad exportadora.

En tal contexto, en los años sesenta se busca avanzar en el proceso de industrialización, apuntando a bienes de consumo duradero y ciertos intermedios. Esto dio lugar a problemas con consecuencias que podemos recordar: *a)* las ramas industriales (conocidas como metalme-cánicas) que pasan a jugar el papel de dinamizadoras del crecimiento, se encuentran con un delgadísimo mercado interno; por ejemplo, el rubro medios de transporte sólo encontraba demanda en 4.9% de la población, la de más altos ingresos. Como bien apuntara Aníbal Pinto, se necesitaba “un *mercado de masas, pero sin masas* que, en efecto, lo sustenten y lo amplíen progresivamente hacia el futuro”;¹ *b)* esas ramas de crecimiento preferente tenían escasa capacidad de absorción ocupacional; se acentuaba por ende el problema del desempleo; *c)* la estrechez del mercado interno y la importancia de las economías de escala en tales rubros tenía una consecuencia automática: la constitución inmediata de fuertes y cerradas estructuras oligopólicas, y *d)* al poco andar, esas ramas se ven invadidas por el capital extranjero, que pasa a ocupar las posiciones clave.

El último punto nos conduce a otro gran problema: el del capital extranjero. Éste, amén de dominar el sector exportador, pasó también a controlar lo básico de las ramas industriales más dinámicas; además, dada la crónica propensión al déficit externo, por la vía del capital de préstamo y el crecimiento de la deuda externa generó renovados lazos de dependencia. En el periodo –conviene recordar– se efectuaron excelentes estudios sobre el papel de la inversión extranjera, y todos ellos demostraron que casi todas las “virtudes” que se le atribuían (igual que hoy) a la inversión extranjera eran simplemente falsas; por ejemplo, su aporte al financiamiento externo neto. En Chile, en el periodo 1965-1969, por ejemplo, las exportaciones pasaron de 776.4 a 1306.3 millones de dólares: subieron 68% (un alto 13.9% anual). Entre tanto, las salidas que provocó el capital extranjero (depreciación y amortización, intereses y utilidades) subieron de 282.2 millones de dólares a 725.9 millones; o sea, 157% (nada menos que 26.6% anual). Estas salidas equivalían a 36% del valor de las exportaciones

¹ A. Pinto, “Concentración del progreso técnico y de sus frutos en el desarrollo latinoamericano”, en A. Pinto, *Inflación: raíces estructurales*, México, FCE, 1975, p. 85.

en 1965; en 1969 eran equivalentes a 56%. El punto es conocido (aunque en la actualidad se lo oculta): las entradas de capital provocan automáticamente flujos en sentido inverso que muy pronto anulan los efectos netos positivos iniciales; esto, a menos que el crecimiento de la inversión extranjera sea cada vez más rápido. Pero si esto tiene lugar, el efecto neto positivo va irremediablemente acompañado de otro: en muy pocos años la economía “nacional” queda completamente en manos (salvo los “changarros” hoy tan publicitados) del capital extranjero; en breve se acaba o suprime como economía nacional.

En la época también destaca el creciente papel económico del Estado: *i)* aumenta drásticamente su participación en la inversión fija total (disimulando así el creciente parasitismo de la burguesía autóctona); *ii)* se pone al servicio del nuevo tipo de capital extranjero, generándole economías externas y hasta canalizando ahorros nacionales en su favor, y *iii)* jugando un papel decisivo en el aspecto “realización” del producto global. Según un estudio de la época, en 1970 el sector público inducía 47% del valor agregado total, 41% del empleo, 44% del consumo familiar y 44% del excedente bruto.²

II. AUGE DEL MOVIMIENTO DE MASAS

El gobierno de Frei (1964-1970) fue un intento de reforma burguesa. Se buscó cambiar la propiedad tradicional en el agro, captar una mayor parte del excedente del sector exportador y llevar el proceso de industrialización a una fase más avanzada. Estas metas escindieron profundamente al bloque dominante y, a la vez, empujaron aún más al movimiento de masas.

Según un estudio de la época, “en 1966 había un total de 2 870 sindicatos que agrupaban a 350 516 trabajadores. En 1970, los sindicatos habían subido a 4 519 y sus miembros a 551 086 personas”.³ En 1963-1964 hubo 980 huelgas que comprometieron a 255 563 trabajadores; en 1970 las huelgas ascendieron a 2 796 y comprometieron a 922 000 trabajadores;⁴ asimismo, se elevó el peso de las huelgas

² C. Mistral, *Chile: del triunfo popular al golpe fascista*, México, ERA, 1974, p. 34.

³ E. Sader, *Movilización de masas y sindicalización en el gobierno UP*, Santiago, Cesó, Universidad de Chile, 1971, p. 38.

⁴ *Loc. cit.*

ilegales, las formas de acción directa se extendieron y la toma de fábricas, latifundios y establecimientos se tornó fenómeno masivo y cotidiano. El auge no sólo afectó al proletariado urbano. Es también notable la movilización campesina: los sindicatos agrícolas llegaban a 201 y tenían 10 647 en 1966. En 1970 ya había 510 sindicatos con 114 112 socios. En 1964 se contabilizaron 39 huelgas campesinas; en 1968 llegaron a 447. En el periodo 1960-1966 el promedio anual de latifundios tomados fue de seis por año; en 1969 la cifra llegó a 148. También se incorporaron al movimiento huelguístico sectores de capas medias, especialmente la pequeña burguesía funcionaria o burocrática y los estudiantes. En este sector, la crisis fue extremadamente profunda y provocó la quiebra de las viejas y tradicionales estructuras universitarias.

Frente al cerco del auge popular, el reformismo de Frei se vio rebasado y empezó a utilizar la represión violenta. Hubo matanzas de obreros industriales (en las minas cupríferas), de campesinos y pobladores (en el sur del país) y de estudiantes. El punto era claro: los mecanismos de la democracia burguesa comenzaban a entrar en una contradicción cada vez mayor con el curso de la evolución económica y social. El gobierno enarbó el lema de la “mano dura” que llegó a simbolizar muy bien la tendencia represiva que comenzaba a exigir el modelo económico en curso, que ya era calificado como “concentrador y excluyente”.⁵

Auge popular y tendencias al desahucio de la democracia burguesa son los dos ejes bajo los cuales se aproximaron las elecciones presidenciales de 1970; a éstas se presentó dividido el bloque dominante. Algo que se explica por el daño que algunas reformas infligieron a un sector oligárquico y también por el mismo auge popular, ante el cual el bloque no logró un total acuerdo para combatirlo. Algunos, como Tomić, insistían en la ruta reformista y democrática; otros, acentuaban el conservadurismo y la represión; los resultados fueron una grave derrota electoral y política de las clases dominantes. Con ello se inauguraba el gobierno de la Unidad Popular (UP).

⁵ La expresión corresponde a Pedro Vuskovic, el destacado economista de Cepal que fuera ministro de Economía en el gobierno de Allende. Véase P. Vuskovic, *Obras escogidas sobre Chile, 1964-1992*, Santiago, Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar, 1993.

III. EL PROGRAMA ECONÓMICO DE LA UNIDAD POPULAR: ASPECTOS CENTRALES

1. Aspectos económicos y políticos básicos

La UP fue un frente de clases amplio, donde confluyó la mayor parte del proletariado urbano y rural, fuertes contingentes campesinos, una vasta masa de la pequeña burguesía —especialmente en sus estratos asalariados y burocráticos— y algunos segmentos de la burguesía pequeña y mediana localizados en la industria de bienes-salarios. En el plano político, el bloque estuvo conformado por seis organizaciones políticas; las más importantes y decisivas fueron el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS). El primero poseía una militancia fundamentalmente obrera, y por la coherencia de su línea política y su disciplina orgánica, pienso que en términos cualitativos fue el partido más fuerte del bloque. El PS también contaba con fuertes contingentes obreros, con una dirección de origen pequeñoburgués. Menos disciplinado, este partido tendía a asumir posiciones que lo situaban a la izquierda de Allende y del PC. A partir del 4 de septiembre de 1970 fue el partido con mayor votación del bloque. El tercer partido era el Partido Radical (PR), donde se concentraban sectores de la burguesía pequeña y media, y sobre todo empleados de la administración pública. Otros partidos eran el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) que integraba a profesionales e intelectuales de pensamiento cristiano, más el Partido Socialdemócrata (burguesía agraria del sur del país) y el partido Acción Popular Independiente (API) (sectores pequeñoburgueses y empresariales medios).

¿Qué proyecto político tenía la UP? Para aclarar el punto nos concentramos en dos dimensiones básicas: las tareas que se proponían respecto al Estado y las referidas a los cambios en la estructura económica.

Sobre el Estado, oficialmente se postulaba su reemplazo por un Estado popular, aunque no se explicaba el contenido que éste debía asumir. En este contexto conviene subrayar tres claves: 1. Se suponía que la transición al nuevo aparato estatal se daría en forma gradual y pacífica. 2. Se rechazaba explícitamente la dictadura del proletariado como forma estatal propia del periodo de transición; en palabras del mismo Allende:

Las circunstancias de Rusia en 1917 y de Chile en el presente son muy distintas. Sin embargo, el desafío histórico es muy semejante [...] allí se aceptó el reto y se edificó una de las formas de construcción de la sociedad socialista que es la dictadura del proletariado [...] Chile es hoy la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista.⁶

3. En cuanto al aparato estatal represivo no se postulaba su destrucción sino “el afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de las fuerzas armadas” y su “integración” a tareas sociales y de desarrollo económico; de hecho, lo que la experiencia fue mostrando es una estrategia (a veces más implícita que explícita) que apuntaba a la *ocupación del aparato estatal burgués para desde allí insuflarle un nuevo vino al viejo odre*. En realidad, en esto radicaba la médula de lo que se denominó la “vía chilena al socialismo”.

En cuanto al cambio de las estructuras económicas, se señalaba que las tareas económicas que debían desplegarse eran “por su esencia y objetivos, antiimperialistas y antioligárquicas con la perspectiva del socialismo”. Con ello, se debería configurar una nueva estructura económica en que “existirán diversos tipos de economía; a saber: la pequeña producción mercantil, aquella que va al mercado y que se basa en el trabajo personal o del grupo familiar de los artesanos, de los campesinos y propietarios de talleres; el capitalismo privado, constituido por el sector de los pequeños y medianos empresarios cuyos medios de producción no serán expropiados; el capitalismo de Estado, fruto de diversas formas de asociación o de colaboración entre el poder popular y los capitalistas, y el sector estatal o público de la economía”.⁷ El sector público, asimismo, se entendía como equivalente a un sector socialista, el cual debería funcionar como sector dirigente del ulterior proceso de crecimiento.

Por ende, el sector clave y que debía funcionar como núcleo del socialismo por desarrollar era el estatal o Área de Propiedad Social (APS). Éste se integraba con: “1) la gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral; 2) el sistema financiero del país, en especial la

⁶ S. Allende, “Mensaje al Congreso”, 21 de mayo de 1972. Una recopilación de discursos de Allende en el periodo, en S. Allende, *La vía chilena al socialismo*, Madrid, Fundamentos, 1998.

⁷ L. Corvalán, *Camino de victoria*, Santiago, s.e., 1971, pp. 324-325.

banca privada y seguros; 3) el comercio exterior; 4) las grandes empresas y monopolios de distribución; 5) los monopolios industriales estratégicos; 6) en general aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluyendo el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica pesada, la celulosa y el papel".⁸

Los principales sectores y clases afectados por el programa de la UP eran los de inversiones extranjeras, especialmente las localizadas en el sector primario-exportador (cobre, salitre, hierro, etc.); vale decir, se afectaba gravemente al capital imperialista estadounidense. También el programa afectaba seriamente las bases de la burguesía industrial monopólica y de la burguesía financiero-comercial; en suma, de la oligarquía financiera. Por último, el programa también apuntaba a la destrucción de las bases económicas de los terratenientes agrarios.⁹

En síntesis, el cumplimiento del programa debía resquebrajar casi por completo los soportes económicos del bloque político dominante.

2. La estrategia de desarrollo

De acuerdo con el resumen que ofrecía el Programa básico había las siguientes metas fundamentales:

1) resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías. Para esto, se volcará la capacidad productiva del país [...] hacia la producción de artículos de consumo popular, baratos y de buena calidad; 2) garantizar ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado; 3) liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero; 4) asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado [...] 5) ejecutar una política de comercio exterior tendiente a desarrollar y diversificar nuestras exportaciones [...] 6) tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria. La lucha contra la

⁸ Cf. Programa básico del gobierno de la Unidad Popular, Santiago, 1970.

⁹ Proceso ya iniciado en la administración previa de Frei.

inflación se decide esencialmente en los cambios estructurales enunciados.¹⁰

El programa, asimismo, le concedía gran importancia a la planificación. A partir del sector estatal reconfigurado se pretendía organizar un “sistema nacional de planificación” capaz de dirigir la economía en sus lineamientos básicos, evitar los desequilibrios económicos y asegurar una mejor asignación de los recursos.

En la estrategia económica el desarrollo industrial propuesto ponía gran énfasis en las ramas que producían bienes-salarios. En cuanto a los medios de producción (bienes de capital en especial) se tendía a postular que debían ser producidos, indirectamente, por el sector exportador; es decir, se trataba de usar las divisas que tal sector debería generar para financiar la importación de los bienes de capital exigidos por el crecimiento. En este sentido, bien puede sostenerse que la clave del proceso de reproducción (la producción de bienes de capital) seguiría anclada fuera del país. Como también se suponía cierta desviación del comercio al área socialista de la época (la URSS y Europa Oriental, en lo básico), se suponía que tal encuadre no iba a originar problemas económicos ni políticos; al contrario, se pensaba acaso ingenuamente que ese desplazamiento iba a ser favorable tanto en términos económicos como de autonomía política.¹¹

Cabe agregar que dada la pequeña dimensión de la economía chilena, las posibilidades de desarrollar una industria de bienes de capital nacional que fuera rentable era y es muy escasa. A menos que pensara en un salto cuasi continental al socialismo que posibilitara una especialización dinámica en cierto tipo de bienes de capital, el énfasis tenía necesariamente que ser puesto en impulsar la dinámica exportadora del país. Lo cual, como lo mostró la experiencia ulterior, no era nada sencillo. Y si en los mercados mundiales capitalistas el sabotaje a las exportaciones chilenas era bastante estricto, por el lado del campo socialista la ayuda fue muy insuficiente. Como sea, y antes que nada, no hubo capacidad interna para dinamizar las exportaciones; más bien, al revés: la estampida del consumo junto con el disparo de las importaciones dejó menos excedentes exportables.

¹⁰ Programa básico del gobierno de la Unidad Popular, *op. cit.*.

¹¹ Las advertencias que hiciera Ernesto Che Guevara en su célebre discurso de Argel, por lo visto, no fueron asumidas con la seriedad del caso.

3. Principales metas macroeconómicas

En lo que se refiere a las metas de crecimiento, se estableció un plan cuyos objetivos centrales traducían los grandes lineamientos antes reseñados: elevar el crecimiento del PIB y volcarlo en beneficio de los grupos sociales más postergados. Conviene recordar algunas de las metas cuantitativas que se manejaron para mejor dimensionar los citados propósitos.

Para el PIB se postulaba un aumento de 51% para el sexenio. Como tasa anual al comparar con los periodos anteriores se tenía:

1959-1964: 4.0%

1965-1970: 3.9%

1971-1976: 7.0%

Para la inversión se postulaba un incremento relativamente moderado del coeficiente de inversión (IGB sobre PIB). Como lo indicaron algunos voceros destacados, se trataba de evitar las penurias de la “acumulación socialista originaria”. Las cifras eran:

1960-1964: 16.4%

1965-1970: 15.6%

1971-1976: 18.0%

Valga agregar: si el esfuerzo de inversión subía en 15%, la tasa de crecimiento anual lo debería hacer en casi 80%; implícitamente esto suponía un muy fuerte incremento en la relación marginal producto a capital. Salvo en muy corto plazo, se trataba de una meta de factibilidad más que dudosa.

En cuanto al esfuerzo ocupacional se buscaba un drástico descenso de la tasa de desocupación, quedando ésta al nivel de la friccional:

1959-1964: 7.5%

1965-1970: 5.7%

1971-1976: 2.0%

Este descenso implicaba crear casi un millón de nuevas ocupaciones en el sexenio.

Finalmente, recordemos las metas de distribución del ingreso. Tomando pie de la participación salarial, se tendría:

1959-1964: 49.2%

1965-1970: 51.6%

1971-1976: 61.0%

En la actualidad, en Chile la participación salarial gira alrededor de 35%, y en otros países asolados por el flagelo neoliberal (como México) la participación es aún menor.

IV. LA DINÁMICA DEL PROCESO Y LA POLÍTICA ECONÓMICA

El gobierno de Allende duró menos de tres años. Por el lado de la evolución económica podemos distinguir, en términos gruesos, dos fases. La primera se extiende hasta mediados de 1972 (más precisamente, hasta mayo de 1972, cuando Vuskovic abandona su cargo de ministro de Economía y es reemplazado por Orlando Millas, miembro del PC). Se trata de una *fase de expansión impulsada por la demanda, especialmente por el lado del consumo*. La segunda fase cubre la mitad de 1972 y termina con el golpe. La podemos denominar “fase conservadora, de agudización de los desequilibrios y de semiestancamiento”.

1. Primera fase: expansión impulsada por el consumo

El nuevo gobierno recibió una economía estancada; a la vez, dispuso de amplias posibilidades de crecimiento a corto plazo: *a)* existía gran margen de capacidades productivas no utilizadas: la tasa de operación en la industria parece haber girado en torno de 75%; *b)* también era alto el nivel de desocupación: hacia fines de 1970, en el Gran Santiago, llegaba a 8.3%, y *c)* asimismo, se disponía de un alto nivel de reservas, con lo cual la usual restricción externa se podía obviar en un primer momento. En principio, era cosa de elevar la demanda para lograr una respuesta productiva, y así se hizo.

Dos fueron los mecanismos clave que se utilizaron: un significativo aumento de los salarios, y el crecimiento del gasto y déficit públicos;

asimismo, se manejó una política monetaria y crediticia altamente permisiva y se buscó mantener el tipo de cambio.

El esquema respondía a tres propósitos fundamentales: *a)* reactivar la economía y aprovechar a plenitud los potenciales productivos disponibles; *b)* lograr una fuerte redistribución del ingreso a favor de los sectores asalariados, y *c)* ampliar las bases de apoyo del gobierno.

El llamado “equipo económico” tenía bastante claro que este impulso no podía durar mucho tiempo y que debía aprovecharse, a partir de sus resultados políticos, para avanzar muy rápidamente en los cambios estructurales mayores; en especial, esto significaba crear y consolidar el nuevo sector estatal y, con cargo a ello, movilizar el excedente económico para impulsar la acumulación y el crecimiento.

En cuanto a los logros económicos inmediatos, podemos señalar: el PIB global y el industrial crecen en términos espectaculares: a 8.3% el primero (la tasa más alta de los últimos quince años de esa época) y a 14.6% el industrial (que en 1970 había crecido a 0.3%); la tasa de desempleo bajó de 8.3% (diciembre de 1970) a 3.9% (diciembre, 1972); la inflación bajó de 34.9% en 1970 a 22.1% en 1971, y los salarios reales crecieron y la participación de sueldos y salarios en el ingreso nacional llegó a 59.0% en 1971; es decir, al cabo del primer año de gobierno se había casi alcanzado la meta sexenal. A primera vista, los resultados eran espectaculares: la reactivación y la redistribución del ingreso funcionaban.

También se lograba un apoyo político espectacular: en las elecciones presidenciales de septiembre de 1970 Allende había recibido 36% de la votación. En abril de 1971, con ocasión de las elecciones municipales, la coalición de gobierno obtuvo más de la mitad de la votación. O sea, superó en términos absolutos a toda la oposición (la cual, además, seguía dividida y confusa).

Con todo, ya se perfilaban problemas graves. La redistribución monetaria del ingreso debía acompañarse de un cambio en la composición del PIB, algo que ya empezaba a verse como un proceso bastante más lento y difícil. Se avanzaba poco y lento en la constitución de la APS. La acumulación productiva se debilitaba. Conviene detenerse mínimamente en estos problemas básicos que comenzaban a perfilarse.

La constitución del Área de Propiedad Social (o sector “socialista”) se desarrolló a un ritmo muy inferior al previsto; muy inferior al exigido por el mismo proceso económico. Hubo vacilaciones, y algunas

compendas obligaron a fuertes desembolsos; por ejemplo respecto de acciones de empresas que fueron compradas y no expropiadas. Asimismo, la gestión económica del nuevo y del viejo sector estatal pecó de excesivo burocratismo y de la ausencia de un “efectivo control obrero” de la producción. En muy alto grado la propiedad capitalista (salvo en su manifestación más externa y superficial, de tipo jurídico) no alcanzó a ser significativamente alterada.¹²

El sector económico que más contribuyó a la reducción de la inflación fue el estatal, cuyas empresas trabajaron con precios casi congelados; con ello, los excedentes allí originados se anularon casi por completo y se puso en grave peligro la reproducción ampliada del sector estatal. En un modo muy preciso, nos encontramos aquí con el famoso modelo de Preobrazhensky aplicado al revés.¹³ Los excedentes que en el sector estatal se perdieron fueron a parar al sector privado y a las familias.

La inversión privada declinó bruscamente y la inversión estatal no fue capaz de compensar tal caída. El coeficiente de inversión, que ya en 1970 fue muy bajo llegando a 16.3%, en 1971 cayó aún más, llegando a 14%. Si suponemos una inversión de reposición del orden de 8 a 10% del PIB, esto significa que sólo de 4 a 6% del PIB se destinaba a ampliar los acervos de capital fijo, lo cual dejaba en suspenso el ulterior crecimiento de la economía.¹⁴

Al utilizar a destajo el gasto fiscal deficitario se provocó una gran expansión monetaria y una situación de “exceso de liquidez”, tanto más grave en cuanto las crecientes expectativas inflacionarias empezaron a trabajar a favor de un menor coeficiente de liquidez. Los fondos líquidos excesivos se concentraron básicamente en el sector privado: la cantidad de dinero en manos de este sector subió nada menos que 113% en 1971; y como el empresariado privado, especialmente el grande, casi no invirtió en forma productiva, el capital-dinero que acumuló se usó

¹² Cambió el rostro de los gerentes, ahora gente de izquierda, pero no se rompió con la organización interna de la fábrica capitalista. Es decir, las pautas de división del trabajo, de la autoridad, etc., no se modificaron.

¹³ El modelo de Preobrazhensky busca la acumulación socialista primitiva y la industrialización a expensas del consumo y particularmente del campesinado. Estuvo en el centro de la Nueva Política Económica (NEP) impuesta por el régimen soviético a partir de 1924. (Nota del compilador.)

¹⁴ Si suponemos una relación producto-capital incremental del orden de 0.30, tal coeficiente de inversión se debería traducir en un crecimiento de 1.2 a 1.8% del PIB; o sea, prácticamente un estancamiento del ingreso per cápita.

en forma improductiva (especulación, distribución, servicios, fugas al extranjero), pero altamente rentable. De este modo, buena parte de la plusvalía extraída a los trabajadores del sector estatal fue finalmente a parar a manos de este capital que flotaba parasitariamente en el espacio de la circulación.

Al crecer tan fuertemente la demanda interna y no responder del todo la oferta interna, se dispararon las importaciones. Junto con subir el *quantum* se alteró la composición, en favor del consumo y en contra de los bienes de capital; asimismo, subió el precio de muchos bienes importados (alimentos, en especial) y el precio del cobre se redujo desde 64.2 centavos la libra en 1970 a sólo 49.3 centavos en 1971. A la vez, los préstamos e inversiones externas cesaron casi del todo. El año de 1971 terminó con reservas agotadas y déficit en la balanza de pagos superior a los 300 millones de dólares; empezaba entonces a operar el tradicional “estrangulamiento externo”, aunque ahora con fuerza redoblada.

Por lo tanto, los presupuestos políticos a partir de los cuales se diseñó la política económica de Vuskovic se revelaron erróneos. La agudización de los desequilibrios económicos se “resolvió” no en el asalto al poder burgués y en un cambio estructural (político y económico) definitivo, sino en la destitución de Vuskovic como ministro de Economía (mayo de 1972).

2. Segunda fase: reformismo conservador, acentuación de los desequilibrios y semiestancamiento

Hacia mayo de 1972, en el seno de la UP y fuera de ella se despliega una muy rica discusión que desemboca en el “golpe de timón” impulsado por O. Millas y la dirección del PC. Para muchos, fue algo así como una reacción “termidoriana”, aunque hay diferencias nada menores: si en el caso francés esa reacción tuvo lugar *después* de haber sido aniquilado el poder feudal, en el chileno fue *antes* de haber roto con el Estado y el poder tradicionales. Situemos mínimamente el contexto en que se da este cambio de rumbo.

Hacia esa fecha se observa el impulso casi espontáneo de las bases obreras y populares en contra de la institucionalidad vigente y por desplegar formas nuevas, embrionarias claro está, de un poder de nuevo tipo, popular y revolucionario: asambleas populares, comandos

y cordones comunales, consejos obreros de fábrica, etc.¹⁵ La consigna que empieza a estremecer al Chile de los trabajadores fue “Crear, crear, poder popular”, un *poder de nuevo tipo y autónomo del Estado vigente*. Todo ello esbozaba un rebase del mismo gobierno y de la dirección de la UP por su flanco izquierdo.¹⁶

Emerge el descontento en alguna parte de las capas medias. Sobremanera, en los segmentos de la pequeña burguesía independiente.¹⁷

La oposición, demócratacristiana y de derecha tradicional, comienza a converger y unificarse; asimismo, en su seno se impone cierta orientación de carácter golpista. Algo que fue estimulado por el mismo miedo que provocaba el creciente radicalismo de la base trabajadora.

Se acentúan los desequilibrios económicos y sus manifestaciones más directas: inflación, escasez, mercado negro, etcétera.

En tal contexto el equipo económico de Vuskovic, más algunos segmentos importantes de la UP y de la izquierda no UP, plantean la necesidad de: *a)* resolver el problema político; es decir, el de la naturaleza misma del Estado. Se debe, en esta óptica, construir un auténtico poder popular y disolver el existente aparato estatal; *b)* avanzar drásticamente en la constitución del sector estatal como fuerza económica dirigente, y más en general en la construcción de una nueva institucionalidad capaz de estimular la acumulación y el crecimiento.¹⁸

¹⁵ Valga advertir: el vocablo “espontáneo”, en este contexto, para nada significa “adanismo político”. Muy por el contrario, son los grupos más conscientes y politizados de la clase los que pasan a impulsar estas nuevas formas de organización social del pueblo trabajador. En ello convergían partidos como el MIR, fuertes núcleos del PS, parte del MAPU, sectores de base del PC y algunos desprendimientos del mismo PC que tenían orientación más o menos maoísta.

¹⁶ A partir de esta constatación, los sectores de la izquierda más radical justificaban sus propuestas de un real asalto al poder, aún vigente, de la burguesía.

¹⁷ El núcleo dirigente del PC, por boca de Orlando Millas, a partir de este dato hablaba de una “correlación de fuerzas que se deterioraba” y que según ellos exigía un retroceso táctico.

¹⁸ Vuskovic pedía “transformar los enunciados y declaraciones sobre la participación en un poder real y efectivo de los trabajadores”, *Chile Hoy*, 30 de junio de 1972. Otro integrante del “equipo” escribía muy lúcidamente: “mantener el cuadro de política económica de 1971 es inútil e imposible. Rindió lo que se esperaba de ella, fue diseñada para otras condiciones de funcionamiento de la economía y su misma aplicación modificó los elementos de su validez [...] con las nuevas condiciones emergen descarnadamente las limitaciones de la capacidad de dirección y control del Estado chileno construido para regular una sociedad capitalista y no para conducir un proceso de transición al socialismo. Sin una actividad intensa de existentes y nuevas organizaciones de masas que modifiquen

La dirección del PC chileno más parte de la UP planteó una ruta muy diferente.¹⁹ En el plano económico buscaba algo así como un “retroceso táctico”, el que implicaba congelar el proceso de estatizaciones y “consolidar” lo ya logrado,²⁰ e impulsar la expansión de la producción, elevar la productividad y la disciplina fabril. En el plano político, se buscaba evitar la unificación de la oposición, lograr una alianza con la democracia cristiana y así aislar a la derecha más golpista.

Esta segunda línea estratégica fue la que triunfó. Examinemos rápidamente sus resultados.

En lo general, el balance fue claro: acentuación de los desequilibrios y tendencia al estancamiento económico.

La inflación se aceleró y se tornó explosiva: si en abril de 1972 llegaba a 39% anual, en abril de 1973 llegó a 199% anual. Los salarios reales empezaron a descender (si hacemos enero de 1972 igual a 100, en abril de 1973 se llega a 87). En 1972, el PIB creció a 3.6% y la producción industrial en 3% (en el segundo semestre de 1972 cayó en 5%). El coeficiente de inversión siguió cayendo: 16.3% en 1970, 14.0% en 1971 y alrededor de 10 a 11% en 1972. Por último, tenemos que el desequilibrio externo asumió caracteres alarmantes: hacia 1973, se señalaba que “para mantener los actuales niveles de abastecimiento a la población, se requieren importaciones de alimentos (incluyendo materias primas alimenticias) del orden de los 500 millones de dólares. Para mantener funcionando a plena capacidad la industria, se requieren importaciones cercanas a los 600 millones de dólares. Para pagar

con su presencia la naturaleza del Estado y sin la constitución y efectivo dominio del Área de Propiedad Social, la política económica es superada; descalabrada, por la intensidad de las contradicciones sociales”, *Chile Hoy*, 30 de junio de 1972.

¹⁹ Orlando Millas, alto dirigente del PC que manejaba una óptica económica muy conservadora, llegó a señalar que Chile vivía un momento parecido al de la NEP rusa. Con ello hacía abstracción nada menos que del carácter mismo del Estado vigente, en uno y otro caso.

²⁰ Nada menos que en junio de 1973, Vuskovic señalaba que “las áreas social y mixta distan aún de haber alcanzado la amplitud prevista y requerida [...] de las 93 empresas industriales que el gobierno ha reiterado en su proyecto reciente que deben incorporarse a las áreas social y mixta, en la actualidad sólo 8 pertenecen a ella, mientras que 48 están requisadas o intervenidas y 37 permanecen bajo propiedad y control privado”. Véase entrevista en *Última Hora*, 7 de junio de 1973. Se debe también recordar que el programa inicial hablaba de 252 empresas industriales y que luego del “golpe de timón” la lista se redujo a 91.

la deuda externa, alrededor de 400 millones más. Todo esto, que no considera importaciones de bienes de capital, suma 1 500 millones de dólares. Frente a ello, en el bienio 71-72 los ingresos por exportaciones no superaron los mil millones de dólares anuales²¹. Y como el financiamiento externo resultaba mínimo, se comprende la tremenda gravedad de la situación.

En resumen, no hubo ninguna mejoría; por el contrario, la situación empeoró y se arribó a un estado muy cercano a la parálisis y descomposición. Es decir, la reproducción capitalista se descompuso casi por completo sin que pudiera emerger y desarrollarse una nueva forma de gestión económica, de carácter socialista, que fuera capaz de sustituirla.²²

En el plano político las cosas fueron peores: nada se consolidó ni hubo acuerdo con la oposición; peor aún: no se logró parar el golpe y como se trabajó con el supuesto de que se debía y podía evitar, lo que objetivamente se logró fue evitar que el pueblo se organizara para defenderse y atacar con eficacia.

V. DOS PROBLEMAS CENTRALES

La experiencia de la UP, incluso en su fracaso, fue tan rica que exige muchas y variadas investigaciones, serias y rigurosas. Como en unas simples notas no pueden cubrirse estas exigencias, quisiéramos por lo menos llamar la atención en torno de dos problemas económicos centrales: el de la acumulación y el crecimiento en un proceso de transición y el de la productividad y las relaciones de propiedad.

²¹ C. Mistral, *Chile: del triunfo popular...*, op. cit., p. 86.

²² En la coyuntura, la economía no se podía resolver por sí misma. Esto pasaba a ser resorte de la variable política. Pero como ésta no se movió en la dirección adecuada, la economía entró en estado de descomposición. Pensar que se podía reactivar la economía sin resolver el problema político central —el del poder— fue el supuesto erróneo básico que manejó el enfoque conservador de Millas y compañía. En los últimos dos meses del gobierno de Allende, dirigentes del PC, como Jorge Insunza y Luis Figueroa, empezaron a barruntar el problema e insinuaron un reordenamiento táctico que no alcanzó a cuajar. En realidad, en este periodo las posturas consideradas provenían de fuera de la UP: desde el MIR, dirigido por Miguel Enriquez.

1. Acumulación y crecimiento

He indicado ya que un propósito expreso del gobierno allendista era evitar el purgatorio de la “acumulación socialista originaria” al estilo soviético. El punto debe subrayarse: si a los trabajadores (incluyendo aquí a los campesinos) se les exige tal nivel de sacrificios, hay derecho para suponer que se trata de imposiciones y no de decisiones libres. Pero una cosa es respetar la necesidad de elevar el nivel de vida de lo que se supone son las clases dominantes en el nuevo esquema y otra, muy diferente, es gatillar explosivamente el consumo y a la vez reducir la acumulación a niveles misérrimos.

La acumulación debe elevarse sustancialmente (medida como porcentaje del PIB), para así elevar el crecimiento y la productividad; asimismo, debe reorientarse sectorialmente con el afán de satisfacer la nueva norma distributiva²³ y, a la vez, lograr un mínimo de autonomía nacional en materia de acumulación y tecnología.²⁴ Esto a su vez plantea algunas exigencias que conviene indicar.

La primera supone que el nuevo régimen debe pasar a controlar el grueso del excedente económico y asegurar su aplicación en inversiones productivas. Para tales propósitos, se debe constituir un sólido sector estatal. En éste deben entrar las grandes empresas industriales monopólicas de tal manera que el nuevo Estado se asegure el control de la mayor parte del excedente, y las posiciones estratégicas o de comando en el proceso de reproducción de la economía. El gobierno UP tenía claro este problema y para tales efectos diseñó la denominada Área de Propiedad Social, la cual debía funcionar como núcleo del ulterior sector socialista. Para evitar fugas de capital, sabotajes e incertidumbres, este proceso debe ser muy rápido, lo cual también permite iniciar

²³ Ciertamente no basta llevar los salarios a tal o cual por ciento del ingreso nacional. A la vez, en consonancia con este movimiento, debe alterarse la composición del PIB (oferta de origen interno) y las importaciones (oferta de origen externo). Lo primero no se logra en corto plazo y, por lo mismo, si hay expansión excesiva del consumo asalariado, buena parte de la nueva demanda debe satisfacerse con importaciones. Lo cual agrava los problemas de la balanza de pagos y cercena las posibilidades (al dificultar las importaciones de máquinas y equipos) de una acumulación dinámica.

²⁴ Esto exige dinamizar el crecimiento del Departamento I (el productor de medios de producción) de la economía, incluyendo como parte del Departamento I al sector exportador. Esto, en tanto las divisas que genera se apliquen a la importación de bienes de capital.

cuanto antes la coordinación del sector, lo que asegura las sinergias y eficacia del caso. Es decir, se posibilita el avance a un sistema nacional de planificación.

En lo indicado surgieron serias insuficiencias. El proceso fue torpedeado por el parlamento y avanzó con gran lentitud;²⁵ por lo mismo, se crearon incertidumbres adicionales (a las inevitables) en el sector privado. El excedente “se esfumó” y la acumulación productiva terminó por descender: punto básico donde conviene detenerse.

En los tiempos previos, el grueso del excedente era apropiado por los grandes monopolios industriales, exportadores, financieros y comerciales; por lo mismo, una de las razones básicas de la estatización era pasar a controlar ese excedente y aplicarlo a la acumulación productiva con la orientación ya mencionada. Pero cuando esa estatización se dio, el excedente pareció perderse. Lo que sucedió fue un cambio drástico en las leyes de formación de los precios relativos. El nuevo sector estatal ya no aplicó la política de precios oligopólicos sino otra de congelamiento de precios con el fin de abatir la inflación. Apareció entonces una tijera de precios por medio de la cual los excedentes del antiguo segmento monopolístico fueron transferidos al sector privado.²⁶ Ese excedente que así se privatizaba no se aplicó a inversiones productivas, amén de que la inversión estatal se vio seriamente entorpecida. Al final el sector estatal funcionó perversamente, como máquina que se aplicaba a subsidiar al sector privado en términos de su consumo personal, y sobre todo de sus gastos improductivos. De aquí también se desprende otra lección más o menos elemental: el control inflacionario no puede darse por la vía de precios estatales congelados, sino por el control popular de los mecanismos de precios y distribución del mismo sector privado.

Junto a lo indicado está el *problema real*. Es decir, lo que técnicamente se conoce como “capacidad material de acumulación”. La idea es

²⁵ En realidad, las trabas de todo tipo que pusieron tanto el Congreso como el Poder Judicial a las iniciativas del gobierno, obligan a pensar en la necesidad de su disolución. Claro está, este eventual tipo de medidas rompía completamente con los métodos declarados de la “vía chilena” al socialismo.

²⁶ Un estudio de la época señalaba que en 1971 el nivel general de precios subió 13% más que los precios del sector estatal; y en 1972 en 42% por encima de los precios estatales; o sea, las “tijeras desfavorables” se fueron acentuando y, por lo mismo, descapitalizando completamente al área estatal. Véase C. Mistral, *Chile: el triunfo popular...*, op. cit., p. 73.

sencilla: para acumular no basta contar con cierto excedente disponible para la inversión. Junto con ello, se trata de que en ese agregado económico existan los bienes que por su valor de uso pueden funcionar como sustrato material de la acumulación. Si en el excedente sólo hay bienes de consumo, la acumulación —que exige máquinas y similares— no puede tener lugar. Esto nos conduce al problema de los determinantes de la oferta de bienes de capital; para el caso, podemos señalar que esa oferta se ve alimentada por la producción interna de bienes de capital (menos la parte que se exporta); lo que se puede importar de bienes de capital, una vez que se han satisfecho las importaciones imprescindibles de consumo e intermedios, sin incurrir en financiamiento externo, y por las importaciones de bienes de capital sustentadas en el endeudamiento externo.²⁷

En el caso chileno, las posibilidades de desarrollar una vasta industria interna de bienes de capital es reducida. El tamaño pequeño de la economía nos habla de un mercado interno reducido y la integración exportadora a los mercados mundiales, en ausencia de una integración latinoamericana o socialista favorable, es muy difícil. El segundo punto exige diversificar y dinamizar la capacidad exportadora del país, algo que tampoco funcionó en el periodo, pero que es una meta ineludible. Aquí, valga apuntar, hubo cierta ingenuidad en la consideración del feroz y compacto bloqueo estadounidense; asimismo, ingenuidad, en cuanto al posible apoyo del campo “socialista”, el que de hecho fue completamente insuficiente.

En la experiencia de la UP, resumiendo, es muy claro que se subvaluó el problema de la acumulación. En fin, por ahora nos basta indicar la necesidad de discutir muy seriamente este problema, que para nada es sencillo y que incluso pudiera poner en duda la misma viabilidad del posible proceso de transición.

2. Productividad y relaciones de propiedad

Para la consolidación de cualquier forma socioeconómica la elevación de la productividad constituye un ingrediente básico. Para el socialis-

²⁷ Las fuentes tradicionales cesaron por completo. Y la ayuda del “campo socialista” no llegó en la medida necesaria.

mo este factor es aún más decisivo. Y en las condiciones chilenas, que exigían fuerte expansión de la oferta interna, con mayor razón. Por lo mismo, conviene apuntar algunos señalamientos mínimos sobre el problema.

Una primera y muy general consideración sería: en un periodo de transición inicial que apunta cambios estructurales tan drásticos, es inevitable que la productividad incluso descienda en un primer momento. Son los costos que supone desarmar-destruir el antiguo orden y constituir-organizar un nuevo ordenamiento económico. Costos que por lo demás son el precio que debe pagarse por un ulterior relanzamiento más dinámico de esta productividad. En el análisis de la experiencia chilena del periodo, es éste un punto que no debemos olvidar.

La segunda consideración apunta al estado del problema en el sector privado capitalista que se pretende preservar como tal. Como es obvio, en este sector la incertidumbre inicial (más allá de las posibles declaraciones oficiales) es muy elevada y esto, como regla, conduce a la parálisis de la inversión privada. Además, podemos esperar que se rompa o debilite la disciplina fabril, que caiga la intensidad del trabajo y también la extensión de la jornada (por huelgas, asambleas, etc.). Uno y otro factor (inversión y disciplina) afectan negativamente la productividad. En relación con este problema, podemos comentar: 1. en tanto la transición inicial no se completa y aún no existe un Estado de nuevo tipo plenamente consolidado, el problema se agrava; al revés, una transición corta y drástica, paradójicamente, suaviza el problema, y 2. hay aquí aspectos muy delicados que han sido poco estudiados: el de las relaciones del nuevo poder con este sector capitalista (en qué términos, con qué plazo, etc.), el de las relaciones con la clase obrera del sector (que se suele sentir postergada y que pugna por la estatización de su fábrica) y el de las relaciones entre patrones y trabajadores en este sector capitalista. Como no podemos entrar a discutir el punto, me limito a señalar su importancia.

La clave, en todo caso, reside en la situación del nuevo sector estatal.

Primero, tenemos el tiempo que demora su constitución e integración. Si esto se demora y aplaza, las ventajas de una regulación planificada del sector no pueden emerger. Y en Chile con Allende al frente, la constitución del APS fue lenta y muy incompleta; de hecho, jamás se logró una gestión planificada coherente del sector.

Segundo, está un problema si se quiere de orden más técnico. En el ámbito de la productividad inciden diversos factores; de ellos, el que suele ser más decisivo (*caeteris paribus*, lo demás) es la densidad de capital (capital fijo por hombre ocupado). Tanto esta variable como la posible incorporación de progreso técnico se mueven en función de la dinámica que asume la acumulación. Si ésta se expande con rapidez, tales factores también se dinamizan y cabe en consecuencia esperar un rápido crecimiento de la productividad del trabajo. La clave entonces reside en la acumulación. Pero ésta, como ya hemos visto, se paralizó. Por la política de precios que siguió el sector estatal, terminó por quedarse casi sin excedentes, lo que hundió su capacidad de acumulación. Consecutivamente, no se dieron las condiciones –por este lado– para dinamizar la productividad del trabajo.

En tercer lugar tenemos lo que considero es y fue el aspecto más decisivo. Éste tiene que ver con las *relaciones de propiedad existentes en el sector estatal*.

Para mejor entender el punto recordemos primero las claves de la propiedad capitalista. En ésta, a partir de la distribución del poder patrimonial que la tipifica, se desprende: 1. en el seno de cada empresa el proceso de producción está sujeto a un plan; 2. este plan responde a la voluntad del capital y no de los que ejecutan tal plan, que son los trabajadores, y 3. por lo mismo, el plan le es *impuesto* a sus ejecutantes; es decir, la *dirección capitalista asume un carácter ineludiblemente despótico*. De aquí también se deriva el tipo de disciplina que caracteriza a la empresa capitalista: se trata de una *disciplina impuesta coactivamente*, por las normas internas de la fábrica, por los vigilantes, por las leyes fabriles y, por último, por la permanente amenaza de despido y cesantía que sufren los trabajadores.²⁸ Y debemos comprobar que en términos de intensidad y productividad del trabajo, como regla los resultados han sido espectaculares.

²⁸ Recordemos a Marx: “desde un punto de vista ideal, la coordinación de sus trabajos se les presenta a los obreros como *plan*; prácticamente, como la *autoridad* del capitalista, como el poder de una voluntad ajena que somete su actividad a los fines perseguidos por aquella [...] Si por su *contenido*, la dirección capitalista tiene dos filos, como los tiene el propio proceso de producción por él dirigido, los cuales son por un lado un proceso social de trabajo para la creación de un producto y de otra parte un proceso de valorización del capital, por su forma la dirección capitalista es una *dirección despótica*”. Véase K. Marx, *El Capital*, México, FCE, tomo I, 1973, pp. 267-268.

Ahora bien, cuando esas relaciones de producción tienden a disolverse, por lo menos en un primer momento la disciplina fabril se suele deteriorar con el consiguiente impacto negativo en los niveles de productividad. Ante esta situación, surge la disyuntiva: *a*) impulsar nuevas relaciones sociales de producción (de carácter socialista-comunista) y en el marco de estas nuevas relaciones, generar un nuevo tipo de disciplina, conciente y autoimpuesta por ejemplo, se trabaja con más cuidado e intensidad no por el látigo que esgrime el capataz sino porque el obrero entiende que la fábrica es suya, de él y de sus camaradas de fábrica; más aún, del conjunto de la clase con la cual teje fuertes relaciones de solidaridad, o *b*) restaurar la disciplina capitalista y evitar así el derrumbe de la productividad. Digamos que en los procesos de transición (e incluso de construcción) del socialismo, ésta ha sido una tentación permanente. Sobre todo cuando cunden los desequilibrios y la productividad del trabajo se estanca o tiende a caer. Y esto no sólo por el natural desorden productivo que genera toda transición de gran profundidad; también por cierta tendencia a la anarquía, a la indolencia e irresponsabilidad que emerge en algunos grupos de trabajadores.

Este problema es absolutamente decisivo, pero aquí sólo podemos mencionarlo. Como sea, debemos recalcar que en él se encierra *todo* el destino del nuevo orden. Si el socialismo no es capaz de resolver este problema de las nuevas relaciones sociales de producción (relaciones que deben transformar al trabajador en efectivo dueño de la producción y del conjunto de la vida política y social) y su nexa con mayores niveles de productividad, nunca podrá triunfar. Y hay que decirlo con mucha claridad: hasta ahora, la experiencia histórica sólo nos muestra fracasos en este muy decisivo frente. Los afanes socialistas no han logrado transformar a la clase obrera en una clase libre y dueña de su destino.²⁹ Por lo mismo, tampoco se ha logrado pasar a un nivel de productividad históricamente superior. En suma: cómo traducir el ideal en una realidad material con-

²⁹ Amén de la dificultad objetiva, incide también la falta de preparación de la clase obrera para actuar como fuerza dirigente: ya Bujarin señalaba que la clase obrera podía ser muy eficaz en las tareas de destrucción del orden burgués pero no lo era en el campo de la construcción del nuevo orden. La experiencia histórica usualmente le ha vedado formar adecuadamente estas capacidades. Pero, sobre todo, ha incidido la usual falta de confianza de los dirigentes en la capacidad creadora y de iniciativa de la clase obrera. Ésta pudiera ser una de las peores herencias que dejó el estilo stalinista en las filas de la izquierda.

creta sigue siendo el gran desafío de los movimientos populares y de los trabajadores que luchan por un nuevo orden, socialista-comunista.³⁰

VI. UN COMENTARIO FINAL

Se dice que la historia la escriben los vencedores. En el caso de Chile también es cierto, pero con un agregado: los derrotados, en su gran mayoría, también la vienen escribiendo y lo hacen con una perspectiva que no difiere en lo más sustantivo de la que manejan los vencedores; o sea, han sido asimilados a la ideología de derecha dominante.

Expliquemos esto.

En los últimos años, en las filas de la Concertación de Partidos por la Democracia (CPD), se ha venido desplegando una postura cada vez más extendida y que es necesario recoger. Según esta interpretación, las razones últimas del golpe de Estado y la consiguiente dictadura que le siguió, residirían no tanto en el comportamiento de las derechas (civil y militar) sino en el de las izquierdas; o sea, en el comportamiento político de la UP y del gobierno de Allende; en otras palabras, como con el conde don Julián, la política de la UP habría provocado o causado la reacción golpista.

Si el argumento se quedara en este nivel general, abriría la posibilidad de dos interpretaciones alternativas.

La primera insistiría en lo que la UP “dejó de hacer”, lo cual, si nos limitamos a los factores más decisivos apuntaría a lo siguiente: 1. la UP no fue capaz de organizar un poder popular armado; en general, careció de una política militar adecuada, tanto en su interior como respecto al ejército oficial, y 2. la UP no entendió el problema crucial de toda transición: el de la naturaleza clasista del aparato estatal y su relación con el tipo de cambio social que buscaba impulsar. Más precisamente, si se

ser muy eficaz en las tareas de destrucción del orden burgués pero no lo era en el campo de la construcción del nuevo orden. La experiencia histórica usualmente le ha vedado formar adecuadamente estas capacidades. Pero, sobre todo, ha incidido la usual falta de confianza de los dirigentes en la capacidad creadora y de iniciativa de la clase obrera. Ésta, pudiera ser una de las peores herencias que dejó el estilo stalinista en las filas de la izquierda.

³⁰ Empleamos las dos categorías en el sentido más primigenio: entendiendo al socialismo como una fase previa y preliminar del comunismo.

trata de avanzar a un sistema no capitalista, no basta ganar el gobierno, y por lo mismo limitarse a *ocupar el aparato estatal* en funciones. Este tipo de Estado es “disfuncional” a tales propósitos; no sirve para ellos. Por lo mismo, es necesario disolverlo y reemplazarlo por un “Estado de nuevo tipo”, estructurado en términos muy diferentes y que en virtud de esta nueva estructura orgánica sea “funcional” al nuevo orden socioeconómico. De seguro, ésta fue la omisión más grave, la que de hecho implicaba desconocer el abecé más elemental de toda posible transición al capitalismo.

En este contexto valga precisar: cuando hablamos de Estado de nuevo tipo no estamos pensando en que “los jefes” sean ahora hijos de la clase obrera; el problema es otro: desplegar un sistema u organización social diferente; es decir, hay que entender al Estado como una forma de organización social, como un determinado sistema de posiciones (*status*) y, por ende, de relaciones o “normas” que ligan esas posiciones. Ésta es la estructura que debe transformarse pues *es ella la que determina la actividad que deben desplegar los que ocupan ese aparato*. Si hablamos de Estado burgués, lo que allí encontramos es una “estructura de mando vertical, que viaja desde arriba hacia abajo”, asumiendo la forma burocrática clásica (en lo militar y en lo civil); luego, si ese Estado es ocupado por obreros, sin destruir su forma orgánica, esos obreros empezarán también a mandar a los de abajo. Amén de separarse-aislarse de ellos y, por lo mismo, dejar de reflejar esos intereses. Por el contrario, *lo que el pueblo necesita es una estructuración del Estado que obligue a “mandar obedeciendo”*, como muy gráficamente lo han dicho los zapatistas. Esto significa una línea de mando del todo opuesta a la que exige el Estado actual: aquí, en el Estado que expresa el poder popular, *la autoridad y el mando suben desde abajo hacia arriba* y los dirigentes deben ser revocables en cualquier momento por la base que los ha elegido.³¹

³¹ La actual coyuntura mexicana permite ilustrar muy bien la importancia del principio de revocabilidad. Se sostiene que las llamadas “reformas estructurales” –todas ellas de corte neoliberal– no serán aprobadas si en el horizonte inmediato se deben efectuar elecciones públicas; por lo mismo, se propone agrupar todas las elecciones y distanciarlas todo lo posible en el tiempo. De este modo se podrían aprobar reformas antipopulares. Con ello se reconoce primero que esas reformas perjudican al pueblo; segundo, que se teme el control popular; tercero, que se busca evitar ese control y trabajar contra el pueblo. En este contexto queda muy claro la funcionalidad, para los de abajo, del principio de revocabilidad.

La segunda interpretación es del todo opuesta y subraya lo que la UP *hizo de más*. En este caso, se sostiene que los afanes anticapitalistas tenían que provocar ineludiblemente el quiebre institucional. Claro está, esta afirmación llega a ser tautológica y no es ella *per se*, sino *lo que de ella se viene deduciendo* lo que nos interesa rescatar. Para los que ahora manejan esta perspectiva, lo que correspondía era evitar esos afanes rupturistas y respetar las bases capitalistas del sistema, limitándose, por ende, a una política de reforma democrática. En este contexto, algunos señalan que el eventual avance a un orden no capitalista podría darse pacíficamente sólo en el caso de una mayoría electoral aplastante, de 75% o más. Como a la vez, en esta postura debe respetarse el control privado vigente de los medios de comunicación masivos (como TV, radio, etc.) y también dejar intactos el ordenamiento y estructura de las fuerzas armadas, la citada meta electoral y política deviene algo fantasmal y se muestra como puro tartufismo político. Amén de que se desconoce el factor o dato clave: la burguesía jamás entregará *pacíficamente* su poder.³² Después de todo, para eso ha construido y organizado el aparato estatal burgués.³³

Lo que esta postura termina por aceptar es el *derecho de veto de la burguesía* a los cambios sociales (económicos, políticos, etc.) que el gobierno en turno pudiera impulsar; en otras palabras: si emerge un gobierno ajeno a los intereses de la burguesía, sólo podrá transformar lo que la clase dominante (*i.e.* la burguesía) decida aceptar. Si se cruza esta raya, se estaría provocando un golpe de Estado y el consiguiente régimen dictatorial; luego, esta raya no debe cruzarse.

En esta postura, según se puede advertir, se asume también el axioma básico de la democracia burguesa: “Aceptamos el veredicto de la mayoría en tanto ese veredicto concuerde con nuestros intereses; es

³² En este punto, para nada debe olvidarse el crucial papel que juega el Estado imperial (Estados Unidos): no sólo suplementa las funciones coactivas del Estado nativo; de hecho, las dirige y si es necesario las suplanta. Una selección de documentos oficiales sobre la escandalosa intervención de Estados Unidos en el golpe militar y durante todo el periodo previo se encuentra en C. Opaso (comp.), *Frei, Allende y la mano de la CIA*, Santiago, Ornitorrinco, 1991.

³³ Para el caso chileno se ha hablado de “traición” de los militares. Esto es engañar al pueblo y mistificar al núcleo del aparato estatal. Muy al contrario, los generales se limitaron a cumplir muy bien la función que el sistema les ha encargado. Desconocer que los aparatos armados están para preservar las bases de sustentación del sistema y pasar a hablar “del pueblo uniformado” resultó criminal. Ni siquiera ayudó a impulsar alguna mínima división en las filas del ejército, aunque las condiciones para ello hubieran estado presentes.

decir, en tanto la mayoría vote por la minoría. Pero si la mayoría vota por la mayoría, se acaba la democracia”.

La moraleja que se desprende es muy clara: los trabajadores deben aceptar la matriz capitalista del sistema y abandonar sus afanes por trascenderlo. Su lucha, por ende, debe limitarse a ciertas reformas que junto con permitirles una mejor condición económica, sean aceptadas por la clase dominante.³⁴

En esta perspectiva, el estudio crítico y objetivo de la experiencia de la Unidad Popular chilena no puede ser aceptado: resulta peligroso. Para la ideología dominante esta experiencia debe ser olvidada, y si algo de memoria queda debe ser deformada y presentada como lo que no fue. Por nuestro lado, el afán es muy diferente: se trata de llamar a estudiar a fondo esa experiencia: se trata de *aprender de sus errores*, que es uno de los requisitos para transformar las derrotas en victorias ulteriores; es decir, se trata de estudiar no para agachar la cabeza sino para volver a rebelarse, esta vez –esperamos– con mejor suerte.

BIBLIOGRAFÍA

- Allende, Salvador, “Mensaje al Congreso”, 21 de mayo de 1972. Una recopilación de discursos de Allende en el periodo, en S. Allende, *La vía chilena al socialismo*, Madrid, Fundamentos, 1998.
- Corvalán Lepe, Luis, *Camino de victoria*, Santiago, s.e., 1971.
- Frenkel, Roberto, *Salarios, precios y control social*, Santiago, mimeo, 1972.
- Marx, Karl (1973), *El Capital*, México, FCE, tomo I, 1973.
- Mistral, C., *Chile: del triunfo popular al golpe fascista*, México, ERA, 1974.
- Opasso C. (comp.), *Frei, Allende y la mano de la CIA*, Santiago de Chile, Ornitórrinco, 1991.
- Pinto, Aníbal, “Concentración del progreso técnico y de sus frutos en el desarrollo latinoamericano”, en A. Pinto, *Inflación: raíces estructurales*, México, FCE, 1975.
- Sader, Emir, *Movilización de masas y sindicalización en el gobierno UP*, Cesó, Santiago, Universidad de Chile, 1971.

³⁴ Prácticamente toda la actual dirección del Partido Socialista chileno se sitúa en esta posición; de hecho, este partido ha perdido su antigua dimensión y se ha transformado en un partido del todo burgués, incluso, con muy fuertes afanes neoliberales. El actual gobierno chileno, dirigido por Ricardo Lagos, es una muestra escandalosa de los afanes de esta nueva y advenediza burguesía, cínica, trepadora y corrupta.

Vuskovic, P., *Obras escogidas sobre Chile, 1964-1992*, Santiago, Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar, 1993.

REFORMA AGRARIA EN CHILE: A TREINTA AÑOS DEL SETENTAITRÉS Y A CUARENTA DE SU COMIENZO. PROPOSICIONES, RUPTURAS Y DERROTEROS

José Bengoa*

La reforma agraria fue el proceso de cambios sociales, económicos y políticos de mayor importancia que ocurrió en Chile durante el siglo XX. Destruyó las instituciones de dominación y subordinación de más “larga duración” en la sociedad chilena: el latifundio, la hacienda y el sistema de inquilinaje o servidumbre rural, sobre las que se habían levantado el Estado, la sociedad y la cultura tradicional del país. La historia social de Chile puede comprenderse en el “antes y después” de la reforma agraria, y muchos de los procesos económicos, demográficos e incluso políticos del periodo se derivan de los cambios ocurridos en la estructura rural del país.

I. PRIMERA PROPOSICIÓN: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Al igual que numerosos otros fenómenos de carácter histórico, la importancia de la reforma agraria sólo recientemente ha venido siendo reconocida. Durante muchos años predominó el análisis de este proceso como si se tratara de una opción de “políticas públicas” realizada arbitrariamente por los gobiernos de la época; se analizaban sus resultados según la calidad de sus propuestas y finalidades, el logro y eficiencia de sus objetivos y los resultados económicos y sociales que

* Licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Chile con estudios de posgrado en Antropología y Ciencias Sociales. Autor del libro *Historia del pueblo mapuche*, Santiago, 1995. Fue rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; dirigió la Comisión de Pueblos Indígenas (1990-1994), creada por el presidente Patricio Aylwin.

arrojó.¹ Es así que en muchos casos se centró el análisis en curiosos estudios de costos y resultados, cálculos econométricos destinados a demostrar la ineficiencia del proceso, etc. Desde el ámbito político se la analizó como el eneguecimiento ideológico de un sector del espectro político y como parte de las alternativas políticas existentes en la época.

¹ Se señala en un reciente trabajo, bajo el subtítulo “Reforma Agraria del gobierno de don Salvador Allende Gossens [...] Este gobierno fue menos exitoso en el resto del proceso agrario. Así por ejemplo no se definió con mayor claridad la organización interna del sector reformado [...] Otro aspecto negativo lo constituyó el comportamiento productivo del sector reformado. A pesar de la inversión estatal, la producción agropecuaria no aumentó como se esperaba. Por esta razón, se tuvo que incrementar la importación de alimentos, tensionando la balanza de pagos”, Gladis Armijo y Héctor Caviedes, “Vicisitudes y cambios en el mundo rural chileno”, en *Anales de la Universidad de Chile*, Sexta Serie, núm. 5, octubre de 1977, pp. 13-30. Estos autores, como muchos otros, no hacen más que repetir una larga tendencia, que no se funda en datos ni en la crítica histórica. Nuestra perspectiva histórica de análisis es totalmente diferente y más bien se sorprende de que en las condiciones existentes en el “Chile popular”, tomas y movilizaciones permanentes, paro de camiones, convulsión en la comercialización, inflación desorbitada, etc., hubiese algún grado de producción de alimentos y la agricultura no se hubiera desplomado absolutamente. Los estudios más detallados muestran que se produjo un fenómeno diferente. Los campesinos se apropiaron de las tierras colectivizadas y comenzaron a producir a su modo y manera tradicional, aportando importantes volúmenes de alimentos a la población por medios informales e incluso a través de lo que se denominó el “mercado negro”. Hay que decir además que en las condiciones existentes la cosecha del año 1973-1974 fue bastante mejor a la de años anteriores, lo que mostraba que incluso las unidades reformadas de carácter colectivo comenzaban a funcionar adecuadamente. Programas como el Banco Ganadero de la Corfo, la industria azucarera y muchos otros, mostraban, a pesar de la crisis institucional y el colapso financiero, claros signos de crecimiento. El índice de cereales por habitantes muestra que en el periodo 1968 a 1970 la producción fue de 1.091 con un índice de 97; de 1971 a 1973 fue de 937 con un índice de 84, y de 1974 a 1976 fue de 742 con un índice de 66. A partir de 1977 se recupera un índice de 849 en términos de producción, y por habitante de 76. Cabe señalar que durante 1971 a 1973 las importaciones de cereales subieron respecto al periodo anterior de 247 000 a 598 100 toneladas, pero durante el periodo siguiente se mantuvieron a razón de 573 000 toneladas al año. Esto tiene por efecto que a pesar de la caída de la producción en 13 puntos, el periodo de mayor disponibilidad de cereales por habitante será el de 1970 a 1973, con un índice de 108, que baja en el periodo posterior a 92 y se estabiliza a fines de la década de los noventa. Si además analizamos la disponibilidad de productos provenientes de chacras por habitantes se percibe que en el ámbito de la producción hay una baja en el primer periodo de la Reforma Agraria de 100 a 87 (1968 a 1970) y un aumento de 87 a 90 en el periodo 1970 a 1973, el cual se mantiene en el periodo posterior y sube a 109 a partir de 1977. En cuanto a disponibilidad, producción más importaciones, el periodo de mayor disponibilidad de productos de chacarería (porotos, papas, etc.) es el de 1970 a 1973 con un índice de 110, el cual baja en el periodo siguiente a 90, como consecuencia

Con el paso de los años la mayor parte de los analistas, tanto de derecha, centro o izquierda, van arribando a la conclusión de que se trata de un proceso histórico complejo, motivado por profundas razones y causas que devinieron en un imparable movimiento de cambio social, que no obedeció ni a los deseos, voluntades o capacidad política de quienes lo llevaron a cabo. Tal como ocurre en la historia, se supera incluso la conciencia de las personas que estuvieron involucradas. En el caso que nos ocupa, se produjo un extraño proceso, independiente de la voluntad política de los actores: ninguno de los programas de la reforma agraria logró los resultados esperados y el proceso siguió los más curiosos derroteros, muchas veces contrarios a los deseos de los propios actores, fuesen estos latifundistas, gobiernos, partidos políticos o campesinos involucrados.²

de la baja de importaciones. En cultivos industriales (aceites, azúcar, etc.) efectivamente hay aumento en el periodo 1968-1970 en la producción y disminución en el periodo de la Unidad Popular (UP): 109 para el primero y 86 para el segundo, el cual se recupera a 112 en el periodo 1974-1976, teniendo en cuenta que la cosecha de 1974 fue plantada y organizada antes e incluso durante el periodo del golpe de Estado de septiembre de 1973. En cuanto a disponibilidad de un índice de 100, en el periodo de 1971 a 1973 se llega a 112 y sube a 144, por el aumento de producción interna en 1974-1976. En carnes la situación es equivalente, aumentando el índice de producción de 100 a 117 en el primer periodo de la Reforma Agraria y bajando a 96 en el segundo. La disponibilidad en cambio se mantuvo en 102 durante el periodo de la UP. Si se mide el total de productos agropecuarios por habitante se ve que la producción aumentó en el primer periodo de la Reforma Agraria de 100 a 106 y bajó en el segundo (1971 a 1973) a 93. La disponibilidad de productos totales sin embargo aumentó de 100 índice de 1967 a 103 en el primer periodo y a 107 en el periodo de la UP, bajando a 90 en el resto de la década de los setenta, y bajando aún más en la década de los ochenta. Estos datos evidencian que la crítica a la Reforma Agraria como colapso de la producción agrícola no tiene ningún fundamento empírico ni histórico, y es de orden claramente ideológico. El acaparamiento, el mercado negro, las "colas" y la crisis en los sistemas de comercialización condujeron a esas percepciones y afirmaciones erróneas. Éstas se reiteran sin crítica ni análisis de datos, desde los mismos días de la UP. Cuando los campesinos y los pobres de hoy señalan y recuerdan que en ese tiempo a pesar de las colas se comía, sus impresiones nostálgicas están apoyadas por las estadísticas. Véase María Elena Cruz y Cecilia Leiva, *Disponibilidad de alimentos básicos en Chile, 1965-1979*, Grupo de Investigaciones Agrarias. Academia de Humanismo Cristiano, 1981. La crítica productivista es reiterada en el libro de José Garrido, *Historia de la reforma agraria en Chile*, Editorial Universitaria, 1988. Numerosos trabajos repiten estas monsergas.

² El caso más paradigmático a nuestro modo de ver lo constituye la "rebelión silenciosa" de los campesinos al sistema de organización colectiva de la reforma agraria, en el seno del sector reformado. Durante el gobierno de la democracia cristiana se trató de

Por ello hablamos de “rupturas y derroteros”. Rupturas, porque la reforma agraria provocó las más profundas rupturas en la estructura profunda de la sociedad chilena, y derroteros, porque las consecuencias de esas rupturas no estaban en manos de los actores del momento; no las podían controlar, y siguieron distintos caminos: “consecuencias no esperadas”, “resultados no deseados” e incluso “efectos indeseados”. ¿Quién iba a suponer que el gran salto exportador del Valle Central de Chile a partir de la década de los ochenta iba a ser producto de la pulverización de la propiedad agrícola, y de su traspaso, vía un ágil mercado de tierras, a empresas de rango medio altamente capitalizadas? ¿Quién de los actores que propulsaron la reforma agraria (campesinistas o colectivistas) pensó siquiera —o deseó— que el fin del inquilinaje, la campesinización de los antiguos siervos o su organización en cooperativas, iba a producir un masivo subproletariado rural disponible frente a un mercado de trabajo de carácter salvaje y no regulado? ¿Quién pensó en la globalización de los mercados de la década de los noventa, y que la reforma agraria no se hacía para alimentar a los chilenos sino para exportar productos altamente sofisticados a los mercados internacionales?

establecer un sistema cooperativo en los “asentamientos campesinos”. Durante el periodo socialista se trató de “colectivizar” la tierra de acuerdo con las ideas en boga en esos años. Los campesinos, al igual que lo hacían en las antiguas haciendas, reorganizaron —a veces clandestinamente— sus producciones familiares. Aumentaban sin permiso de las autoridades la cantidad de animales en propiedad campesina; sembraban en forma individual; hacían todo tipo de “medierías”; en fin, “burlaban” el sistema organizacional propuesto desde fuera del campo por los funcionarios del Estado. Ésta es una de las explicaciones de la nota anterior, en que a pesar de la crisis no se desploma la agricultura, e incluso en los productos netamente provenientes de la empresa familiar campesina —las chacras por ejemplo— crece. Al final del periodo de Salvador Allende muchos “asentamientos” estaban, en los hechos, subdivididos entre las familias campesinas, como se pudo comprobar en los estudios que realizamos en ese momento y que también hizo el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria (ICIRA). Los antiguos inquilinos se “atrincheran” en sus talajes, goces y raciones, sobre todo en el periodo de crisis. El antiguo “asedio interno” de las economías campesinas a la economía hacendal se produjo en la Reforma Agraria. Véase Solon Barraclough y J.A. Fernández, *Diagnóstico de la Reforma Agraria chilena*, México, Siglo XXI Editores, 1974. Estas tendencias ya son percibidas cuando comienza el proceso, y se acentúan en los años siguientes. Los campesinos se habían tomado al pie de la letra la consigna “la tierra para quien la trabaja”, y acumulaban ganados en sus talajes y ampliaban sus goces como lo demuestra el estudio de ICIRA, *Evaluación preliminar de los asentamientos de la Reforma Agraria de Chile*, Santiago de Chile, 1967.

La perspectiva de análisis es fundamental, de lo contrario no vale la pena comenzar a discutir nuevamente sobre este asunto. Volverán las mismas “monsergas” de siempre: los latifundistas o sus corifeos señalando el alto grado de sufrimiento que estos hechos provocaron, y los actores defendiendo “que lo que hicieron, lo hicieron bien”. La perspectiva acá es del todo diferente: nadie tuvo la razón, nadie ganó en sus propuestas; no existió en nadie la claridad suficiente para poder comprender el proceso y las diferentes direcciones que asumía. Como todo proceso histórico los resultados son producidos como consecuencia de las contradicciones que ocurrieron. La república francesa, para citar un caso histórico, bien conocido, es hija tanto de la Bastilla como del Terror y también de la Restauración. Es la contradicción y choque de las diversas posiciones, actores, discursos y acciones asumidas, lo que finalmente produce el resultado histórico. Hoy en día, con alguna distancia, podemos observar las rupturas que provocó la reforma agraria y los diversos derroteros que de allí surgieron.

2. SEGUNDA PROPOSICIÓN:

TREINTA O CUARENTA AÑOS DESDE LA REFORMA AGRARIA

Las fechas en la historia no son casuales ni arbitrarias; más aún, la historia se hace, se comprende y organiza a partir de periodizaciones. La reforma agraria en Chile puede ser definida históricamente a partir de diferentes hitos. La comprensión del fenómeno será diferente dependiendo de la cronología adoptada.

El año 1962 y el inicio del debate que conducirá a la Ley de Reforma Agraria del gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez es una fecha de importancia.³ En esa legislación por primera vez en el siglo XX y en la historia de Chile se sometía a la propiedad privada a algunas limitaciones. Si el predio agrícola estaba abandonado, el Estado podía

³ Se trata de la ley número 15.020 del año 1962. Como es evidente, la Reforma Agraria en Chile es una acción del Estado, provocada por numerosos factores que iremos analizando en este trabajo. Si bien existía una débil “demanda campesina”, no se puede comprender el fenómeno como respuesta a la “revuelta campesina” como en muchos otros casos latinoamericanos. Véase R. Urzúa, *La demanda campesina*, Santiago, Ediciones Nueva Universidad, 1967.

expropiarlo y constituir en el lugar una colonia de campesinos.⁴ El segundo momento es 1967, en que se debate en el parlamento y se aprueba la segunda ley de Reforma Agraria, en la cual se restringe aún más el “derecho de propiedad”, otorgándole un sentido social.⁵

El Estado podía expropiar un predio agrícola bajo la causal de que fuese muy grande; esto es, que tuviese más de 80 hectáreas de riego básico (hrb)⁶ o que junto a esto existieran situaciones sociales y de trabajo inadecuadas, incorporando un elemento de carácter extraordinariamente subjetivo: la opinión de los campesinos sobre sus condiciones de vida y de trabajo dentro de la hacienda.

Si es difícil analizar el momento de la partida del proceso de cambios agrarios ocurridos en Chile, es también muy difícil comprender el momento en que este proceso termina. Nuestra opinión, fundada por cierto en diversos argumentos y datos empíricos, es que se trata de un mismo fenómeno que comenzó con la reforma agraria, de 1962 a 1973, y continuó con la denominada “contrarreforma agraria”, desde 1972 hasta 1978, cuando se “regulariza” mayoritariamente todo el sistema de propiedad rural en Chile. Devoluciones de predios a sus antiguos propietarios; entrega de parcelas a los campesinos beneficiarios del proceso; remates de tierras sobrantes; traspaso de enormes propiedades a las empresas forestales; en fin, un proceso de cambio de la propiedad

⁴ No es necesario recordarlo, pero ése es el único periodo, 1962 a 1973, en que esta restricción a la propiedad ha existido en Chile. Hoy en día un predio agrícola o forestal puede estar absolutamente abandonado por sus propietarios, y no existe ningún mecanismo del Estado para “expropiarlo”, ni menos aún para entregar esas tierras abandonadas a campesinos. En la actualidad no hay límite a la propiedad privada, ni en cuanto a tamaño —apropiación en manos de una sola persona de enormes espacios territoriales— ni condicionamiento al uso de la tierra.

⁵ Se trata de la ley 16.640 de la Reforma Agraria dictada en 1967. Durante la primera parte del gobierno de don Eduardo Frei Montalva, se ocupó la anterior ley, aplicándola con mayor rigor. Esta ley requirió una reforma constitucional en que se consagró el carácter social de la propiedad.

⁶ Se trataba de una medida de equivalencia, en que una hectárea de riego básico equivalía a una hectárea física promedio, regada del valle del río Maipo. Este tecnicismo condujo a numerosos equívocos posteriormente, ya que por ejemplo en el sur del país un predio de cientos de hectáreas no lograba la equivalencia, cuestión que no siempre fue comprendida por los campesinos, sobre todo en el periodo de movilización campesina. En el caso de la actual décima región del país, esto es la zona de Osorno, Valdivia y Llanquihue, el gobierno de Frei negoció con los agricultores regionales una tabla de equivalencias superior a la del resto del país, considerando el grado de capitalización que poseían esos predios. Esto fue posteriormente otro motivo adicional de conflictos.

agrícola que no se detiene hasta comienzos de la década de los años ochenta, y que continuará por la vía del mercado de tierras, posteriormente.

La transformación de la estructura agraria de Chile se inició con la primera reforma agraria (1962-1973), o “Reforma del Macetero” como irónicamente la bautizaron sectores de la izquierda. Fue cuando se rompió simbólicamente con el derecho monopólico que sobre la tierra poseía “la clase terrateniente chilena”.⁷ Éste no es un hecho menor; este grupo social se había apoderado de las tierras del Valle Central, en particular, en el periodo de la Conquista. Había sido su botín de guerra. Manifestaba el “derecho del más fuerte” ya que no podía ostentar el “derecho del primer ocupante”, las dos fuentes clásicas del derecho de propiedad. La propiedad se había transmitido en Chile, existiendo hasta la década de los años sesenta un reducido mercado de tierras, “mercado cautivo”.⁸ A partir de los debates iniciados con ocasión de la “Alianza para el Progreso” la

⁷ La nomenclatura no es tampoco un asunto de menor importancia histórica. La historiografía del periodo trató de aislar a la “oligarquía terrateniente” de otras supuestas capas o sectores de la “clase alta” chilena. Para ello utilizaron el apelativo “latifundistas”, suponiendo que había sectores de la “burguesía” que no estaban relacionados con el mundo rural. La principal conclusión histórica que podemos sacar del proceso de la reforma agraria es que estas tesis estaban equivocadas, ya que *todo* el sector —estrato, grupo o como se denomine a “la clase alta chilena”— estaba altamente relacionado entre sí y tenía en el monopolio de la propiedad de la tierra la fuente de legitimación de su poder político “natural”. Siempre se pensó que había un sector de la clase alta, ligado a las finanzas e industria, que no tenía relaciones rurales e incluso que las menospreciaba. El comportamiento político posterior de todos los sectores de la derecha (y con incrustaciones muy poderosas en el seno de partidos de centro) va a demostrar que estas tesis de las dos oligarquías o de las dos burguesías (o de una oligarquía antigua diferenciada de una burguesía moderna) son absolutamente falsas. El corte de lo rural con lo urbano se producía solamente entre las clases medias emergentes que no poseían relaciones privilegiadas con el mundo rural y que se habían constituido en torno del monopolio de la cultura o así lo comprendían. De este sector —clases medias urbanas— surge el “sentimiento antiaristocrático” que va a tener su proceso de acumulación en la primera mitad del siglo xx y su principal consecuencia en la reforma agraria.

⁸ J. Bengoa, *Historia social de la agricultura*, tomo II, “Haciendas y campesinos”, Santiago, Editorial Sur, 1991. Véase también la detallada explicación de María Rosaria Stabili en su libro *El sentimiento aristocrático*, Santiago, Editorial Andrés Bello, 2003. Los testimonios y análisis de este trabajo historiográfico son concluyentes acerca del carácter cautivo de la propiedad en el seno de una clase con autoconciencia de monopolizar la propiedad de la tierra. A esta norma se escapan solamente las zonas fronterizas del sur y algunas áreas donde la propiedad se había subdividido permitiendo el ingreso de campesinos europeos migrantes, como en Los Andes y San Felipe en el valle de Aconcagua.

propiedad irrestricta se pone en cuestión.⁹ Queremos llamar la atención sobre el carácter simbólico que este fenómeno tuvo. Mirado con la lejanía del tiempo, se percibe la importancia del acto. Es un reconocimiento, mínimo dada la crítica al latifundismo que ya existía en la sociedad chilena, del carácter relativo –social se diría posteriormente– de la propiedad y no de su relación con un “derecho natural” preestablecido.

La crítica a la propiedad rural provenía de tres sectores, a saber: de la clase media que había emergido fuera del ámbito rural a fines del siglo XIX y se había desarrollado al amparo del Estado, la educación y la cultura durante el siglo XX; de la clase de ex campesinos denominada en ese entonces “clase obrera” que renegaba de las condiciones sociales y de dominación cultural (servidumbre) del campo, y finalmente de la Iglesia católica, que imbuida de principios sociales y morales modernizadores, provocó la mayor ruptura ideológica cultural en el seno de las élites políticas en la segunda mitad del siglo XX.¹⁰

A partir de ese momento, 1962, comienza un proceso que no podrá ser controlado por ninguna fuerza política: la convicción de que la

⁹ El origen de la primera reforma agraria se encuentra en los compromisos que el gobierno de derecha presidido por el presidente don Jorge Alessandri se vio obligado a asumir en Punta del Este el año 1961. La apertura a “la llave de la propiedad rural” realizada por uno de los líderes más emblemáticos de la derecha chilena tuvo un adicional poder simbólico. Alessandri era gerente general y luego presidente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de Puente Alto, empresa también paradigmática de lo que podía y pretendía realizar el “capital nacional”. Este hecho provocó numerosas confusiones en su momento, ya que aparecían Alessandri, su familia y su entorno, como representando a un sector, sin intereses rurales, de la clase alta chilena. Aunque no sea más que una anécdota y una curiosidad, se decía que el presidente solamente poseía una “parcela en Malloco”. Ante la sorpresa de muchas personas –entre ellas de quien esto escribe– la “parcela” fue posteriormente afectada por la reforma agraria por poseer más de la cabida mínima, 80 hectáreas de riego básico. Las familias Matte y Alessandri han sido analizadas en el libro de Rosaria Stabili acerca del “sentimiento aristocrático” de la clase alta chilena y allí puede verse la imbricación existente, a pesar de no haber tenido un origen rural.

¹⁰ El periodo histórico en este sentido puede ser incluso abierto al año de 1958 en que se producen dos fenómenos de la mayor importancia, la primera huelga campesina en la zona de Molina (Talca), apoyada por el obispo de esa ciudad don Manuel Larrain, de evidente proveniencia latifundiaría e incluso aristocrática, y la irrupción en la escena política del “freísmo”, con la candidatura emergente de Eduardo Frei Montalva a la Presidencia de la República que acentuaba su carácter urbano y su afirmación antioligárquica y antirural-latifundiaría. Véase el conocido estudio de Henry Landsberguer y Fernando Canitrot, *Iglesia, campesinos e intelectuales. La huelga de Molina*, Santiago, Editorial del Pacífico, 1967.

estructura tradicional agraria es la causante del subdesarrollo nacional, de la falta de un mercado interno, de desequilibrios regionales insuperables, de desigualdades inaceptables y de inestabilidad en el sistema político. Se construye el consenso cultural antilatifundista que superará a los actores que estaban a favor del proceso de reforma agraria y que explicará por qué después del golpe de Estado de 1973, la Junta Militar de Gobierno no retrocede a la situación anterior a la reforma, sino que acentúa el proceso de transformaciones que venía en marcha; dándole un sentido diferente, pero restituyendo solamente en forma parcial los latifundios expropiados, entregando gran cantidad de tierra a los campesinos en forma de parcelas y rematando públicamente la propiedad resultante de los predios reformados. En muchas otras áreas de la economía, la junta de gobierno militar fue “restauradora”, no así en el plano de la estructura rural. Los militares condenaron vivamente y reprimieron con singular dureza la movilización de los “campesinos alzados”, pero no entregaron más que parcialmente a los antiguos latifundistas los predios que se les habían expropiado.¹¹ Esta ruptura, de carácter quizá más simbólico que real, provocó un proceso de desencadenamiento social imparable en el campesinado. El cuestionamiento del “derecho natural” de los propietarios a la posesión de la tierra (a la renta territorial) condujo a un lento pero sostenido proceso de organización —“toma de conciencia” o “concientización”, se le denominó—, movilización y reivindicaciones de los campesinos. Es lo que denominamos la “protesta campesina”. Ya en los años cuarenta había habido

¹¹ La represión en el campo fue extremadamente dura; quizá más aún que en el medio urbano. Lonquén es un caso paradigmático de represalias rurales, en que policías, ex latifundistas y “chusma” asesinan a campesinos que habían participado en el proceso. Los detenidos desaparecidos de Buin, Valdivia, Panguipulli y numerosos lugares más son una expresión de esta reacción. Posteriormente la Junta Militar dicta el Decreto 208 que se aplica a todos los campesinos que habían participado en sindicatos agrícolas o que habían actuado en movilizaciones campesinas. Éste es un caso de “lista negra” oficial. A quienes se les aplicaba este decreto se les negaba el derecho a obtener parcelas de la reforma agraria y se les obligó a esconderse o a migrar. A pesar de ello, la Junta Militar no canceló la personalidad jurídica de las confederaciones y federaciones de sindicatos agrícolas, cuestión que sí hizo con las organizaciones sindicales urbanas y mineras que fueron prohibidas legalmente. Los latifundistas expropiados, por su parte, creyeron que se produciría un proceso de restauración total de sus predios, cuestión que no ocurrió. Es extraño, pero sintomático, que el proceso de “contrarreforma agraria” estuviera a cargo de ministros provenientes de los Carabineros de Chile, cuyos oficiales procedían y proceden de la clase media, que argüían conocer el mundo rural por su experiencia policial.

un tímido proceso de organización, movilización y protesta campesina; sin embargo, solamente a partir de la acción del Estado, y en particular de las leyes de sindicalización campesina del año 1967, se va a producir la masiva organización de este sector de la sociedad.¹² Este proceso de “deservilización” de un enorme sector de la sociedad chilena fue sin retorno. En el ámbito sociocultural, es el proceso de cambio más importante que vivió la sociedad chilena en la segunda mitad del siglo XX.

En definitiva: percibimos un proceso de cambios en la propiedad de la tierra y en las relaciones de subordinación que se inicia a comienzos de los años sesenta y que culmina en los años ochenta, transformando radicalmente la estructura económica, social y cultural del mundo rural y rompiendo las relaciones urbano-rurales que habían marcado y constituido quizá a la sociedad chilena en el largo periodo anterior.

3. PRIMERA RUPTURA: EL FIN DEL LATIFUNDIO Y LA PULVERIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL

La primera ruptura es evidente. A partir de la reforma agraria se pulveriza la propiedad de la tierra y se constituye por primera vez en Chile un “mercado de tierras”.

Las cifras son contundentes y bien conocidas. En el año de 1965 existían en el país 174 845 propiedades agrícolas, de las cuales 5 657 poseían más de las comentadas 80 hrb, controlando más de un millón de hectáreas de 1 800 000 que componían la superficie agrícola, forestal y ganadera del país. En el de año 1980, una vez concluidos los procesos

¹² En los años veinte como consecuencia de la crisis salitrera, los que regresan a la zona central, denominados “nortinos”, realizan numerosas huelgas y acciones de protesta en las áreas rurales cercanas a Santiago. Nuestro análisis historiográfico muestra que no afectó al inquilinaje tradicional de las haciendas. Lo mismo ocurrió en los años treinta en el levantamiento de Ranquil, que fue realizado por colonos desplazados de la zona de Lonquimay en el sur de Chile. En los años cuarenta, en el contexto del Frente Popular, se produce un proceso de sindicalización campesino que dura de 1938-1939 hasta 1941 cuando se suprime mediante una orden ministerial la sindicalización en el campo. En ese momento la mayor parte de los sindicatos se organizaron en fondos de propiedad del Estado o de la Beneficiencia Pública, caso de la enorme Hacienda Mariposas, en Talca; Rupanco, en Osorno, y Choapa, en el Norte Chico. En ese periodo la organización autónoma del campesinado no alcanzó a los inquilinos de las haciendas que estaban en manos de propietarios privados. Allí se mantuvo el régimen de inquilinaje y la cultura de servidumbre hasta entrada la década de los años sesenta.

de contrarreforma agraria, las propiedades eran 302 000 y las mayores de 80 hrb eran solamente 2 917 predios, pero controlando solamente 300 000 hectáreas. Donde antes del proceso de cambios existía sólo un enorme predio, posteriormente surgieron decenas. Fue un proceso masivo y radical de subdivisión de la propiedad.¹³

Cuadro A
Número de predios y tierra expropiada (1965-1973)

año	núm. de predios	Superficie (ha)			total
		riego	secano arable	secano no arable	
1965	99	41 300	21 463	476 960	539 723
1966	265	57 800	38 724	428 647	525 171
1967	217	50600	32 269	202 020	284 889
1968	223	44 700	36 773	574 394	655 867
1969	314	54 300	86 451	728 097	868 848
1970	297	41 600	398 339	778 410	1 218 349
1971	1 374	177 600	378 377	1 472 622	2 028 599
1972	2 189	211 800	308 735	2 488 711	3 009 246
1973	831	49 800	199 769	585 639	835 208
total	5 809	729 500	1 500 900	7 735 500	9 965 900

Fuente: Elaboración de Soledad Valdés sobre la base de datos de la Corporación de la Reforma Agraria (Cora). Citado en José R. Garrido, *Historia de la Reforma Agraria en Chile*, Santiago, Editorial Universitaria, 1988, cuadro VI.5, p. 174.

¹³ El estudio de Sergio Gómez, José Miguel Arteaga y María Elena Cruz es concluyente. Es además una fuente indispensable para el estudio detallado de la reforma agraria. Fue realizado de 1978 a 1980 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Son cuatro tomos con apéndices. Los investigadores realizaron un amplio trabajo de terreno, analizando en casos concretos el proceso de pulverización, el cual muestran con planos. Además estudiaron la historia de cada uno de los predios, la mano de obra involucrada, los sistemas de cultivo, etc. Lamentablemente no existen estudios tan amplios y semejantes para comprender en detalle la evolución posterior de la propiedad rural y establecer los nuevos procesos de monopolización. Hay estudios parciales y locales que permiten percibir que en ciertas áreas el proceso de subdivisión continuó su marcha en la década de los años ochenta e incluso en la de los noventa, áreas cercanas a las ciudades, y que en cambio en otras áreas ha comenzado un nuevo proceso de reconstrucción de grandes predios, muy diferentes por cierto al pasado. S. Gómez *et al.*, *Cambios estructurales y migraciones en el sector rural*, Santiago, Flacso, 1981; véase también O. Núñez, *Evolución de la propiedad de la tierra y uso del suelo en la comuna de Paine. 1930-1993*, tesis de licenciatura en Historia, Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 1995.

El mecanismo fue el siguiente. Durante los tres periodos de la reforma se expropiaron todos los predios superiores a 80 hrb. En el primer periodo aquellos de enormes dimensiones que estaban en estado de abandono o que eran propiedad del estado o de instituciones estatales –tales como el Servicio Nacional de Salud– que habían sido heredadas de la Beneficiencia Pública de cuyo patrimonio eran parte. En la segunda parte del proceso, durante el gobierno de Frei, se expropiaron fundos también de gran tamaño, que aunque no estaban en estado de abandono, cumplían la causal de tamaño junto con causales relacionadas a infraestructura, intensidad productiva o condiciones de trabajo y habitación de los trabajadores. Finalmente en el periodo que se abre en 1970 se expropiaron todos los predios mayores del tamaño establecido y algunos donde se discutía su cabida. Los predios expropiados fueron 5 809, que implicaban 9 965 900 hectáreas; esto es, casi diez millones de hectáreas en un país con menos de dos millones de hectáreas con aptitud propiamente agrícola-ganadera o para plantaciones forestales.

En algunos predios expropiados, el Estado dejó una reserva de tierra al antiguo propietario, algunas veces de tamaño bastante grande.¹⁴ En esos nuevos predios es quizá donde comenzó a producirse una agricultura de mayor grado de intensidad, ya que como la expropiación no afectaba ni a la maquinaria ni a los animales, esas reservas se “so-brecapitalizaron”.¹⁵

La “contrarreforma agraria” devolvió a los antiguos propietarios 2.8 millones de hectáreas de los 10 millones expropiados. A los campesinos les entregó un poco más de 3 millones y salieron a remate 4 millones de hectáreas de tierra. De los 5 809 predios expropiados solamente se restituyó tierras a 3 677. En la mayor parte de los casos estas restituciones fueron parciales. Se “revocaron” solamente las ex-

¹⁴ Hubo algunos casos en que ocurrió una “segunda expropiación”; esto es, se había dejado una reserva superior a 80 hrb y años después se volvió a expropiar. No son muchos pero vale consignarlos.

¹⁵ En el trabajo de Sergio Gómez, J. M. Arteaga y M. E. Cruz, *Cambios estructurales...*, *op. cit.*, se detallan muchos casos donde la reserva se quedó con las tierras preferenciales, las de mejor calidad y muchas veces donde había frutales y con una dotación importante de maquinaria. La restitución parcial de las tierras expropiadas transformó a estos antiguos latifundios en “empresas agrícolas” en un corto periodo de tiempo, y explica en buena medida el proceso de crecimiento y desarrollo de la agricultura chilena en el periodo inmediatamente posterior a la reforma agraria.

propiaciones que se habían realizado en el último periodo y que aún no se habían formalizado legalmente.¹⁶

Se repartieron 36 746 parcelas y más de 10 000 sitios que se denominaron “casa y cerco” para quienes no habían logrado obtener una parcela. El proceso de otorgamiento de parcelas se inició el mismo 1973 y tuvo su momento culmen en 1975 (14 905 parcelas entregadas) y 1976 (10 988). Finalizó en 1979. La entrega de parcelas fue *manu militari* y dadas las condiciones imperantes en el país no hubo ningún tipo de reclamación. Se optaba a las parcelas de acuerdo con puntajes;¹⁷ los ex dirigentes quedaban fuera del proceso.

El tamaño de las parcelas fue relativamente grande; mucho más de lo que un campesino podía suponer y esperar, y mucho más de lo que con sus escasos medios de producción podía poner en actividad solamente con su familia. Se calculó un promedio de 8 hectáreas de riego básico (hrb) y finalmente el promedio nacional fue de 8.7 hrb, lo que significaba que en la zona de Buin el promedio de las parcelas fuese de 15 hectáreas físicas, pero en Cautín, de 120 hectáreas físicas, lo que implica un pequeño fundo. Esto imposibilitó a muchos campesinos a iniciar un proceso de producción sustentado; se endeudaron

¹⁶ En un estudio realizado en cinco comunas del país, bien representativas de diferentes zonas agrícolas, Buin, Coltauco, Ñiquén, Lautaro y Río Negro, se puede ver el proceso de pulverización. En Buin por ejemplo, zona central de mucha riqueza en sus suelos y tradicionalmente latifundista, se expropiaron 9 338 ha. Se revocaron, es decir se devolvieron a sus dueños anteriores, 1 062 ha; se restituyeron 2 007 ha; se le entregó a los campesinos 6 028 ha; se dejaron en bienes comunes de los proyectos de parcelación 517 ha; salieron posteriormente a remate 329 ha. de pequeños retazos que habían quedado como reservas de la Corporación de la Reforma Agraria (Cora), y se traspasaron a otras instituciones del Estado (ejército, carabineros, ministerio de Educación, bienes nacionales, etc.) 90.5 ha. Grupo de Investigación Agraria (GIA), *Capitalismo y campesinado en el agro chileno*, anexo estadístico, 1981.

¹⁷ El puntaje era por: a) pertenencia antigua en el predio, lo que otorgaba un punto, b) antigüedad, medio punto, y c) edad, en que el máximo de puntaje se daba a los de 30 a 40 años, y que entregaba cinco puntos, lo cual muestra el tipo de familia que se pretendía asentar. Se agregaba al puntaje saber leer y escribir, las cargas familiares y tener una especialidad agrícola. La Junta Militar incorporó a los antiguos administradores y dio puntaje a quienes tenían títulos técnicos y se habían desempeñado como tales en los antiguos fundos. No es masivo el caso, pero hubo muchos no campesinos que fueron beneficiarios de parcelas. También existió discriminación local, ya que los ex patrones tuvieron mucha influencia en la designación de los futuros parceleros mediante presiones a los funcionarios. El proceso se realizó en el periodo de mayor represión que ha habido en la historia del país.

con el banco, no pudieron pagar las cuotas exigidas por las parcelas y por el banco, y comenzó muy tempranamente un proceso de compra y venta de parcelas o retazos de ellas. Arriendos figurados a 99 años, ventas fraudulentas, promesas de “que si vendía seguiría trabajando en el lugar”; en fin, un proceso muy complejo que terminó con el sector reformado. Hoy en día deben quedar unos 10 000 herederos de los parceleros que recibieron las tierras, concentrados en áreas donde el mercado de tierras no fue tan agresivo; hay otras áreas sin embargo en que no queda prácticamente ningún parcelero de origen campesino.¹⁸

Éste es un aspecto no siempre considerado cuando se habla de la “contrarreforma agraria”. No sólo el Estado pulverizó la propiedad de la tierra mediante el complejo sistema de devoluciones parciales y remates, sino también permitió que las tierras de las parcelas entraran al “mercado de tierras”. Muchos predios antiguos que tenían parcelas colindantes se reconstituyeron parcialmente, muchas personas provenientes de fuera del sector agrícola compraron estas parcelas; además, las tierras entregadas en parcelas eran de mejor calidad que las restituidas y sobre todo que las sacadas a remate.¹⁹

Otro fenómeno importante fue que numerosos propietarios al recibir su predio restituido, lo vendieron de inmediato. Se había producido

¹⁸ Los estudios realizados en el campo en los años noventa nos muestran que los parceleros o áreas de parceleros, donde se escogió una estrategia de subsistencia –esto es, una vía campesina– se vieron mucho menos presionados a la venta de parcelas que en aquellas áreas donde estuvieron inmersos en una vía comercial. En el sur, cerca de Angol, hay un ex asentamiento donde aún permanecen todos los parceleros y ninguno ha vendido; en el Cónдор, por ejemplo, se mantiene hasta hoy un conjunto de elementos comunes y de solidaridad económica; en cambio en Aconcagua o Buin hemos visitado antiguos fundos donde prácticamente no queda ningún antiguo parcelero (Proyecto Fondecyt Vivir en la Subsistencia. 1997-1998). Hay que llamar la atención sobre un sector muy grande de parceleros que recibió la tierra y la vendió de inmediato. En Choapa, Norte Chico, en los primeros dos años (1974 y 1975) 50% de los parceleros vendió la tierra según el estudio que realizó Eugenio Maffei en 1978. “Diferenciación social en el campo y sector reformado”, *Boletín de Estudios Agrarios*, Santiago, Grupo de Estudios Agrarios (GEA), 1978, p. 65.

¹⁹ Medidas en hectáreas físicas, las tierras restituidas y parceladas son relativamente iguales en tamaño; medidas en cambio en hectáreas de riego básico, las parceladas son exactamente el doble de las otras. En 1980, los predios de más de 80 hectáreas controlaban 11 millones de hectáreas y los de mediano tamaño, de 10 a 80 hrb, 9.7 millones de hectáreas; sin embargo, medidos en hrb, los primeros sólo controlan 337 000 y los segundos 662 000, es decir, el doble en calidad. En los primeros se encuentran los predios forestales y ganaderos y en los segundos los huertos frutícolas, viñas, etcétera.

un quiebre en la mano de obra del predio, que en muchos casos les hacía imposible retomar la actividad agrícola en el sentido tradicional que conocían. Los precios de la tierra en esos primeros años de dictadura eran muy bajos y por lo tanto se deshicieron muchas veces fácilmente del predio que “creían perdido”. En muchas partes del país –principalmente en la zona central– se renovó el empresariado agrícola; un cambio de generación en que hijos o parientes jóvenes compraron o se hicieron cargo de los campos restituidos.

La única excepción fue el sector forestal. Allí se traspasaron las tierras de la Corporación de la Reforma Agraria (Cora) a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) o a otras entidades del Estado y posteriormente fueron sacadas a remate. Las listas de remates llenan las páginas de los grandes periódicos de fines de la década de los años setenta y comienzos de los ochenta. Enormes predios forestales salían a remate junto a pequeños retazos de tierras en medio de parcelaciones; antiguas casas patronales rodeadas de sus tradicionales parques, etc. Las empresas forestales de ese entonces se apropiaron a precios iniciosos de más de un millón de hectáreas de tierras aptas para la forestación o ya forestadas por el Estado en el periodo anterior. La mayor parte de los conflictos que existen hoy en día en la zona mapuche proviene de estas tierras que habían sido plantadas por los campesinos mapuches de los asentamientos y Centros de Reforma Agraria, que luego fueron sacadas a remate y pasaron a empresas forestales. Los campesinos mapuches reclaman con razón que esos bosques los plantaron ellos y por lo tanto que les pertenecen.²⁰

²⁰ Los análisis de tenencia de la tierra que pueden realizarse hoy en día están contaminados de varios fenómenos, lo que hace muy difícil despejar la situación. En primer lugar, se contamina de la existencia del latifundio forestal. Si a eso se agrega la concentración de la propiedad forestal tenemos una situación enteramente nueva y diferente al periodo previo a la reforma agraria. Hay empresas como Forestal Arauco que se empinan casi un millón de hectáreas de plantaciones de bosques. En segundo lugar existe un creciente proceso de concentración de propiedad vitivinícola, pero sin constitución de fundos continuos. Así algunas de las grandes empresas exportadoras poseen viñas en diferentes lugares de la zona central de modo de aprovechar los microclimas, tipos de suelos y diferentes calidades para su producción. Es muy difícil y relativamente inútil, por la vía de la tenencia, acercarse al problema de la concentración de la propiedad rural en Chile. Por el lado de la pequeña propiedad, la contaminación mayor proviene de la pulverización de la propiedad en las áreas periurbanas e incluso en áreas que hasta hace poco tiempo eran exclusivamente agrícolas con fines de vivienda, casa secundaria o parcelas de agrado y semiproductivas. Hay valles como el de Aconcagua en que la propiedad adquirió

En definitiva, el resultado no esperado, pero de la mayor importancia para el desarrollo de la agricultura capitalista y de exportación en Chile,²¹ fue la creación de un mercado de tierras como consecuencia de la pulverización de la propiedad. Ese mercado pasó por un primer periodo de instalación en que las distorsiones, producto de presiones locales, ventas fraudulentas, remates poco transparentes, etc., fueron la norma. Poco a poco el precio de la tierra se estabilizó y se establecieron los mecanismos normales de transacción, propios de un mercado constituido. El acceso libre a la tierra, por los capitales productivos, es el factor que explica el crecimiento de las plantaciones de exportación, tanto en la zona central con la fruticultura, viticultura y hortalizas, como en el sur con la explotación forestal.²²

4. SEGUNDA RUPTURA: EL FIN DEL INQUILINAJE Y LA “LIBERALIZACIÓN” DEL MERCADO DE MANO DE OBRA

Así como la tierra era un monopolio de la clase terrateniente y no existía más que un mercado de tierras cautivo, así también el mercado de

un valor tal que sufrió a fines de los años ochenta y sobre todo en los noventa una fuerte transformación hacia la parcelación con propósitos de agrado y productiva, incorporando capitales no rurales. Hay áreas absolutamente “rural-urbanas” en lo que hace treinta años era netamente campo. Para 1992 un estudio del Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional (Mideplan) señala que habrían en el país 177 200 pequeños agricultores, 9 800 medianas empresas agrícolas y 310 grandes empresas agrícola forestales. El estudio está realizado basado en las declaraciones del Servicio de Impuestos Internos, lo que implicaría que son unidades formalmente constituidas. Habría que agregar por tanto todas aquellas microunidades campesinas, propiedades alejadas, sistemas de aparcería, y tantos otros que no caen en el ámbito de la formalidad. Véase Óscar McClure, *¿Exclusión en Chile? De la desintegración a la pobreza integral*, informe presentado a la Organización Internacional del Trabajo OIT, Mideplan, 1994.

²¹Para un análisis de la “nueva agricultura” véase Cristobal Kay, “Chile’s neoliberal agrarian transformation and the peasantry”, *Journal of Agrarian Change*, vol. 2, núm. 4, octubre, 2002, pp. 464-501; también B. Portilla, *La política agrícola en Chile, Lecciones de tres décadas*, Santiago, Cepal, cuaderno núm. 68, 2000, y el excelente trabajo, aunque con más años, de Sergio Gómez y Jorge Echenique, *La agricultura chilena. Las dos caras de la modernización*, Santiago, Flacso, Agraria, 1988.

²²Se cumplió un esquema clásico de la economía: el ingreso del capital al campo requería liquidar la “renta de la tierra” no capitalista, y transformar el suelo en mercancía. El auge capitalista y exportador del Valle Central de Chile proviene de este hecho ya señalado insistentemente por la “economía clásica”, que no por clásica es menos actual.

mano de obra hasta antes de la reforma agraria estaba contaminado por la existencia del sistema de inquilinaje.

La servidumbre había acompañado la historia de Chile. A diferencia de otros países donde el sistema rural de sometimiento de la mano de obra había sido muy duro, en Chile no hubo revuelta campesina. Durante el siglo XIX se consolidó un tipo de propiedad agraria hegemónica, la hacienda. Contaron con el monopolio de la tierra y de la mano de obra. Los inquilinos, obligados, voluntarios, y más con otras denominaciones formaban la población de las haciendas; por fuera pululaba una enorme masa de desplazados, “torrentes” (campesinos migrantes), temporeros, golondrinas, cosecheros, peones, y en fin trabajadores que con diferentes denominaciones servían de mano de obra ocasional, temporal o itinerante.²³

La servidumbre no había podido terminarse tampoco durante el siglo XX. Era el mayor oprobio del país desde el punto de vista de las clases medias educadas de las ciudades. Los profesionales e intelectuales no podían concebir que en plena mitad del siglo XX en los campos se viviera como en la Edad Media; por ello, la imagen del feudalismo ocupó, y con razón, la mayor parte de la imaginaria de izquierda.

Un estudio realizado en 1965 acerca de la “demanda campesina” muestra con plena claridad que la “conciencia” de los campesinos que vivían dentro de las haciendas estaba extraordinariamente sometida a las condiciones de servilismo y dominación rural tradicional;²⁴ estudios posteriores muestran lo mismo. El único sector en el campo donde exis-

²³ G. Salazar, *Labradores, peones y proletarios*, Santiago, Ediciones Sur, 1987.

²⁴ Dice Raúl Urzúa que el grado de “subordinación objetiva” en que se encuentran sometidos distintos sectores campesinos muestra que los inquilinos sujetos a relaciones paternalistas serían los más subordinados”. (Raúl Urzúa, *La demanda campesina, op. cit.*, p. 227.) La “predisposición al cambio” de este sector era mínima, lo mismo que la “insatisfacción con la situación actual” o el “rechazo de una visión armónica de las relaciones de clase”, indicadores que utiliza la investigación sociológica. Independientemente de las críticas a este tipo de aproximación metodológica, es interesante saber que, discursivamente, los campesinos no expresaban su insatisfacción. Eso no significa que no existiera. En pocos años, muy breves, esa aceptación se transformó en rebeldía, organización y movilizaciones. Pero es preciso tener en cuenta este fenómeno para comprender los efectos que pudo tener el castigo en una conciencia campesina tan dominada por la subordinación tradicional. Otro estudio de enorme interés en el sentido que en Chile otorgamos a la “conciencia de subordinación” es el de Óscar Domínguez Correa, *Una oportunidad en libertad. Estudio del manejo de la mano de obra y la situación social de los trabajadores de los fundos de más de 100 hectáreas en la provincia de O'Higgins*, Santiago, Editorial del Pacífico, 1959.

tía cierta conciencia respecto a la explotación e iniqua dominación rural era el de los pequeños agricultores, en los pueblos, los que además habían logrado gracias a la educación pública comprender lo que ocurría en el mundo, más allá del sistema tradicional imperante.

La modernización de las haciendas con liquidación del inquilinaje —esto es, proletarización de la mano de obra— ocurrió en muy pocos lugares de Chile antes de la reforma agraria. La huelga de Molina del año 1958 fue una expresión puntual de lo que ocurría en ese lugar y en el vecino pueblo de Lontué, con las grandes empresas viñateras que habían liquidado el sistema de inquilinaje y habían agrupado a la mano de obra en poblaciones obreras. Se le había quitado a todos las “regalías”, teniendo su salario exclusivamente en dinero. Es interesante, al estudiar hoy día los pliegos de peticiones de todas estas primeras huelgas, que todos ellos tratan de afirmar los aspectos más campesinos en sus reivindicaciones: goces de tierra, talajes de animales, derechos de leña, etc., criticando que se los hayan quitado, y por ende criticando la “proletarización”.²⁵

Mirado a la distancia puede afirmarse que los trabajadores de las haciendas del Valle Central de Chile eran mucho más campesinos que obreros, entrada la sexta década del siglo XX.

Por ello la reforma agraria fue un complejo proceso que no se explica solamente en el campo mismo ni mucho menos desde el mundo rural, sino por las relaciones que se establecieron entre las clases medias urbanas principalmente y el campo. La hipótesis que surge de los datos y análisis del capítulo anterior es que el latifundio impedía el acceso a la tierra de las capas medias urbanas. Éstas habían nacido y crecido en la ciudad, pero con enorme añoranza por el campo, por la cultura campesina, por el ideario de propiedad rural. La oligarquía y su mercado restrictivo de tierras monopolizaba la tierra como elemento productivo, pero también como fuente de placer, significación y cultura.

²⁵ El comportamiento de las centrales sindicales es relativamente parecido. La Federación Campesina e Indígena dominada por los Partidos Comunista y Socialista, a pesar de lo que se podría suponer dada su ideología, apoyaba tanto o más las demandas por tierra y campesinistas de los trabajadores en la década de los años sesenta. Las ligadas a la Democracia Cristiana, ANOC y UCC primero, y luego Triunfo Campesino, eran más “asalariadistas”, si así pudiera decirse, al expresar mayor compromiso modernizador. La consigna agrarista de “la tierra para quien la trabaja”, levantada por la izquierda socialista y comunista, pegaba en las fibras campesinistas de los trabajadores rurales chilenos y obedecía a una realidad objetiva.

Muchos sectores urbanos de clase media provenían del campo, desde donde habían debido huir, generaciones atrás, y mantenían la “nostalgia rural” viva. La crítica contra el sistema de trabajo en el campo provino de las ciudades y de los “exiliados del campo”, los ex campesinos que habían tenido que transformarse en obreros, primero en las salitreras y después en las ciudades.

Lo diré de manera brutal: la “lucha por la tierra” en Chile la dieron los que no tenían tierra, los que la habían perdido, los que habían migrado, los que criticaban a los patrones por abusivos y “de horca y cuchillo”, los sectores obreros y medios urbanos que habían llegado a odiar al campo, pero que no podían vivir sin su recuerdo. No hubo “lucha por la tierra” en el campo y los pocos hitos que ha levantado la izquierda, Ranquil por ejemplo, son hechos aislados y de carácter muy particular.²⁶

A partir de 1960 se lanzaron masas de estudiantes al campo a “concientizar” a los campesinos, en una campaña que hoy nos produce asombro; en cambio, en ese momento le parecía evidente a todo el mundo urbano que había que ir al campo, en condiciones misioneras, a decirle a los campesinos que sus patrones los explotaban. Miles de estudiantes fueron primero a Choapa; luego siguieron más al sur. En 1962 el propio cardenal Silva Henríquez organiza la Misión General de evidente carácter concientizador, y hoy podríamos decir, subversivo. Con su chupalla de campo, el cardenal le decía a los campesinos que tenían derecho a la tierra. El obispo de Talca, don Manuel Larrain, llegó

²⁶ Ranquil fue una revuelta ocurrida en la zona cordillerana de Lonquimay. Los protagonistas no eran inquilinos de haciendas sino pequeños propietarios que habían sido muchos de ellos migrantes en Argentina, y como consecuencia de los conflictos de límites con ese país, fueron devueltos a Chile. El gobierno de la época —eran los años veinte— estableció varias colonias para esos campesinos repatriados. Posteriormente se produjo un conflicto de títulos de propiedad en el fundo donde los habían instalado y fueron trasladados a otro, Nitrito, en pésimas condiciones, lo que los llevó a asaltar una pulpería a la entrada del invierno ya que no tenían comida. A esa situación se suma la política insurreccional del Partido Comunista que en ese momento envió a su dirigente y activista Juan Leiva Tapia a la cordillera a promover el levantamiento, de acuerdo con una estrategia general aprobada por la Internacional Socialista, filial latinoamericana reunida en Montevideo, y a la cual asistió el profesor Leiva. Lo espectacular del hecho y su interpretación como la fundación de la alianza obrero-campesina en Chile es cuestionable ya que se trató de un caso muy particular. A estas conclusiones hemos llegado en una investigación en curso sobre esta materia que se presentará en el libro *Historia rural de Chile*, en preparación.

a afirmar que el “latifundio es un pecado”. Al revisar los escritos de la época, masones, católicos, democratacristianos y socialistas: en fin todos estaban contra el poder oligárquico que dominaba el campo. Menos los campesinos.

Este poder decisivo de la ciudad sobre el campo se mantuvo durante la reforma agraria, la que estuvo dominada por los funcionarios y en la que la participación campesina fue siempre un proceso de “convencimiento”, denominado “concientización”. Los funcionarios consultaban a los campesinos pero los convencían de las ideas que traían prefabricadas de las ciudades.

Los campesinos se sumaron a la reforma agraria al observar que el Estado por una parte los defendía y debilitaba la dominación patronal ancestral, y por otra parte les permitía ampliar sus condiciones campesinas: tierra, recursos, talajes, etc. No es fácil interpretar el “silencio campesino”. ¿Conciencia dormida? ¿Resistencia silenciosa? Hay elementos para ambas interpretaciones.²⁷ Los robos de los campesinos a la hacienda son en la historia bien conocidos. Hay historias que cuentan que los campesinos en las noches ensartaban las “galletas” o panes que les entregaba el fundo en las puntas de las lanzas con que estaban confeccionadas las rejas de las casas patronales. El hecho es que frente a la acción urbana y del Estado, a los campesinos en forma mayoritaria no les pareció mal y se sumaron a la movilización antilatifundiaria. Se transformó rápidamente el lenguaje y comenzaron a sonar discursos antipatronales cargados de rencor por los ultrajes pasados. Se recordaron los castigos, azotes, cepos, jornadas de sol a sol, alimentación deficiente, casas insalubres; en fin, se abrieron las historias de la humillación y la infamia.

Esta toma de conciencia del campesinado acerca de su historia pasada, de las condiciones de dominación social y sobre todo de la humillación de la servidumbre no ha salido más de la mentalidad rural. Hoy en día el discurso antipatronal se escucha del mismo modo que durante la reforma agraria y no ha podido ser erradicado; es el elemento cultural que justifica lo realizado, a pesar de las consecuencias que tuvo.²⁸

²⁷ Como puede ver el lector que conoce la bibliografía especializada, nuestra opinión es diferente y en algunos casos contraria a la de Brian Loveman, *Chilean struggle in the countryside*, Bloomington, Indiana University Press, 1975.

²⁸ Estas afirmaciones se fundamentan en decenas de “historias de vida” rurales que hemos recogido en los últimos años en nuestros proyectos de investigación. En un con-

Nuestra hipótesis es que junto con esta rebelión antipatronal, los campesinos vieron la posibilidad de ampliar sus economías campesinas. El “asedio interno” a las haciendas había existido siempre y era la expresión del interés del campesino de ampliar su economía familiar.²⁹ En muchos casos los inquilinos se transformaban en propietarios de animales, medieros de enormes cultivos, chacareros y demás, en verdaderos pequeños empresarios agrícolas, capaces de organizar la producción y la mano de obra y realizar faenas siguiendo pautas tradicionales. Los testimonios de quienes obtuvieron tierras y de quienes no las obtuvieron, muestran que la mayor parte de los campesinos que residían en las haciendas visualizaba la obtención de un tipo de propiedad parcelaria. Nunca se imaginaron que “la tierra para quien la trabaja” era otra cosa. Menos aún imaginaron que se transformarían en una cooperativa, en un asentamiento o en un sistema colectivo en que mantenían sus mismos pequeños trozos de tierra, y las tierras patronales debían ser trabajadas grupalmente; con obvias variaciones, pero finalmente como siempre.

Los sectores urbanos y de clase media vieron en la demanda parcelaria campesina un error y una consecuencia de “su bajo nivel de conciencia social”. Más aún imbuidos todos, de una u otra forma, en las ideas marxistas o socialistas que circulaban en la época, se produjo entonces enorme desconfianza respecto a lo que los campesinos querían hacer con sus tierras. Se vio con temor que el campesinado quería apropiarse de las tierras en su solo beneficio y transformarse de esa suerte en una clase social pequeñoburguesa, campesinado enriquecido, o fantasmas de esa naturaleza que flotaban en el aire revolucionario de esos años y del cual nadie podía fácilmente escaparse.

“La tierra para el que la trabaja” concluyó en un debate ininteligible: “la tierra para el que la trabaje en cooperativas”, “la tierra para el que la trabaje comunitariamente”, “la tierra para el que la trabaje co-

junto de historias de vida en poblaciones rurales de Panquehue, valle de Aconcagua, realizada por alumnos de antropología, los campesinos, a pesar de vivir en condiciones muy malas, consideran que haberse liberado del peso patronal es lo más importante ocurrido en sus vidas. Lo mismo hemos registrado en los estudios que realizamos en la cordillera de Nahuelbuta en el sur de Chile, que aparecen en mi libro *La desigualdad*, ya citado.

²⁹ El concepto es de Rafael Baraona y lo desarrolló en Ecuador en un estudio del Comité Interamericano de Desarrollo Agrario (CIDA), publicado en forma resumida en Óscar Delgado (comp.), *Las reformas agrarias en América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1965.

lectivamente”; “la tierra para el Estado”, dijeron finalmente al inventar los Cepros, o Centros de Producción, considerados como la “fase más adelantada” del socialismo en el campo por no pocos sectores. No se le entregó la tierra a los campesinos. A unos pocos, un puñado, se les tituló la casa y el goce de tierra que estaba a su alrededor y se le dio título colectivo o comunitario (cooperativo) sobre lo restante. En la mayor parte de los casos, casi 90%, al 11 de septiembre de 1973, la propiedad estaba en manos del Estado, de la Corporación de la Reforma Agraria, la única titular de casi diez millones de hectáreas.

Se produjo una contradicción entre el campesinado y el sistema estatal político. Una parte, por cierto, siguió hasta el final sus antiguos compromisos y banderías, pero un importante sector fue separándose del gobierno de Salvador Allende, organizándose en la Asociación Nacional de Asentamientos Campesinos que conducía el dirigente José Chacón de un asentamiento cercano a Peñaflor, Melipilla, quien declaró al ocurrir el golpe militar: “Son ángeles los que llegaron”, hablando de ese modo de los aviones que habían bombardeado La Moneda. Manipulados o no, aliados a los gremios que apoyaron y condujeron al golpe de Estado, camioneros y comerciantes, expresaba este sector el ánimo que en muchos asentamientos había, y el comportamiento de la gran mayoría de campesinos.³⁰

El golpe militar condujo a la “intervención” de los asentamientos, cooperativas, Centros de Reforma Agraria y de Producción. Hubo un interregno en el que algunos intendentes militares “revocaron de ipso” las expropiaciones y devolvieron los predios a los antiguos propietarios. Fue el caso de los dirigentes más conocidos que habían luchado contra Allende, como el de los agricultores del sur, Domingo Durán, a quien el intendente militar le devolvió sin más trámites el fundo Lobería. La Junta Militar debatió el asunto y decidieron operar con rapidez. Mi impresión es que en un primer momento los militares, y en especial los carabineros encargados del Ministerio de Agricultura se vieron comprometidos con las promesas populistas de la derecha antiallendista

³⁰ El estudio que realizamos sobre asentamientos y Ceras de la zona de Santiago a fines de 1972 nos mostró que tanto en unos como en otros más de 70% de las tierras estaba subdividida de hecho. Parte del estudio lo publicamos en la “Revista Agraria”, revista *Chile Hoy*, junio de 1973. Allí aparecían los datos pero la interpretación no daba cuenta de lo que éstos decían. El estudio de ICIRA, ya citado, no mostraba cifras más bajas y era mucho más representativo del país.

que había movilizado a los campesinos de los asentamientos con la promesa de darles la tierra que se les había prometido; esto es, la propiedad privada de la tierra. Eso fue lo que se realizó, sobre todo en aquellos asentamientos en que ya se había cumplido el plazo estipulado por la ley y que debían adquirir un sistema de propiedad definitivo. Entre el año 1973 y el año 1978 se asignaron 40 013 parcelas y se dieron 9 500 más en títulos cooperativos. Quedaban fuera alrededor de 40 000 familias y numerosos jóvenes solteros, los que se “allegaron” en un primer momento a las parcelas como trabajadores.

Con el tiempo, los militares entregaron sitios —“casa y cerco” se les denominó— a las personas que habían quedado sin lugar donde vivir. Por otra parte, se asentó a la “población sobrante” en villorrios; de esa manera se fueron asentando en los campos masas de población.³¹ Esta política de retención de población en el campo tuvo éxito; entre otras cosas, porque en las ciudades en esos años la cesantía se había incrementado en más de 20% y en las poblaciones se duplicaba fácilmente esa cifra, siendo los salarios extremadamente bajos.

En los fundos que fueron devueltos, revocados o restituidos, se produjo una inmediata expulsión de mano de obra permanente. Las razones fueron principalmente de orden subjetivo; pérdida de confianza. Los ex patrones y hoy empresarios agrícolas se dieron cuenta que la reforma agraria había sido en buena medida consecuencia de lo que en Chile hemos denominado el “asedio interno” de la población que vivía dentro de los predios. A pesar de que le devolviesen el predio con trabajadores antiguos y conocidos, en muy pocas partes se les mantuvo dentro de la propiedad. A los de mayor confianza se les instaló como porteros en la entrada del predio y a los demás se les expulsó. Las casas de los antiguos trabajadores se derribaron —lo hemos visto y fotografiado en numerosas partes del país— en un acto simbólico que ponía fin al inquilinaje.³²

³¹ Sobre este proceso de poblamiento se realizaron varios estudios en los años ochenta que dieron cuenta en detalle de lo que se denominó eufemísticamente “villorrios rurales”.

³² Este proceso pudo observarse en el Censo Agropecuario de 1976 cuando cambió la relación entre personal permanente y temporal en la agricultura. Antes de la reforma agraria, en el Censo de 1965, la relación era de 200 000 permanentes contra 160 000 temporales, y 10 años después era exactamente 160 000 permanentes (no se habían disuelto aún los asentamientos) contra 200 000 temporales. La tendencia se acentuó los años siguientes y hoy es de 10 a 1, un permanente por cada 10 trabajadores temporales. Los permanentes tampoco necesariamente viven dentro de los predios.

El paisaje rural y humano cambió radicalmente. Los campos se llenaron de poblaciones pobres donde se “asentaron” los antiguos inquilinos, obligados, voluntarios, afuerinos, peones y demás trabajadores del mundo hacendal. Durante la década de los años setenta unas 500 000 personas formaron la fuerza de trabajo disponible para la agricultura, lo que subió a 600 000 en los años ochenta y a 700 000 en los noventa, con variabilidad estacional de importancia.³³

Los dos factores productivos de los que depende el capital agrícola para actuar libremente se habían “soltado” de las amarras latifundistas y son lo que explica a nuestro modo de ver el *boom* agrícola exportador chileno de los años ochenta y noventa y que continúa hasta el día de hoy.

5. CONCLUSIONES

La reforma agraria fue sin duda un proceso de la mayor importancia en la historia reciente de Chile. Los diversos proyectos no se concluyeron y el proceso siguió sus propios senderos, su camino como consecuencia de las relaciones de fuerza que allí se produjeron. No ocurrió el sueño de Frei Montalva, la formación de una capa media en el campo que le otorgara al país un centro político y estabilidad, pensando el presidente en la experiencia francesa. No se le dio “la tierra a quien la trabaja” como se pensaba y decía desde una óptica de “revolución campesina”. Tampoco —y es obvio— se logró construir el socialismo en el campo. No hubo restauración. Surgió en cambio una nueva agricultura, un nuevo subproletariado rural, y masas de trabajadores semirurales y semiurbanos disponibles para las nuevas faenas. Fue el momento de la globalización de la economía y las bases ya existentes de fruticultura, vinicultura, actividad forestal, procesamiento de celulosa, etc., se vieron no sólo favorecidas sino levantadas por un viento que infló las velas y condujo a un crecimiento económico nunca visto en la agricultura chilena. Por cierto que las consecuencias para los actores y participan-

³³ En el trimestre de diciembre a febrero del 2003 fue de 777 000 personas, en el de enero a marzo se mantiene en 774 000 y baja en el periodo marzo a mayo a 702 000. En pleno invierno se ubica bajo los 700 000, con un rango de 100 000 trabajadores que solamente trabajan en el verano. ODEPA, *Boletín mensual de coyuntura silvoagropecuaria*, julio del 2003. La desocupación en el campo es de 5.5 por ciento.

tes no fueron las previstas. No sólo hubo resultados imprevistos sino indeseados.

Primera. De la protesta social al escarmiento:
la construcción de “los pobres del campo”

El concepto más importante construido en el periodo posreforma agraria es el de “pobres”. A partir de los años ochenta y en particular en los noventa en Chile se habla de “pobres” como una categoría definida de personas. Los “pobres” a su vez se autoasignan carácter y personalidad definidos en sus relaciones con el Estado. Son objeto de la “política pública” y de la “beneficiencia” tanto pública como privada.

El surgimiento de esta categoría tiene su origen en el complejo proceso que denominamos “protesta y escarmiento”. Es un conjunto diádico inseparable en la conciencia social de hoy. No es posible separar el periodo de protesta campesina del escarmiento que le siguió. Ha sido uno de los grandes procesos de “disciplinamiento” de las clases populares que ha sucedido en la historia reciente de Chile. Los “campesinos alzados” fueron culpabilizados de tal suerte, escarmentados mediante la represión política y la exclusión socioeconómica, de manera tal que se autoculpabilizaron. La expresión más común y clara es escuchar decir: “¿Quién no iba de querer un pedazo de tierra?”, y a la frase siguiente: “Pero eso es imposible”, se agrega normalmente un pero: “las cosas se hicieron mal”; “La idea era buena, pero el método estuvo equivocado”.³⁴

La organización campesina cayó estrepitosamente y hasta hoy no ha podido levantarse.³⁵ Las condiciones de trabajo en el campo no han

³⁴ La Junta Militar de Gobierno en los primeros años de la dictadura empleó un convincente argumento propagandístico. Asimiló la movilización campesina (y en general la movilización popular) como una “farra”, como una noche de “juerga” en la que se gasta todo el dinero del salario del mes. Experiencia muy conocida en los medios populares, las “farras” irresponsables se pagan caro, un mes sin tener siquiera para comer por una noche de francachela. Había una campaña que señalaba: “Hay que pagar la farra”.

³⁵ Los sindicatos campesinos, aunque existen, están muy debilitados al igual que las organizaciones que los agrupan. Recientemente se ha organizado un movimiento de mujeres temporeras de diversas partes del país denominado Anamuril, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que exige mejores condiciones de trabajo para las trabajadoras del campo.

variado en 13 años de democracia. No se ha establecido un sistema de seguridad social apropiado al trabajo temporal, un sistema sindical adecuado y condiciones salariales mínimas. Los proyectos sobre estas materias duermen en el parlamento. El temor a una nueva fase de organización campesina, por perder las “ventajas comparativas” que permiten que peras y manzanas chilenas se ofrezcan a bajos precios en el competitivo mercado mundial, mantiene a esas enormes masas en su disposición al trabajo barato, flexible y desregulado.³⁶

Segunda. La exclusión de los campesinos independientes

La reforma agraria dejó de lado a los campesinos independientes y fue el proceso que terminó por liquidarlos definitivamente, al igual que a los pueblos y comunidades que los agrupan. Sin que ninguno de los actores políticos que idearon el proceso lo quisiera, la reforma agraria se centró en las relaciones entre propietarios y trabajadores “de adentro” de los fundos. Los campesinos circundantes quedaron fuera del proceso antes de la reforma, durante el proceso expropiatorio y en el periodo de la “contrarreforma”. El proceso condenó al campesinado a la exclusión. Se produjo “la muerte del campesinado”.

Los campesinos independientes eran el único sector que en el campo o en el medio rural poseía conciencia respecto a sus derechos y tenía una “demanda campesina” consolidada antes de la reforma agraria. Ésta, como se ha dicho, no incluyó a los campesinos independientes en el proceso, como consecuencia de un mal diagnóstico social y económico. Se consideró que eran dos estructuras separadas, la del latifundio y la del minifundio, cuando se trataba de un solo sistema, con estrechas relaciones de trabajo y dependencia, a pesar de que no estuvieran siempre localizados en las cercanías. La no inclusión de los campesinos en el proceso condujo a la solidaridad de los pequeños propietarios campesinos con los latifundistas expropiados y al acentuamiento de las

³⁶ La mayor desregulación se produce por la acción de contratistas de mano de obra que son quienes proveen a las empresas agrícolas. En la jornada veraniega recién pasada (enero-marzo, 2003) una mujer ganaba al día 4 000 pesos chilenos, estando a razón de 700 pesos cada dólar (seis dólares diarios). Véase relatos e historias de vida, reflexiones y testimonios de mujeres trabajadoras temporeras de la región de Aconcagua en mi reciente libro *La desigualdad*, *op. cit.*

antiguas relaciones clientelares de caciquismo en el medio rural chileno. Ésta es la explicación del voto de derecha de los campesinos que se manifiesta hasta el día de hoy y que surge reforzado de este proceso de reformas. No hay personajes más de derecha hoy en día que los campesinos sobrevivientes a este proceso de reformas.³⁷

La pauperización de las áreas rurales de pequeña propiedad ha sido la consecuencia de estos procesos someramente descritos. Donde viven campesinos tradicionales se concentra la pobreza rural más extrema; de hecho en estas áreas es el único lugar de Chile donde en los últimos siete años crece la extrema miseria, pues en áreas urbanas o de trabajo temporal se ha logrado relativamente contenerla si no es que superarla.

Muchos campesinos se han visto en la necesidad de vender sus tierras, en el caso del sur a empresas forestales y en el de ciertos lugares aledaños a las ciudades con propósitos de turismo.³⁸ Si bien puede haber soluciones locales, dotadas de mucha imaginación e innovación, no es fácil imaginar una función de la pequeña propiedad en el esquema de crecimiento económico agroexportador del país, y en muchas partes lo que domina es la exclusión.³⁹ En este proceso se encuentra también una de las causas de la actual “cuestión indígena”, que tiene su base material en la exclusión campesina. El sector que sufrió quizá con mayor dureza la exclusión rural ha sido el mapuche. Numerosos hechos

³⁷ Nuestra investigación titulada “Los campesinos de Nahuelbuta”, apoyada por Fondecyt, nos llevó a estudiar a los campesinos no indígenas del sur, y en especial de esa cordillera. Lo que más llamó la atención de nuestra investigación fueron las relaciones de clientela que se establecen en esas localidades y que unen en estrechas alianzas políticas y comerciales a los pequeños productores con los medianos y grandes, y a éstos con las autoridades políticas locales y provinciales. La pauperización del campesinado se mitiga con este sistema clientelístico. En cambio los indígenas de esas localidades no poseen el control del poder local y no han podido establecer esas relaciones, desencadenándose una espiral de pauperización mayor que en los no indígenas de semejantes condiciones de vida y producción.

³⁸ Durante la última década los únicos programas de desarrollo rural, con fondos internacionales, se han desarrollado en estas áreas. El FIDA financió el programa para las comunidades campesinas del Norte Chico; el Banco Mundial para las áreas campesinas del “secano costero”, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para las comunidades indígenas. Anteriormente el “Proyecto holandés” financiado por ese país apoyó el Desarrollo Rural de la IX Región, con campesinos indígenas y no indígenas, y con modestos resultados cuando no netamente negativos.

³⁹ El programa Servicio País de la Fundación Nacional para la superación de la pobreza cuenta con la valiosa experiencia de jóvenes profesionales que se van a vivir por uno o dos años a localidades apartadas donde domina este tipo de propiedad.

ocurridos después de 1973 se han sobrepuesto y se han ido acumulando, arrinconando a las comunidades indígenas en difíciles condiciones de sobrevivencia. Podemos enumerar algunas de ellas.

La apertura de los mercados agrícolas ha conducido a la desprotección de los precios de los cultivos tradicionales, en particular el trigo, principal producto de los campesinos mapuches. Esta desprotección relativa, ya que aún existen unas “bandas de precios” para evitar la fluctuación, condujo a que las empresas trigueras tuvieran que dar un enorme salto en productividad para sobrevivir. Lo hicieron y con éxito. Los pequeños productores mapuches salieron del mercado a mediados de la década de los años setenta y no han ingresado nuevamente. La producción triguera mapuche es en casi 100% de autosubsistencia. La certificación de las carnes, adoptada en 1991, vino a sacar del mercado a los pequeños ganaderos, transformando a la economía mapuche en un sector económicamente excluido.

El crecimiento forestal al que hemos hecho referencia produjo en ciertas áreas el cercamiento de las comunidades. Enormes plantaciones de pino insigne rodearon a las comunidades provocando problemas medioambientales y de salud humana. Se produjo un desequilibrio enorme entre las pauperizadas comunidades, ubicadas por lo general en suelos depredados, y las plantaciones en los antiguos fundos y predios con los que esas comunidades tenían relaciones de vecindad, que en cierta medida podían, vía mediería u otras sistemas informales, ocupar sus recursos. Las nuevas plantaciones forestales están encerradas con rejas y candados; no hay animales en su interior, y no se deja que ninguna persona transite. Se cierra el bosque esperando que crezca.

Este proceso de exclusión es a nuestro modo de ver la base material del desarrollo de una “etnicidad radicalizada”, principal característica de la “cuestión indígena” en el sur de Chile. La respuesta indígena, a diferencia de los pequeños propietarios, pudo levantarse sobre las bases históricas de reforzamiento de la identidad propia. Exclusión y demanda de “autonomía” son dos fenómenos relacionados; se considera que en la medida en que exista un manejo autónomo de los recursos podrá resolverse la exclusión y la miseria; lo cual, para este autor, no es a lo menos evidente.

Constatamos la imposibilidad de reponer la cuestión campesina en el periodo de democratización. Más de alguna vez hemos observado que la “transición en Chile ha sido urbana”. Durante la década de

los años noventa se pretendió realizar una política de modernización campesina con los así denominados “campesinos viables”. Algún funcionario profetizó que a fines de la década, los campesinos utilizarían computadoras.⁴⁰ Nada de ello ha ocurrido.

En ciertas áreas de riego hay pequeños bolsones de pequeña propiedad que se han “colgado” de la agroindustria y del agronegocio.⁴¹ La tendencia del campesinado ha sido mayoritariamente refugiarse en la subsistencia y salir a buscar trabajo en las temporadas de contratación de mano de obra. La pequeña propiedad vuelve a ser un lugar de “estacionamiento” de la mano de obra en los periodos de paro. La muerte del campesinado productor ha acompañado el crecimiento de la agricultura moderna de exportaciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Armijo, Gladis y Héctor Caviedes, “Vicisitudes y cambios en el mundo rural chileno”, *Anales de la Universidad de Chile*, Sexta Serie, núm. 5, octubre de 1997, p. 13.
- Baraona, Rafael, “Una tipología de haciendas en la Sierra ecuatoriana”, en Óscar Delgado (comp.), *Las reformas agrarias en América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1965, pp. 688-696.
- Barraclough, Solon y J.A. Fernández, *Diagnóstico de la reforma agraria chilena*, México, Siglo XXI Editores, 1974.
- Bengoa, José, *La desigualdad*, Santiago de Chile, Ediciones Sur. 2001.
- _____, *Historia social de la agricultura*, tomo II, “Haciendas y campesinos”, Santiago, Editorial Sur, 1991.
- _____, *Los campesinos de Nahuelbuta*, Fondecyt, s.f.
- Cruz, María Elena y Cecilia Leiva, *Disponibilidad de alimentos básicos en Chile, 1965-1979*, Grupo de Investigaciones Agrarias, Academia de Humanismo Cristiano, 1981.

⁴⁰ No es por casualidad que la institución del Estado ligada al desarrollo rural y campesino, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), sea la más cuestionada, tanto por su ineficiencia como por aspectos relacionados con el mal manejo de recursos, muchos de ellos destinados a sostener organizaciones productivas campesinas en forma voluntarista, y que no tienen lamentablemente en esas condiciones viabilidad económica.

⁴¹ A esta tendencia le hemos denominado la “salida hacia delante” del campesinado productor. Hemos utilizado un paradigma que señala que habría una “salida hacia fuera” y una “salida hacia atrás”; la segunda, el abandono del campo, y la tercera, el refugio en la autosubsistencia.

- Domínguez, Óscar, *Una oportunidad en libertad*, Santiago, Editorial del Pacífico, 1959.
- Garrido, José, *Historia de la reforma agraria en Chile*, Santiago, Editorial Universitaria, 1988.
- Gómez, Sergio y Jorge Echenique, *La agricultura chilena. Las dos caras de la modernización*, Santiago, Flacso, Agraria, 1988.
- Gómez Sergio *et al.*, *Cambios estructurales y migraciones en el sector rural*, Santiago, Flacso, 1981.
- Grupo de Investigación Agraria (GIA), *Capitalismo y campesinado en el agro chileno*, anexo estadístico, 1981.
- Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria (ICIRA), *Evaluación preliminar de los asentamientos de la reforma agraria de Chile*, Santiago de Chile, 1967.
- Kay, Cristobal, "Chile's Neoliberal Agrarian Transformation and the Peasantry", *Journal of Agrarian Change*, vol. 2 núm. 4, octubre, 2002, pp. 464-501.
- Landsberger, Henry y Fernando Canitrot, *Iglesia, campesinos e intelectuales. La huelga de Molina*, Santiago, Editorial del Pacífico, 1967.
- Loveman, Brian, *Chilean struggle in the countryside*, Bloomington, Indiana University Press, 1975.
- Maffei, Eugenio, "Diferenciación social en el campo y sector reformado", *Boletín de Estudios Agrarios*, Santiago, Grupo de Estudios Agrarios (GEA), 1978.
- McClure, Oscar, *¿Exclusión en Chile? De la desintegración a la pobreza integral*, informe presentado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Mideplan, 1994.
- Núñez, Omar, *Evolución de la propiedad de la tierra y uso del suelo en la comuna de Paine, 1930-1993*, tesis de licenciatura en Historia, Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 1995.
- Portilla, B., "La política agrícola en Chile", *Lecciones de tres décadas*, Santiago, Cepal, cuaderno Núm. 68, 2000.
- Salazar, Gabriel, *Labradores, peones y proletarios*, Santiago, Ediciones Sur, 1987.
- Stabili, María Rosalía, *El sentimiento aristocrático*, Santiago, Editorial Andrés Bello, 2003.
- Urzúa, Raúl, *La demanda campesina*, Santiago Ediciones, Nueva Universidad, 1967.

QUINTA PARTE
LOS ACTORES SOCIALES

LA HISTORIOGRAFÍA, LOS TRABAJADORES Y LA UNIDAD POPULAR

Jorge Rojas Flores*

Si observamos con atención, las últimas palabras de Allende en La Moneda son bastante expresivas del lugar que ocuparon los trabajadores (tanto en el ideario como en la práctica) dentro del proceso que él encabezó: “¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!”. En esta expresión se condensa la forma en que usualmente se entendía el papel central asignado a la clase trabajadora, el núcleo conductor de los procesos de cambio, el alma de la Unidad Popular (UP).

Escribir de la UP es escribir de los trabajadores; pero no porque todos los trabajadores se alinearan detrás de sus banderas o porque la oposición estuviera compuesta por rentistas y burgueses; tampoco se trató de un gobierno que hubiera renunciado sin más a su poder para entregarlo a los trabajadores. Parte del debate sobre las estructuras de participación en las empresas del Área de Propiedad Social (APS) se originó porque el gobierno no estaba dispuesto a delegar su administración a representantes electos entre los trabajadores.

En las siguientes líneas intentaré reconstruir los componentes principales de la producción intelectual referida a los trabajadores durante la UP, desde los años setenta hasta la actualidad. Debido a los vacíos de los últimos años, he incorporado las reflexiones que desde ópticas más generales han pasado revista a estos años, aunque no haya

* Maestro en Historia por la Universidad Católica de Chile. Profesor en la Universidad ARCIS y la Universidad Católica de Chile. Maestro en Ciencias Sociales del Trabajo (UACH) e investigador del Cenda. Especialista en historia de los trabajadores. Autor de *La dictadura de Ibáñez y los sindicatos*, Santiago, Dibam, 1993, de *Los niños cristaleros: trabajo infantil en la industria. Chile: 1880-1950*, Santiago, Dibam-PET-Sename, 1996, y de “Los trabajadores en la historiografía chilena: balance y proyecciones”, *Revista de Economía y Trabajo*, núm. 1, Programa de Economía del Trabajo (PET), 2000, pp. 47-117.

sido su punto de interés central. Ofreceré una reconstrucción de los principales enfoques intelectuales, pero considerando los contextos que le dieron origen; en algunos casos intentaré sugerir algunas propuestas que podrían contribuir a enriquecer la producción historiográfica sobre el periodo.

Las investigaciones sociales sobre la UP acentúan principalmente los componentes económicos, ideológicos y políticos del proceso. En el caso de los sujetos sociales, el interés ha sido menor, salvo en lo que respecta al rescate de los testimonios o vivencias de aquel periodo y de su trágico desenlace. Los estudios sobre los distintos grupos sociales que fueron centrales en esa época han incorporado a los trabajadores (y en especial a la clase obrera), pero la producción no ha sido muy prolífica en los últimos tiempos; de hecho, los últimos títulos se refieren a otros grupos, como el caso de los movimientos de mujeres de derecha.¹

Esta situación contrasta con el énfasis que tuvo el concepto de “clase trabajadora” en los tiempos de la UP y las décadas anteriores. De ahí que al hacer el balance general, nos encontremos con un hecho interesante y sintomático: son mucho más numerosos los estudios realizados durante la época de la UP sobre la clase trabajadora que los realizados en las décadas posteriores.

Tratar los fenómenos propios del régimen de Allende o bien las interpretaciones que han surgido sobre ellos son dos formas de abordar un mismo tema. Ninguna reconstrucción histórica se hace desde la neutralidad; por ello, aquí hemos preferido poner el acento en las interpretaciones, aunque no para caer en un relativismo inconducente, sino para procurar realizar el balance de los retrocesos, avances y vacíos en la producción intelectual, y a partir de él adentrarnos en la realidad de esa época.

Los procesos vividos durante ese régimen exigieron un primer esfuerzo de comprensión. Ése fue el contexto de los primeros estudios histórico-sociológicos del papel que estaban cumpliendo y debían cumplir los trabajadores. En el discurso político de esos años, el protagonismo del proletariado no era puesto en duda; tampoco su aporte en el proceso de toma de conciencia del pueblo en su conjunto. Sin embargo, ya desde los años sesenta, en el plano académico, varias investigaciones

¹ M. Power, *Right-wing women in Chile. Feminine power and struggle against Allende, 1964-1973*, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 2002.

sobre los trabajadores habían cuestionado el carácter revolucionario de la clase obrera. Terciaron en el debate principalmente sociólogos estadounidenses como Henry Landsberger² y James Petras (1969). Otro tanto ocurría sobre el papel que estaban jugando los pequeños campesinos y los obreros agrícolas.

Los principales estudios sobre los trabajadores que se realizaron durante la UP provinieron de la sociología y la economía del trabajo; mientras, la disciplina histórica no consideraba esta etapa como parte de sus objetivos de investigación, en gran medida porque la cercanía cronológica era considerada un obstáculo. En todo caso, los textos escritos en esos años y que se referían a la historia del movimiento sindical de las décadas anteriores³ intentaban llegar hasta los últimos años, valorándola como la culminación de una larga tradición histórica que alcanzó su clímax con el triunfo de Allende. Un hecho interesante es que en esos mismos años se realizaban investigaciones históricas (como la de Peter Winn) que serían publicadas una década más tarde.⁴

La historiografía que comenzó a desarrollar sus estudios sobre los trabajadores en los años posteriores al golpe tuvo el claro sello del ambiente emocional e intelectual de esa época. El trauma de la derrota política de la UP, la percepción de las limitaciones o contradicciones del proceso marcaron el carácter de estos estudios. No todos reaccionaron del mismo modo ni con los mismos sentimientos de culpa. Las distintas generaciones que han participado en esta reconstrucción histórica también han tenido posturas derivadas de sus propias experiencias (movilización social de los años ochenta y desmovilización sindical de los noventa); además, es posible encontrar algunas líneas de continuidad en

² Véase del primero: H. Landsberger, Manuel Barrera y A. Toro, *El pensamiento del dirigente sindical chileno: un informe preliminar*, Santiago, Insora, Universidad de Chile, 1963, y H. Landsberger, "La élite obrera de América Latina y la revolución", en S. M. Lipset y A. Solar, *Élites y desarrollo en América Latina*, Buenos Aires, Paidós, 1967, pp. 308-348. Y del segundo: J. Petras y M. Zeitlin, "El radicalismo político de la clase trabajadora chilena", *Cuadernos Latinoamericanos*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1969, y J. Petras, *Politics and Social Forces in Chilean Development*, Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 1969.

³ Véase J. Barría, *El movimiento obrero en Chile. Síntesis histórico-social*, Santiago, Ed. Trígono, 1971; A. Angell, *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile*, México, ERA, 1974, y J. Manns, *Breve síntesis del movimiento obrero*, Santiago, Quimantú, 1972.

⁴ P. Winn, *Weavers of revolution: The Yarur workers and Chile's road to socialism*, Nueva York, Oxford University Press, 1986.

la producción intelectual de ciertos historiadores que iniciaron su labor en los años sesenta. En la etapa posgolpe encontramos los estudios de Zapata, Winn, Silva y Stillerman.⁵

No es difícil descubrir los principales hitos en la relación entre Allende y los trabajadores; en especial, recorriendo el itinerario del proceso global dentro del cual se insertó el papel de los trabajadores organizados. Francisco Zapata, por ejemplo, ha ofrecido un recorrido de este proceso.⁶ El lugar principal y de inicio de este balance lo constituyen los componentes del programa de la UP y su compromiso de realización a través de los acuerdos gobierno-CUT (Central Única de Trabajadores). Durante el gobierno, la cogestión en las empresas del área social pasó a ser el gran tema de debate político y la gran experiencia vinculada a la actividad laboral. Las disputas políticas se canalizaron en el campo laboral (sin resolverse) a través de las elecciones nacionales de la CUT, en 1972, que en el ámbito nacional reprodujeron las alianzas electorales. Las huelgas patronales alinearon a los sindicatos en torno de dos consignas (la batalla de la producción y el poder popular), las mismas que se planteaban en todo el país. La radicalización de la acción sindical encontró su vía de realización a través de nuevas formas de organización, de carácter territorial: los cordones industriales, pero esa misma radicalización generó anticuerpos en algunos sectores laborales, lo que se expresó en un tipo de agitación de signo contrario: la huelga contra el gobierno, como lo fue la protagonizada por los obreros de El Teniente.

En el balance de los hechos más notorios, el tema de los trabajadores suele quedar subordinado al de la UP. Esto no extraña, si consideramos el lugar central que el tema laboral ocupaba en el programa de gobierno: la cogestión en las empresas, el mejoramiento en las condiciones materiales (acceso al consumo, previsión social, educación técnica, etc.). Incluso entre los planteamientos formulados en ese tex-

⁵ F. Zapata, "Los mineros de Chuquicamata: ¿productores o proletarios?", *Cuadernos del CES*, núm. 13, México, El Colegio de México, 1975; F. Zapata, *Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Salvador Allende*, México, El Colegio de México, 1976; P. Winn, *Weavers of revolution...*, *op. cit.*; M. Silva, *Los cordones industriales y el socialismo desde abajo*, Santiago, Imprenta Lazor, 1998, y J. Stillerman, *From solidarity to survival. Transformation in the culture and styles of mobilization of Chilean metal workers under democratic and authoritarian regimes, 1945-1995*, tesis doctoral, Nueva York, New School for Social Research, 1998.

⁶ F. Zapata, *Las relaciones...*, *op. cit.*

to aparecían temas que demostraban cierto nivel de preocupación por superar las contradicciones que experimentaba internamente la clase trabajadora; en especial, la segmentación entre obreros y empleados.

Un balance con tal énfasis político –algo inevitable por lo demás al abordar esa época– no ha impedido proyectar en la historiografía el tema más particular de los trabajadores, incluyendo sus críticas y cuestionamientos al proceso o su adhesión entusiasta, con ausencia de la participación directa de las ideologías que se suelen sobredimensionar. En los últimos tiempos, el tema de los trabajadores comunes, representados por los que no tenían militancia, sirvió para mostrar las contradicciones no resueltas del proceso.

Al concentrarse los estudios en el papel que desempeñaron los trabajadores en la UP, si bien no se produjo un giro en el énfasis político (que siguió siendo central), se puso en cuestión la relación “natural” o armónica entre aquellos y el gobierno. Ya no se consideró, sin más, a la UP como la alianza política representativa de la clase de obrera; esto se aplicó desde varias perspectivas: la existencia de más de un proyecto en el seno de la clase trabajadora, las contradicciones entre partidos y sindicatos, el complicado papel de la CUT en su vinculación estrecha con un proyecto político y un gobierno, los componentes culturales del obrerismo, etcétera.

PARTIDOS POLÍTICOS Y SINDICATOS

La relación del movimiento sindical con los partidos políticos ha sido un tema central en el caso de la experiencia chilena debido a la importancia que han tenido tales vínculos, en comparación con la realidad de otros países.

Ya durante los años de la UP, Alan Angell publicó un estudio sobre este tema: los difusos límites entre la acción de los partidos políticos y el movimiento sindical.⁷ Aunque el texto se remonta a los inicios de esa alianza, en las últimas décadas del siglo XIX, el énfasis está puesto en sus componentes más contemporáneos, a partir de los años treinta. Angell concluyó que la alta politización del movimiento sindical se habría debido a esta relación estrecha, algo que distingue el caso chileno

⁷ A. Angell, *Partidos políticos...*, *op. cit.*

de lo propio de otros países donde el caudillismo populista (Argentina) o las experiencias corporativas han sido la tónica. En su opinión, las limitaciones del modelo institucional de relaciones laborales (creado en 1924) alentaron la participación política de los sindicatos por intermedio de los partidos con alguna tradición obrera.

Angell reconoció las complicaciones que atrajo la presencia de los partidos en el seno del movimiento sindical (superposición de funciones, pugnas de poder, pérdida de autonomía, clientelismo). No sólo buscó explicar este fenómeno, sino las causas de su supervivencia. En este sentido, estuvo lejos de poner de relieve la manipulación unidireccional de los partidos; más bien quiso ver una relación que se había potenciado de un beneficio mutuo, no obstante las limitaciones que impuso.

El balance posterior sobre la experiencia del gobierno de Allende llevó a un cuestionamiento más radical del papel desempeñado por los partidos políticos dentro del movimiento sindical. La visión que había ofrecido Angell no satisfacía del todo a algunos historiadores.

A partir de los años ochenta, pero sobre todo después del fin de la dictadura, la historiografía laboral comenzó a proyectar un fenómeno que le era cercano: la crisis del modelo de participación ciudadana vinculada a los partidos de masas con extracción popular. El desaliento que cundió entre algunos intelectuales se volcó hacia una sobredimensión del papel del anarcosindicalismo, en el periodo anterior a los años treinta. Todo uso de las vías institucionales, la base del proyecto de la UP, fue visto como una sospechosa renuncia a los principios autonómicos del movimiento sindical, una ingenua valoración de los espacios de participación de la democracia burguesa o una débil respuesta frente a los intentos por cooptar el espíritu rebelde de la clase obrera.

No se trataba sólo de la existencia de una disputa entre dos proyectos políticos, sino también de intereses distintos entre una burocracia política, que actuaba basada en un cálculo racional y electoral, y una masa que se movilizaba en forma espontánea; a veces de modo inorgánico, pero con gran fuerza.

Así, al hacer el balance de este periodo, la acción de los partidos fue vista como una cortapisa al impulso natural del proceso. Los cordones industriales vinieron a ser la expresión del genuino espíritu revolucionario. La elección directa de la CUT, en 1972, habría sido una grosera manipulación y un campo de disputa de los partidos.

Sin embargo, para detractores y defensores del vínculo estrecho, entre partidos y sindicatos había algo en común. Cuando se hablaba de tales vínculos, se pensaba de un modo casi generalizado en los partidos tradicionales, como el Partido Comunista (PC), Socialista (PS) y otros de extracción obrera. Poco interés hubo en determinar el peso creciente que tenían partidos de más reciente influencia en el movimiento sindical, como el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Los resultados de la elección de 1972 pusieron de relieve esto: una sorpresa para todos fue el alto porcentaje que obtuvieron los dirigentes de la democracia cristiana, cercana a 25% del total.

La forma en que se produjo el proceso de politización del movimiento sindical, así como la participación directa de los partidos en su interior siguen esperando un estudio más profundo. Los vínculos entre el Estado, las estructuras de los partidos políticos, los dirigentes militantes, los trabajadores politizados y los que no lo estaban no fue unidireccional; de hecho, no obstante la existencia de una pequeña minoría de dirigentes militantes, en la mayoría de las elecciones eran éstos los que resultaban ganadores. Stillerman ha tratado de comprender estas relaciones para el caso de la empresa Madeco, al considerar la etapa de mayor politización, durante los años sesenta y comienzos de los setenta. Pudo observar algunas señales de burocratización (por ejemplo, a través del surgimiento de representantes sindicales que lo eran en cuanto militantes, sin haberse fogueado ni legitimado dentro de la empresa).

LAS DOS REVOLUCIONES

La contradicción entre el mundo social (en este caso, los trabajadores) y el mundo político-institucional, que se habría vivido durante la UP, fue interpretada como un conflicto entre proyectos.

Varios autores, entre ellos Peter Winn y Gabriel Salazar, han puesto de relieve la coexistencia de dos proyectos políticos durante la Unidad Popular.⁸ Con esto reconocen la brecha entre un proyecto institucional de cambio social (creado y aplicado “desde arriba”,

⁸ Véase P. Winn, *Weavers of revolution...*, op. cit., y G. Salazar, *Violencia política popular en las “grandes alamedas”, 1947-1987*, Santiago, Ediciones Sur, 1990.

como el de la Unidad Popular, que confiaba en un camino electoral) y la vivencia de genuina rebeldía en la propia base social (un proyecto “desde abajo”).

La tesis de los dos proyectos está presente en Winn, a partir de su estudio sobre los trabajadores de la Industria Yarur. En su interpretación, la revolución “desde abajo” y la revolución “desde arriba” se enfrentaron principalmente en el campo laboral. Su interés por reconstruir una experiencia local en particular no pretendía proyectar los procesos nacionales al ámbito microsocial, sino descubrir en la vivencia de los sujetos comunes la diversidad de formas en que se interpretó la ideología abstracta de la revolución “desde arriba”. Fue a ese nivel donde se pudieron vivir las contradicciones del proceso, así como la génesis de las dinámicas que no pudo contener.

Salazar ha sido más radical en su distancia con el proyecto de la UP. En su opinión, la institucionalidad que se procuraba respetar, estrechaba y contenía forzosamente las estrategias efectivas de poder de los sectores populares. El movimiento sindical era el sujeto que más tradición tenía al respecto, como exponente de los efectos perversos del economicismo. Algo que se había ido atenuando con la participación de nuevos grupos sociales, en los años sesenta, que aportaron savia nueva, una cuota de radicalización y revirtieron en parte la burocratización generada por la institucionalización del movimiento sindical; durante el gobierno de Allende, la estrategia de los cordones industriales fue expresiva de ese clima. Si bien surgieron para contener el impacto de las huelgas patronales, los sindicatos (que actuaban en torno de estructuras centralizadas, de carácter sectorial), terminaron rompiendo con la lógica tradicional de acción y lograron afianzar los lazos de solidaridad y conciencia de clase, y finalmente radicalizaron el ambiente político en el seno de los centros productivos.

Vistos como una manifestación de esta revolución “desde abajo”, los cordones industriales han sido estudiados últimamente por varios autores.⁹ Su aporte ha sido considerado de tal importancia (sobre todo en su relación con la constitución de un “Poder Popular”) que se ha transitado por los límites del mito.

⁹ Véase M. Silva, *Los cordones industriales...*, op. cit..., y F. Gaudichaud, *La Central Única de Trabajadores, las luchas obreras y los cordones industriales, en el periodo de la Unidad Popular (1970-1973). Análisis histórico crítico y perspectiva*, 2003 (en www.rebellion.org).

IDENTIDAD PROLETARIA, AMARILLISMO
Y ARISTOCRACIA OBRERA

El carácter y la profundidad de la conciencia obrera fue otro punto de interés asociado a este periodo. La capacidad de guiar los procesos de cambio social (como clase conductora) que se le atribuía a la clase obrera estuvo en el centro del debate de los años sesenta. El balance histórico hasta entonces parecía confirmar que había sido el proletariado la clase que había liderado la concientización del resto de los grupos sociales, como el campesinado, los sectores medios, el estudiantado, etc., desde comienzos del siglo XX. La historiografía laboral de esos años puso de relieve ese fenómeno, sin conceder mucha importancia a otros sectores sociales.¹⁰

Con todo, ya algunos sociólogos (formados en la escuela funcionalista estadounidense o conocedores de su interpretación al respecto) habían establecido distinciones dentro del movimiento sindical. Henry Landsberger y Torcuato di Tella, por ejemplo, cuestionaron el rupturismo del conjunto del movimiento sindical, poniendo de relieve el pragmatismo, la cultura del acuerdo, los objetivos corporativos y la tendencia burocrática de los sindicatos de las empresas más modernas y tecnificadas.¹¹ El papel del proletariado minero, en especial del obrero cuprífero, fue puesto en discusión. Saliendo al paso de este enfoque, Petras atribuyó a la radicalización política del minero la concientización política de los trabajadores agrícolas, en especial de los obreros agrícolas. Con posterioridad, a raíz del distanciamiento que experimentó la acción de los trabajadores del cobre respecto del gobierno de Allende, su opinión fue girando hacia una calificación distinta, atribuyendo a estos sectores el carácter de aristocracia obrera.¹²

La radicalización política producida al calor de las huelgas y de las tomas e intervenciones de empresas puso el debate de la conciencia obre-

¹⁰ Véase J. C. Jobet, *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile*, Santiago, Editorial Universitaria, 1951; J. Barría, *El movimiento obrero...*, *op. cit.*; H. Ramírez Necochea, *Historia del movimiento obrero. Antecedentes: siglo XIX*, Santiago, Austral, 1956, y F. Ortiz, *El movimiento obrero en Chile (1891-1919). Antecedentes*, Madrid, Ediciones Michay, Libros de Meridian, 1985.

¹¹ Véase H. Landsberger, "La élite obrera...", *op. cit.*, y T. Di Tella, B. Lucien, J. D. Reynaud y A. Touraine, *Sindicato y comunidad. Dos tipos de estructura sindical latinoamericana*, Buenos Aires, Editorial del Instituto, 1967.

¹² Véase J. Petras, *Politics and social forces...*, *op. cit.*

ra en un plano mucho más concreto. Siendo la cogestión en las empresas del Área Social uno de los pilares de la política laboral del nuevo gobierno, varios estudios han tratado de indagar en ese fenómeno. El de mayor envergadura fue el de Juan G. Espinosa y Andrew Zimbalist, de carácter sociológico, que aplicó una metodología cuantitativa sobre 35 empresas de la gran industria. Al tratar de identificar los factores que facilitaron y limitaron la participación, así como las formas que ésta fue adoptando, la principal conclusión del estudio se refirió a sus consecuencias. Por lo menos para el caso de las empresas consideradas en el estudio, la productividad habría aumentado en relación directa con los niveles de participación y la presencia activa de grupos organizados de trabajadores.¹³

En este debate sobre los niveles de conciencia obrera, muchas veces entendida como adhesión a ciertas corrientes políticas, ha surgido de forma encubierta el viejo concepto de la “falsa conciencia”. Esto se traduce en que los trabajadores que encabezaron o se incorporaron a la resistencia al gobierno de Allende han sido colocados en los márgenes de la reflexión sobre las contradicciones del proceso. Mayor interés se ha puesto en los estudiantes, las mujeres, los pequeños propietarios o el gran empresariado.

Si bien la renovación académica ha significado una dura crítica a los enfoques marxistas de los años cuarenta a los setenta (críticas excesivas y muchas veces descontextualizadas), la nueva historiografía ha seguido manteniendo distancia frente a los trabajadores que no se sintieron atraídos por el ideario izquierdista de transformación social. Es más: los intentos por recuperar la subjetividad de los trabajadores se han concentrado en las distintas variantes del apoyo al gobierno, pero no han puesto atención a la subjetividad de los opositores.

Algunos ejemplos al contrario, para el periodo de la UP, se concentran en los mineros del cobre, el segmento más identificable con la noción de aristocracia obrera. Un estudio que aborda este tema es el de Sergio Bitar y Crisóstomo Pizarro sobre la huelga de El Teniente. Ahí, los autores pasan revista a las contradicciones de un conflicto donde no sólo estuvo presente la acción de los agentes políticos, sino también los temores subyacentes de los sujetos.¹⁴

¹³ Véase J. G. Espinosa y A. Zimbalist, *Democracia económica. La participación de los trabajadores de la industria chilena, 1970-1973*, México, FCE, 1978.

¹⁴ Véase S. Bitar y C. Pizarro, *La caída de Allende y la huelga de El Teniente. Lecciones de historia*, Santiago, Ornitórrinco, col. Pensamiento alternativo, 1986.

Winn percibió diversos niveles de concientización en los trabajadores de Yarur. La gradación comprendía desde los “apatronados” (los que aceptaban resignadamente las diferencias de clase y confiaban en la intervención generosa del patrón); los “populistas” (deseosos de ver superadas esas distancias sociales, pero confiando en la intervención de un caudillo iluminado); los “gremialistas” (quienes valoraban el papel de los sindicatos, pero en su rol negociador y no político); los “reformistas radicales” (con conciencia del rol de los sindicatos y de los partidos políticos en la defensa de sus derechos, pero combinando pragmáticamente la negociación con la presión social, sin llegar a una ruptura total con las instituciones), y los “revolucionarios” (el sector más ideologizado, que alentaba hacer avanzar el proceso a través de los canales más radicales). Esto fue un avance en comparación con las categorías más rígidas que usaban los historiadores clásicos, entre “clase en sí” y “clase para sí”.

Pero en la reconstrucción general que ofrece Winn del periodo, destaca la radicalización producida como consecuencia del clima político de esos años. Así, los trabajadores hostiles al gobierno dejan de ser relevantes en el relato sobre la experiencia de Yarur. La contradicción principal queda radicada en los trabajadores que siguen su propio instinto rebelde, y los militantes que se dejan conducir por las directrices del proyecto “desde arriba”.

En la mayoría de las empresas intervenidas la composición política fue más compleja, ya que el espectro incluyó desde los trabajadores radicalizados hasta los más inclinados por el acuerdo y la moderación. Aunque hubo algún tipo de relación entre la orientación política, por una parte, y la antigüedad, los niveles de calificación y de ingreso, por el otro, lo más relevante fue la transversalidad de la opción política y la militancia partidaria. La definición política se superpuso a la estratificación social. Además, la preferencia electoral opositora de carácter nacional no se tradujo necesariamente en una estrategia hostil dentro de la empresa. En la experiencia de la empresa Cristalerías de Chile —que pudimos conocer— los dirigentes, de militancia demócratacristiana, no se alinearon contra la intervención; incluso defendieron la batalla por la producción, lo que no impidió sus críticas al proyecto del gobierno.¹⁵

¹⁵ J. Rojas, C. Rodríguez y M. Fernández, *Cristaleros: recuerdos de un siglo...*, *op. cit.*

Generalmente la acción sindical ha sido clasificada conforme a categorías ligadas a su adscripción ideológica. En un extremo, los rojos, y en el otro, los amarillos (o apatronados); sin embargo, las afinidades parecen estar marcadas por variables diversas. Por ejemplo, el reconocimiento de las diferencias sociales y de su necesaria superación no significaba la automática defensa de la igualdad de ingresos; además, parecería que la defensa gremial de los trabajadores se generalizó a tal grado que la propia oposición al gobierno la utilizó para resistir ciertas medidas. Esta aparente ambigüedad ha sido estudiada escasamente, pero encuentra un buen punto de arranque en la investigación de Robinson Lira sobre los trabajadores de la empresa Compañía Refinadora de Azúcar de Viña del Mar (CRAV), uno de los casos donde éstos se resistieron a la intervención estatal.¹⁶ Stillerman ha estudiado también, para el caso de la empresa Manufacturas de Cobre (Madeco), los distintos grados de compromiso con la UP, considerando el apoyo general al proceso y el distanciamiento respecto de ciertas prácticas.

Más adelante veremos que además de la reflexión política y la adhesión militante existía un estado de ánimo que sobrepasaba a los propios sujetos; en otras palabras, la reconstrucción histórica también requiere la integración de estos aspectos, como las expectativas sobre el futuro, y no sólo la calificación del lugar que cada cual ocupaba dentro del espectro político o el grado de “conciencia” que orientaba su accionar.

Un tema aparte, que aquí no alcanzamos a desarrollar, es el papel de los trabajadores agrícolas y los campesinos. La rápida expansión de la sindicalización en el campo a partir de 1967 incorporó en el debate intelectual a este contingente de trabajadores que hasta entonces había quedado relegado a categoría de “aliado potencial” del proletariado urbano.

LA ESTRATEGIA SINDICAL

La adhesión de la CUT al proyecto de la UP y el desafío que esta integración impuso a su propia autonomía es un tema que ha estado presente en Augusto Samaniego.¹⁷

¹⁶ R. Lira, “Modelo de relaciones industriales y orientación sindical. El caso de la Refinería de Azúcar de Viña del Mar, 1930-1973”, *Proposiciones*, núm. 27, 1997, pp. 186-201.

¹⁷ Véase de A. Samaniego, “Estructuras y estrategia de la Central Única de Trabajadores (CUT): 1969-1972. Movimiento sindical y proyectos políticos de cambio social en

Sabemos que la CUT transitó en un corto periodo de movimiento opositor al gobierno a movimiento integrado estrechamente a un gobierno en particular. Esto había sucedido en otro contexto, entre la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) y el Frente Popular, cuando la primera dio su respaldo al proyecto democratizador e industrializador de esta alianza de gobierno. También volvió a ocurrir en un breve periodo, en 1946 y comienzos de 1947, cuando la CTCH se involucró en el gobierno de González Videla, mientras sobrevivió la alianza entre comunistas, socialistas y radicales. Estas experiencias habían sido breves, conflictivas y a veces traumáticas. La oposición sindical era la estrategia que le acomodaba más al movimiento sindical chileno. Este papel se vería radicalizado en los años de presidencia de Blest (1953-1961), cuando se adoptó una estrategia bastante rupturista.

La estrategia sindical opositora, en todo caso (con la excepción del liderazgo de Blest), no significó una ruptura total con los gobiernos. La unidad interna del propio movimiento sindical y de su orgánica nacional exigía adoptar una relación con los gobiernos que estuviera basada en elementos programáticos. Esto permitió mantener (aunque con constantes rupturas) las distintas corrientes políticas presentes en la CUT. Como destaca Samaniego: en el deslinde de atribuciones (en el papel de una organización sindical y los partidos políticos) la confederación sindical trató de mantener un proyecto de cambio social de carácter nacional (política antimonopólica, de nacionalización de las riquezas básicas, etc.) y una defensa más “corporativa” de derechos laborales. Fue esto lo que le permitió dialogar ininterrumpidamente con los sucesivos gobiernos.

Por sobre la definición programática (más o menos distante de los gobiernos), la central obrera mantuvo su compromiso con la estabilidad del orden democrático (quizás con la excepción de los grupos liderados por Blest). Esto no sólo se expresó en 1969, con el Tacnazo, sino también en las movilizaciones sindicales, donde generalmente se combinaba la fuerza con la concesión. En el gobierno de Frei, por ejemplo, la confederación llegó a ciertos compromisos que constituyeron la base del acuerdo CUT-gobierno, que luego se replicaría en 1971 con Allende.

Chile”, *Cuadernos de Humanidades*, núm. 17, Santiago, USACH, 1994, y “Octubre al rojo: fulgor y agonía de la unidad de los trabajadores”, *Contribuciones científicas y tecnológicas*, núm. 30, Santiago, USACH, abril de 2002, pp. 1-22.

Pero más allá del cuidado en la CUT por la pluralidad política (esfuerzo liderado por el PC con relativo éxito) y por no dejarse amarrar en exceso por las alianzas electorales, el triunfo de la UP significó un quiebre en los hechos. La afinidad programática de la CUT con la UP condujo inevitablemente a la vinculación estrecha de la central con el gobierno triunfante.

La encrucijada que esto produjo para el movimiento sindical fue conciliar su papel defensor de los derechos laborales con su rol de sostén político del gobierno. Aunque no se produjo quiebre alguno en la CUT, debido a la hegemonía que conservaron los grupos marxistas, las tensiones internas se agudizaron y quedaron en evidencia en las elecciones nacionales de 1972. Y esto no sólo se vivió con ese carácter; también en los propios centros de trabajo se hizo dificultoso mantener la declarada “unidad de la clase trabajadora”, debido al clima de creciente polarización.

LOS VALORES PROLETARIOS

Los componentes éticos relacionados con la clase trabajadora han sido recientemente considerados en la historiografía.¹⁸ Pero, para el caso particular del periodo de la UP, el énfasis ha estado puesto más en los elementos político-ideológicos que en los culturales. Aunque parece evidente que el obrerismo fue muy fuerte y cruzó el espectro social (de hecho se irradió hacia los estudiantes), condicionando la relación entre los distintos grupos sociales, poco espacio se le ha otorgado en la reflexión del periodo.

El obrerismo no había surgido en esa época; había tenido una lenta gestación, que marcó fuertemente la cultura de diversos grupos políticos de izquierda. En parte por influencia ideológica (la clase obrera como vanguardia), pero también por las características del proceso de constitución del movimiento sindical, la clase obrera se transformó en el grupo que representaba la consecuencia, el sacrificio, la pureza que aseguraba el triunfo de la revolución; incluso dirigentes de una extracción social distinta veían en los obreros un ideal. El pro-

¹⁸ Un buen ejemplo es Thomas M. Klubock, *Contested communities. Class, gender and politics in Chile's El Teniente Copper Mine, 1904-1951*, Durham y Londres, Duke University Press, 1998.

pio Clotario Blest, funcionario público, quiso hasta sus últimos días representar el papel de obrero (con *overall*) que nunca desempeñó en su vida laboral.

Este protagonismo, cuando menos simbólico, pareció opacar la participación de otros sectores sociales. Si bien igualmente asalariados, los profesores, los empleados públicos, y los empleados del comercio y de la banca, no estaban asociados a esta cultura obrera. Curiosamente algunos trabajadores independientes (vendedores de periódicos y pequeños artesanos) sí lo estaban, debido a ciertos rasgos comunes de su cultura material. Cómo se relacionaban estos distintos grupos no es un tema fácil de dilucidar. ¿Predominaba su imagen social, su rol económico, su estándar de vida?

Durante la UP, la imagen que se había gestado del papel de la clase obrera alcanzó su máximo desarrollo. En el imaginario colectivo, de partidarios y detractores, eran ellos los que llegaban al poder, aunque el proyecto político dijera algo distinto. El movimiento sindical ganó en mística con estos juicios de valor, pero afectaron negativamente su capacidad para establecer alianzas de clase, uno de los ingredientes centrales en el proyecto del gobierno de Allende.

Aunque no estamos seguros de poder afirmar que estas identidades entraron en conflicto durante la UP —o al contrario acercaron posiciones en torno de una “cultura popular” común—, en la práctica hubo roces locales que tuvieron ese origen. Los técnicos y los profesionales se sentían portadores de un *status* ganado en gran medida gracias a su propio esfuerzo, y no vieron con gran simpatía que obreros sin gran formación (y sólo por su condición obrera) pasaran a tomar posiciones de mayor poder en algunas empresas. Aunque no puede generalizarse al respecto, ya que las experiencias fueron muy disímiles, al parecer fue un factor que se sumó a los conflictos de origen ideológico.

EL ESTADO DE ÁNIMO

Es difícil reconstruir el estado de ánimo de los tiempos del periodo 1970-1973, considerando que tampoco hay estudios al respecto, no obstante las percepciones que circulan. En algunos textos, por ejemplo en el de Stillerman sobre los trabajadores de Madeco, o en el estudio de José del Pozo sobre los militantes de la UP, se ha intentado sistematizar

estos componentes.¹⁹ Obviamente en la reconstrucción se confunden los recuerdos de las percepciones surgidas en los días del gobierno de Allende y lo que nació del balance posterior. A modo de ejercicio, pondremos atención a algunas de estas percepciones, atendiendo solamente a la voz de los trabajadores (no obstante la necesidad de reconstruir también la visión que surgió acerca de ellos).

1. El entusiasmo desbordante (“Había llegado nuestro momento”). Para las viejas y nuevas generaciones de trabajadores, el gobierno de la UP parecía permitir, por fin, la realización de demandas largamente esperadas. Los más antiguos (los nacidos en 1910; es decir, de unos 60 años en 1970) podían tener como punto de comparación el gobierno de Aguirre Cerda, del cual el propio Allende fue parte, aunque su programa había sido mucho más moderado (desarrollista y no socialista) y su voluntad de cambio en materia laboral mucho más modesta (por ejemplo, para los trabajadores del campo). Una generación intermedia, que para el triunfo de Allende ya tenía unos 40 años (es decir, nacida poco antes de 1930), podía recordar la frustración de la efímera alianza entre los comunistas y González Videla. Estas vivencias quizás le otorgaron a esas generaciones de trabajadores una mirada menos confiada de las perspectivas de la experiencia de la UP. Los trabajadores más jóvenes, en cambio, pertenecían en su mayoría a inmigrantes campesinos que no habían transitado por una larga trayectoria sindical; habían vivido los convulsionados años sesenta y en un corto periodo habían desarrollado una activa vida política. Algunos han insistido en el papel de esta última generación en la radicalización política de esos años: a diferencia de la cultura obrera tradicional (asentada en el antiguo proletariado), aquella no estaba dispuesta al sacrificio, la constancia ni a participar de la imagen de un triunfo distante.

Más allá de estas diferencias generacionales, el entusiasmo parece haber contagiado a masas importantes de trabajadores. La UP era percibida como un momento distinto, en particular porque el programa de gobierno se definía claramente al servicio de los trabajadores y el momento internacional vivía procesos equivalentes.

¹⁹ Véase J. Stillerman, *From Solidarity to survival...*, *op. cit.*, y J. del Pozo, *Rebeldes, reformistas y revolucionarios: una historia oral de la izquierda chilena en la época de la Unidad Popular*, Santiago, Ediciones Documentos, 1992.

2. La decisión (“Había que actuar”). El clima de gran radicalización y la coincidencia de la necesidad de cambios profundos (idea compartida también por los trabajadores militantes del centro político) alentaban la sensación de que el momento era crucial. Para los detractores, era evidente que el triunfo electoral había desatado un proceso de protagonismo de la izquierda marxista nunca antes visto. Los tiempos eran decisivos para todos los bandos; las vacilaciones no cabían y tomar postura era exigencia para el presente inmediato. Para los partidarios del proceso, la cercana victoria final podía incluso diluir las diferencias y los errores (recordemos la consigna: “Este gobierno es una mierda, pero es mi gobierno”).

El contenido del “actuar”, en todo caso, era muy amplio y multi-forme. Incluía desde el debate permanente, los trabajos voluntarios, el asambleísmo, las marchas y también el aporte en el plano productivo. Esta capacidad de decisión surgía, por una parte, de la sensación de estar enfrentados a un enemigo poderoso, pero también por razones prácticas, vinculadas a la satisfacción de las necesidades diarias más inmediatas.

3. La frustración (“No estábamos preparados”). Entre los defensores del proyecto de cambio hubo un aprendizaje producto de la experiencia cotidiana vivida en esos años. Entre ellos, los que miraron con mayor pesimismo el curso del proceso comenzaron a sentir desazón por varios motivos. Los obreros –en especial los no calificados– no tenían la menor capacidad técnica para dirigir las empresas; no obstante, en ellos radicaba ahora esa función. Muchos trabajadores no tenían responsabilidad política ni moral: se dejaban llevar por la verborrea de discursos vacíos y el abuso frente a la propiedad colectiva (robos). Los dirigentes, por su parte, fueron enrostrados por su rol burocrático y artificial, desligado de la producción. Esta visión pesimista no surgió solamente como consecuencia de la derrota (tras el golpe de 1973), sino que ya estaba presente antes, sobre todo en aquellos grupos que veían con poca claridad la dirección que estaba tomando el proceso.

4. El temor (“No se podía vivir”, “No había respeto por nada”, “Me quitarían lo mío”). La imagen del trabajador con aspiraciones excesivas, que rompía con toda autoridad y principio del orden, que no respetaba las distancias sociales (el “igualado”, para el caso mexicano), estuvo

muy presente en algunos sectores de la clase alta. La amenaza a la libertad, es decir, el miedo a la dictadura comunista, era el otro ingrediente que se atribuía a la UP. Si bien estas percepciones no necesariamente se ligaban al tema laboral, era en ese campo (y en especial en la acción sindical) donde se hacían más evidentes. La huelga permanente, el desconocimiento de las jerarquías en la empresa y el caos en que se encontraba la gestión de las empresas intervenidas, colocaban a los trabajadores, y a los obreros en particular, como los exponentes más claros del odio y el resentimiento de clase.

Pero esta sensación de temor no fue exclusiva de los sectores altos, sino también de algunos grupos de trabajadores. El rechazo al exceso de efervescencia y agitación y a los intentos por estrechar las distancias entre empleados y obreros, así como la recepción favorable que produjo el discurso anticomunista (por ejemplo, en torno de la destrucción de la familia y la confiscación de toda propiedad privada) hacían impensable que percibieran el futuro con complacencia. Si bien esto no se tradujo necesariamente en una acción convencida contra el gobierno, sí logró aumentar las críticas en algunos sectores.

LAS CONDICIONES MATERIALES

La oleada de subjetivismo de las últimas décadas ha menospreciado el papel de las condiciones materiales de vida en estos años. Se menciona con insistencia el tema del desabastecimiento, el aumento de la demanda interna y los cambios en las pautas de consumo; sin embargo, no se hace de esto un tema de investigación. El tema político y cultural por sí mismo no logra dimensionar los cambios experimentados en esos años.

Por ejemplo, tanto para partidarios como para opositores a la UP, la escasez de productos básicos se transformó en un tema de debate y en el origen de múltiples iniciativas. Muchas fábricas pasaron a desarrollar circuitos directos de comercialización al público. Los sindicatos, por su parte, se transformaron en centros de abastecimiento –algo central en época de escasez–, lo que potenció su papel.

La evolución de los sueldos y salarios es otro tema importante, cuya reconstrucción permite mostrar un componente que orientó la acción de los trabajadores. Desde los años cuarenta, la brecha entre los ingresos

de obreros y empleados se había profundizado; revertir esta tendencia se transformó en uno de los objetivos del nuevo gobierno. De ahí que en esos años la lucha por el aumento salarial diferenciado no fuera mera pugna por beneficios materiales, sino tema recubierto de contenido político. Además, la posibilidad de acceder a una alimentación digna (recordemos el importante cambio en la dieta alimentaria que se produjo en esos años) y de acceder a ciertos bienes hasta entonces “suntuarios” (vajillería) compensó las abstractas disputas ideológicas.

La expansión económica del primer año de gobierno contrastó con la crisis del último. Sin embargo, aun en esta etapa más crítica, el consumo fue un factor importante en la motivación de los trabajadores. Por ejemplo, la oferta masiva de bienes culturales fue muy apreciada por los trabajadores, y en general los sectores populares. No en vano una de las tácticas empleadas para deslegitimar al gobierno fue provocar el desabastecimiento de los productos básicos.

Con el descrédito en que ha caído el consumo en las últimas décadas, asociado a la artificial manipulación de la demanda en las economías capitalistas, resulta difícil poner siquiera este componente como relevante en esos años cargados de idealismo; sin embargo, uno de los objetivos declarados del proyecto de la UP se orientaba en ese sentido.

LA ESTRUCTURA SOCIODEMOGRÁFICA

En la misma línea, los componentes estructurales del mercado laboral han pasado desapercibidos en los estudios históricos de los años de la UP. Lo que era un enfoque casi obligado en los años sesenta, pasó a ser poco valorado con el auge de las visiones más subjetivistas.

Francisco Zapata, siguiendo la tradición de los años sesenta, ha hecho avances importantes en este tema. En primer lugar, ha podido desvirtuar las simplificaciones sobre los niveles de agitación, afiliación y composición sindical de esos años. Por ejemplo, puso de relieve la disminución en el tamaño de los sindicatos, el acortamiento en los días de huelga.²⁰ (El explosivo crecimiento en la sindicalización se debió principalmente a los avances en la organización de los trabajadores rurales.)

²⁰ F. Zapata, *Estructura y representatividad del sindicalismo en Chile*, Santiago, ILPES, 1968.

El gobierno de Allende generalmente ha sido estudiado en sus componentes político-ideológicos. Se le vincula con las ideas de cambio estructural promovidas por grupos orientados ideológicamente, pero no se le asimila a un proceso de transformación ya en curso, que se expresó en los modelos sociodemográficos.

La reforma agraria iniciada años antes había liberado una importante cantidad de recursos, incluyendo la incorporación de un contingente de nuevos trabajadores al mercado laboral, que ahora podían demandar, con sus salarios, productos que la economía debía producir. Como éste, muchos otros fenómenos de orden estructural se estaban produciendo bajo la superficie de la contingencia política. Un balance de la UP y del papel de los trabajadores debería incorporar estos aspectos.

PALABRAS FINALES

El vínculo entre los trabajadores y el gobierno de Allende fue estrecho y multiforme, como hemos visto. Abarca tanto el debate político-ideológico sobre el papel de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, como procesos éticos y subjetivos que pusieron en el centro el simbolismo de la clase obrera.

Para entender esta etapa y el proyecto que encabezó Allende, así como para tener algunos indicios de sus límites, podemos concentrarnos en los trabajadores. Su gobierno no se planteó ser únicamente representante de este sector social, pero en la práctica éste se transformó en su principal sostén.

Varias investigaciones realizadas por historiadores y sociólogos sobre diversos aspectos de la relación entre los trabajadores y Allende han proyectado sus propias dudas políticas en sus temas de estudio. No resulta extraño, si consideramos que las expectativas cifradas en el papel revolucionario de la clase obrera quedaron frustradas con el colapso final de la experiencia.

Más que detenernos en un aspecto particular de esta relación entre la UP y los trabajadores, he preferido ofrecer una panorámica de los principales enfoques y temáticas. No siempre he tenido una postura clara y propia de las distintas opciones interpretativas, pero sí espero haber mostrado las proyecciones de las distintas visiones, así como los

desafíos intelectuales de las diferentes áreas de estudio de esos años tan extraordinariamente ricos en experiencias.

BIBLIOGRAFÍA

- Angell, Alan, *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile*, México, Editorial Era, 1974.
- Barría Serón, Jorge, *El movimiento obrero en Chile. Síntesis histórico-social*, Santiago, Ed. Trígono, 1971.
- Bitar, Sergio y Crisóstomo Pizarro (1986), *La caída de Allende y la huelga de El Teniente. Lecciones de la historia*, Santiago, Ediciones del Ornitorrinco, col. Pensamiento alternativo, 1986.
- Del Pozo, José, *Rebeldes, reformistas y revolucionarios: una historia oral de la izquierda chilena en la época de la Unidad Popular*, Santiago, Ediciones Documentas, 1992.
- Di Tella, Torcuato, Brams Lucien, J.D. Reynaud y Alain Touraine, *Sindicato y comunidad. Dos tipos de estructura sindical latinoamericana*, Buenos Aires, Editorial del Instituto, 1967.
- Espinosa, Juan G., y Andrew Zimbalist, *Democracia económica. La participación de los trabajadores de la industria chilena, 1970-1973*, México, Fondo de Cultura Económica, 1978.
- Gaudichaud, Franck, *La Central Única de Trabajadores, las luchas obreras y los cordones industriales en el periodo de la Unidad Popular (1970-1973). Análisis histórico crítico y perspectiva*, 2003 (en www.rebellion.org).
- Jobet, Julio César, *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile*, Santiago, Editorial Universitaria, 1951.
- Klubock, Thomas M., *Contested communities. Class, gender and politics in Chile's El Teniente Copper Mine, 1904-1951*, Durham y Londres, Duke University Press, 1998.
- Landsberger, Henry, Manuel Barrera y Abel Toro, *El pensamiento del dirigente sindical chileno: un informe preliminar*, Insora, Santiago, Universidad de Chile, 1963.
- Landsberger, Henry, "La élite obrera de América Latina y la revolución", en Seymour M. Lipset y Aldo Solari, *Élites y desarrollo en América Latina*, Buenos Aires, Paidós, 1967, pp. 308-348.
- Lira, Robinson, "Modelo de relaciones industriales y orientación sindical. El caso de la Refinería de Azúcar de Viña del Mar, 1930-1973", *Proposiciones*, núm. 27, 1997, pp. 186-201.
- Manns, Patricio, *Breve síntesis del movimiento obrero*, Santiago, Quimantú, 1972.

- Ortiz, Fernando, *El movimiento obrero en Chile (1891-1919). Antecedentes*, Madrid, Ediciones Michay, Libros de Meridian, 1985.
- Petras, James y Maurice Zeitlin, "El radicalismo político de la clase trabajadora chilena", *Cuadernos Latinoamericanos*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1969.
- _____, *Politics and social forces in Chilean development*, Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 1969.
- Pinto, Julio, Azún Candina y Robinson Lira, *Historia contemporánea de Chile*, vol. 2: *Actores, identidad y movimiento*, Santiago, Lom Ediciones, Serie historia, 2000.
- Power, Margaret, *Right-wing women in Chile, Feminine power and the struggle against Allende, 1964-1973*, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 2002.
- Ramírez Necochea, Hernán, *Historia del movimiento obrero. Antecedentes: siglo XIX*, Santiago, Editorial Austral, 1956.
- Rojas Flores, Jorge, Cinthia Rodríguez y Moisés Fernández, *Cristaleros: recuerdos de un siglo. Los trabajadores de Cristalerías de Chile*, Programa de Economía del Trabajo (PET), Sindicato núm. 2 de Cristalerías de Chile, Padre Hurtado, 1998.
- Salazar, Gabriel, *Violencia política popular en las "grandes alamedas", 1947-1987*, Santiago, Ediciones del Sur, 1990.
- Samaniego, Augusto, "Estructuras y estrategia de la Central Única de Trabajadores (CUT): 1969-1972. Movimiento sindical y proyectos políticos de cambio social en Chile", *Cuadernos de Humanidades*, núm. 17, Santiago, USACH, 1994.
- _____, "Octubre al rojo: fulgor y agonía de la unidad de los trabajadores", *Contribuciones científicas y tecnológicas*, núm. 30, Santiago, USACH, abril, pp. 1-22.
- Silva, Miguel, *Los cordones industriales y el socialismo desde abajo*, Santiago, Imprenta Lazor, 1998.
- Stillerman, Joel, *From solidarity to survival. Transformations in the culture and styles of mobilization of Chilean metal workers under democratic and authoritarian regimes, 1945-1995*, tesis doctoral, Nueva York, New School for Social Research, 1998.
- Winn, Peter, *Weavers of revolution: The Yarur workers and Chile's road to socialism*, Nueva York, Oxford University Press, 1986.
- Zapata, Francisco, *Estructura y representatividad del sindicalismo en Chile*, Santiago, ILPES, 1968.
- _____, "Los mineros de Chuquicamata: ¿productores o proletarios?", *Cuadernos del CES*, núm. 13, México, El Colegio de México, 1975.
- _____, *Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Salvador Allende*, México, El Colegio de México, 1976.

“SER JOVEN Y NO SER REVOLUCIONARIO”. LA JUVENTUD Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DURANTE LA UNIDAD POPULAR¹

Fabio Moraga Valle*

I. LA PREGUNTA LENINISTA:
11 DE SEPTIEMBRE DE 1973, ¿QUÉ HACER?

Eran las 10 de la mañana del 11 de septiembre de 1973 y en los prados del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile,² famoso por ser el bastión de la izquierda universitaria, alrededor de dos mil jóvenes escuchaban las transmisiones que las radios leales al gobierno de Salvador Allende hacían del movimiento militar que en ese instante cerraba el cerco al palacio presidencial de La Moneda. Habían acudido al mandato de la Unidad Popular (UP), la Central Única de Trabajadores (CUT) y la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), que habían decretado que ante cualquier emergencia, cada militante y cada revolucionario debía acudir a su puesto de trabajo o estudio para “resistir al fascismo”. No era la primera vez que ocurría algo así; ya el 29 de junio de ese año una asonada militar había despertado la reacción inmediata de las bases del

* Maestro en Historia por la Universidad de Chile, candidato a doctor en Historia por El Colegio de México. Autor de “*Muchachos casi silvestres*”, la *Federación de Estudiantes y el movimiento estudiantil chileno: 1906-1936* (en prensa) y coautor (con Guillermo Palacios) de *La independencia y el comienzo de los regímenes representativos*, Madrid, Síntesis, 2003.

¹ Una versión inicial de este trabajo en *Cuadernos Sociológicos*, núms. 3 y 4, Santiago, Universidad Arcis, 2004.

² El Instituto Pedagógico, creado en 1886, se incorporó en los años sesenta a la Facultad de Filosofía y Educación. Durante la reforma universitaria de 1968, ésta dio origen a cuatro facultades: Facultad de Ciencias Sociales; Facultad de Educación; Facultad de Filosofía y Letras; Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, ubicadas en el Campus Macul de la sede oriente de la Universidad de Chile. No obstante este cambio, las instalaciones de la sede oriente continuaron siendo nombradas el “Pedagógico”. (Nota del compilador).

gobierno popular que habían acudido a los mismos lugares a esperar instrucciones de los “partidos populares” para “parar el golpe fascista”. Vencido el *putsch* por los sectores de las fuerzas armadas leales al gobierno, una multitudinaria marcha pasó durante horas por las puertas de La Moneda. Entre las consignas que esgrimieron los trabajadores y los militantes de los partidos de la UP, ante un Salvador Allende que observaba desde el balcón, se escuchó la exigencia de que repartiera armas entre el pueblo para parar el golpismo; sin embargo, el presidente no satisfizo peticiones tan radicales. Pero dos meses después—el 11 de septiembre—, entre las bases de la UP y los “partidos revolucionarios” que operaban en la extrema izquierda había confusión. Los tanques y vehículos militares comenzaron a rodear la sede universitaria; un estudiante narró estupefacto el cuadro:

Me sorprendió ver en soldados, que apenas sobrepasaban mi edad, una expresión de adultez que no les encajaba en los rostros lampiños. Todos se veían asumidos en la tarea de dar vuelta la historia, adueñarse de la ciudad y no aceptar ninguna explicación o excepción. Cosa rara en un Chile que, a mis ojos adolescentes, vivía tiempos de enorme flexibilidad de espíritu.³

Los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), las fracciones socialistas más radicales y otros grupos revolucionarios menores, asumieron su papel de vanguardia del proletariado y propusieron organizar la resistencia armada a la ocupación de la Universidad, para lo cual contaban con algunas armas cortas, las bombas molotov que pudieran fabricar y “piedras y neumáticos para las barricadas”. Alejandro Rojas, militante comunista, presidente de la Federación, y desde marzo de 1973 diputado del Congreso Nacional, “no menos confundido que el resto y no menos asustado”, tomó la mano de su “compañera” Elena y corrió hasta la puerta de la calle Macul; pretendía “dialogar con los militares y arreglar la evacuación del recinto, con la esperanza de impedir la ocupación militar y la masacre”. Antes de llegar a su objetivo fue interceptado por Fernando Ortiz, profesor de Historia y dirigente nacional del Partido Comunista que lo tomó de ambos brazos y le preguntó a gritos: “¿A dónde va,

³ M. Hopenhayn, “Temprano en la vida pero tarde esa mañana”, en M. Rivas y R. Merino, *¿Qué hacía yo el 11 de septiembre de 1973?*, Santiago, Lom, 2001.

compañero Rojas?”, cuando el joven le señaló su propósito el viejo militante le volvió a gritar:

Está loco, compañero. Ahora lo único que podemos hacer es asegurar que los estudiantes abandonen rápido el recinto por las puertas posteriores. Y usted... muy presidente de la FECH será, pero yo le ordeno, en nombre de la dirección del partido, que se vaya inmediatamente a su lugar de seguridad.⁴

Enseguida, un grupo de correligionarios metió al impetuoso presidente junto a otros dirigentes estudiantiles en un auto y abandonaron el Pedagógico por la puerta de la Escuela de Periodismo. Mientras, las autoridades universitarias, encabezadas por el decano, después de parlamentar con los uniformados y de hablar largamente con los estudiantes que quedaban, lograron convencer, incluso a los más exaltados, de deponer su actitud y abandonar ordenadamente el recinto por las puertas posteriores. Eran cerca de las 12 del día y los aviones seguían pasando sobre La Moneda, que se incendiaba por el bombardeo.⁵ En ese momento el joven estudiante de filosofía, que había visto a los militares preparándose para entrar, venía de hacer el camino contrario, desde la comuna de Vitacura hasta los límites de Ñuñoa, a “su lugar de resistencia”; cuando logró ubicar una entrada no vigilada, que resultó ser la misma puerta de Periodismo, encontró los patios del bullente campus desiertos:

Me tocó escuchar desde los parques del Pedagógico el bombardeo de La Moneda, sin saber de qué se trataba. Pero el ruido de las explosiones sugería que la cosa iba en serio. Busqué rostros conocidos entre los escasos cuerpos que se desplazaban bajo los árboles, tan sigilosos y confundidos como yo. Del grupo de filosofía sólo permanecían allí unos pocos inter-

⁴ Testimonio de Alejandro Rojas. Citado en R. Brodsky, *Conversaciones con la FECH*, Santiago, Cesoc, 1987, p. 149. Probablemente gracias a la acción de Ortiz, Alejandro Rojas salvó la vida; el dirigente comunista no tuvo igual suerte, hoy engrosa las listas de detenidos-desaparecidos de la dictadura militar.

⁵ Los testimonios de quienes estaban dentro de la sede universitaria esa mañana son confusos y hasta contradictorios; muchos no guardan relación entre tiempo y acontecimiento; esto puede deberse a lo “inesperado” del golpe y al ambiente generalizado de desorientación política. Pero, pese a lo anterior, y por lo mismo, no son menos valiosos, precisamente para probar el estado real al que llegaron los estudiantes en ese momento.

nos, más hippies que militantes, que se alojaban en los dormitorios que todavía quedaban del viejo sistema de becarios de provincia.⁶

La FECH era una organización estudiantil que representaba y representa a los estudiantes de la Universidad de Chile, y que existía entonces desde hacía casi setenta años. Siguiendo la impronta laica y progresista de la Universidad, el movimiento estudiantil y las organizaciones que de él nacieron continuaron en líneas generales esa misma orientación. Ahí se formaron los principales líderes políticos, gremiales y culturales del país, además de premios nacionales de literatura, historia, ciencias, teatro y música, un Premio Nobel de Literatura, un secretario general y un presidente de las Naciones Unidas.⁷ A su vez, la mayoría de los presidentes del “Chile republicano” del siglo XIX y de los mandatarios democráticos del siglo XX, estudiaron en la Universidad fundada por Andrés Bello. La leyenda dice que el propio Salvador Allende, antes de iniciar la difícil carrera política que lo llevó a la Presidencia de la República, fue dirigente de la organización en 1930.⁸

Tres años antes del golpe, la madrugada del 5 de septiembre de 1970, el mismo “compañero presidente” había pronunciado, cuando no había duda del estrecho triunfo de la UP en las urnas, desde los balcones de la Federación de Estudiantes su “discurso de la victoria” diciendo:

¡Qué extraordinario y significativo es que pueda yo dirigirme al pueblo de Chile y al pueblo de Santiago desde la Federación de Estudiantes! Esto posee un valor y un significado muy altos. Nunca un candidato triunfante por la voluntad y el sacrificio del pueblo usó una tribuna que tuviera mayor trascendencia. Porque todos lo sabemos: la juventud de la patria fue vanguardia de esta gran batalla, que no fue la lucha de un hombre, sino

⁶ M. Hopenhayn, “Temprano en la vida...”, *op. cit.*, p. 90.

⁷ El Premio Nobel de Literatura correspondió a Pablo Neruda, la Presidencia de las Naciones Unidas de 1955 a José Maza Fernández (presidente de la federación en 1915) y la Secretaría General a Felipe Herrera, dos años después.

⁸ No hemos encontrado prueba documental de que Allende fuera vicepresidente durante 1930, es decir, bajo la presidencia de Julio Barrenechea. Tampoco confirman lo contrario los testimonios de Barrenechea o de Waiss. Véase J. Barrenechea, *Frutos del país*, Santiago, Ed. Andrés Bello, 1984, y Ó. Waiss, *Chile vivo. Memorias de un socialista 1928-1970*, Madrid, Centro de Estudios Salvador Allende, 1986. Véase también F. Moriga, “*Muchachos casi silvestres*”..., *op. cit.*

la lucha de un pueblo; ella es la victoria de Chile alcanzada limpiamente esta tarde.⁹

Los ocupantes del Pedagógico ese 11 de septiembre eran jóvenes y estudiantes. ¿Qué los movía a acudir ese día a su casa de estudios? ¿Qué los llevó a pensar que podían parar a los militares fuertemente armados? ¿Cómo llegaron los jóvenes al 11 de septiembre?

Este trabajo no es *in estricto sensu* una historia de los estudiantes durante el gobierno de la UP; es un ensayo de historia intelectual acerca de la construcción ideológica, o acerca de un cierto discurso sobre la juventud que durante el periodo 1970-1973 tuvo su apogeo y el despliegue de sus máximas capacidades interpretativas, y a la vez su mayor crisis de sentido.

II. SER JOVEN..., SER ESTUDIANTE... UN DISCURSO DE ALLENDE

Durante una visita oficial a México, en diciembre de 1972, el presidente de la República de Chile, el médico Salvador Allende Gossens, pronunció un discurso ante los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Este texto es paradigmático porque en él podemos encontrar un conjunto de ideas que refuerzan lo que hemos sostenido. Primero, es un largo discurso en que el “compañero presidente” se dirige a la juventud mexicana y chilena, pero a la vez está hablando de una construcción cultural acerca de la juventud referida a un imaginario latinoamericanista y a un “deber ser” juvenil:

[...] porque si hemos recibido el afecto cálido del pueblo mexicano, de sus mujeres y de sus hombres, qué puede significar más que estar junto a la juventud, y sentir cómo ella late y presurosamente, con una clara conciencia revolucionaria y antiimperialista.¹⁰

La “juventud revolucionaria y antiimperialista” a la que se dirigía es “la juventud, la única que puede existir”, pues en seguida aclara

⁹ Allende Gossens, Salvador, *Salvador Allende frente al mundo: discursos y declaraciones*, prólogo de Francisco Fernández Fredes, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988.

¹⁰ Salvador Allende, “Discurso en la Universidad de Guadalajara”, México, diciembre de 1972. En adelante citado como “Discurso de Guadalajara”.

las formas de “ser joven” en países como México y Chile, es decir, América Latina. Esta juventud –en sus palabras– estaba constituida de manera tal que no caben querellas generacionales: “hay jóvenes viejos y viejos jóvenes”; él era un “viejo joven”; es decir, un adulto con “alma juvenil”. Por el contrario, los primeros son los que inconscientemente saben la realidad en la que están parados, asumen el “ser-joven-y-ser-universitario” como un privilegio extraordinario que les permite adquirir un título que los privilegia y prestigia socialmente al poder ganarse la vida en condiciones superiores al resto de la población. Así, aunque lo hagan honestamente –sostenía Allende– los arquitectos por ejemplo, no piensan en las miles de familias que no tienen un techo o hay médicos que “no quieren comprender” que la salud (y con ello la vida) se compra y quien no tiene salud se empobrece y vive menos; estos profesionales se dedican, individualista y egoístamente, al ejercicio liberal de su carrera.¹¹

El discurso de Allende se desarrolla así en medio de una lucha ideológica entre su proyecto de “vía chilena al socialismo” y el de la izquierda revolucionaria que seguía la línea guevarista o procubana. Eran dos proyectos políticos que por distintas vías querían alcanzar el socialismo.

Frente a esa realidad social chilena, Allende oponía una realidad continental: “el panorama de América Latina es un panorama dramático en las cifras”, pese a haber transcurrido un siglo y medio de independencia política, había una excesiva dependencia económica, y entregaba una larga lista de cifras de pobreza, analfabetismo, cesantía, monoproducción, falta de democracia, imperialismo, en un continente joven (57% de la población no supera los 27 años de edad); en esas circunstancias –preguntaba Allende– ¿cuál es el destino de la juventud?

Esto plantea muchos contrasentidos, y Allende hablaba desde la historia de su país y la mexicana:

[...] mi país, país democrático, con muy sólidas instituciones, país que tiene un Congreso en funciones hace 160 años, país en donde las Fuerzas

¹¹ S. Allende, “Polémica”, *Claridad*, mayo de 1965. La misma idea del privilegio del estudiante universitario y su deber social de retribuir esa situación apareció en la discusión estudiantil en 1965 entre las juventudes políticas de la democracia cristiana, el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC).

Armadas –igual que en México– son Fuerzas Armadas profesionales, respetuosas de la ley y la voluntad popular.¹²

Esta estabilidad institucional, sin embargo, no borraba la realidad chilena como país latinoamericano monoprodutor y dependiente en un mundo en que las reglas del juego económico internacional las ponían los países desarrollados. A esto se unía una realidad médico-social aplastante que cerraba el círculo de la pobreza.¹³ En este contexto, definía a la universidad y al universitario latinoamericano:

[...] una universidad que entiende que para que termine esta realidad brutal que hace más de un siglo y medio pesa sobre nosotros, en los cambios estructurales económicos se requiere un profesional comprometido con el cambio social; se requiere un profesional que no se sienta un ser superior porque sus padres tuvieron el dinero suficiente para que él ingresara a una universidad; se necesita un profesional con conciencia social, que entienda que su lucha, si es arquitecto, es para que se construyan las casas necesarias que el pueblo necesita. Se necesita un profesional que, si es médico, levante su voz para reclamar que la medicina llegue a las barriadas populares y, fundamentalmente, a los sectores campesinos.¹⁴

Este discurso lo planteaba a un sujeto social muy definido: los jóvenes revolucionarios que estudiaban en Guadalajara, una “universidad de vanguardia” (de la cual los proletarios y campesinos estaban, de todos modos, excluidos) y, como tal, imponía obligaciones a los (jóvenes) estudiantes que se privilegiaban en sus aulas; es decir, Allende construye en este discurso una ética juvenil, una ética juvenil-revolucionaria, un “deber ser” juvenil, estudiantil y revolucionario:

No hay querella de generaciones, y eso es importante que yo lo diga. La juventud debe entender su obligación de ser joven, y si es estudiante, darse cuenta que hay otros jóvenes que, como él, tienen los mismos años,

¹² S. Allende, “Discurso de Guadalajara”, *op. cit.*

¹³ La preocupación de Allende por la realidad médico-social era antigua; su tesis de grado, que dibujaba “el angustioso panorama demográfico y sanitario del país”, fue publicada cuando era ministro de Salubridad del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el primer presidente del Frente Popular chileno. Salvador Allende G., *La realidad médico-social chilena*, Santiago, Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social-Lathrop, 1939.

¹⁴ Allende, “Discurso de Guadalajara”, *op. cit.*

pero que no son estudiantes y si es universitario con mayor razón mirar al joven campesino o al joven obrero, y tener un lenguaje de juventud, no un lenguaje sólo de estudiante universitario.¹⁵

En esta encrucijada se jugaba el proyecto de lucha por los cambios “dentro de la democracia burguesa” pues en Chile, debido a esa fortaleza institucional que la había caracterizado, un grupo de dirigentes políticos había entendido que el único camino era la lucha electoral. Esto porque –en la argumentación allendista– esa lucha no era la de una élite social, intelectual o política; la revolución, los cambios profundos en la sociedad, no pasaban por la universidad sino por las grandes masas; “la revolución la hacen los pueblos, la revolución la hacen, esencialmente, los trabajadores”, sostenía.

Así, se planteaba frente al otro gran proyecto de cambios que se jugaba en América Latina: la revolución cubana, de la que compartía con sus líderes, sus iconos y una gran amistad; de tal manera que Ernesto *Che* Guevara, a la segunda persona que le había regalado un ejemplar de *Guerra de Guerrillas* era él, y le había escrito la siguiente dedicatoria: “A Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo” (el primero había sido para Fidel). Con esto, y afirmando explícitamente su marxismo, legitimaba su proyecto gradualista y legalista de cambios:

[...] es útil que la juventud, y sobre todo la juventud universitaria, que no puede pasar por la universidad al margen de los problemas de su pueblo, entienda que no puede hacerse del balbuceo doctrinario la enseñanza doctrinaria, de entender que el denso pensamiento de los teóricos de las corrientes sociológicas o económicas requiere un serio estudio; que si es cierto que no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria, no puede haber la aplicación voluntaria o la interpretación de la teoría adecuándola a lo que la juventud o el joven quiere. Que tiene que mirar lo que pasa dentro de su país y más allá de la frontera y comprender que hay realidades que deben ser meditadas y analizadas.¹⁶

Este discurso antivoluntarista, y que apelaba a cierta concepción de racionalidad, se basaba en la responsabilidad política que debía tener el joven-universitario-revolucionario:

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes, y los que han leído el *Manifiesto Comunista*, o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que, por lo menos, tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica; pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario, en una sociedad burguesa, es difícil.¹⁷

Salvador Allende había nacido en Valparaíso el 26 de junio de 1908. En esa época Chile estaba regido por un régimen político de tipo parlamentarista que se había instaurado después de la Guerra Civil de 1891 y que había dejado a la oligarquía como el único grupo social que dirigía el país, excluyendo a los emergentes grupos medios populares. Hacia 1920, este sistema estaba en franca crisis y pese al ascenso al gobierno de un político liberal como Arturo Alessandri, la acción de la oligarquía parlamentaria frenó cualquier posibilidad de cambio. Hijo de una familia de clase media, en 1926 Allende entró a la carrera de Medicina de la Universidad de Chile. Durante sus estudios, el país fue gobernado por el coronel Carlos Ibáñez del Campo quien, luego de maniobrar eficientemente, había quedado virtualmente como candidato único hasta que logró hacerse elegir Presidente de la República con 97% de los votos. El gobierno de “salvación nacional” que encabezó, al poco tiempo se transformó en una dictadura y las cárceles se llenaron de opositores. La crisis económica de 1929 y la acción del movimiento estudiantil lograron expulsar al “tirano” el 26 de julio de 1931, luego de días de motines callejeros y de asonadas populares que dejaron varios muertos y heridos.

A partir de entonces, el movimiento estudiantil y en especial los estudiantes de la Universidad de Chile se consagraron como un movimiento social en el cual se reproducían todas las tendencias políticas existentes en el país. A su vez, las elecciones para la dirección de la Federación de Estudiantes fueron un “barómetro de la política nacional” y la figura del presidente de la organización se transformó en un personaje más de la vida política, con tanta importancia como un jefe de partido o un parlamentario.¹⁸ Así, ese 11 de septiembre de 1973, la FECH era lo que hemos descrito anteriormente.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ F. Moraga, *El positivismo en Chile, 1870-1925*, tesis doctoral, México, El Colegio de México (en preparación).

Pero queremos volver sobre esa frase que Allende lanzara en Guadalajara; frase y construcción simbólica a la vez, que descontextualizada ha sido citada múltiples veces hasta desvirtuarla en gran medida de su sentido original: “Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica; pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario, en una sociedad burguesa, es difícil”.¹⁹

Vamos a establecer dos hipótesis posibles ante esta aseveración allendista. La primera plantea el supuesto de que Allende cree profundamente en este aserto, sobre todo porque lo que pasó a la historia es la primera parte, que une la biología a la política; es decir, que (dando vuelta al análisis) efectúa un camino normal para la conformación de la mentalidad moderna que fundamenta científicamente una “ciencia social”, como la política, recurriendo a una ciencia “dura”, como la biología. Es decir, establece un criterio de verdad científica acerca de la sociedad basándose en una ciencia no social: la biología. Así, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción pues la biología establece que juventud y cambio, juventud y deseo de innovación, juventud y voluntad (revolucionaria), van inextricablemente unidos. Y Allende era médico y como tal era heredero de esa tradición de organización estudiantil y juvenil que desde la fundación del Centro de Estudiantes de Medicina en 1904 abogara por la introducción de criterios científicos para regir la sociedad, y en ello tenía un papel fundamental la práctica médica y el mejoramiento de las condiciones sanitarias de la población.²⁰

La segunda hipótesis parte del supuesto de que Allende no cree en esta frase y que lo que está haciendo es recurrir a una ironía profunda para “poner en vereda” a los jóvenes revolucionarios que, convencidos, signaban dicha frase, diciéndoles que la revolución no la hacen los estudiantes sino los obreros y las masas populares; que la revolución no pasa por la universidad y que por lo tanto ser joven no es necesariamente ser revolucionario; que hay “jóvenes viejos y viejos jóvenes” y que lo realmente importante es ser revolucionario toda la vida.²¹ Pa-

¹⁹ S. Allende, “Discurso de Guadalajara”, *op. cit.*

²⁰ F. Moraga, *El positivismo...*, *op. cit.*, cap. 1.

²¹ Esta tesis ha sido defendida por Víctor Muñoz Tamayo, “Imágenes y estudios cuantitativos en la construcción social de ‘la juventud’. Un acercamiento histórico 2003-1967”, *Última Década*, núm. 20, CIDPA, Viña del Mar, 2004.

radóticamente esta segunda hipótesis no se contradice con la primera; por el contrario, llega a los mismos resultados toda vez que la izquierda (y Allende era incuestionablemente un hombre de esa izquierda) posteriormente leyó y creyó a “pie juntillas” esta frase descontextualizada y con ella siguió alimentando su accionar e intervención política hacia el mundo juvenil.

¿Por qué la izquierda creyó esto? ¿Por qué lo firmó con un convencimiento y una fe militantes? ¿Por qué explicó la política a través de la biología?

III. LA JUVENTUD: UNA CONSTRUCCIÓN IMAGINARIA

En 1978 el recientemente desaparecido sociólogo Pierre Bourdieu escribió un breve artículo titulado “La juventud no es más que una palabra”. Aunque muy general y referido sólo al medio educacional francés, establece tres ideas fundamentales: primero, que la juventud es una construcción social y no biológica; es decir, que ser joven depende del reconocimiento y el estatuto que se le adjudique a una determinada cantidad de individuos en la sociedad y no de la edad que éstos tengan; segundo, ese estatuto depende fundamentalmente de la accesibilidad a la educación media y superior que prolonga la etapa de la adolescencia, y tercero, que ese estatuto de joven está asociado a la “irresponsabilidad”, determinado por una condición subalterna con el mundo adulto que guarda para sí el ser “responsable” y con ello el poder que implica.²² En última instancia, “la juventud” y el “ser joven” dependen de la sociedad que le da significado a ese “estado de la existencia social”.

Nuestra hipótesis es que el discurso de la izquierda chilena descansó sobre un ideal acerca de la juventud y de los estudiantes que tenía larga data desde que se construyó científica, ideológica y políticamente. Este ideal fue hereditario del racionalismo científico, el positivismo, el romanticismo literario y las ideas generacionales y “juvenilistas” que surgieron a principios del siglo XX. A partir de ese momento, y no antes, la juventud adquirió paulatinamente el estatuto que tenía en el momen-

²² P. Bourdieu, “La juventud no es más que una palabra”, en *Sociología y cultura*, México, Grijalbo, 1990.

to del golpe de Estado. Así, podemos entender que los estudiantes no hubiesen tenido la notoriedad e importancia que se les dio a lo largo del siglo XX si antes los jóvenes, y más genéricamente “la juventud”, no hubiese adquirido importancia cultural en el imaginario progresista de la época.

Vamos a revisar someramente esta hipótesis en dos aspectos: primero, en el debate cultural, y segundo, en la formación de las primeras organizaciones juveniles chilenas (y por extensión las latinoamericanas).

Desde la perspectiva de una nueva historia intelectual, vamos a entender que los debates culturales, cuyo análisis atraviesa nuestra reflexión, tienen dos aspectos: por un lado “recogen” un fenómeno social y lo traducen a códigos culturales a través de múltiples expresiones como la novela, el teatro, el cine y otros lenguajes contemporáneos; pero a la vez, en el plano de la cultura, esos fenómenos sociales adquieren naturaleza nueva, simbólica, que tiene el efecto de ampliar o relevar esos otros fenómenos que se juegan en el subsuelo social.

Durante los primeros años del siglo se instaló en el debate cultural la novedosa idea de que en este grupo de edad que llamamos *juventud* estaban “alojados” ciertos elementos biológicos que por “naturaleza” hacían a los jóvenes “idealistas” y “puros” frente a la corrupción y el materialismo de la sociedad latinoamericana de fines del siglo XIX, y que por lo tanto en ellos estaban cifradas las esperanzas y el mundo del mañana. Esta idea constituyó una ruptura violenta y de enormes consecuencias en el ambiente intelectual europeo y latinoamericano.²³

En este continente, lo anterior se debió en gran medida a José Enrique Rodó (1872-1917) quien escribió *Ariel* el último año del siglo XIX.²⁴ Este libro rompía con la idea decimonónica tradicional respecto de la juventud; es más, la juventud, social y culturalmente no existía durante esa centuria (al menos en América Latina). Pero quienes han leído *Ariel*, incluso los últimos estudios, han destacado sobre todo esa

²³ En lo que resta de este acápite continúo el planteamiento profusamente argumentado en mi libro ya citado: “*Muchachos casi silvestres*”...

²⁴ Rodó recibió educación religiosa pero no clerical. En 1897 publicó *La vida nueva* y un año después comenzó a participar en la Juventud Colorada, el Partido Liberal uruguayo; ese mismo año fue designado catedrático de Literatura de la Universidad. Intelectualmente liberal, fue diputado aunque siempre despreció la política y adoró el trabajo intelectual.

idea rodoniana de que el aporte de América Latina a la cultura universal estaba principalmente en el orden espiritual y humanista, que el autor uruguayo personificó en el personaje *Ariel*; al revés de la América anglosajona o del norte que, personificada en *Calibán*, tenía su fuerte en la cultura material y pragmática.²⁵ Y esta perspectiva de análisis no deja de tener razón; gran parte del éxito cultural del texto de Rodó consistió en que era una respuesta al discurso positivista que privilegiaba la cultura material e industrial por sobre la humanista y espiritual. El positivismo latinoamericano de fines del siglo XIX, que tenía sus principales sustentos teóricos en revisionistas de las ideas de Augusto Comte, como el inglés John Stuart Mill y el francés Herbert Spencer, penetró con gran facilidad en muchos países latinoamericanos, especialmente México, Chile y Argentina; sin embargo, Uruguay parece haber sido la nación donde menos se recibieron; de esta manera, no es casual que fuese ahí donde se concibió este libro.²⁶ Así, el *arielismo* se constituyó en un movimiento idealista y contestatario ante el “materialismo” y el pragmatismo positivistas, y articulando un discurso humanista, que en muchos casos buscó sus fundamentos en la cultura griega clásica, rescató la impronta “espiritual” característica de la América Latina y la fuerza que residía en la pureza moral de la juventud como un agente de cambio cultural y político.

Pero junto con este rescate del “espiritualismo” e “idealismo” latinoamericanos —en definitiva, del humanismo— se articuló o dio un nuevo impulso a otros movimientos culturales e intelectuales como el que en otro lugar hemos llamado “renacimiento latinoamericano”, que se construyó a imagen y semejanza del renacimiento europeo del siglo XV, rescatando la cultura griega clásica. Ahora el sujeto social que protagoniza este “renacimiento” era, al contrario del siglo XIX, la juventud.²⁷

En *Ariel*, los jóvenes, por su “natural” tendencia al idealismo y el romanticismo, se transformaron en los depositarios de una misión social renacentista, humanista e idealista:

²⁵ Sobre todo el último estudio de Eduardo Devés, *Del Ariel a la Cepal, el pensamiento latinoamericano 1900-1950*, Santiago, Biblos-Dibam, 2001, especialmente pp. 29-66.

²⁶ F. Moraga, *El positivismo...*, *op. cit.*

²⁷ Sobre el movimiento cultural del “renacimiento latinoamericano” véase Fabio Moraga, *El positivismo...*, *op. cit.*; también véase, en una formulación más somera, Susana Quintanilla, “Dionisio en México o cómo leyeron nuestros clásicos a los clásicos griegos”, *Historia Mexicana*, núm. 3, vol. LI, México, enero-marzo de 2002.

¿Madurará en realidad esa esperanza? –Vosotros, los que vais a pasar, como el obrero en marcha a los talleres que le esperan, bajo el pórtico del nuevo siglo, ¿reflejaréis quizá sobre el arte que os estudie, imágenes más luminosas y triunfales que las que han quedado de nosotros? Si los tiempos divinos en que las almas jóvenes daban modelos para los dialoguistas radiantes de Platón sólo fueron posibles en una breve primavera del mundo; si es fuerza “no pensar en los dioses”, como aconseja la Forquias del segundo *Fausto* al coro de cautivas; ¿no nos será lícito, a lo menos, soñar con la aparición de generaciones humanas que devuelvan a la vida un sentimiento ideal, un grande entusiasmo; en las que sea un poder el sentimiento; en las que una vigorosa resurrección de las energías de la voluntad ahuyente, con heroico clamor, del fondo de las almas, todas las cobardías morales que se nutren a los pechos de la decepción y de la duda? ¿Será de nuevo la juventud una realidad de la vida colectiva, como lo es de la vida individual?²⁸

Pero, ¿por qué esta idea es revolucionaria o al menos rupturista? Muchos podrán argumentar que fue el romanticismo el movimiento cultural que puso a la juventud como protagonista principal en la sociedad y que eso corresponde temporalmente a la primera mitad del siglo XIX. Pero en el Chile de entonces, el discurso romántico no produjo efectos políticos duraderos ni cambios sociales importantes, precisamente porque –como denota Rodó– era una realidad sólo en la vida individual y no en la colectiva y porque –en el esquema de Bourdieu– no existía la educación secundaria masiva que otorgara a los jóvenes el privilegio de la prolongación de la adolescencia.

Uno de los ejemplos más patentes y más recurridos es la “participación” juvenil en la Sociedad de la Igualdad, fundada por jóvenes liberales románticos como Santiago Arcos y Francisco Bilbao, que además contó en sus filas con otros como Benjamín Vicuña Mackenna, José Zapiola, José Victorino Lastarria, Juan Bello, Eusebio Lillo y Manuel Recabarren. Toda esta generación intelectual había sido formada al amparo del Instituto Nacional y la Universidad de Chile bajo la dirección de Andrés Bello y José Joaquín de Mora. Pronto se nutrieron de la literatura de Sir Walter Scott y Lord Byron y de los escritos políticos de Quinet, Michelet y Lamennais, entre otros. Además fueron formados bajo la influencia de las revoluciones liberales europeas de 1848. To-

²⁸ J. E. Rodó, *Ariel...*, *op. cit.*, p. 8.

dos combatidos arduamente desde *La Revista Católica* por la jerarquía eclesiástica.²⁹

Del otro lado de la élite existía un conglomerado de sujetos étáreamente jóvenes –no más numeroso, puesto que tanto unos como otros de sus miembros pueden ser contados con los dedos de ambas manos– que habían sido educados en los colegios de la élite católica como el Seminario de Santiago y el Colegio San Ignacio. Esto constituye para el siglo XIX la existencia de una élite con dos juventudes: una tradicionalista y conservadora, y otra liberal y romántica. Estas juventudes seguían el mismo camino de los adultos, divididos quizá no social pero sí política e ideológicamente entre conservadores y liberales, católicos y librepensadores, ultramontanos y patronatistas, tradicionalistas y modernizantes, etcétera.

Pero entonces el protagonismo juvenil distó mucho de ser importante: primero porque los jóvenes románticos participaron ante todo como miembros de un reducido grupo de la élite liberal, y segundo, porque su accionar se vio sobrepasado por el protagonismo de los artesanos y posteriormente de los políticos liberales adultos que buscaron en la novel organización un espacio para la lucha política. A lo anterior hay que sumar su corta vida, no más de ocho meses, y el hecho de que ni siquiera el himno de la Sociedad de la Igualdad mencionaba la palabra juventud.³⁰

Intentos por unir el accionar político de la juventud y de los trabajadores urbanos habían tenido lugar algunos años antes, durante las luchas políticas y doctrinarias de 1840, que terminaron con el exilio de su protagonista Francisco Bilbao. Años después, fueron más exitosos con la confluencia entre artesanos y jóvenes políticos radicales en la formación del Partido Democrático en 1886.³¹

Recientemente el historiador Gabriel Salazar ha editado el volumen V de *Historia contemporánea de Chile* dedicado a “Niñez y juventud”. Ahí no hace distinción entre las dos fracciones de la oligarquía, sino que divide –en un análisis al cual ya nos tiene acostumbrados– a los jóvenes entre jóvenes plebeyos y oligarcas o entre la juventud peo-

²⁹ J. V. Lastarria, *Recuerdos literarios*, Santiago, Zig-Zag, 1967.

³⁰ Uno de los más recientes análisis de la Sociedad de la Igualdad es el trabajo de Sergio Grez Toso, *De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile, (1810-1890)*, Santiago, Dibam, 1997.

³¹ *Ibid.*, pp. 283-308 y 655-703.

nal, hereditaria de los “niños huachos” y la *jeunesse dorée*, oligarca y monolítica. En esta clasificación ha olvidado que en buena medida la frontera del “ser joven” depende, además de las salvedades que ya hemos hecho, de la integración al mundo de los adultos a través del trabajo (lo cual supone el fin de la adolescencia y por lo tanto del estatuto social de irresponsable).³²

Mal podemos hablar entonces, para el siglo XIX, de participación de la juventud peonal, que pasaba de la niñez a la adultez violentamente y, como lo dice el propio historiador citado, cuyo “protagonismo histórico comenzaba poco después de su nacimiento”. Tampoco podemos hablar fácilmente de “impacto histórico de la juventud oligarca”, menos de protagonismo, toda vez que participaron convocados por las disputas políticas e ideológicas del mundo adulto.³³ De esta manera, resulta al menos difícil sostener la existencia social de un conglomerado juvenil con un proyecto político propio y distinto al mundo adulto antes de 1900.

Ahora vamos a analizar estos fenómenos en el mundo de la cultura; es decir, vamos a pasar del “peso del número” y del subsuelo social, al peso de los “imaginarios sociales”.

Comenzada la segunda mitad del siglo antepasado, el novelista chileno Alberto Blest Gana (1830-1920) escribió *Martín Rivas*, que subtítulo “novela de costumbres político-sociales”. Normalmente esta obra ha sido resaltada como modelo de movilidad social; sólo recientemente algunos historiadores han sostenido que, lejos de eso, “la novela argumenta en favor de la persistencia del orden”.³⁴

Pero de lo que no se han percatado los críticos es que la mayoría de los protagonistas pertenece, etáreamente, a la juventud; sin embargo, no tienen “existencia social” como tales, ni menos como estudiantes, precisamente porque el autor no se preocupa de retratarlos como jóvenes. Martín, el protagonista, es un joven provinciano pobre que llega

³² P. Bourdieu, “La juventud no es...”, *op. cit.*, p. 165. El mismo Bourdieu, a quien Salazar también cita, sostiene que sólo abusando extremadamente del lenguaje, habría que analizar las diferencias entre dos juventudes y “colocar bajo el mismo concepto universos sociales que no tienen nada en común”. Véase G. Salazar, *Historia contemporánea de Chile*, vol. V: “Niñez y juventud”, Santiago, Lom. 2003.

³³ *Ibid.*, pp. 48-100.

³⁴ Véase A. Jocelyn-Holt, *El peso de la noche, nuestra frágil fortaleza histórica*, Santiago de Chile, Planeta-Ariel, 1997, pp. 35-36, y C. Goic, *La novela chilena, los mitos degradados*, Santiago, s.e., 1968, pp. 33 y 55.

a la casa del socio de su padre, un prominente aristócrata capitalino, quien lo protege mientras hace sus estudios de leyes en el Instituto Nacional. El muchacho es estudiante, pero este aspecto es muy secundario en el relato; lo importante es que se enamora de la hija de su protector y toda la novela, que se desarrolla en el contexto de la Sociedad de la Igualdad y la revuelta liberal de 1851, en que nuestro héroe participa siguiendo los ardientes ideales que movían su alma juvenil, gira en torno de la conquista de la muchacha y del ascenso social que esta unión implicaba.

El propio Blest Gana no tenía una opinión positiva de la juventud; en más de un pasaje refleja una profunda desconfianza hacia la moralidad de los aspirantes a la adultez. Del joven Agustín Encina, hijo del acaudalado, casado por la fuerza con una joven pobre decía: “Su amor a Adelaida, basado en las elásticas ideas de moralidad que la mayor parte de los jóvenes profesan, se había modificado singularmente desde que se creía unido a ella por lazos indisolubles”.³⁵

Ni su propio personaje principal, el joven Martín, escapa a estos juicios: “Su experiencia le hizo considerar cuanto veía como los atributos de la grandeza y de la superioridad verdaderas, y despertó en su naturaleza entusiasta, esa aspiración hacia el lujo que parece sobre todo el patrimonio de la juventud”.³⁶

De esta manera, los personajes centrales de la novela corresponden a casi todo el espectro social de la época: la joven aristócrata, mimada y vanidosa; el *dandy*, hermano de la anterior; el revolucionario liberal, romántico e idealista; el “pícaro” popular, y finalmente Martín, el joven provinciano arribista que mediante el estudio pretende ejercer la abogacía, pero que escala socialmente por medio del matrimonio con la aristócrata.

Ninguno es “joven” en el sentido que hoy tiene el concepto de juventud, ni en el que se tenía en el siglo xx. Los dos personajes jóvenes y aristócratas habían efectuado ya el “rito de pasaje” a la adultez, característico de las sociedades tradicionales latinoamericanas; Leonor probablemente había tenido su fiesta de quince años; Agustín, en su calidad de varón, había hecho un tradicional viaje a Europa, a la capital del “mundo civilizado”, París, donde se había dado literalmente un

³⁵ A. Blest Gana, *Martín Rivas, novela de costumbres político-sociales*, París, Librería de A. Bouret e Hijo, 1900, tomo I, p. 180.

³⁶ *Ibid.*, tomo II, p. 98.

“baño de cultura”. Así la actitud de este personaje devela cierta idea de lo que hacían los jóvenes en el siglo XIX para ascender socialmente: Martín intenta el amor de Leonor; cuando esto no resulta se involucra en una revuelta liberal que fracasa estrepitosamente; entonces vuelve a su objetivo inicial, esta vez con mejor suerte.

Pero a comienzos del siglo XX, no sólo los intelectuales liberales como Rodó comenzaron a preocuparse por la juventud. En el otro extremo del abanico ideológico de la época, la Iglesia católica hizo lo propio; por ejemplo, en 1901 el religioso Martín Rucker leyó en la Academia Eclesiástica un trabajo titulado “La juventud católica” que planteaba una lucha contra “la impiedad”, como denominaban a las políticas liberales en la educación:

La impiedad ha comprendido la inmensa importancia que tiene la acción social del joven, y de ahí el que haya procurado envenenar radicalmente la educación. Si el trabajo de la formación intelectual y moral se redujera a formar hombres buenos sólo para el hogar de la familia, sin que se tomara en cuenta para nada la vida pública cristiana, sin que se trabajara por preparar ciudadanos útiles, que después en los círculos sociales y políticos ejercieran benéfica y saludable influencia, poco tendría la Iglesia que pelear con la impiedad.³⁷

Éste es un texto novedoso, pues contiene una propuesta doblemente “revolucionaria”; primero, en la Iglesia católica nacional plantea el inicio de una nueva forma de mirar la relación de la institución con la sociedad, y segundo porque hay, por primera vez, una idea de la juventud (católica) y su “deber ser” social. Lo primero se evidencia en el concepto de “acción social” que la juventud confesional organizada estaba llevando a cabo en países europeos; a eso se consagra el resto del artículo. Lo segundo en que los jóvenes (y no los eclesiásticos) ocupan el papel central, el motor, de esta nueva relación sintetizada por el religioso que aseveraba: “En los tiempos presentes no debe separarse el elemento seglar del eclesiástico”. Todo esto era parte de un nuevo fenómeno, un “movimiento espiritualista” paulatino que se abría paso tanto “en el orden especulativo” (teórico), “como en el práctico” (la realidad social).

³⁷ M. Rucker, “La juventud católica”, *La Revista católica*, núm. 2, Santiago, 1 de septiembre de 1901, p. 127.

Así, Rucker revisaba las organizaciones juveniles vinculadas o suscritas a la Iglesia en Francia, Cataluña, Italia, Bélgica, Escocia, Suiza, Alemania y Estados Unidos; un número importante de ellas nacidas al amparo de, o destinadas a propagar el mensaje de las encíclicas de León XIII; la mayoría, organizaciones estudiantiles universitarias orientadas a esta nueva acción social. Es decir, el proceso organizativo juvenil había comenzado mucho antes en Europa que en América Latina. El religioso traía a colación el caso europeo para que no se olvidara “el ejemplo que nos dan otras naciones más aventajadas. Así como se importan de ellas tanto males y refinamientos, impórtese al mismo tiempo lo bueno y provechoso”, y en esto había que atender a la juventud esperanza de mejores días” —concluía Rucker—, pues “Dios se ha valido de jóvenes para magnas empresas. A Samuel y David los eligió aún niños para que fueran los salvadores de Israel”.³⁸

Este texto además nos pone en la senda de comprender que la existencia de la juventud, como un conglomerado social diferente, numérica y socialmente importante es un fenómeno característico del mundo moderno. En las sociedades tradicionales el poder social, sustentado en la sabiduría que otorgaba la experiencia, lo detentan no sólo los adultos; a menudo los “consejos de ancianos” de las sociedades llamadas primitivas fueron reemplazados por las gerontocracias de las sociedades más complejas del “mundo antiguo”, de las cuales la Iglesia católica es el mejor ejemplo sobreviviente en el mundo contemporáneo.

Pero, como decíamos, ninguna preocupación surge en el mundo de la cultura o en la elaboración intelectual, sin ser a la vez expresión y motor de un fenómeno social. La preocupación por la juventud fue provocada por su masivo “nacimiento” social e imaginario, reforzado por la ampliación de la enseñanza media y universitaria y la cultura liberal y laica, que “emanciparon” a un sector de la población de otras preocupaciones y permitieron que un número cada vez más grande de individuos se dedicara a la preparación profesional y universitaria para enfrentar las exigencias de un mundo moderno. Así, la juventud y el “ser joven” nacieron gracias a que la cultura moderna permitió que a un grupo de edad de la población se le adjudicara un papel que cumplir: el estudio, a fin de prepararse para los desafíos de una sociedad que exigía individuos avezados en conocimientos específicos.

³⁸ *Ibid.*, núm. 3, 15 de septiembre, p. 179.

Además, iniciado el siglo XX, este proceso se fortaleció en dos aspectos: el número de estudiantes universitarios creció en forma sostenida, y junto con ello, a medida que avanzaban las primeras décadas, surgieron una serie de especializaciones y profesiones nuevas que alimentaron el fenómeno anterior y redundaron en aumentar la “base material” para el desarrollo de sectores juveniles de la población chilena que desarrollaban tareas distintas a las de los adultos y que estaban vinculados fundamentalmente a los grupos medios de la población.³⁹

Así, sólo iniciado el siglo XX, la juventud comenzó a adquirir paulatinamente en Chile el papel protagónico que tendría el resto del periodo con la formación de las primeras organizaciones juveniles separadas explícitamente de aquellas donde social y políticamente participaban los adultos. En el plano social, a partir de mayo de 1904 los estudiantes de la Universidad de Chile organizaron el Centro de Estudiantes de Medicina cuyos principales objetivos eran estrechar los lazos y vínculos de los alumnos de esa carrera y “difundir entre las clases proletarias la higiene y otros ramos análogos”. El origen de la institución estaba en un “malestar” que expresaron así:

Hace mucho tiempo que se observa entre nosotros mucha desidia y mucha inercia en lo que concierne a producciones intelectuales y a variadas manifestaciones de la inteligencia y del saber. Y lo que es más sensible, es que este decaimiento, esta verdadera anemia de nuestro cerebro social haya alcanzado en su invasión a la juventud universitaria, a esa brillante falange del progreso del mañana, en otros tiempos tan empeñosa, tan audaz en sus empresas, tan tenaz en sus investigaciones.⁴⁰

Este discurso de los futuros médicos está lleno de alusiones organicistas, característico del positivismo y el cientificismo decimonónicos que dominaban ciertas disciplinas en el ambiente intelectual chileno de principios del siglo XX. Así, los estudiantes iniciaban un camino de

³⁹ La “tasa de crecimiento del número de alumnos por nivel educacional” arroja, para el periodo 1900-1920, uno de los mayores índices del siglo, y para los estudiantes universitarios cifras muy superiores (+ 14.33) respecto de la educación media (+ 4.8) y básica (+ 2.34). Instituto Nacional de Estadísticas, *Estadísticas de Chile en el siglo XX*, Santiago, INE, 1999.

⁴⁰ F. Morales, “Nuestro objeto”, *Boletín de Medicina*, núm. 1, Santiago, 15 de julio de 1904.

construcción de organizaciones estudiantiles que se prolongaría hasta el presente.

Ese mismo año y en el plano político los sectores liberales chilenos más progresistas y refractarios a la unión con los conservadores, que coincidentemente agrupaban a muchos jóvenes, se aglutinaron en el Partido Liberal Doctrinario. Desde ahí decidieron organizar un referente propio y dieron vida el 29 de julio al Centro Liberal. La actitud política de quienes lo organizaron estaba marcada por “su afán constante de regenerar la vida administrativa de la nación”, y orgánicamente lo concebían “mitad Academia, mitad Congreso” y manifestaban principios liberales doctrinarios, republicanos y patriotas:

Seremos esforzados y resueltos en la defensa del estandarte. Combatiremos lo malo y aplaudiremos lo bueno, sin atención a las personalidades que aparezcan a su servicio. El Centro Liberal ha demostrado, carcelazos a la vista, que no son los individuos, sino las doctrinas, las que encienden la fe de sus campañas a fin de mantener en eterna esperanza la suerte del país y siempre escoltada la dignidad del pabellón.⁴¹

Estos jóvenes liberales, y opositores al sistema de gobierno parlamentarista, concebían entonces y concibieron después la política como “ciencia” en lo referente a las doctrinas, y como “arte” en lo concerniente a la “seducción y conquista de las debilidades inherentes a la facilidad humana”. Para ello fundaron en 1913 *La Revista Liberal*; entonces, manifestaron el objetivo propio y hacia sus congéneres generacionales: “Convencidos del bien y enmendados de la justicia, queremos dar a los jóvenes liberales una tribuna desde la cual puedan entenderse directamente con la opinión popular, con los cálculos de los gobernantes y con las exigencias de los gobernados”.⁴²

Pero a su vez, a principios de siglo otras “juventudes” de partidos oligárquicos agitaban el movimiento político de la época, como la del Partido Nacional y el Centro de Propaganda Radical; en esos días un aviso en el católico *Diario Ilustrado* informaba acerca de una enorme manifestación juvenil y estudiantil:

[...] los centros de propaganda, formados de numerosa y activa juventud, los estudiantes de establecimientos católicos, del estado y particulares, las

⁴¹ *La Revista Liberal*, 1913.

⁴² *Ibid.*

comunas urbanas y rurales y la caballería. Antes que pasaran las comunas, había transcurrido una hora, de 2:30 a 3:30 en el desfile de los centros de propaganda, y estudiantes y jóvenes. Estaban allí, sin género de duda, las tres cuartas partes de la juventud de Santiago.⁴³

La diferencia con el Centro Liberal y los Centros de Estudiantes es que la masiva movilización política en la que participaban fue meramente circunstancial e instrumental, estaba enfocada a llevar votos a la candidatura de Pedro Montt y había sido organizada “desde arriba” por los partidos del sistema parlamentarista; sus móviles no eran otros que apoyar al candidato que los “adultos” acordaran.

Pero el proceso organizativo gremial fue más independiente, y tuvo su momento culminante cuando el 21 de octubre de 1906 distintos centros fundaron la Federación de Estudiantes de Chile. La presidencia recayó en el estudiante de medicina José Ducci Kallens, la vicepresidencia en Carlos González, de Leyes, y las secretarías en Guillermo Labarca Huberstone, de Pedagogía, y Carlos Valdivieso, de Matemáticas; la tesorería fue ocupada por Javier Montero, del Instituto Agrícola. Este proceso estuvo acompañado (y apoyado) por la elección de rector en la Universidad, cargo que recayó en el militante del Partido Radical, Valentín Letelier, un intelectual positivista, liberal y laico que fue muy combatido por los sectores conservadores y católicos en el Congreso y el gobierno.⁴⁴

No es exagerado entonces sostener que en el “imaginario” chileno (y latinoamericano) la juventud no existía antes, y que nació sólo partir de 1900; en un aspecto intelectual y cultural, con la recepción del libro de Rodó para el mundo liberal continental, y el texto de Rucker, para la cultura católica chilena, entre muchos otros. En el plano organizativo surgió con la creación de distintos referentes políticos juveniles; algunos de ellos aún supeditados a la tutela de los adultos, pero en el gremial,

⁴³ *El Diario Ilustrado*, 1906.

⁴⁴ José Ducci fue luego un prestigioso médico y agente político de Alessandri; Guillermo Labarca, en tanto, fue, aparte de su militancia en el Partido Radical y la masonería, un connotado educador que completó sus estudios de pedagogía en Estados Unidos y se hizo acreedor a muchas distinciones por su desempeño; fue además secretario general de la Universidad. Como puede verse por sus apellidos, todos pertenecían o eran originarios de una clase media urbana o rural, no de la “juventud dorada” u oligárquica como se ha sostenido recientemente. Véase F. Moraga, *El positivismo en Chile...*, *op. cit.*, p. 60, y G. Salazar, *Historia contemporánea...*, *op. cit.*, p. 110.

con mayores grados de independencia. Con lo anterior nació también toda una ética “juvenilista” que unió el “ser joven” y el “ser estudiante”. A la concepción “arielista” de “idealismo y pureza” de principios, connatural a los jóvenes, que garantizaba un futuro cambio social, se adjuntó una concepción científicista que establecía valores que les eran característicos: lo único que garantizaba el ascenso social era el estudio y no pretendían (al menos en las intenciones declaradas) enamorarse a una aristócrata ni menos involucrarse en revueltas políticas.

Así, al menos en la parte sur del continente americano y desde una perspectiva sociopolítica la juventud “nació” también en este periodo con la organización de las primeras juventudes políticas pertenecientes al mundo liberal-radical, no sólo en Chile sino también en Uruguay y el cono sur, y en el mundo de la tradición, con la discusión “doctrinaria” de la Iglesia católica y su preocupación, no menos genuina, por los jóvenes que se manifestaría orgánicamente más tarde. En el otro extremo del continente, en México, los “maestros del positivismo” como Justo Sierra (de actuación similar en el mundo universitario a la de Letelier en Chile) abrieron un espacio para que se desarrollara esa mítica generación intelectual que se aglutinó desde 1906 y que en la Sociedad de las Conferencias articuló una nueva cultura; proceso que culminó en el Ateneo de la Juventud a partir de 1909.⁴⁵

Agosto de 1911 marcó el momento de consolidación de este lento proceso de construcción social, cultural y política, pues ese mes salió a la calle la revista titulada, sintomáticamente, *Juventud*, “órgano oficial de la Federación de Estudiantes”. Su primer número denotaba la impronta, a la vez científicista y juvenil, de la generación que le dio vida:

No es para nadie un secreto que la Universidad no basta para cultivar todo el espíritu del estudiante. La Universidad se resiente de ser un conjunto de escuelas profesionales en las cuales las ciencias sólo se consideran como un medio. Sin embargo, los llamados espíritus prácticos aún encuentran que es mucha la ciencia inútil que recarga el estudio de las profesiones liberales. Esta observación se presta a varias consideraciones. Pero lo que no es dable negar es la necesidad de cursos libres que desarrollen todo un vasto programa de ciencias donde se investigue a la par de los laboratorios

⁴⁵ La bibliografía sobre el Ateneo de la Juventud es bastante extensa en México; uno de los trabajos principales es de Enrique Krauze: *Caudillos culturales en la revolución mexicana*, México, Siglo XXI Editores, 1976.

europesos; cursos sobre arte y literatura, sobre historia y sobre especulaciones sociológicas.⁴⁶

Desde la fundación de la Federación hasta 1920, los estudiantes y los jóvenes vivieron una etapa de alza de su influencia en la sociedad en todos los planos culturales y políticos. Así, dieron vida a una bohemia independiente, pagana y festiva, que sólo logró ser canalizada parcialmente a través de la organización de las “Fiestas de la Primavera” que a partir de 1915 coparon las calles de la ciudad de Santiago con bailes, disfraces y carros alegóricos. Pero, junto con ello, fueron separándose cada vez más claramente de los espacios intelectuales oficiales y adquiriendo mayor independencia cultural y política. A la etapa “asistencia- lista” (1906-1910) le siguió una “arielista”, característica de la época de 1910 a 1915, influida por las corrientes más radicales del liberalismo local. Junto con ello, por primera vez, los estudiantes adquirieron un estatuto semioficial como agentes políticos; es decir, como sujetos históricos a los cuales no les estaba vedada la participación en “La Política” (con mayúscula) pero que sí tenían la interdicción de no utilizar las organizaciones estudiantiles en favor de ningún partido.⁴⁷

En el siguiente lustro (1915-1920) la presidencia de la organización fue copada por los sectores radicales y por el “anarquismo intelectual”, característico de los estudiantes, que se diferenciaba del anarquismo obrero. A su vez, la ideología de los sectores dominantes en el movimiento estudiantil se volvió producto de la “Gran Guerra”, pacifista y antimilitarista, y por efecto de la revolución rusa, cada vez más cercana al socialismo y el anarquismo.⁴⁸ Pero a la vez, la juventud adquirió en esta época rasgos idealistas y míticos. En esta perspectiva un joven estudiante de medicina, a la vez ideólogo ácrata, escribía:

¡Siembra, Juventud! La tierra es propicia, el momento es único. Que el bruñido arado se desgaje en astillas al tatar la corteza árida y dura que

⁴⁶ *Juventud*, 1911.

⁴⁷ Por ejemplo, véase el llamativo discurso del ex presidente de la Federación de 1907, el médico Óscar Fontecilla, que pronunció en abril de 1915: “Los estudiantes ante la política”, *El Mercurio*, Santiago, 30 de abril de 1915, p. 12. Citado también por V. Figueroa como *Las aspiraciones de la juventud y la cuestión política*, Santiago, Imp. Universitaria, 1915. Aunque venía de antes, dicha prohibición se consagró en la *Declaración de Principios de la Federación de Estudiantes*, promulgada por la organización en julio de 1920.

⁴⁸ F. Moraga, *El positivismo en Chile...*, *op. cit.*

oculta la tierra fecunda. Que vuestras vértebras se gasten por el esfuerzo titánico del torso doblado tras la herramienta creadora. Que vuestro pecho se combe pleno de aire, así como el velamen de la nave en lucha con la tempestad.⁴⁹

En 1920 esta impronta rebelde, izquierdista, iconoclasta y antisistémica de los estudiantes de la Federación chocó con los sectores oligárquicos, nacionalistas, católicos y conservadores del sistema, del gobierno y del propio movimiento estudiantil. En 1915, y como reacción ante la radicalización de los estudiantes de la Universidad del Estado, sectores de la Iglesia católica crearon en su Universidad la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos (ANEC).⁵⁰ Esta nueva organización estudiantil fue la expresión de importantes sectores juveniles que veían con horror la izquierdización de sus compañeros pacifistas convertidos en “antipatriotas”; así, cuando la rebeldía de los primeros llegó a proporciones límites en julio de 1920, conformaron grupos de choque y durante varios días, cada vez que pudieron, apalearon salvajemente a estudiantes radicales y anarquistas.⁵¹ El momento culminante de estos enfrentamientos fue el 21 de julio de ese año, cuando verdaderas hordas de jóvenes católicos, militares y conservadores asaltaron el local de la Federación de Estudiantes, quemaron su biblioteca y saquearon cuanto pudieron.⁵²

¿Qué había sucedido con ese ideario juvenilista y generacional que ligaba a los jóvenes al progresismo y las “ideas avanzadas”, como se las llamaba?

Julio de 1920 marcó el momento culminante del enfrentamiento entre las fuerzas “avanzadas” y “maximalistas” contra las del “orden” y la “patria”, o entre los jóvenes que estaban por el cambio y quienes abogaban por el mantenimiento del *status quo* oligárquico; antes, grupos de estudiantes se habían enfrentado acerca de las leyes liberales de educación, primero en la prensa y luego en las calles, en verdaderas batallas

⁴⁹ Iván, “Cartel”, *Claridad*, núm. 14, 30 de abril de 1921.

⁵⁰ J. Gómez Ugarte, *Ese cuarto de siglo, 25 años de vida universitaria del ANEC, 1915-1941*, Santiago, Andrés Bello, 1985.

⁵¹ Carlos Vicuña Fuentes, *La tiranía en Chile*, Santiago, Lom Editores, 2002 (edición original de 1928).

⁵² Los hechos de 1920, bastante conocidos, son relatados vívidamente por José Santos González Vera, *Cuando era muchacho*, Santiago, Universitaria, 1951; están analizados en F. Moraga, “*Muchachos casi silvestres...*”, *op. cit.*, cap. v.

campales, en 1907, 1910 y 1913. En cierta medida, estos enfrentamientos eran una reedición de las viejas disputas “doctrinarias” que participes del cambio habían desplegado contra los salvadores del “orden”, y éstos contra aquéllos, durante todo el siglo XIX. Lo nuevo y lo moderno es que ahora la política había salido de los clubes y el hemiciclo parlamentario; era masiva y se desarrollaba en las calles y a los componentes doctrinarios (ideológicos) se agregaron fundamentos de clase.

Pese a las derrotas materiales de las jornadas pacifistas de 1918 a 1920 y por la reforma universitaria de 1922, los “estudiantes avanzados” ganaron una gran batalla: la ideológica. Primero, porque tuvieron un héroe (al que el resto de la década agregó varios otros), José Domingo Gómez Rojas, joven de origen humilde e ideológicamente ecléctico: anarquista, nietzscheano, nihilista y cristiano, el “poeta mártir” condensó y representó todas las doctrinas “avanzadas” de la época; murió en la cárcel enloquecido por las torturas realizadas durante la persecución a los obreros y estudiantes “subversivos”.⁵³ Segundo, porque el mito de los jóvenes progresistas y revolucionarios se acrecentó pese a la crisis de la Federación de Estudiantes. El momento culminante fue el derrocamiento de Carlos Ibáñez de la presidencia de la República. El movimiento estudiantil de la universidad del Estado recogió el legado rebelde y libertario de la “generación del año veinte” y grabó su nombre en letras de oro; situación que no ameritaba discusión incluso para quienes ideológicamente no eran “izquierdistas” o “marxistas” que escribían acerca de la juventud reafirmando el ideario de la época:

Ideológica y biológicamente representáis la acción, la energía y la fuerza de los elementos que construyen y forjan lo bello, lo nuevo y la creación. ¡Juventud! Lleváis ante sí, ante vuestros ojos, un mundo de ilusiones y quimeras. Lleváis una luz nacida y alimentada de vuestros más caros y sanos sentimientos, lleváis la luz del pensamiento, la luz de la conciencia, de la fe, del amor...⁵⁴

La “generación de 1930”, como la llamó uno de sus protagonistas, se nutrió culturalmente de su antecesora, comenzó elaborando poesía para finalmente evolucionar hacia la política:

⁵³ F. Moraga y C. Vega, *José Domingo Gómez Rojas*, Punta Arenas, Ed. Ateli, 1997.

⁵⁴ G. Greve, “¡Juventud, tuyo es el mundo!”, *Revista Agronómica*, núm. 12, Santiago, junio-julio, 1932.

Los partidos políticos no gravitaban como tales entre nosotros. Nuestra acción giraba entre las actitudes contra el gobierno, la labor literaria, las fiestas de la primavera y el estudio. Vivíamos bajo el encantamiento de Domingo Gómez Rojas y su martirio y la poesía de Roberto Meza Fuentes, Romeo Murga y Sepúlveda Cifuentes. Pablo Neruda era para nosotros la máxima expresión de nuestro romanticismo. Neruda, desde su puesto de cónsul en la India, nos enviaba sus poemas que leíamos y repetíamos con admiración.⁵⁵

Sólo que ésta pudo transformar la derrota de la anterior, en manos de las fuerzas conservadoras y el Estado oligárquico, en una victoria real y simbólica. En medio de este mítico desarrollo de un movimiento estudiantil que practicando la violencia en las calles derrotó a un tirano, surgió el no menos mitológico “Grupo Avance”, del que por sus características muchos hablan y nadie conoce. Junto a él, surgió el Grupo Renovación, su *alter ego* socialcristiano, formado por los estudiantes de la ANEC, que durante la dictadura ibañista, y bajo la guía de religiosos reformistas, adquirieron una ideología levemente democratizante. Ambos grupos fueron la base ideológica y militante de los partidos modernos del sistema político chileno que murió el 11 de septiembre: el socialista, el comunista, la democracia cristiana y algunos grupos izquierdistas y fascistas menores. De ahí su importancia y su mito.

Lo anterior implicó también que en el plano de la política, de una manera renovada, se reprodujera el mismo cuadro bipolar que se expresó en el mundo juvenil oligarca del siglo XIX, dividido entre conservadores y liberales; sólo que ahora éstos eran dos extremos dentro de una múltiple gama de posibilidades políticas. Estas divisiones ideológicas también se expresaban en otro plano, pues la sociedad se había diversificado profundamente con la emergencia de los grupos medios, lo que al final reforzó la estructuración política e ideológica.⁵⁶ Lo que sí era capital político de todas las “juventudes” fue que conformaban un conglomerado social definido con distintos proyectos políticos; pero de éstas, la juventud de izquierda contaba con un prestigio inédito en la

⁵⁵ W. Mayorga, “Los estudiantes pasan...” (entrevista con A. Frías Ojeda), *Ercilla*, Santiago, 24 de noviembre de 1965.

⁵⁶ Bourdieu afirma, citando un estudio de Thévenot, que “entre estas dos posiciones extremas, la del estudiante burgués y la del joven obrero que ni siquiera tuvo adolescencia, hoy existe toda una clase de figuras intermedias”. F. Bourdieu, “La juventud no es...”, *op. cit.*, p. 165.

historia chilena, el de ser la materialización del discurso científico: la juventud era o representaba no sólo la fuerza y la esperanza de futuro sino también el cambio, el progreso y la revolución.⁵⁷

Fundado un mes antes de la caída de Ibáñez, en el “Grupo Universitario Avance” convergió una gama multiforme de estudiantes antiibañistas sin vínculos políticos. Pero pronto sus principales líderes se vincularon orgánicamente al PC, sumergido en ese momento en una crisis orgánica y una querrela ideológica y política, versión criolla de la disputa Stalin-Trotsky, lo que provocó la división del grupo y la deserción de un núcleo importante de estudiantes que no se alinearon con las fracciones en pugna.

De todos modos, Avance fue el grupo estudiantil que aglutinó a toda la gama izquierdista, que muy pronto fue la generación de recambio que logró escalar más fácilmente que su antecesora, producto de la relativa apertura del sistema, en la carrera política. Ahí militaron importantes conglomerados de futuros políticos socialistas y comunistas. Salvador Allende fue parte del grupo, y por sus tendencias moderadas fue expulsado en medio de la disputa comunista. En 1972, frente a los estudiantes de Guadalajara recordó este hecho para fundamentar su estrategia y su proyecto político:

Un día se propuso que firmara por el Grupo Avance un manifiesto –estoy hablando del año 1931– para crear en Chile los soviets de obreros, campesinos, soldados y estudiantes. Yo dije que era una locura, que no había ninguna posibilidad, que era una torpeza infinita y que no quería, como estudiante, firmar algo que mañana, como un profesional, no iba a aceptar. Éramos 400 los muchachos que estábamos en el Grupo Avance, 395 votaron mi expulsión; de los 400 que éramos sólo dos quedamos en la lucha social.⁵⁸

⁵⁷ Ya en 1925 el intelectual peruano José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista, hacía la distinción entre la Segunda y la Tercera Internacional, destacando que esta última estaba poblada de jóvenes que reafirmaban el sentido revolucionario de la organización en contra del socialismo “reformista, evolucionista, minimalista y homeopático” de la anterior. J. C. Mariátegui, “Los intelectuales y la revolución”, en *Fascismo sudamericano. Los intelectuales y la revolución y otros artículos inéditos*, Lima, Centro de Trabajo Intelectual Mariátegui, 1975, pp. 31-32.

⁵⁸ Allende, “Discurso de Guadalajara”, *op. cit.* La votación por el soviets se efectuó en realidad en junio de 1932 durante la llamada “República Socialista”, un gobierno de facto encabezado por militares y grupos socialistas, a los que al parecer Allende ya estaba vinculado, pese a militar en Avance. Además, exagera el exiguo número de quienes se

Así se constituyó uno de los soportes de la mesocrática “generación del año treinta” que dio vida a un sistema político democrático al que fue imprimiendo, por convencimiento militante o por afán reformador, una serie de cambios graduales al sistema que funcionó en Chile desde 1932 hasta 1973.

IV. APOGEO Y CRISIS DEL IDEARIO JUVENILISTA

Llegada la revolucionaria década de 1960 la izquierda había tomado amargas pero fructíferas lecciones políticas a lo largo de tres decenios. La izquierda intrasistémica superó, aunque nunca del todo, sus luchas fratricidas entre el PC y el PS (aunque aquél mantuvo su animadversión hacia el “izquierdismo” y los grupos revolucionarios). Pero a su lado surgió una izquierda revolucionaria, extrasistémica y crítica de la vía electoral; en lo ideológico, fruto de la disputa chino-soviética y de la revolución cubana, y en el balance histórico-político, de la actuación de los partidos históricos en los gobiernos de centro-izquierda del Frente Popular y del apoyo a Ibáñez entre 1952 y 1958. De todos modos, ese último año el candidato del Frente de Acción Popular (Frap), Salvador Allende, estuvo a muy pocos votos de ganar la presidencia de la República.⁵⁹

En la Democracia Cristiana, la ideología socialcristiana ganó entre 1940 y 1950, a una mayoría progresista relativa, como para que un sector de su militancia abandonara su natural tentación por el fascismo; sin embargo, en 1964 asumieron el poder ejecutivo encabezados por

“quedaron en la lucha social”; de hecho, uno de sus líderes, Óscar Waiss Band, era redactor del periódico *El Clarín*, famoso por defender al gobierno de la UP y uno de los primeros en ser cerrado después del golpe; luego fue director de *La Nación*, periódico oficial del gobierno chileno; Waiss testimonia que el alejamiento de Allende fue voluntario. Jorge Mac Guinty militó en el mismo partido de Allende toda su vida y murió en el exilio; el médico Enrique Sepúlveda fundó el MIR en 1965 y fue su primer secretario general; Volodia Teitelboim fue senador por el Partido Comunista y el principal aliado político durante su gobierno, más leal incluso que sus compañeros socialistas; René Frías Ojeda fue su embajador en Costa Rica y así tantos otros. Véase F. Moraga y D. Araya, *Vanguardias políticas en Chile, 1920-1932*, tesis de Licenciatura, Universidad de Chile, 1995.

⁵⁹ En esa oportunidad la derecha encabezada por el independiente Jorge Alessandri (hijo del presidente que gobernó de 1920 a 1925 y de 1932 a 1938) ganó con 31.2%, contra 28.5% de Allende candidato del Frap.

Eduardo Frei, un miembro de la generación de 1930 y sostenido antimarxista que había militado en el Grupo Renovación. Así, el partido de centro llegó al gobierno presionado por las tendencias de la época y dividido en tres sectores: el “oficialismo”, el ala derechista encabezada por Eduardo Frei; los “terceristas” o moderados, y la “juventud rebelde”, que quería se asumieran posiciones más avanzadas.⁶⁰

Tanto por el aprendizaje político de su líder, efectuado en el seno de los colegios y espacios católicos, como por su consagración en las calles durante julio de 1931, el motor de la campaña presidencial estuvo compuesto por dos ideas básicas: la primera constituía una concesión a la época: la “revolución en libertad”, que además disputaba el monopolio de las banderas del cambio estructural a la izquierda, y la “marcha de la patria joven”, con la que pretendía atraer a su proyecto de reformas al elemento por esencia revolucionario. Esta última fue una movilización electoral de masas juveniles que (al igual que a principios de siglo fueron movilizadas para apoyar a Montt) partió de distintos puntos del país y convergió en la capital para apoyar su candidatura a la presidencia de la república, al son de un himno cuyas estrofas más conocidas dicen “brilla el sol de nuestras juventudes, la noche muere en el ayer...”⁶¹

El gobierno encabezado por Frei, quien subió al sillón presidencial apoyado por la mayor votación electoral de la historia chilena, inició una serie de cambios políticos y económicos que buscaban ante todo reformar al Estado y evitar el avance de las propuestas radicales de cambio social que cada día gozaban de más influencia entre los trabajadores y los estudiantes.

Pero, lejos de morigerarlas, las débiles reformas demócratacristianas favorecieron el avance de la izquierda, situación que se evidenció de mejor manera en el movimiento estudiantil nacional cuando en las universidades se abrió camino el viejo anhelo de la reforma universitaria, inmersa en una época en que el idealismo juvenil se puso de nuevo y más fuertemente a la cabeza de los cambios sociales:

Había en todo esto una profunda espiritualidad [...] Había un desprecio por la abundancia material, por la riqueza de los ricos; los hijos de las

⁶⁰ En 1969 el ala rebelde se separó del partido y dio vida al Movimiento de Acción Popular Unitario, MAPU.

⁶¹ G. Blanco, *Eduardo Frei, el hombre de la Patria Joven*, Santiago, Ed. Aconcagua, 1984.

familias adineradas se rebelaron contra sus familias explotadoras. Los hijos de los obreros, se rebelaron contra la injusticia de que eran objeto; los de la clase media, se rebelaron contra las aspiraciones y forma de vida de su clase; los académicos jóvenes contra los profesores más viejos que no fueron sensibles a sus aspiraciones académicas; los trabajadores no académicos se rebelaron contra su situación subordinada, contra su trabajo a menudo aburrido y sin sentido. Así la Universidad entera se rebeló contra sí misma, contra las limitaciones estructurales de la sociedad nacional y contra las fuerzas imperiales que imponían su dominio político, cultural, económico, militar y moral.⁶²

Pese a que los conflictos se iniciaron en las universidades católicas, la Universidad de Chile fue el verdadero epicentro de la lucha por la democratización de las estructuras universitarias, puesto que en ella se reproducían o estaban representadas todas las tendencias sociales, políticas, económicas e intelectuales de la sociedad chilena.⁶³ En las primeras, la participación estudiantil mediante el voto en la elección de las autoridades universitarias —el cogobierno— fue desde el principio la única demanda apoyada incluso por los jóvenes del partido del gobierno. En la universidad del Estado, en cambio, los sectores “terceristas” moderados de la democracia cristiana plantearon una participación restringida, propuesta que fue combatida por la izquierda universitaria encabezada por comunistas y una fracción socialista.⁶⁴ La “izquierda revolucionaria” —el MIR—, sectores socialistas y los grupos más izquierdistas, privilegiaron los cambios radicales y estimaban que la reforma de la universidad era una lucha menor y que ningún cambio sustantivo se produciría en la educación sin antes reformar al Estado y al poder político.

⁶² Testimonio de A. Rojas. Citado en R. Brodski, *Conversaciones..., op. cit.*, p. 119.

⁶³ La cuenta rendida por la directiva de la FECH en 1964, dirigida por el demócrata-cristiano “tercerista” Luis Maira, informaba que aparte de la preparación para el debate se realizó un Seminario de Reforma Universitaria, “con la participación del rector, secretario de la corporación y eminentes catedráticos”; luego se le dio a éste carácter de “permanente”, durante un encuentro en la ciudad de Valparaíso organizado por la Unión de Federaciones de Universidades de Chile (UFUCH). “Cuenta de la labor efectuada por nuestro ejecutivo en el presente periodo (1963-1964)”, *Claridad*, Santiago, noviembre de 1964.

⁶⁴ Testimonio de A. Rojas. Citado en R. Brodski, *Conversaciones..., op. cit.*, pp. 120-124. Una defensa más “académica” pero no menos militante de las propuestas comunistas en Yaco Treffemberg, *Problemas de la juventud y los estudiantes*, Santiago, Quimantú, 1972.

Pese a esas divergencias políticas, durante el plebiscito de 1967, cuando se votó por la participación estudiantil, la izquierda revolucionaria se sumó a la posición liderada por los comunistas.⁶⁵ El acto, que consultó a toda la comunidad de la Universidad de Chile, fue desfavorable a la propuesta del cogobierno. Pese a esta derrota, la mayoría de los estudiantes del Pedagógico, liderados por la izquierda, resistió el resultado y apoyados por el nuevo decano de la Facultad, Hernán Ramírez Necochea, establecieron la reforma y eligieron a las autoridades con la participación de los estudiantes; esto implicó impulsar el cogobierno y romper con los resultados de la consulta y con las normas de la universidad. El conflicto que se generó entre la Facultad y el Consejo Universitario dejó dos resultados: primero, la participación estudiantil, y segundo, la conciencia de la experiencia de la movilización como estrategia para la democratización del poder dentro de la Universidad, incluso yendo en contra de “las reglas del juego vigentes” y “los acuerdos democráticamente sancionados al interior del movimiento estudiantil”.⁶⁶ Aunque el proceso fue complejo y es difícil llegar a conclusiones definitivas en estas páginas, el conflicto demostró una estrategia de lucha estudiantil contra el gobierno, contra las autoridades universitarias e incluso contra la misma FECH liderada entonces por la Juventud Demócrata Cristiana, que resultó viable y exitosa para la izquierda universitaria, a tal punto que obligó a la dirección de la organización a apoyar el cogobierno.

Esta experiencia de lucha exitosa del movimiento estudiantil de la Universidad de Chile (aunque no exenta de contradicciones), desde las primeras reuniones por la reforma en 1964, pasando por los conflictos entre las juventudes de izquierda y de la democracia cristiana, hasta los plenarios de 1968, estuvieron presentes en la identidad y la conciencia políticas de los estudiantes del Pedagógico durante los tres años del gobierno de la UP, y estaban presentes esa mañana del 11 de septiembre de 1973.

Al otro lado del espectro universitario ocurría un proceso parecido, aunque con elementos más simbólicos. Durante el proceso reformista, los estudiantes de la universidad confesional, liderados por jóvenes demócratacristianos rebeldes, se enfrentaron a las jerarquías académica y eclesiástica, a los sectores estudiantiles reaccionarios y a la prensa de de-

⁶⁵ T. Vasconi e I. Reca, “Movimiento estudiantil y crisis en la Universidad de Chile”, en A. Pinto *et al.*, *Chile hoy*, México, Siglo XXI, 1971, p. 356.

⁶⁶ *Ibid.*, pp. 360-361.

recha. En el proceso cometieron uno de los actos de rebeldía más recordado. Durante los debates públicos por la reforma, el director de uno de los periódicos más representativos del autoritarismo, René Silva Espejo (ex militante del nazismo criollo), se opuso tenazmente a la discusión democrática y se enfrentó en un debate televisivo con el presidente de la Federación de Estudiantes Católicos de Chile (Feuc), Miguel Ángel Solar.⁶⁷ Al otro día un grupo de estudiantes colgaron del frontis del edificio central un cartel que decía: “Chileno: ¡*El Mercurio* miente!”.

Pero a la vez, en la misma universidad confesional, los sectores conservadores del catolicismo, *vencidos* a su antigua veta autoritaria, crearon el Movimiento Gremialista. Políticamente conservadores y de extrema derecha, religiosamente integristas e influidos por el *Opus Dei* y las revistas *Portada* y *Polémica Económico-Social*, los gremialistas tuvieron entre sus líderes intelectuales al sacerdote Osvaldo Lira, al historiador Jaime Eyzaguirre y al abogado constitucionalista Jaime Guzmán. Este sector encontró en el diario *El Mercurio* amplia acogida a sus propuestas. En 1969 ganaron las elecciones de la Feuc, y se mantuvieron en el poder, ganando democráticamente, hasta 1973.

Estos dos fenómenos muestran las tendencias contradictorias que se reprodujeron, entre 1965 y 1973, en el seno del movimiento estudiantil nacional e incluso de cada casa de estudios, fuese cual fuese su orientación institucional, sus vinculaciones culturales o programáticas. A medida que se desplegaron las fuerzas políticas, el proceso global de la sociedad se radicalizó a grados extremos, y con ello las actitudes de los estudiantes que muchas veces redundaron en enfrentamientos físicos entre los partidarios de una tendencia general y otra, y también entre miembros de cada alianza política.

Por otra parte, el sistema político evidenciaba síntomas de una crisis terminal proveniente no de sus propios mecanismos internos de funcionamiento, sino del interior de la sociedad; en este sentido, la concepción que la izquierda tuvo de la juventud y su papel en la revolución fue uno de muchos elementos, tanto ideológicos como históricos.⁶⁸ Esta

⁶⁷ Olavarría Bravo, Arturo, *Chile bajo la Democracia Cristiana*, Santiago, Ed. Nascimento, 1970.

⁶⁸ T. Moulián, “La trayectoria de una crisis”, en M. A. Garretón y T. Moulián, *La Unidad Popular y el conflicto político en Chile*, Santiago, Cesoc-Lom, 1983, pp. 195-217. En este aspecto estamos reaccionando contra la tesis tradicional, largamente esbozada por Tomás Moulián, que tiende a ver la crisis de la democracia chilena entre 1964

crisis la experimentó también el movimiento estudiantil que expresó en su seno las divisiones de una nación inmersa en un profundo proceso de cambios y no la tendencia “natural” a los cambios que como jóvenes les correspondía asumir. Tampoco ninguno de los grandes conglomerados partidistas, incluso dentro de cada organización, dejó de experimentar rupturas, fraccionamientos y divisiones en sus filas, las que sin embargo fueron un estímulo para que la izquierda lograra el acuerdo que la llevó a conformar la UP y a candidatear a Salvador Allende.

Así, la década de 1960 marcó contradictoriamente el apogeo y la crisis del ideario juvenilista del siglo XX que en su versión chilena tuvo en la “marcha de la patria joven”, la Reforma Universitaria, la nueva canción chilena, la generación de la UP y el MIR las versiones locales de otros movimientos juveniles de la década como el *hippismo*, el rock, el “mayo francés” y el guevarismo. A su vez, esta época plasmó la figura del estudiante como sinónimo de actividad política, y más aún, como sujeto “intrínsecamente” revolucionario, y “necesariamente” de izquierda. Los estudios de la época se preocuparon en sellar esta imagen, otorgándole la venia de las ciencias sociales.⁶⁹

V. LA JUVENTUD, LOS ESTUDIANTES Y EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR

Cuando, en vísperas de asumir la presidencia, reporteros de la revista *Claridad*, el órgano oficial de la FECH, le preguntaron a Allende cuáles eran las razones para haberse dirigido al país la

y 1973 como producto del aislamiento de la derecha y de la radicalización del sistema de partidos políticos, que fue incapaz de ser flexible ante un clima político cada vez más confrontacional en que “el centro alternativista desplazó al centro articulador, generando un proceso de centrifugación que tuvo lugar entre 1964 y 1970”.

⁶⁹ Por poner sólo dos ejemplos para el caso chileno véase Juan Carlos Tedesco y Hans R. Blumenthal, *La juventud universitaria en América Latina*, Caracas, Cresalc-II-dis, 1986, y Corporación de Promoción Universitaria, *Estudiantes y política, Seminario Internacional, Viña del Mar*, Santiago, Ediciones CPU-UNESCO, 1970. Una visión más matizada, producto del análisis de una serie de encuestas, que hace distinciones analíticas entre juventudes de clase “alta”, “media” y “baja”, y la actitud de los estudiantes ante una serie de situaciones, en Armand y Michele Mattelart, *Juventud chilena, rebeldía y conformismo*, Santiago, Universitaria, 1970.

noche del 4 de septiembre desde los balcones de la organización, él respondió:

Federación de Estudiantes, lucha magnífica por el avance social, político y cultural, son sinónimos en nuestra patria. Generosidad humana, sacrificio y renunciamiento se abren paso en los espíritus rectos junto con la imagen del estudiante. Siempre se ha producido una identificación genuina entre los trabajadores y quienes han tenido oportunidad de vencer las limitaciones injustas del medio, para tener acceso a la cultura en sus elevadas expresiones. Universidad y búsqueda de la verdad son una misma cosa en último término.⁷⁰

El gobierno de Allende fue uno de los que más se preocupó de la juventud. Inspirado por la idea de que Chile era un “país joven” —el mismo presidente sostenía que más de 60% de la población, es decir, unos 4 600 000 chilenos eran en ese momento menores de 30 años— creó el 22 de septiembre de 1970 la Secretaría General de la Juventud. Esta organización estaba directamente relacionada con la presidencia de la república; sus “funcionarios” eran voluntarios, no eran pagados por el Estado, y su propósito y funciones eran “cooperar en la formulación y ejecución de planes en la política relativa a la juventud”. Había en esta intención una idea relacionada con la profundización de la democracia: otorgar un papel protagónico a la mayoría del país; a su vez buscaba canalizar las energías juveniles y relacionarla directamente con la difusión del Programa de la UP:

La juventud no podía ser espectadora de este gran proceso de transformación económica y social de Chile, la juventud es protagonista fundamental de esta etapa de la vida patria. Necesitamos, reclamamos y pedimos la energía creadora de la juventud, su lealtad revolucionaria que será puesta sin quebrantos al servicio de Chile y del pueblo.⁷¹

También buscaba articular la tradición de entrega y cooperación social que los jóvenes hacían, guiados por la FECH y otras organizaciones estudiantiles, en los trabajos voluntarios dirigidos a

⁷⁰ “A luchar por los derechos del Pueblo”, *Claridad*, Santiago, 29 de junio de 1970.

⁷¹ S. Allende, “Los jóvenes en la Patria Nueva”, discurso del 22 de diciembre de 1970 en el acto de creación de la Secretaría General de la Juventud en Santiago, en *Salvador Allende en el umbral del siglo XXI*, México, Plaza y Janés, 1989.

ayudar a la población más necesitada; llegaron a movilizar a 70 000 jóvenes.⁷²

Desde el comienzo y durante los tres años del gobierno de la UP, la relación entre la organización estudiantil y el gobierno fue estrecha; lo reconocieron los dirigentes de la FECH y el propio Allende. Un mes antes de que él asumiera la presidencia, la editorial de la entrega de *Claridad* correspondiente a noviembre de 1970 puntualizaba:

Entre el nuevo gobierno y el movimiento estudiantil existe una comunidad de intereses. El Programa Básico de la UP consulta las más importantes reivindicaciones de los estudiantes y de la Universidad en particular y del pueblo en general. Luchamos por terminar en Chile con el imperialismo, los monopolios y el latifundio; luchamos por una educación democrática que esté al alcance de todos los chilenos, por una universidad que abra sus puertas a los sectores sociales más modestos, por una profunda reforma universitaria. Luchamos, en fin por un Chile nuevo, que solucione los problemas de las grandes masas. Éstos son los propósitos comunes del gobierno y de los estudiantes.⁷³

Si se partía de esta base, ¿cuál sería la relación entre los estudiantes y el gobierno de Allende? Oriel Viciani, presidente comunista del Pedagógico, sostenía:

Siendo por tanto el gobierno popular fruto de la lucha de los trabajadores y de todo el pueblo, es también fruto de la lucha estudiantil. Sin embargo, la independencia del movimiento estudiantil sigue siendo una reivindicación justa también en los marcos del nuevo gobierno. El compromiso no implica oficialismo, la FECH no pasa a ser una oficina estudiantil del gobierno, ella persiste con su carácter de organización de masas representativa de todas las tendencias del movimiento estudiantil, dispuesta a aportar con todos sus contingentes en el cumplimiento de las tareas constructivas del gobierno y dispuesta también a ejercer la crítica, por supuesto constructiva, de los errores que a nuestro juicio puedan cometerse.⁷⁴

En noviembre de 1970 se realizaron las elecciones para la directiva de la FECH del año siguiente. En ella fue reelecto Alejandro Rojas,

⁷² *Ibid.*

⁷³ “Nuestro compromiso: construir y defender el Chile nuevo”, *Claridad*, Santiago, noviembre de 1970.

⁷⁴ O. Viciani, “Polémica”, *Claridad*, Santiago, noviembre de 1970.

con lo que se confirmó la tendencia que implicaba entre los estudiantes el triunfo de las fuerzas de izquierda agrupadas en la Unidad Popular. Para este conglomerado, haber enfrentado a las fuerzas de la derecha y la democracia cristiana unidas era la confirmación de “la vieja aspiración freista de unir a todos los sectores burgueses antipopulares y reaccionarios en un solo frente”. De las cuatro listas iniciales que ese año se enfrentaron en la segunda vuelta sólo quedaron dos, puesto que la extrema izquierda terminó apoyando la lista de la UP.⁷⁵ La juventud demócratacristiana, ante el triunfo de la izquierda, boicoteó el proceso retirándose del Tribunal Calificador de Elecciones, por lo que el Comité Ejecutivo de la Federación no pudo constituirse y el organismo debió decretar la continuidad de la directiva anterior.⁷⁶

Pero, más allá de las consideraciones coyunturales, el lenguaje con el que la izquierda hablaba de los estudiantes era universalizante; es decir, pretendía representar al conjunto de la juventud y los estudiantes; en esto no se diferenciaba de las muchas “subculturas políticas”, que en sus lenguajes “identificaban al país consigo mismo o con el sector social que se decía el único representante”.⁷⁷ Por ejemplo, en junio de 1970, o sea, en las postrimerías del gobierno de Eduardo Frei, la FECH, a cuya cabeza ya se encontraba Rojas, sostenía apoyando un paro convocado por la Central Única de Trabajadores (CUT):

Los estudiantes hemos señalado claramente que nuestro compromiso fundamental es con la lucha de nuestro pueblo y consecuente con esto, nos incorporaremos al movimiento respaldando todos y cada uno de sus puntos y levantando también nuestras propias reivindicaciones que tienen

⁷⁵ “Significado de una elección”, *Claridad*, Santiago, diciembre de 1970, y “Unidad democrática en la elección de la FEUCV”, *El Mercurio de Valparaíso*, Valparaíso, 12 de noviembre de 1972. La unidad de la oposición demócratacristiana y de derecha (Partido Nacional) contra la UP se registró en las distintas elecciones de las federaciones estudiantiles a escala nacional, incluidas las secundarias, y se acrecentó con el tiempo. Por ejemplo, en noviembre de 1972 (un mes antes del viaje de Allende a México), en la estratégica Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, FEUCV (allí habían empezado las primeras movilizaciones por la reforma universitaria en 1967), se enfrentaron la Juventud Demócrata Cristiana aliada a la Juventud Nacional y lograron arrebatárle la directiva a la UP.

⁷⁶ *Claridad*, revista de la Federación de Estudiantes de Chile, edición facsimil, 1972.

⁷⁷ M. A. Garretón, “La crisis de la democracia en Chile, distinciones y consideraciones”, en M. Garretón, y T. Moulián, *La Unidad Popular y el conflicto político en Chile*, Santiago, Cesoc-Lom, 1983, p. 224.

que ver en lo fundamental con la lucha por concretar la Reforma Universitaria en un Estatuto que sea ley de la República.⁷⁸

En este contexto, la propia CUT reafirmó la alianza “natural” entre obreros y estudiantes, pues además de enumerar una serie de reivindicaciones tendientes a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la ola inflacionaria que alcanzaba 20%, llamó a apoyar la propuesta de reforma universitaria de la izquierda.

Los estudiantes aparecían, en el discurso de los propios estudiantes de izquierda, ligados objetiva y estructuralmente a un destino histórico; así lo demostraba la realidad social e histórica y lo corroboraba la ciencia. Por ejemplo, un articulista comentaba la actitud que debían tener los estudiantes ante la elección del 4 de septiembre de 1970 con estas palabras:

Nosotros, estudiantes, tenemos como tales, nuestros intereses objetivamente ligados a los destinos históricos de la clase trabajadora, sea como futuros profesionales interesados en una racionalización de los recursos, sea —y fundamental— como estudiantes deseosos de recibir una formación rigurosa, una visión científica de la realidad, sea por último, como el sector social privilegiado y en deuda moral y material con aquellas clases desposeídas que son las que producen la riqueza que los burgueses y nosotros disfrutamos.⁷⁹

El cumplimiento de este “destino histórico”, es decir, la identificación con los intereses del proletariado, marcaba dentro de referentes claramente evolucionistas una etapa de “madurez” del movimiento estudiantil que debía ser asumida por los jóvenes tanto colectiva como individualmente. El papel de la juventud era naturalmente de vanguardia, es decir, de un “esfuerzo pedagógico extraordinario por hacer comprender a las masas el conflicto de fondo, que no es otro que el de la lucha de clases, cuya agudización debe buscarse al máximo”.⁸⁰ Era la condición para la construcción de la sociedad socialista.

Esta “madurez evolutiva” de la juventud, que la fijaba a su destino histórico, dependía del país y la sociedad donde se desarrollaban

⁷⁸ “A luchar por los derechos de los pueblos”, *Claridad*, Santiago, 29 de junio de 1970.

⁷⁹ R. Rivas, “Las elecciones y los deberes del movimiento estudiantil”, *Claridad*, Santiago, 29 de junio de 1970, p. 7.

⁸⁰ *Idem*.

los distintos movimientos juveniles de la época. El *hippismo*, que en ese momento preparaba un recital en las afueras de la ciudad, preocupaba a la juventud de izquierda de la FECH que por medio de *Claridad* expresaba: “Nos inquieta la forma como está siendo enfrentado el problema de un sector de la juventud chilena que busca canalizar sus inquietudes por el camino de la música ‘soul’, del pelo largo, de la mariguana, del *hippismo*”. Así, no era lo mismo ser joven estudiante revolucionario en Rusia que en Inglaterra, o ser *hippie* en Chile que en Estados Unidos:

En Estados Unidos corresponde a una respuesta primaria de la juventud a la guerra de Vietnam, a los valores extraviados de una sociedad convulsionada por los dólares, a la llamada “sociedad de consumo”. Estas formas de respuestas de la juventud estadounidense corresponden a una expresión de rebeldía juvenil primitiva que paulatinamente empieza a transformarse en una actitud de combate organizado y consciente contra el sistema.⁸¹

Resultaba así la paradoja de que Chile, un país de capitalismo subdesarrollado, periférico, dependiente, había saltado a una etapa histórica más avanzada que el país del norte; allá había “expresiones de rebeldía juvenil primitiva”; acá, en cambio:

[...] la inmensa mayoría de la Juventud, los estudiantes, los jóvenes trabajadores, se pronuncian por las transformaciones revolucionarias de la sociedad, comprenden que la raíz de los problemas está en una sociedad profundamente enajenante, incapaz de canalizar las inquietudes juveniles, marcada a fuego por un estilo de convivencia en que “el hombre es el lobo del hombre”.⁸²

De todos modos el texto llamaba a no condenar “con una actitud pacata a los *hippies* chilenos” ya que era una minoría la que había “caído en la trampa”; a ella había que rescatarla “para transformar su rebeldía juvenil en conciencia revolucionaria”.

¿Cómo explicaban los jóvenes de izquierda la existencia de otros conglomerados juveniles con posiciones ideológicas distintas? A medida que el gobierno de Allende avanzaba y consolidaba los distintos puntos de su programa, las fuerzas sociales y políticas se polarizaban cada vez más y a esto no fueron ajenos los estudiantes.

⁸¹ *Idem.*

⁸² *Idem.*

VI. LA POLARIZACIÓN POLÍTICA

En los años siguientes, junto con la crisis política, el accionar de los jóvenes entró en la espiral de violencia de la época. La política juvenil y estudiantil de la izquierda estuvo en el centro del debate y se radicalizó más aún cuando la derecha organizó grupos paramilitares y antirrevolucionarios como la Brigada Rolando Matus, ala juvenil del Partido Nacional, y el Movimiento Nacionalista Patria y Libertad. Ambos grupos se enfrentaron a la izquierda en las calles e iniciaron una ola de sabotajes que alentaron el golpismo; incluso desde antes que Allende asumiera la presidencia, un comando del segundo, apoyado por la CIA, asesinó al propio comandante en jefe del ejército, René Schneider en 1970.

En 1973 la derecha política y la democracia cristiana cerraron filas y se enfrentaron a la UP en las elecciones parlamentarias del 4 de marzo. La oposición le dio carácter plebiscitario a las votaciones entre la continuidad del gobierno y la renuncia de Allende. Pero no lograron su objetivo: ganar la mayoría parlamentaria y declarar inconstitucional su gobierno; pese a la crisis política, la UP sacó 43.4% en las urnas (ocho puntos más que tres años antes); pero esta “victoria” cerró la alternativa política de derrocamiento y abrió el camino al golpe de Estado.

A fines de abril de 1973, los trabajadores de la mina de cobre El Teniente, en la región de Rancagua, declararon una huelga por mejoras salariales;⁸³ la movilización fue apoyada desembozadamente por la oposición de derecha y demócratacristiana. Al principio el movimiento fue mayoritario, pero con el tiempo muchos trabajadores que apoyaban al gobierno se descolgaron; el 7 de mayo 60% de los trabajadores asistían a las faenas.⁸⁴

El 6 de junio la huelga llevaba más de un mes y el Congreso —en el que la oposición tenía leve mayoría sobre la UP— abrió sus puertas para que los parados recibieran ayuda en alimentos de la clase alta. Por primera vez un dirigente obrero, Guillermo Medina, fue recibido en la Universidad Católica y aplaudido por los estudiantes; pero a la fecha ya se habían reincorporado al trabajo 65% de los trabajadores y 10% de los empleados. A esas alturas sólo 25% del personal de la mina estaba

⁸³ S. Bitar y C. Pizarro, *La caída de Allende y la huelga de El Teniente. Lecciones de la historia*, Santiago, Ediciones del Ornitorrinco, col. Pensamiento alternativo, 1986.

⁸⁴ Datos del documental *La Batalla de Chile*, parte I: “La rebelión de la burguesía”.

parado. Los estudiantes de la UC se convirtieron en los principales agitadores de la huelga, cuando ésta continuaba retrocediendo hasta que murió cinco días después. El 21 de ese mes, 93% de los trabajadores se encontraban en las faenas; mientras, en Santiago una concentración de medio millón de personas convocada por la CUT rechazó la movilización y apoyó al gobierno de Allende. El 28 de junio los 500 mineros que aún ocupaban la UC se retiraron en pequeños grupos.⁸⁵

Como si la política fuera de un extremo al otro, tres meses después, el 4 de septiembre, cuando el gobierno popular celebraba tres años, en el frontis de la casa central de la Universidad Católica apareció un cartel firmado por la Feuc que decía:

La juventud señala un camino:
¡Que renuncie! Para dar paso a una nueva institucionalidad.

Fue foto de primera plana en *El Mercurio*, el mismo que, años atrás, había sido vilipendiado en el mismo lugar por la acción de otros jóvenes de la misma universidad. Era parte de una campaña iniciada por la Feuc para que Allende dejara el gobierno, complementada con la recolección de firmas entre la población. Los estudiantes que la emprendieron fueron detenidos por la policía no sin antes alcanzar a recolectar las firmas de “miles de personas”.⁸⁶

El día 6 de septiembre de 1973 “elementos marxistas trataron de impedir la recolección de firmas que hacían los “estudiantes universitarios”, pero fueron disuadidos por carabineros que hicieron uso de bombas lacrimógenas.⁸⁷ La campaña estudiantil siguió, alentada por el periódico, que en los días siguientes editorializó sobre el llamado de la Feuc de Santiago y Valparaíso y de “amplios sectores gremiales” al presidente de la república para que renunciase; según ellos había “tenido un eco nacional multitudinario” y era atendida, en la capital y en “innumerables ciudades de provincia”, por “masas de mujeres”. La dirección de la oposición había sido tomada por el movimiento gremia-

⁸⁵ Guillermo Medina posteriormente fue líder sindical bajo la dictadura de Pinochet.

⁸⁶ “Piden renuncia a Allende”, *El Mercurio*, 5 de septiembre de 1973, p. 1.

⁸⁷ “Recolección de firmas se extenderá a comunas”, *El Mercurio*, 7 de septiembre de 1973, p. 17.

lista que desplazó a la derecha nacionalista tradicional; en el lenguaje mercurial eran “los gremios y el gremialismo” los que “representan una democracia de base frente a la dirección de los partidos tradicionales “necesariamente lenta para reaccionar”, que enfrentaban a un gobierno que había “atropellado la esencia de la democracia chilena”.⁸⁸

La Feuc convocó a una “marcha juvenil para el martes 11 de septiembre a las 11:30 horas, para exigir la renuncia de Allende”. La ruta que la manifestación seguiría era: Alameda, Ahumada, Moneda, Amunátegui, Compañía, Estado, para finalizar en el punto de partida. La organización hacía este llamado “a participar en ella a toda la juventud estudiantil de la capital, tanto de la enseñanza media como de la universitaria, sin distinción de colores políticos”.⁸⁹

Hoy sabemos que la manifestación nunca se efectuó. ¿Dónde habían quedado los ímpetus revolucionarios inherentes a la juventud? ¿Dónde la contradicción del ser-joven-y-no-ser-revolucionario?

VII. CONCLUSIONES: LA REVANCHA HISTÓRICA DE LA “OTRA JUVENTUD”

Creemos que estas preguntas marcan el problema central al que nos hemos dedicado en estas páginas. Durante el siglo XX se construyó una idea acerca de la juventud, que tensionada por los proyectos políticos divergentes que se confrontaron en 1973 hizo crisis. Esta idea que entendió a la juventud como “naturalmente” volcada a la revolución y los cambios, fue construida por un discurso político que no sólo buscaba utilizarla, pues implicó en gran medida su integración al sistema. Este discurso estuvo fundamentado en una idea científica. El gobierno de la UP se alimentó de esta idea y convirtió a los jóvenes en una preocupación central no sólo como motor de su política para impulsar los cambios revolucionarios; también significó un importante momento en que la juventud vivió la etapa de mayor prestigio social y de integración y participación efectiva en el sistema democrático. Y esto lo sabían muy bien quienes dieron el golpe de Estado.

⁸⁸ “Respuesta de la democracia de base”, *El Mercurio*, 8 de septiembre de 1973, p. 3.

⁸⁹ “Marcha juvenil se realizará hoy”, *El Mercurio*, 11 de septiembre de 1973.

El jueves 13 de septiembre salieron a la calle los dos únicos diarios que fueron autorizados por el gobierno militar, *El Mercurio* y *La Tercera*. El primero publicó los bandos que la Junta de Gobierno había emitido para controlar el país; el cuarto comunicado hacía un llamado a los jóvenes:

Bando núm. 4: La juventud debe confiar en las Fuerzas Armadas.

A la juventud: la gente joven, más que nadie, debe confiar en los destinos superiores de Chile y en las Fuerzas Armadas que serán encargadas de velar por ello. Se les hace presente que la mejor manera que podrán cooperar con las nuevas autoridades es obedeciendo a los bandos y las instrucciones que se emitan.

A los padres: Los padres están llamados, más que nadie, a mantener en el núcleo familiar la calma en los espíritus para restablecer la concordia nacional. Deben cooperar al mantenimiento del orden, cuidando que sus hijos no abandonen el hogar hasta que el orden sea totalmente restablecido.

A la población en general: la población debe abstenerse de hacer cualquier tipo de manifestación, incluso aquellas que pretenden apoyar a las nuevas autoridades.⁹⁰

El sábado 15 de septiembre, el gremialista Javier Leturia, presidente de la Feuc, emitió una declaración manifestando “la adhesión irrestricta de los estudiantes de la Universidad Católica a la Junta Militar que rige los destinos de nuestro país”, y se unió al “júbilo que hoy recorre Chile entero” al ver derrocado al “gobierno marxista e ilegítimo”. El dirigente estudiantil confesional continuaba declarando: “En este amanecer de la patria, llamo a todos los estudiantes de la Universidad Católica, a reintegrarse a sus actividades académicas cuando la junta de gobierno lo disponga”.⁹¹

Cada universidad fue intervenida y los cargos de rectores fueron ocupados por generales de las fuerzas armadas. Los jóvenes gremialistas se convirtieron con el tiempo no sólo en los nuevos “líderes” que el gobierno militar designó para “dirigir” las organizaciones estudiantiles en cada universidad, sino también en la columna vertebral de la intervención militar entre la juventud, en los municipios y en la reforma económica.

⁹⁰ “La juventud debe confiar en las Fuerzas Armadas”, *El Mercurio*, 13 de septiembre de 1973. El día 12 no hubo edición.

⁹¹ “Feuc se adhiere a la Junta Militar”, *El Mercurio*, 16 de septiembre de 1973.

El primer Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación –presentada en su época como una comisión “objetiva” encargada de construir una verdad “oficial” acerca de la represión durante los 17 años de dictadura– elaboró una lista (incompleta) de más de dos mil chilenos detenidos-desaparecidos, fusilados o muertos por la violencia policial durante la dictadura: determinó que durante los años 1973 a 1990 fueron detenidos y hechos desaparecer 117 estudiantes universitarios, y otros 89 fueron ejecutados por agentes del gobierno de Pinochet.⁹²

Pero ese debate entre Allende y los jóvenes revolucionarios que querían seguir el modelo cubano, guevarista, guerrillero, que aquél hizo para definir el “revolucionarismo” de su gobierno y la legitimidad de su proyecto de “vía chilena al socialismo”; tan legítimo –para él– como el del guerrillero argentino, quedó atrás. Una discusión que se produjo dentro de la misma tradición que ensalzó a los jóvenes y que los hizo depositarios, protagonistas, artífices y conductores de los románticos sueños de cambio de una sociedad. Los jóvenes que, como él, respondían a un discurso ideológico con una larga data de construcción, y que en ese momento, al igual que el “compañero presidente” casi cuarenta años antes, estaban viviendo “su” momento, el instante en que tomándose “el cielo por asalto” pretendieron alcanzar las estrellas.

BIBLIOGRAFÍA

- Allende G., Salvador, *La realidad médico-social chilena*, Santiago, Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social-Lathrop, 1939. [Existe una reedición reciente: Santiago, Editorial Cuarto Propio, 1999, cuidada por María Angélica Illanes y Mariano Requena.]
- _____, “Discurso en la Universidad de Guadalajara”, México, diciembre, 1972.
- _____, “Los jóvenes en la Patria Nueva”, discurso del 22 de diciembre de 1970 en el acto de creación de la Secretaría General de la Juventud en Santiago, *Salvador Allende en el umbral del siglo XXI*, México, Plaza y Janés, 1989.
- _____, *Salvador Allende frente al mundo: discursos y declaraciones*, prólogo de Francisco Fernández Fredes, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988.

⁹² Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (2 vols.), Santiago, 25 de abril de 1990.

- Allende, S., "Polémica", *Claridad*, Santiago, mayo de 1965.
- Barrenechea, Julio, *Frutos del país*, Santiago, Ed. Andrés Bello, 1984.
- Bitar, Sergio y Crisóstomo Pizarro, *La caída de Allende y la huelga de El Teniente. Lecciones de la historia*, Santiago, Ediciones del Ornitorrinco, col. Pensamiento alternativo, 1986.
- Blanco, Guillermo, *Eduardo Frei, el hombre de la Patria Joven*, Santiago, Editorial Aconcagua, 1984.
- Blest Gana, Alberto, *Martín Rivas, novela de costumbres político-sociales*, tomo I, París, Librería de A. Bouret e Hijo, 1900.
- Bourdieu, Pierre, "La juventud no es más que una palabra", en *Sociología y cultura*, México, Grijalbo, 1990.
- Brodsky, Ricardo, *Conversaciones con la FECH*, Santiago, Cesoc, 1988.
- Claridad*, revista de la Federación de Estudiantes de Chile, edición facsímil, 1972.
- Corporación de Promoción Universitaria, *Estudiantes y política. Seminario Internacional, Viña del Mar*, Santiago, Ediciones CPU-UNESCO, 1970.
- Devés, Eduardo, *Del Ariel a la Cepal, el pensamiento latinoamericano 1900-1950*, Santiago, Biblos-Dibam, 2001.
- Federación de Estudiantes de Chile (FECH), *Declaración de Principios de la Federación de Estudiantes*, Santiago, julio, 1920.
- Figueroa, V., *Las aspiraciones de la juventud y la cuestión política*, Santiago, Imp. Universitaria, 1915.
- Fontecilla, Óscar, "Los estudiantes ante la política", *El Mercurio*, Santiago, 30 de abril de 1915, p. 12.
- Garretón, Manuel Antonio, "La crisis de la democracia en Chile, distinciones y consideraciones", en Manuel Antonio Garretón y Tomás Moulián, *La Unidad Popular y el conflicto político en Chile*, Santiago, Cesoc-Lom, 1983.
- Goic, Cedomil, *La novela chilena, los mitos degradados*, Santiago, s.e., 1968.
- Gómez Ugarte, Jorge, *Ese cuarto de siglo, 25 años de vida universitaria de la ANEC, 1915-1941*, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1985.
- González Vera, José Santos, *Cuando era muchacho*, Santiago, Universitaria, 1951.
- Greve, Germán, "¡Juventud, tuyo es el mundo!", *Revista Agronómica*, núm. 12, Santiago, junio-julio, 1932.
- Grez Toso, Sergio, *De la "regeneración del pueblo" a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)*, Santiago, Dibam, 1997.
- Hopenhayn, Martín, "Temprano en la vida pero tarde esa mañana", en Matías Rivas y Roberto Merino, *¿Qué hacía yo el 11 de septiembre de 1973?*, Santiago, Lom, 2001.

- Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (2 vols.), Santiago, 25 de abril de 1990.
- Instituto Nacional de Estadísticas, *Estadísticas de Chile en el siglo XX*, Santiago, INE, 1999.
- Jocelyn-Holt, Alfredo, *El peso de la noche, nuestra frágil fortaleza histórica*, Santiago de Chile, Planeta-Ariel, 1997.
- Krauze, Enrique, *Caudillos culturales en la revolución mexicana*, México, Siglo XXI Editores, 1976.
- Lastarria, José Victorino, *Recuerdos literarios*, Santiago, Zig-Zag, 1967.
- Mariátegui, José Carlos, “Los intelectuales y la revolución”, en *Fascismo sudamericano. Los intelectuales y la revolución y otros artículos inéditos*, Lima, Centro de Trabajo Intelectual Mariátegui, 1975.
- Mattelart, Armand y Michele, *Juventud chilena, rebeldía y conformismo*, Santiago, Universitaria, 1970.
- Mayorga, Wilfrido, “Los estudiantes pasan...” (entrevista con René Frías Ojeda), *Ercilla*, Santiago, 24 de noviembre de 1965.
- Moraga, Fabio y Delicia Araya, *Vanguardias políticas en Chile, 1920-1932*, tesis de Licenciatura, Universidad de Chile, 1995.
- Moraga, Fabio y Carlos Vega, *José Domingo Gómez Rojas*, Punta Arenas, Editorial Ateli, 1997.
- Moraga, Fabio, “*Muchachos casi silvestres*”, *la Federación de Estudiantes y el movimiento estudiantil chileno, 1906-1936*, Santiago, Editorial Universitaria (en prensa).
- _____, *El positivismo en Chile, 1870-1925*, tesis doctoral, México, El Colegio de México (en preparación).
- Morales, F., “Nuestro objeto”, *Boletín de Medicina*, núm. 1, Santiago, 15 de julio de 1904.
- “Juventud”, *Juventud* núm. 1, Santiago, 15 de agosto de 1911.
- Moulián, Tomás, “La trayectoria de una crisis”, en Manuel Antonio Garretón y Tomás Moulián, *La Unidad Popular y el conflicto político en Chile*, Santiago, Cesoc-Lom, 1983, pp. 195-217.
- Muñoz, Víctor, “Imágenes y estudios cuantitativos en la construcción social de ‘la juventud’. Un acercamiento histórico 2003-1967”, *Última Década*, núm. 20, Viña del Mar, 2004.
- Olavarría Bravo, Arturo, *Chile bajo la Democracia Cristiana*, Santiago, Ed. Nascimento, 1970.
- Palacios, Guillermo y Fabio Moraga, *La independencia y el comienzo de los regímenes representativos*, Madrid, Ed. Síntesis, 2003.
- Quintanilla, Susana, “Dionisio en México o cómo leyeron nuestros clásicos a los clásicos griegos”, *Historia Mexicana*, núm. 3, vol. LI, México, enero-marzo de 2002.

- Rivas, Rodrigo, "Las elecciones y los deberes del movimiento estudiantil", *Claridad*, Santiago, 29 de junio de 1970, p. 7.
- Rodó, José Enrique, *Ariel y motivos de Proteo*, Caracas, Ed. Ayacucho, 1980.
- Rucker, Martín, "La juventud católica", *La Revista Católica*, núms. 2 y 3, Santiago, septiembre, 1901.
- Salazar, Gabriel, *Historia contemporánea de Chile*, vol. V: "Niñez y juventud", Santiago, Editorial Lom, 2003.
- Tedesco, Juan Carlos y Hans R. Blumenthal, *La Juventud Universitaria en América Latina*, Caracas, Cresalc-Ildis, 1986.
- Treffemberg, Yaco, *Problemas de la juventud y los estudiantes*, Santiago, Quimantú, 1972.
- Vasconi, Tomás e Inés Reca, "Movimiento estudiantil y crisis en la Universidad de Chile", en Aníbal Pinto *et al.*, *Chile hoy*, México, Siglo XXI, 1971.
- Viciani, Oriel, "Polémica", *Claridad*, noviembre de 1970.
- Vicuña Fuentes, Carlos, *La tiranía en Chile*, Santiago, Lom Ediciones, 2002 (edición original de 1928).
- Waiss, Óscar, *Chile vivo. Memorias del un socialista 1928-1970*, Madrid, Centro de Estudios Salvador Allende, 1986.

SIXTA PARTE
LA BATALLA POR LA MEMORIA

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ESPACIO DE LA MUERTE: MEMORIA, DEMOCRATIZACIÓN Y ÁMBITO DOMÉSTICO

Lessie Jo Frazier*

En los procesos de transición a la democracia, la competencia por el poder político supone luchas sobre la memoria, el poder interpretativo de definir la relación entre el presente y el pasado. Mi propia intervención, en ese tan disputado campo de la memoria, comienza con mi trabajo de campo sobre las políticas de género del proyecto terapéutico del gobierno chileno de la posdictadura, para tratar, y después reintegrar, a los sobrevivientes de la violencia de Estado. Los servicios de salud mental del Estado chileno posdictatorial feminizaron, sin querer, a sus pacientes, en el contexto de la creación de mayores esfuerzos para contener las ramificaciones del terror estatal. Durante la segunda presidencia civil se le dio perspectiva de género a todo el sistema de salud mental a través de los privilegios adquiridos por las mujeres y los niños que fueron vistos como víctimas no políticas. Así la política de género del régimen militar quedó intacta ya que los militares disciplinaron y domesticaron al cuerpo nacional rebelde, a través de un proceso de despolitización. En las transiciones a la democracia, el fracaso de reconocer el espacio de la muerte¹ en regímenes autoritarios del terror de Estado, como un espacio patriarcal, burgués y doméstico, significa que los esfuerzos po-

*Doctora en Historia por la Universidad de Michigan con la tesis *Memory and state violence in Chile. A historical ethnography of Tarapacá, 1890-1995*, tesis doctoral, University of Michigan, 1998. Editó, junto con Janise Hurtig y Rosario Montoya del Solar, el libro *Gender's place: feminist anthropologies of Latin America*, Palgrave Macmillan, 2002. Profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Carolina del Sur, Columbia.

¹M. Taussig, "Culture of terror-Space of death. Roger Casement's Putumayo Report and the explanation of torture", *Comparative Studies in Society and History*, 26 de julio, 1984.

líticos por disipar el espacio de la muerte pueden, sin querer, permitir más adelante que esto impregne y estructure a la sociedad civil.²

El espacio de la muerte es la esfera de interacción entre el opresor y el oprimido. Es muerte porque es una especie de muerte social: el retiro de la persona de su contexto social; la tentativa de dismantelar su sentido de la personalidad, y la amenaza de aniquilación completa. El concepto enfatiza que esta poderosa experiencia es compartida entre el violador y el violado, creando así un tipo perverso de intimidad. Al no interrogar “el espacio de la muerte” instaurado durante el periodo del Estado de terror, las sociedades posdictatoriales no pueden dismantelar la herencia del poder autoritario (aquí es donde la memoria se vuelve importante; esto es, nos permite ver los medios a través de los cuales “el espacio de la muerte” es perpetuado, además de ser un posible instrumento para dismantelar dicho espacio), incluso el continuo poder subterráneo de los sectores militares y sus promotores. Uno de estos legados ha sido la absorción extendida de la retórica de los militares: de la antipolítica que concibe el ser político como algo sospechoso y sucio. ¿Si ser un actor político es malo, entonces, qué esperanza queda ahí para construir democracias viables, donde la gente pueda ejercer la ciudadanía, especialmente, en sociedades en las que el torturador y el torturado comparten las mismas calles? Las políticas de los gobiernos civiles que pretenden que esto no es un problema —o en el mejor de los casos evitan difundir la cuestión, para promover la “reconciliación”— subestiman el poder de aquel momento previo para continuar definiendo la dinámica política y social.

Los estudios de género pueden convertirse en la llave para desenredar este lío, porque prestan atención tanto a la esfera doméstica como a la política retórica de género, así como a la agencia, que nos permite ver las formas en las cuales el autoritarismo penetró fundamentalmente e impregnó la vida cotidiana, y continúa haciéndolo. Para entender lo que la continuidad estructural entre los regímenes militares y civiles podría

² Taussig define el espacio de la muerte como “un umbral” (*ibid.*: 467-468), ni como inherentemente represivo ni como emancipador, sino en relación con el mantenimiento y dismantelamiento del orden (*Shamanism, colonialism, and the wild man. A study in terror and healing*, Chicago, 1987), un paradigma de la experiencia latinoamericana que revela el enmarañamiento de las relaciones sociales con una cultura del terror. Para mí, se trata de la ubicación de la destrucción y de la producción de subjetividades, en el caso de las guerras sucias, con el fin de producir ciudadanos burgueses apropiados para la nación; aquellos que no podían ser salvados tenían que ser destruidos.

significar para los sectores subalternos, voy más allá de la aseveración de la crítica chilena Julieta Kirkwood, en el sentido de que la política feminista del conocimiento debe comenzar con “el cambio de objeto a sujeto”, porque “el conocimiento basado en la alteridad es perversión”,³ para sostener que en “el espacio de la muerte” se trata de la producción de pervertidas o monstruosas y encarnadas subjetividades. De tal modo, observo más detenidamente las relaciones particulares del poder bajo la violencia de Estado, al regresar a la novela corta de la autora argentina Luisa Valenzuela *Cambio de armas*, que relata el momento del reconocimiento, del conocimiento, en “el espacio de la muerte”, así como la creación de posibilidades para nuevas subjetividades.⁴

SANGRE Y MEMORIA: EL TERROR ESTATAL
COMO VIOLENCIA TRANSFORMATIVA BAJO EL PODER MILITAR

Con el fin de entender la preocupación de las sociedades posdictatoriales, debemos especificar primero “el espacio de la muerte” constituido bajo el poder militar. Los regímenes militares sudamericanos de los años setenta y ochenta justificaron sus brutales dictaduras con una retórica imbuida de metáforas del cuerpo; las metáforas militares de enfermedad representaron cuerpos monstruosos, contaminados por la ideología política que atacaba la identidad del cuerpo nacional defendido sólo por la sangre de sus soldados:

En nuestras reflexiones, debemos recordar a nuestros muertos, porque la sangre derramada aquí, no tiene precio; esto es porque, de la memoria de esta pérdida es que nunca aceptaremos nada que arruine o pervierta la victoria militar o nos haga olvidar el claro y tremendo costo.⁵

En este sentido, el discurso de 1980 del general argentino Galtieri convocó al fantasma del soldado martirizado por su nación; una figura de sacrificio en gran parte mitológica, dada la mínima escala de la oposición que representaban los movimientos guerrilleros armados. El

³ J. Kirkwood, *Feminarios*, Santiago, Ed. Documentales, 1987, p. 135.

⁴ L. Valenzuela, *Other weapons* (trad. D. Bonner), Hanover, Ediciones del Norte, 1985.

⁵ B. Loveman y T. M. Davies (comps.), *The politics and antipolitics: The military in Latin America*, Lincoln, Nebraska, 1989, p. 203.

general expresó el sentido específico de dominio de género y consideró, dentro de la nación, una mirada masculina totalizante. La sangre mítica derramada “aqui” demarcó el espacio de la nación, desplazando de la memoria nacional los cuerpos de los civiles desaparecidos y torturados; tal delimitación de quién pertenece y quién no, por lo general a través de categorías de género y raciales, ha sido central para el proceso de conformación de la nación.⁶ Lo que el general prometió no olvidar nunca es el reinado del terror de Estado bajo el dominio militar en Argentina, que duró desde 1976 hasta 1983, y en Chile desde 1973 hasta 1990. Los regímenes militares operaron bajo la rúbrica de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), estrategia de la Guerra Fría para luchar contra la subversión comunista y para afirmar el orden dentro del espacio de la nación que prescribió el secuestro, la detención, la tortura, el exilio, la ejecución y la desaparición de miles de ciudadanos —a menudo jóvenes—, de líderes sindicales, y de la mayor parte de los otros sectores organizados de la sociedad. Bajo esta doctrina cualquier persona implicada en la política se hacía sospechosa, y la práctica política se volvió intrínsecamente peligrosa pervirtiendo a la nación. Los militares reclamaron el derecho a defender a la nación como sus guardianes apolíticos, y acataron la DSN un proceso espacialmente organizado de identificación, localización y erradicación de aquellos que fueran definidos como enemigos nacionales; así, la DSN se convirtió en el anteproyecto para construir paisajes nacionales en unidades administrativas de policía estatal, mientras ellos reestructuraron la economía nacional alrededor de principios neoliberales de libre mercado, inscribiendo tanto en la memoria de los subyugados como en la del pueblo que los apoyaba, un panorama particular de terror estatal que glorificaba el militarismo, la nación y el Estado autoritario. El personal paramilitar y militar fue ungido de las nuevas vanguardias de la patria y fue adoctrinado en el rol de torturador. El acto de tortura fue instantáneamente un culto a la masculinidad y a la seguridad personal; quienes rechazaron convertirse en torturadores fueron interrogados sobre su homosexualidad y su lealtad a la patria;⁷ los regímenes militares

⁶ M. L. Pratt, “Overwriting Pinochet: Undoing the culture of fear in Chile” en D. Sommer (comp.), *The Places of History: Regionalism Revisited in Latin America*, Durham, Duke, 1999.

⁷ Véase F. Graziano, *Divine violence: spectacle psychosexuality, and radical Christianity in the Argentine “dirty war”*, Boulder, Westview, 1992, y M. Feitlowitz, *A lexicon of terror: Argentina and the legacies of torture*, Oxford, 1998.

engendraron y mantuvieron una construcción específica de la relación entre la masculinidad heterosexual y la violencia sosteniendo la primacía del patriarcalismo, donde la promesa de la seguridad del hogar y la seguridad de la nación fueron mutuamente constituidas.

Bajo la DSN, los militares vieron al Estado-nación como organismo vulnerable a la contaminación de fuerzas subversivas, representadas como monstruosos cuerpos enfermos; tal como lo elaboró el almirante ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, César Guzetti, en agosto de 1976.

Quando el cuerpo social del país ha sido contaminado por una enfermedad que corroe sus entrañas, éste forma anticuerpos. Estos anticuerpos no pueden ser considerados en la misma forma que los microbios. Mientras el gobierno controle y destruya la guerrilla, la acción del anticuerpo desaparecerá, como sucede actualmente. Esto es solamente una reacción natural a un cuerpo enfermo.⁸

La nación como cuerpo, los militares como anticuerpo y la guerrilla como enfermedad; cuerpo monstruoso: estas metáforas comprendieron la organización de la DSN; purgar la enfermedad subversiva del cuerpo nacional se volvió la tarea principal y justificó el costo de vidas civiles. El método de salvación del cuerpo nacional que propuso el antiguo vicario del ejército argentino, monseñor Victorio Bonamin, es revelador: “Cuando la sangre corre, hay redención; Dios es redención, a través del ejército argentino, la nación argentina”.⁹ La sangre contaminada, como la sangre inocente de la nación, sería derramada para limpiar el cuerpo de la nación. Para los generales la sangre es memoria, fluye y permanece; permite recordar y permite olvidar. Por medio del flujo de la sangre nacional como memoria, la redención alcanzaría a través de la *madre patria* el patrimonio nacional, cercando el espacio feminizado de la madre tierra como cultura, afecto y reproducción social, junto con mayores dominios masculinos sobre las instituciones políticas, los recursos económicos, y las fronteras que serían defendidas de la usurpación. De este modo, la *madre patria* sirvió como el lugar

⁸ Lawyers Committee for International Human Rights (LCIHR), *Violations of human rights in Argentina: 1976-1979*, Ginebra, A Report by the LCIHR to the United Nations Commission on Human Rights, 1979, pp. 3-4.

⁹ S. Gregory y D. Timmerman, “Rituals of the modern state: The case of torture in Argentina”, *Dialectical Anthropology*, núm. 11, 1986, p. 70.

que abarcaba a la sociedad civil y estatal; *la plaza mayor y la casa* en las que esta redención nacionalista ocupó su lugar.

Al subsumir el reino de lo público, los militares relegaron la memoria colectiva al espacio privado donde esto “alimentó el miedo”;¹⁰ “el espacio de la muerte” superó la dicotomía público-privado, aunque al mismo tiempo permitió al ámbito doméstico ser un refugio de represión y un santuario para la memoria que resiste, colocando y desplazando “el espacio de la muerte”. Mientras no podamos “conocer” el espacio de la muerte, porque éste es muerte social, un análisis de género de la forma del espacio de la muerte revela las maneras en las que la inversión militar en la defensa del patrimonio nacional superó los límites de los intereses públicos y privados y justificó las incursiones violentas dentro del ámbito doméstico para la forja y la vigilancia de formas particulares de subjetividad.

Si los arquitectos de la DSN ubicaron la seguridad del hogar como una justificación fundamental, entonces al representar “el espacio de la muerte” como un espacio doméstico, la novela corta de Luisa Valenzuela *domestica* la guerra sucia, echando atrás las políticas prevalecientes, al conciliar la peligrosa historia política detrás de la conspiración sexualizada. En este sentido, la novela es lo contrario de una narrativa más estándar en la que la intriga política alude a encuentros sexuales ilícitos, una inversión irónica de espacios prohibidos dentro de la narrativa, que así representa la ironía histórica de la retórica del régimen sobre la santidad del reino de la familia, yuxtapuesta con su propia violación de ese lugar sagrado, a través de la invasión y apropiación de espacios comunes y objetos del hogar. Análisis feministas del romance en el ámbito doméstico pueden proporcionar una introspección invaluable dentro de las dimensiones de género de la violencia de Estado, porque el ámbito doméstico y la historia política de la nación en América Latina han estado inextricablemente unidos en una “política de erotismo”.¹¹ Como podemos ver, *Cambio de armas* puede ser leída como los sueños burlones de la gloria nacional y doméstica, yendo más allá de la representación del ámbito doméstico como un espacio exclusivo de la promulgación de la alegoría política, mostrando las maneras en las que los espacios nacional y do-

¹⁰ M. Taussig, “Violence and resistance in the Americas: The legacy of the conquest”, en *The nervous system*, Nueva York, Routledge, 1992, p. 48.

¹¹ D. Sommer, “Irresistible romance: The foundational fictions of Latin America”, en H. K. Bhabha (comp.), *Nation and narration*, Londres, Routledge, 1990, pp. 6-7.

místico están mutuamente constituidos. Las escenas eróticas aproximan el lugar de los militares como *locus* para el deseo en las culturas políticas de Argentina y Chile (un complejo de sectores: hegemónico, contrahegemónico, nominalmente apolítico, etc.); *locus* de deseo que los activistas de derechos humanos continúan luchando por descentrar. Al trasladar una historia de extrema violencia estatal al terreno de lo político, se puede revelar la ubicua naturaleza cotidiana de la violencia doméstica contra la mujer, mientras el terror de Estado magnificó el despotismo patriarcal en las sociedades contemporáneas. Esto requiere distinguir analíticamente entre el terror en el ámbito doméstico y el terror de Estado, para reconocer las formas en las que el terror de Estado perpetuó los “microdespotismos”.¹²

Para reflexiones posteriores sobre la *domesticación* del Estado de violencia, la vía chilena de transición a la democracia proporciona un caso particularmente interesante, en el que inadvertidamente la perspectiva de género de los proyectos de reparación, reforzó la dinámica entrelazada de la violencia del ámbito doméstico y el Estado de terror. Los políticos que lideraron las obligadas transiciones al gobierno civil a fines de los años ochenta y principios de los años noventa, recorrieron un estrecho camino entre los movimientos de derechos humanos, el ultraje y el deseo de perpetuar abusos, y la habilidad actual de los militares de prevenir y evadir convincentemente tales tentativas. Negociando este conflicto de intereses para forjar un espacio para la sociedad civil, los líderes civiles trataron de reinscribir los límites de lo público y lo privado, al circunscribir el conflicto pasado bajo la rúbrica de la llamada violencia política. Como la cinta amarilla alrededor de la escena del crimen, los políticos civiles definieron los límites temporales y espaciales de la violencia política y los derechos humanos, en un esfuerzo por contener y dar fin a la era del Estado de terror.

PERPETUANDO EL ESPACIO DE LA MUERTE EN TRANSICIONES
A LA DEMOCRACIA DE LIBRE MERCADO: EL CASO CHILENO

El problema central en Chile durante la última década, desde el fin del gobierno militar formal, ha sido la inhabilidad para tratar las violacio-

¹² F. Reati, “Argentine political violence and artistic representation in films of the 1980’s”, *Latin America Literary Review*, julio-diciembre, 1989, p. 35.

nes a los derechos humanos del pasado (en términos de reparaciones o persecuciones a los perpetradores); especialmente, el problema de los *sobrevivientes* de la tortura, detención, y exilio interno y externo (a excepción del programa de salud, las políticas de reparación del Estado privilegiaron abrumadoramente a las familias cercanas de la gente que había sido asesinada, y la verdad oficial y reconciliación del gobierno civil reporta sólo casos documentados que terminaron en muerte). Ésta es la razón por la cual el cambio en el programa de reparación de salud del Estado, que se aleja de las cuestiones de los derechos humanos hacia la violencia intrafamiliar, es tan perturbador. La premisa fue que después de cierta cantidad de tiempo, aquellos afectados más directamente por la violencia estatal deberían darse de alta y reintegrarse a la sociedad. Éste es un problema obvio con el cambio en la política, pero hay implicaciones más profundas, más inquietantes. Los movimientos feministas nos han enseñado que “lo personal es político”; sin embargo, aquí tenemos un ejemplo de introducción a algo definido como doméstico, como una forma de despolitizar cuestiones definidas como políticas. Después del feminismo, tenemos que explorar las uniones entre estas formas de violencia, pues *todas* ellas son políticas.

En Chile, la transición del gobierno militar al gobierno civil comenzó a principios de los años ochenta, cuando la recesión mundial minó la legitimidad de las políticas económicas neoliberales de las privatizaciones del régimen militar, de los incentivos para la inversión extranjera en el sector de la exportación, y de la reducción de programas sociales del gobierno. En medio de la recesión, numerosos movimientos sociales comenzaron a organizar demostraciones públicas de gran escala en contra de los militares. Conduciendo este movimiento se encontraban asociaciones de barrio, comedores colectivos, grupos de derechos humanos y otras organizaciones en las que una gran proporción de líderes y militantes eran mujeres; entre estos grupos había organizaciones feministas, como la de *Mujeres por la vida*, quienes explícitamente articularon la necesidad de definir la democracia tanto “en la calle como en la casa”.¹³

¹³ Véase J. Franco, “Going public: Reinhabiting the private”, en M. L. Pratt y K. Newman (comps.), *Critical passions*, Durham, Duke, 1999, pp. 48-65; A. Matear, “Desde la protesta a la propuesta: The institutionalization of the women’s movement in Chile”, en E. Dore (comp.), *Gender Politics in Latin America: debates in theory and practice*, Nueva York, Monthly Review Press, 1997, pp. 84-100, y M. L. Pratt, “Overwriting Pinochet...”, *op. cit.*, pp. 21-33.

Los militares habían intentado formalizar su dominación con una nueva Constitución (1980), estipulando un plebiscito para elegir entre el gobierno civil o el gobierno militar hacia el final de la década; sin embargo, por medio del plebiscito de 1988 y la subsecuente elección presidencial, aproximadamente 60% de los chilenos decidió sacar del gobierno a los militares, y sus más vehementes partidarios quedaron fuera del poder. Así, el gobierno civil fue restaurado en 1990. Para marcar la transición de los militares al poder civil, el nuevo gobierno civil estableció una comisión para emprender una investigación muy limitada de los abusos a los derechos humanos bajo el poder militar. Porque las investigaciones estuvieron limitadas sólo a los casos que resultaron en muerte, el grado completo de la tortura nunca ha estado totalmente documentado. La Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo varias recomendaciones al gobierno civil para facilitar su objetivo de clausura histórica, incluyendo recomendaciones para las reparaciones de las víctimas de la violencia estatal. La mayor parte de estas reparaciones han sido dirigidas hacia las familias inmediatas de aquellos que habían muerto, aunque algunos programas de vivienda y pequeños créditos comerciales fueran extendidos a ex prisioneros políticos y a aquellos que volvían del exilio. El proyecto de reparaciones de mayor alcance y fiscalmente más significativo fue el establecimiento de un Programa de Salud Mental y Derechos Humanos que amplió comprensivamente la asistencia médica, poniendo énfasis en los servicios psicosociales, dirigidos a los familiares de ejecutados y desaparecidos, exiliados que regresaron y ex prisioneros políticos.

El programa de reparaciones de salud mental fue el resultado de dos décadas de trabajo de profesionales de la salud mental en la utilización de terapia psicosocial para víctimas de derechos humanos como una forma de activismo político. La salud mental y el movimiento de derechos humanos en Latinoamérica crearon un tipo de psicología política que se rehusó a patologizar los problemas de quienes fueron dañados por los abusos a los derechos humanos (entendidos como una colectividad), y en cambio insistió en que las estructuras sociales, políticas y económicas que generaron el Estado de terror requerían ser desmanteladas.¹⁴ La institucionalización de este movimiento por el nuevo gobierno civil cambió su énfasis político, y de hecho causó profundas divisiones entre aquellos profesionales que decidieron trabajar con el gobierno ci-

¹⁴ N. Caro H., *Liberation Psychology*, New Brunswick, Rutgers, 1997.

vil y aquellos que cuestionaron las presuposiciones de la organización de los programas de gobierno. La revisión de los programas de Estado de salud mental en reportes publicados y en entrevistas con funcionarios del programa, profesionales de la asistencia médica, trabajadores sociales y pacientes, me aclaró que mientras el programa fue diseñado con el espíritu de defensa de aquellos abusados por el Estado, en última instancia fue concebido como medida temporal para ayudar a reintegrar a las víctimas de derechos humanos a la sociedad civil reemergente, y así complementó la noción de una transición a la democracia que se definió como una configuración liminal, espacio-temporal, entre el tiempo de la dictadura militar y un periodo llamado democracia. En este espacio liminal, psiquiatras del Estado, psicólogos y trabajadores sociales, delimitarían y resolverían las memorias individuales y familiares de la violencia de Estado. Por su lado, líderes políticos argumentaron que la fragilidad del cambio de Chile del gobierno militar al gobierno civil, limitó su capacidad para llevar ante los tribunales a los militares, porque a pesar de que éstos se habían retirado del control completo del gobierno (excepto los senadores designados por los militares; jueces promilitares monopolizando los juzgados, y personal administrativo y clerical de bajo nivel del gobierno) la estructura institucional de las fuerzas armadas permaneció completamente intacta, con el antiguo dictador como comandante en jefe.¹⁵ Las políticas pragmáticas del Estado civil significaron que uno de sus esfuerzos más significativos por enfrentar las herencias del pasado funcionó a través de un programa de salud mental dirigido a la domesticación de las memorias de aquellos más directamente marcados por la historia de la violencia estatal. De todos modos, este programa proporcionó vitales –aunque limitados por recursos escasos–, servicios de salud a aquel sector de la sociedad, en un contexto de mercantilización de la asistencia médica y de la privatización casi total de los servicios médicos del Estado (y así la inaccesibilidad financiera de la asistencia médica) iniciada bajo el régimen militar e intensificada por el gobierno civil.¹⁶

¹⁵ Ariel Dorfman (*Death and the maiden*, Nueva York, Penguin, 1991) retrata la terrible intimidad entre una mujer sobreviviente y su torturador, que al rechazar la venganza, se niega a resolver el conflicto de recuerdos encontrados de la violencia de Estado en los paradigmas del perdón. En 1994 Román Polanski llevó el relato de Dorfman a la pantalla en una película del mismo nombre con la notable actuación de Sigourney Weaver y Ben Kinsley. (Nota del compilador.)

¹⁶ J. Paley, *Marketing democracy*, Berkeley, California, 2000.

En 1994, la elección presidencial y la transición pacífica de la primera presidencia civil a la segunda inspiraron la declaración del Estado según la cual la transición a la democracia en Chile había concluido, de lo que posteriormente se retractó; por consiguiente, de acuerdo con esta política oficial, la transición de la dictadura militar a la democracia civil estaba completa. El programa de salud mental y derechos humanos fue incorporado al Ministerio de Salud como Programa de Salud Mental y Violencia, cuyo interés principal estaba en la violencia doméstica contra niños, mujeres y ancianos, definida como apolítica. Al relegar las cuestiones de violencia política al pasado, el gobierno civil también se negó en este punto a reconocer abusos a los derechos humanos en curso en Chile, especialmente en el área de la violencia policiaca ejercida contra manifestantes políticos, delincuentes comunes, y particularmente delincuentes relacionados con el narcotráfico; también se negó a reconocer las herencias del terror estatal. La política estatal pasó de un proyecto de tratar a la memoria subordinada como patología, a la eliminación de esa memoria como anacrónica; además, el cambio de interés del programa implicó la domesticación de los derechos humanos y de la violencia, trasladando así los derechos humanos del ámbito político y público al privado, a la violencia vista como producto del retroceso cultural y socialmente disfuncional; *por ejemplo, individuos anómalos en la esfera doméstica, o de atraso social y cultural.*

Las corrientes ocultas en la salud mental inicial y en el programa de derechos humanos habían resultado en un inadvertido programa político con perspectiva de género, un modelo más abiertamente exacerbado en el paso del énfasis del programa a la violencia intrafamiliar. El programa enfocado en la violencia doméstica estaba orientado al tratamiento y la defensa de supuestas víctimas definidas como no masculinas: sujetos de abuso, no adultos (niños y ancianos) y mujeres, y por tanto dignas de la intervención estatal. Esta feminización de la clientela del Estado amplió la perspectiva de género implícita en salud mental previa y en el programa de derechos humanos que había trabajado principalmente a través de modelos de tratamiento. Porque los hombres generalmente eran más reticentes a comprometerse en la psicoterapia, hubo sobrerrepresentación de las mujeres, quienes de hecho usaron la gama completa de recursos (aunque en la práctica muy poca terapia parece haber sido conducida debido a los muy limitados recursos). Los hombres tendieron a ir solamente por la asistencia médica regular y

fueron mucho más dados a protestar por la estructuración paternalista de las relaciones de entrega de la asistencia médica. Muchos hombres resintieron la premisa subyacente, de que el personal del programa sabía las respuestas, de que los pacientes eran el problema, además, del rechazo de algunos empleados para creer las historias de la gente sobre la tortura y para ver cualquier conexión entre la tortura y los problemas físicos actuales. El personal del programa, de acuerdo con mis entrevistas y el informe oficial de los proyectos, también experimentó la desproporcionadamente alta rotación de profesionales hombres,¹⁷ quienes parecían menos dispuestos a tolerar las condiciones de trabajo agotadoras y la relativa carencia de apoyo infraestructural del gobierno central. Pensando en las implicaciones de esta perspectiva de género, implícita en el programa por su cambio al interés en la violencia doméstica, he basado la siguiente discusión del programa en un texto clave: el manual técnico del programa de 1998, porque me interesan, para los propósitos de este ensayo, las formas en las cuales los actores estatales estructuraron el problema de la violencia y los derechos humanos durante la crucial primera década posterior a la dictadura militar.¹⁸ Cómo funcionaron realmente los programas en la práctica es otro asunto, como vimos en el caso de su antecesor, la salud mental y el programa de derechos humanos. Con el propósito de centrarnos en el análisis de la política de la memoria en periodos de democratización, me concentro a continuación en esta articulación de la política de Estado para entender la primera década del poder civil, cuando el gobierno formuló las estrategias cruciales para una transición política del poder militar.¹⁹

Es necesario reconocer que los funcionarios del programa que redactaron el manual sabían que tenían la necesidad de pensar en los derechos de las mujeres como derechos humanos,²⁰ y reconocían la responsabilidad estatal en su protección. Sin duda, éstos también estaban relacionados con las tendencias del financiamiento internacional para la

¹⁷ R. Domínguez *et al.*, *Salud y derechos humanos: una experiencia desde el sistema público de salud chileno, 1991-1993*, Santiago, Ministerio de Salud, 1994.

¹⁸ Ministerio de Salud, *Manual de apoyo técnico para las acciones de salud en violencia intrafamiliar*, Santiago, Publicaciones de Salud Mental, 1998.

¹⁹ Para el año 2000, el Ministerio de Salud había comenzado a desarticular los componentes llamados políticos y domésticos del programa, debido en buena parte a la crecida demanda de servicios por los clientes "políticos" y a su movilización como federación nacional de beneficiarios del programa.

²⁰ Ministerio de Salud, 1998, p. 30.

salud pública y los proyectos de asistencia social de “los derechos de la mujer como derechos humanos”, que fueron tema importante para las organizaciones internacionales de los años noventa. Por ejemplo, los autores discutieron el problema de la maternidad obligatoria o impuesta;²¹ enfrentaron abiertamente el abuso de poder en el hogar, y más aún, el programa reconoció a las mujeres como agentes de sus propias vidas,²² y usó el género —que definieron como cultura más biología²³ (término contra el cual los senadores de derecha habían lanzado una diatriba política pocos años antes)— como una forma de pensar las relaciones de poder: “la conducta violenta es entendida como una forma eficaz de ‘el control sobre el otro’”.²⁴ Mientras que el programa representó un enorme paso adelante en las políticas de Estado hacia las mujeres y la familia, veo dos elementos limitantes clave en este entramado.

Primero, en el manual casi no se hacía uso del término “hombre” para especificar a los agentes predominantes de la violencia intrafamiliar, y aún menos se utilizaba “patriarcado” como un concepto operativo. Como en la oración citada arriba, la discusión de las acciones violentas fue expresada generalmente en voz pasiva, rechazando especificar al responsable. Del mismo modo, la discusión sobre la maternidad impuesta omitió la cuestión del interés patriarcal en los cuerpos de las mujeres como instrumentos de reproducción. Una de las estrategias concretas del programa para “promover las relaciones familiares sanas” fue proporcionar información al público sobre los beneficios de una mayor “*flexibilidad* en la distribución de los roles asociados con los géneros”,²⁵ pero tal estrategia tendría bajo impacto si no enfrentaba el interés de los hombres de no *flexibilizar* la redistribución de los roles de género (nótese el predominio del vocabulario neoliberal). Mientras que el manual observó la democratización gradual de la familia como componente de la estructura social actual, no apoyó la democratización de la dinámica familiar como objetivo; fue más bien observado como factor de tensión que desencadena la violencia.²⁶ Mientras la explicación de la misión del programa señala el abuso de poder del hombre como el

²¹ *Ibid.*, pp. 58-59.

²² *Ibid.*, pp. 70 y 75.

²³ *Ibid.*, p. 19.

²⁴ *Ibid.*, p. 30.

²⁵ *Ibid.*, p. 46.

²⁶ *Ibid.*, p. 20.

problema, no cuestionó nunca su derecho a ese poder, implicando que la alternativa al abuso de poder era el ejercicio benévolo de aquel poder. Al no confrontar la parte que le toca al hombre en las definiciones desiguales de género, es comprensible que casi todas las intervenciones del programa sigan estando dirigidas hacia la “víctima”, más que a desafiar al poder directamente. En esta estrategia, el programa para tratar los problemas de salud mental que son resultado de la violencia “doméstica” reprodujo la política de su violencia “política” anterior.

En un nivel más profundo, mi segunda preocupación más importante relativa al entramado del programa es que sus dos fases también expresaron de modo similar una comprensión relativamente despolitizada de la política de la violencia. El análisis de la violencia intrafamiliar localizó esta violencia en el ámbito de las “creencias culturales”,²⁷ repitiendo el proyecto reciente del Estado de la “modernización cultural” y la retórica de principios del siglo XX de la “cuestión social” (por ejemplo, el alcohol y otros vicios) como el origen del conflicto social (a diferencia de la explotación de clase). Al describir los factores que contribuyen a la tensión de las familias de hoy, el programa observó el incremento de “presiones externas” y la “inestabilidad creciente”, sin especificar los cambios políticos y económicos que habían creado esas condiciones. Aunque señalaba correctamente las tensiones de la pobreza para niños, mujeres y ancianos,²⁸ el programa olvidó mencionar que estas condiciones afectan a gran porcentaje de las familias chilenas, y al dejar esta observación en el nivel de fenómenos generales el Estado naturalizó la pobreza²⁹ y sus concomitantes capas de brutalidad. Por ejemplo, al culpar a la ignorancia cultural, el programa hizo de la educación pública el componente central de su estrategia.³⁰ Lo que este llamado a la educación dejó fuera es el contexto del colapso del sistema educativo de Chile, debido a las privatizaciones iniciadas bajo la dictadura militar y continuadas por el gobierno civil. Basado en la compartimentalización modernista de la vida humana, la violencia se desplazó del ámbito de la economía política a los reinos de la sociedad y la cultura, divisiones que confunden las diferencias de género entre lo público y lo privado;

²⁷ *Ibid.*, p. 30.

²⁸ *Ibid.*, p. 39.

²⁹ *Ibid.*, p. 46.

³⁰ *Ibid.*, p. 42.

en suma, la violencia doméstica, en la concepción del Estado, fue completamente doméstica.

En un intento por colocar al ámbito doméstico en primer plano, activistas internacionales han trabajado para asegurarse que las discusiones universalistas acerca de los derechos humanos aborden los problemas más particulares de los grupos subordinados (tales como mujeres y niños), como asuntos políticos; sin embargo, este discurso es susceptible de ser leído en sentido contrario: es decir, tomar sujetos de la esfera doméstica para despolitizar cuestiones de la violencia y los derechos humanos. A pesar de las limitaciones del programa de salud mental y de derechos humanos, éste había constituido un esfuerzo importante; sin embargo, el gobierno civil prácticamente abandonó un programa que explícitamente reconoció los abusos a los derechos humanos ocurridos bajo la dictadura militar y que –aunque de una manera condescendiente según el punto de vista de muchos pacientes– creaba cierto espacio oficial para aquellos afectados más directamente por el poder militar. En su lugar, el Estado se ostentó de manera paternalista como abogado y protector de sectores de la sociedad percibidos como vulnerables y ‘sin voz’.³¹

En la reestructuración neoliberal de Chile alrededor de la lógica del mercado, los debates sobre las políticas del Estado hacia el ámbito doméstico y la familia pudieron haberse centrado más en la mercantilización del patrimonio y la redefinición concomitante de las relaciones entre el patriarcado estatal y las prerrogativas del patriarcado local, que sobre los intereses de la mayor parte de los sectores subordinados al patriarcado: mujeres, niños y ancianos. Por ilustrar este proceso de redefinición, concluyo esta sección con un ejemplo de la acción legislativa reciente. En 1998, asistí a una sesión del congreso chileno con varias organizaciones de mujeres, porque durante aquel día debía aparecer en el palacio legislativo un proyecto de ley para incrementar las penas contra las mujeres que practicaran el aborto; por esto, esos grupos de mujeres quisieron hacer acto de presencia en la cámara para protestar por tal medida. La ley sobre el aborto realmente nunca pasó de aquel día;

³¹ Acerca del paradigma “infantilizador” para la ciudadanía de la modernidad tardía, véase L. Berlant, *America, “fat,” the fetus. Gendered agents: women and institutional knowledge*, Durham, Duke, 1998; en cuanto a la ciudadanía-mercado en Chile, véase V. Schild, “Neo-liberalism’s new gendered market citizens: the ‘civilizing’ dimension of social programs in Chile”, *Citizenship Studies*, vol. 4, núm. 3, 2000, pp. 275-305.

sin embargo, irónicamente la legislación más importante que se abordó fue la ley para derogar el instrumento de legislación social más antiguo en Chile: la ley que distingue a los niños legítimos de los ilegítimos.³² El debate se extendió, pasando de las opiniones ofrecidas por senadores de la coalición de los partidos predominantes, a las de senadores de los partidos a favor de los militares; incluso el senador vitalicio Pinochet habló: su débil voz casi se ahogó por los gritos de indignación de las mujeres que observaban desde la galería. El general insistió en que sin una ley para regular la herencia basada en la legitimidad, la familia y así la nación serían puestas en peligro. El único senador que puso sobre la mesa los intereses de las mujeres y los niños y señaló el problema de los patriarcas negligentes³³ fue la conservadora Evelyn Mattei –hija de un comandante en jefe de la fuerza aérea–, quien señaló el abandono desenfrenado de niños y la necesidad de padres más responsables. Lo que el resto del congreso discutió, en efecto, siguiendo evidentes líneas políticas, fue la relación entre las leyes sociales que definen la legitimidad y el problema del patrimonio nacional, entendido como la regulación de la herencia de la propiedad privada.³⁴ Cuando el ex dictador defendió la ley decimonónica como salvaguarda de la seguridad nacional, amplió y subrayó la cadena en la lógica militar entre la DSN y el patriarcado; es decir, colocó el patrimonio nacional en el ámbito doméstico. Así, aquellos que favorecieron la abrogación de la ley en este debate parlamentario desregulaban la herencia y así impulsaban la lógica neoliberal mucho más allá del punto que los militares habían estado dispuestos a alcanzar, para subsumir el ámbito doméstico como patrimonio nacional dentro del espacio del mercado.

³² Algunos senadores notaron durante el debate legislativo que era extraño penalizar a los hijos ilegítimos cuando importantes figuras fundadoras del Estado-nación chileno, en especial Bernardo O'Higgins, eran ellos mismos ilegítimos. Véase S. Montecino, *Madres y guachos*, Santiago, Cuarto Propio, 1991, acerca de la fundación de la identidad nacional chilena.

³³ Hurtig, Janice, *Coming of age in times of crisis: youth, schooling and patriarchy in a Venezuelan town*, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2006 (tesis doctoral de 1998), en prensa.

³⁴ Durante el siglo XIX los esfuerzos liberales para reducir las restricciones de las leyes de herencia debidas a diferencias de género no se basaban en una igualdad mayor, sino, más bien en la necesidad de dirigir más recursos hacia el mercado (S. Arrom, "Changes in family Law in the nineteenth century: The civil codes of 1870 and 1884", *Journal of Family History*, 1985, pp. 305-317).

Durante la dictadura militar, las activistas feministas en Chile habían argumentado que el autoritarismo en la esfera pública estaba unido al ámbito privado. Por ejemplo, el grupo *Mujeres por la Vida* tomó las calles demandando democracia en la calle y en el hogar. Entre estos activistas creció el reconocimiento de la conexión entre el poder militar y la lucha sobre el patrimonio; reconocimiento extraído del trabajo de la feminista Julieta Kirkwood, quien desarrolló una teoría del autoritarismo doméstico en la que ella indicó profundamente las maneras en las que las ideologías de izquierda, centro y derecha, confinaron a las mujeres a la esfera del “ámbito doméstico privado” y redujeron el “problema femenino” a la “disputa sobre la defensa de la familia (chilena o proletaria) y dejaron sin mencionar todo lo que esto engendró y perpetuó: redes jerárquicas interiores, rígidas disciplinas y autoritarismo”.³⁵ Bajo la dictadura, esta característica de la cultura política chilena fue utilizada a favor de los militares; Kirkwood argumentó que, para imponer su autoritarismo, los militares no sólo apelaron al poder de las fuerzas armadas, sino también al brutal “autoritarismo subyacente en la sociedad civil” dando por resultado la “imposición total de un Estado patrimonialista”.³⁶ Para Kirkwood, entonces, el autoritarismo y sus métodos violentos no podrían ser entendidos sin una teoría política de género; vio el ámbito doméstico y el público como ámbitos mutuamente constituidos y comprendió que las luchas contra un Estado autoritario requieren desmontar estructuras autoritarias a través de dichos espacios. Aquí, yo sostengo que en la transición del poder militar al poder civil, la lucha contra las estructuras autoritarias no tuvo lugar y que el espacio de la muerte continúa impregnando las relaciones sociales en todos los niveles. La estrecha definición dominante de la democracia limitó la gama de posibilidades para el ejercicio de la subjetividad política en el Chile actual.

Para explorar la pregunta acerca de qué clases de subjetividades podrían desafiar la integridad del espacio de la muerte, retomaremos nuestros pasos en la cronología política de la región para pensar más sobre la constitución de aquel espacio bajo el régimen militar a través de la novela argentina de Luisa Valenzuela *Cambio de armas*. Déjenme

³⁵ J. Kirkwood, *Feminarios*, *op. cit.*, p. 121.

³⁶ *Ibid.*, pp. 117-119.

³⁷ X. Bunster-Burotto, “Surviving beyond fear: Women and torture in Latin America”, en J. Nash y H. Safa (comps.), *Women and change in Latin America*, South Hadley, Mass., Bergin and Garvey, 1986.

ser clara: no leo los erotismos de esta historia como la representación de los deseos de la gente subyugada a la tortura,³⁷ sino más bien como la representación alegórica del problema de la hegemonía (un proyecto político para la dominación configurado por la negociación de la coerción y el consentimiento) en el Estado-nación bajo el terror de Estado.

Cambio de armas:

las economías íntimas de la violencia en el Estado de mercado

En esta historia Valenzuela describe los caminos en los que la guerra sucia estructuró tanto la memoria como la amnesia, y traza el proceso de recordar en el que cuerpo, placer y dolor, forman el núcleo de la intimidad entre la víctima y el victimario. En el curso de la historia, la amnésica aprende a poner nombres a los objetos, al hombre, y a ella misma (en ese orden), para distinguir un espacio doméstico cuya importancia le había sido presentado como natural. El espacio de la muerte toma forma en la respetabilidad de la casa burguesa del moderno apartamento completo con criados y artefactos domésticos. La inspiración del misterio y el mal dentro del ámbito doméstico es evocadora de un espacio gótico en el cual el proyecto modernista que busca distinguir entre el monstruo y el héroe es revelado y cuestionado.

La acción tiene lugar en un moderno apartamento urbano con ventanas hacia un muro de concreto, un dormitorio de espejos, una puerta cerrada con una mirilla de doble sentido y una llave sobre la repisa, además de un cuadro enmarcado de boda. Sus habitantes incluyen a la novia en el cuadro, Laura, quien sufre de amnesia; una ama de llaves, Martina, y el novio, un oficial militar que la visita de vez en cuando, siempre acompañado por dos hombres que permanecen justo fuera de la puerta. La mujer conoce sólo su deseo por el hombre cuyo nombre no puede recordar, por lo que se dirige a él con una variada letanía de nombres. Cuando ella está sola pasa mucho tiempo mirando su cuerpo en los espejos y notando la nariz que se había roto y curado, y la larga cicatriz que serpentea bajo su espalda. “A veces le duele la cabeza, y ese dolor es la única cosa que le pertenece realmente y que ella puede comunicarle al hombre. Entonces él se preocupa, con la esperanza y el temor de que ella pueda recordar algo específico.”³⁸ De aquí en

³⁸ L. Valenzuela, *Other weapons*, *op. cit.*, p. 107.

adelante la narrativa es puntualizada por subtítulos (la colección de armas) e incidentes. He elegido algunas de estas secciones tituladas, y las he resumido en tres grupos siguiendo la línea de la trama: 1) objetos aparentemente inofensivos del hogar, 2) objetos más siniestros que no caben dentro de un modelo de satisfacción doméstico e implican dudas, violencia e intimidad, y 3) un grupo que se relaciona con secretos, revelaciones y resoluciones.

La fotografía: El cuadro de la boda que ella no recuerda y su deseo por el hombre que no puede recordar.

La planta: Laura pide una planta. El ama de llaves transmite el mensaje al hombre. Él está de acuerdo, “Así que tráigale nomás una plantita si eso la va a hacer feliz, pero una planta para nada campestre. Algo bien ciudadano, si entiende lo que le quiero decir cómprela en una buena florería”.³⁹

Los espejos: Él la obliga a mirar cómo su cuerpo responde a su forma de hacerle el amor: él grita “Abrí los ojos, cantá, decime quién te manda, quién dio la orden, y ella grita un no tan intenso, tan profundo que no resuena para nada en el ámbito donde se encuentran y él no alcanza a oírlo”.⁴⁰ Y ella susurra su verdadero nombre, Roque, por primera vez.

La ventana: Ella mira fijamente fuera de la ventana mientras su mente vaga, piensa en un arma, una bomba de tiempo que espera explotar mientras él baja la calle. Entonces piensa en la necesidad de sus caricias como la única forma en que puede sentirse viva, o cuando él la amenaza porque su voz le cuenta sobre estar en otra parte: “porque por otro lado está esa zona oscura de su memoria (¿memoria?) que también calla y no precisamente por propia voluntad”.⁴¹

La casa burguesa llena de comodidades domésticas nos recuerda la “buena voluntad” de algunos sectores del pueblo, en Argentina y en Chile, de apoyar la toma del poder militar en nombre del establecimiento del orden necesario para la prosperidad capitalista. Los objetos domésticos son confundidos con signos de seguridad cuando al contrario ellos sustituyen las relaciones sociales violentas al proporcionar una

³⁹ *Ibid.*, p. 121.

⁴⁰ *Ibid.*, pp. 123-124.

⁴¹ *Ibid.*, p. 126.

lujosa seguridad a los sectores de la élite. Así esos objetos domésticos sirven para esconder la inestabilidad crónica de las formas cotidianas de violencia, decretadas contra la mayoría de la población a través de la violencia estatal directa y a través del caos diario de los ajustes estructurales de la economía. El ambicioso espacio del “mercado” se ha convertido en “la agonía del mercado abierto”.⁴²

Este primer grupo conecta imborrables cuestiones de deseo, violencia y memoria, según lo escrito físicamente en su cuerpo; en este sentido, la memoria tiene menos que ver con la autoconciencia que con la experiencia y la sensación. En el siguiente grupo, como Valenzuela presenta en su argumento, vemos dudas emergentes, recuerdos, y una proximidad creciente a la verdad de su identidad.

El pozo: “Los momentos de hacer el amor con él son los únicos que en realidad le pertenecen”.⁴³ Imagina un pozo dentro de ella (misma) que contiene todo lo que realmente es, pero no sabe.

El rebenque: Un día, en el dormitorio, él lleva un látigo. Ella comienza a gritar incontrolablemente. Él lo pone lejos y ella recuerda repentinamente la sensación del verdadero amor del que está muerto: “Después de sentir que ha estado tan cerca de la revelación, de un esclarecimiento. Pero no vale la pena llegar al esclarecimiento por vías del dolor [...] Mullida, protectora nube que debe tratar de mantener para no pegarse un porrazo cayendo de golpe en la memoria”.⁴⁴

La mirilla: Ella sabe que por no ayudarla, él realmente le permite abrir sus puertas internas; él le da la oportunidad de mirarse a sí misma en los espejos y entonces él le da la oportunidad de mirarse a sí misma a través de los ojos de otros: violándola en la sala de estar con la mirilla abierta.⁴⁵

El espacio moldea la forma en la que Laura llega a desear y complacer a Roque, y ella deberá voltear al revés aquel espacio, conforme lucha por recuperar el control del significado (del cuerpo, del placer, del dolor), en ocasiones a través del recuerdo y otras veces a través de

⁴² P. H. Lewis, *The crisis of Argentine capitalism*, Carolina del Norte, Chapel Hill, 1990.

⁴³ L. Valenzuela, *Other weapons*, *op. cit.*, p. 129.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 132.

⁴⁵ *Ibid.*, pp. 134-137.

rechazar los recuerdos. El olvido es estructurado y habituado. La historia presenta el dolor de no recordar junto con al placer y la comodidad del olvido (que la resistencia no se puede separar completamente del compromiso; más bien, forman un *continuum* a lo largo del cual las memorias se mezclan con sospechas incipientes). El olvido implica la fragmentación y la reconstrucción del sujeto autónomo: en este caso, Laura tiene ya un rápido y dudoso sentido de la desintegración de su posición en la casa; al contrario de la narrativa doméstica de la transición de novia a esposa. Laura debe juntar las piezas de su propia identidad en términos de su cuerpo y su escurridiza historia particular, aun cuando el cuerpo torturado haya condensado todo lo que los regímenes militares habían intentado negar en las políticas nacionales. Del mismo modo, Argentina y Chile fueron confrontados con sus historias como naciones latinoamericanas después de que las pretensiones de “civilización” europea habían sido hechas a un lado brutalmente, tanto como la respetable fotografía de boda que enmascaró las relaciones sociales de violación y encarcelamiento.

Este contradictorio proceso de necesidad de recordar, aun reconociendo la seguridad y comodidad del olvido, también podría describir los antiguos caminos en los cuales los nuevos presidentes civiles se colocaron como figuras de oposición a los militares y permanecieron susceptibles a la intimidación de ellos, sin intentar el reconocimiento público formal a través de procedimientos judiciales y del señalamiento público de los torturadores (un posible significado político del carácter masculino del nombramiento de Valenzuela). Podríamos mirar la violación de Laura a través de la mirilla como el reflejo de la participación *voyeurista* de otros estados nacionales en el Estado de terror; por ejemplo, tecnócratas militares estadounidenses e israelíes, junto con otros militares latinoamericanos, a través de acciones tales como el esfuerzo coordinado para eliminar a los enemigos políticos en el exilio, conocido como Operación Cóndor, y la necesidad de los militares de demostrar su capacidad de dominar cualquier oposición interna. Todo esto yuxtapuesto a las miradas fijas de otro tipo de organizaciones y redes internacionales; por ejemplo, Amnistía Internacional y Observadores de Derechos Humanos (Human Rights Watch), que han intentado poner en primer plano las cuestiones de derechos humanos en la política internacional.

El segundo grupo nos brinda un sentido de la intimidad en el espacio de la muerte y la saciedad potencial de su deseo a través de la recu-

peración de “la verdad”. La mirilla permite que ella se mire a sí misma a través de los ojos desgarrados de *un otro* que mira su cuerpo torturado. En las secciones finales de la historia, vemos la arrogancia con la cual él percibe su relación con la verdad ideológica, tanto en el sentido de la impunidad como en el de la creencia de su fuerza destructiva. Pero si la verdad en sus varias formas debe ser la última arma, esto es un apoyo en la búsqueda de un agente y un significado, conectando la recuperación de su propia historia y la capacidad de actuar. Tanto el fusil como la verdad permanecen como armas calladas (por ejemplo, Valenzuela no las usa como subtítulos), señalando la interacción entre la palabra y la violencia contra el cuerpo como armas que pueden funcionar para cualquier partido interlocutor.

El secreto: Después de una larga ausencia (debido al intento de un golpe militar), él regresa deseando resolver todo diciéndole la verdad (la cual ella no desea escuchar). Él pone un arma cargada en sus manos; dice que es el arma con la cual ella (junto con su compañero masculino que fue inmediatamente asesinado) intentó matarlo (pero él está seguro que ella ya no quiere): “Nada puede ser perfecto si tú te quedás así del otro lado de las cosas, si te negás a saber. Yo te salvé ¿sabés?”⁴⁶

La revelación: Él le dice que la salvó golpeándola y rompiendo su voluntad, obligándola a amarlo. Él le dice: “yo también tengo mis armas”.⁴⁷

El desenlace: Ella responde preguntándole si quiere venir a la cama. Él le dice que el experimento ha terminado; él se marcha, y ella es libre de irse también: “Ella ve esa espalda que se aleja y es como si por dentro se le disipara un poco la niebla. Empieza a entender algunas cosas; entiende sobre todo la función de este instrumento negro que él llama revólver. Entonces lo levanta y apunta”.⁴⁸

¿Cómo podemos relacionar la centralidad del género en el relato de Valenzuela con la historia de la política en Argentina y en Chile? Esta cuestión se vuelve más clara si vemos las formas en las que Valenzuela insiste en el poder *del cambio de armas* como camino de resistencia

⁴⁶ *Ibid.*, p. 143.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 145.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 146.

potencialmente exitoso, pero también contradictorio. Quizás la puerta cerrada con la llave falsa representa una vía hacia la rebelión completa que probaría el fracaso, mientras que las verdaderas fisuras susceptibles a la resistencia están dentro de las contradicciones del sistema mismo (por ejemplo, cuando Roque obliga a Laura a mirarse en el espejo, y así expone su cuerpo cicatrizado). También es significativo que el oficial (la encarnación del poder masculino) vea a una mujer menos amenazadora (que el compañero varón a quien él mata inmediatamente) y maleable. Al haber tomado la guerrilla la forma del monstruo que amenaza la civilización, los militares lo extirpan del cuerpo nacional (femenino); así las cicatrices en la espalda de Laura marcan la tentativa equivocada de los militares de suturar nuevamente la espalda de la nación. En esta historia podemos leer rastros de la confusa narrativa gótica del monstruo, que es tan a menudo su creador y que ha ido más allá de los límites de la humanidad común.⁴⁹ Si se asume que la mujer (leída como nación) puede ser rehecha, el oficial militar no reconoce ni su propia monstruosidad ni el peligro de “sus” armas.

Aunque los críticos han cuestionado correctamente la naturaleza de estas supuestas armas femeninas y los límites de cambio dentro del espacio doméstico,⁵⁰ pienso que la historia de Valenzuela implica varias lecturas posibles de la relación entre la violencia de Estado y la violencia doméstica. En la tortura, el espacio de la muerte invoca y corrompe el sentido de la seguridad encarnado en los signos del ámbito doméstico; en palabras de Elaine Scarry, “la ubicación del potencial más expansivo de los seres humanos”, y tanto el uso intencional de un vocabulario doméstico y de objetos domésticos como artefactos violentos “demuestran que todo es un arma”, de tal forma que objetos y civilización son “aniquilados” junto con ellos.⁵¹ Este desmantelamiento del ámbito doméstico podría ser particularmente efectivo en la tortura de mujeres presas desde aquel lugar que en apariencia era el dominio sagrado de la mujer y que se vuelve el sitio de su perdición. Sin em-

⁴⁹ J. Halberstam, *Skin shows: gothic horror and the technology of monsters*, Durham, Duke, 1995.

⁵⁰ Véase M. I. Lagos-Pope, “Mujer y política en ‘Cambio de armas’ de Luisa Valenzuela”, *Hispanoamérica*, núm. 46-47, 1987, y D. Taylor, *Disappearing acts: spectacles of gender and nationalism in Argentina’s “dirty war”*, Durham, Duke, 1997.

⁵¹ E. Scarry, *The body in pain: the making and unmaking of the world*, Oxford, Oxford, 1985, pp. 38-39.

bargo, si caminamos fuera de la lógica burguesa del ámbito doméstico y vemos estos artefactos domésticos animados por el fetiche de la comodidad,⁵² como el *locus* del patrimonio-propiedad burgués, junto con el hecho de las formas cotidianas de la violencia doméstica, entonces estamos forzados a cuestionar la lectura del ámbito doméstico como un espacio necesariamente seguro.

Cambio de armas puede ser leída como una burla de la romantización del ámbito doméstico, implícita en la versión de los militares acerca de la guerra sucia como un romance nacional que destaca a los militares como defensores heroicos del honor nacional. Los estudiosos feministas nos han invitado a cuestionar la noción de la distinción sutil entre violencia sexual y la relación heterosexual normativa; pero más bien forman un *continuum* de relaciones de poder, con una diferencia de grado, más que de calidad, de tal manera que tales tipos de erotismo específico del romance heterosexual yacen en la fuerza latente de aquella pasión⁵³ como en la ficción romántica que típicamente narraba la agresión y el subsecuente arrepentimiento del héroe, y la rendición de la virtud de la heroína en el argumento romántico;⁵⁴ un argumento preocupantemente repetido en la legislación civil de muchos países latinoamericanos que rebajaron las penas de violación contra aquellos violadores que acordaran casarse con la mujer violada; en Chile esta legislación fue derogada sólo en 1999.

Estas ideas feministas para quitarle el romanticismo a las narrativas heterosexuales dejan intacto el papel normativo de los protagonistas como actores masculinos y femeninos en los sentidos más convencionales y así ofrecen poco material con potencial transformativo. Judith Halberstam hace este trabajo en su análisis del horror gótico y de la tecnología de los monstruos cuando ella moviliza a la teoría *queer*⁵⁵ para

⁵² E. Apter y W. Pietz (comps.), *Fetishism as cultural discourse*, Ithaca, Cornell, 1993.

⁵³ Véase C. Mackinnon, *Sex equality: rape law*, Nueva York, Foundation Press, 2001, y P. Harvey y P. Gow (eds.), *Sex and violence: issues in representation and experience*, Londres, Routledge, 1994.

⁵⁴ J. Radway, *Reading the romance: women, patriarchy and popular literature*, Carolina del Norte, Chapel Hill, 1991.

⁵⁵ La teoría *queer* es una teoría sobre el sexo y el género de los individuos. Propone que la identidad sexual es una construcción social, por lo que los individuos no pueden realmente ser descritos utilizando términos tan generales como “hombre”, “homosexual” o “mujer”, “lesbiana”. Rechaza la creación de una identidad artificial y socialmente asig-

postular la emergencia de una subjetividad que supera la dicotomía modernista del humano-monstruo para asumir nuevas formas de acción. Es la figura de la “última muchacha” en las películas de horror, que surge llena de cicatrices de ataques anteriores para apropiarse de las armas (fállicas) usadas previamente contra ella y convertirse así en un sujeto *queered* (“enrarecido”) apto para trascender el escenario violento que amenazaba con aniquilarla.⁵⁶ Pienso que aquí el concepto *queered* puede ser útil para indicar no sólo una posicionalidad transgenerada, pues además indica una capacidad para actuar que surge de marcos culturales y políticos dominantes dispuestos para la agencia, pero que todavía no adquieren sentido dentro de esos marcos (ni los trascienden).⁵⁷ Valenzuela da cuerpo precisamente a tal personaje a través de Laura, quien es capaz de mirar dentro del espejo para ensamblar los pedazos de sus recuerdos, unirlos de nuevo con su cuerpo cubierto de cicatrices, desempacar la estructura de la disciplina doméstica y la historia impuesta sobre ella, y por último, al reconocer el arma, reclamar la capacidad de actuar. De ahí, una lectura *queered* (en este sentido, permite adoptar las afirmaciones de Halberstam a favor de una metodología *queer* para hacer una lectura a contrapelo con el fin de plantear interrogantes en torno de las caracterizaciones de género de la subjetividad) de *Cambio de armas*, que trasciende los marcos disciplinarios de la historia de amor para abordar de frente el problema del poder.

No obstante, el acceso al poder puede ser en sí mismo fuente de alteraciones. Franz Fanon exploró las contradicciones que considera inherentes al uso de la fuerza; su preocupación era que los revolucionarios anticolonialistas habían sido deformados por la herencia del colonialismo que usó la fuerza para conseguir una transformación política que podía volverse una burda arma de violencia indiscriminada. Paulo Freire, de manera similar, argüía que el poder mismo debe ser repensado y reenseñado si es que los sectores oprimidos quieren evitar caer igualmente en un ejercicio del poder arbitrario. Tanto Fanon como Freire

nada y la membresía en una entidad de grupo en la que todos sus integrantes comparten una costumbre o un estilo de vida establecido por “el otro”. Por lo tanto, para la teoría *queer*, los individuos, hombres y mujeres, construyen sus identidades sexuales, irrespectivamente de que sean “hombres” o “mujeres”.

⁵⁶ J. Halberstam, *Skin shows...*, *op. cit.*

⁵⁷ E. Bergmann y P. J. Smith (comps.), *¿Entiendes? Queer readings, Hispanic Writings*, Durham, Duke, 1995.

advirtieron acerca del peligro de la violencia arbitraria en los movimientos antiimperialistas de los años sesenta, pues comprensiblemente sus análisis certeros acerca del poder quedaban escindidos por los imaginarios coloniales de la civilización (el uso mesurado de la fuerza) y de la barbarie (el uso indiscriminado de la fuerza).⁵⁸ Ante este problema, la no violencia como práctica política proporcionó una estrategia a menudo eficaz, en especial en el pronunciado militarismo de la Guerra Fría; y, con todo, la no violencia evitaba el problema del marco dominante del uso de la fuerza, aun cuando estratégicamente desplegaba ese marco (por ejemplo en los movimientos de las madres de los desaparecidos). A partir de este periodo, los distintos “feminismos” han contribuido a la teorización poscolonial del poder, al intentar repensar los parámetros de las subjetividades emancipatorias. Por su parte, la teoría *queer* impulsa aún más estas perspicacias al rechazar el saneado de las subjetividades subalternas. Recordando la afirmación de la feminista chilena Julieta Kirkwood, según la cual “el conocimiento basado en la alteridad es perversión”, al desatar la confusión modernista del amo y el monstruo que delineó los términos de las guerras sucias, cualquier esperanza de salir del espacio de la muerte quizá descansa en la revaloración crítica, mnemónica de las subjetividades perversas. Esta subjetividad perversa es la que potencialmente puede convertirse en una base para la agencia política —la capacidad de actuar en las luchas por el poder— en el siglo XXI.

CONCLUSIONES: UBICACIÓN DEL ESPACIO DE LA MUERTE
EN EL PERIODO DE LA RECONCILIACIÓN

La reconciliación constituye un comienzo difícil de una era de madurez y responsabilidad sensatamente asumida por todos.

Las cicatrices representan no sólo un recuerdo doloroso, sino también la fundación de una democracia fuerte, de un pueblo unido y libre, un pueblo que aprendió que la subversión y el terrorismo constituyen la muerte inexorable de la libertad.

*Junta Militar de Argentina*⁵⁹

⁵⁸ J. Skurski, “The ambiguities of authenticity in Latin America: Doña Barbara and the construction of national identity”, en G. Eley y R. Suny (comps.), *Becoming National: A Reader*, Nueva York, Oxford, 1996.

⁵⁹ Citado en B. Loveman y T. M. Davies (comps.), *The politics...*, *op. cit.*, p. 211.

El paso de los estados argentino y chileno de un régimen militar a uno civil tenía en común la retórica de la reconciliación como la “curación”, un recurso adoptado por los dirigentes civiles para enfrentar los desafíos políticos planteados por las memorias colectivas de la violencia estatal. Estos casos se han vuelto modelos para transiciones de régimen en otras partes del mundo, como África y Europa. Tanto la reconciliación como la curación han sido figuras adoptadas no sólo por los dirigentes políticos civiles, sino también por los dirigentes militares, como lo demuestra la cita en el epígrafe de la Junta Militar de Argentina. Las metáforas de la curación, sin proponérselo, han perpetuado la retórica militar de la nación como un cuerpo sujeto a intervención; desde esta perspectiva, la reconciliación se volvió una sutura para unir de nuevo el cuerpo nacional en el cual las “cicatrices” retóricas sirvieron como el recuerdo persistente de la necesidad “liberadora” de la violencia del régimen militar; justificación que se invoca a menudo en defensa de los beneficios de la reestructuración económica neoliberal (en particular en el caso de Chile). Este razonamiento persistió dentro del relato modernista fundacionista, según el cual dar forma a la sociedad humana de manera quirúrgica y científica distingue al humano (“un pueblo unido y libre”) de lo monstruoso (“la subversión y el terrorismo”). Los militares (como aparece en el epígrafe) involucraban así con razón a “todos” en este proyecto. La transición relevante, la reestructuración de las economías de Argentina y Chile en torno de una ética de mercado, ya había tenido lugar mucho antes de la redemocratización, y así el patrimonio, como se entendía en la intervención patriarcal de los militares, había quedado salvaguardado.

La retórica de los militares sudamericanos acerca de su propia agencia como apolítica se mezcló convenientemente con los discursos del “fin de la historia” de la época de la posguerra fría de manera más general.⁶⁰ Vemos el poder de esta valoración de lo apolítico y la satanización de los actores políticos en los recientes ataques públicos a los activistas (la más sobresaliente es Rigoberta Menchú) por ser actores “políticos” más que apropiadamente víctimas “inocentes” de abusos a los derechos humanos. Desafortunadamente, los movimientos de de-

⁶⁰ T. Moulián, “A time of forgetting: The myths of the Chilean transition”, *NACLA*, vol. 22, núm. 2, septiembre-octubre, 1998, p. 22.

rechos humanos a menudo repetían de manera implícita esta retórica en defensa de los prisioneros de conciencia, que se veían favorecidos en detrimento de los que estaban involucrados en el uso de la fuerza o que defendían tal uso (definido de manera clásica como la política llevada a cabo por otros medios). En consecuencia, aquellos actores definidos como tales, que fueron políticos en un tiempo anterior, y en especial aquellos cuyos cuerpos cubiertos de cicatrices marcan su involucramiento anterior, operan dentro de un espacio público cada vez más restringido.

El caso chileno en particular se ha convertido en un paradigma que ha sentado precedente para la búsqueda de la justicia tras el terror de Estado. Los esfuerzos de un juez español por extraditar al general Pinochet de Inglaterra (adonde viajó para que se le practicara una cirugía menor) bajo los cargos de crímenes en contra de la humanidad abrieron nuevas posibilidades en la política internacional de la justicia. La Cámara de los Lores de Gran Bretaña decretó, de hecho, que el general Pinochet podía ser extraditado a España para ser juzgado por el crimen de tortura, y el testimonio de los sobrevivientes fue de importancia crítica para este veredicto. El Estado (civil) chileno envió funcionarios de su gobierno para armar la defensa en contra de esta decisión en nombre de la soberanía nacional; al final, el general no fue extraditado por razones de salud y fue regresado a Chile tras el acuerdo de que el sistema judicial chileno seguiría el proceso por estos crímenes de derechos humanos. Sin embargo, investigaciones judiciales subsecuentes en Chile no han abordado los casos de tortura, sino más bien las desapariciones (la detención clandestina de gente cuya existencia es negada a partir de ese momento y cuyos cuerpos nunca han sido recuperados), interpretadas de manera legal como secuestros, y las ejecuciones ilegales. Procesos civiles simultáneos entablados por las familias de los ejecutados y los desaparecidos han tratado de obtener compensaciones del Estado chileno. Mientras la tortura constituyó la acusación principal para buscar justicia en Gran Bretaña, por mucho, los casos de los sobrevivientes de la tortura han sido acallados en el discurso público chileno sobre la justicia, por el estado civil, el militar y los abogados de derechos humanos. Es precisamente este silencio lo que indica a qué grado el espacio de la muerte sigue impregnando hoy en día a la sociedad chilena.

EPÍLOGO

Gran parte de mi trabajo de campo durante la primera década tras el régimen militar se centró en antiguos presos políticos, quienes luchaban en contra del cambio en el programa de reparación de salud del Estado democratizador, al pasar de la llamada violencia política a la llamada violencia doméstica. Recientemente (marzo de 2001), acompañé a un ex preso político, Miguel Rojas, al hospital público de urgencias tres días seguidos, en donde reclamaba su derecho a servicios de salud como beneficiario del programa de reparación. Cuando una enfermera trataba de sacarle una muestra de sangre, tras dos fallidos pinchazos de la aguja en su brazo, Miguel le explicó que tendría mejor suerte al introducir la aguja si cambiaba de brazo, pues el otro había tenido fracturas múltiples por las sesiones de tortura. Mientras empujaba la aguja bajo su piel, la enfermera dijo: “Bueno, eso quiere decir que usted fue un político [por lo cual había razones para interrogarlo] ¿A qué partido pertenece?” Hoy en día, afirmar que uno tiene agencia por ser actor político es ser etiquetado como sospechoso (un cuerpo monstruoso cubierto de cicatrices sometido a la castrante penetración del Estado).

Los discursos de los organismos de derechos humanos que insisten en redimir a los activistas políticos —caracterizados por los militares como cuerpos enfermos— como víctimas pasivas, perpetúan la misma retórica puesta en operación por los regímenes militares.

No obstante, las ramificaciones de la política del gobierno civil postdictatorial se extienden más allá de esto. Durante la transición a una economía neoliberal orientada al mercado, el papel del Estado se transformó en el del tecnócrata racional desapegado (como la figura del doctor), cuyo trabajo es administrar la privatización de gran parte de los dos componentes clave del cuerpo nacional: el sector estatal y la sociedad civil,⁶¹ y asegurar que lo que quede de ambos sectores funcione eficientemente y de manera apolítica en interés del mercado. Éste es el papel del Estado-mercado. En el caso que he presentado aquí, el Estado intentó domesticar a los ex activistas políticos mediante un programa médico que daba primacía a los pacientes “femeninos” y “menores de edad” (las familias de los des-

⁶¹ D. Somers, “Irresistible romance...”, *op. cit.*

aparecidos), y después cambió completamente a un enfoque sobre la llamada violencia doméstica o intrafamiliar en donde, de nuevo, los pacientes privilegiados eran “femeninos” y “menores de edad”. En este proyecto de domesticación del cuerpo nacional para el mercado, el Estado se apoyó en el entendimiento cultural de la esfera doméstica o privada como apolítica, de manera tal que podía domesticar de manera simbólica los vestigios de la antigua y vibrante política cultural del activismo; además, los funcionarios del gobierno civil han subestimado de manera radical la herencia de la violencia en la estructuración de todos los sectores de la sociedad chilena, en especial los más íntimos.

En agosto del año 2000, asistí a una reunión de un grupo de altos funcionarios de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en el norte de Chile, entre cuyos miembros se incluían ex presos políticos, familias de los ejecutados y desaparecidos, y activistas que habían luchado durante años para quitar de su sitio a la dictadura militar y presionar al Estado civil para hacer justicia y reparar daños. Un grupo de padres de muchachas jóvenes provenientes de un pueblo cercano a Iquique (Alto Hospicio) pidieron hablar con la comisión sobre la negativa de los funcionarios oficiales (los administradores civiles y los funcionarios policiales militarizados) para que investigaran a fondo la desaparición de sus hijas, siete mujeres adolescentes. Los funcionarios estatales afirmaron que las muchachas habían huido con sus novios y que lo más probable era que hubieran terminado de prostitutas en la capital. Oficiales de la policía afirmaron incluso tener evidencia de que varios de los padres habían cometido abusos sexuales en contra de sus propias hijas y de hecho, que las habían empujado a una vida criminal. Mientras escuchaba los relatos de los padres, quedé impactada por el cercano paralelo de dichos relatos con las experiencias de las familias de los desaparecidos durante la dictadura, a quienes los funcionarios judiciales del régimen militar les dijeron que sus hijos eran delincuentes que habían huido a otro país o que sus esposos se habían ido con otras mujeres. Finalmente, en noviembre de 2001, los cuerpos de las jovencitas fueron descubiertos en una fosa común, que de manera simbólica era una réplica de la fosa común de presos políticos descubierta en la región en 1990, el primer año del régimen civil. Anteriormente, el asesino en serie, identificado por una víctima que se las arregló para sobrevivir y escapar, había matado a

varias mujeres jóvenes. Aunque los cuerpos de las víctimas mencionadas fueron encontrados, los casos nunca han sido investigados como debe ser, porque se trataba de jovencitas pobres cuya honra sexual podía ser puesta en duda por los incrédulos funcionarios policiales, algunos de los cuales estaban implicados en la violencia de Estado de la dictadura. Si los primeros asesinatos hubieran sido investigados a fondo como crímenes graves, las jovencitas de la fosa común quizá seguirían vivas.

Las dictaduras militares de la Guerra Fría echaron mano de metáforas del cuerpo para articular una Doctrina de Seguridad Nacional según la cual había la necesidad de extirpar la enfermedad, bajo la forma de cáncer subversivo, del cuerpo nacional; enfermedad que progresaba no sólo en sectores públicos explícitamente políticos, sino también en los espacios domésticos. En Chile, la transición de un régimen militar a uno civil siguió y profundizó la transición a una economía orientada al mercado de corte neoliberal; la domesticación de los derechos humanos a través de un proyecto de reparación de daños por medio de los servicios médicos que feminizó a sus pacientes, fue llevada a sus últimas consecuencias lógicas cuando el Estado en su rol de médico cambió el interés del programa de “salud mental y violencia”, de una violencia llamada política a otra llamada doméstica, usando la idea del cuerpo doméstico-familiar apolítico para despolitizar al cuerpo político-nacional. La medicina, como una intervención racional y técnica, y especialmente la psicología, se convirtieron en sustituto de la acción política, en especial para la búsqueda de la justicia, y otorgan amplias reparaciones de daños. Esta política de Estado hizo caso omiso de las perdurables herencias de la violencia de Estado y las perspicaces visiones del añejo y vigoroso movimiento feminista chileno, que desde hacía mucho tiempo se dio cuenta de la conexión lógica entre las estructuras autoritarias del Estado y las estructuras domésticas. Este fracaso de los funcionarios oficiales significó no sólo que el Estado en verdad trató de acallar a antiguos activistas como los ex presos políticos, sino que también fracasó en reconocer la naturaleza política de la violencia contra las mujeres. Esta negativa de reconocimiento ha conllevado la negativa a actuar y, como en los casos de los asesinatos de jovencitas y de la humillación de los ex presos políticos, ha perpetuado el ejercicio de la violencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Apter, Emily y William Pietz (comps.), *Fetishism as cultural discourse*, Ithaca, Cornell, 1993.
- Arrom, Silvia, "Changes in family law in the nineteenth century: The civil codes of 1870 and 1884", *Journal of Family History*, 1985, pp. 305-317.
- Bergmann, Emilie y Paul Julian Smith (comps.), *¿Entiendes? Queer Readings, Hispanic Writings*, Durham, Duke, 1995.
- Berlant, Lauren, *America, "fat," the fetus. Gendered agents: women and institutional knowledge*, compilado por Paul A. Boyle y Silvestra Mariniello, Durham, Duke, 1998.
- Bunster-Burotto, Ximena, "Surviving beyond fear: Women and torture in Latin America", en June Nash y Helen Safa (comps.), *Women and change in Latin America*, South Hadley, Mass., Bergin and Garvey, 1986.
- Caro Hollander, Nancy, *Liberation Psychology*, New Brunswick, Rutgers, 1997.
- Domínguez V., Rosario et al., *Salud y derechos humanos: una experiencia desde el sistema público de salud chileno 1991-1993*, Santiago, PRAIS (Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos), Ministerio de Salud, 1994.
- Dorfman, Ariel, *Death and the maiden*, Nueva York, Penguin, 1991.
- Feitlowitz, Marguerite, *A lexicon of terror: Argentina and the legacies of torture*, Oxford, Oxford, 1998.
- Franco, Jean, "Going public: Reinhabiting the private", en Mary Louise Pratt y Kathleen Newman (comps.), *Critical passions*, Durham, Duke, 1999.
- Graziano, Frank, *Divine violence: spectacle, psychosexuality, and radical Christianity in the Argentine "dirty war"*, Boulder, Westview, 1992.
- Gregory, Steven y Daniel Timerman, "Rituals of the modern state: The case of torture in Argentina", *Dialectical Anthropology*, núm. 11, 1986.
- Halberstam, Judith, *Skin shows: gothic horror and the technology of monsters*, Durham, Duke, 1995.
- Harvey, Penelope y Peter Gow (eds.), *Sex and violence: issues in representation and experience*, Londres, Routledge, 1994.
- Hurtig, Janice, *Coming of age in times of crisis: youth, schooling and patriarchy in a Venezuelan town*, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2006 (tesis doctoral de 1998), en prensa.
- Kirkwood, Julieta, *Feminarios*, compilado por Sonia Montecino, Santiago, Ediciones Documentales, 1987.
- Lagos-Pope, María-Inés, "Mujer y política en 'Cambio de Armas' de Luisa Valenzuela", *Hispamérica*, núm. 46-47, 1987, pp. 71-83.
- Lawyers Committee for International Human Rights (LCIHR), *Violations of human rights in Argentina: 1976-1979*, Ginebra, A Report by the LCIHR to the United Nations Commission on Human Rights, 1979.

- Lewis, Paul H., *The crisis of Argentine capitalism*, North Carolina, Chapel Hill, 1990.
- Loveman, Brian y Thomas M. Davies, Jr. (comps.), *The politics of antipolitics: The military in Latin America*, Lincoln, Nebraska, 1989.
- MacKinnon, Catherine, *Sex equality: rape law*, Nueva York, Foundation Press, 2001.
- Matear, Ann, "Desde la protesta a la propuesta: The institutionalization of the women's movement in Chile", en Elizabeth Dore (comp.), *Gender Politics in Latin America: debates in theory and practice*, Nueva York, Monthly Review Press, 1997.
- Ministerio de Salud, *Manual de apoyo técnico para las acciones de salud en violencia intrafamiliar*, Santiago, Publicaciones de Salud Mental, 1998.
- Moulián, Tomás, "A time of forgetting: the myths of the Chilean transition", *NACLA*, vol. 22, núm. 2, septiembre-octubre, 1998, pp. 16-22.
- Montecino, Sonia, *Madres y guachos*, Santiago, Cuarto Propio, 1991.
- Paley, Julia, *Marketing democracy*, Berkeley, California, 2000.
- Pratt, Mary Louise, "Overwriting Pinochet: Undoing the culture of fear in Chile", en Doris Sommer (comp.), *The Places of History: Regionalism Revisited in Latin America*, Durham, Duke, 1999.
- Radway, Janise, *Reading the romance: women, patriarchy, and popular literature*, Carolina del Norte, Chapel Hill, 1991.
- Reati, Fernando, "Argentine political violence and artistic representation in films of the 1980's", *Latin American Literary Review*, julio-diciembre, 1989.
- Scarry, Elaine, *The body in pain: the making and unmaking of the world*, Oxford, Oxford, 1985.
- Schild, Verónica, "Neo-liberalism's new gendered market citizens: the 'civilizing' dimension of social programmes in Chile", *Citizenship Studies*, vol. 4, núm. 3, 2000, pp. 275-305.
- Skurski, Julie, "The ambiguities of authenticity in Latin America: Doña Barbara and the construction of national identity", en Geoff Eley y Ronald Suny (comps.), *Becoming National: A Reader*, Nueva York, Oxford, 1996.
- Sommer, Doris, "Irresistible romance: The foundational fictions of Latin America", en Homi K. Bhabha (comp.), *Nation and narration*, Londres, Routledge, 1990.
- Taussig, Michael, "Culture of terror-Space of death. Roger Casement's Putumayo Report and the explanation of torture", *Comparative Studies in Society and History*, 26 de julio, 1984.
- _____, *Shamanism, colonialism, and the wild man: A study in terror and heal-ing*, Chicago, Chicago, 1987.
- _____, "Violence and resistance in the Americas: The legacy of the conquest", en *The nervous system*, Nueva York, Routledge, 1992.

- Taylor, Diana, *Disappearing acts: spectacles of gender and nationalism in Argentina's "dirty war"*, Durham, Duke, 1997.
- Valenzuela, Luisa, *Other weapons* (traducido por Deborah Bonner), Hanover, Ediciones del Norte, 1985. [*Cambio de armas*, Hanover, Ediciones del Norte, 1982.]
- Wilson, S.R., "Reseña de *Cambio de armas*", *Latin American Literary Review*, núm. 82, 1984, pp. 12-24.

MEMORIA DE LOS APARECIDOS
ALLENDE CON MAR (...) PINOCHET CON (...) ARX
CHILE, 2003-1973

M. Angélica Illanes O.*

ABERTURA

El signo del tiempo:
11 de septiembre de 1973-11 de septiembre de 2003

“El 11 Ahau es el que comienza la cuenta porque es el katún que transcurría cuando llegaron los extranjeros que vinieron del oriente cuando llegaron [y que hicieron] llorar al cielo y llenar de pesadumbre el pan de maíz del katún. Degollado será en su época Yaxal Chuen, Gran-mono-artífice, Ixkanyultá, Preciosa-garganta. Dispersados serán por el mundo las mujeres que cantan y los hombres que cantan y todos los que cantan [...] Árboles serán la comida, piedras serán la comida; estéril alimento, esto será lo que venga en el 11 Ahau [...]

”Termina el 11 Ahau Katún para que se asiente el 9 Ahau Katún [...] Entonces será que se lleve el agua y se lleve el pan de maíz del

* Doctora en Historia, Universidad Católica de Chile. Autora de *La dominación silenciosa. Productores y prestamistas en la minería de Atacama. Chile, 1830-1860*, Santiago, 1992; *Ausente señorita. El niño chileno, la escuela para pobres y el auxilio. 1890-1990*, Santiago, 1992; *En el nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia. Historia social de la salud pública. Chile: 1880-1973*, Santiago, Fundación Interamericana y ONG Colectivo Atención Primaria, 1993; *Poemario Popular de Tarapacá* (editado con Luis Moulián y Sergio González), Santiago, Editorial Lom y Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), 1998; *La batalla de la memoria: ensayos de nuestro siglo: Chile, 1900-2000*, Santiago, Planeta-Ariel, 2002. Su libro más reciente es *Chile des-centrado. Formación sociocultural republicana y transición capitalista (1810-1910)*, Santiago, Ediciones Lom, 2003. Agradezco a Carlos y Julieta Gho por su apoyo en la digitalización de las imágenes.

La invasión de la memoria

La batalla se ha desatado, provocando una vorágine de “hechos de memoria” que se agitan en busca de epicentro. Cuando creíamos poder capturar algunas de las hebras centrales del ovillo, surge una nueva irrupción de memoria, vomitando los restos de otro naufragio del pasado, borrando el camino de la ruta elegida. Actualmente los “hechos de memoria” emergen en Chile rompiendo el espacio-tiempo, asentándose apenas sobre las arenas movedizas de la continua producción de un nuevo presente desde las irrupciones críticas del pasado. Este texto se escribe sobre una playa que se borra y vuelve.

Desde el mareo de este vaivén interminable, a treinta años del golpe militar, los combatientes de la memoria toman posiciones. La *batalla de la memoria* consiste actualmente en un rayado de cancha, en la lucha por decidir “el lugar” donde se ha de desarrollar el combate; y por “lugar” entendemos el espacio de instalación escénica para la atracción de las fuerzas, de los conceptos y de los símbolos y donde se entabla la pugna por la hegemonía. En torno de la configuración y delimitación de este *lugar crítico* de la memoria se juega, para los distintos combatientes, la oportunidad de ganar para la sociedad en su conjunto la “razón” de su historia. Batalla significativa, considerando que nuestra historicidad es el único saber acerca de nosotros mismos.

Con el paso de los meses podemos identificar dos hechos significativos de esta batalla.

En primer lugar, asistimos a una nueva fase de la lucha de los derechos humanos violados, el momento en que su bandera logra instalarse en los templos de la ciudad (los palacios de Justicia, de Gobierno, del Congreso). Instalación estratégica, que es fruto de una lucha de treinta años del movimiento por los derechos humanos en demanda de justicia, y que es también resultado del oportunista *traspaso* de la “cuestión derechos humanos” desde el *movimiento civil* al *sistema político orgánico*, transformándose en una clave de la competencia partidaria. Hemos presenciado este año el espectáculo de la lucha por la apropiación política de la reparación del dolor. En una carrera de ocupación de escenario, cada partido —la derecha pinochetista a la delantera— y finalmente el gobierno, enarbolaron la bandera de su texto con su propia aunque semejante “propuesta de re-

paración”.¹ Deseo de apropiación que surge cuando la relación *dolor-reparación* se constituye en clave del control político de la narrativa de la utopía, en vista de la formulación ético-ideológica de la “futura sociedad del bien”: base legitimadora de la permanente pugna por el poder gubernativo.

La noche antes del llamado a paro de la Central Única de Trabajadores (CUT) fue el momento elegido para entregar, por cadena voluntaria de emisoras radiales y televisivas, la largamente esperada propuesta presidencial sobre violación de los derechos humanos. En su mensaje de 15 minutos, el presidente presentó un listado de medidas de reparación que enviará al Congreso Nacional, terminando su alocución con una frase de buena memoria: “porque, compatriotas míos, no hay mañana sin ayer”.² La formulación de este discurso de la preocupación institucional por el pasado vino a culminar los sucesivos actos políticos de apropiación de la narrativa de la utopía para el “justo gobierno de la nueva sociedad del bien”. Pero el mensaje como “instalación política” adquirió también el carácter de uso instrumental de la memoria de los derechos humanos con fines de distracción de la atención de la historia

¹ En su parte medular todas consideran la reparación económica a los familiares y la aceleración de los procesos judiciales de investigación a los militares acusados de violaciones. Sin embargo, la derechista UDI trata de cambiar la figura legal que permitía la apertura permanente de los procesos judiciales, proponiendo –¿a cambio?– una amnistía para los violadores de derechos humanos a partir de los años noventa, sacrificando el castigo del asesinato de su propio líder, Jaime Guzmán. Cabe hacer notar que la propuesta de la derecha se produce una semana antes que salieran a luz las declaraciones de un militar procesado actualmente por la justicia, declarando en torno de los fusilamientos, entierros y desentierros clandestinos de los detenidos en La Moneda el 11 de septiembre de 1973, produciéndose, así, la ruptura del “pacto de silencio” interno de las fuerzas armadas. La agitación política en el seno de éstas es actualmente pan de todos los días, una de cuyas expresiones es la fundación de un movimiento formado por los militares en retiro, con el fin de defenderse ante la arremetida judicial y el “estratégico retiro” de la otrora incondicional alianza política derechista a su causa.

² *Mensaje presidencial*, 12 de agosto de 2003. La propuesta de reparación del gobierno incluye: a) en materia de beneficios económicos, un aumento de 50% de las pensiones para los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos; una indemnización “austera y simbólica” para los torturados; beneficios para los familiares de las víctimas de las fuerzas armadas afectadas por la violencia política; b) en materia judicial, la agilización de los procesos judiciales, diferenciando las responsabilidades e incentivos para la entrega de información; c) con el objeto de educar en derechos humanos en vista del resguardo del “nunca más”, creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos y Libertades Públicas; d) en materia legal, adscribirse a las legislaciones de la Corte Penal Internacional y la Convención de Desaparición Forzada de Personas.

social real, constituyendo un nuevo acto de apropiación-expropiación: del pasado para negar el presente. Políticas de fractura de memoria o de violación del sujeto.

En segundo lugar, otro hecho significativo de esta batalla es la invasión de la memoria en todos los espacios de lo real social y cultural, produciéndose la ocupación de *este-presente* por un *otro-presente-pasado*. La “batalla de Chile” alcanza hoy un momento culminante: cuando la memoria se apropia de la historia y la historia se hace de memoria. Surgen así las condiciones propicias para la develación social de las claves secretas del *tabú*.

Al respecto, asistimos al momento de la apertura del libro de la Unidad Popular. Por una parte, sus páginas se abren con cuidado ritual, escuchándose, en postura ceremonial, la prohibida voz de los muertos, narrando las verdades que yacían soterradas. Emerge, grande, ante los ojos de nuestras hijas, la figura de Allende vivo, mítico, remeciendo la utopía de su palabra este presente, haciéndolas-haciéndonos temblar de nuevo. Lo ven los viejos de ahora con los jóvenes de ayer, los muertos de ahora con los vivos de ayer. Se teje la narración de un tiempo mítico, de una lucha de titanes, de la muerte del héroe en manos de los sacrificadores y del destierro de la humanidad, expulsada del paraíso por haber comido y repartido entre los mortales los frutos del árbol de los dioses.

Pero algunos han abierto las páginas del libro de la Unidad Popular arrancándolas de cuajo, con aquella obscenidad aludida. Acto memorable de dirigentes pedófilos, violadores de niños, que hoy día se “hacen la paja” arriba del escenario confesando los “errores” del pasado y tirando la cadena con el último semen de su juventud decrepita.

Lo mítico y antimítico, lo sacro y lo obsceno se conjugan en torno del tabú de la Unidad Popular.

En medio de esta vorágine de hechos de memoria que acaparan escenarios, pugna por alcanzar un espacio de realidad lo “presente-actual”. Pariente pobre y mesa del pellejo de los grandes actos conmemorativos, las demandas de la sociedad chilena real han quedado colocadas tras el biombo de los escenarios centrales de la memoria.

La intención de este texto es instalar aquí nuestro punto de mira. Nos inquieta la *relación* entre las “luchas de la memoria” y las “luchas de la historia social actual”. Nuestra hipótesis es que, a treinta años, está culminando en Chile una primera fase de la batalla de la memoria:

la fase de la lucha centrada en los muertos. Nos inclinamos a pensar que ahora comienza a anidar una segunda etapa de esta batalla: la de la lucha de los vivos cargando la memoria de la violación de los derechos sociales. Memoria de los derechos del pueblo y memoria de la violación: a treinta años. La batalla de Chile encuentra ya el camino del proyecto asesinado en los cuerpos: los muertos cobran vida.

Reconociendo en la actual sociedad real una tensión por ganar su propio lugar en la lucha social de la memoria, este texto desea exponer algunos rasgos de esta batalla de la memoria futura. Quisiéramos poder comprender cuáles son las memorias del pasado que viven en esta lucha de la sociedad del presente.

LA OTRA BATALLA DE CHILE

El afiche del Chile actual

Sobre la superficie de una puerta de ascensor se asoma y esconde, una y otra vez, en una simulada mecánica de movimiento, un afiche de funéres colores blanco, negro y morado. Atraviesa verticalmente el papel el cuerpo negro de Chile, cayendo como una lágrima o una estalactita carbonizada. Al costado derecho de dicho cuerpo, un ser humano, un chileno sacando un grito a toda boca, con el seño fruncido de su ira. Sobre su cabeza, a grandes letras, el afiche llama a la “¡Protesta Social!”, para un día de agosto. Más abajo, una leyenda indica una suerte de método de protesta: “¡Protesta con esperanza, protesta como en dictadura!” A continuación un listado de demandas: “Por la dignidad del trabajo; por salarios justos; por seguridad social para todos; por el derecho a la salud; por educación gratuita; por una democracia participativa; por un Chile justo y solidario; por los derechos del pueblo; por los derechos humanos; por viviendas dignas; por el respeto a las minorías, por la dignidad de nuestro pueblo”.³ Como convocantes aparecen una serie de agrupaciones articuladas que constituyen una “Coordinadora Nacional por la Protesta Social”.

³ Agradezco al estudiante Marcelo Olate por haberme entregado el afiche que había pegado con sus propias manos como propaganda del acto y paro del día 13.



Afiche de propaganda del paro del 13 de agosto

Las preguntas asaltan su lectura: ¿cómo podemos describir este afiche de país? ¿Sobre qué memorias está montado su texto? ¿Quién es y a quién representa el hombre del grito? ¿Cuál es su utopía?

Qué duda cabe. El afiche representa el ahogado grito del pueblo chileno actual. Expresa el desesperado intento de sacar la voz de ese grito; de revivir a un pueblo que ha olvidado la práctica de su sujeto. El afiche manifiesta la voluntad de hacer revivir a ese pueblo instalándolo en una doble trinchera de la memoria: 1) la de la experiencia de su máxima lucha (en dictadura), y 2) la de la experiencia de su máximo poder o ejercicio de sus derechos (en la Unidad Popular). A nuestro juicio, la nueva y principal batalla de la memoria en Chile se insinúa ya en este afiche y trata de la pugna por fundar una nueva utopía: la utopía de la ciudad de los vivos, de la ciudad de los luchadores, de los cantantes,

de los sabedores de su nombre y de su historia; la utopía de la “nueva ciudad propia”, de la ciudad habitada por el pueblo.

¿Dónde habita el pueblo en el Chile actual? ¿Cuál es la memoria de su habitar que aflora? ¿Cómo habitó en dictadura? ¿Cómo habitó la ciudad en la *Unidad Popular*? Es la pregunta de este texto.

“Puertas adentro” del Chile actual:
comedia de campamento

Sobre tierra rypiada se ha levantado gran cantidad de mediaguas de madera y zinc. En ella se albergan los pobladores que una noche de crudo invierno; avanzaron sobre el terreno precordillerano que se tomaron con banderas y carpas. Se trata de la toma más grande acaecida en las últimas décadas: unas 10 000 personas, en su mayoría parejas jóvenes con sus hijos pequeños, las que habían decidido dejar las piezas donde vivían de allegados. Los pobladores de la toma son actores conocidos: José, el dirigente, es Francisco Reyes, cuya mujer, una delincuente común recién salida de la cárcel, es actriz popularmente conocida, y cuyos hijos son los nuevos integrantes del elenco de teleserie nacional. Los pobladores, conscientes de la inestabilidad de su situación, se organizan desde la primera noche de la toma, en vista de resistir cualquier desalojo, por la policía, a instancias del dueño del terreno: un rico comerciante de ascendencia árabe. El gobierno, por su parte, declara que se trataba de un asunto entre privados.

Uno de los conflictos principales se desarrolla alrededor de José y su amante, la actriz Claudia di Girólamo, antigua y muy querida empleada “puertas adentro” de la familia propietaria del terreno de la toma, uno de cuyos miembros, el actor Francisco Melo, un “renovado”, tiene sentimientos, culpas y dudas respecto de la opción de desalojo. A pesar de la incertidumbre permanente que viven los pobladores, su firme decisión de quedarse en el sitio tomado les lleva a realizar una serie de acciones en vista de su autourbanización y mejoramiento de sus condiciones de vida: electrificación, construcción de una sede social y posta de primeros auxilios y una serie de demandas sociales a la municipalidad. Los nuevos pobladores son visitados por algunas personas interesadas en conocer su situación; entre ellas, la hija del dueño del terreno, la actriz Pilar Bascuñan, hija de la saliente ministro de Educa-

ción, la que se enamora perdidamente del hijo de José, el dirigente de la toma.

La vida cotidiana del campamento expresa el casi consolidado asentamiento de los nuevos pobladores: los niños yendo y viniendo de sus escuelas comunales; las mujeres cargando bolsas del supermercado aledaño cada fin de semana; el puesto de “mote con huesillos” instalado a la entrada, rodeado de mesitas con sillas plásticas y la infaltable señora de las empanadas y sopaipillas caseras; hombres se ven cada noche bajando del *bus* 337 a la entrada del campamento, portando un bolso de herramientas. Pero la mayoría de los jóvenes del campamento trabajan en la empresa del dueño del terreno “Espacio limpio”, donde se les capacita en “tecnología de punta”, especialmente a las mujeres, entregándoseles buenas oportunidades para “surgir”.

La combatividad del campamento se manifiesta ante cada amenaza de desalojo y a través de marchas al centro gritando su derecho a la casa propia y al reconocimiento legal de la toma, mientras se negaron a recibir a los candidatos, Lagos inclusive, en un abierto rechazo al clientelismo político. El conflicto finalmente se desató ante la revelación de que Pilar, la hija del dueño del terreno tomado, estaba embarazada del Jonathan, el hijo del dirigente de la toma; las familias “en conflicto de propiedad” quedan uterinamente entrelazadas.

A las pocas semanas, el gobierno anuncia, con la venia de los pobladores, que éstos serían reubicados en viviendas y el campamento convertido en parque. Todos, vecinos, pobladores, gobernantes, y especialmente la feliz pareja del Jonathan y la Pilar, disfrutarán viendo a su hijo jugar y correr entre las flores. Era el final feliz de la comedia *Puertas adentro*, que lleva como subtítulo: “Amor entre dos mundos”.

Sin esperar más trámites, el ministro de gobierno sobrevoló los aires y estableció el punto exacto para la construcción de las nuevas viviendas para los pobladores de la toma: en vecindad inmediata de su dirigente José, Francisco Reyes y sus colegas artistas del elenco de teleserie nacional. Al fin estarían reunidos habitando una misma ciudad, la realidad y la ficción. Pero dicha utopía virtual, al mero contacto de su potencialidad histórica ardió en llamas. Los artistas de Peñalolén alto levantaron la furia de sus banderas, sacando su habla y su cuerpo a escena televisiva, no ya como personajes, sino como habitantes de su utopía privada. Que la instalación de los pobladores de la toma en la vecindad de la “comunidad ecológica” donde residen los artistas vendría a

romper su estilo de vida, su utopía comunitaria, su ideario ecológico, su “modo de habitar”. Cuestionado el ministro, sonrió irónico en pantalla: “que no fueran los artistas tan clasistas”. “Para qué estamos con cosas —arremetió el periodista chascón Villegas en un debate televisivo—, no somos iguales”; y agregó que encontraba muy legítimo no querer vivir al lado de gente sucia y de malas costumbres. En efecto, “no son iguales”, opinó Patricia, empleada doméstica real, al ser interrogada por la revista *SurDA* respecto si tenía futuro la relación entre “el Jonathan” y la hija de los dueños del terreno. “Tienen distintas clases sociales, explicó Patricia, porque uno vive en el campamento y la otra vive en su casa del barrio alto.”⁴

Finalmente, y como expresión del estado de ánimo general, una mañana los transeúntes de la comarca pudieron leer un rallado de los pobladores en el muro de la avenida principal: “Contra las alzas, la comedia y la guerra, el campamento se organiza y resiste”. Luego, encima de este rallado, la consigna del momento, el llamado al paro de agosto: “En Peña el paro va”. A la entrada del campamento, sobre el techo del puesto del mote con huesillo, el gran anuncio blanco-azul de la empresa “Espacio limpio”.

A la luz de lo narrado, quizás podríamos diagnosticar que la memoria histórica de Chile sufre actualmente algunos síntomas de *psicosis esquizoide*, viviendo en un alucinante mundo de apariciones y voces de todos los tiempos históricos; entrando y saliendo, simultánea y fantasmagóricamente, de cualquier espacio territorial sin distinguir si es real, imaginario o virtual. Pensamos que la narrativa cultural del presente que vivimos se configura en trama de comedia, donde las contradicciones se intentan conciliar en una solución festiva, montada sobre escenarios de fantasía virtual. Se trata, a nuestro juicio, de una “memoria comedianta” que reubica la utopía moderna instalándola sobre un escenario teatral donde se monta la obra de la feliz reconciliación de los actores. Memoria de comedia o utopía virtual que levanta el vuelo hacia la síntesis feliz de las contradicciones, anestesiando las raíces del dolor histórico. Extravío identitario que podríamos denominar “antimemoria”. Sin embargo, esta antimemoria comedianta y esta “ciudad virtual” no pueden contener los afloramientos de la ciudad

⁴ M. Silva, “Puertas adentro. Hablan las que saben”, *SurDA*, núm. 40, agosto, 2003, p. 23.

real, la que se cuela apareciendo por todos los intersticios de su montaje, portando las voces y los rayados de las demonizadas “definiciones de clase”. Podemos, en fin, apreciar la manifestación de algunos actos que nos hablan de la persistencia de la memoria de un “sujeto”, cuya identidad se constituyó en algún “lugar” de la historia contemporánea. ¿Cuál es este “lugar” donde se desarrolló el sujeto histórico que vive en el sustrato de la ciudad virtual actual?

Puertas afuera del Chile actual:
en las “grandes alamedas”

“¡Y qué fue, y qué fue! Aquí estamos otra vez!” Aparecían por las calles laterales, alimentando sus afluentes el río humano de la avenida principal. Avanzaban, portando pancartas, al grito de “¡Vamos Chile, caramba, Chile no se rinde, caramba!” y del mítico “¡El pueblo, unido, jamás será vencido!”; “¡Avanzar, sin transar en el paro nacional!”. Los brazos en alto alzaban los textos: “UDI, Lagos, la pareja ideal para destruir a los trabajadores”; “Paro por más estabilidad laboral”; “No a las privatizaciones”; “Paro por justicia y castigo”; “Paro por el derecho a una casa digna”; “Paro por salud digna”; “¿Quién vive con \$11 500?”; “Presidente socialista para los capitalistas”. La columna avanzaba compacta por la Alameda de Chile, ocupando la ciudad; la rodeaban los 2 800 efectivos policiales sacados por el gobierno a las calles. “Los trabajadores no se retiren de la Alameda. Las calles de la ciudad son del pueblo”; “Hoy es el inicio de la movilización nacional, que debe continuar con muchos paros más, hasta que las autoridades entiendan quiénes somos los trabajadores de este país”, voceaban los micrófonos portátiles. A las 12:40, represión en la Alameda; comenzaron las carreras escapando de los gases y lanzaguas, “¡Asesinos!”, “¡Asesinos!”, “Pacos culiaos, hambrientos descalzados!”, “¿El ‘profe’ dónde está? El ‘profe’ está en la calle”... En medio de la carrera los grupos se reagrupaban y gritaban rabia: “Ésta es la democracia concha ’e su madre que tenemos. Estamos igual que en dictadura”; “¡El pueblo, unido, jamás será vencido!”; “¡Con violencia no conseguimos nada, estemos tranquilos, compañeros!”. En la carrera de repliegue, la infaltable recolecta de panfletos:



Pancartas del 13 de septiembre



¿Quién es este sujeto que aparece en plena Alameda 2003? ¿Qué memorias habitan en su cuerpo? Nos queda la impresión de la presencia de un fenómeno de maltrecha encarnación en el pueblo de la Alameda del Chile actual, de una memoria histórica fracturada, múltiple, enferma, dolorosa. Una memoria hecha a retazos, construida con los afloramientos de la utopía de un revolucionario de boina y prensa de cien años, levantando, al fin, el grito anarquista de su triunfo; de fragmentos de una memoria de 60 años, demandando la utopía ciudadana y frente-populista de los derechos de pan, techo, abrigo, educación y salud; de pedazos de la memoria de un sujeto de 30 años, gritando la utopía de la fuerza de su unidad y su poder popular; de la memoria a medio rostro de un sujeto de 20 años, dispuesto a seguir luchando, como entonces, con su boca cerrada bajo un pañuelo y la bandera de su utopía de patria flameando en el fusil.

¿Quién es y qué le ocurrió a este pueblo que pugna por reaparecer hecho a pedazos?

EN “UN LUGAR DEL NUEVO MUNDO”.⁵

Si es muy justo que los países desarrollados pisen
la luna, es más justo aún que pongan los pies en la tierra
y vean las injusticias, el hambre, la miseria.
Salvador Allende

La ciudad de las mujeres

Sólo se ve al descubierto un desnudo y frío bloque de mármol. El busto que sostenía sobre su peso está amortajado con un sayo negro. No ha sido derribado por martillo alguno, no yace dentro de una urna; se mantiene erecto, a modo de un pene *encondonado*, listo para lanzar su proyectil de semen, detenido semen en el sayo de caucho tejido para su ausencia por sus otrora servidores, bajo el que chorrea la censurada obscenidad de su deseo.⁶

⁵ T. Moro, *Utopía*, Madrid, Alianza Editorial, 1984, p. 105.

⁶ “El sayo que enoja. Busto de Hirmas en la planta que fundó”, Santiago, *Ercilla*, 1971.



“El sayo que enoja. Busto de Hirmas en la planta que fundó”
(*Ercilla*, 1971, p. 34)

En mangas de camisa, pelo negro abundante y barba crecida, instalado tras un púlpito de fabricación sindical, el subsecretario de economía, Óscar Garretón, después de haber procedido al “descerrajamiento” de oficinas, cajas fuertes y escritorios (“tuvimos que hacerlo para evitar la desaparición de documentos vitales”, explica uno de los jefes del sindicato, mientras vigila a la puerta de la industria requisada), anunciaba ante los trabajadores, el cumplimiento del programa del gobierno, realizando el mandato histórico de expropiación de una de las empresas descalificadas como “monopólicas” y, en tanto tal, obstaculizadora del desarrollo productivo nacional.

Copando la amplia entrada de la fábrica, caminando resueltas, el rostro erguido, un grupo de trabajadoras y sus hijos atraviesan el portal del tiempo. Sobre su frente, atrás, el nombre de la casa que ahora regentan, iluminada con el resplandor de la nueva tarde.⁷



“Control diferente en puertas de planta Yarur. Grupo de operarios a la hora de cambiar turnos”. (*Ercilla*, 1971, p. 34)

“Ellos (los patrones) olvidaron que nosotros también tirábamos la carreta. Palacios y *Cadillac* para ellos, pequeñas mejoras para nosotros. ¿Cree Ud. que haya tanta diferencia entre las personas?”⁸

No se sabe qué acarrear tirando del travesaño de una carreta improvisada. Semejan, sí, un par de bueyes contentos por primera vez de su trabajo. Buenos muchachos, peinados y vestidos a su moda, están poniéndole el hombro a los “trabajos voluntarios”. Transitan a músculo firme por el enterrado pasaje de un campamento construido de mediasguas, seguidos por los niños de la población y contemplados por una sonriente mujer, iluminado el rostro por el sol de la nueva mañana.⁹

Al fondo, sobre el horizonte de mar, el Palacio Cerro Castillo, la casa presidencial de veraneo en Viña del Mar, rodeada de pinos y palmas. En primer plano, 27 niños chilenos elegidos mejores alumnos entre las escuelas de cada una de las provincias del país. En ropa veraniega, sobre el pasto verde, de pie, bañados de aire y calor.

⁷ “Industria textil. El ocaso del imperio”, Santiago, *Ercilla*, 1971.

⁸ *Idem*.

⁹ “Trabajos voluntarios”, Santiago, *Ercilla*, Cartas al Director, semana del 9 al 15 de junio, 1971, p. 5.



“Trabajos voluntarios” (*Ercilla*, 1971, p. 5)



“Solo promedio seis en Cerro Castillo. De todas las regiones del país para integrarse al mañana” (*Ercilla*, 1971, p. 45)

“Esto es un sueño. Nunca había venido a Viña. Mi papá es carpintero y por allá el trabajo es muy malo.”¹⁰

“Mi padre trabaja en el Matadero Portales. Somos cinco hermanos y ayudamos en el negocio. Estoy muy emocionado con este premio y cuando sea grande voy a ser mecánico, para agradecer este estímulo”.¹¹

¹⁰ Roberto Figueroa, 13 años, de Vallenar. *Idem*.

¹¹ Carlos Zúñiga, 14 años, de Valparaíso. *Ercilla*, núm. 1851, 12 de enero de 1971, p. 45.

“Nunca había visto una casa tan bonita ni había paseado tanto. Allá en La Serena yo trabajo en la feria, ayudándole a mis hermanos, porque mi mamá es viuda. Me gusta leer la enciclopedia *Lo sé todo* y jugar al fútbol. Me vine en un *bus* Choapa y mi mamá me dijo que me portara bien. Nunca había visto televisión y me gusta porque me vi a mí mismo el otro día.”¹²

Estas imágenes constituyen, a nuestro juicio, una expresión simbólica del contenido y significado histórico de la experiencia de la Unidad Popular. Por una parte, la “expropiación o la negación del otro”; es decir, del opuesto factor de la contradicción o el “burgués”; por otra parte, la “construcción o la afirmación histórica” del otro; es decir, del opuesto factor de la contradicción o la “trabajadora”. La Unidad Popular fue la instalación en Chile de ese memorable momento de la dialéctica, cuando la esclava se levanta sobre el cuerpo deseante del amo. Levantamiento de su rostro al filo de la luz, levantamiento de sus hijos al poder.

La “democracia del proletariado”

El programa de gobierno de la Unidad Popular sintetizaba, en una frase, la narrativa de su utopía: El “triumfo popular abrirá, así, el camino hacia el gobierno político más democrático en toda la historia del país”. ¿En qué consistía esta máxima democracia? En primer lugar, el gobierno popular garantizaría el ejercicio de los “derechos democráticos” y “las libertades sociales e individuales de todos los sectores de la población” (libertad de trabajo, de palabra, de prensa, de reunión, la inviolabilidad del hogar, el derecho de asociación).¹³

Con el fin de poner esto en práctica, el gobierno llamaría al pueblo a participar en la toma de decisiones en todos los niveles del aparato público y administrativo nacional (instituciones de seguridad social, empresas, etc.), donde tendrían directa representación los trabajadores manuales y de cuello-corbata, extendiéndose el gobierno popular hacia

¹² Camilo Guzmán, 11 años, “estudia en la Escuela núm. 50 de La Serena, por sus votaciones ha sido considerado el mejor alumno de la educación básica de todo el país”. *Idem*.

¹³ Unidad Popular, “The Popular Unity Program”, en A. Zammit (comp.), *The Chilean road to socialism*, Inglaterra, University of Sussex, 1973, pp. 262-263.

toda la población organizada. “Ésta es nuestra noción de ‘gobierno fuerte’, completamente opuesto al de la oligarquía e imperialistas que identifican la autoridad con el uso de la coerción contra el pueblo.” Por su parte, a los trabajadores se les garantizaría el derecho al trabajo y a la huelga, y a todo el pueblo el derecho a una educación apropiada, “con pleno respeto de todas las ideas y creencias religiosas”, garantizando la libertad para practicarlas. Por otra parte, el gobierno popular procedería a la descentralización de la administración sobre la base de una “planificación democrática y eficiente”, en vista de la eliminación de la burocracia centralizada, reemplazándola por una efectiva “coordinación entre todas las partes de la administración”. Lo que había quedado en letra muerta en la Constitución de 1925: “las Asambleas Provinciales deben comenzar a operar”, mientras la estructura de las municipalidades sería modernizada, contando con el financiamiento y el poder necesario para resolver los problemas de los habitantes de sus localidades, en coordinación con las “juntas de vecinos”, las que a su vez ampliarían su capacidad de autogestión y participación. Todo esto era la puesta en práctica de una “nueva filosofía”, en la que el pueblo alcanzara “real y efectiva participación en los diferentes organismo del Estado”.¹⁴

Respecto del cuerpo policial, éste debía ser reorganizado, de manera que “nunca más pudiese ser usado como una fuerza represiva contra el pueblo”, preocupándose, en cambio, de protegerlo contra el comportamiento antisocial; el sistema carcelario, en tanto uno de los peores aspectos del sistema judicial, debía ser radicalmente transformado.¹⁵

Así, en un solo acápite que titulaba “el fortalecimiento de la democracia y el progreso de la clase trabajadora”, la Unidad Popular escribía la narrativa de su Utopía: la Democracia, ubicada, también, como la *Utopía* de Moro, en un “lugar del Nuevo Mundo”. Luego de este planteamiento democrático, el programa de la UP pasaba a tratar las grandes transformaciones que se realizarían en el aparato del Estado, en la economía, la sociedad y la cultura, empapadas todas de lo que podríamos llamar “democracia del proletariado”.

En marzo de 1971 el presidente Allende se sentía seguro de poder garantizar ante la historia su opción y fórmula política para construir la nueva sociedad de la justicia: en democracia. En sus discursos desa-

¹⁴ *Ibid.*, pp. 262-263.

¹⁵ *Ibid.*, p. 263.

fiaba a que se le dijese en qué otro país “en la historia del mundo” se había podido realizar una drástica reforma agraria, estatizar la banca y las empresas estratégicas sin incidentes graves. “Estamos haciendo una revolución verdadera y, hasta ahora, sin un cototo”, había dicho en Punta Arenas. En tanto experiencia única en la historia, invitó a los periodistas de todas las naciones del mundo a asistir a las elecciones municipales de abril y a entrevistarse con todos los sectores políticos y gremiales del país, con el fin de “certificar” el carácter “democrático” de la revolución chilena.¹⁶

En dichas elecciones municipales de abril de 1971 la Unidad Popular recibió el “espaldarazo” electoral del pueblo. De 36.3% obtenido en las elecciones presidenciales, la coalición de gobierno subió a 49.5% (contra 48.2% de la oposición).¹⁷ Dicho triunfo fue de alguna manera preparado por la reforma constitucional de 1970 del ex presidente Frei, la que amplió la base electoral del país al otorgarle derecho a voto a los mayores de 18 años y los analfabetos. Por otra parte, dicha reforma vino también a profundizar la democracia política al quitar todas las restricciones que en la Constitución de 1925 hacían imposible el plebiscito, estableciéndolo para cualquier clase de discrepancia entre el parlamento y el ejecutivo sobre un proyecto de reforma constitucional. Según Frei, “la reforma parte del principio de que el poder constituyente pertenece, en una democracia, al pueblo y que éste es el llamado a pronunciar la última palabra”.¹⁸

Arada la tierra para la democracia y con el agregado electoral de unos 50 000 votantes,¹⁹ la Unidad Popular contó con el apoyo de la mitad del electorado del país; una mayoría sin duda bastante más sólida que la inicial como para poner en marcha su proyecto de “democracia

¹⁶ L. Hernández P., “Operación verdad”, Santiago, *Ercilla*, núm. 1859, semana del 3 al 9 de marzo, 1971, p. 9.

¹⁷ L. Hernández P., “Lección de una elección”, Santiago, *Ercilla*, núm. 1864, semana del 7 al 13 de abril, 1971, p. 8.

¹⁸ L. Hernández P., “Operación verdad”, *op. cit.*, p. 24.

¹⁹ Según la reforma constitucional de 1970, propuesta por Eduardo Frei y Alejandro Silva B. Esta reforma elevaba a 50% la población nacional con derecho a voto, “lo que representa uno de los índices más elevados del mundo”. Si bien se debieran haber incorporado a los registros electorales 1 400 000 personas más, de las cuales 800 000 eran jóvenes entre 18 y 21 años, por motivos de “distracción parlamentaria” a los mayores de 18 sólo se les dieron 27 días para inscribirse, mientras aún no se redactaba el reglamento para los analfabetos. Véase H. Mery, “El nuevo rostro de la Constitución”, *Ercilla*, núm. 1864, 1971, p. 21.

del proletariado”. A partir de este momento se consolidaba en Chile, no sólo a los ojos de Allende, la vía y opción electoral y democrática del cambio estructural. “El Dr. Allende tiene todo el derecho a sentirse satisfecho. Su línea se impuso tanto en la UP como en la oposición. Con los votos obtenidos por los suyos y sus adversarios, crecerá su autoridad para caminar ‘hacia la construcción del socialismo’, pero respetando la tradición democrática del país.”²⁰

Gran triunfador de la jornada electoral municipal de abril, el Partido Socialista “que del quinto lugar en 1969 pasó al segundo”, después de la Democracia Cristiana, acordó en el “Pleno de la Victoria”, instar al presidente Allende a llamar a plebiscito al pueblo con el fin de disolver el congreso y llamar a nuevas elecciones para instalar la Asamblea Popular unicameral, proyecto que formaba parte del programa de la Unidad Popular. Que el resultado electoral era un mandato del pueblo a construir el socialismo mañana y que “con el actual Congreso –de clara y desafiante mayoría de oposición– Allende se encuentra con las manos atadas. No pudo sacar sus Tribunales Vecinales; la reforma constitucional para la nacionalización del cobre camina con montura de tortuga. Se necesitarían años para pensar en una reforma integral a la Previsión. La administración del Estado está trabada por un número infinito de leyes que amparan la burocracia y la inoperancia. Lo mismo el sistema tributario”.²¹

En lo que fue calificado como su “Manifiesto Revolucionario”, en su mensaje presidencial del 21 de mayo de ese año 1971, Allende no habló de lo ya realizado, sino del futuro inmediato. Cambiando la postura de su cuerpo –desechando el traje de etiqueta y sentado, “sólo se puso de pie para rendir homenaje a la Marina”– Allende planteó la necesidad de avanzar con paso rápido hacia los cambios estructurales en democracia. Que Chile no necesitaba la “dictadura del proletariado”, como Rusia o Cuba, que no habían conocido la libertad. Chile, en cambio, venía caminando largo trecho en su camino democrático, que ahora daría paso a la integración de las grandes mayorías nacionales. Reiteraba que el sendero hacia el socialismo se haría dentro de un Estado de Derecho, con pluralismo ideológico y tolerancia religiosa. Sobre estas bases, era necesario ir a la reforma de la Constitución Política

²⁰ L. Hernández, “Lección de una elección”, *op. cit.*, p. 9.

²¹ L. Hernández P., “PS: hacia el plebiscito”, Santiago, *Ercilla*, núm. 1866, semana del 21 al 27 de abril, 1971.

“para amparar los derechos y conquistas de las mayorías”; si ello le era negado, llamaría a plebiscito para votar la disolución de las cámaras y el establecimiento de la Asamblea del Pueblo, con cámara única donde además de la representación política, tendrían cabida por derecho propio los rectores de las universidades, los dirigentes de gremios de trabajadores, empresarios, estudiantes e intelectuales, así como los ex presidentes de la república.²²

Es éste un tiempo inverosímil, que provee los medios materiales de realizar las utopías más generosas del pasado. Sólo nos impide lograrlo el peso de una herencia de codicias, de miedos y de tradiciones institucionales obsoletas. Entre nuestra época y la del hombre liberado en escala planetaria, lo que media es superar esta herencia. Sólo así se podrá convocar a los hombres a reedificarse, no como productos de un pasado de esclavitud y explotación, sino como realización consciente de sus más nobles potencialidades. Éste es el ideal socialista.

¿Cómo devolver al hombre, sobre todo al joven, un sentido de misión que le infunda una nueva alegría de vivir y que confiera dignidad a su existencia? No hay otro camino que apasionarse en el esfuerzo generoso de realizar grandes tareas impersonales, como autosuperación de la propia condición humana, hasta hoy envilecida por la división entre privilegiados y desposeídos.

En términos más directos, nuestra tarea es definir y poner en práctica, como la vía chilena al socialismo, un modelo nuevo de Estado, de economía y de sociedad, centrado en el hombre, sus necesidades y aspiraciones. Para eso es preciso el coraje de los que osaron repensar el mundo como un proyecto al servicio del hombre. No existen experiencias anteriores que podamos usar como modelo; tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social, política y económica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo como para la creación socialista.²³

Mucho se ha debatido y escrito en torno de la “vía chilena al socialismo”; el acento puesto, en general, en la democracia como una “ruta”, “un camino”, una “transición” hacia otra cosa que no sería ella sino algo otro, diferente. Nuestra propuesta es ver, por el contrario, el ideario democrático de Allende como un fin en sí mismo y como una

²² L. Hernández P., “Allende: Manifiesto Revolucionario”, Santiago, *Ercilla*, núm. 1871, semana del 26 de mayo al 1 de junio, 1971, pp. 8-10.

²³ Citando a Allende en su mensaje presidencial del 21 de mayo de 1971, Óscar Waiss, “El mensaje del mensaje”, Santiago, *Ercilla*, núm. 1 872, semana del 2 al 8 de junio, 1971, p. 14.

nueva formulación utópica que identificamos como la “democracia del proletariado”, por oposición manifiesta a la “dictadura del proletariado” formulada por el marxismo.

Nueva narrativa que Allende ofrecía a Chile no como un libro cerrado, cifrado y concluido, no como una biblia a ser predicada, no como un catecismo a ser aprendido, no como un manual para ser aplicado, sino como un cuaderno abierto para ser escrito por todos, colectivamente, en la medida que fuésemos capaces de situarnos a la altura de aquellos que “osaron repensar el mundo como un proyecto al servicio del hombre”. Allende nos invitó a la tarea y desafío de asumir, los chilenos, la escritura de la nueva narrativa utópica en este nuestro largo país, entre mar y cordillera, apenas “un lugar del Nuevo Mundo”; pero un “nuevo lugar” para pensar lo viejo, para criticar, desde lo local, concreto, particular, las añejas estructuras de lo central-universal. Allende, adelantándose a la caída de los grandes muros y de los viejos paradigmas, nos invitó a hacer el acto de emancipación histórica y epistemológica de descentrarlos, haciéndonos el llamado a la reinención de la escritura utópica para la fundación de la “ciudad democrática”. Demasiado, quizás, para este pequeño pueblo que eligió como su cuna.

Pero había signos de que no era, quizás, demasiado, o de que al menos una importante porción de los habitantes del país estaban dispuestos a tomar el lápiz y el cuaderno para la nueva invención socio-poética de Chile. Ésta fue, sin duda, la lectura que Allende y su partido hicieron de las elecciones de abril. Pero mientras el partido le instaba a pasar el lápiz de la nueva narrativa directamente al pueblo, convocándolo al plebiscito de los cambios, Allende, consecuente con la propia narrativa democrática que él con sus propias manos escribía cada día, invitó a los viejos amos y señores a hacer “lo inverosímil”, tal como era aquel “un tiempo inverosímil, que provee los medios materiales de realizar las utopías más generosas del pasado”; como llegar a la Luna, por ejemplo. Más cerca y más lejos aún que la luna, más hermosa aún era la Tierra, donde habitaban el hombre y la mujer que todavía estaban a la espera de las fuerzas de la “autosuperación de la propia condición humana, hasta hoy envilecida por la división entre privilegiados y desposeídos”.

Tenía Allende la permanente vocación de despertar conciencias y la secreta esperanza de remecer la más dura de todas, la más “inverosímil”: la conciencia de clase de los señores. Aquí se ubicaba el talón de

Aquiles de su rebelión epistemológica: la “conversión de los señores” iba contra todos los principios de la dialéctica marxista. Rebeldía ideológica de la cual dependía en gran medida la edición histórica de su nueva utopía democrática.

¿Cuáles eran las bases de sustentación de esta rebeldía allendista? Sin contar con referentes ideológicos ni con experiencias históricas concretas, queda la impresión de que Allende era un loco y apasionado inventor de lo político o un rebelde sin causa. Algo de esto hay; sin embargo, las claves posibles para la comprensión de la osadía de Allende de pretender construir la nueva ciudad de su utopía con la propia “colaboración” de los señores están a la vista. Su referente más directo es sin duda la lectura que hacía de la propia *historia de Chile*:

Nuestro país ha pasado por una larga lucha. Ha ido más allá que la mayoría de los demás países latinoamericanos en su evolución democrático burguesa. Chile es también característico por su estructura institucional, la que, con sólo breves interrupciones, se ha mantenido por muchos años. El congreso chileno, del cual yo he sido miembro por 27 años y del cual fui presidente del senado, ha tenido casi 160 años de vida ininterrumpida. Chile es, yo creo, uno de los tres países en el mundo con parlamentos que datan de más de 150 años. Esto indica un cierto grado de estabilidad de nuestro desarrollo institucional. En el marco de este proceso democrático-burgués, Chile, más que otros, ha alcanzado un alto grado de tolerancia política; sin embargo, desde el punto de vista económico y social, las características del país son más o menos comparables con los de otros países dependientes de América Latina y otros continentes.

El proceso chileno, que culminó en la victoria popular del 4 de septiembre de 1970 [...] tiene sus raíces en 1938 cuando Chile fue uno de los tres países en el mundo donde las fuerzas revolucionarias conducidas por los partidos socialista y comunista, se unieron a la pequeña y mediana burguesía para formar lo que entonces se llamó el *Frente Popular*. Dimos la batalla y ganamos, eligiendo a Pedro Aguirre Cerda –ilustrado profesor y estadista– el 25 de octubre de 1938. Nuestro programa en aquellos días era esencialmente humanitario, definido en tres palabras: pan, techo y abrigo. Este simple programa movilizó las masas y abrió la victoria popular.

Sin embargo, los líderes de aquel tiempo, yo incluido –fui ministro de Salud en el Frente Popular– plantearon este programa sin darse cuenta plenamente del significado de ofrecer más pan. Porque el problema del pan es el problema de la harina. El problema del vestido [...] y de techo, ambas necesidades básicas, está estrechamente ligado al desarrollo indus-

trial que es el único que puede satisfacer las necesidades básicas de las familias [...]

La diferencia fundamental entre el proceso en 1938 y 1970, es que en 1938 fue un partido burgués –el partido Radical– quien mantuvo el mayor poder, mientras que hoy día ningún partido solo tiene supremacía en el seno de la Unidad Popular [...]. Aún más, el programa que divisamos en 1969 para llevar a cabo la revolución y una nueva sociedad sobre las bases del pluralismo, democracia y libertad, fue diferente de aquel presentado en 1938. Ahora tenemos pluralismo externo e interno, tanto es así que tenemos seis movimientos y partidos que constituyen la Unidad Popular. La democracia es necesaria, pero debe ser una democracia más amplia y efectiva, puesto que en el pasado era esencialmente el privilegio de un grupo restringido que siempre había detentado el poder. Debemos transformar el ideal abstracto de libertad en un hecho concreto.

La gente habla de “la vía chilena”, el “camino chileno al socialismo”. Lo que el pueblo chileno está haciendo no ha sido aún hecho en otros países. En nuestro modelo político, comenzando por el pluralismo, la democracia y la libertad, queremos usar el marco institucional burgués para llevar a cabo los cambios en el ámbito político, económico y social que el país demanda y necesita y para construir el socialismo. En el caso chileno el uso de las instituciones legales es posible, porque ellas están abiertas a la posibilidad del cambio. Fue usando estas instituciones burguesas que, en primer lugar, llegamos al gobierno y estas mismas instituciones nos han permitido alcanzar algunos de los objetivos que nosotros mismos hemos señalado.²⁴

Es decir, si bien no existían referentes históricos de un modelo de “democracia del proletariado”, era a los ojos de Allende la propia experiencia del proceso histórico chileno la que garantizaba la viabilidad y posibilidad de la nueva narrativa política. ¿Cuál es el contenido ideológico de su lectura de la historia de Chile? A nuestro juicio, Allende realiza una lectura “liberal-conservadora” de nuestro proceso histórico, centrado principalmente en la historia de sus “instituciones”, las cuales le otorgarían la fisonomía propia a Chile, su identidad y su diferencia latinoamericana; que concibe el cambio como un proceso progresivo de apertura y ajuste de las instituciones ante el desarrollo histórico de la sociedad, mientras que la ruptura histórica de esta línea de continui-

²⁴ Salvador Allende, Discurso de apertura de la mesa redonda organizada a fines de marzo de 1972 por Odeplan. Véase UP, “The Popular Unity...”, *op. cit.*, pp. 17-19. El texto extraído es traducción mía.

dad institucional es considerada como una “excepción” puesta entre paréntesis.

No obstante, el propio Allende ha realizado en el seno de estas instituciones su propia experiencia política como socialista. Como ministro del gobierno frente-popular y como parlamentario por casi tres décadas encarna la propia apertura histórica y potencial de dicha institucionalidad. Qué duda cabe: una lectura liberal-conservadora de la historia de Chile no le quita su “realidad”. Sin embargo, un marxista, al leer la historia no la lee desde las instituciones, sino desde las luchas y contradicciones de la sociedad. Allende, a nuestro juicio, si bien hacía buen “uso” práctico del marxismo, no *era* un marxista.

Con los ingredientes de su pertinaz rebeldía ideológica y epistemológica, de su profundo compromiso histórico con el pueblo, de su lectura institucional de la historia de Chile y su utilización del marxismo para la transformación económico social, Allende buscaba escribir, con la mano de todos y al calor de la puesta en marcha del cuerpo y el canto popular, la narrativa de su nueva utopía: la “democracia del proletariado”. Éste fue su sueño, su proyecto, su destino.

Fue también nuestro sueño y nuestro deseo. Incorporando nuestro canto, le seguimos.

“¡Venceremos, Venceremos! Mil cadenas debemos vencer, venceremos,
venceremos”...

“¡El pueblo, unido, jamás será vencido! ¡El pueblo, unido, jamás
será vencido!”²⁵

“Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”, dijo Allende al morir.²⁶

La “dictadura de la burguesía”

Con el bombardeo de La Moneda se hizo cenizas la lectura liberal conservadora de la historia de Chile, junto con lo que se había alcanzado a escribir de la utopía de la “democracia proletaria”. Marx renacía con

²⁵ Canciones consignas de la época de la Unidad Popular.

²⁶ Frase fragmento del discurso de Allende en La Moneda, poco antes de ser bombardeada y de quitarse la vida.

toda la fuerza de su verdad realizada históricamente por mano militar. Pinochet, el incomprensible “traidor”, no era sino el propio engendro de la teoría hegeliana y marxista de la historia; surgió de las propias entrañas del rabioso oleaje de las contradicciones desatadas, realizando las órdenes del mandato superior de la dialéctica. Pinochet, como perfecto aprendiz de guión, había de desempeñar su rol histórico: ser el “brazo armado de la burguesía”.

Por su parte, la burguesía chilena era la verdadera encarnación de la teoría de las clases de Marx, su perfecta discípula. La burguesía chilena revelaba la verdad de la dialéctica de la lucha de clases, alcanzaba el clímax de su conciencia de sí y apropiándose del histórico destino manifiesto señalado por Marx, se disponía a realizar, por la vía armada, su propia revolución. Perfecta correlación entre la teoría y la práctica.

Revolución impuesta a través de la “dictadura de la burguesía”. Una dictadura totalitaria, encargada la administración del gobierno a la nomenclatura militar y sus órganos de inteligencia, que arrasaron los cuerpos de los disidentes escondiendo su canto en las cuevas y guardias del silencio.

A través de su encarnación de Marx en la historia de Chile, la burguesía ha realizado, al fin en Chile, su revolución: el capitalismo triunfante. Todas las fases anteriores fueron el camino de su transición, llena de obstáculos, de intervenciones legales, de interferencias izquierdistas y de prepotencia laboral.

Sembrado y regado con la sangre de su negación del “otro”, el modo de producción capitalista en Chile fue brotando y desplegándose en toda su figura histórica. Completando la otrora inconclusa apropiación privada y la mercantilización de todos los medios de producción, desplegando un inmenso trabajo en el campo de la generación de una amplia reserva de mano de obra, peonizando a los trabajadores y la clase media, quienes trabajan por “uva cortada” y “clase hecha”, arrojando a la basura todas las legislaciones sociales escritas, descargando al Estado de su compromiso social, encargándose a los pobres a la filantropía y al municipio, ¡que viva el padre Hurtado y el alcalde Lavín!

Sí, la burguesía chilena ha sabido apropiarse de Marx, para invertirlo, para ponerlo patas arriba, para realizar el camino histórico necesario del paso del socialismo al capitalismo.



Imagen de la revista *Nueva Sociedad*, núm. 66, mayo-junio 1983.

Pero no bastó con esconder el canto de los cuerpos muertos. En carnaval nocturno de cacerolas, barricadas y piedras, el pueblo desplegó toda su energía en la protesta. Se desató la esperanza, se despertó el apasionado deseo *democrático* o el mandato histórico del proceso político chileno. Revivió el canto en los hijos:

El pueblo unido jamás será vencido
 El pueblo unido jamás será vencido
 Jamás será vencido
 Jamás será vencido

Reconstruyendo la historia de nuestra Legua
 Vida, arte y obra de un pueblo sin tregua
 Vieja, Nueva y Emergencia
 Legua, Legua York.
 Dando su creencia, creencia creando
 Es un pueblo que viene recordando.
 Que han pasado abuso militar, torturadores
 Señores con grado masacrando a héroes

El pueblo sin honores
Muriendo en las calles.
[...]

Después de muchos años aún sigo la lucha
Muchos, muchos años y el rico aún abusa
Explota al pobre con pegas miserables
Con crisis inventadas
Nos matan con técnicas impensables, torturan
Abusos de poder
Por ser de una pobla nos quieren joder.
[...]

Somos la saga que continúa la revolución
Contar lo que pasó esa es mi misión [...]

Vida vida eterna
Tengo en mi conciencia
Quiero que mi pueblo
Se una más y crezca [...]

El pueblo unido jamás será vencido
El pueblo unido jamás será vencido
El pueblo unido jamás será vencido
El pueblo unido jamás será vencido

*Legua York*²⁷

Es el canto y la memoria de los aparecidos.

EPÍLOGO

Al finalizar este ensayo la batalla de la memoria sigue desatada en Chile. Ha copado los espacios y sus rincones. Todos los combates fluyen hacia un epicentro: Allende. Su grandeza se agiganta, su palabra se es-

²⁷ Red de Organizaciones Sociales de La Legua, *Memoria de la dictadura en La Legua. Relatos, historias, cuentos, poesía y canciones de su gente*, Santiago, ECO, Educación y Comunicaciones, 2001, pp. 67-68.

cucha, la narrativa de su utopía se divulga. “El legado de Allende sigue siendo nuestro norte: realizar los cambios estructurales en democracia y libertad. Eso es lo que aún nos inspira.”²⁸

Sus detractores aún le temen; se revuelven los dedos en las llagas, sangran los complejos de culpa, se rechaza asistir a conmemorarlo al Senado y La Moneda. Se denuncia la “campaña de allendización” de la sociedad.²⁹ Allende ha vuelto.

Una pregunta se repite ante las cámaras televisivas: ¿Por qué ocurre este verdadero “fenómeno conmemorativo” ahora? ¿Por qué no a los 10, a los 20, sino a los 30 años?

La respuesta la obtuve hace apenas unos días, en plena intemperie, de noche, en la calle, ante la casa de tortura José Domingo Cañas. Al estrado levantado con el esfuerzo de las anónimas guardianas de la memoria de esa casa, subió un joven de barba muy larga, patriarcal, de frente amplia y en paz. Su palabra, tranquila, pausada, surgió a raudales; nos habló mucho tiempo, nos enseñó muchas cosas de su vida y su destino. En un momento dijo (más o menos) así:

Hasta hace algún tiempo yo buscaba el cuerpo de mi padre. Hasta que un día me di cuenta que su cuerpo era mi cuerpo y que su sangre era mi sangre, y que su lucha vive en mí: su compromiso con la justicia. Mis padres nunca me dejaron solo y nunca serán vencidos, porque su amor por la justicia vive en mí. Somos los guerreros del tiempo nuevo.³⁰

BIBLIOGRAFÍA

Hernández Parker, Luis, “Operación verdad”, Santiago, *Ercilla*, núm. 1859, semana del 3 al 9 de marzo, 1971.

_____, “Lección de una elección”, Santiago, *Ercilla*, núm. 1864, semana del 7 al 13 de abril, 1971.

_____, “PS: hacia el plebiscito”, Santiago, *Ercilla*, núm. 1866, semana del 21 al 27 de abril, 1971.

²⁸ Gonzalo Martner, actual presidente del Partido Socialista, en entrevista con Radio Universidad de Chile, Santiago, 1 septiembre, 2003.

²⁹ J. Melero, secretario general de la UDI, en entrevista con Radio Universidad de Chile, Santiago, 1 de septiembre, 2003.

³⁰ Palabras del hijo de Dagoberto Pérez y Lumi Videla, torturados y asesinados en la casa ubicada en José Domingo Cañas. El cuerpo de Lumi fue arrojado desnudo a la embajada italiana.

- _____, “Allende: Manifiesto Revolucionario”, Santiago, *Ercilla*, núm. 1871, semana del 26 de mayo al 1 de junio, 1971.
- Mery, Hugo, “El nuevo rostro de la Constitución”, Santiago, *Ercilla*, núm. 1864, 1971.
- Moro, Tomás, *Utopía*, Madrid, Alianza Editorial, 1984.
- Red de Organizaciones Sociales de La Legua, *Memoria de la dictadura en La Legua. Relatos, historias, cuentos, poesía y canciones de su gente*, Santiago, ECO, Educación y Comunicaciones, 2001.
- Silva, Miguel, “Puertas adentro. Hablan las que saben”, revista *SurDA*, núm. 40, año XI, agosto, 2003.
- Unidad Popular, “The Popular Unity Program”, en Ann Zammit (comp.), *The Chilean road to socialism*, Inglaterra, University of Sussex, 1973.
- Waiss, Óscar, “El mensaje del Mensaje”, Santiago, *Ercilla*, núm. 1872, semana del 2 al 8 de junio, 1971.

EL PERIODISMO Y EL PROCESO POLÍTICO CHILENO

Juan Pablo Cárdenas*

A 30 años que se cumplen de aquel 11 de septiembre en Chile, los medios de comunicación desplegaron toda suerte de publicaciones y emisiones especiales. A modo de explicar la intervención militar, algunos insistieron en la convulsión que existía en el país antes del golpe de Pinochet; otros, por supuesto, pusieron atención al derrocamiento y muerte del presidente Allende, el atentado contra la sede de nuestro poder Ejecutivo y las dramáticas circunstancias que siguieron con la interrupción de nuestra institucionalidad democrática.

Poca importancia adquieren aun los análisis históricos sobre estas últimas décadas de tan difícil convivencia entre los chilenos. Las imágenes del extinto mandatario, de los campos de concentración y de tantos actores políticos y sociales vinculados a la tragedia volvieron a conmover a quienes somos contemporáneos de ella pero, sobre todo, estremecieron a las jóvenes generaciones. No es lo mismo, ciertamente, enterarse de oídas sobre lo acontecido que presenciar aquellos registros visuales que la prensa prefirió mantener archivados durante todo este tiempo llamado de Transición a la Democracia.

La historia habló por la acción de las imágenes, los archivos sonoros y los recortes de la prensa. Y lo hizo con contundencia en un país en que los medios de comunicación jugaron y siguen cumpliendo un papel importantísimo en el devenir político. Sea por su concomitancia, por sus errores u omisiones.

No es casual, por lo mismo, que una de las primeras medidas del gobierno militar fuera la clausura de buena cantidad de medios escritos

* Periodista. Director de la Radio Universidad de Chile. Profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica de Valparaíso. Fundador y director de la revista *Análisis*. Fue distinguido con la Pluma de Oro de la Libertad, otorgada por la Federación Mundial de la Prensa (FIEJ). En el año 2000, la Federación Mundial de Periodistas (FIP) lo distinguió como uno de los 50 periodistas Héroes de la Libertad de Expresión del siglo XX. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2005.

y radiales, al tiempo de inaugurar la censura previa y el control estricto de los canales de televisión. Salvo algunos medios religiosos o de cobertura muy especializada, los autorizados por la Junta de Gobierno fueron aquellos que alentaron la asonada golpista y se disponían a colaborar incondicionalmente con las nuevas autoridades de facto. En la clausura definitiva quedarían aquellos medios partidarios de la Unidad Popular (UP); y los periodistas de éstos fueron tan perseguidos como los próceres del gobierno, el parlamento y los partidos políticos. Como siempre, el totalitarismo fijó los límites de lo que se podía decir y escribir, después de un tiempo en que en realidad la práctica de la libertad de expresión fue absoluta y en el que hubo diarios, revistas, canales de TV y radio que hasta mancillaron su misión de servir a la verdad, se asumieron en trinchera del odio y colaboraron al quiebre de nuestra convivencia y marco institucional.

Más allá del reconocimiento que entonces se hacía a nuestras libertades públicas, hoy debemos aceptar el nefasto papel cumplido por la prensa en la última fase de nuestra etapa republicana. Tiempo en que la legítima controversia devino en la descalificación del adversario y en el desafío abierto a nuestro orden institucional. Época en que por los diarios se solicitaba descaradamente la acción de los militares y el más leve signo opositor era tildado de golpista y reaccionario. Revisar los titulares de los periódicos de entonces nos hace concluir que el desenlace era más que evidente en una sociedad cruzada por la intolerancia y en que la política se vio maniatada por los grupos más extremistas. Tanto Allende y su ideario socialista, como el liderazgo de aquellos sectores cristianos progresistas fueron víctimas de quienes —desde la derecha o la izquierda— compartían el común denominador de su desprecio por la soberanía popular. De allí que el gran derrotado el 11 de septiembre de 1973 fuera justamente el pueblo chileno, sus organizaciones sociales aún no recuperadas, sus esperanzas incumplidas hasta el presente.

Porque lo que siguió al 11 no fue, como creímos mucho tiempo, un paréntesis en nuestra trayectoria democrática. La acción de Pinochet fue una revolución o, si se prefiere, una contrarrevolución. Tiempo y fuerza para imprimirle al país contravalores que será largo y dificultoso superar. Posiblemente aquellas imágenes que en estas últimas semanas hemos revivido en la memoria sirvan para el “Nunca más” que la clase política busca proclamar solemnemente en esta amarga efeméride. Un

Nunca más que no sólo alude a los horrores de la dictadura, sino a los profundos errores cometidos antes, pero que en ningún caso justifican la pesadilla del régimen militar y el terrorismo de Estado. En este sentido, nada ha sido más pernicioso que la exagerada autocrítica de quienes —ayer rabiosos y radicales— con tanta facilidad hoy se manifiestan conversos a las políticas neoliberales, resignados a la legalidad heredada de los militares y ensimismados en la política cupular; es decir, la práctica tutelar de los nuevos tiempos. Después de 13 interminables años de pretendida transición, se comprueba lo entronizadas que quedaron en la sociedad chilena las ideas que se abrieron cauce después del incendio de La Moneda.

Si acaso sea posible, pasará mucho tiempo todavía para que se conozca toda la verdad de lo acontecido durante los 17 años de dictadura. Sabemos que aquélla será plena cuando las víctimas sean todas reconocidas y reivindicadas por el Estado y la sociedad chilena; es decir, cuando emane la justicia de las sentencias de los tribunales. No olvidemos que en otros episodios brutales de nuestro pasado la impunidad se erigió flagrante, porque así como el periodismo ha servido para exacerbar nuestras diferencias, los textos de nuestra historia oficial generalmente han ocultado o interpretado mañosamente nuestros más terribles despropósitos. Supuestamente en beneficio de una paz social e identidad de las cuales carecemos quienes vivimos en esta “larga y angosta franja de tierra”. En esa “loca geografía” en que se instalaron los climas más diversos del planeta así como los habitantes marcados por profundas diferencias étnicas, culturales y, sobre todo, socioeconómicas.

Prensa y movilización social

Nuestras distancias políticas explican sobremanera el largo tiempo que se extendió la dictadura. Sólo cuando las organizaciones sociales tomaron el liderazgo de la movilización, fue posible avizorar el término del gobierno militar. En ellas reconocemos a algunas estructuras gremiales y sindicales, las organizaciones de derechos humanos, los estudiantes y tantas otras instancias poblacionales y sectoriales. Con franqueza, digamos que los partidos políticos llegaron al final de la larga jornada unitaria que se gestó en la base social y que fue acicateada, como en otros momentos de nuestra historia, por el periodismo libre.

Comprendo que es difícil entender cómo en una dictadura tan poderosa fue posible el desarrollo de algunos diarios y revistas de carácter disidente; pero en la historia hay muchos acontecimientos que se explican en lo fortuito y en los errores de cálculo de quienes tienen el poder. Posiblemente los militares jamás creyeron que sin recursos y bajo el imperio de tanto acoso, esos periódicos y dos o tres emisoras podrían constituirse en un ingrediente tan importante en la formación de aquella conciencia y resolución libertarias que dieron origen a la protesta, y con ella a la antesala de la salida política. El control irrestricto de la televisión y el sometimiento vergonzoso de los diarios poderosos y tradicionales hacían muy difícil romper el bloqueo informativo. Pues bien, la aparición de las revistas, primero, y la publicación posterior de dos diarios contribuyen mucho a la denuncia sobre las graves violaciones a la dignidad humana, a que se asuman los horrores de ciertos sucesos ignorados por el grueso de la población, cuanto a que los chilenos se enteren del asalto a las arcas y empresas públicas, al tiempo del establecimiento de un modelo económico ultracapitalista.

En la redacción de la revista *Análisis* se decide convocar a una protesta a cambio de un Paro Nacional, del cual se temía su fracaso. Se redacta, allí, el primer instructivo que luego fue seguido al pie de la letra por los millones de chilenos que querían manifestar de alguna forma su descontento y abrir las compuertas de esas jornadas de protesta que tanto irritaron al dictador y llevaron al embajador de Estados Unidos en Chile a forjar una mesa de diálogo entre el gobierno, la Iglesia católica y algunas figuras políticas de derecha y centro. Se trataba, según su propia declaración, de negociar una salida política, antes que nuestro país se convirtiera en una nueva Cuba. Temor que 30 años antes había provocado la intervención de la CIA para desestabilizar al gobierno de Allende y dirigir las operaciones del golpe de Estado.

Sería muy largo aludir a la génesis y evolución de estos medios disidentes. En cada uno de ellos hay una bellísima historia de audacia y coraje para sortear la represión de que fueron objeto: las clausuras, los amedrentamientos, acosos judiciales y hasta un crimen tan alevoso y cobarde como el que afectó al periodista José Carrasco Tapia. Se debe a la existencia de estos medios de comunicación el registro de tantos años de dictadura; de sus páginas, todavía pueden desarchivarse hechos y nombres de gran utilidad para el cometido de los tribunales e historiadores. Por cierto, un recuento mucho más completo que el del

acotado Informe de Verdad y Reconciliación. Sus ediciones, asimismo, estrecharon las distancias con los chilenos de la diáspora y ayudaron a coordinar las acciones dentro y fuera de nuestro país. Pero, por sobre todo, esta tarea periodística aunó voluntades dispersas y convocó a las nuevas generaciones a ejercer el protagonismo en la lucha callejera, en el enfrentamiento real con el poder de facto, en el verso, la solidaridad y la esperanza que siempre animan los episodios de emancipación.

Llegó un momento en que los militares perdieron la batalla contra el periodismo libre. Con el atentado frustrado al general Pinochet, el Estado de sitio y la clausura de estos medios de comunicación hubo quienes auguraron su cierre definitivo. Fue la hora en que los periodistas disidentes se sumergieron en el quehacer clandestino o, como en el caso que más conozco, decidieron editar sus publicaciones en el extranjero para viajar vía aérea a Chile, dejando a los censores en el completo ridículo. De esta manera fue que los medios de comunicación acusados incluso de alentar el magnicidio recuperaron el derecho a circular y alcanzar, ahora, tirajes que aún no equiparan las publicaciones favorecidas por la dictadura y protegidas, después, por la Transición.

Transición y exterminio de la prensa libre

Pero es luego el triunfo de una solución negociada lo que explica la desaparición de las publicaciones aludidas. El gobierno de Aylwin asumió como política de Estado el exterminio de estos medios de comunicación, de tal manera que se dispuso, incluso, de los gastos reservados del ejecutivo para servir a este propósito. Como ha quedado demostrado con los años, desde La Moneda se bloqueó la ayuda exterior que recibían estas revistas y diarios; se argumentó ante Holanda y otros países europeos que “cualquier ayuda a la prensa chilena sería considerada una intromisión en los asuntos internos del Chile democrático”. Por cierto que tampoco las nuevas autoridades repartieron equitativamente el avisaje fiscal, limitándose a cumplir a cabalidad con los “amarres publicitarios” que dejó Pinochet en favor de los dos grandes consorcios periodísticos. La estrategia consistió en ahogar a los medios de comunicación, ilusionarlos con recursos que nunca se concretaron y, cuando se hizo propicio, hacerse de la mayoría accionaria de estas empresas para disponer su clausura.

El cálculo político hoy asoma nítido. Se temió que estos diarios y revistas insistieran en la verdad y justicia, exigieran los cambios prometidos, y en lo económico social alentaran la justicia distributiva. Como política de comunicaciones se prefirió la estrategia de “seducción a los medios tradicionales”, cuyas complacencias con la dictadura estaban muy frescas y su disposición a “colaborar” con las nuevas autoridades se ofrecía a cambio de la impunidad a sus despropósitos editoriales y el “perdonazo” a sus deudas y convenios publicitarios mal habidos. Con el tiempo, sin embargo, estos medios de comunicación recuperaron su autoestima y a 13 años ejercen de nuevo y sin inhibiciones su tarea de concientización conservadora, reivindicación del régimen pinochetista, impunidad respecto de los delitos cometidos por éste y defensa irrestricta del modelo económico mal llamado neoliberal. En ello se explica, en gran medida, el crecimiento del electorado que favorece a los sectores de ultraderecha y el alza consecuente de la representatividad de estos sectores en el Congreso Nacional y los municipios.

Hoy son los propios partidos de la Concertación Democrática los que lloran sobre la leche derramada y se lamentan de no tener prensa, cuando los medios de comunicación que creyeron seducidos vuelven por sus fueros y apoyan abiertamente a quienes quieren retornar al poder, ahora por el ejercicio del voto y del sistema electoral binominal.

No está demás consignar que al mismo tiempo que se ponía en práctica una política de exterminio de la prensa que logró sobrevivir a la dictadura, desde el ejecutivo se emprendieron acciones similares para desactivar la enorme y sólida organización social consolidada durante el gobierno militar. De esta manera, son innumerables las organizaciones no gubernamentales (ONG) que han sucumbido en este tiempo de política cupular. También se temió a su movilización, como ahora se teme a la recuperación del movimiento sindical, la explosión callejera de los estudiantes y la acción de las discriminadas minorías étnicas.

En concreto, puede decirse que en el Chile actual se han derogado gran parte de las disposiciones legales que limitaban el ejercicio del periodismo; asimismo, ya no se teme por la vida de los comunicadores. Sin embargo, el panorama de los medios de comunicación es lamentable por su falta de diversidad, por la ausencia de un periodismo progresista y por el estado de vulgaridad que hoy caracteriza a la televisión y a buena parte de la radio y la prensa escrita. Obligados a servir al negocio, nuestro presente mediático se rinde al *rating* y a las imposiciones

ejercidas por los patrocinadores. Salvo —otra vez— la acción de algunas nuevas revistas que con loable mérito intentan hacer frente a esta uniformación que para algunos es peor a lo que existía hacia el término de la dictadura.

Con todo, desde el Estado nada serio se hace para contribuir a la diversidad comunicacional que exige cualquier democracia seria; por el contrario, hasta ahora el gobierno gasta ingentes recursos en oponerse judicialmente a la demanda de recuperación del diario *El Clarín* por sus legítimos dueños; al precio, incluso, de atentar contra la propiedad privada, ese sacrosanto valor consagrado para algunos poderosos empresarios nacionales y extranjeros, pero que no rige para los propietarios progresistas ni para nuestros pueblos aborígenes que todavía no recuperan lo que les arrebató arbitrariamente el régimen de facto. En este caso, por supuesto no es el erario el que se quiere proteger, ya que de hecho ya se reparó a los partidos políticos que fueron expropiados después del 11 de septiembre. Lo que se quiere evitar aquí es la posibilidad de que se reedite el diario de mayor circulación en la historia del periodismo chileno, el que pondría en cuestión la ideología oficial, la convivencia cupular y —a no dudarlo— se empeñaría en abrir las alamedas de la política a los nuevos hombres y mujeres libres que aludió el extinto presidente Allende en su discurso de despedida.

En lo anterior se explica que la Constitución de 1980 siga plenamente vigente, así como ese conjunto de disposiciones—como la Ley Electoral— que limitan tanto el ejercicio de la soberanía popular. La posibilidad de recurrir a la consulta plebiscitaria, que en el pasado sirvió para decirle No a Pinochet en su intento de perpetuarse en el poder, todavía no es considerada en nuestra normativa, pese al reclamo de cientos de miles de ciudadanos que demandan una democracia más directa. En el mismo tiempo que los electores suizos han sido convocados mil veces para conocer su opinión y resolver un sinnúmero de materias, los electores chilenos sólo han concurrido 17 veces a las urnas, pero sólo para elegir a sus representantes. Todo ello, en vigencia del sistema de elección binominal, que por cierto sólo tolera la representación en el congreso de dos alianzas partidarias, las cuales se ven obligadas a cogobernar entre ellas, y los grupos fácticos que intervienen descaradamente en el financiamiento de todos los candidatos y en la consecuente redacción y aprobación de las leyes.

En lo económico, estos años han consagrado el modelo heredado de los militares. Es más, no pocos dirigentes de la Concertación vienen reconociendo el legado del régimen militar en esta materia y, en muchos casos, se demuestran mejores prosélitos de las ideas neoliberales de sus antecesores. De esta forma es que ahora se desarrollan reformas que ni los militares se atrevieron a plantear, como la privatización de los hospitales y las empresas sanitarias. Dentro del pacto de gobierno, se da el curioso caso de que desde los antiguos partidos o sectores que formaron la Unidad Popular se sugiere sin disimulo la posibilidad de privatizar o extranjerizar la Gran Minería del Cobre, mientras que son algunos dirigentes demócratacristianos los que se oponen a enajenar esta actividad que tanto contribuye a la recaudación de fondos públicos. La desvergüenza llega al extremo que en la derecha parece haber gran interés para aplicar a las compañías mineras un *royalty* que le permita al país resarcirse mínimamente de los largos años en que éstas se han apropiado de nuestras riquezas del subsuelo sin pagar un peso de impuesto.

Entretanto, la Ley de Divorcio espera ya más de seis años en ser aprobada por los legisladores,¹ mientras que el ejecutivo espera legislar en el más mínimo plazo para “flexibilizar” la actual normativa laboral, que a pesar de las reformas todavía molesta a los empresarios en lo que toca al sueldo mínimo, la jornada y las condiciones de trabajo. Con el pretexto de “generar más empleo” hay quienes llegan a plantear la necesidad de dejar a “libre negociación” de los trabajadores y sus patrones los días de descanso laboral, al mismo tiempo que se califica de una “rémora” la organización sindical. El Primer Paro Nacional convocado durante la Transición recibió las iras del ministro del Interior y de la policía antimotines dependiente de éste, que lució sus armas disuasivas como en los mejores tiempos de la dictadura.

La ausencia de una prensa digna y poderosa explica, de igual manera, que el fenómeno de la corrupción esté ya tan entronizado en la gestión pública. Como es de conocimiento público, varios parlamentarios, ministros y otros funcionarios políticos han sido desaforados y encausados por los Tribunales de Justicia. Cifras cuantiosas han sido defraudadas al fisco por empresarios privados y políticos actuando de consuno. Asimismo, se descubrió que por años los secretarios de Estado

¹ La Ley de Divorcio fue promulgada en diciembre de 2004. (Nota del compilador.)

y otros funcionarios recibían sobresueldos superiores a los límites establecidos por ley y de los cuales no rendían declaración tributaria. En el ánimo de mejorar los ingresos de los “servidores públicos” y distraer recursos para las cajas electorales, se han desviado recursos destinados a los campesinos, se ha embadurnado a la propia Universidad de Chile y se han pagado millonarias indemnizaciones a personas que entre un gobierno y otro cambiaban su escritorio al ministerio de junto.

Se asume, asimismo, que “queda mucha basura debajo de las alfombras”. Recién empiezan a trascender los escándalos ligados a las municipalidades, convertidas en la guarida de los alcaldes y concejales de todos los partidos políticos que disfrutaban de los recursos de las comunas, de suyo escasos para enfrentar todas las demandas de los pobladores. Ni qué decir de los secretos todavía bien guardados por las autoridades y los medios de comunicación y que se refieren a concesiones de obras públicas y al tráfico de influencias.

Es posible que sea el *Diario Oficial* —es decir ese matutino diario que publica leyes, decretos, licitaciones y constitución de empresas— el medio de comunicación más informativo con que contamos los chilenos en la actualidad. Allí se pueden descubrir las alianzas y sociedades que todos los días se forman entre empresarios y políticos de todo el espectro para emprender toda suerte de negocios; dejan en evidencia que estamos en un país cogobernado por quienes —ante el país— asumen diferencias que se disipan rápidamente en los mismos salones en que se pactó nuestra curiosa transición, que amenaza ya con extenderse tanto como la dictadura. Tiempo que bien explica el asesinato de los medios de comunicación democráticos y los esfuerzos acometidos por desactivar la movilización social, la llave maestra de los cambios y el progreso.

En todo esto encuentra base el desencanto que crecientemente se expresa en la sociedad chilena. El hecho de que la adhesión nacional a la democracia haya disminuido en más de 10 puntos, de tal manera que ya son menos de 50% de los chilenos que confían en ella. En todo esto se basa la renuencia de los jóvenes de inscribirse a los 18 años en los registros electorales, de forma tal que ya es casi la mitad de la población los no ciudadanos y los que sufragan en blanco o anulando su voto.

Según una encuesta de las Naciones Unidas, 80% de los chilenos se considera infeliz. Un ministro del ex presidente Frei ha roto recién

su silencio y dijo que se hacía intolerable que en nuestro país las diferencias de ingreso entre los ricos y los pobres alcanzaran una diferencia de 40 veces; 150 dólares para la inmensa cantidad de trabajadores que obtiene el salario mínimo; menos de 500 dólares de promedio para los maestros y más de 6 000 dólares de promedio para el estrato superior, entre ellos nuestros parlamentarios.

Hablamos de desencanto, no de desesperanza. Prueba de ello es la actividad que de norte a sur del país se manifestó el último 11 de septiembre de 2003 y la acción de las organizaciones de derechos humanos, la protesta juvenil y las múltiples y multitudinarias expresiones populares. Todo ello en un país que se niega a la amnesia y que ha obligado hasta a la prensa tradicional a volcar sus titulares, páginas y ediciones especiales a conmemorar la efeméride que recuerda la interrupción de nuestro régimen institucional y la muerte de Allende. Un país que empieza a salir del engaño, vuelve a movilizarse y reclama de la prensa y los periodistas libres la posibilidad de conocer toda la verdad y acceder a las tribunas de la comunicación social para reclamar sus demandas irrenunciables: la justicia social, la igualdad de oportunidades y la democracia participativa.

EPÍLOGO

EL DEBER DE RECORDAR

Pablo Yankelevich*

La memoria y el olvido actúan solidariamente. El olvido es siempre ausencia de memoria en el presente, y como los imperativos del presente recortan nuestros recuerdos, la memoria es entonces más una guía de conducta que una simple rememoración de acontecimientos.

El acto de recordar alude al rescate de lo vivido. La memoria, apunta Walter Benjamin, “no es un instrumento para la exploración del pasado, sino solamente su medio. Así como la tierra es el medio en que yacen enterradas las viejas ciudades, la memoria es el medio de lo vivido”. Saber valorar la experiencia de vivir, saber el qué, el cómo y el porqué de lo vivido obliga a un recorrido donde la memoria y el olvido actúan solidariamente. Por eso, saber es saber qué cosas recordar. En este sentido, Funes, el memorioso personaje de Borges, en realidad nada sabía porque recordaba todo, no sabía qué cosa recordar, porque en realidad no sabía qué cosa olvidar, para Funes todo era exactamente lo mismo.

Vivimos una época donde parecen instrumentarse políticas de desmemoria; resulta paradójico, si no perverso, que en las sociedades latinoamericanas de las posdictaduras, los gobiernos estén empeñados en instalar el olvido como garante y salvaguarda de la gobernabilidad

* Doctor en Antropología. Profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Autor de *La revolución mexicana en América Latina: intereses políticos e itinerarios intelectuales*, México, Instituto Mora, 2003; compilador de *México, país refugio. La experiencia de los exilios en el siglo XX*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2002; autor de *La educación socialista en Jalisco*, México, El Colegio de México, 2000; y compilador de *En México, entre exilios: una experiencia de sudamericanos*, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Tecnológico Autónomo de México y Plaza y Valdés, 1998.

democrática. Recordar lo sucedido, para no repetir lo dicho desde el poder estatal, se asemeja más a una amenaza que a la voluntad de construir condiciones para que lo sucedido se convierta de una vez y para siempre en un hecho del pasado. Nadie puede estar todo el tiempo recordando lo que por cierto no es muy agradable de ser recordado; sin embargo, tenemos que hacerlo porque persisten condiciones, actitudes y comportamientos que hicieron posible lo que pasó.

Las dictaduras latinoamericanas de los años sesenta y setenta torturaron y asesinaron por millares a hombre y mujeres; *desaparecieron* a buena parte de una generación; arrasaron organizaciones políticas, sindicales y culturales. Entrenados en los círculos del infierno nazi, hicieron lo posible para emular a sus maestros, hasta que al fin lo consiguieron: dejaron de ser humanos. Hace ya algunos años, desde las montañas del sudeste mexicano, corrió la versión de que asesores militares argentinos entrenaban a militares mexicanos en técnicas de contrainsurgencia. Interrogado el subcomandante Marcos acerca de la veracidad de estos rumores, respondió: “Es cierto que hay asesores, pero no son argentinos, porque las bestias no tienen patria”. Frase contundente pero absolutamente falsa. Ni duda cabe sobre la inhumanidad de estos seres, aunque justo es reconocerlo, estas bestias tienen a sus patrias como la única guarida donde rumiar “glorias” pasadas; el resto del mundo se levanta amenazante: es un territorio donde pueden ser detenidos por crímenes que no prescriben y que no lo harán mientras haya memoria.

“No te olvides de olvidar el olvido”, dice un poema de Juan Gelman, y para todos los sobrevivientes, no olvidarse de olvidar el olvido es un deber, una responsabilidad. Evocar a los caídos, conmemorar las fechas de sus desapariciones, rendir homenaje a sus vidas y reclamar justicia por sus muertes es un ejercicio de imprescindible memoria.

A 30 años del golpe de Estado y a 13 de transitar hacia la democracia, Chile está enfermo de impunidad. Se trata de un país donde la dirigencia política ha sellado un pacto de complicidad para dejar impunes los crímenes, y toda impunidad exige desmemoria; por ello es tan necesaria la memoria, porque de su preservación depende ni más ni menos que la justicia.

¿Cuándo sellarán las heridas? Para algunos —es el caso de ciertos intelectuales latinoamericanos— todo es cuestión de tiempo; sólo

los años, una, dos o tres generaciones pondrán la necesaria distancia como para valorar el pasado sin el apasionamiento de quienes fueron las víctimas o testigos del genocidio. Apuestan a la desaparición física de los criminales: “muerto el perro, se acaba la rabia”, pero el problema no es de tiempo. En realidad lo sucedido bajo la dictadura chilena hubiera sido el crimen perfecto, si no fuera por la memoria. Sucede que es la memoria traducida en palabras, en imágenes y en acciones, la única garantía de que el tiempo no borre la barbarie pinochetista.

Los trabajos presentados en esta última parte abundaron en la naturaleza y avatares de segmentos de esa memoria. Con enorme cuota de originalidad, Angélica Illanes apunta que los combates por la memoria sólo podrán ser exitosos si revisamos críticamente el pasado, con la idea de reconocer y reconstruir pertenencias políticas; con la idea de reagrupar las piezas de un proyecto histórico capaz de infundir las fuerzas necesarias para los combates que habrán de seguir. Sólo de ese modo, todos los que cayeron soñando en un mundo mejor volverán a cobrar vida. Ésa es la memoria que hoy recorre Chile —dice Illanes—, la memoria de los aparecidos. Y es la segunda batalla de la memoria, toda vez que la primera —la de los desaparecidos— ya quedó instalada en lo que Illanes denomina “Los templos de la ciudad”. La cuestión de los derechos humanos es hoy un punto clave de la competencia partidaria chilena, expresada en las diferentes propuestas de lo que Illanes llama “la apropiación política por la reparación del dolor”. Toda la geografía política chilena, desde la derecha filopinochetista hasta la izquierda oficial, está compitiendo en sus propuestas de “reparación del dolor”. Los límites de esas propuestas están marcados por esa política de amarres que ha signado la suerte de una transición democrática a lo largo de más de una década. Me permito dar un ejemplo: en conferencia de prensa ante los medios de comunicación internacionales, el presidente Ricardo Lagos declaró el 3 de septiembre de 2003: “Aquí no hay impunidad para nadie”, y cuando se le preguntó por qué Pinochet no estaba entre los 300 procesos en marcha que afectan a militares, la respuesta del presidente no hizo más que dibujar los amarres de una democracia pactada; el presidente Lagos indicó: “El general Pinochet fue procesado, fue despojado de su fuero como senador vitalicio, y hoy no es un actor político relevante”.

En un régimen de pleno derecho, el ser o dejar de ser un actor político relevante en nada obstaculiza colocar al ex dictador frente a un tribunal para que sea juzgado por crímenes que no prescriben ni prescribirán mientras haya memoria; mientras tanto Pinochet sigue gozando de la inmunidad que ahora le otorga su condición de enfermo y “demente”.

Esta batalla por la memoria no ha concluido; por el momento ha logrado colocar en el centro de la discusión política nacional el tema de las violaciones a los derechos humanos. Y mientras esto sucede, Illanes explora el segundo momento en la batalla por la memoria: “la lucha de los vivos cargando la memoria de los derechos sociales, cargando la memoria de los derechos del pueblo chileno”. El paro convocado por la Coordinadora Nacional por la Protesta Social sirve para reflexionar en torno de la fundación de una nueva utopía: “la utopía de la ciudad de los vivos”.

¿Qué memoria habita en los contingentes humanos que desfilaron por las calles de Santiago el pasado agosto de 2003? Se trata de una memoria fracturada, múltiple, dolorosa. Y en ese mosaico Illanes explora aquella memoria que más que ninguna otra aparece recortada por los imperativos del presente: la construcción de un orden verdaderamente democrático. Frente a un ordenamiento político, prisionero de un texto constitucional heredado de la dictadura, emerge una lectura atenta al rescate del valor y significado que Salvador Allende otorgó al proyecto por el que hace 30 años entregó su vida. Imaginar una vía chilena al socialismo, romper ortodoxias doctrinarias, hacerlo en abierto desafío a la voluntad imperial, sólo fue posible por su confianza en la voluntad transformadora del pueblo y sus organizaciones. Se trata entonces de repensar una vía chilena a la democracia plena, a la restitución de derechos políticos y sociales conculcados a lo largo de 30 años, donde la voluntad popular pueda gobernar libremente sin los *amarres* de un pasado dictatorial.

¿Cómo construir un régimen de democracia participativa en un país donde las voces críticas han visto reducidos los espacios de expresión en los medios masivos de comunicación? Ya no se trata de pasar revista a la represión dictatorial que fijó los límites de qué podía ser dicho y escrito, sino a los mecanismos que develan cuán entronizadas están las prácticas autoritarias en los actores que han conducido la ya interminable transición chilena. Juan Pablo Cárdenas expuso estos asuntos,

particularmente los referidos a la prensa antes y después de la dictadura. Por paradójico que resulte, es posible encontrar un registro mucho más detallado de la oposición a la dictadura en la prensa clandestina que la que hoy se puede hallar respecto a las voces del disenso a los gobiernos de la Concertación. Cárdenas pasa revista a este fenómeno, signado por lo que llama “el exterminio de la prensa libre” desde el gobierno de Patricio Aylwin. “Se temió que diarios y revistas insistieran en la verdad y la justicia, exigieran los cambios prometidos, y en lo económico y social, alentarán la justicia distributiva”; por ello, en materia de política de comunicación, se prefirió “seducir a los medios tradicionales” “cuyas complacencias con la dictadura están aún muy frescas” y su disposición para colaborar con las nuevas autoridades se ofrecía a cambio de la impunidad a sus despropósitos editoriales y el perdón “a sus deudas y convenios publicitarios mal habidos”. Cárdenas subraya la complicidad de la Concertación con los dueños o personeros de una prensa ligada al pasado dictatorial; responsabiliza de esta política al propio crecimiento de la derecha, en detrimento incluso del electorado favorable a la Concertación; sin embargo, deja abierta una incógnita: si en el Chile actual se han derogado gran parte de las disposiciones legales que limitaban el ejercicio del periodismo y si —como afirma Cárdenas— hoy ya no se teme por la vida de los comunicadores, cómo es posible que durante la dictadura hubieran existido tal número de publicaciones, sobreviviendo en condiciones de extremo peligro, y hoy que las circunstancias son radicalmente distintas, no florezcan proyectos de prensa independiente. ¿Cuáles son las razones por las que el propio gobierno lamenta no tener prensa? Pero mucho más significativo: ¿cuáles son las razones por las que las voces disidentes son incapaces de articular una política de comunicación masiva a través de la prensa escrita? Y lo que es aún más llamativo —retomando la reflexión de Illanes—, ¿qué posibilidad tiene una estrategia de recreación de una memoria de los aparecidos, en un espacio de expresión escrita por donde transite la crítica?

Por último, privilegiando una perspectiva de género, Jessie Frazier se encarga de recordarnos los mecanismos perversos desde donde se pretende erigir una institucionalidad democrática. La sociedad chilena vive en un “espacio de muerte”; un lugar donde torturador y torturado transitan las mismas calles. Un lugar donde además el autoritarismo es parte consustancial de una cultura que se reproduce en todos los espacios de la vida social de la posdictadura.

Para Frazier, las aproximaciones desde el género permiten develar las máscaras de ese autoritarismo, y así entender a cabalidad la continuidad estructural entre un pasado militar y un presente conducido por regímenes civiles. En este sentido, resulta significativo indagar las maneras en que las acciones de los militares, en supuesta defensa de los intereses nacionales, logran trascender las fronteras de lo público, justificando incursiones violentas en lo doméstico para así moldear subjetividades específicas.

En este texto se da seguimiento a un caso revelador: el del Programa de Salud Mental y Derechos Humanos, instituido originalmente para dar apoyo a las familias y víctimas directas de la represión dictatorial. Este emprendimiento, en 1994, fue modificado e incorporado al ministerio de Salud; desde entonces la dimensión política desapareció, para dirigirse esencialmente a la atención de los casos de violencia intrafamiliar, donde las víctimas son fundamentalmente niños, mujeres y ancianos. Se trata, en palabras de Frazier, de una auténtica política de borramiento de la memoria de un pasado traumático, y del desplazamiento de las víctimas de la violencia, de aquellas que fueron objeto de violaciones a sus derechos humanos en el territorio de lo público, hacia la violencia que tiene lugar en el ámbito privado.

El tema es complejo, toda vez que en la justificación gubernamental, el programa tiende, entre otras cuestiones, a “democratizar” la vida familiar; sin embargo, los cuestionamientos son demoledores: ¿Qué clase de democratización será posible cuando subsisten las condiciones de pobreza y marginación, cuando los programas de educación pública son una continuación de los establecidos por la dictadura militar? En resumen, no hay posibilidad de salir del espacio de la muerte sin la acción coordinada en la esfera pública y en la privada, tendiente a dismantelar las estructuras autoritarias y patriarcales que atraviesan a la sociedad chilena.

Frazier llama nuestra atención sobre la permanencia de estructuras autoritarias en la sociedad chilena, donde es de muy antigua data la subordinación de la mujer al orden que la autora califica como patriarcal. Y en el terreno de las continuidades, recordar que lo que Frazier llama “la metáfora del cuerpo”, en alusión al lenguaje con el que la dictadura militar aludía a enemigos internos y externos que debían ser extirpados, justo es reconocer que esa metáfora es deudora de una sociología biológica de matriz positivista, cuyas aproximaciones a nuestras realidades

sociales es fácil reconocer desde por lo menos el último tercio del siglo XIX. Las intervenciones autoritarias sobre el cuerpo social latinoamericano, desde lo que hoy conocemos como limpiezas étnicas –pero que en el siglo XIX se presentaban bajo el eufemismo de “*conquistas del desierto*”, cuando los ejércitos avanzaban sobre territorios indígenas– hasta la eliminación con cárcel, deportación o asesinato de cualquier oposición de signo anarquista, socialista y comunista, la metáfora del cuerpo ha mostrado una singular vitalidad. Claro está, nunca como durante las dictaduras de los años setenta “la enfermedad social” necesitó del baño de sangre al que fueron sometidas sociedades de América Latina.

Quisiera concluir subrayando el imperativo moral de rescatar la memoria en pos de la vigencia de un Estado de derecho plenamente democrático, garante absoluto de la impartición de justicia sin excepciones de ninguna clase. Muy brevemente, y quizá por deformación profesional, quisiera remarcar la labor del historiador frente a una explosión de memoria que inunda a nuestros países, marcados por el trauma de la represión, la persecución y el exterminio.

El historiador no recobra una memoria, sino que recrea un pasado en detalles, formas y texturas que no necesariamente reconoce la memoria. El historiador no rellena vacíos de la memoria; por el contrario, su obligación es cuestionar los recuerdos que han llegado hasta nosotros. La investigación permite recorrer a contrapelo aquello que recoge la memoria. Ésta, por naturaleza es selectiva, sólo algunos recuerdos perduran, el resto es eliminado, descartado, y este proceso de selección debe ser alterado, invertido, contrapunteado por el historiador.

Esta tarea, hoy más que nunca revela todo su imperativo moral; por esa razón hoy más que nunca, y aquí me permito citar a Joseph Yerushalmi:

Contra los agentes del olvido, contra los asesinos de la memoria y la distorsión deliberada del registro histórico, contra los conspiradores del silencio y la invención de pasados mitológicos al servicio de los poderes de la oscuridad, contra los enmendadores de enciclopedias, contra aquellos que pueden, en la maravillosa imagen de Kundera, cubrir de pintura la fotografía de un hombre, de manera que no quede más que su sombrero; contra todo ello, sólo el historiador con su austera pasión por el hecho, la prueba, la evidencia, puede montar guardia eficazmente para evitar que el ángel del olvido descienda sobre todos nosotros.¹

¹ Joseph Yerushalmi, “Los usos del olvido”, en *Zajor. La historia judía y la memoria judía* (prólogo de Harold Bloom), Barcelona, Anthropos-Fundación Cultural Eduardo Cohen, 2002.

*Frágiles suturas. Chile a treinta años del gobierno
de Salvador Allende*

se terminó de imprimir en febrero de 2006
en los talleres de Formación Gráfica, S.A. de C.V.,
Matamoros 112, col. Raúl Romero, 57630,
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Formación: Leticia Alvaradejo.

Portada: Irma Eugenia Alva Valencia.

Cuidó la edición la Dirección de Publicaciones
de El Colegio de México.

Este libro presenta los trabajos que se discutieron en el Seminario La batalla por la memoria: Chile a treinta años del gobierno de Allende, que tuvo lugar en El Colegio de México entre los días 25 y 26 de septiembre de 2003. Dicho evento contó con la participación de especialistas chilenos y de algunos ponentes no chilenos que han estudiado el proceso chileno. Formó parte de las actividades realizadas con motivo de la celebración del trigésimo aniversario de la creación del Centro de Estudios Sociológicos.

Fue auspiciado por varias instituciones como las unidades Iztapalapa y Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUEG-UNAM), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-sede México, la Dirección de Intercambio Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México y la Representación Santiago de la Fundación Ford, bajo el liderazgo de El Colegio de México, institución abierta desde hace varias décadas a la discusión de los asuntos derivados de las turbulencias políticas que ocurrieron, primero, en la Guerra Civil Española y en diversas coyunturas del acaecer latinoamericano, como fue el golpe de Estado en Chile el 11 de septiembre de 1973.

ISBN 968-12-1215-0



9 789681 212155